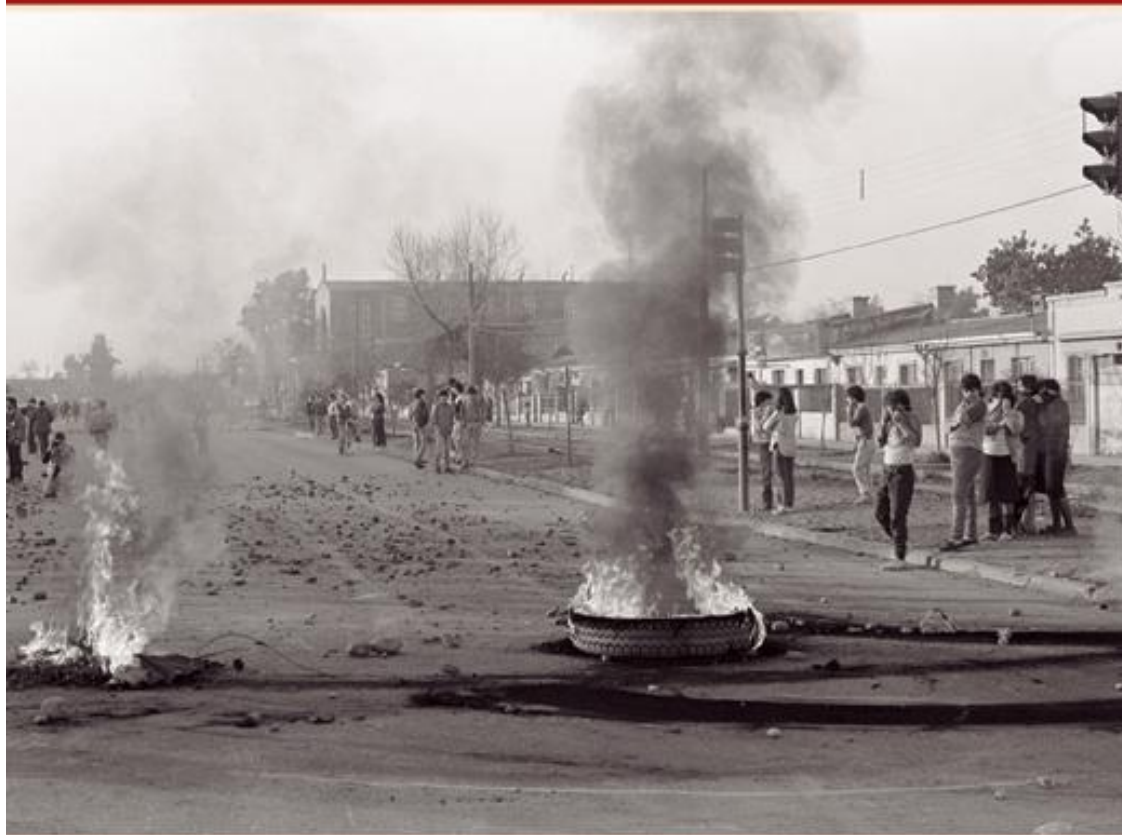


COLECCIÓN DE HISTORIA

---



# PIEDRAS, BARRICADAS Y CACEROLAS

---

LAS JORNADAS NACIONALES DE PROTESTA  
CHILE 1983-1986

VIVIANA BRAVO VARGAS



EDICIONES  
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

COLECCIÓN DE HISTORIA

---



# PIEDRAS, BARRICADAS Y CACEROLAS

---

LAS JORNADAS NACIONALES DE PROTESTA  
CHILE 1983-1986

VIVIANA BRAVO VARGAS



EDICIONES  
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

# PIEDRAS, BARRICADAS Y CACEROLAS

*Las jornadas nacionales de protesta*

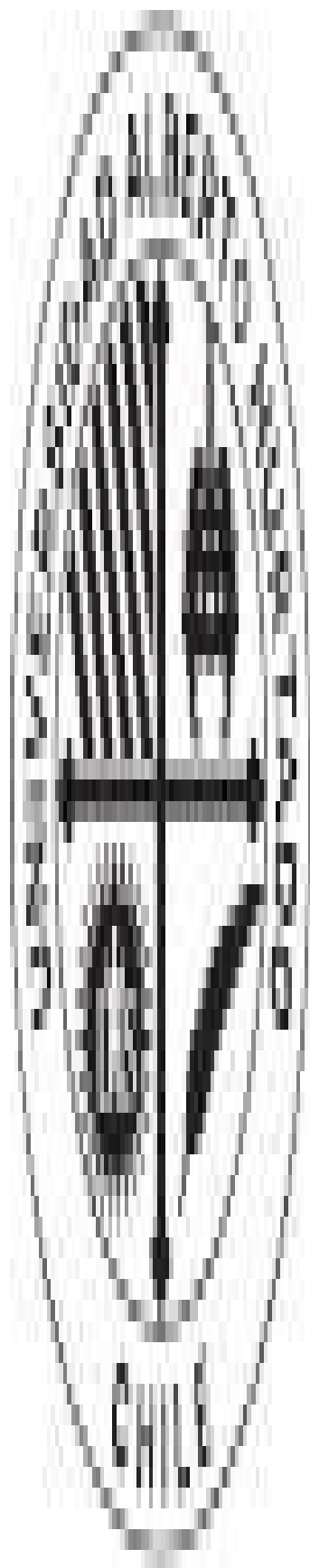
*Chile 1983-1986*

PIEDRAS, BARRICADAS Y CACEROLAS

*Las jornadas nacionales de protesta*

*Chile 1983-1986*

VIVIANA BRAVO VARGAS



EDICIONES

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

## PIEDRAS, BARRICADAS Y CACEROLAS

*Las jornadas nacionales de protesta. Chile 1983-1986*

© Viviana Bravo Vargas

▪

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 - Santiago de Chile

[mgarciam@uahurtado.cl](mailto:mgarciam@uahurtado.cl) – 56-228897726

[www.uahurtado.cl](http://www.uahurtado.cl)

▪

**Este texto fue sometido al sistema de referato ciego externo**

ISBN libro impreso: 978-956-357-114-1

ISBN libro digital: 978-956-357-115-8

Registro de propiedad intelectual N° 279.599

Las fotografías utilizadas en el interior de este libro fueron autorizadas por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Se agradece la generosa donación.

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro M.

Diseño de la colección

Francisca Toral R.

Diagramación interior

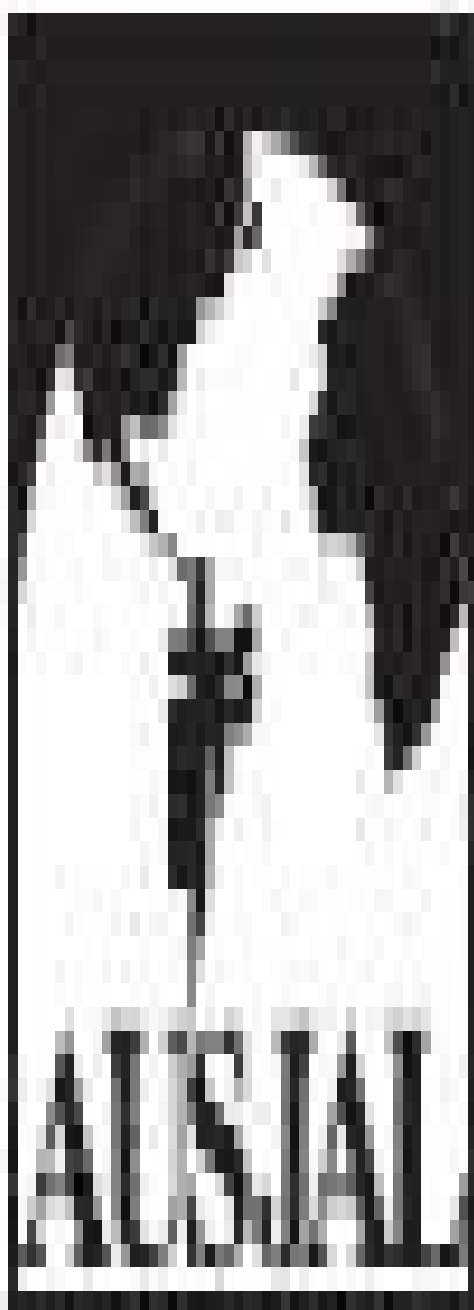
Gloria Barrios A.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

[www.ebookspatagonia.com](http://www.ebookspatagonia.com)

[info@ebookspatagonia.com](mailto:info@ebookspatagonia.com)

Imagen de portada: fotografía de Juan Carlos Cáceres en Avenida General Velásquez durante las jornadas de protesta del paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986.



Asociación de Universidades  
Españolas de Investigación en  
Lenguas y Lingüística  
1998-2000

MEMBER OF THE

RED DE

EDITORIALES

UNIVERSITARIAS

DE AUSIAL

[www.ausial.org](http://www.ausial.org)



■

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

## **ÍNDICE**

[Agradecimientos](#)

[Introducción](#)

### [PRIMERA PARTE](#)

#### [SENTIMIENTO DE INJUSTICIA, IMPULSO RADICAL Y ORGANIZACIÓN MULTIFACÉTICA](#)

##### [CAPÍTULO I](#)

###### [LA TRANSFORMACIÓN NEOLIBERAL DE LA VIDA Y DEL TRABAJO](#)

[Primera tarea: ordenar la casa \(1973-1975\)](#)

[Segunda tarea: una transformación radical \(1976-1982\)](#)

[El difícil camino de la unidad sindical](#)

[Los programas transitorios de empleo: el PEM y el POJH](#)

[Indignación y pobreza: la protesta del POJH](#)

##### [CAPÍTULO II](#)

###### [CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA I: LA SOLIDARIDAD Y LA IGLESIA COMPROMETIDA](#)

Los están matando. ¡Hay que salvar gente!

La Vicaría de la Solidaridad: encuentro y rearticulación de la política

Protestas nacionales: registro, denuncia y clínicas clandestinas

### CAPÍTULO III

#### CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA II: LOS POBLADORES

Hacinamiento, cesantía y segregación

Las mujeres pobladoras se organizan

Criminalización de la pobreza, allanamiento y relegación

### CAPÍTULO IV

#### CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA III: LOS ESTUDIANTES

La ACU y el arte de rebelarse

“El que paga no tiene tiempo para meterse en política”

“Las protestas nos fueron marcando el paso”

“Con el paro, con la FECh, a botar a Pinochet”

### CAPÍTULO V

#### CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA IV: LOS MILITANTES

Militar en dictadura o el orgullo de ser un luchador social

Agitadores locales: los profesionales de las protestas

De la protesta permanente a la frustración prolongada

## CAPÍTULO VI

### CALLEJERA Y HECHA A MANO: TERRITORIO, IDENTIDAD Y CULTURA DE LA PROTESTA

La calle

El ruido

La noche y el fuego

Las piedras

## SEGUNDA PARTE

### PROTESTAS NACIONALES: CRÓNICA DE UN CICLO DE MOVILIZACIÓN URBANO-POPULAR (1983-1986)

## CAPÍTULO VII

### MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

“Nuestro problema no es de una ley más o una ley menos”

¡Todos juntos y al mismo tiempo!

La apertura. Primer movimiento: 18 mil soldados rodean la ciudad

La “apertura”. Segundo movimiento: ¿es hora de hablar?

A diez años del golpe militar: ¡Se siente, se siente... Allende está presente!

## CAPÍTULO VIII

### MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

El “puntarenazo”

El puntapié inicial: una fogata en cada esquina

A un año de protestas, una pequeña réplica

El “toque de sensatez”: hacia la salida pactada

“Sin protesta no hay cambios”

El paro de octubre

## CAPÍTULO IX

### ESTADO DE SITIO O LA NUEVA PACIFICACIÓN DE CHILE

Siete meses y diez días

Las protestas sitiadas: “fue como empezar de nuevo”

La transición pactada y el jaque a la protesta

El paro del 2 y 3 de julio: clímax y final de una etapa

## CONSIDERACIONES FINALES

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

*A mi abuela María Bravo,  
inmensa, brillante y cercana, como la Cruz del Sur.*

## AGRADECIMIENTOS

La presente investigación, fruto de mi tesis doctoral, es deudora de diversas personas e instituciones. En primer lugar, debo agradecer al Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, espacio de debate, mirada crítica y resistencia reflexiva en el que me formé como investigadora y con el que estaré eternamente en deuda. Gran parte de este trabajo fue inspirado por los debates y reflexiones en seminarios y cursos que durante varios años desarrolló mi asesor de tesis y amigo, el historiador Adolfo Gilly. Mi total gratitud por sus palabras de aliento, sus historias vagabundas, sus ejemplos. También debo agradecer por su apoyo al Dr. Lucio Oliver, director del Programa durante aquellos años, y al Dr. Ricardo Melgar, agudo investigador que aportó en mi formación con las sutilezas y profundidades de la mirada antropológica y latinoamericana.

Un importante lugar aquí debe tener el apoyo brindado por Conacyt y la Beca por Gestión Propia del gobierno de Chile. También es necesario agradecer a las becas posdoctorales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, que financió la estancia realizada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Gracias a ella este texto pudo ser corregido y enviado al Premio Casa de las Américas 2013, donde fue galardonado con la mención honorífica. En este proceso fueron fundamentales las orientaciones académicas y humanas de la doctora Elvira Concheiro. Mi infinita gratitud hacia ella.

Mis agradecimientos a todos y todas quienes resguardaron, catalogaron y preservaron el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en aquellos tiempos y ahora. Un especial reconocimiento por su colaboración a Juanita Guerra y Argentina Valenzuela, trabajadoras durante aquellos años, por ayudarme a encontrar y reproducir cientos de documentos. El frío santiaguino siempre fue más cálido con su camaradería y estufa compartida. Parte importante de los acervos aquí trabajados me fueron facilitados con suma generosidad por el dirigente sindical Luis Fuentealba, quien durante décadas se encargó de guardar con cariño y perspectiva histórica los documentos elaborados por las organizaciones de trabajadores durante la dictadura. La revisión de parte

importante de la prensa chilena quedó en manos de Antonia Garcés, ayudante de esta investigación, quien con celeridad superó las distancias y facilitó enormemente la elaboración de este trabajo. Mi infinita gratitud a mi amiga Andrea Gallardo por su eterna paciencia en la realización de mapas históricos que trascienden este proyecto. Un espacio muy especial deben tener aquí quienes generosamente me entregaron su testimonio y ayudaron a entender la experiencia de protestar contra la dictadura.

Debo agradecer a mi gran familia de la sangre y de la vida, chilena y mexicana, una y otra vez. Gracias por la solidaridad que siempre fue del sur, por indignarse ante las injusticias y querer ser peligrosos con una guitarra, un secreto y una historia llena de gente. El más eterno de los abrazos para Jaddiel Díaz Frene y nuestra hija Dhana... que son todo.



## INTRODUCCIÓN

■

# I

La historia que aquí se escribe reúne y recuerda las experiencias de resistir masiva y coordinadamente al régimen del general Augusto Pinochet. Fueron “la seguidilla más nutrida de revueltas populares de toda la historia de Chile”<sup>1</sup>, asegura el historiador chileno Gabriel Salazar. “Lo que no lograban el llamado a paro ni las interpelaciones de los partidos políticos, lo consigue la protesta nacional”<sup>2</sup>, señalan por su parte De la Maza y Garcés. No obstante, si los costos de la instauración de las políticas neoliberales han quedado sepultados bajo esa exitosa y artificiosa imagen de país que coronó el fin de la dictadura, menos aún se recuerdan la potencia, persistencia y presión del ciclo de rebelión popular que se inició masivamente desde mayo de 1983 y se sostuvo –con altos y bajos– hasta prácticamente finalizar el régimen.

Con la presente investigación se persiguen dos objetivos o problemas íntimamente relacionados. En primer lugar, indagar sobre las razones del origen y carácter de estas masivas movilizaciones sociales discutiendo con las tesis que redujeron las jornadas de protesta a una expresión de anomia e irracionalidad social que solo manifestaba el deseo de los marginados por incorporarse al sistema político. En segundo lugar, cuestionar los planteamientos de lo que podríamos denominar la “historia oficial” de la transición, divulgada por intelectuales orgánicos que la han caracterizado como una obra de ingeniería negociadora, pacífica y consensual aportada por la madurez de las élites políticas para desentrañar el papel que las protestas cumplieron en el proceso de recuperación democrática.

Explorando en las dimensiones subjetivas, la primera hipótesis de este libro postula que nos encontramos con sujetos políticos conscientes y activos, motivados por agravios propulsores como el despojo, la explotación y la humillación bajo los violentos cambios estructurales provocados por el modelo neoliberal, pero también sostenidos por experiencias históricas, cotidianas, orgánicas y militantes de un proceso de lucha de larga data. Así, apelando a diversas formas de lucha y tradiciones políticas, los sectores que protagonizaron las jornadas supieron organizarse y rebelarse por la defensa de sus derechos, proyectos y sueños.

Nuestra segunda hipótesis plantea que las protestas desempeñaron un papel fundamental en la construcción de un proceso de democratización social (mucho más amplio que la “transición política”) que ensanchó los espacios de debate, politización, organización y presencia pública de la oposición a la dictadura. En este sentido, las jornadas nacionales lograron cambiar la correlación de fuerzas de la oposición y, entre otras cosas, generaron las condiciones de posibilidad para que los partidos políticos tolerados por la dictadura pudiesen desarrollar el proceso de negociación que finalmente decidió la transición chilena.

En este texto veremos que la historia de rebeldía contra la dictadura militar en Chile y la recuperación de la democracia fueron más largas, mucho más largas y complejas que la historia relatada por las instituciones. Junto con las protestas, despertaron fuerzas aparentemente dormidas, se fortalecieron organizaciones, nacieron otras tantas. En el camino de surgimiento y consolidación se estructuraron formas de manifestar y constituir la politización social, pero también fueron moldeadas y constituidas por dichas fuerzas. Aunque sorprendieron con su irrupción el 11 de mayo de 1983, no emergieron de la noche a la mañana; se habían ido creando día a día, en resistencias clandestinas y cotidianas, individuales y colectivas.

Con las jornadas de protesta se desarrolló e incentivó entre los sectores de oposición una cultura política de la protesta urbana, caracterizada por la multiplicación del tejido asociativo; por la recuperación del espacio público y la expansión de las ocasiones para reunirse; por el fortalecimiento de visiones y proyectos alternativos; y por el desarrollo de numerosas actividades culturales y recreativas a nivel local y nacional. Cada esquina fue importante para desplegar el arte de la protesta, articulación de una actitud de confrontación abierta, de efervescencia ciudadana y masificación de métodos de autodefensa y hostigamiento popular al régimen<sup>3</sup>.

Aunque participaron diversos sectores, eran jóvenes y periféricos –violentos por su furia manifiesta y radicales por su persistencia– los cuerpos que caían junto a las barricadas y que al día siguiente los pobladores lloraban. Eran niños cuando llegaron los militares y crecieron entre sus dispositivos represivos, pero no estaban solos; también hubo presencia de clase media y edades adultas. Otras complicidades, quizás más silenciosas, estaban presentes, como las de las voluntarias y religiosas que curaban heridos, o más ruidosas, como el golpeteo de las cacerolas. Entre los manifestantes había dueñas de casa que abrían sus puertas y ofrecían refugio, también estaban quienes recopilaban informaciones y

pertrechos para las fogatas. Unos rayaban paredes, otros imprimían panfletos, otros alimentaban la olla común. Diversos fueron los sectores y distintas las reivindicaciones involucradas, así como diferentes las formas de lucha. Por ello podemos afirmar que las definió su carácter interclasista. Esta red de relaciones –intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos– no albergó una “esencia” o una “voluntad” profunda que permitía que la unidad fuera un punto de partida; por el contrario, como ha señalado Alberto Melucci, al pensar otras acciones colectivas, en este mar de lo diverso, la unidad fue un punto de llegada, una lucha constante, movediza, siempre en construcción<sup>4</sup>.

¿Qué es lo que hizo a esa diversidad actuar conjuntamente? ¿Por qué la gente se movilizó? Numerosos estudios explican su irrupción con el colapso económico y financiero experimentado en Chile a principios de la década de 1980, porque efectivamente el ciclo de protestas coincide con la crisis de la inserción del Estado neoliberal, y sin duda las jornadas de protesta pueden ser explicadas dentro del deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y el aumento de la inseguridad que afectó prioritariamente a los grupos más vulnerables de la población<sup>5</sup>. También se han explicado a partir de la segregación de los pobladores y su búsqueda de integración; en la anomia y falta de expectativas juveniles<sup>6</sup>, mientras otros adjudicaron su coherencia, pertinencia y masividad a la participación de los sectores medios<sup>7</sup>.

Por otro lado, existen diversos aportes que retoma nuestra investigación y la nutren, como aquellos que se detienen en el trabajo previo de partidos políticos dentro de las tomas de terreno y en la participación de poblaciones con tradición política –especialmente del Partido Comunista– y que efectivamente son las más combativas en la protesta<sup>8</sup>. Otros refieren el trabajo de las comunidades eclesíásticas de base y su esfuerzo por impulsar la organización popular, la dignidad y la reivindicación de sus derechos<sup>9</sup>. También retomamos investigaciones que explican la cultura política de la izquierda y la disposición nacida desde la clandestinidad para ser parte y protagonistas de estos tiempos de rebelión<sup>10</sup>. En cuanto a los factores operativos del éxito de la convocatoria, resultan un aporte las contribuciones que señalan, por ejemplo, el prestigio de un convocante con peso histórico, como la Confederación de los Trabajadores del Cobre, que lanzó el primer llamado, por un lado, y el hecho que la propuesta de actividades fuese bastante flexible para que la protesta se expresara según las posibilidades y la disposición de cada quien<sup>11</sup>. No obstante, la mayoría de estos trabajos continúan teniendo a las jornadas como telón de fondo de otras preocupaciones y solo permiten explicar parte de su compleja trama, sin que

hasta la fecha exista una reconstrucción sistemática que desentrañe bajo una mirada global sus significados, presencias y dinámicas internas<sup>12</sup>.

Desde nuestra perspectiva, cada reivindicación desempeñó un papel propulsor; pero ninguno por sí solo fue un detonador automático de los disturbios. Como ha señalado el historiador inglés George Rudé, con larga trayectoria en el estudio de las rebeliones y protestas europeas, “la multitud puede levantarse porque está hambrienta o teme estarlo, porque tiene una profunda aflicción social, porque busca una reforma inmediata o el milenario o porque quiere destruir a un enemigo o aclamar a un ‘héroe’. Pero rara vez lo hace por una sola de estas razones”. Y continúa:

Debemos todavía explorar aquellos motivos que permanecen bajo la superficie. Y si están implicadas personas de diferentes clases y credos, algunos pueden ser impulsados por un motivo y otros por otro. En consecuencia, los motivos no solo variarán de una acción a otra, sino también entre los diferentes grupos que participaron en el mismo disturbio<sup>13</sup>.

Además de plantear estos desafíos, Rudé ofrece una serie de orientaciones metodológicas a la hora de analizar lo que él llamó la ideología de la protesta. Según el historiador, esta sería resultado de la convergencia de tres factores: los elementos inherentes o ideas aparentemente más sencillas que circulan en el pueblo llano, a veces contradictorias y confusas, mezcla de tradiciones populares, mitos y experiencia cotidiana; los elementos derivados, es decir, el cúmulo de ideas y creencias externas que se toman prestadas y que a menudo se presentan en forma de un sistema más estructurado de ideas políticas, filosóficas o religiosas, y, por último, las circunstancias y experiencias que, en último término, determinan la naturaleza de la mezcla final<sup>14</sup>.

Sobre dicha matriz se hacen varias puntualizaciones. No existe una tabula rasa en la que se puedan injertar nuevas ideas donde antes no había ninguna, la ideología derivada solo puede absorberse efectivamente si el terreno se ha preparado con anterioridad (ello explica por qué hay ideas que no calan y son rechazadas o incluso son contraproducentes como movilizadoras de la rebelión). Tampoco hay una progresión lineal de ideas sencillas a complejas ni existe un

muro entre ambas. En un camino de ida y vuelta, muchas ideas inherentes fueron resultado del paso del tiempo que permitió la internalización de ideas derivadas durante la misma experiencia de lucha, y no pocas alimentaron sistemas ideológicos más complejos, en tanto la génesis de su propuesta epistémica emana de la realidad misma, de la experiencia popular y de sus creencias. No se trata, por tanto, de que una sea superior a otra. Solo aislables para el análisis, las ideas inherentes y derivadas conforman una compleja amalgama. Por último, en el curso de su transmisión y adopción, todas las ideas derivadas sufren una transformación, en tanto su naturaleza –lectura e interpretación– dependerá de las necesidades sociales o de los objetivos políticos de las clases que están dispuestas a absorberlas. En definitiva, el pueblo enriquece los recursos ideológicos de su cultura política entre el adoctrinamiento, la experiencia y la lucha, constituyendo lo que Rosa Luxemburgo definía como el sedimento intelectual que alimenta los procesos de reflexión y confrontación<sup>15</sup>.

Como vemos, dentro de esta perspectiva, el concepto de experiencia ampliamente desarrollado por E. P. Thompson es vital.

Dentro del ser social tienen lugar cambios que dan lugar a experiencias transformadas: y esta experiencia es determinante, en el sentido en que ejerce presiones sobre la conciencia social existente, plantea nuevas cuestiones y proporciona gran parte del material de base para los ejercicios intelectuales más elaborados<sup>16</sup>.

Ahora bien, entre los motivos de la gente que protestó durante la dictadura identificamos un amplio abanico. Resulta evidente que en el período 1983-1986 los elementos propulsores inmediatos fueron, por un lado, la protesta contra la carestía de la canasta básica, del transporte, el hacinamiento, los sueldos que no alcanzaban. Reivindicaciones que se movilizaron por la defensa de derechos considerados legítimos y de importante arraigo: como el derecho a trabajar, a comer, a una casa, a transportarse y a vivir dignamente. Motivos que informan las luchas del siglo. Además de otras ideas-fuerza internalizadas en la misma experiencia de lucha, como el derecho a organizarse, expresarse, ocupar el espacio público, etc.

Pero también estuvieron en juego cuestiones valóricas, como un profundo sentimiento de injusticia ante la humillación y represión física y simbólica a la que eran constantemente expuestos. Tal disputa valórica difícilmente puede ser medible o cuantificable, ya que como bien advierte E. P. Thompson:

Los valores no son “pensados” ni “pronunciados”; son vividos, y surgen en los mismos nexos de vida material y de relaciones materiales que nuestras ideas. Son las necesarias normas, reglas, expectativas, etc., aprendidas (y “aprendidas” en nuestros sentimientos) en el marco del “habitus” del vivir; y aprendidas en primer lugar en el seno de la familia, en el trabajo y en el interior de la comunidad inmediata<sup>17</sup>.

Estos sentimientos y conceptos organizadores se ensamblaron a un corpus de ideas derivadas fruto del trabajo agitativo militante de varios años de labor clandestina, capaces de resignificar y potenciar la lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos, el derecho a la rebelión popular, a utilizar todas las formas de lucha contra la represión, etc. (con el tiempo vendrán luchas por la igualdad de género, por la desmunicipalización de la educación secundaria, por la reivindicación de la raza, entre otras). Baste señalar, a modo de adelanto, que como agentes movilizados y transmisores de esas orientaciones ideológicas se encontraban los militantes de partidos políticos, cuadros sindicales y agentes pastorales de la Iglesia Católica que desempeñaron un papel clave durante las jornadas. Con esto abordamos un asunto central, que tiene que ver con la discusión entre la supremacía de la organización versus el elemento espontáneo a la hora de caracterizar la protesta de la década de 1980. Pero lejos de alinearnos en una u otra, lo que observamos fue una retroalimentación entre lo que Rosa Luxemburgo llamó la “energía creadora de las masas”, de la que emana una potente creatividad y predisposición a la acción, y la organización política (incluyendo a la Iglesia comprometida), que fue capaz de generalizar y promover diversas ideas derivadas y formas de resistencia y lucha, dinamizando los procesos de confrontación. Elementos que estaban en sintonía con la cultura política chilena, el momento en que se desarrollaba la contienda y la predisposición subjetiva. Cuando esto no fue así, tanto la conducción como sus ideas derivadas mostraron prontamente sus límites a la hora de intentar masificarse.

Otro hilo que debemos cruzar en esta amplia red de motivaciones es el lugar que juega la memoria histórica como resorte propulsor de las protestas. Diversos estudios que analizan las protestas populares, especialmente de origen europeo, detectan como un elemento distintivo entre las rebeliones caracterizadas como “tradicionales” y “modernas” el horizonte de lucha, es decir, las primeras serían conservadoras en el sentido de querer restaurar un pasado dorado a través de luchas eminentemente defensivas (esto mayoritariamente corría para los sectores campesinos). Por el contrario, las protestas modernas serían progresistas, en tanto mirarían hacia adelante, ya que sus motivaciones se centrarían en la construcción de una sociedad distinta. Una dualidad que no nos sirve para pensar procesos como el chileno durante la dictadura, ya que gran parte de los protestantes se alzaron en torno al reclamo por recuperar un pasado arrebatado, proscrito. La experiencia de la Unidad Popular había sido experimentada como un triunfo individual y colectivo que consagró el ascenso del movimiento popular. Ese nosotros fue un poderoso imaginario colectivo que estructuraba y relucía bajo códigos, símbolos, expectativas y recuerdos; conformaba un proyecto de transformación social al que adherir y por el cual luchar. También entrañaba la defensa de derechos perdidos con la instauración neoliberal. En ese sentido, efectivamente la protesta contra la dictadura fue defensiva y restauradora. Entrañaba muchos sueños rotos. Frustraciones, dolores profundos. Ciertamente que en las calles resonaba más la consigna “democracia ahora” que “un mañana socialista”, pero la conciencia restauradora no implicó que la lucha tuviese un carácter reaccionario.

Otro elemento importante que ayudó a unificar lo diverso fue la complicidad de tener un enemigo compartido que alineó claramente a los bandos políticos. El antipinochetismo fue un peculiar consenso moral y ético que animó a desplegar la energía antiautoritaria y la alegría de disentir en voz alta. ¿Qué nos dijo ese antipinochetismo manifiesto en las Jornadas Nacionales de Protesta? Principalmente, que un ser social no estaba completamente preso del dominio de los militares, que se había ido liberando en espacios moleculares y que estuvo dispuesto a desafiar la seguridad hegemónica de una dictadura que hasta 1981 festejaba el boom económico, su nueva Constitución Política e imponía el plan privatizador enmarcado en “las siete modernizaciones sociales” sin mayor disenso y con la inigualable oportunidad de experimentar sin enfrentar expresiones opositoras. En los corazones y las razones de los subalternos, los triunfadores eran impugnados moral y éticamente, y si estos, en su euforia remodeladora, lo habían olvidado, las protestas se lo recordaron. Quién mejor para expresar las percepciones del gobierno y el temor de las clases acomodadas



que el propio ministro Secretario General de Gobierno Alfonso Márquez de la Plata: “Este país vivía en calma y tranquilidad hasta que algunas personas decidieron llamar a las denominadas ‘protestas pacíficas’”<sup>18</sup>.

En definitiva, es en la comprensión de la comunión entre las ideas y valores internalizados a partir de la propia experiencia de lucha, los canales de transmisión y los agentes movilizados de ideas derivadas como nos salvaremos del anacronismo y comprenderemos la fuerza de consignas tan recurrentes durante la dictadura como ¡Democracia, ahora!, una demanda potente y participativa, mucho más relacionada con libertad política y soberanía popular que con los supuestos delegativos de una representación electoral.

## II

Sabemos que el 11 de mayo de 1983 Chile se sorprendió a sí mismo y que la coordinación de la protesta sorprendió a oficialistas y opositores. Pero, ¿de dónde les venían a los chilenos estas formas de protestar juntos que a tantos asombró? ¿De dónde extraían este repertorio con tintes de ritual? ¿Cómo se eligieron las calles para reunirse? ¿La idea de marchar, quemar el “mono”, bloquear esquinas, lanzar panfletos? ¿De dónde provenían las formas de violencia colectiva manifiesta en saqueos, incendios y destrozos? ¿Eso que se hizo –más que lo que se dijo– era algo nuevo? Pero si lo era, ¿en qué momento lo había aprendido una sociedad que supuestamente los militares habían puesto bajo un estricto control y orden?

Como ha demostrado una importante tradición historiográfica chilena, la historia de este país “cepillada a contrapelo”, revela cómo leyes e iniciativas de bienestar social fueron sembradas por el sufrimiento y la rebeldía de cientos de miles, y cómo los sectores populares se articularon políticamente para expandir o imponer sus derechos, frenar la explotación y desafiar el mando con la defensa de otro proyecto de vida. Todos elementos presentes en su cultura política<sup>19</sup>. En plazas, calles y avenidas está grabada la historia de la audaz confrontación ante medidas injustas tomadas por las autoridades, pero también persiste la huella de la represión que quiso silenciarlas. Si vamos a escarbar esa genealogía y abandonamos un instante la historia como discurso de las instituciones,

coincidiere con el historiador Armando de Ramón en que “la violencia ha estado siempre presente en la historia social y política chilena” y la capital ha sido un escenario recurrente. “Los últimos cincuenta años de la historia de Santiago han sido del todo incongruentes con una imagen de tranquila evolución y plácida existencia”<sup>20</sup>.

En dichos procesos de confrontación se fueron desarrollando diversas tradiciones de lucha que se activaron y articularon en las protestas contra la dictadura. Para definir las, traeremos aquí el concepto de tradición tal como propone el teórico Raymond Williams, es decir, la entenderemos como una fuerza activamente configurativa que moldea el presente desde atrás. Un planteamiento que tiene que ver más con las articulaciones y significados de lo que se transmite dentro de un conjunto de prácticas, que con las repeticiones de viejas formas en escenarios nuevos. Para comprenderlas en la vasta gama de la experiencia que proponemos, nos ayudará además pensar la tradición como un proceso selectivo. Explica Williams: “A partir de un área total posible del pasado y el presente, en una cultura particular, ciertos significados y prácticas son seleccionados y acentuados y otros significados y prácticas son rechazados o excluidos”<sup>21</sup>, cuestión que resulta “poderosamente operativa en el proceso de definición e identificación cultural y social”. Lo importante, a fin de cuentas, es el sentido y significación de las interacciones en las que se constituyen los sujetos.

A partir de este planteamiento, postulamos que en las protestas de los años 80 se condensó el siglo. En ellas se mezclaron y dialogaron la tradición política de la asamblea y sus apasionadas discusiones, la de la mano alzada, la de los pliegos petitorios y la de los boletines informativos propias del movimiento obrero y sindical y más tarde del estudiantil. La tradición clandestina conspirativa, característica de la formación en partidos políticos de raíz marxista y del trabajo militante; de la lucha de masas que supo tomar terrenos y esforzarse en captar nuevos cuadros. La tradición comunitaria, tejida en diálogo entre religiosos y pobladores que se organizan para vivir y subsistir, y que vemos en las comunidades de base, en las que se comparte la comida, la escuela de los niños y la compra en el mercado. También son su materia la esperanza y el dolor de la muerte compartidas en disciplinadas romerías, velatones y procesiones.

Relevante fue la organizativa callejera, una tradición política que en distintos momentos de la historia de Chile supo armar la revuelta, hacerse escuchar en plena vía pública, acosar a las fuerzas del orden, formar piquetes, dispersarse,

encender fuego y destruir símbolos del poder. Y también estuvo, y muy presente, la tradición del arte popular comprometido, que no habló con discursos ni con acciones audaces, pero que llenó el alma de los protagonistas de esta historia con una fuerte presencia en distintos circuitos y rincones populares a través del canto en el transporte público y las peñas, de Víctor Jara y Violeta Parra, del teatro y la danza, la pintura mural y las arpilleras que retoman los Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos. De tan fuerte presencia, que una salida a la calle para levantar barricadas sin acto cultural previo –aunque parecía una pantalla o preludio para la segunda parte– ocurría en contadas ocasiones y le restaba mística a la atmósfera.

Dentro de estas tradiciones se (re)crean y legitiman diversas formas de lucha. Ello nos permite detenernos en los métodos –físicos y simbólicos– y estrategias de confrontación social que se desarrollaron históricamente en el proceso de lucha de clases. En este punto habría que hacer al menos dos aclaraciones. Primero, no observamos una forma de lucha exclusiva o inherente a una tradición política, sino tantas como los sectores involucrados estimen pertinentes en el momento histórico dado. Puede haber formas protagónicas, sin duda, pero dicho protagonismo y su impacto público también está abierto a transformarse, en cuanto que las formas de lucha surgen y se popularizan durante el proceso de confrontación, organización y conciencia. Segundo, es importante deshacernos de los términos dicotómicos que enclaustran a la realidad social, especialmente en el análisis del conflicto. Nos encontramos con formas de lucha previamente planificadas, que derivaron en iniciativas espontáneas al ser recepcionadas, y luchas pacíficas, que al calor de los hechos dieron un giro violento.

En la trama de las protestas de la década de 1980 fue común observar ausencias y retrasos laborales, paros estudiantiles, asambleas, tomas de terreno, marchas, pliegos petitorios, concentraciones masivas, murales colectivos, impresión de propaganda, actos musicales, etc., que diversos investigadores coinciden en caracterizar como formas de lucha surgidas de confrontaciones de índole “moderna”. En la mayoría de los trabajos que dan cuenta de la transición de las formas de lucha atestiguadas durante el siglo XX se demuestra el creciente protagonismo de la huelga como herramienta poderosa, así como del proceso de negociaciones que se ponía en marcha, parte de la politización y organización desarrolladas dentro de la sociedad chilena, lo que les permitió a los sectores populares ampliar sus bases sociales, convertirse en interlocutores válidos y arribar a nuevas y privilegiadas formas de confrontación.

Si bien durante la dictadura las principales formas de lucha modernas que podríamos catalogar con trayectoria (para diferenciarlas de las que se popularizarán durante la dictadura) persistieron, mostraron prontamente sus límites. Baste recordar que la transformación de las relaciones laborales y la pauperización del trabajo a nivel estructural, la atomización de los sindicatos y vulnerabilidad de los trabajadores redundaron en que la huelga fuera perdiendo su potencial como medida de presión. Con todo, los líderes sindicales insistieron en marchar con sus petitorios hacia La Moneda e intentar entregar el sobre por oficina de partes. Pero en momentos en que los canales de interlocución estaban clausurados, la lucha política de los trabajadores tendió a dirigir la confrontación hacia la acción, por lo que veremos a destacados dirigentes y sus bases recurriendo a formas de lucha de índole “premoderna” (como lanzamientos de piedras y barricadas).

Además, fue común recurrir a formas de lucha que ya habían sido utilizadas con anterioridad, como golpear las cucharas en la hora de colación estudiantil u obrera, los viandazos, retrasos, retiros tempranos, mítines, lanzamiento de panfletos y rayados, hacer sentadas o sitting para detener el tráfico (muy utilizadas por movimientos en defensa de los derechos humanos y por algunos sectores de clase media y acomodadas antipinochetistas). Aunque estos sectores mayoritariamente optaron por tocar las bocinas a determinada hora, provocar atochamientos o llamar por teléfono diciendo una consigna (lujo que no se podían dar los sectores populares, ya que contadas casas poseían un teléfono o un auto particular). Asimismo, se idearon otras manifestaciones, como trabajar sin corbata en el caso de empleados bancarios, tomarse los liceos en el caso de los jóvenes secundarios, abstenerse de pagar cuentas o hacer compras.

Hubo diversas prácticas que pese a no ser una novedad, para el contexto chileno cobraron un destacado protagonismo como formas privilegiadas de lucha. Una de las más populares fue tocar las cacerolas a determinada hora. Estos caceroleos, si bien habían sido utilizados por las damas de clase alta para protestar durante el gobierno de Salvador Allende, tienen un origen de más larga data de lo que suele recordarse, y ya podemos encontrarlos, por ejemplo, como protesta de las mujeres de Lota contra la represión a los mineros del carbón durante el gobierno de Gabriel González Videla<sup>22</sup>.

Por otro lado, se volvieron recurrentes las migueladas<sup>23</sup>, el uso de bombas molotov, explosivos, cadenas y armamento casero –crecimiento que sin duda era una novedad en la realidad chilena– en combinación con formas de acción

directa y que se visualizaron en el copamiento de calles, levantamiento de barricadas, fogatas, saqueos, incendios, pedreas y enfrentamientos de carácter más frontal contra los símbolos de la dictadura o del poder. Gran protagonismo tuvieron la olla común, la quema del “mono” o juicio popular teatralizado, los ayunos, encadenamientos y huelgas de hambre. Por otra parte, es importante puntualizar que la manifestación de violencia popular, incluyendo el uso de artefactos explosivos, no iba más allá de la destrucción material. En muy pocas ocasiones la protesta popular produjo directamente derramamiento de sangre, aunque en la periferia, por el contrario, la geografía de la represión se cobraba cara, en muertos y heridos.

### III

Respecto al papel de las Jornadas Nacionales de Protesta, por largo tiempo su interpretación ha estado hegemonizada por las visiones que buscaron legitimar política e históricamente la transición pactada a la democracia<sup>24</sup>. En efecto, los llamados “teóricos de la transición” propusieron una reinterpretación de las protestas tan minimizada que las hicieron desaparecer. Porque la transición era el territorio de las élites, un momento eminentemente político e institucional en el que los “otros”, sus demandas y formas de hacer política quedaban necesariamente fuera. La incapacidad de las movilizaciones populares estaba dada por una “inmadurez” de tipo “expresivo-emocional antes que reivindicativo-instrumental”<sup>25</sup>. Por tanto, el momento era “un escenario apto para los partidos, no para los movimientos sociales”. En esta tónica, Manuel Antonio Garretón planteó que la movilización social por sí sola no terminaría con la dictadura; su fin solo se lograría sobre la base de un acuerdo político<sup>26</sup>.

Desde otro punto de vista, la radicalidad de las jornadas fue evaluada no solo como expresión de que estas habían fracasado en obtener su objetivo (derrocar a la dictadura), sino que, a la postre, su dinámica beneficiaba al régimen de Pinochet. Es decir, la violencia política popular que se desarrolló al fragor de estas movilizaciones sociales, según esta visión, terminaba por fortalecer la lógica de guerra de la dictadura<sup>27</sup>. En definitiva, estas miradas, luego del trauma histórico provocado por las dictaduras militares en el Cono Sur, abandonaron el marxismo como matriz analítica, resemantizaron los conceptos de democracia y

política, y encumbraron el del consenso como aspecto crucial para la recuperación democrática. Este proceso teórico-político minusvaloró las estrategias políticas basadas en la movilización social y el conflicto, resabios de un pasado que se consideraba superado<sup>28</sup>.

No obstante, aquí planteamos que la subversión frente a los regímenes de disciplinamiento social y espacial impuestos por la dictadura fue uno de los logros más importantes de las jornadas. En este sentido, las protestas reinstauraron la convivencia social a partir de una ruptura radical –en unos casos difusa, en otros intermitente– del tipo de realidad que prevalece en la rutina básica de lo cotidiano<sup>29</sup>. A través de lo que Bolívar Echeverría llama “puesta en práctica de lo político”, alteraron el día y la noche. Rompieron la rutina, el apaciguamiento, el hastío, la presión de la vida cotidiana. Se abrieron los horizontes de posibilidades: las fogatas iluminaron la oscuridad y congregaron solidaridades, las marchas interrumpieron el ordenamiento espacial y permitieron a hombres y mujeres reconocerse entre otros muchos. Se escucharon voces que cuestionaron el disciplinamiento sonoro, los viandazos rompieron el tiempo del trabajo, rayados, panfletos y publicaciones desafiaron la censura y la autocensura.

Tal elemento disruptivo, que puede ser un patrón común con los disturbios producidos durante el siglo, tuvo como elemento novedoso su prolongación durante el tiempo. Una réplica mensual primero y diseminación cotidiana incapaz de poder ser contabilizada hasta prácticamente el fin de la dictadura. Un extendido ciclo de rebelión popular que permitió consolidar un tipo de sociabilidad política sustentada en una opción identitaria y un sistema valórico diverso, que dirimió, con su presencia y réplica, lo que significaba “hacer política” durante la época de estudio. Es relevante insistir en que nos situamos en un período de importantes transformaciones estructurales. Con distintos fundamentos ideológicos, dentro de la sociedad chilena existía un abierto conflicto en torno a valores y concepciones de vida contrapuestos que se manifestaron en las interconexiones en que se desarrolló la lucha económica, política y cultural. Fue ahí donde entró el pueblo a la escena pública a disputar los límites con que el poder definía lo político y lo no político. Por eso tanta sorpresa y furor después de mayo de 1983, porque con las protestas se recuperó, a los cuatro vientos y en plena vía pública, la sensación de experimentar la convivencia social como un orden construido por la propia sociedad, a contracorriente del poder. En ellas se convive, se forjan las subjetividades y la politicidad se manifiesta en su doble sentido y realidad: como forma de

experiencia cotidiana que incide sobre la sociedad y los procesos de democratización emprendidos por la oposición y, a la vez, como expresión de sujetos colectivos contruidos por esa politización. Como señala, Hugo Zemelman:

Hacer política no se restringe al logro de metas, sino debe contribuir a crear situaciones en las que los hombres, desde la cotidianidad misma, encuentren un sentido que pueda servirles para amalgamarse con otros sentidos más globales. Un discurso capaz de construir la realidad y evite reducirse a la administración del Estado, especialmente cuando este se identifica con una estrategia excluyente, y esta, a su vez, se confunde con la realidad<sup>30</sup>.

Si damos otro paso y sostenemos junto a Norbert Lechner que la definición de lo político está relacionada con la concepción de sociedad, se trataría entonces de “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”<sup>31</sup>. Interacciones que actúan como multiplicador de lo simbólico<sup>32</sup>, regulando y representando las relaciones sociales con otras estructuras y dimensiones que son fundamentales en la praxis política, como el ritual y el mito, difíciles de ser explicados en términos de la racionalidad instrumental.

En este sentido, entender la política como interacción nos invita a introducirnos en los espacios de sociabilidad: la intimidad del barrio, de las esquinas, aulas y parroquias, lugares privilegiados para estudiar; como dijo alguna vez Sartre: “Lo que el hombre hace con lo que han hecho de él”. Un espacio-tiempo en que se articulan las experiencias individuales que participan de una significación colectiva y nos puede dar claves para aprehender los rincones que Lechner llama “el sustrato cognitivo-afectivo” de la política<sup>33</sup>. Sin ese elemento cotidiano (distintas situaciones de vida que condicionan diferentes modos de vida), difícilmente podríamos dimensionar el tiempo “extra-ordinario” de la protesta, lugar, momento y sentido en que se expresan las necesidades y se comprenden las reivindicaciones de la gente común. Argumenta Lechner: “En lugar de reducir la vida cotidiana a los hábitos reproductivos de la desigualdad social (Bourdieu), habría que señalar igualmente cómo a raíz de la vivencia subjetiva de esa desigualdad estructural, las prácticas cotidianas producen (transforman) las condiciones de vida objetivas”<sup>34</sup>.

Se trata de indagar en las relaciones interpersonales y espacios materiales que animaron una sociabilidad política que sustentó y que propició el desarrollo de las protestas populares. Como ha señalado Maurice Agulhon: “La historia de la socialidad es, de algún modo, la historia conjunta de la vida cotidiana, íntimamente ligada a la de la psicología colectiva”, y en el caso de los sectores desposeídos, está además ligada a la historia de la asociación para la lucha. Siguiendo esta línea de investigación, sostenemos que el elemento repetitivo de las protestas permitió que algo aparentemente transitorio, como las barricadas, fogatas, actos musicales o marchas, se consolidara como un lugar de encuentro, intercambio y reconocimiento. Identificamos así asociaciones voluntarias tanto de carácter formal (la parroquia o el partido) como informal (las esquinas, la barricada, la marcha)<sup>35</sup>. Habría que añadir que muchos de estos espacios tenían carácter clandestino (peñas o asambleas), lo que reforzaba la identidad y el sentimiento gregario, fraterno y militante.

Para concretar nuestros objetivos, requerimos incorporar otra categoría que nos sirve para pensar la vida en su sustrato material y simbólico: la ciudad comprendida como territorio, es decir, el ámbito en tensión y disputa en que se define el “modo de vida”, que delimita “un nosotros y los otros”, que teje vínculos hacia dentro y levanta fronteras hacia fuera; y como espacio, escenario relacional que refiere al contenido social y político del proceso en que se hacen manifiestas práctica y discursivamente las contradicciones. Señala Juan Enrique Vega:

El espacio político se interrelaciona con el social (reproducción de la dominación), con el físico, que le señala los límites geográficos y físicos dentro de los cuales debe desarrollarse. Espacios que contienen distintas prácticas y significados son acción y discurso, también interpelación y respuesta, son emisores y receptores de mensajes, así como condición y determinación mutua<sup>36</sup>.

Prestar atención a las prácticas espaciales de la lucha es detenerse en lugares, en los ejes de expresión simbólica que estructuraron la vida social, en las trayectorias que mediaron entre el tiempo del orden y el tiempo de la experiencia cotidiana, entre la historia y biografía<sup>37</sup>, y que nos permiten observar “lo distinto” de las Jornadas Nacionales de Protesta, ubicar su especificidad y



desentrañar su significación histórica. Es preciso aclarar que nos concentraremos preferentemente en los sucesos ocurridos en la ciudad de Santiago de Chile. Sin desconocer el importante aporte regional, Santiago fue el lugar que alcanzó los más altos grados de diversidad, confrontación, extensión en el tiempo y nos ofrece un barómetro de los sucesos a nivel nacional.

En cuanto a la periodización, si bien las jornadas se desarrollaron hasta 1987, en ellas visualizamos tres etapas: el fervor rebelde, que va desde mayo de 1983 hasta enero de 1984, caracterizada por el entusiasmo de los inicios, por su expansión a nivel nacional, por su réplica mensual y por la consolidación de un marco de acción, es decir, la pauta común de acción que cohesionó lo diverso. A muy grandes rasgos: una convocatoria centralizada que acordaba el día y que generalmente provenía de la Confederación Nacional de Trabajadores o de los conglomerados políticos junto a organizaciones sociales. Ese día, la ausencia estudiantil en los establecimientos era la tónica, junto al cierre del comercio, el retraso en el inicio y desarrollo de la jornada laboral, diversas manifestaciones artísticas y confrontaciones en universidades y barrios periféricos. En esta etapa, específicamente a partir la Tercera Jornada Nacional de Protesta en julio de 1983, los partidos políticos volvieron a tomar la tribuna pública y se agruparon en los tres principales conglomerados que conformaron el cuadro opositor: la Alianza Democrática (AD), el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Bloque Socialista (BS); además, para complejizar más el cuadro, en diciembre del mismo año nació el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista. Su capacidad quedó comprobada con diversas acciones de sabotaje de gran complejidad operativa –como cortes de energía eléctrica coordinados en amplias zonas del país– que también fueron la tónica de esta época.

La segunda etapa estuvo marcada por la discusión sobre el carácter, los límites y posibilidades de la movilización social. La protesta se blandió entre el miedo a la radicalización por parte de sectores que acusaban repetición, desgaste y promovían definir claramente los objetivos de cada jornada antes de “protestar por protestar”, por un lado, y la persistencia de quienes querían promover una actitud de protesta permanente, y a toda costa querían impulsar un paro nacional y la expansión de formas de autodefensa, sabotaje y guerrilla urbana hasta derribar a la dictadura, por otro. Esta etapa, llamada la discusión, la ubicamos desde febrero de 1984, con el llamado “puntarenazo”, hasta noviembre del mismo año, con la imposición del estado de sitio. Fue este el tiempo de la consolidación del movimiento estudiantil universitario con la exitosa

democratización y conquista de todas sus federaciones y, aunque en menor cantidad con respecto al año anterior, de grandes y masivas jornadas nacionales, como las de marzo, septiembre y octubre de 1984.

Estas dos etapas conformaron lo que Tomás Moulian ha llamado “el acoso”, tiempo en que la salida plebeya expresó más fuertemente su favorable correlación de fuerzas para propiciar una salida a la dictadura sin negociar con el régimen. Hasta entonces, a pesar de las distintas tendencias que se dirimían al interior de la oposición, lo políticamente correcto y plataforma común reivindicativa era la impugnación a la Constitución de 1980 por considerarla ilegítima; el cuestionamiento del modelo económico, y la salida de Augusto Pinochet. Bajo esos lineamientos se habían fundado los bloques opositores.

La tercera etapa, que llamamos la fragmentación, se abrió a partir de las dos protestas que se desarrollan durante el estado de sitio, que se prolongó desde el 6 de noviembre de 1984 al 17 de junio de 1985. A pesar del impacto coercitivo que generó la normativa en la movilización y disposición de lucha, su influencia ha sido muy pobremente considerada en los análisis que quieren dar cuenta “del reflujo en las protestas”. Nosotros lo encontramos fundamental, entre otros puntos que expondremos en la investigación, por clausurar los espacios públicos, terreno en que mejor fluía la oposición, y por crear el clima propicio para las conversaciones entre la AD y la centroderecha, encaminadas a evitar el peligro polarizador y la violencia venga de donde venga. En la discusión política se posicionó exitosamente el debate en torno a las formas de la lucha política, relegando muy abajo al de los fondos (los motivos). Coherentemente a este desplazamiento, la plataforma base que exigía la oposición, y que tensamente la cohesionaba, se fragmentó, y muy poco o casi nada quedó de ella al llegar a 1989.

A pesar de que las protestas de septiembre de 1985 y 1986 fueron especialmente combativas y unitarias, lo mismo el masivo paro nacional del 2 y 3 de julio del mismo año, estas se diseminaron en una infinidad de protestas. Ya no se trataba de una convocatoria nacional centralizada, sino que diversos organismos gremiales, locales o militantes llamaban a manifestaciones, marchas y concentraciones de visualización colectiva. De hecho, son tantas las iniciativas que se dificulta su contabilización. La tercera etapa cierra en 1987 con la condena pública a la violencia política opositora, especialmente al Partido Comunista –después del fallido atentado a Pinochet y el descubrimiento de la internación de armas por el puerto de Carrizal Bajo–, y la clara hegemonía de la

clase política democratacristiana y socialdemócrata, que encabezó el pacto de transición. Entre otros puntos, presenciamos la aceptación del modelo heredado por las Fuerzas Armadas a través de la inscripción partidaria en registros electorales y la política “dentro de lo posible”, que fueron los marcos jurídico-normativos impuestos por la Constitución de 1980.

Pero más allá de su evaluación final, a través de su función expresiva y apelativa, las protestas –especialmente las grandes Jornadas Nacionales de Protesta de la primera y segunda etapa en las que nos concentramos– nos permiten leer los signos y escuchar las voces de quienes sacaron a la luz los conflictos que yacían en la instauración de un sistema por la fuerza y nos revelan dilemas vitales que surgieron en su interior. Las protestas populares fueron un mensaje que se transmitió al resto de la sociedad en un período de transición estructural en que el nuevo modelo chileno no terminaba de asentarse y consolidarse, y la vieja relación estatal y sus actores colectivos no terminaban de morir.

Este libro se divide en dos partes. El primer apartado “Sentimiento de injusticia, impulso radical y organización multifacética” invita a descubrir los motivos e impulsos, a entrar en la piel de los participantes, recorrer los espacios y los símbolos que dieron sentido y vida a las Jornadas Nacionales de Protesta. Conscientes de que es un universo imposible de abarcar completamente en esta aproximación, damos cuenta de los sectores más representativos: los trabajadores y la transformación neoliberal del trabajo y de la vida; los cristianos comprometidos y la solidaridad en tiempos adversos; el mundo de las poblaciones y el arte de marcar sus territorios; los estudiantes y la democratización de sus organizaciones; los militantes y su afán de desquite permanente. La protesta fue callejera y hecha a mano; por ello también nos interesa seguir los pasos que transformaron la ciudad y cargaron sus espacios de sentido. En ellos hay señales, visibles y audibles, de que la memoria aún puede percibir. Así lo demuestran los testimonios aquí vertidos.

Los anuncios, las convocatorias, la coyuntura, el debate político, los encuentros y desencuentros, los castigos y desafíos, el campo de batalla y los lugares de confrontación convergen en la segunda parte: “Protestas nacionales: crónica de un ciclo de movilización urbano-popular (1983-1986)”. Nos importan las esquinas y las calles, las rutas y las trayectorias, hechos, vidas y muertes que quedaron como sedimentación y testimonio de prácticas y complicidades que en los años 80 del siglo XX cuestionaron la legitimidad del mando, su lógica y su

sistema y aportaron a un proceso de democratización social protagonizado desde abajo. Esos sueños y esas prácticas, esos sentidos y sentimientos, esas voces y esos pasos, anónimos y secundarios en la ciudad, son el cuerpo y el alma de esta historia.

---

### **1983 Jornadas Nacionales**

- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 1 | 11 de mayo              | “No se trata de una ley más o una ley menos” |
| 2 | 14 de junio             | “Todos juntos y al mismo tiempo”             |
| 3 | 12 de julio             |  |
| 4 | 11-12 de agosto         | “Chile protesta por Chile”                   |
| 5 | 8-9-10-11 de septiembre |  |
| 6 | 11-12-13 de octubre     | “Fuera Pinochet, democracia ahora”           |
| 7 | 27 de octubre           |  |

---

### **1984**

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 8  | 27 de marzo        |   |
| 9  | 11 de mayo         | “Por la democracia, contra el hambre, la violencia” |
| 10 | 4-5 de septiembre  | “Sin protesta no hay cambios”                       |
| 11 | 29-30 de octubre   |   |
| 12 | 27-28 de noviembre |   |

---

### **1985**

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| 13 | 27-29 de marzo |  |
|----|----------------|--|

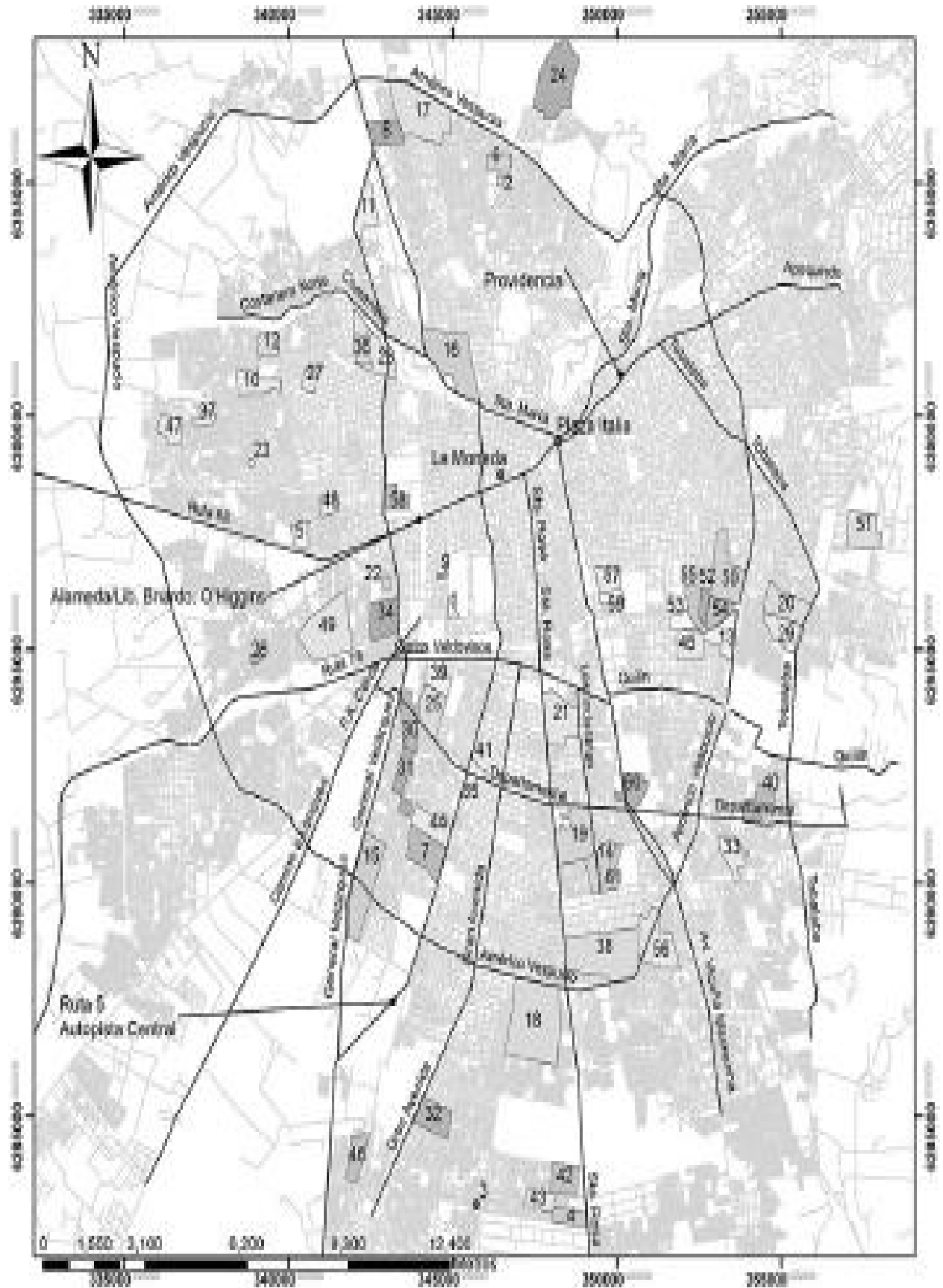
---

### **1986**

- |    |              |                                  |
|----|--------------|----------------------------------|
| 14 | 2-3 de julio | “Todos juntos y al mismo tiempo” |
|----|--------------|----------------------------------|
-

## **Mapa de santiago: Poblaciones con mayor participación o impacto urbano durante las jornadas de protesta**

■



1. Arauco
2. Barrio Sta. Mónica
3. Camp. Fresno
4. Camp. Raúl Silva H.
5. Cañada Norte
6. Chacabuco
7. Clara Estrella
8. El Cortijo
9. Gabriel Gonz. Videla
10. Herminda de la Victoria
11. Huamachuco
12. Intendente Saavedra
13. Jaime Eyzaguirre
14. J. Goulart
15. José María Caro
16. Juan Antonio Ríos
17. Juanita Aguirre
18. La Bandera
19. La Castrina
20. La Faena

21. La Legua
22. La Palma
23. La Palmera
24. La Pincoya
25. La Victoria
26. Las Parcelas
27. Lo Amor
28. Lo Franco
29. Lo Hermida
30. Lo Valledor Norte
31. Lo Valledor Sur
32. Los Cóndores
33. Los Copihues
34. Los Nogales
35. Molineros y Panificadores
36. Paula Jaraquemada
37. San Daniel
38. San Gregorio
39. San Joaquín
40. San Luis de Macul
41. San Miguel



42. San Rafael
43. San Ricardo
44. Santa Adriana
45. Santa Julia
46. Tejas de Chena
47. Teniente Merino
48. Villa Ecuador
49. Villa Francia
50. Villa Frei
51. Villa La Reina
52. Villa Lo Plaza
53. Villa Los Alerces
54. Villa Los Jardines
55. Villa Los Presidentes
56. Villa O'Higgins
57. Villa Olímpica
58. Villa Portales
59. Villa Salv. Cruz Gana
60. Villa Sta. Elena
61. Yungay

▪

<sup>1</sup> [Salazar, Gabriel. La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 \(una perspectiva histórico-popular\). LOM, Santiago, 2006 \(2a Edición\). p. 297.](#)

<sup>2</sup> [De la Maza, Gonzalo y Mario Garcés. La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984. Eco, Santiago, 1985. p. 28.](#)

<sup>3</sup> [Castells, Manuel. Crisis urbana y cambio social. S. XXI, México, 1981.](#)

<sup>4</sup> [Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. Colmex, México, 2010.](#)

<sup>5</sup> [Como señala Patricio Meller, durante los años de profunda recesión \(1982-83\), más del 50% de los desocupados pertenece al grupo del 20% de menores ingresos. Meller, Patricio. Un siglo de economía política chilena \(1890-1990\). Editorial Andrés Bello, Santiago, 1996.](#)

<sup>6</sup> [Campero, Guillermo. Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago. ILET, Santiago, 1987. Eduardo Valenzuela, La rebelión de los jóvenes. Sur Ediciones, Santiago, 1984 y José Weinstein, Los jóvenes pobladores en las Protestas Nacionales \(1983-1984\). Una visión sociopolítica. CIDE, Santiago, 1989.](#)

<sup>7</sup> [Eugenio Tironi, “Pobladores e integración social”. En Propositiones N° 14, 1990, y Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito. LOM, Santiago, 1997.](#)

<sup>8</sup> [Ver los trabajos de: Schneider, Cathy. “La movilización de las bases. Poblaciones marginales y resistencia en Chile autoritario”. En Propositiones N° 19, Santiago, 1990, y Castells, Manuel, Ibid.; y Movimientos sociales urbanos. S. XXI, Madrid, 2008.](#)

<sup>9</sup> [De la Maza, Gonzalo y Mario Garcés, op. cit.](#)

<sup>10</sup> [Álvarez, Rolando. Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista \(1973-1980\). LOM, Santiago, 2003; y Bravo Vargas, Viviana. ¡Con la razón y la fuerza, venceremos! La Rebelión Popular y la subjetividad comunista en los ‘80. Ariadna, Santiago, 2010.](#)

<sup>11</sup> [De la Maza, Gonzalo y Mario Garcés, Ibid.; y Salazar, Gabriel y Julio Pinto,](#)

Historia Contemporánea de Chile. Tomo I. Estado, legitimidad y ciudadanía. LOM, Santiago, 1999.

<sup>12</sup> Una aproximación interesante es la realizada por Antonia Garcés Sotomayor, Los rostros de la protesta. Actores sociales y políticos de las jornadas de protesta contra la dictadura militar (1983-1986). Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia. Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 2011.

<sup>13</sup> Rudé, George, La multitud en la historia. Estudio de los disturbios populares en Francia e Inglaterra. 1730-1848. S. XXI. Buenos Aires, 1971. Ibid. p. 225.

<sup>14</sup> Rudé, George, Revuelta popular y conciencia de clase. Crítica, Barcelona, 1990. pp. 10, 34 y 46.

<sup>15</sup> Desarrollo intelectual y cultural que Luxemburgo caracterizaba como el elemento duradero dentro de los flujos y reflujos del proceso revolucionario.

<sup>16</sup> Thompson, E. P. Miseria de la teoría. Editorial Crítica, Barcelona, 1981. p. 20.

<sup>17</sup> Thompson, E. P. Miseria de la... Op. cit. p. 268.

<sup>18</sup> El Mercurio, 13 de agosto 1983.

<sup>19</sup> Dentro de una extensa lista podemos señalar, por ejemplo, los trabajos de Sergio Grez, De la 'regeneración del pueblo' a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Dibam, Santiago, 1997 y Los anarquistas y el movimiento obrero. LOM, Santiago, 2007; Mario Garcés, Crisis social y motines populares en el 1900. Ediciones Documentas, Santiago, 1991; Julio Pinto, Trabajos y rebeldía en la pampa salitrera. El ciclo del salitre y la reconfiguración de las identidades populares (1850-1900). Usach, Santiago, 1998 y Desgarros y utopías en la pampa salitrera. LOM, Santiago, 2007; Illanes, María Angélica. La Batalla de la Memoria: Ensayos Históricos de Nuestro Siglo: Chile, 1900-2000. Planeta-Ariel, Santiago, 2002.

<sup>20</sup> De Ramón, Armando, Santiago de Chile. Historia de una sociedad urbana. Catalonia, Santiago, 2007. pp. 258 y 261.

<sup>21</sup> Williams, Raymond. Marxismo y Literatura. Las Cuarenta, Buenos Aires 2009. p. 159.

<sup>22</sup> [El Siglo, 9 de octubre de 1947, p. 1. Citado por Pavilack, Jody. Mining for the Nation: The Politics of Chile's Coal Communities from the Popular front to the Cold War. University Park, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2011.](#)

<sup>23</sup> [Lanzamiento de clavos de tres puntas con el objetivo de impedir el transporte de locomoción particular y colectiva.](#)

<sup>24</sup> [Al respecto, ver Propositiones, N° 14. Sur Ediciones, Santiago, 1987 \(reimpresión, enero 1990\). Ver también: Garretón, Manuel Antonio. "La oposición partidaria en el Régimen Militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición". En: Drake, Paul; Jaksic, Iván. El difícil camino a la democracia en Chile. Flacso, 1992. Una mirada crítica a estas interpretaciones, que las consideraba una estrategia de legitimación de la salida pactada. Salazar, Gabriel. "Prefacio a la segunda edición". En: La violencia política popular, op. cit. p. 11.](#)

<sup>25</sup> [Tironi, Eugenio \(editor\), Introducción. Propositiones N° 14, op. cit. pp. 16-17.](#)

<sup>26</sup> [Garretón, Manuel A. "Las complejidades de la transición invisible. Movilizaciones populares y régimen militar en Chile". En Propositiones N° 14, p. 129.](#)

<sup>27</sup> [Arriagada, Genaro. Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Sudamericana, 1998 y Huneus, Carlos. El régimen de Pinochet. Sudamericana, 2000.](#)

<sup>28</sup> [Sobre esta corriente teórica-política, ver Cecilia Lesgart. Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del '80, Homo Sapiens Ediciones, 2003, cap. IV, y Cristina Moyano, El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile, 1973-1989. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010, cap. III.](#)

<sup>29</sup> [Echeverría, Bolívar, Valor de uso y utopía. Siglo XXI, México, p. 79.](#)

<sup>30</sup> [Zemelman, Hugo. La democracia latinoamericana ¿un orden justo y libre? Estudios Latinoamericanos, año 2, N° 4. julio-diciembre 1995. CELA, México. p. 32.](#)

<sup>31</sup> [Lechner, Norbert, Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la](#)

política. LOM, Santiago, 2002. p. 8.

<sup>32</sup> Bartra, Armando. El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital. UACM-Itaca-UAM, México, 2008. p. 168.

<sup>33</sup> Lechner, Norbert. Los patios interiores de la democracia: subjetividad y política. FCE, México, 1990. p. 58.

<sup>34</sup> Ibid. p. 66.

<sup>35</sup> Agulhon, Maurice. El círculo burgués. Siglo XXI, p. 38.

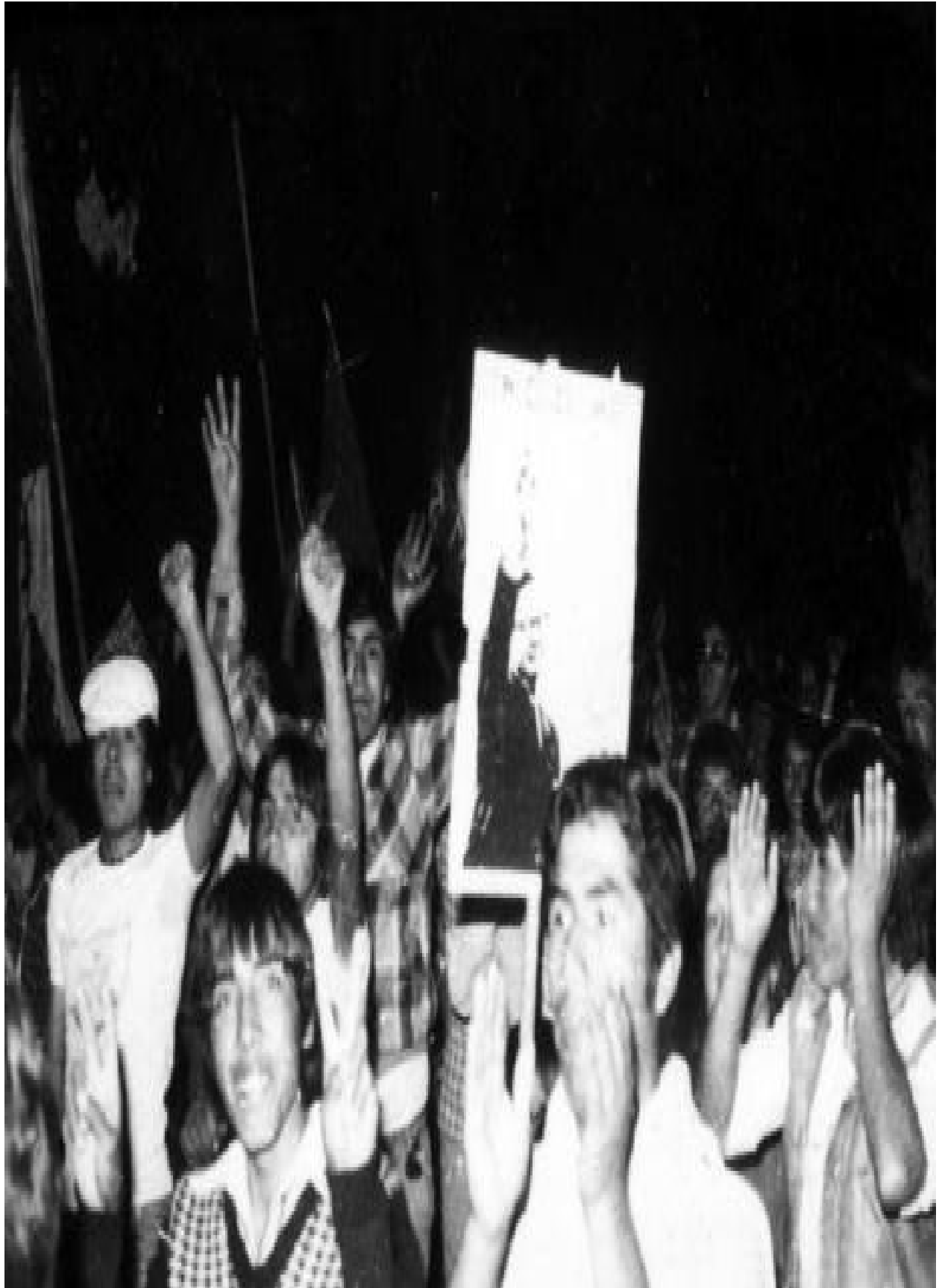
<sup>36</sup> Vega, Juan Enrique (coordinador). Teoría y política en América Latina. CIDE, México, 1983. p. 169.

<sup>37</sup> Lechner, Norbert, Los patios interiores, op. cit. p. 82.

PRIMERA PARTE

■

SENTIMIENTO DE INJUSTICIA, IMPULSO RADICAL Y  
ORGANIZACIÓN MULTIFACÉTICA



■ *Parque O'Higgins, 18 de noviembre de 1983 (ADVS).*



## CAPÍTULO I

### LA TRANSFORMACIÓN NEOLIBERAL DE LA VIDA Y DEL TRABAJO

Hasta 1973, Francisco Leiva fue un obrero tejedor, un orgulloso tejedor y dirigente sindical de la fábrica textil Paños Tomé, la primera en su rubro en ser expropiada por el gobierno de Salvador Allende y puesta en manos de los trabajadores. A Francisco le llamaban Hermano Leiva por su espíritu evangélico y por andar impecablemente vestido, aunque, según él, compartía esta característica con el resto de sus compañeros, habitantes de un pueblo cuya identidad colectiva estaba muy ligada a la fábrica: “El trabajador textil se notaba aquí y en cualquier parte donde llegara. Cada trabajador tenía tres paños al año y andaba bien arregladito, con sus trajes impecables”.

Después del golpe militar, la represalia que tomó la administración de la fábrica contra él le partió el alma de obrero forjada durante 21 años de trabajo.

Un día me dijeron: “Usted deja sus máquinas y pasa al barrido”. Colocaron a otro en las máquinas y yo tuve que barrer. No me hice problema por el trabajo porque eso no me afrentaba. La injusticia sí que afecta... Me sentía muy humillado, humillado porque no se podía opinar nada. El jefe de turno decía que había que limpiar tres, cuatro máquinas y había que limpiarlas... Si yo le decía al jefe de sección: “Mire, señor, yo quiero que me devuelvan mi trabajo” hasta ahí no más llegaba. Lo denunciaban a uno y lo mandaban a cambiar... uno tenía que soportar tanta cosa, ¡tanta injusticia!

La desprotección en las relaciones laborales, la humillación y la explotación redoblada dentro de los marcos de un trabajo precario e incierto, sumadas a la

persecución y desmantelamiento de las organizaciones sindicales, políticas y sociales fue un destino que les estaría deparado a cientos de miles de trabajadores chilenos. Ellos y sus familias pagarían los costos de la nueva acumulación de capital: “A mí me pasó primero que a otros por la persecución – advierte Leiva–, pero con el tiempo les fue pasando a todos, porque se empezó a abusar con la gente y se le empezó a pagar lo que al jefe o al empresario se les ocurría”<sup>1</sup>.

Si bien al comenzar la década de 1980 el concepto de neoliberalismo no estaba popularizado, no se llamaba así ese sentimiento de agravio nacido de las modificaciones que estaban removiendo la vida en distintos ámbitos, pero desde 1975 una sociedad era reordenada bajo preceptos que entrañaban un profundo cambio estructural. Se trataba de un proceso de despojos que con distintas intensidades y tiempos marcaba transformaciones profundas en el trabajo, en la ocupación del espacio, en las formas de convivencia y en las múltiples expresiones de la vida social. Si al finalizar el ciclo dictatorial las cifras de crecimiento macroeconómico sostenido desde 1985-1989<sup>2</sup> permitían a Augusto Pinochet jactarse de entregar una economía vigorosa, competitiva y proyectar una imagen de país exitoso que se propagó en el extranjero y que aún persiste en algunos medios, poco se sabe o –más bien– poco se quiere recordar de los enormes costos sociales que significó la instauración de las recetas neoliberales.

Durante largos años los mayores costos del nuevo modelo de acumulación recayeron sobre los trabajadores y sectores más desposeídos. El propio Rolf Lüders, ministro de Economía y de Hacienda entre 1982 y 1983, reconoció años más tarde: “No estoy seguro, y lo afirmo con toda honestidad, si la población habría aprobado la transformación económica que se inició a finales de 1973 si se hubieran conocido exactamente los sacrificios que tuvo que hacer durante estos veinte años para alcanzar los logros actuales”<sup>3</sup>.

No solo no lo aceptaron pasivamente, sino que contra la dictadura y el nuevo proyecto societal que se imponía se desarrolló un importante ciclo de rebelión popular conocido como las protestas. En ellas el sentimiento de agravio experimentado por Francisco Leiva, al igual que el de otros miles de hombres y mujeres, activó una lucha callejera y una socialización política cuya reconstrucción será el horizonte de este trabajo. Es por ello que como primer puerto nos concentraremos en analizar las principales transformaciones y consecuencias sociales experimentadas a partir de la reorganización neoliberal de la sociedad chilena.

## Primera tarea: ordenar la casa (1973-1975)

Como primera condición, la reestructuración del capitalismo en Chile requirió despejar el camino de un movimiento popular organizado que había sintetizado su trayectoria en la elección del presidente Salvador Allende. La tarea fue perseguir y eliminar al enemigo interno: los trabajadores organizados y sus gérmenes de rebeldía. La primera idea-fuerza de la Junta Militar –que coincide plenamente con las reformas estructurales de corte económico– fue la necesidad de despolitizar la sociedad. En ello no solo fueron explícitos, sino reiterativos. Prestemos atención a las siguientes palabras, advertencias y mandatos de la Junta Militar:

Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos... Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario: asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de estas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles<sup>4</sup>.

Desde fines de 1973 se inició gradualmente un experimento monetarista que iría adquiriendo mayor radicalidad y profundidad en tan solo un par de años. La primera tarea del llamado Plan de Normalización inicial fue corregir las “diversas anomalías del pasado”. Las reivindicaciones del capital fueron en primer lugar y sobre todo antiestatistas, verdadero estorbo que asfixiaba su crecimiento y mermaba las ganancias. Para revertir el cuadro, estabilizar la situación y controlar la inflación, las nuevas autoridades económicas concentraron la crítica contra la nociva “cultura del reparto” estatal, decretaron la liberación de precios y salarios, la reducción de gastos gubernamentales y el aumento de tributos para reducir el déficit del sector público. Se rebajó el

gravamen sobre las utilidades de las empresas y fueron abolidos los que recaían sobre el patrimonio y ganancias del capital. Paso siguiente, se dispuso de los mecanismos necesarios para restaurar los derechos de propiedad a través de la devolución de tierras consideradas ilegalmente ocupadas y de empresas intervenidas o requisadas.

En 1974, 257 empresas y alrededor del 30% de la tierra expropiada “ilegalmente” por el Estado fueron devueltas a sus antiguos dueños; el 20% fue rematada entre habitantes no rurales, y otra parte fue parcelada y distribuida individualmente entre campesinos. No obstante, para 1978, el 40% de esas tierras ya habían sido vendidas o arrendadas por la dificultad que representaba para las familias campesinas mantenerlas debido al alto costo de los créditos y al escaso o nulo apoyo estatal en asistencia técnica. Cerca de un tercio de esos campesinos se vieron obligados a vender y trabajar para los nuevos dueños.

Otro masivo traspaso de recursos públicos a manos privadas, pero con transacción monetaria de por medio, se inició con la primera oleada de privatizaciones concretada entre 1974-1978. Si en 1973 alrededor de 400 empresas y bancos se encontraban en la esfera pública, en 1980 solo había 45. Paradójicamente, le correspondió a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), creada en 1939 para promocionar el desarrollo e industrialización del país dentro de la lógica de sustitución de importaciones, llamar a licitación pública para privatizar sus empresas, en la cual cualquier individuo o grupo, nacional o extranjero, podía adjudicárselas con un enganche de solo un 10 o 20% del valor estipulado. El resto sería cancelado en cuotas trimestrales.

Al parecer, el dueño estaba apurado por vender, los precios eran bajos y las condiciones de pago sin duda extremadamente ventajosas, pero corría 1975 y Chile se encontraba bajo una fuerte depresión económica. En tales circunstancias, ¿quiénes estaban en condiciones de adquirirlas?: los grupos asociados al capital internacional que contaban con acceso al crédito externo. Estos pidieron grandes préstamos para adquirir las empresas y, de paso, otorgar créditos internos que les serían redituables gracias a las altas tasas locales. Eran pocos y en esas contadas manos terminó concentrada la propiedad.

La participación privilegiada del sector empresarial, en particular constituido por las grandes empresas y sector financiero, estimuló la reorientación de los recursos y la capacidad empresarial desde las actividades netamente productivas hacia la especulación financiera y actividades comerciales vinculadas a la

especialización en la producción y explotación de recursos naturales de aquellos bienes en los cuales el país tenía ventajas comparativas. Gracias a este proceso de adquisición, los grupos mutaron en poderosos conglomerados financieros que controlarían buena parte del sistema bancario, las llamadas “financieras”, y a través de sus numerosas compañías asociadas, una fracción cada vez mayor de los sectores manufacturero y agroexportador<sup>5</sup>. Presenciamos el surgimiento de un nuevo bloque de poder económico que al alero de la intervención militar moldeará la nueva forma de dominación neoliberal en Chile<sup>6</sup>.

## Segunda tarea: una transformación radical (1976-1982)

Con este camino andado y el fortalecimiento de nuevos sectores líderes, en marzo de 1975 se inició el tiempo del neoliberalismo radical u ortodoxo. Es cuando el gobierno definió los marcos de su política societal a largo plazo y diseñó un plan institucional coherente para realizarlo inspirado en lineamientos ideológicos de un grupo de tecnócratas graduados de la escuela de Economía de la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys. Ellos traían consigo la visión casi romántica de salvar a Chile y modernizar su economía; aseguraban tener la formación técnica, la decisión y el talento para ello. Entre sus fortalezas estaba la desconfianza absoluta hacia lo político, punto de coincidencia plena con el mando militar.

Con la entrada en vigencia de las llamadas políticas de shock se inició “la reconstrucción económica más sustancial de país en el siglo XX”<sup>7</sup>. Este proceso ya no es una profundización del Estado burocrático-autoritario en el sentido que plantea O’Donnell, sino, como argumentan Moulian y Vergara, se trató de una reestructuración capitalista con carácter de ruptura<sup>8</sup>. En términos generales, las reformas estructurales se dispusieron a perfeccionar una política económica que asegurase el ajuste automático de la economía chilena a los ciclos internacionales, en la cual las autoridades no tuviesen la necesidad de intervenir. Por otro lado, durante 1975, los gastos gubernamentales llegaron a reducirse en un 27% en términos reales, especialmente en el área de inversión pública, y los salarios experimentaron un deterioro adicional al modificar la base de referencia para calcular el monto de los reajustes compensatorios. El empleo se estancó y la desocupación no terminó de incrementarse hasta alcanzar cifras históricas en 1983, que bordearon el 31,3%. Fue una tragedia. Escuchemos la voz de la pobladora Graciela Pérez, que durante estos años había vivido la larga cesantía de su esposo y el hambre de su familia:

Patricio salía a buscar y no encontraba nada. Llegué a pensar que era flojo y que no quería trabajar... En las noticias hablan de gente que han torturado; yo creo que nos han torturado a todos igual, lo han hecho de diferentes maneras, pero

para todos ha sido una tortura. ¡Hemos soportado tanta, tanta miseria!<sup>9</sup>.

También Francisco Leiva daba cuenta de una explotación laboral soportada por miedo a quedar cesante:

Era mucho trabajo y, además, estaba mal alimentado... si hubiera sido solo, a lo mejor me hubiera mandado a cambiar de inmediato. Pero con la familia no se podía... Por el hecho de pasar al barrido gané el puro mínimo, lo que no alcanzaba para la casa porque tenía a los cinco hijos estudiando<sup>10</sup>.

Paralelamente, la economía chilena fue inyectada con cuantiosas divisas. Debido a las máximas facilidades y garantías para ingreso de capital extranjero, en 1980 los préstamos externos a los bancos se más que triplicaron. Desde junio de 1979 las reservas internacionales van creciendo, el déficit fiscal desapareció por completo y la economía da muestras de estar recuperándose de la recesión. Los años 80-81 fueron los del “milagro económico chileno”, tiempos de optimismo y de sonrisas financieras. Según la cifras, el panorama era prometedor. Los chicos de Chicago, sus maestros Milton Friedman y Arnold Harberger y las recetas revolucionarias aplicadas en el largo país sudamericano acapararon la entusiasta atención de la prensa estadounidense. En este año apareció la primera tarjeta de crédito en Chile junto con tentadores productos extranjeros. Televisores japoneses, ropa de marca, perfumes franceses y whisky escocés llenan las vitrinas<sup>11</sup>. Son los tiempos del consumo, del préstamo fácil, del endeudamiento que a poco andar se transformarán en nuevas cadenas de esclavitud para las clases media y baja que podían acceder a los tentadores créditos.

Lo que significó el endeudamiento entre quienes creyeron en las promesas del “milagro económico” lo explicaba Víctor López, hijo de campesinos y más tarde dirigente del Sindicato de Obreros de Potrerillos.

Primero entraron todos los aparatos electrodomésticos, el televisor a color, los refrigeradores, los equipos estéreo... En el 80 y 81 empezaron a llegar las casas

vendedoras de autos y ahí se notó más cómo era el asunto... vinieron los llantos cuando se empezaron a ver acogotados porque estaban debiendo mucho y la plata no les alcanzaba para llegar a fin de mes. El poder adquisitivo iba disminuyendo y los precios de las cosas se pegaban tremendos estirones. Algunos dejaron de pagar las letras y les quitaron el auto; otros los vendían y seguían debiendo... El consumismo produjo un cambio muy grande en la gente. La puso más dependiente, más temerosa<sup>12</sup>.

En este contexto, Augusto Pinochet anunció en septiembre de 1979 la puesta en marcha de las siete modernizaciones sociales. Bajo la conducción de Miguel Kast y de José Piñera como ministro del Trabajo, los principios del libre mercado y la iniciativa privada se extendieron hacia áreas sociales claves. Se trató de la privatización del sistema previsional, que traspasó la administración de los ahorros para la jubilación hacia manos privadas de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y de la salud, con el advenimiento de las Instituciones de Salud Previsional (Isapre). Además de la nueva Ley Orgánica Constitucional de Minería, que permitió la inversión privada en minería y posteriormente sirvió de base para privatizar empresas relacionadas con sectores estratégicos, como energía y telecomunicaciones; la descentralización administrativa del Estado, y el diseño de un nuevo Código Laboral.

Si la institucionalidad jurídico-laboral sancionada por el Código del Trabajo y que databa de 1931 era un obstáculo para el funcionamiento del nuevo modelo de acumulación, el 2 de enero de 1979 el ministro Piñera anunció la puesta en marcha de un revolucionario Plan Laboral que significó un verdadero quiebre con la posición que el trabajo había tenido hasta entonces. Antes de 1973, la legislación laboral contemplaba una ley de inamovilidad, aumento obligatorio de salarios, salarios mínimos, compensaciones relativamente altas para los trabajadores, constantes elementos nuevos en los costos no salariales de la mano de obra, los que dejaron de ser operativos<sup>13</sup>.

El nuevo marco laboral estableció la libertad de afiliación sindical, en contraste con la condición obligatoria que regía en Chile hasta el golpe de Estado (entendiendo que todos los trabajadores se beneficiaban de la acción sindical). Además, fue permitido conformar en la misma empresa dos o más sindicatos con solo ocho socios, en lugar de 25 como era anteriormente. El número de



dirigentes también fue reducido (de cinco a tres), al igual que el tiempo permitido para sus tareas (cuatro horas semanales). Si la ley vigente hasta 1973 establecía que los sindicatos debían recibir una parte de las utilidades de la empresa (participación en los beneficios), quedó estrictamente prohibido recibir contribuciones de cualquier especie por parte del patrón. Ello no sería materia negociable, tampoco la intervención del gobierno o de autoridades políticas en los procesos de negociación colectiva entre sindicatos y empresas privadas. Apelando a la despolitización de los cuerpos intermedios y a las restringidas actividades de elección de dirigentes sindicales, quedó prohibido hacer campañas y presentar listas de candidatos.

Las disposiciones en torno a la negociación colectiva, parte esencial de la organización del trabajo y distribución de las ganancias en la producción, también fue pensada bajo los parámetros de una economía competitiva. De entrada, solo podía celebrarse entre los sindicatos de una empresa y los dueños de esta, en lugar de la tradicional negociación por rama de producción. Los puntos por discutir también fueron restringidos. Si hasta antes de 1973 era costumbre que se respetara la más amplia libertad de petición que involucraba disposiciones de carácter económico, de carácter social y otras relacionadas con las condiciones de trabajo de la empresa, el campo de negociación colectiva quedó reducido a las remuneraciones<sup>14</sup>.

Para evitar que en un momento dado hubiese un conflicto generalizado en toda un área de producción, impulsado por trabajadores que negociaban al mismo tiempo, no podrían participar en ellas las federaciones o confederaciones, y los proyectos de contrato deberían presentarse en fechas determinadas según la letra con que comenzaba el nombre de la empresa. Además, quedaron expresamente marginados de la posibilidad de negociar colectivamente los trabajadores de servicios e instituciones del Estado, centralizados o descentralizados; tampoco les estaba permitido a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, ni a los que se contratan para una faena transitoria o temporal, como el caso de trabajadores agrícolas y de la construcción. En definitiva, miles de campesinos que intervenían en actividades de corta duración, como la vendimia o la recolección de frutas, no podrían negociar con sus patronos la mejora de sus condiciones de trabajo ni remuneración.

De particular importancia para debilitar al movimiento sindical se contó con las siguientes medidas: la posibilidad de poner término al contrato de trabajo unilateralmente por parte del empleador, sin entregar causa ni motivos (se

estableció la causal “por necesidad de la empresa”). Para despedir a más de diez asalariados en un mes, los empresarios no necesitarían, como antaño, un permiso del Ministerio del Trabajo ni del de Economía<sup>15</sup>. Se restringió el derecho a huelga, que a regañadientes fue incorporado en el nuevo Plan Laboral con el fin de regularlo. Así lo explicó José Piñera en su discurso ante empresarios y funcionarios de gobierno: “Es efectivo que la huelga siempre engendra tensiones perjudiciales, pero mientras no se haya formado un consenso generalizado acerca de la conveniencia de crear fórmulas sustitutivas integrales, todo aconseja reconocerla dentro de los marcos antes señalados”<sup>16</sup>.

Durante la huelga-bajo-control que propuso Piñera, el empleador podía contratar nuevo personal para continuar con el funcionamiento de la empresa, y transcurridos treinta días de iniciada, cualquier trabajador estaría en el derecho de retirarse de ella y negociar individualmente con el empleador. Además, solo podría durar un máximo de 59 días, de lo contrario se entiende que los trabajadores han renunciado y pierden su trabajo. A todas luces el fomento al paralelismo sindical y la atomización favorecida por la creación de sindicatos pequeños y débiles apuntaba a socializar una fuerza de trabajo bajo valores, normas y conductas absolutamente diferentes a las que fueron parte de su trayectoria histórica. Por otro lado, con el nuevo Plan Laboral, el abaratamiento de la mano de obra fue asegurado desde distintos frentes, como el término de la obligación de pagar tarifas no inferiores al mínimo legal a menores de 21 años y mayores de 65. El descanso de colación se redujo a media hora, sin considerarla como trabajada, y acabó la limitación para la extensión de la jornada mediante el recurso de las horas extraordinarias.

Es indudable que el ajuste estructural se llevaba a cabo a expensas de los trabajadores. La visión del trabajo como una mercancía más es diáfana en las palabras del sucesor de José Piñera en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Miguel Kast:

Si la autoridad decide, por ejemplo, disminuir un impuesto que gravaba el consumo de un producto, su efecto inmediato será que el precio de ese artículo se hará más barato y, por lo tanto, más demandado por la población. La misma figura, exactamente la misma, es aplicable a las nuevas disposiciones respecto a la mano de obra. Al disminuir el impuesto de esta, el empleador demandará una mayor cantidad de mano de obra, querrá contratar a un mayor número de

personas. En una sola frase: por la sola aplicación de estas medidas aumentará el nivel de empleo en nuestro país<sup>17</sup>.

El paso que faltaba para institucionalizar las transformaciones estructurales era un marco jurídico que las respaldara y asegurase su proyección. Ese amarre se concretó a mediados de 1980 con la redacción final de la nueva Constitución Política de Chile, elaborada por un pequeño grupo de partidarios del régimen bajo cuatro paredes.

El régimen dio sus pasos con premura. El 12 de agosto de 1980 fue convocado el plebiscito que solo un mes más tarde debería aprobar o rechazar el texto constitucional. Al anuncio lo acompañó una millonaria asignación de recursos para la unilateral campaña mediática y la gira del Jefe de Estado por el sur de Chile para difundir sus virtudes. Entre ellas, Augusto Pinochet destacaba una importante diferencia: el concepto de “libertad personal” (asegurada por la “libertad de elección”) se alzaba sobre el principio de derecho social consagrado por las conquistas de antaño. El texto constitucional –en sus palabras– aseguraba “un notorio robustecimiento de los derechos personales, y en particular de aquellos que más interesan a cada hombre o mujer en su vida diaria o familiar, como son la libertad de educar a sus hijos, la libertad de trabajo y de afiliarse o no a cualquier gremio o sindicato y la libertad para escoger entre las diversas prestaciones de salud”. Además, en su inspiración –se enorgullecía Pinochet– se asumía el resguardo de las bases ideológicas que albergaba su concepción del mundo: “Orienta la adopción constitucional de las bases de un sistema económico libre, fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa económica particular dentro de un Estado subsidiario”<sup>18</sup>.

El 11 de septiembre, al cumplirse siete años del golpe de Estado, en plena vigencia de regímenes de excepción y supresión de derechos civiles, sin espacio para la difusión de ideas e intercambio de opiniones, sin registros electorales previos, con la posibilidad, incluso, de votar con cédulas de identidad vencidas, fue aprobada la nueva Carta Magna. El “Sí” obtuvo la mayoría absoluta con el 67,04% de los votos (el “No” obtuvo el 30,19%). El texto, conformado por 120 artículos permanentes que definieron la naturaleza de las nuevas instituciones que emergieron en este proceso de transformación, solo sería aplicable en su plenitud a partir de 1990, en tanto, contenía 29 disposiciones transitorias que estarían vigentes durante los ocho años –renovables– del período de transición

que se inauguraba. Uno de los colaboradores del régimen y artífice de la nueva Constitución, Jaime Guzmán, explicó que el plazo de esos ocho años de evolución gradual sería el tiempo requerido para “transformar a Chile en un país desarrollado y consolidar las libertades individuales”. Ello “debido a la perseverancia en el programa económico y la agilización de las siete modernizaciones sociales”<sup>19</sup>.

El 11 de marzo de 1981, Augusto Pinochet entró a La Moneda investido constitucionalmente como presidente de la República para encabezar un período presidencial de ocho años. En su ejercicio de mando le acompañaría –como sustituto de un parlamento democrático– la Junta de Gobierno, que representaba a los más altos jefes de las FF. AA. y de Orden, y que con potestades constituyentes y legislativas tendría la misión de estudiar y dictar una serie de leyes orgánicas y complementarias al texto constitucional que abarcarían más de treinta y dos materias de la vida nacional. La Junta de Gobierno debería revisar, por ejemplo, la ley general de educación; ley de partidos políticos; la ley del Congreso Nacional; Código Orgánico de los tribunales; ley de sindicatos; ley de indulto, entre otras que ya se encontraban promulgadas y llevadas a la práctica.

El mismo 11 de marzo Pinochet prorrogó por tres meses –como era costumbre– el estado de emergencia, y a la par fue declarado “el estado de peligro de perturbación de la paz interior”, un quinto estado de excepción previsto en la Disposición Transitoria Art. N° 24, que estipulaba las siguientes medidas, que desde los primeros días practicaron los aparatos represores:

Expulsar o prohibir el ingreso al país a cualquier persona que adhiera o propague doctrinas marxistas, o tenga reputación de tal, sin necesidad de expresar el fundamento de tal medida.

Arrestar a personas hasta por cinco días, prorrogables a veinte, en sus casas o lugares que no sean cárceles sin indicación de causa y sin ser puesto a disposición de la justicia <sup>20</sup>.

Relegar a personas a lugares apartados dentro del país por un período de tres

meses.

Suspender o restringir el derecho a reunión, la libertad de información y de opinión.

La aplicación del Art. N° 24 no sería susceptible a recursos de amparo ni de protección. Era incuestionable: la ejercerá el presidente de la República mediante decreto supremo firmado por el ministro de Interior bajo la fórmula “Por orden del presidente de la República”.

Estas disposiciones transitorias fueron la principal herramienta legal para sancionar a los miembros de la oposición. Bajo el argumento de resguardar la “constitucionalidad vigente”, procedimientos como la detención arbitraria, la tortura en centros de detenciones clandestinos, las expulsiones de dirigentes o la relegación masiva de manifestantes fueron realizadas en absoluta impunidad. Por ello es que la derogación del Art. N° 24 también sería bandera de lucha permanente de las organizaciones sociales y sindicales.

## El difícil camino de la unidad sindical

Por su parte, los dirigentes sindicales estaban atomizados. Acostumbrados a la interlocución, negociación y a la elaboración de petitorios gremiales, no contaban con una plataforma común de reivindicaciones ni menos con una postura unitaria ante el régimen. En los lugares de trabajo quedaban pocos dirigentes sindicales con experiencia que no hubiesen sido despedidos, perseguidos o asesinados. Entre las primeras iniciativas estuvo la impulsada a fines de 1975 por la Iglesia Católica a través de la Fundación Cardijn para capacitar a quienes no contaban con experiencia; también fue un lugar de reunión e intercambio. Paralelamente se organizó el llamado “Grupo de los Diez”, que reunía a dirigentes sindicales cercanos a la Democracia Cristiana, que hasta el momento apoyaba al régimen militar. Su constitución coincidió con el nombramiento del general de la Fuerza Aérea Nicanor Díaz Estrada como ministro del Trabajo. Según opinaba Manuel Bustos:

Nicanor Díaz creía verdaderamente que tenía que normalizarse la situación sindical... empezamos a trabajar con él en la reforma previsional, en el estatuto social de la empresa y en el código del trabajo. Juan Manuel Sepúlveda, Hernán Mery y yo entramos al “Grupo de los Diez” como representantes de todo ese sector que funcionaba en la Fundación Cardijn y que eran organizaciones de base<sup>21</sup>.

Nicanor Díaz hizo entrega oficial de las propuestas y los documentos elaborados al gobierno, al que al parecer no le vinieron en gracia; al poco tiempo fue relevado del cargo por Sergio Fernández, quien en marzo de 1976 asumió como nuevo ministro del Trabajo: “Con él se archivaron todos los proyectos”, recalca Bustos. Fue evidente para los escépticos dentro de la Democracia Cristiana que la dictadura militar no estaba dispuesta a entregar espacio a las representaciones de los trabajadores dentro del nuevo gobierno. Ya no se trataba de una cuestión de tiempo. Continuaba el dirigente:

El “Grupo de los Diez” empezó a adoptar una posición mucho más fuerte de oposición, y los representantes de la Cardijn planteamos que había que formar una organización más amplia, porque originalmente se había establecido que no hubiera dirigentes de corte marxista. De alguna manera, ese criterio nos había servido para todo el trabajo con Nicanor Díaz... nosotros aceptamos esa condición pensando que, una vez aprobada la nueva legislación, habría elecciones sindicales y se produciría un juego democrático sin restricciones<sup>22</sup>.

Aunque la realidad se mostró diferente, dentro del G-10 existían figuras que no estaban dispuestas a aunar la causa con tendencias marxistas. Entre los llamados “viejos cracks” se encontraban Eduardo Ríos, Hernol Flores y Federico Mujica, fuertes opositores a la Unidad Popular. La situación conflictiva hizo crisis en 1978, con el respaldo público que Manuel Bustos, Juan Manuel Sepúlveda y Hernán Mery dieron a la toma y huelga de hambre que realizaron los Familiares de Detenidos Desaparecidos en la sede de la Cepal. Al calor de la ruptura, decidieron hacer pública una instancia gremial que bajo la presidencia de Manuel Bustos venía operando desde 1975 en forma bastante discreta: la Coordinadora Nacional Sindical (CNS). Desde entonces la Coordinadora fue la principal organización de trabajadores de clara, abierta y pública oposición al régimen durante la dictadura militar. En ella se coordinaron distintas federaciones y confederaciones de militantes demócratacristianos del sector de izquierda junto con comunistas, socialistas, radicales, miembros del MAPU Obrero Campesino (MOC) y de la Izquierda Cristiana. Dentro de esta pluralidad política, la CNS reunió a representantes de trabajadores del cobre, textiles, metalúrgicos, cuero y calzado, gráficos, panaderos, de la construcción y organizaciones campesinas, entre otros. En postura frontal contra el régimen se definieron “como la respuesta de los trabajadores ante los permanentes atropellos de la dictadura, que nos ha despojado de nuestros derechos y de nuestras conquistas con la fuerza de las armas”<sup>23</sup>. Continuaba Bustos: “Llamamos a una conferencia de prensa y dimos a conocer nuestra orientación, señalando que no creíamos en la dictadura y que íbamos a luchar tanto en el campo sindical como en el campo político para restablecer la libertad del país”<sup>24</sup>.

Por su parte, el G-10 siguió activo hasta abril de 1981, fecha en que se transformó en la Unión Democrática de Trabajadores (UDT), vinculada a la

Democracia Cristiana e independientes de centro. Fue presidida por Eduardo Ríos, presidente de la Federación de Empleados de Bahía. Se declaró tanto antigubernamental como antimarxista, y agrupó principalmente a los empleados públicos (CEPCh), la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y Portuarios<sup>25</sup>.

En 1978, la CNS envió al gobierno un documento firmado por 700 dirigentes que exigían aumento de salarios, elecciones sindicales y negociación colectiva. Según señaló su presidente:

La respuesta del gobierno fue relegar a una serie de dirigentes y quitarles la personería jurídica a siete confederaciones y federaciones. Se nos acusó de promover la subversión marxista, de alterar el orden y de crear expectativas más allá de lo que el gobierno podía dar a los trabajadores. A las siete organizaciones afectadas les confiscaron los bienes y quitaron sus sedes... a los 15 días se anunció que habría elecciones sindicales dentro de 48 horas y se prohibió que postularan los trabajadores que en ese instante ocupaban los cargos dirigentes... dos o tres semanas después, se anunció que el ministro José Piñera estaba preparando el Plan Laboral<sup>26</sup>.

A pesar de la fuerte campaña mediática que acompañó el anuncio de un Plan Laboral que prometía la reivindicación y protección del trabajador, las organizaciones de trabajadores, incluso las que hasta el momento habían coincidido en algunos puntos con la política gubernamental, se pusieron en alerta. Fue anunciada la conformación del Comando de Defensa de los Derechos Sindicales, que reunió al G-10, a la CNS, al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y a la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCh). Según el plan de acción que diseñaron, se propusieron “ser un nuevo paso en la construcción de la unidad de los trabajadores (...) este paso unitario se produce en los instantes en que se impone un conjunto de normas cuyo propósito es integrar en forma estable a los trabajadores al modelo de libre mercado”<sup>27</sup>.

No tenemos referencias sobre cómo se tradujo en la práctica el Comando, pero sabemos que la CNS siguió discutiendo y elaborando documentos para explicar a las bases y a la opinión pública –en la medida de lo posible ante el cerco



informativo— los alcances de la nueva legislación y aspirando a la unidad de los trabajadores. Sobre ese momento relata Bustos: “Vimos claramente que era muy funcional al esquema económico y que dejaba al trabajador sin ninguna posibilidad de reivindicar sus derechos. Pero la gente no se incorporó a protestar por esta nueva legislación”<sup>28</sup>. No, hasta que llegó la hora de la negociación colectiva y los trabajadores comprendieron que sus reclamos topaban con una pared.

En noviembre de 1980 la CNS realizó un congreso en la localidad de Punta de Tralca, en el que participaron alrededor de 600 dirigentes, representantes de 267 organizaciones. Fue el primer consultivo sindical desde que se instauró la dictadura y allí se acordó presentar ante el gobierno un pliego nacional. Dicho pliego les costó varios meses de cárcel a sus dirigentes. Insistieron. El junio de 1981 volvieron a presentar el pliego firmado por más de dos mil dirigentes. La respuesta fue la misma: nuevamente la cárcel.

Mientras el resto del comité ejecutivo quedó en libertad bajo fianza a los diez días de su detención, Manuel Bustos y Alamiro Guzmán fueron encarcelados por seis meses, acusados de asumir “la representación de sectores de trabajadores sin tener personería para ello, de acuerdo a la legislación laboral o al derecho común según corresponda”<sup>29</sup>. Ello provocó la solidaridad nacional e internacional y el movimiento de sectores políticos y de la Iglesia Católica, movilización que se paró en seco con un golpe de fuerza del gobierno y expulsión del país de cuatro dirigentes políticos de larga trayectoria. Parecía lejano el momento en que el movimiento sindical pudiese impulsar una movilización de carácter nacional. Se argumentaba que la escurridiza unidad —principalmente entre la CNS y la UDT— era el gran obstáculo y hacia allá se estaban dirigiendo importantes esfuerzos. El régimen lo sabía. El 25 de febrero de 1982, el connotado dirigente sindical, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y fundador de la UDT, Tucapel Jiménez, fue salvajemente asesinado cuando se dirigía a una reunión que sostendría con Manuel Bustos.

## Los programas transitorios de empleo: el PEM y el POJH

El boom económico no duró mucho. La crisis financiera internacional de los años 80 impactó severamente en la abierta y desregulada economía chilena sostenida gracias a préstamos externos y puso en evidencia la sobre expectativa basada en una moneda sobrevaluada y en una explosión del consumo sostenido por endeudamiento. Préstamos son préstamos y había que pagarlos. No obstante, a fines de 1981 la cartera vencida de los bancos representaba la cuarta parte de su capital. El sistema estaba en jaque y solo en 1982 más de 800 empresas se fueron a la quiebra.

Comenzó una fuerte depresión. Muy a su pesar, los Chicago Boys aceptaron realizar una devaluación junto con otras medidas de rescate, como establecer un dólar preferencial para deudores. Las desconfianzas y el cambio en la percepción triunfalista fueron evidentes. El Estado subsidiario debió hacerse cargo de las deudas empresariales invirtiendo cifras considerables. Entre 1981 y 1983 intervino o liquidó 20 bancos o financieras, cerca del 70% de los fondos de pensiones que dependían de los bancos pasaron al Estado, nuevo propietario del 80% del sistema financiero privado y controlador indirecto de las principales firmas que le eran acreedoras. La intervención del gobierno creó lo que Patricio Meller llama el “área rara” de la economía, “un sistema no definido de propiedad en el cual no estaba claro a quién pertenecían los activos del complejo y artificioso esquema interconectado de empresas productivas y financieras”<sup>30</sup>.

La rareza se solucionó entre 1985 y 1988 con la segunda oleada de privatizaciones. Las autoridades privatizaron prácticamente todas las firmas cuyo control indirecto había caído en manos del Estado y se deshizo de numerosos recursos que le habían pertenecido tradicionalmente, como el hierro y el acero, el carbón, las refinerías de azúcar, el salitre, y de propiedades como las fábricas de explosivos, los servicios (teléfonos y la generación de energía eléctrica) y las farmacéuticas.

Si la crisis afectó a la sociedad en su conjunto, para los más pobres la situación fue desesperada. Encontramos aquí otro de los hilos que nos ayudan a comprender el clima en que se desarrollaron las protestas y reconstruir las

consecuencias –para algunos colaterales y pasajeras– que cientos de miles experimentaron como una verdadera tragedia en sus vidas. Desde los años 30 que Chile no vivía una recesión tan aguda. La baja en los salarios fue acompañada por el aumento del precio de los alimentos. Los ingresos –de quienes los tenían– alcanzaban solo para las necesidades básicas de subsistencia. Entre marzo de 1982 y marzo de 1983, el pan –alimento esencial para la familia chilena– subió en un 47,2% y el pasaje de microbús en un 59,7%<sup>31</sup>. Pero lo peor de la crisis económica fue la cesantía, que se acrecentó con las quiebras de empresas. Ante ello, las organizaciones de trabajadores denunciaban un aumento de la explotación: “Los trabajadores viven una realidad no solo de angustia, sino de mayor intensidad del trabajo, aceptada con resignación ante el temor de perder el empleo”<sup>32</sup>.

Francisco, el Hermano Leiva, debió experimentar ese proceso como obrero y como dirigente sindical. Con la promulgación del Plan Laboral, cuando hubo derecho a elección, a pesar de no estar autorizadas las campañas ni las listas, Leiva sacó la primera mayoría. Aunque fue muy poco lo que pudo hacer por mejorar las condiciones de sus compañeros, no faltaba mucho tiempo para que se avecinara lo más dramático, algo que los trabajadores ya podían intuir cuando los patrones sin explicación elevaron el nivel de producción. La fábrica textil Paños Tomé fue declarada en quiebra en marzo de 1982 y dejó cesantes, sin previo aviso ni indemnización, a 750 personas.

Cuando quebró la empresa llevábamos tres meses impagos. Noventa días que la empresa no nos daba un peso, porque, según ellos, no tenían ventas y no nos podían pagar. Cuando nos mandaron para afuera (despidieron), la gente no tenía plata, estaba sin pagar la luz, sin pagar el agua, sin tener dónde pedir, porque en los almacenes ya nadie les quería fiar [...]. Los trabajadores nunca habían perdido sus derechos como ahora [...]. De la noche a la mañana se pierde el trabajo y se pierden las regalías, se pierde todo. ¡Es un cambio muy grande!<sup>33</sup>.

La situación registrada dentro de los llamados programas transitorios de empleo, fórmula gubernamental para absorber los altos índices de cesantía durante las dos crisis económicas que experimentó el régimen, es el mejor ejemplo de la visión del trabajo según parámetros neoliberales. De acuerdo con datos

otorgados por la Coordinadora Nacional Sindical que respaldaban la denuncia que presentó en 1984 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajo el Programa de Empleo Mínimo (PEM), creado en agosto de 1974, y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), en octubre de 1982, decenas de miles de trabajadores vivieron o sobrevivieron con remuneraciones muy inferiores a los ingresos mínimos legales, y carentes absolutamente de estabilidad<sup>34</sup>.

Como ambos programas –que en el caso del PEM se extendió más de una década– tenían carácter de “transitoriedad” y eran dependientes de las municipalidades, estos trabajadores no eran considerados funcionarios del Estado, no tenían derecho a indemnización, asignación familiar, colación, ni menos a sindicalizarse. A ellos “nadie les aseguraba nada”. Según los estatutos, el trabajo no debía exceder las 15 horas semanales, ya que el sueldo mensual sería un tercio del salario mínimo; sin embargo, desde el principio se les exigió una jornada completa de trabajo y el monto del subsidio fue bajando en términos reales, hasta llegar a ser menos de un tercio del mínimo legal.

Las actividades a las que se les consagraba eran variadas. Los trabajadores y trabajadoras del PEM se ocupaban de la erradicación de campamentos, cuidado y limpieza de calles, caminos, puentes y vías de comunicación, limpieza de sedes comunitarias, hogares de ancianos, centros nutricionales, postas de salud y centros abiertos; trabajo en talleres artesanales; tareas auxiliares de atención parvularia en jardines infantiles; higiene y saneamiento ambiental en poblaciones, mantenimiento de áreas verdes y hermoceamiento de plazas y paseos públicos. Las actividades del POJH eran algo más productivas: cubrían el arreglo de caminos, veredas y soleras, limpieza, mantenimiento y mejoramiento de calles, pasajes, alcantarillados, agua potable, cauces y canales, conservación de recintos públicos, sedes comunitarias, recintos deportivos, recreativos y áreas verdes. Pero la principal diferencia entre ambos programas era que los adscritos al POJH gozaban de una mayor remuneración mensual (de cuatro mil pesos). Además se estableció la contratación de un capataz por cada 25 trabajadores, que recibía el doble; por cada seis capataces se contrataba un supervisor técnico con un sueldo de \$15 mil pesos, y por cada tres de ellos, a un profesional, llamado jefe de proyecto, con un sueldo superior de \$30 mil pesos<sup>35</sup>.

El ritmo de incremento desde la creación de estos programas fue vertiginoso. En octubre de 1983, el 14% de la fuerza de trabajo estaba adscrita a alguno de ellos. En 1982, se registraron 225.290 trabajadores empleados en el PEM, cifra que

llegó a 341.578 en 1983. En el POJH, a fines de 1982 había 102.772, número que un año más tarde alcanzaría a 221.573 trabajadores<sup>36</sup>. Los adscritos al POJH en la Región Metropolitana representaban el 64% del total, por tanto tenían un importante impacto en la capital y, dentro de esta, en las comunas con más bajos ingresos.

La presencia masiva de pobladores trabajadores del PEM y del POJH en comunas como La Granja aumentó con las tomas de terrenos y la política de erradicación de campamentos propiciada por la dictadura<sup>37</sup>. Demostrando los niveles organizativos y movilizadores, pero también las necesidades que enfrentaban las familias populares, el 22 de septiembre de 1983 se realizó en La Granja la primera toma masiva de terrenos en dictadura, con la que se constituyeron los campamentos Juan Francisco Fresno, que albergó a 3.265 familias (12.603 personas), y Raúl Silva Henríquez, con 4.720 familias (18.435 personas). En ambos territorios los cesantes y adscritos al PEM y al POJH sumaban mayoría. Así lo demuestra una encuesta realizada por el Colegio de Asistentes Sociales durante la época y que graficamos en la siguiente tabla:

### **Situación ocupacional de jefes de hogar. Campamentos Fresno y Silva Henríquez**

	Campamento Fresno		Campamento Silva Henríquez	
	Nº	%	Nº	%
Cesantes	599	18,3	730	15,5
PEM	62	1,9	191	4,1
POJH	949	29,1	1.387	29,4
Trabajo inestable	775	23,7	948	20,1
Trabajo estable	834	25,5	1.384	29,3
No consignados	46	1,5	90	1,6
Total	3.265	100	4.730	100

Fuente: Encuesta realizada por el Colegio de Asistentes Sociales, A. G. Citado por Eduardo Morales, p. 53.

En tanto dependientes operativos de las municipalidades, la dirección general de estos programas estaba en manos de la División de Desarrollo Comunitario y Social del Ministerio del Interior. Como ha señalado el sociólogo Eduardo Morales, este es un hecho que reviste una doble importancia:

Por una parte, si bien las municipalidades gozan de autonomía para la implementación del Programa, el nivel central se reservará la cuota de decisión más importante, esto es, la capacidad de definir los parámetros fundamentales (volumen de recursos, fijación del monto por pagar, calificación de los usuarios potenciales, etc.). Por otra parte, al depender del Ministerio del Interior, queda directamente bajo la tuición del poder político, lo que permitirá ejercer un estricto control, tanto sobre los usuarios como sobre el aparato burocrático municipal<sup>38</sup>.

Vulnerabilidad, explotación, abaratamiento de la mano de obra, vigilancia individual y colectiva significaban varias décadas de retroceso social para los más pobres. Además, había otros factores no menores que incidían en la conformación de las subjetividades bajo los parámetros del trabajo neoliberal. Por un lado, a nivel orgánico, la amplia variedad de actividades que en general requerían un bajo nivel de calificación impedía, como bien advierte Eduardo Morales, “configurar una dirección de sentido con capacidad de integración y definición del ámbito de conflictos posible”<sup>39</sup>, terreno en que el movimiento sindical chileno contaba con una amplia trayectoria. Por otro, se les arrebatava la posibilidad de tener un trabajo digno, cuestión que repercutía emocionalmente al interior de las familias populares. Esta carencia de sentido la manifestaban los propios trabajadores al ser consultados sobre sus condiciones laborales y era ratificada por la propia prensa oficialista.

Hay un sentimiento de descontento entre sus adscritos que supera el pesar que implica vivir con solo cuatro mil pesos al mes. Sicológicamente dicen sentirse disminuidos y no tienen claro la utilidad de la labor que diariamente deben desarrollar (...). “Es totalmente inútil esto. ¿Pa’ qué emparejamos este pedazo? No sé”, se responde a sí mismo un albañil que pica en un sitio eriazo en San Pablo. Agrega: “Lo que sirve es hacer veredas y calles. Lo único verdaderamente útil que hemos hecho es reparar el alcantarillado de una escuela”. “No se sabe lo que se está haciendo; parece una multicancha. Aquí se pica no más”, agrega un ayudante de carpintería que ingresó hace siete meses al POJH<sup>40</sup>.

Aún falta desarrollar investigaciones que analicen en profundidad la constitución del PEM y del POJH durante toda su trayectoria<sup>41</sup>, pero como dato ilustrativo tenemos notas de la prensa, declaraciones e investigaciones parciales realizadas al calor de los hechos. Por ejemplo, el presidente de la Confederación de la Construcción denunciaba en septiembre de 1983 que el 62% de los trabajadores del sector estaban cesantes y que el 70% del PEM y del POJH eran obreros de la construcción<sup>42</sup>. Aunque tampoco contamos con datos precisos sobre las categorías ocupacionales de los adscritos al POJH, presumimos que efectivamente muchos de estos obreros difícilmente podían encontrar otra opción. Según una gráfica citada por Eduardo Morales, hacia 1982 la lista dentro del PEM era encabezada por quienes tenían su primera experiencia laboral dentro de estos programas (47,3%), en su mayoría mujeres impulsadas a trabajar y aumentar el escaso ingreso familiar y jóvenes, seguidos por obreros (32,8%)<sup>43</sup>.

Como señaló Jaime Ruiz-Tagle, estos programas significaban la “última tabla de salvación” que les aseguraba una supervivencia mínima<sup>44</sup>. Entre miles, este fue el caso de muchos ex obreros de Paños Tomé, habitantes sin más alternativa de un pequeño pueblo que junto con ellos cambió de fisonomía. Nos explica el Hermano Leiva:

Después de la quiebra de la empresa han quebrado varios establecimientos comerciales... Ya no es un pueblo alegre, es un pueblo de preocupación y de falencia económica en la mayoría de las familias. ¡Ha cambiado totalmente! La gente que ha llegado al PEM es gente que toda una vida estuvo trabajando en la industria y que ahora tiene que conformarse con andar haciendo canales, andar



limpiando la playa o andar barriendo la calle. ¡Es un trabajo muy distinto! Y eso, psicológicamente, va terminando a la persona<sup>45</sup>.

Nos interesa insistir en ese punto. Las humillantes condiciones laborales atentaban contra el orgullo obrero forjado en la importante tradición sindical chilena. Estos hombres, antaño aguerridos y organizados, trabajadores desde edad temprana y sostenedores de sus hogares, eran calificados por los testimonios de familiares y esposas como los “derrumbados”. “Andan como opacados” decían ellas. Los jóvenes que ingresaban al PEM y al POJH también crecieron bajo esa cultura política. Tenían entre ocho y nueve años cuando llegaron los militares, edad suficiente para observar el mundo y escuchar historias de otras vidas. Recuerde quien lea estas líneas ese sentimiento cuando en el desarrollo de las Jornadas Nacionales de Protesta, los datos de la Vicaría de la Solidaridad nos señalen a los trabajadores del PEM y del POJH, junto a los estudiantes, encabezando la lista de reprimidos como castigo a su protagonismo en las barricadas y manifestaciones contra la dictadura.

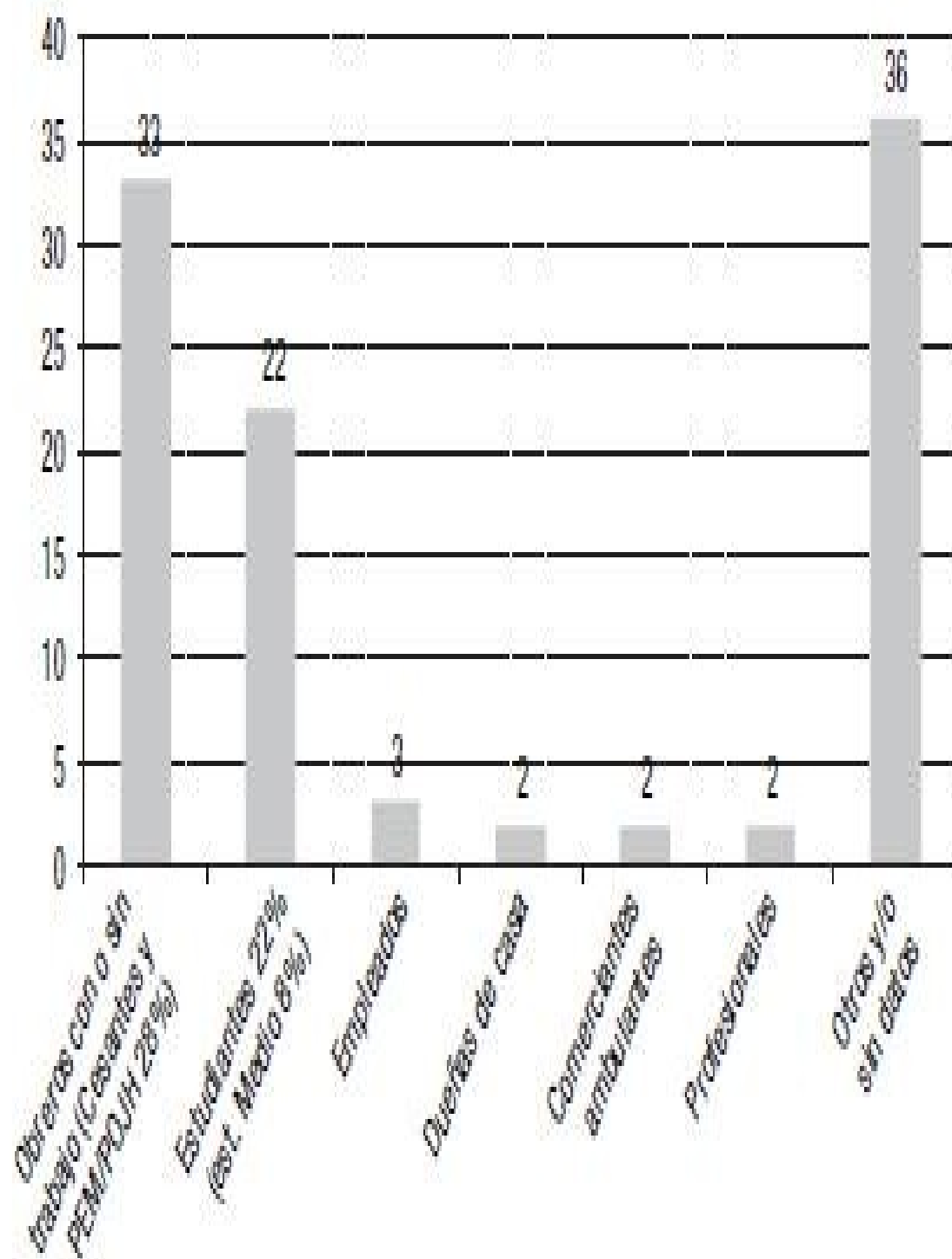
## Indignación y pobreza: la protesta del POJH

El descontento entre los trabajadores del POJH se evidenció antes de la Primera Jornada Nacional de Protesta. Podría haberse leído un prelude de lo que vendría, pero pocos tuvieron tal agudeza. No era casualidad que la manifestación del descontento se desarrollase en las comunas que registraban el mayor número de trabajadores y tampoco lo era que fueran justamente estos los territorios donde se expresaron masivamente las jornadas. En abril de 1983, los trabajadores del POJH de las comunas de Pudahuel, San Miguel y La Granja se negaron a trabajar durante algunas horas en protesta por el constante retraso de sus remuneraciones<sup>46</sup>. Entre las represalias, 70 trabajadores fueron reubicados en Quinta Normal según denunciaron los afectados. No contamos con mayor información sobre sus consecuencias, pero por aquellos días, motivados por demandas que explicaremos en el desarrollo de esta investigación, se reunían en Punta de Tralca los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre que llamarían a realizar un paro nacional, que, apoyado por la Coordinadora Nacional Sindical, terminaría en la Primera Jornada Nacional de Protesta del 11 de mayo de 1983.

Desde entonces Chile viviría importantes transformaciones sociopolíticas, y tanto la presencia pública de la oposición como la dinámica de la represión sufrirían un salto cualitativo: se proletariza, dice un informe de la Vicaría de la Solidaridad que evalúa los sucesos políticos transcurridos durante ese año. Según el informe, el porcentaje más alto de reprimidos correspondía a los obreros con trabajo o sin él, gran parte de ellos pertenecientes al PEM o al POJH, seguidos por estudiantes de enseñanza media y universitaria:

En ambos sectores, por lo demás, la represión, por violenta que sea, no produce necesariamente el efecto de amedrentamiento generalizado que antes podía esperarse. Por el contrario, en no pocas ocasiones desata el efecto inverso [...]. El miedo o el temor, que en los años previos acompañaba inseparablemente a casi todos los fenómenos represivos, ha ido cediendo paso a una actitud distinta<sup>47</sup>.

**Gráfico 1: Detenciones según ocupación o actividad (%)\***



Fuente: Elaboración propia con datos de Vicaría de la Solidaridad.

\* Ibid. p. 5. Entre los obreros con trabajo o sin él: Cesantes totales 14%; PEM-POJH 14%. Los estudiantes se subdividen en 8% de enseñanza media; 6% sin clasif.; 5% de universitarios; 2% institutos profesionales y 1% de enseñanza básica.

Si bien en 1984 la composición de los reprimidos y el protagonismo callejero se invirtió, principalmente por la reorganización estudiantil, continuó la participación y confrontación territorial en los sectores marginales, siendo una característica fundamental de la protesta urbana chilena durante los años 80. A lo largo de este texto describiremos las formas de represión que afectaban a los sectores periféricos, pero podemos adelantar que en los casos concretos del PEM y del POJH se les hostigaba con el retraso en el pago de su sueldo, preferentemente los días de concentraciones públicas, para que no pudiesen asistir; con la constante amenaza de ser despedidos y, por supuesto, con la represión geográfica que afectaba a sus territorios.

Esto quedó en evidencia en las conmemoraciones del 11 de septiembre de 1983 organizadas por el régimen. En la populosa comuna de Pudahuel, el Jefe de Operaciones de la Municipalidad, Carlos Santelices, “disidente del régimen, pero muy servil y temeroso de su trabajo” –según declaró uno de sus empleados–, había recibido del alcalde Eduardo Bajut una importante misión: al menos un cincuenta por ciento del personal del POJH debía concurrir a la concentración de apoyo al gobierno a realizarse el día 11 de septiembre, a las 9 de la mañana. El obediente Santelices citó de inmediato a los jefes de proyectos para exponerles la situación, incluso podrían ofrecer hasta dos días libres a sus subordinados con tal de que asistieran, más un bono de trescientos pesos, pero era una obligación conseguir que al menos siete mil trabajadores llegasen hasta el edificio Diego Portales para aplaudir a Pinochet.

Tal como estaba estipulado, los siete mil obreros llegaron hasta el Complejo Deportivo Santa Corina. A los obreros se les agrupó según el proyecto en que trabajaban, se les tomó lista y poco a poco comenzaron a salir hacia el centro de Santiago en buses contratados por la municipalidad. De pronto, entre los vehículos que terminaban de ser abordados, comenzó a oírse un silbido, una

consigna de protesta conocida que fue subiendo de tono: “Y va a caer, y va a caer...”. Acto seguido, desde los altoparlantes de una furgoneta se dio el aviso de que quienes prefiriesen no ir a la manifestación podían no hacerlo y los días de permiso correrían de todas maneras. Según René Soto, Jefe de Aseo de la Municipalidad y testigo de los hechos, “los que estaban aún en la cancha comienzan felices a abandonar el recinto y a incitar a los que ya estaban en los buses a que se bajaran. La mayoría comienza a bajarse, pero otros quedan arriba”<sup>48</sup>. Algunos aplaudían para animarlos, otros seguían entonando el “Y va a caer”, otros comenzaron a apedrear los buses.

Se armó la trifulca y solo en cuestión de minutos entre los miles de trabajadores del POJH apareció un jeep color rojo que todos identificaron. Era el jeep de la municipalidad con personal de seguridad armado. Uno de los guardias se bajó y comenzó a disparar a los obreros, quienes corrieron a refugiarse hacia distintos puntos del sector; los funcionarios venían apoyados por un bus con carabineros que complementaban la acción lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones fuera de la cancha y dentro de ella. Algunos de los obreros se ubicaron tras los edificios de General Bonilla y comenzaron a lanzar piedras. Entonces hacia allá se focalizaron los disparos, hasta que alguien gritó: “¡Le dieron a uno!”. Era Pedro Marín Novoa, de 24 años. Hubo una treintena de heridos con balas y perdigones, entre ellos dos jóvenes de 20 años que en medio de la lluvia de proyectiles perdieron un ojo. Los trabajadores que no alcanzaron a retirarse del lugar se refugiaron en una parroquia cercana, que, según informaba la Vicaría de la Solidaridad, atendió a más de una treintena de heridos. En tanto, uno de los autobuses que ya habían partido hacia el centro de la ciudad, cuyos ocupantes ni siquiera llegaron a enterarse de lo ocurrido en Santa Corina, fue interceptado por los carabineros en calle Lourdes con San Pablo. Los 72 hombres fueron llevados a una comisaría cercana, donde sin mediar explicación fueron golpeados. Seis horas después fueron liberados. La acusación fue: “provocar desórdenes en la vía pública”<sup>49</sup>.

También le fue muy mal a uno de los jefes de proyecto, quien estaba dentro de la cancha. Para impedir que continuaran los disparos, se acercó al jeep y les solicitó que regresaran a la municipalidad. En la confusión, los trabajadores interpretaron que ese jefe tenía responsabilidad en lo ocurrido y ante las miradas amenazantes, debió “correr por su vida”; cruzó la carretera que conduce a Valparaíso e intentó parar un bus, pero las piedras y la furiosa multitud que lo perseguía amedrentaron al chofer, que siguió su recorrido. Finalmente, el jefe fue alcanzado entre las chacras que rodeaban la carretera. Debió ser internado en la

asistencia pública en estado grave<sup>50</sup>.

Casi dos meses después, antes y después del primer acto público masivo organizado por la oposición en el parque O'Higgins, los allanamientos, redadas y cercos se recrudecieron en las poblaciones. Desde el 9 de noviembre al 16 de diciembre el gobierno anunció un operativo antidelictual o plan de limpieza: "Se iniciarán intensas acciones preventivas en los sectores marginales de la capital. Patrullas especiales recorrerán las poblaciones más conflictivas"<sup>51</sup>. Lo conflictivo lo definía la dinámica y participación en las protestas. Todas las redadas funcionaron de manera sorpresiva, sin orden escrita, sin explicación previa. Terminaron con más de novecientos pobladores detenidos. Comenzaron en Herminda de la Victoria y Violeta Parra con jóvenes arrastrados desde clubes deportivos, de las casas y calles. Luego les tocó el turno a la población Santa Julia y a la Rebeca Matte. Durante toda la noche se escucharon vidrios rotos, puertas derribadas, gritos y el llanto de niños con síntomas de asfixia debido a los gases tóxicos en las poblaciones Óscar Bonilla, San Gerónimo, Villa Venezuela, Teniente Merino, Circunvalación y Sargento Menadier de Puente Alto. En la población La Pincoya, los pobladores intentaron oponer resistencia con palos y piedras, hubo heridos, baleados y jóvenes con corte de cuero cabelludo que no pudieron evitar que sus vecinos fuesen detenidos. Tampoco lo consiguieron en Conchalí y Renca<sup>52</sup>.

¿Cuántos de esos detenidos, allanados o humillados de Pudahuel, San Miguel o La Granja protagonizaron las movilizaciones del PEM y del POJH de fines de noviembre de 1983? Solo podemos inferir que muchos de esos rostros se repitieron. Primero, sufrieron las botas de los militares, luego se organizaron para plantear sus demandas colectivamente. Apoyados por sindicalistas con experiencia, como los de la Confederación de la Construcción y la Coordinadora Nacional Sindical, habían comenzado a constituir sindicatos de trabajadores eventuales para organizar sus demandas colectivamente. Una de ellas era central: el derecho a un trabajo digno. Lo novedoso fue la coordinación de una acción mancomunada desde sus lugares de trabajo, como en la comuna de Pudahuel, mucho mayor a la experimentada en el mes de abril; además, por primera vez los trabajadores de estos programas de empleo presentaban un pliego petitorio:

Sueldo mínimo de 12 mil pesos y pago puntual cada quince días.

Que el PEM sea absorbido por el POJH.

Aguinaldo de dos mil pesos en Navidad y Fiestas Patrias.

Condonación de deudas de agua, luz y dividendos.

Mejor trato hacia las mujeres y trabajadores en general.

Un trabajo productivo que sirva para impulsar el desarrollo de las comunas y del país.

Educación para los trabajadores del PEM y del POJH.

Derecho a previsión y salud.

En una primera reacción, el alcalde de Pudahuel recibió a una comitiva para dialogar y anunció, en un anfiteatro ante más de cinco mil personas, mejoras para los trabajadores. No obstante, al extenderse el movimiento hacia San Miguel, La Granja, Quinta Normal, la Florida, Conchalí, La Cisterna, las autoridades se pusieron en alerta. Carabineros dispersó las filas de trabajadores que marchaban hacia sus municipios para buscar respuesta y el reconocimiento de sus directivas ante los respectivos alcaldes. Miles de trabajadores respondieron con el ritual de defensa y ataque que venían ensayando desde mayo. Encendieron barricadas, pararon el tráfico, tiraron piedras. Durante el 5 de diciembre el enfrentamiento duró largas horas en distintas comunas de Santiago.



En la Granja, una bomba lacrimógena hirió de muerte a Eduardo Astudillo González, de 23 años. La indignación aumentaba y los trabajadores aseguraron no volver al trabajo hasta que hubiese respuesta.

Al día siguiente, el intendente Guillard acusó “un plan de agitación absolutamente provocado y coordinado por el comunismo” y anunció el cierre definitivo del PEM metropolitano y la eliminación paulatina del POJH, sujeto a “operación de limpieza”. Debido a la vulnerabilidad en que se encontraban los más postergados y pobres de los trabajadores, se les enrostró con prepotencia, se les amenazó con terminar con su mísera pero única fuente de trabajo. Aquiles Fabres, dirigente del POJH y PEM-Cesantes de La Cisterna, respondió en nombre propio y de sus compañeros: “Tengo 23 años, el 73 era un niño y de política no sé nada. Lo único que sé es que estamos pasando hambre, estamos siendo marginados, ganamos sueldos miserables”<sup>53</sup>. De un día para otro, 63 mil trabajadores del PEM quedaron cesantes y 19 mil del POJH fueron despedidos por la suspensión de ciertas obras y recortes de personal. Durante el trimestre marzo-mayo 1984, el número de empleados del PEM-POJH se había reducido en el país a 293 mil 926 personas. Esto es, 206 mil 177 chilenos habían sido eliminados de los programas estatales de empleo mínimo y para jefes de hogar en menos de cuatro meses. Se trató “del despido más masivo y arbitrario de la historia chilena”<sup>54</sup>.

En apoyo a luchas del PEM y del POJH, de la disolución de la CNI y contra la entrada en vigencia de la ley 18.097 del Código de Minería, el Movimiento Democrático Popular llamó a realizar una “jornada de movilización y lucha” para el 13 de diciembre<sup>55</sup>. Desde la medianoche del día 12, en la comuna de Pudahuel se llevaron a cabo marchas y barricadas masivas que fueron replicadas con distintas intensidades en otros sectores. Como respuesta, los operativos de carabineros llenaron de gases tóxicos las modestas viviendas de la comuna y se extendieron hacia Lo Hermida y La Victoria. En Camino Agrícola y Los Tres Antonios, Eduardo Antonio Díaz, Toño, de 19 años, cayó muerto, y su amigo Genaro Bahamondes fue herido.

Seguimos encontrando razones para destacar la presencia de los trabajadores del PEM y del POJH como uno de los sectores más confrontacionales durante las jornadas de protesta. Una y otra vez sus motivaciones expresan humillación y un profundo agravio. Esto lo confirma el testimonio de un dirigente poblacional de La Legua:

Llevo dos años cesante; ahora trabajo en el POJH. No es que yo quiera salir a tocar las cacerolas, pero tengo hambre, yo y mi familia y todos nosotros. Los jóvenes están en las esquinas y qué les podemos decir si vivimos hacinados y en las esquinas están los dormitorios de nuestras casas. No tienen en qué trabajar. Lo único que hay son deseos de que nos den trabajo; hay deseos de que nos den la posibilidad de que nos ganemos el pan honradamente. No queremos migajas, no queremos cosas gratis. Tenemos que decir que hay miedo; aquí se ha creado un estado de terror desde la primera protesta y sabemos que no es la única población. Sabemos que es la clase obrera, la más pobre, la que está en estas condiciones<sup>56</sup>.

■

<sup>1</sup> [Entrevista a Francisco Leiva Osoreo. Agosto de 1983. En: Politzer, Patricia, Miedo en Chile. Cesoc-Ediciones Chile y América, Santiago, 1985. pp. 92-93.](#)

<sup>2</sup> [En esos años Chile creció al 6,6% anual; el producto por habitante creció al 4,9% anual y en un 78% para todo el período. Rosales, Osvaldo. “La inserción internacional de Chile en la década de los 90”. En: Elizondo, Carlos y Luis Maira, Chile-México, dos transiciones frente a frente. Ceide/Grijalbo/ProChile, México, 2000. p. 256.](#)

<sup>3</sup> [Entrevista con Cecilia Montero. La Revolución empresarial chilena. Cieplan/Dolmen Ediciones, Santiago, 1997, p. 169.](#)

<sup>4</sup> [Declaración de Principios del gobierno militar. 11 de marzo 1974. En línea:   
http:   
//www.archivochile.com/Dictadura\\_militar/html/dic\\_militar\\_doc\\_junta.html.](#)

<sup>5</sup> [Collin, Simon y William F. Sater. Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press, España, 1998. p. 315; Además, ver: Alejandro Foxley. Experimentos neoliberales. FCE, México, 1988, y Ramos, Joseph, Política económica en países del Cono Sur de América Latina, 1974-1983. FCE, México, 1989.](#)

<sup>6</sup> [Gárate, Manuel. La revolución capitalista de Chile \(1973-2003\). Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.](#)

<sup>7</sup> Collier, Simon y William F. Sater, op. cit., p. 313.

<sup>8</sup> O'Donnell, Guillermo, Estado y Corporativismo, mimeo, Instituto Di Tella, Buenos Aires 1974, y El Estado Burocrático Autoritario. Editorial Belgrano, Buenos Aires, 1982. Para una discusión sobre la utilización del concepto de “profundización” en el contexto chileno ver: Tomás Moulian y Pilar Vergara, Estado, ideología y políticas económicas en Chile. 1973-1978. Colección de Estudios Cieplan, N° 3, Santiago, 1980.

<sup>9</sup> Politzer, Patricia, Miedo en Chile. Op. cit. pp. 195 y 201-202.

<sup>10</sup> Ibid. p. 93.

<sup>11</sup> Collin, Simon y William F. Sater. Op. cit., p. 315.

<sup>12</sup> Politzer, Patricia, Miedo en Chile. Op. cit., pp. 172-173.

<sup>13</sup> Meller, Patricio. Op. cit., p. 190.

<sup>14</sup> Barrera, Manuel y Teresa Selamé, Caracterización del Plan Laboral y sus consecuencias para el sindicalismo en Chile. Documento de Trabajo N° 8, Santiago, Arzobispado de Santiago/Vicaría de Pastoral Obrera, 198, pp. 7-11. Álvarez, Rolando. El plan laboral y la negociación colectiva: ¿Origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, N° 35/36, segundo semestre 2011 / primer semestre 2012; y ¿Represión o integración? La política sindical del Régimen Militar 1973-1980. Historia N° 43, vol. II, julio-diciembre 2002, Santiago; Zapata, Francisco. Clases sociales y acción obrera en Chile. El Colegio de México, México, 1986.

<sup>15</sup> El DL 3.643 entró en vigencia el 1 de mayo de 1981 y disolvió los antiguos Juzgados y Cortes del Trabajo. Por otra parte, en 1972 había 855.402 trabajadores sindicalizados. En 1983, la cifra rondaba los 320.900 (pérdida de un 62,5% de socios. A fines de 1983 solo un 6% de la fuerza de trabajo pertenecía a sindicatos de empresa. Ver: Barrera, Manuel y Teresa Selamé. Caracterización del Plan Laboral y sus consecuencias para el sindicalismo en Chile, Documento de Trabajo N° 8, Santiago, Arzobispado de Santiago/Vicaría de Pastoral Obrera, 1982.

<sup>16</sup> Plan Laboral. Exposición del señor ministro del Trabajo y Previsión Social,

don José Piñera Echenique, ante dirigentes laborales y empresariales. Martes 2 de enero de 1979 a las 17 horas en el Auditorium del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Archivo Personal don Luis Fuentealba.

<sup>17</sup> Miguel Kast. El Mercurio, 15 de agosto de 1981. Citado por: Barrera, Manuel y Teresa Selamé, op. cit. p. 15.

<sup>18</sup> “Más allá del 11. ¿Quién gana con el plebiscito?”. Solidaridad, N° 99, segunda quincena, agosto 1980. Santiago, p. 4.

<sup>19</sup> “Después del plebiscito: De cara al futuro”. Solidaridad, N° 101, segunda quincena de sept. 1980, p. 12.

<sup>20</sup> En mayo de 1984 fue dictada la ley N° 18.315, que autorizó a la Central Nacional de Informaciones (CNI) para recluir detenidos en sus “dependencias” o recintos secretos, las que fueron individualizadas posteriormente por decretos del Ministerio del Interior. En la práctica, continuaron imperando las condiciones que les precedieron como centros de torturas y apremios ilegítimos.

<sup>21</sup> Entrevista a Manuel Bustos. En: Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Op. cit., p. 285.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Mensaje del comité ejecutivo de la Coordinadora Nacional Sindical entregado por su presidente, compañero Manuel Bustos Huerta. VIII Asamblea. Junio 1987, p. 1. Archivo Personal don Luis Fuentealba.

<sup>24</sup> Ibid. p. 288. Ver: Campero, Guillermo y Eduardo Valenzuela. El movimiento sindical en el régimen militar chileno. 1973-1981. ILET, Santiago, 1984.

<sup>25</sup> Falabella, Gonzalo. “La diversidad sindical en el régimen militar”. Contribuciones N° 42, Flacso-Santiago Chile, 1986.

<sup>26</sup> Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Op. cit., pp. 288-289.

<sup>27</sup> “Plan de Acción. Comando de Defensa de los Derechos Sindicales, 1979”. Archivo personal don Luis Fuentealba.

<sup>28</sup> Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Op. cit., pp. 291-293.

<sup>29</sup> Barrera, Manuel y Teresa Selamé. Op. cit., p. 26.

<sup>30</sup> Meller, Patricio. Op. cit., p. 255.

<sup>31</sup> Análisis, N° 60, 19 de julio - 2 de agosto de 1983, Santiago. Por ejemplo, entre enero y octubre de 1983, la cebolla subió en un 59,9%; los huevos en un 36,3%; porotos, en un 35,8%. Por otra parte, el alza del pan, entre mayo de 1982 y septiembre de 1983, alcanzó un 62,5% y la leche aumentó en un 22,09% los primeros meses de 1983. Ver: “Anexo a la memoria”. “1981-1983, 2 años más de frustración sindical”. “2° Congreso Nacional Ordinario de CEPCH. Camping de Reñaca, 8 al 11 de diciembre de 1983”, diciembre, 1983, p. 11. Archivo personal don Luis Fuentealba.

<sup>32</sup> “Informe de Discusión Interna Coordinadora Nacional Sindical (CNS)”. Santiago, 1985, p. 13. Archivo personal don Luis Fuentealba.

<sup>33</sup> Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Op. cit., pp. 99-100.

<sup>34</sup> “Informe del Comité establecido para examinar la reclamación presentada por la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), en virtud del artículo 24 de la Constitución, alegando el no cumplimiento por Chile de los convenios internacionales del trabajo. Nos 1, 2, 29, 30 y 122. (Confidencial)”. Oficina Internacional del Trabajo. Consejo de administración, Ginebra, 12-16 de noviembre de 1984. Archivo personal dirigente sindical don Luis Fuentealba.

<sup>35</sup> Ruiz-Tagle, Jaime; Roberto Urmeneta. Los trabajadores del programa de empleo mínimo. PET-Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1984, p. 164.

<sup>36</sup> Cifras del INE presentadas por la Coordinadora Nacional Sindical ante la OIT en abril de 1984. Archivo personal dirigente sindical don Luis Fuentealba.

<sup>37</sup> Rojas, Sergio, “Políticas de erradicación y radicación de campamentos. 1982-1984. Discursos, logros y problemas”. Documento de Trabajo N° 215, Flacso.

<sup>38</sup> Morales, Eduardo. “Políticas de empleo y contexto político: El PEM y el POJH”. Documento de Trabajo Programa Flacso-Santiago de Chile, N° 225, Nov. 1984, p. 25.

<sup>39</sup> Ibid., p. 28.

<sup>40</sup> El Mercurio, 22 de mayo de 1983.

<sup>41</sup> Un aporte para este propósito puede ser el texto “Platita poca pero segura: Los refugiados laborales de la dictadura”. En: Valdivia, Verónica; Rolando Álvarez y Karen Donoso. La alcaldización de la política: Los municipios en la dictadura pinochetista. LOM, Santiago, 2012.

<sup>42</sup> La Tercera, 27 de septiembre de 1983.

<sup>43</sup> El 52% de los hombres y el 50,5% de las mujeres adscritos al PEM tenían entre 14 y 29 años.

<sup>44</sup> Ruiz-Tagle, Jaime. “Programas especiales de empleo y violencia política”. Mensaje N° 326 enero-febrero 1984.

<sup>45</sup> Entrevista a Francisco Leiva Osoreo. En: Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Op. cit., p. 103.

<sup>46</sup> La Segunda, 21 de abril de 1983. Ver: Morales, op. cit., p. 42.

<sup>47</sup> “Efectos en la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas”. Documento de la Vicaría de la Solidaridad. Diciembre 1983. Cabe destacar que, según el informe, entre los sectores más reprimidos se encuentran los comerciantes ambulantes; ex trabajadores asalariados o ex estudiantes que no pudieron continuar sus estudios ni ingresar al mundo del trabajo por otra vía.

<sup>48</sup> Relato proporcionado por un funcionario de la Municipalidad de Pudahuel y extraído de la querrela por delito de homicidio interpuesta por el abogado de la Solidaridad Héctor Salazar en representación de la Sra. Florinda Novoa, madre de Pedro Manuel Marín Novoa. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>49</sup> “POJH de Pudahuel, otras víctimas de la violencia”. Solidaridad, N° 163, primera quincena de septiembre 1983, p. 19. Sobre el caso del microbús interceptado ver: Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, Octubre 1983, p. 113.

<sup>50</sup> Durante el día 9 hubo reiterados y coordinados cortes de luz en un amplio sector de la Región Metropolitana provocados por sobrecargas de energía y explosiones en transformadores y tendidos de alta tensión. Las sobrecargas de

energía, conocidas como “planchatones”, funcionaban con una convocatoria previa que realizaba el Partido Comunista: la idea era que a una hora previamente estipulada, los protestantes enchufasen sus planchas y aparatos eléctricos al mismo tiempo; la acción era reforzada con explosiones al tendido eléctrico que permitían que el sistema colapsara. En la oscuridad brillaban las barricadas levantadas desde temprano en las principales vías de acceso a La Victoria, Villa Sur, Lo Valledor, José María Caro y San Gregorio. Lo mismo que en la San Ricardo, Juan Antonio Ríos, Villa España de Renca y en la San Rafael, donde los pobladores en repetidas ocasiones se acercaban cautelosamente hasta la Tenencia de Carabineros para lanzar piedras. En represalia, la población San Rafael durante la noche y horas de la madrugada fue fuertemente reprimida con allanamientos, bombardeos de lacrimógenas al interior de las casas y pobladores heridos a bala. En otro sector, el párroco de La Legua, Guido Peters, señalaba en entrevista telefónica que los accesos de su sector estaban cerrados por gigantescas barricadas, mientras al interior se realizaban marchas masivas, pacíficas y seguras gracias a que las fuerzas policiales no podían acercarse. Ver: Vecinos de la Población San Rafael, Comuna de La Granja. Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad. Oct. 1983. p. 108.

<sup>51</sup> Nueva distribución de fuerza policial. El Mercurio, 9 de nov., p. 83.

<sup>52</sup> En Conchalí la detención masiva comenzó por el incendio de una barraca y un almacén de abarrotes. Según declaró el religioso y testigo Gerardo Bellew, de la Iglesia Nuestro Señor del Olivo, la noche del 22 de noviembre bomberos y policías trabajaban junto con una cadena de pobladores que espontáneamente se congregaron y organizaron para apagar las llamas y desviar el tráfico. En algún momento, a uno de los policías se le disparó su metralleta por casualidad e hirió a otro carabinero, lo que generó de inmediato un violento ataque policial. 180 pobladores catalogados como sospechosos fueron detenidos y fuertemente golpeados, 26 de ellos fueron relegados a distintos puntos de la zona norte. La noche siguiente, 117 pobladores, casi todos menores de 18 años, fueron aprehendidos en la comuna de Renca. ¿Qué habían hecho? Simplemente estaban en el lugar equivocado, regresaban de sus trabajos, se detuvieron en una tienda o iban pasando. La operación limpieza se repitió en Conchalí a fines de noviembre, cuando 87 personas sindicadas como delincuentes fueron detenidas. Ver como contraste la versión de El Mercurio: “Ley de Seguridad para atacantes de los bomberos”. 24 nov. de 1983. Relegan a 26 participantes en actos violentistas. El Mercurio, 27 nov. de 1983. Situación de los derechos humanos en Chile. Informe Mensual N° 23. Noviembre 1983. Comisión Chilena de

Derechos Humanos. En línea:

<http://www.comisionchilenaderechoshumanos.cl/documentos/INFORME%20N.21983.pdf>.

<sup>53</sup> [Solidaridad. 1a quincena de diciembre, 1983, p. 6.](#)

<sup>54</sup> [Ruiz-Tagle, Jaime. “Programas especiales de empleo y violencia política”. Revista Mensaje N° 326, enero-febrero 1984, pp. 8-10 y “Miles de despedidos desaparecidos”. Análisis N° 86, 17 al 31 de julio de 1984, p. 18.](#)

<sup>55</sup> [MDP convoca a jornada de movilización. El Mercurio, 8 dic. de 1983.](#)

<sup>56</sup> [“Pobladores: venciendo al miedo”. Solidaridad, segunda quincena de agosto 1983, p. 16.](#)

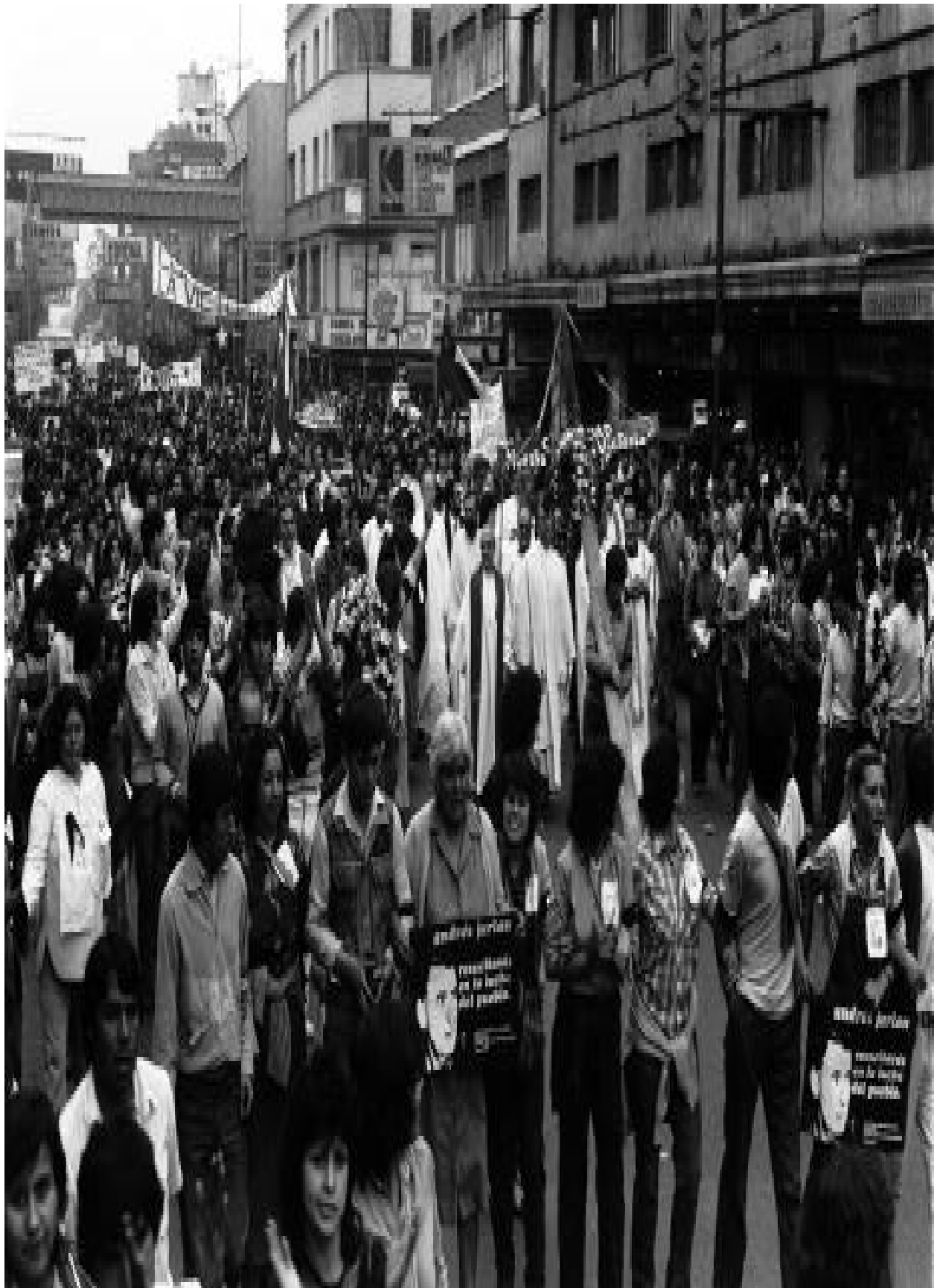


## CAPÍTULO II

### CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA I: LA SOLIDARIDAD Y LA IGLESIA COMPROMETIDA

“Todo hombre tiene derecho a ser persona”.

Texto afiche año 1973.



■ *Funeral del sacerdote André Jarlan, Santiago, 1984. Fotografía de Juan Carlos Cáceres.*

Cuando el 11 de mayo de 1983 estalló la primera jornada de protesta contra la dictadura, muchos se sorprendieron. ¿De dónde provino tanta fuerza? ¿Cómo era posible tal coordinación? ¿En qué minuto los pobladores cobraron un papel tan protagónico? ¿Quién o quiénes los orientaban, organizaban, comandaban? En cambio, para quienes estaban dentro de una dinámica social y comunitaria, en prácticas cotidianas de lucha por la subsistencia, el trabajo y el resguardo de la integridad física y psicológica del mundo popular era lo que “se veía venir”. Después de diez años de dictadura militar, los ánimos ya estaban predispuestos. Bien lo retrata con sus palabras Luis Fuentealba, fundador de la Coordinadora Nacional Sindical y dirigente socialista de los trabajadores de la construcción:

Cuando surge la primera protesta y todo esto se da como a conocer mundialmente, un montón de intelectuales y de muchos partidos políticos quedan sorprendidos y dicen ¿pero qué pasó?, parece que fuera algo mágico, ¿dónde estaba que no se notaba? ¡Es porque no estaban!, o sea, ¡pa’ no saber que esto era una cosa de acumulación es porque no estaban! Que faltaba ponerle el fosforito, porque la protesta estaba contenida, había una situación de rabia, de molestia, había una necesidad de que algo escapara, aunque fuera el grito, pero estaba todo, solo faltaba encenderla, canalizarla<sup>1</sup>.

La expresión pública y masiva de la protesta se fue acumulando, silenciosa hacia fuera y solidaria hacia dentro. Se fue gestando con pequeños gestos cotidianos de resistencia. En ese proceso hubo una institución que desde un inicio veló por la supervivencia, el refugio y la reorganización de los perseguidos, de los pobres, de los humillados. Nos referimos a la comunidad de sacerdotes y religiosas que jugaron un papel fundamental brindando apoyo, protección, seguridad y conformando una instancia oficial de defensa y promoción de los derechos humanos a través de la Vicaría de la Solidaridad<sup>2</sup>.

Su registro es el principal testigo de esta investigación para comprender qué

fueron y significaron las llamadas Jornadas Nacionales de Protesta. Por ello, resulta fundamental responder un conjunto de preguntas que surgen de la mano con la naturaleza de la fuente y que servirán para guiar el desarrollo de este capítulo. ¿Quiénes eran esos religiosos? ¿Por qué un sector que tradicionalmente defendió los intereses de los sectores dominantes se comprometió de tal forma en la defensa de los derechos humanos de los desposeídos? ¿Por qué su praxis religiosa está tan presente en las protestas? ¿Por qué las sigue, orienta y registra?

De entrada, habrá que advertir que en estas líneas no se hará referencia a la Iglesia Católica chilena en general, ya que sería una tarea interminable, y tampoco se pretenderá explicar la relación entre la Iglesia y las jornadas de protesta<sup>3</sup>. Más bien, en ellas se apuntará hacia esos sectores del clero que llamaremos Iglesia comprometida, es decir, hombres y mujeres religiosos y laicos católicos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y el apoyo a los sectores populares durante la época de estudio, considerando de antemano que las posiciones políticas y teóricas dentro de ellos no fueron en absoluto monolíticas; por el contrario, albergaron diferencias, tensiones y disputas.

## Los están matando. ¡Hay que salvar gente!

Después del bombardeo al mundo de izquierda y popular simbolizado en la casa de gobierno, la Conferencia Episcopal guardó silencio. Muchos esperaron una condena enfática e inmediata que nunca pudieron escuchar. Fue hasta el 13 de septiembre que la institución eclesiástica se pronunció:

Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas... Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el martes 11 de septiembre fue el Presidente de la República... Pedimos moderación frente a los vencidos... Que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación<sup>4</sup>.

La jerarquía estaba convencida de que los militares volverían a los cuarteles en pocos meses. Según confiesa el obispo Carlos Camus, lo que primó en un principio fue la incredulidad: “Nos costó convencernos de que empezábamos una dictadura larga y cruel como jamás la creíamos posible en Chile”<sup>5</sup>. Pero si a los jerarcas chilenos les llevó un tiempo entender y convencerse de que los militares habían llegado para quedarse, para los curas que cruzaban diariamente los pasajes poblacionales el horror fue inmediato. Damián Acuña era un cura de pueblo “chapado a la antigua”. Hasta antes del 11 de septiembre le exasperaba la intranquilidad reinante, la subversión, el desabastecimiento, las largas filas que debía hacer la gente de Buin donde era párroco.

A los dos o tres días comencé a saber de tantas víctimas. Viajando a Santiago por la carretera vi tres cadáveres junto a las paredes del Cementerio Metropolitano. ¡Eran como las ocho y media de la mañana y había sangre fresca en el suelo! Al día siguiente, había otros dos cadáveres que, incluso, quedaron insepultos hasta la tarde... ¡Eso yo lo vi!... Al asentamiento 24 de Abril, donde vivían unas 20

familias, llegaron tipo 4 de la mañana a buscar a la gente en un camión de barandas altas. Los llamaban con nombres y apellidos y los hacían subir al camión. Decían que los llevaban a San Bernardo a dar unos datos y después los traerían de regreso... Nunca más se supo de ellos<sup>6</sup>.

A partir de ese estupor comenzó la indignación y rebeldía del padre Damián Acuña, un cura de pueblo que se iría transformando durante estos años, y mucho más cuando llegó a hacerse cargo de la Vicaría de la zona norte de Santiago. En ese territorio politizado él sería uno de los tantos que más tarde esbozaran más de una sonrisa con las Jornadas Nacionales de Protesta.

Entre la noche del 18 y 19 de septiembre corrió la voz de que el sacerdote catalán Juan Alsina había sido asesinado y su cadáver rescatado desde las aguas del río Mapocho. La noticia impactó a sus compañeros, ya que la muerte alcanzaba a la Iglesia. Alsina llegó como presbítero en los años 60 a Chile y se negó a vivir del altar, por lo que trabajaba como obrero en el Hospital San Juan de Dios. “Estuvo en varios lugares, como en San Antonio y en otras parroquias de Santiago. Además, fue asesor espiritual del Movimiento Obrero Acción Católica (MOAC) y vivía siempre en barriadas modestas”<sup>7</sup>. Según los datos entregados por Pablo Richard, al menos 120 sacerdotes católicos (30 pastores protestantes, 35 religiosos y 200 laicos) que, como Juan Alsina, pertenecían a “Cristianos por el Socialismo” fueron expulsados de Chile, gran parte de ellos después de ser detenidos y torturados, mientras que al menos 32 fueron asesinados, entre ellos Miguel Woodward, Etienne Pesle, Gerardo Poblete, Omar Venturelli; también Antonio Lledó, que figura en la lista de detenidos desaparecidos<sup>8</sup>.

Para los miembros de la Iglesia base, el desafío estaba claro. El padre Jesús Rodríguez ni siquiera pudo asistir a los funerales de su querido amigo Juan Alsina: “Andaba con los familiares de colaboradores de la parroquia por todas las comisarías, por los regimientos, buscando a los desaparecidos de mi propia parroquia”<sup>9</sup>. Por las noches abría las puertas de su capilla y cuidaba de quienes sentían miedo en sus casas.

El reverendo Roberto Bolton se encontraba en un seminario fuera del país. Cuando regresó el 21 de septiembre, Chile tenía otro rostro. Se dirigió de inmediato a su zona, donde el obispo Fernando Ariztía y el padre Mariano Puga

estaban reunidos. Se sorprendieron al verlo: “Siéntate, me dijeron. Lo hice y empezaron a contarme los horrores... En un momento les pedí que por favor no me contaran más y rompí a llorar”<sup>10</sup>. Por su parte, el cardenal Silva Henríquez se reunía y recolectaba antecedentes en asambleas separadas por las distintas zonas de la Arquidiócesis de Santiago. Cuando le tocó a la zona oeste, el padre Bolton le manifestó su inquietud ante tanta prudencia. ¿Qué pasa con la Iglesia de Chile que habló fuerte durante el Concilio Vaticano y ahora guarda tanto silencio?

Creo que fue en esa asamblea que el cardenal Silva nos dijo: “¡Ayuden a la gente, salven a quien puedan, aunque sean patos malos!...”. Yo seguía inquieto en esos ocho o quince días después de mi regreso a Chile por la impavidez real o aparente de la Iglesia frente a los acontecimientos. Quise hablar con algún obispo y me dirigí a Bernardino Piñera. Me dijo: “Lo que ustedes quieren sería recibido por el gobierno militar como una declaración de guerra, sería enteramente contraproducente e impediría que hiciéramos cualquier otra cosa y que no pudiéramos hacer lo poco que estamos haciendo...”. Me relató varios casos, de él mismo y de algún otro obispo, que muy clandestinamente, muy silenciosamente habían podido salvar a algunas personas<sup>11</sup>.

La satisfacción fue moderada para el padre Bolton, no podía ser que a la gente la siguieran matando.

Me di cuenta de que no podíamos esperar nada mayor de parte de los obispos y de la Iglesia, y que tal vez debía ser la Iglesia base, el pueblo de Dios, la que buscara la manera de frenar a los militares. Junto con un pequeño grupo de sacerdotes y religiosos albergados en la modesta casa de Mariano Puga en la población Villa Francia, como Sergio Nasser, el laico Rodolfo Valenzuela, Rafael Maroto, quien fue el capellán de La Moneda en los tres años de la Unidad Popular, tomaron la resolución de actuar: “Habíamos comprendido que a todos nos correspondía hacer algo”<sup>12</sup>.

La confianza en que “la situación era momentánea” y que en unos meses los

civiles volverían a La Moneda no alcanzaba a toda la Conferencia Episcopal. Monseñor Fernando Ariztía, obispo auxiliar de Santiago, fue uno de los primeros que denunciaron públicamente lo que estaba pasando, en tanto gestaba silenciosamente un proyecto, anterior al de la Vicaría de la Solidaridad, que le propondría ejecutar al cardenal Silva Henríquez. Don Fernando provenía de una de las familias más ricas e influyentes de Chile, pero su gente coincide en que “él era lo más sencillo, lo más simple, lo más humanitario”. Como vicario de la zona oeste de Santiago, que reúne a las populosas comunas de Pudahuel, Cerro Navia, entre otras, se instaló en una modesta casa de madera del Hogar de Cristo como uno más de los pobladores más humildes. Dicen que era un ser humano excepcional que devino en un excelente “conspirador”.

El padre Jesús Rodríguez relata que cuando a fines de septiembre mataron a gente de su comunidad, decidió recurrir a don Fernando Ariztía. El obispo le dijo: “Es muy grave lo que está pasando; yo estoy haciendo lo que puedo. Ahora mismo hay una persona en una oficina del Arzobispado que anota estos casos de desapariciones, de los cadáveres que aparecieron, para que luego lo comuniquemos a las nuevas autoridades”<sup>13</sup>. Esa temprana opción de registrar lo que aconteció en Chile permitió constituir un archivo documental de millares de casos de violación a los derechos de las personas por parte de agentes del Estado, el que en años recientes fue presentado ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación formada dentro de las “políticas de reparación” de los gobiernos concertacionistas<sup>14</sup>.

La angustia de quienes eran testigos aumentaba con la constatación diaria de la muerte. A los pocos días el padre Jesús encontró cerca de la casa donde vivía un alto de cadáveres. Eran personas que habían sido asesinadas.

Fui hasta donde el nuncio Sótero Sanz Villalba y le conté lo que había visto. Y el nuncio me dijo: “Vete a hablar con Fernando Ariztía, porque él está con un proyecto, viendo qué cosa se puede hacer”. Volví nuevamente donde don Fernando y él me reiteró que se estaba formando un grupo, “un pequeño organismo que se va a llamar Comité Pro Paz y vamos a atender gente, quienquiera que sea, que esté maltratada”<sup>15</sup>.



Efectivamente, el 6 de octubre de 1973 nació formalmente el Comité de Cooperación para la Paz en Chile con la misión de prestar asistencia legal y social a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. El llamado Comité Pro Paz quedó constituido por el obispo Ariztía, de la Iglesia Católica, por el obispo Helmut Frenz, de la Iglesia Evangélica Luterana, y por el sacerdote jesuita Fernando Salas, como secretario ejecutivo. A través de esta instancia ecuménica, los más altos representantes de iglesias en Chile se propusieron “dar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual a todos los chilenos que como consecuencia de los últimos acontecimientos políticos se encontraran en grave necesidad económica o personal”<sup>16</sup>.

El Comité comenzó reclutando a un pequeño número de personas de confianza dispuestas a ayudar. Una de ellas fue la asistente social Argentina Valenzuela, recientemente despedida de su trabajo en la Universidad Católica por su cercanía con la Unidad Popular. Doña Argentina había trabajado en la zona oeste y tenía mucha relación con Fernando Ariztía. “Cuando supo que quedé sin trabajo, me invitó a ir al sexto piso del Arzobispado, en Erasmo Escala”.

Era el 16 de octubre de 1973 y doña Argentina encontró reunidos a un equipo de abogados, asistentes sociales y curas dispuestos a ayudar en lo que se necesitara. Entre ellos estaba el destacado sociólogo comunista José Manuel Parada, degollado por la dictadura en 1985: “Esa etapa del Comité fue súper linda, terrible pero linda. Éramos un equipo que efectivamente era amplio, pluralista”<sup>17</sup>.

Muchos de los presentes no se conocían ni sabían a ciencia cierta en qué consistiría su aporte al comité. Más bien se trataba de una audaz respuesta que se fue construyendo de acuerdo a las necesidades que se iban presentando y que día a día iban en aumento: “Siempre estábamos sobrepasados de demandas. Toda la gente empezó a llegar ahí en un primer momento para ser protegidos porque estaban en peligro sus vidas”.

Al poco tiempo el equipo necesitó más espacio y se trasladaron a su sede oficial en calle Santa Mónica 2338, dirección que circuló clandestinamente en papelitos doblados o en silenciosos murmullos entre quienes buscaban ayuda. Fue en esas instalaciones donde comenzaron a reunirse los miembros de futuras organizaciones, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Con el crecimiento del Comité Pro Paz se consolidaron los departamentos que serían la base del trabajo posterior de la Vicaría de la Solidaridad.

Se organizó un grupo de ayuda social para indagar sobre el paradero de miles de detenidos y brindarles apoyo humanitario a sus familiares (consejos, trámites de urgencia, incluso víveres). Se creó el Departamento Jurídico para presentar recursos de amparo, asesoría legal y defensa. Cuando la represión tocó el mundo sindical, y muchos perdieron su trabajo por razones políticas, se creó el Departamento Laboral. Más tarde, y por razones semejantes, se contó también con un Departamento Campesino y un pequeño Departamento Universitario<sup>18</sup>.

Para prestar ayuda médica a heridos, torturados y otras víctimas de la represión, el 1º de mayo de 1974 nació el Centro Médico. La doctora Gilda Guerra, una de sus fundadores, relata el desafío profesional y emocional que significó para sus profesionales: “Debíamos conjugar la atención física y psicológica de las personas. Era una realidad para la cual nunca nos habían preparado, era una medicina de guerra. No éramos médicos que supiéramos cómo atender a un torturado. Fue un tiempo terrible en que aprendimos mucho”<sup>19</sup>.

En forma transversal, desde el primer día empezó el trabajo de recopilación y sistematización de la información que llegaba hasta sus pasillos. Con suma rigurosidad sus trabajadores archivaron documentos y fichas que poco a poco engrosaron los estantes del comité. Según la señora Argentina, “hubo mentes claras que pudieron hacer las fichas. El Departamento Jurídico era inmenso. En la sala más grande estaban los que atendían a la gente; casi todos eran trabajadores sociales. En los escritorios los abogados tenían torres de documentos”. Como la doctora Gilda Guerra, la señora Argentina se detiene en lo difícil del compromiso: “En el Departamento Laboral nos tocaba atender a cientos de despedidos en los servicios públicos, que venían y venían. ¿Cómo rescataban sus papeles?, ¿cuál iba a ser su destino? Pero de repente no llegaban más, mucha gente venía y después estaba en la lista de los detenidos desaparecidos”.

El trabajo público del Comité Pro Paz se enlazaba con otro trabajo subterráneo. Alguna pista nos esboza el padre Cristián Precht, Secretario Ejecutivo desde septiembre de 1974 y futuro Vicario de la Solidaridad (1976-1979) al reconstruir la historia de esta entidad:

Desde sus primeros días el Comité realizó un importante trabajo a través de su Departamento de Reubicación, nombre oficial que designaba a un valeroso y abnegado grupo de sacerdotes, de religiosas y de laicos que ayudaban directamente a quienes eran perseguidos y a los que padecían de mayor necesidad. Este solo departamento daría para escribir un libro lleno de heroísmo. Dios lo sabe<sup>20</sup>.

La conformación de ese Departamento de Reubicación aclara la forma y el pulso que adquirió el trabajo sigiloso y anónimo de sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos con la tarea de salvar vidas humanas. Ambos sectores no estaban desvinculados: el Comité les informaba sobre los casos apremiantes y apoyaba con algunos recursos, en tanto los equipos de cristianos hacían el trabajo operativo de reubicación propiamente tal.

Todo empezó con algo tan simple y humano como abrir las puertas de las parroquias y capillas para recibir a los perseguidos. El padre Jesús Rodríguez cuenta que durante los primeros cuatro años después del golpe vivía en una casa de madera bastante grande.

Hasta allí llegaba gente que conocía y que podía refugiarse en la noche. Había cuatro salas que estaban ocupadas por personas que necesitaban ese alero. Tomábamos ciertos resguardos para evitar problemas. Les pedíamos que no prendieran mucho las luces, y yo mantenía un poco de té y suficiente arroz para darles comida. Al día siguiente, contactaba a estos alojados con el Comité Pro Paz, que empezaba a trabajar para que salieran<sup>21</sup>.

El Comité, luego de alertado, contactaba a un equipo de reubicación o salvamento como le llama el padre Bolton<sup>22</sup>. Fue un trabajo minucioso y arriesgado del que poco se habla. Aunque no sabemos quién empezó la tarea ni cuál fue la primera embajada que abrió sus puertas a los refugiados, sí sabemos que alrededor del 20 de septiembre de 1973 había varios pequeños grupos en plena faena de salvamento. En el caso del padre Bolton, la iniciativa operativa

comenzó junto con dos amigos laicos, Rodolfo Valenzuela y Horacio Rivera. Ellos serían el puente con las embajadas dispuestas a dar asilo político. El cuartel central fue un salón del Colegio de los Padres Franceses en la Alameda, donde estaba la oficina de Rafael Maroto como Vicario Episcopal de la Zona Centro. ¿Cómo llegarían hasta esa oficina los perseguidos?

Se supone que ya fuera del Comité Pro para la Paz o de otras amistades vinculadas con nosotros, nos enviarían personas que estuvieran en peligro de su vida, en peligro de su libertad... Por varias partes de la ciudad había repartidos otros amigos que estaban recogiendo información acerca de quiénes eran los que necesitaban urgentemente ayuda y nos iban comunicando a nosotros. Ellos mismos estaban también en comunicación con diversas embajadas de países amigos, dispuestos a recibir y dar acogida a asilados que lo necesitasen y que fueran conducidos por nosotros hasta ellos.

En los “salvamentos” destacó la presencia del obispo luterano Helmut Frenz, quien, entre sus influyentes contactos, pudo conseguir recursos a nivel internacional, prestó instalaciones para albergar a refugiados y trabajó codo a codo con la comunidad católica para salvar gente.

Las parroquias y comunidades cristianas de base, especialmente de la periferia santiaguina, fueron protagonistas calificados de esta empresa. Casas parroquiales, pastores, curas, laicos y laicas se entregaron por entero a la labor de acoger, esconder, acompañar y ayudar a escalar y saltar muros a centenares de hombres y mujeres cuya vida y libertad peligraban por la persecución política e ideológica más extensa, cruel y criminal que ha conocido Chile<sup>23</sup>.

A pesar de la inexperiencia en tácticas de seguridad y trabajo clandestino, el centro operó bastante bien. Salvaron muchísima gente. Diversas embajadas y sus representantes diplomáticos abrieron sus puertas a los perseguidos para salvarles la vida.

Junto con la defensa y protección comenzó la labor de información y denuncia. Si había que hacer público lo que en Chile estaba ocurriendo, la Iglesia, metódica y organizada por excelencia, sistematizó las innumerables pruebas que había reunido. El 29 de marzo de 1974, el Comité presentó el primer recurso de amparo masivo por el arresto y desaparición de 131 personas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 17 de marzo de 1974. No hubo respuesta de los tribunales, ni la habría en los años siguientes, en que se presentaron cientos de ellos. Pero los profesionales persistieron en su labor. Era necesario que quedara algún testimonio. Por ello, periódicamente fueron redactados informes y dosieres sobre violaciones a los derechos humanos.

Pronto comenzó el hostigamiento a sus miembros y trabajadores. En octubre de 1975 fue prohibido el ingreso a Chile a su copresidente, el pastor luterano Helmut Frenz, cuando regresaba de unos de los tantos viajes que realizó al extranjero para canalizar la solidaridad internacional. Un mes más tarde fueron encarcelados José Zalaquett, jefe del Departamento Jurídico, y varios sacerdotes, entre ellos el padre Rafael Maroto, los jesuitas Patricio Cariola y Fernando Salas y el sacerdote norteamericano de la Santa Cruz Gerardo Whelan por prestar ayuda a dirigentes del MIR que huían de un enfrentamiento con la DINA en Malloco, uno de los cuales se encontraba, junto con su esposa, asilado en la Nunciatura Apostólica.

Al calor de estos hechos, el cardenal Raúl Silva Henríquez sostuvo una tensa reunión con Augusto Pinochet, quien le exigió que disolviera el Comité. En diciembre de 1975 el personal abandonó las oficinas de calle Santa Mónica. Se cerraba el Comité, pero se abría una nueva etapa para la Iglesia Católica. El cardenal Silva Henríquez traía entre manos una respuesta que puso a prueba sus reconocidas dotes de organizador.

## La Vicaría de la Solidaridad: encuentro y rearticulación de la política

Lo que el general Pinochet no sospechó fue que Silva Henríquez crearía una instancia de mayor envergadura, con más recursos, más trabajadores y, lo más importante, blindada al acoso directo de los militares. La Vicaría de la Solidaridad, a diferencia del Comité Pro Paz, dependió directamente del Arzobispado de Santiago, terreno legal y arbitrio de la Iglesia Católica.

Comenzó a funcionar el 1 de enero de 1976, en el segundo piso de un antiguo edificio ubicado en la plaza de Armas de Santiago, a un costado de la Catedral. Convergieron ahí religiosos y laicos: un cuerpo de abogados, médicos, asistentes sociales, sociólogos, periodistas, sacerdotes, monjas, seminaristas, además de todo el personal administrativo. Si la organización del Comité Pro Paz fue marcada por el sino de la improvisación ante la emergencia, el trabajo y misión de la Vicaría desde su inicio fue estratégicamente organizado. A través de su Departamento Jurídico, la Vicaría cubrió labores de defensa, atención, protección y denuncia: protegió a miles de detenidos en virtud de los estados de excepción; dio asistencia judicial a los procesados por delitos políticos ante tribunales civiles o militares; atendió a los chilenos exiliados y relegados a localidades determinadas dentro del país; formuló denuncias en favor de las víctimas de tortura y tratos crueles, de secuestros, de homicidios ejecutados por agentes del Estado y de detenciones seguidas de desaparecimiento.

En la puerta de entrada al Departamento Jurídico había un grupo de trabajadoras sociales recibiendo a quienes llegaban a pedir ayuda y a entregar su testimonio. En esas habitaciones se encontraba también el delicado archivo de informaciones que le costaría la vida al sociólogo comunista José Manuel Parada, trabajo de investigación que respaldaba las denuncias de la Vicaría y el informe anual que presentó rigurosamente al presidente de la Corte Suprema a comienzos de cada año judicial.

Para velar por la organización y defensa de los trabajadores, se conformó el Departamento Laboral, que desde 1977 pasó a convertirse en la Vicaría de Pastoral Obrera. También el Departamento Campesino, que funcionó hasta 1982, y el Departamento de Publicaciones, donde se editó la revista Solidaridad, que

con un tiraje de treinta mil ejemplares logró romper la censura informativa. Además, en sus imprentas fueron preparados un importante número de publicaciones destinadas al trabajo de formación, información y testimonio de experiencias solidarias.

Parte fundamental del trabajo fue la inserción territorial en los sectores periféricos de la ciudad, la que apuntaba hacia la ayuda a la subsistencia, capacitación y educación. Para ello, la Vicaría trabajó en seis zonas de la ciudad (centro, norte, oeste, oriente, sur, rural-costa). De acuerdo a las necesidades y realidades de cada uno de estos territorios, se gestionaron programas de apoyo a la subsistencia, como ollas comunes, comités de abastecimiento, los “comprando juntos”, que abarataban el costo de los abarrotes, talleres artesanales, talleres poblacionales, huertos familiares, comedores infantiles y de ancianos. Solamente en Santiago hubo más de trescientos comedores que durante diez años aseguraron a los niños una comida diaria. También se conformaron talleres de capacitación (organizaciones solidarias, mujeres pobladoras, jóvenes, animadores de organizaciones poblacionales, agentes pastorales, voluntariado de ancianos) y otros de recreación educativa (colonias urbanas, campamentos de verano, recreación educativa permanente). Además se crearon siete policlínicas que ofrecieron sus servicios a los más pobres.

La asistente social Juanita Alvarado, que al calor de las protestas coordinó la zona sur, nos explica la mirada profesional bajo la cual se ejecutó su trabajo:

Nosotras llegamos a la Vicaría con una perspectiva de trabajo social muy política, en el sentido de lograr participación, de fortalecer la organización. En ese sentido, la Vicaría fue una instancia muy interesante de elaboración, de creación, para que todos estos programas, que podían aparentemente aparecer tan asistenciales, tan de subsistencia, tuvieran también un perfil de transformación y de hacer conciencia en las personas<sup>24</sup>.

Cuando las reuniones estaban prohibidas, en barrios y poblaciones las parroquias fueron un punto de encuentro trascendental para retomar las complicidades y apoyarse mutuamente. Alentados por agentes de pastoral, en sus locales, salas de reunión y capillas fue propiciado el intercambio de información y de sus

experiencias. Era importante romper el silencio y contar lo que estaba pasando.

Se fueron creando instancias de “formación cívica”. Los sucesos que la prensa censurada no informaba; las leyes, casi siempre injustas, que dictaba la justicia militar; las disposiciones de aquellos gobernantes. Estos grupos minoritarios, informándose primero entre ellos, transmitían luego lo que sabían en las conversaciones habituales al resto de los vecinos. Se invitaba a expertos de la Vicaría Pastoral Obrera y de Solidaridad. También a personas con experiencia sindical, abogados y a otros especialistas<sup>25</sup>.

Fueron cientos de militantes los que retomaron vínculos al alero de la Iglesia y muchos más aún los niños que después del golpe crecieron con ganas “de hacer algo” para derribar a la dictadura, para sumarse a la resistencia. Comenzaron en una parroquia, junto a una guitarra, cantando canciones latinoamericanas y desde ahí fueron contactados por una organización política. Fue este el caso del cantautor Francisco Villa, reconocido por su participación –junto a un nutrido grupo de artistas– en peñas, capillas y en cuanto acto cultural se organizó durante los años 80: “Yo pasé de la parroquia, de la juventud franciscana, a las Juventudes Comunistas (risas); me reclutaron en una parroquia”<sup>26</sup>.

Con 14 años, Francisco Villa entró a un mundo de militancia clandestina con el que soñaba ser partícipe. Su aspiración era ser, y ser reconocido, como parte de ese mundo tan admirado.

A mí me gustaba todo de la izquierda, todo; no solo la ética, me gustaba como se vestían, yo quería tener barba, el pelo largo, quería usar esas chalitas franciscanas, quería usar un morral, quería cantar a Víctor Jara, andar con un libro, quería leer a Benedetti, o sea, toda la iconografía me fascinaba, era una cosa muy potente, era como... como ser parte de algo que para mí era una élite, que no era la élite convencional de la plata, no; era una élite intelectual, de ser los mejores, de izquierda, intelectuales, sensibles, éticos, el hombre, el hombre nuevo<sup>27</sup>.



Otro caso es el de Raúl Canales, dirigente del MAPU en la población La Pintana y fundador de la ONG llamada “Centro de Estudios y Promoción Social” (Cenpros), creada por el MAPU-PS al calor de los encuentros en una parroquia:

Participábamos en actividades en la iglesia, con los curas más revolucionarios de la Iglesia Católica. Eran unos tipos muy progresistas, apoyaban las ollas comunes, apoyaban las huelgas de hambre... Quienes hicieron que uno tomara conciencia y mirara el país de otra manera fueron los curas. Dentro de la iglesia se hablaba que había desaparecidos, se hablaba que había muertos... Ahí nace esa cosa de querer hacer cosas por el otro<sup>28</sup>.

Con los años y en la medida que crecen las organizaciones políticas con sus vínculos militantes y que la atmósfera subjetiva se va preparando para asumir otro tipo de compromiso político y otras formas de lucha, muchos jóvenes abandonaron las parroquias. Bien lo ha reseñado Fernando Castillo:

La politización reviste la forma de un “paso” de una cosa a otra. Hay en esto algo casi paradójal: esos cristianos han sido formados en la comunidad, no solo en su conciencia religiosa, sino también en otros aspectos. Es la comunidad quien ha despertado sus inquietudes y su conciencia política; es ella quien ha impulsado el compromiso. Y en un punto dado se produce una verdadera ruptura<sup>29</sup>.

Si bien trabajarán muchas veces en conjunto, aún más al calor de las jornadas de protesta, uno de los puntos de mayor conflictividad entre la Iglesia y esos jóvenes que optan por partidos de izquierda versará sobre la utilización de la violencia como forma válida de lucha. Aunque es un terreno en el que no queremos adentrarnos (por ahora), sí es necesario tener en cuenta que existe un sector importante de población politizada, preferentemente jóvenes con distintos grados de compromiso y conciencia que quieren dar otro paso, que quieren enfrentar a la dictadura oponiendo resistencia con nuevas formas de lucha. Ellos encontrarán eco y lugar en la Política de Rebelión Popular de Masas, impulsada

por el Partido Comunista. Por su parte, los curas que promueven la “no violencia activa” no apoyarán la utilización de la violencia. “Puertas adentro”, incluso, regañarán a sus vecinos revoltosos, pero se encargarán de explicar a la opinión pública el contexto cotidiano desde donde surge la furia y se empeñarán en defender y albergar a los reprimidos durante y después de cada jornada.

## Protestas nacionales: registro, denuncia y clínicas clandestinas

A partir de mayo de 1983, para la red vinculada a la Vicaría de la Solidaridad aumentaron el público y los desafíos, se duplicaron los turnos, hubo que acondicionar clínicas populares y capacitar a pobladores en primeros auxilios; se necesitaron más máquinas de escribir y fotocopadoras para difundir cartillas educativas, manuales e instructivos sobre los derechos de las personas; se prepararon salas para reuniones y recoger y trasladar información sobre acontecimientos.

Para saber, registrar y analizar la situación que vivía la gente y sus comunidades, la Vicaría organizó una amplia red de observación que permitió saber lo que sucedía en cada jornada de protesta. La recolección de información se hacía a través de una ficha previamente diagramada y repartida a distintas personas de confianza, comités de derechos humanos, comunidades, sacerdotes o decanatos, dependiendo de las características de cada zona. Al día siguiente de la protesta se recogían esas fichas, junto con otros testimonios y relatos que señalaban lo que había pasado, las listas de personas detenidas, de heridos y muertos. Los informes eran posteriormente centralizados y sistematizados. Ello constituyó un sistema de inteligencia excepcional.

Poco se habla del trabajo de las monjas durante la dictadura militar, quizás porque no les interesaba ser visualizadas o por el machismo que también se reproduce en las estructuras eclesiócristianas. Pueden ser ambas, pero el caso es que las religiosas se movían silenciosamente, con un perfil bajo, perfectamente conspirativo; sus pasos solo eran perceptibles para quienes estaban dentro del tejido social. Acerca de su participación y sobre cómo se fueron adaptando las respuestas a las necesidades logísticas de las jornadas de protesta, nos da cuenta Juanita Alvarado, jefa de equipo de la zona sur de Santiago:

En la primera protesta no había nadie y el cuidador no hallaba qué hacer con su señora. Tenían gente golpeada, herida... Entonces, para la otra protesta ya nos organizamos; siempre nos quedábamos con las monjas. Recuerdo espacialmente

a las Hermanitas de Jesús, las marianistas y del Amor Misericordioso. Nos quedábamos ahí toda la noche, escuchando las informaciones, recibiendo a la gente, pero también haciendo reflexiones políticas y de fe<sup>30</sup>.

El caso de la zona centro tenía una dinámica similar, aunque su particularidad radicaba en que las acciones de su cuadrante eran protagonizadas por universidades, liceos o se realizaban en las plazas públicas del llamado barrio cívico. En aquellos años, Argentina Valenzuela era la asistente social responsable de la zona y recuerda:

Nosotros teníamos colaboradores como corresponsales, quienes manejaban nuestros teléfonos y nosotros los de ellos. Igualmente, hacíamos turnos en la Vicaría para que siempre hubiese alguien y teníamos que tener clara la información que debía entregarse a la gente sobre los pasos que tenían que dar ellos frente a cualquier situación represiva. Sucedió que mucha gente que no vivía en la zona también sufría la represión, estudiantes preferentemente; entonces, llegaban los dirigentes de centros de alumnos o los compañeros de ellos que requerían información o iban a entregarla. Se reunía muchísima información porque la zona centro era como el epicentro de las manifestaciones<sup>31</sup>.

El trabajo de las religiosas también destacaba en los equipos de salud, cumpliendo largos turnos junto con un equipo de médicos que a bordo del pequeño coche (“la citroneta”) con que contaba la Vicaría se trasladaba a distintas zonas de Santiago. A partir de la segunda o tercera jornada nacional, comenzaron a llegar desde la Vicaría central recursos médicos para hacer curaciones y se impulsaron programas para capacitar a las voluntarias. En una de esas clínicas clandestinas colaboraba la señora Alicia Cáceres, participante activa de su parroquia en la población La Victoria.

La capilla se transformaba en una clínica que preparábamos antes. Se tapaba todo con nailon negro para que no saliera olor para afuera. Como camillas

teníamos unas bancas largas. Juntábamos dos y les poníamos un nailon, una frazada. Teníamos harta capacitación. Una enfermera universitaria nos enseñó mucho de todo lo que es el cuerpo humano. Para las protestas nos juntábamos antes, preparábamos folletos y todo. Llegaban tantos heridos hasta nosotros; ¡muchos! Nos tocó atender a jóvenes que estos desgraciados les arrancaron el cuero cabelludo. Llegaban los cabros con los pies y las manos quemadas; eran realmente nazis<sup>32</sup>.

No obstante, como advierte Juanita Alvarado, había orientaciones muy claras sobre la atención de problemas más delicados, como heridos a bala, que debían ser derivados a un centro hospitalario:

Era muy peligroso. En una de las protestas llegó un herido de bala, entonces el médico que estaba dijo: “No, esto no lo podemos atender aquí, hay que llevarlo a la posta del Hospital Barros Luco”. Pero el chiquillo no quería ir y dijo: “Solamente voy si me acompaña la señorita de la Vicaría”. Y allá partí yo. Vino la ambulancia y me subí con él. Ahí recién le pregunté su nombre, lo empecé a revisar y tenía piedras en los bolsillos: “Pásame las piedras para acá” le dije y me las guardé. A uno lo que le importaba era que a la persona no la fueran a dejar detenida, que no le fueran a hacer nada<sup>33</sup>.

Esta es la compleja trama que constituye la Vicaría de la Solidaridad y el trabajo muchas veces anónimo y persistente de sus trabajadores y profesionales, sacerdotes y religiosas que acompañaron su labor. Son ellos y ellas quienes a partir de la Primera Jornada Nacional de Protesta se preocuparon por estar, observar, proteger, registrar y conservar un importante archivo documental. A través de su mirada podemos saber y percibir desde otro ángulo a ese Chile que se rebeló.

■

<sup>1</sup> [Entrevista con Luis Fuentealba, 14 de octubre de 2010.](#)

<sup>2</sup> [Sobre la experiencia de la iglesia durante la dictadura ver, por ejemplo:](#)

González, Carlos. ¿Y qué hiciste con tu hermano? LOM, Santiago, 2007; Hourton, Jorge. Memorias de un obispo sobreviviente: episcopado y dictadura. LOM, Santiago, 2009; Hugo Cancino. “La Iglesia Católica y su contribución a la reconstrucción de la democracia en Chile. 1973-1989”. Revista del Cesla N° 2, 2001: 303; Mario Garcés y Nancy Nicholls. Para una historia de los DD. HH. en Chile. Historia institucional de la fundación de ayuda social de las iglesias cristianas. Fascic 1975-1991, Santiago de Chile: LOM/Fasic, 2005; David Fernández. La “Iglesia” que resistió a Pinochet. Historia desde la fuente oral del Chile que no puede olvidarse. Madrid: Iepala, 1996; Carlos Camus. “La experiencia de la Iglesia chilena en la defensa de los Derechos Humanos”. En: Represión política y defensa de los Derechos Humanos, editado por Hugo Frühling, Ediciones Chile-América: 1986; Jesús Rodríguez Iglesias. Un misionero español en Chile. Miradas desde el pueblo. Santiago de Chile: Tiberíades, 2008.

<sup>3</sup> Esta relación ha sido trabajada en: Bravo Vargas, Viviana. Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989). Historia Crítica, N° 62. Bogotá, octubre-diciembre 2016. En línea: <https://histcrit.uniandes.edu.co/index.php/es/revista-no-62>.

<sup>4</sup> “La Iglesia Católica durante la dictadura militar”. En línea: <http://www.elmarrocotudo.cl/admin/render/noticia/3346>.

<sup>5</sup> Camus, Carlos. “La experiencia de la Iglesia chilena en la defensa de los Derechos Humanos”, en Frühling, Hugo (de), Represión Política y defensa de los Derechos Humanos. Ediciones Chile-América, 1986, p. 54. Citado por: Garcés, Mario y Nancy Nicholls. Op. cit., p. 23.

<sup>6</sup> Ibid., p. 229.

<sup>7</sup> Rodríguez, Jesús. Op. cit., p. 79.

<sup>8</sup> Amorós, Mario. “La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del movimiento Cristianos por el socialismo”. En: Pinto, Julio, (coordinador), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, LOM, 2005. p. 124.

<sup>9</sup> Rodríguez, Jesús. Op. cit., p. 81.

<sup>10</sup> Bolton, Roberto. Testigo soy. 1919-2009. IGD, Santiago, 2010.

<sup>11</sup> Ibid., p. 251.

<sup>12</sup> Ibid., p. 252.

<sup>13</sup> Rodríguez, Jesús. Op. cit., pp. 122-123.

<sup>14</sup> Se trata, por ejemplo, de la información entregada para el llamado “Informe Rettig”, elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada en 1990 durante el gobierno de Patricio Aylwin. Su misión fue esclarecer las principales violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

<sup>15</sup> Rodríguez, Jesús. Op. cit., p. 81.

<sup>16</sup> Citado por: Garcés Mario y Nancy Nicholls. Op. cit., p. 25. También se sumaron la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana y el Gran Rabino Judío.

<sup>17</sup> Entrevista con Argentina Valenzuela, 29 de junio de 2010.

<sup>18</sup> Precht, Cristián. En la huella del buen samaritano. Breve historia de la Vicaría de la Solidaridad. Tiberíades, Santiago, 1998, p. 19.

<sup>19</sup> Vicaría de la Solidaridad. Historia de su trabajo social. Ediciones Paulinas, Santiago, 1991, p. 14.

<sup>20</sup> Precht, Cristián. Op. cit., p. 20.

<sup>21</sup> Rodríguez, Jesús. Op. cit., p. 95.

<sup>22</sup> Bolton, Roberto. Op. cit., p. 254.

<sup>23</sup> Ibid., p. 286.

<sup>24</sup> Entrevista con Juanita Alvarado, 29 de junio de 2010.

<sup>25</sup> Rodríguez, Jesús. Op. cit., p. 129.

<sup>26</sup> Entrevista con Francisco Villa, 21 de octubre de 2010.

<sup>27</sup> Ibid.

[28 Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.](#)

[29 Castillo L., Fernando. Op. cit., p. 81.](#)

[30 Entrevista con Juanita Alvarado, 29 de junio de 2010.](#)

[31 Entrevista con Argentina Valenzuela, 29 de junio de 2010.](#)

[32 Entrevista con Alicia Cáceres, 6 de julio de 2010.](#)

[33 Entrevista con Juanita Alvarado, 29 de junio de 2010.](#)



### CAPÍTULO III

#### CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA II: LOS POBLADORES

“De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino dos siglos desde que lo vi, no anduvo ni a caballo ni en carroza: a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala”.

El Pueblo. Pablo Neruda



■ *Marcha en población La Victoria. Paro Nacional 30 de octubre de 1984 (ADVS).*

Este es el momento de acercarnos a las orillas, a los márgenes sociales que tanto perturbaron al Chile de los años 80 con su experiencia colectiva de combates, procesiones y organizaciones callejeras, terreno complejo en que la necesidad y la escasez confluyeron con la inspiración rebelde y violenta de lo humano ante una realidad hostil.

Sin duda, la periferia de Santiago y sus habitantes fueron el centro y alma de la protesta, un territorio multidimensional que ha permitido ser estudiado desde distintos ángulos. Con algunos de esos supuestos es inevitable discutir, ya que quedaron grabados en la historia reciente de Chile como criterios de verdad a la hora de pensarlos o referirlos y perduran hasta hoy al momento de representar un pasado y extraer un sentido. Nos referimos primordialmente a la mirada sociológica que reservó la fuerza e impacto de los inicios “luminosos” de la protesta masiva en Chile contra la dictadura a la participación de las clases media y acomodada, y en cambio adjudicó a los marginales de la ciudad el “oscurantismo” del fracaso, la irracionalidad de su violencia e ineficacia de sus consecuencias finales. Escuchemos a Eugenio Tironi:

Al levantar la línea de protección, estos actores [clase media y centroderecha] fueron los que permitieron en 1983 la movilización de los pobladores. Prueba de ello sería que, una vez que estos actores se replegaron, la protesta perdió su eficacia para terminar en una simple manifestación expresiva de jóvenes en las poblaciones... la rebelión de los pobladores pareció dejar el lugar a conductas adaptativas o anómicas de una masa sometida por la inestabilidad y el miedo<sup>1</sup>.

Según Tironi, con el repliegue de la clase media y la centroderecha, la protesta habría perdido todo su potencial político. Se habría reducido su enorme complejidad sociohistórica para ser “una simple manifestación expresiva de jóvenes en las poblaciones”.

Es conveniente, antes de continuar, apuntar algunos datos que suelen pasar inadvertidos. Como ya hemos señalado, la protesta, desde un inicio joven y periférica, también fue violenta. Por otra parte, en aquellos años casi el 70% de los habitantes de las poblaciones de Santiago estaba conformado por niños y jóvenes de entre cero (menos de un año) a 29 años<sup>2</sup>. Como vemos, las poblaciones eran jóvenes, muy jóvenes. Ellos eran mayoría. Eran los cesantes, los allegados los que protestaban.

### **Estructura de edad, pobladores Santiago y país, 1985**

Grupo de edad	Encuesta Sur 1985 (1)%	INE 1985. Total país (2)%	Diferencia (1) - (2)
0 - 14	33	35	-2
15 - 29	35	27	8
30 - 44	16	19	-3
45 - 64	13	14	-1
65 y más	3	5	-2
	100	100	100

Fuente: Encuesta Sur 1985<sup>3</sup>.

Si los costos de la instauración del modelo recayeron sobre los más desposeídos, la violencia estructural de esta nueva y multitudinaria marginalidad se exacerbó entre los jóvenes más pobres. La desocupación efectiva entre jóvenes pobladores de Santiago en 1982 se estimaba en alrededor de un 60%, y más del 20% se desempeñaba en el PEM o el POJH. Escasez, explotación, inestabilidad eran las características del empleo que se les ofrecía. Se les empleaba por períodos cortos, para evitar las contrataciones, y por un menor salario. Todo esto sumado al Plan Laboral, en el que se establecía que los menores de 21 años y los mayores de 60 no tenían derecho al salario mínimo. Muchos comenzaron a ganarse la vida como comerciantes ambulantes. En calles y microbuses, en ferias y eventos públicos fue común verlos vendiendo helados, agujas, chocolates, peinetas. Pero tampoco se les otorgaba el derecho a ejercer su labor por cuenta propia. Siempre estaban atentos, inquietos, arrancando de la policía o sufriendo un apaleo bestial (los vendedores ambulantes fueron uno de los grupos más reprimidos durante la época). Otros jóvenes se dedicaron a limpiar o a hacer los mandados en oficinas, a cargar sacos en sus espaldas, mientras otros robaban, fumaban marihuana o simplemente esperaban en las esquinas el devenir de los días.

## Hacinamiento, cesantía y segregación

Al vivir la experiencia de una desocupación y frustración prolongada, las alternativas no eran muchas, menos aún en una ciudad como Santiago, que se consolidaba durante los años 80 como un espacio fragmentado y fraccionado; también temeroso. La concentración de la riqueza, las desigualdades socioeconómicas y la privatización del espacio público levantaron nuevas marcas o fronteras que segmentaron la ciudad y fracturaron los espacios de encuentro. Diversos investigadores han explicado el proyecto urbanístico de la dictadura militar a partir de una necesidad de dispersión y neutralización de sectores catalogados como conflictivos. Es cosa de observar las marcas del mapa de Santiago, resultado de una política urbana y de vivienda ligada a la economía de libre mercado<sup>4</sup>.

Hacia 1983, el déficit de viviendas había superado las 850 mil viviendas (150 mil familias vivían de allegadas) y se agravó en los años siguientes. Cabe recordar que la cifra de construcción de viviendas sociales había aumentado durante el gobierno de Salvador Allende en un promedio de 52.132 viviendas por año, en comparación con las administraciones de Frei y de Alessandri, que alcanzaron 39.859 y 30.465, respectivamente. En cambio, el promedio anual del gobierno militar se ubicaba muy por debajo de estas cifras históricas y de las necesidades que requería el crecimiento poblacional de la ciudad. Entre 1974 y 1982, solo se construyeron un promedio de 29.879 viviendas<sup>5</sup>.

Aunque la política urbana del régimen, al igual que otras áreas de sensibilidad social, se dejó en manos de la iniciativa privada, las autoridades gubernamentales influyeron directamente en el nuevo ordenamiento –y disciplinamiento– de la ciudad a través de la creciente participación del Ministerio del Interior, ya que era otro problema de seguridad nacional. Bajo el llamado Programa de viviendas básicas o programa de erradicación de campamentos –legalizado a través del decreto N° 2.552 de febrero de 1979– se realizó un catastro de 340 campamentos habitados por 51.794 familias. El 27,4% de ellas fueron alojadas en el mismo lugar donde vivían a través de un plan de urbanización y solución habitacional. Los demás, que eran la mayoría, fueron desplazados tanto fuera como hacia otro sector de sus comunas. Como dato para

consignar la precariedad de las nuevas viviendas, considérese que en 1982 se complementó la medida disponiendo que las viviendas de erradicación no podían tener una superficie inferior a 18 m cuadrados (sic), además de infraestructura mínima.

Hay que señalar que muchos de esos campamentos y poblaciones populares se habían originado gracias a las tomas de terreno que fueron en aumento desde mediados del siglo XX junto con el proceso de industrialización y la llegada de mano de obra que buscaba un lugar donde vivir. Las cifras estiman que entre los últimos años del gobierno de Eduardo Frei y el primero de Allende, un diez por ciento de la población de Santiago había accedido a su lugar a través de una toma de terrenos<sup>6</sup>.

Estos lugares se convirtieron en un territorio politizado. De hecho, muchos de sus ocupantes pertenecían a alguna organización de izquierda o al menos manifestaban simpatía. Pero con partido o sin él, ejercían su compleja manera de hacer política en las decisiones cotidianas. Sus formas de lucha fueron, como ha destacado el historiador Mario Garcés, la demanda, la toma y la negociación. Se valieron de la coordinación, la evaluación de escenarios, la elección del momento adecuado, la acción rápida y directa sustentada en un resistente tejido social que se configuró en la práctica colectiva. También debieron saber negociar, buscar mediaciones, estrategias de resolución de conflictos y construir un destino común, una experiencia que a su vez está inscrita en la historia del movimiento popular chileno. La mayoría de estos pobladores y pobladoras desde su territorio, organizaciones, fábricas y lugares de trabajo, participaron activamente en la campaña de Salvador Allende porque se sintieron interpretados por su programa de gobierno; llegaron hasta el centro de Santiago para festejar el triunfo, y se organizaron durante la Unidad Popular. Ante todo, ellos se definían como allendistas. La fuerza de esa memoria y presencia se activaría, sin duda, en las jornadas de desquite y protesta que aquí nos convocan.

Entre 1979 y 1985, las radicaciones y erradicaciones desplazaron dentro de la ciudad a 28.703 familias. El 77,3% de ellas fueron concentradas en solo cinco comunas del área sur: La Pintana, Puente Alto, La Granja, San Bernardo y Peñalolén, zonas caracterizadas por su pobreza extrema. Estas familias debieron enfrentar la pérdida de sus empleos, problemas de desarraigo físico, pero también del espacio social en que se tejían sus relaciones. Por contraste, para las comunas dadoras de población, la nueva política urbana trajo muchos beneficios: sus terrenos se valorizaron; desaparecieron los límites que imponían los



campamentos para su expansión y desarrollo, y la pobreza dejó de ser parte de su entorno cotidiano.

El hacinamiento y la presencia de los allegados fue la característica del espacio poblacional; en la “barbarie orillera” –diría Armando Bartra– se compartía el sitio, la casa, los dormitorios y las camas. La calle y sus esquinas era la extensión de sus casas, “el living”, como dijo el vicario Juan de Castro. En 1985, el 41% de los hogares tenía una relación de más de tres personas por dormitorio; veinte años atrás, solo una cuarta parte de los hogares presentaba tal característica. En el 24% de los hogares las camas eran compartidas por dos o más personas, y más de la mitad de los domicilios cobijaba un hogar secundario debido no solo al crecimiento del grupo familiar, porque el hijo se arraigó con su nueva familia como era común en las familias populares –de hecho, ello constituía apenas un 22% de los casos–, sino también, en la gran mayoría de los casos –un 73%– a que muchos familiares llegaban a capear la miseria al hogar de un consanguíneo<sup>7</sup>. Como en el hogar de Claudio, ubicado en la población José María Caro.

De las 16 personas que vivíamos en la casa de la abuela, cuatro eran tíos míos, además de mi mamá. Todas las mujeres con su esposos y sus hijos, más mi abuela, y el típico invitado del sur que llegaba de Talca permanentemente. Mis tíos, que trabajaban en textiles, perdieron la pega y se derrumbaron como todos esos trabajadores. Recuerdo haber visto a mis tíos destruidos, sin poder hacer nada porque durante el quiebre de los ochenta ellos no tenían ninguna posibilidad de rearticular su vida y se vinieron abajo. Todo eso se juntó: miedo, desesperación, no había esperanza en cuanto a mejoras del sistema económico, hacinamiento, represión. Bajo todo ese contexto, la protesta sirvió como un espacio de articulación, porque cada una iba llamando a más gente, las barricadas de más allá, las marchas desde el interior<sup>8</sup>.

A algunos analistas de la época les pareció muy sorprendente que, ante todo este cuadro, cuando les preguntaron a los pobladores ¿a cuál clase o grupo social cree pertenecer?, muchos de esos derrumbados les respondieron con un absurdo: el 45,7% de los desocupados y el 41,4% de los adscritos al PEM y al POJH se autoidentificaban con la clase obrera. ¿Cuál fue la interpretación que extrajeron?

“Esta representación contrasta radicalmente con la realidad ocupacional del sector, en que los obreros ascienden solo al 17%, contra el 50% que está desocupado o ejerce funciones informales”. Además, muchos jóvenes nunca habían encontrado trabajo ni experimentado una relación salarial, por lo tanto: “La identificación con la clase obrera no refleja en absoluto la experiencia o la situación ocupacional de los pobladores. Ella expresa, más bien, un anhelo de integración económica según la pauta del modelo industrial”<sup>9</sup>.

Si lo traemos aquí es porque representa una forma de pensar a la gente sin historia, especialmente en nuestra historia, que se repite. Es suponer a un ser humano como un abstracto, un ser aislado, una mercancía extraída del conjunto de relaciones sociales que lo constituyen. Es cierto que la definición de obrero se da por su lugar en una forma de producción y por su participación en una relación salarial, pero ante la pregunta que apelaba a lo profundo –¿A cuál clase o grupo social cree pertenecer?–, los cesantes y los trabajadores del PEM y del POJH hablaban, más allá de su presente experiencia salarial, hablaban desde el largo recorrido y construcción identitaria de sus padres y abuelos, de la historia de sus madres, hijas y hermanas de obreros; se afirmaban en lazos, recuerdos y experiencias tejidos desde antaño, que se articulaban en un proceso viviente; referían también al arraigo de una cultura política socialista, sindical y proletaria presente en la memoria. Era la pertenencia a una clase, subordinada, sí, pero terca y resistente, que había ocupado un territorio, que se conformó en la lucha por el trabajo, el salario y una vida justa. Todo eso no podía borrarse de un plumazo, y se extendía hasta ese “ahora”.

En la misma época, pero desde otro lugar espacial, histórico y sociológico, el jesuita Ignacio Gutiérrez, quien fue Vicario de la Solidaridad entre diciembre de 1983 y noviembre de 1984, apuntaba: “¡Qué distinto es ver las cosas desde dentro cuando uno ve el sufrir de la gente que no son números, sino rostros, vidas concretas que uno conoce!”. El padre Ignacio Gutiérrez llegó a Chile a principios de los años 70 y trabajó como pro vicario durante cuatro años junto al obispo Enrique Alvear en la populosa zona oeste de Santiago. De nacionalidad española, Gutiérrez se sentía parte de esa realidad chilena que optó por defender. Continúa:

La situación que en ese entonces imperaba en el país era atroz. El fracaso del modelo económico era total... socialmente se percibía un desencanto en los

medios populares. Había cansancio... La inutilidad de la protesta pacífica y la rabia impotente se mezclaban entre sí. Muchos, sobre todo jóvenes, querían pasar a la violencia (...). En muchas poblaciones estaba fresca la muerte de sus vecinos<sup>10</sup>.

La vida entre los pobres también dio grandes lecciones transformadoras al conservador padre Damián Acuña. Un sentimiento nuevo, distinto, cambió su rumbo y carta de navegación. Desde entonces le invadió un estado de ánimo desconocido: “La gente que me conoce bien empezó a sentir preocupación por mí porque yo estaba en un ánimo tremendo de rebeldía”<sup>11</sup>.

Con las protestas, la esfera íntima de la política se tomó las calles. En ellas confluyó un sistema de valores y sentidos polifónicos que en plena confrontación definieron un destino común de lucha y oposición. Alrededor de la segmentación del espacio se levantaron límites. En la hora del desquite y la inversión del tiempo, encendieron un cinturón de fuego y levantaron barricadas. En otros momentos –los más– les tocaba recorrer largos trayectos para buscar trabajo o cumplir con sus horarios. Sus horarios y problemas eran similares; sus hijos iban y se encontraban en las mismas esquinas. Así crecieron y construyeron sus propias murallas.

## Las mujeres pobladoras se organizan

En parroquias y capillas surgieron innumerables organizaciones de tipo comunitario y barrial para paliar el hambre y la precariedad<sup>12</sup>. Aunque es imposible dar cuenta aquí de todas ellas, es necesario tenerlas presentes para reconstruir la dinámica de las poblaciones y el sentido cotidiano de ese andamio que acompañó la irrupción de las protestas. Los comedores infantiles y populares, los “comprando juntos”, las ollas comunes, entre tantas otras, fueron una respuesta creativa y colectiva a las problemáticas que enfrentaron principalmente las pobladoras. Se trató –según la tipología elaborada por el Programa de Economía del Trabajo (PET)– del surgimiento de talleres laborales, organizaciones de cesantes, organizaciones para el consumo básico, organizaciones para problemas habitacionales y organizaciones sociales de servicio; en definitiva, diversas prácticas para organizar la economía solidaria dentro de una estrategia de subsistencia.

Las llamadas Organizaciones Económicas Populares<sup>13</sup> se conformaron desde comienzos de la dictadura, pero se multiplicaron con más fuerza después de los devastadores temporales de invierno de 1982. Fue aquella vez, entre lluvias interminables y fríos extremos, cuando la miseria y precariedad del cinturón periférico recrudeció con la crisis económica, que salió a la luz pública la unión y la eficacia de las organizaciones comunitarias. Estos organismos de economía solidaria continuaron fortaleciéndose en los años posteriores y avanzaron con coordinaciones a nivel zonal y de ciudad. Un catastro realizado por el PET nos ofrece cifras estimativas de las diversas iniciativas.

### **Organizaciones Económicas Populares, Santiago. Noviembre 1982-marzo 1984**

---

Nov. 1982

Marzo 1984

---

Talleres	151	215
Comités de cesantes	21	33
Sind. Trabajadores Indep.	8	21
Comedores	121	93
Ollas comunes	34	41
Comprando juntos	57	113
Grupos precooperativos	27	28
Comités de vivienda	5	51
Comités de deudas	12	s/d
Grupos de salud	22	72
Otros grupos	31	33
Coordinadores de grupos	5	12
TOTAL	494	702

---

Fuente: Hardy y Razeto, 1984<sup>14</sup>.

Las ollas comunes fueron significativas por el papel que cumplieron y por el alto simbolismo de esos fondos con comida para todos. Por lo mismo fueron vistas con sospecha y perseguidas, incluso muchas fueron prohibidas. Lo que se fraguaba en esas enormes ollas podía ser peligroso para el régimen en la medida en que era algo político resolver juntos la comida diaria. Si se trataba de asegurar de alguna forma el sustento y la alimentación de la familia, las mujeres pobladoras tuvieron un papel central. Ellas fueron las primeras en perder el miedo para reunirse y buscar soluciones, salieron a buscar trabajo como empleadas domésticas, como vendedoras o lavando ropa ajena cuando sus maridos quedaron cesantes o el salario no alcanzaba para alimentar a sus familias.

Si el movimiento obrero organizado fue mayoritariamente cuestión de hombres, las mujeres tomaron las riendas de sus territorios y organizaron la subsistencia: “Lo que pasa es que el hombre es como más reacio a participar en una organización así, poblacional. La mayoría está cesante y se sienten mal, deprimidos, como apocados”<sup>15</sup>, explica la señora Etelvina, pobladora de la zona oeste, cuando relata lo difícil que resultaba integrar a sus maridos en estas iniciativas. Fueron mujeres las principales tejedoras de esa cultura comunitaria tan presente en la “cultura de la protesta” y su demarcación territorial: resolviendo, reuniendo, revolviendo la comida colectiva. Protegiéndose. Lo de ellas era y siempre fue la creación de redes cotidianas que las trascendían en tanto familia nuclear y colectiva.

La historia de Flora es una historia de mujer que parece repetirse en aquellos años. Su padre era un obrero textil que comenzó a alcoholizarse. Entonces su madre debió tomar las riendas de la casa y salir a trabajar. También ella, con solo siete años. Se casó a los 16 con un buen hombre que junto con miles quedó cesante durante la dictadura. La pobreza no era novedad, pero el hambre con familia e hijos sí que lo era. Fue difícil integrarse a una olla común, pero lo hizo y llegó a ser la coordinadora de ollas comunes de la zona oriente de Santiago, que trabajaban en conjunto con la Vicaría de la Solidaridad.

Hemos sido nosotras las que hemos estado cumpliendo no solo en la organización de ollas comunes, sino que como proveedoras de nuestras familias, de mamá, de dueña de casa, de dirigente vecinal, en fin. Compartir la misma comida nos ha permitido un rico ambiente para aprender juntas... Mi trabajo en la olla común como dirigente me ha enriquecido mucho, me ha ayudado a comprender lo que es la organización social<sup>16</sup>.

Reconstruyamos aquí la dinámica de una olla común a través de un retrato hecho por dos periodistas en la población La Victoria:

En la olla común, una cola de niños y adultos se forma a la hora de almuerzo. Sobre el suelo dejan los tarros, mientras esperan las raciones, que dependen del número de personas que componen el grupo familiar. En el interior de la vivienda de Olga Cortés, comunicados por una ventana abierta hacia el patio, los tres “fondos” humeantes constituyen para muchos el único alimento que reciben en la jornada. Olga Cortés, 60 años, sin hijos, organizó la olla común en 1982: “Empecé con un fondo porque no alcanzaba para más. Costó mucho armar esto, porque al principio todos se horrorizaban. Les daba vergüenza pedir un plato de comida, pero después se hizo claridad”<sup>17</sup>.

Otra de las formas más características que tomó la economía solidaria de subsistencia fue el “comprando juntos”. Los primeros nacieron entre 1979-1980 en la populosa comuna de Pudahuel y se expandieron hacia otras zonas. Cheli fue una de las impulsoras de su barrio en la zona oeste de Santiago y ni siquiera sabía que así se les llamaba: “Fue pura coincidencia. Lo que sí sabía era que en todos los hogares de la población había poca o ninguna plata. Existía el deseo de organizarse y voluntarias. Yo estaba ligada a la capilla y a otras personas comprometidas de la comunidad”<sup>18</sup>. Corrían los primeros meses de 1984 cuando con una pequeña cuota de por medio las socias lograron hacer un horno de barro para cocinar el pan y sus empanadas. “Lo inauguramos en una solemne ceremonia. ¡Cómo no iba a ser solemne, si era nuestra primera meta! Algunos esposos miraron de lejos no más, medio escépticos y dudosos”. En las semanas siguientes hicieron su primera compra: “Fueron cebollas de guarda. Estaban en

oferta y las compramos a consignación porque no nos alcanzaba la plata”.

La segunda vez compraron dos sacos de porotos que consiguieron más baratos con el familiar de un socio que los vendía en Melipilla, y el flete les salió gratis gracias al amigo de otro socio que viajaba a Santiago. Así funcionaba. “Le tocaron diez kilos a cada socia. Estábamos todas felices porque los porotos son una gran ayuda”. Luego vinieron las papas, los zapallos e incluso un poco de carne que consiguieron “por un ‘datito’ de un amigo que trabajaba en una empresa alimentaria”<sup>19</sup>. También en La Victoria funcionaba un “comprando juntos”. En su caso contaban con una bodega con más de 50 productos para alimentar la población: “Está organizado en pequeños grupos [45] que cotizan precios y tienen convenios con el Matadero de Lo Valledor y la Vega, donde compran al por mayor. Así, por ejemplo, un kilo de azúcar que en el comercio detallista cuesta cien pesos, les costó 74. Y el kilo de harina, que vale 90, les salió a 64”<sup>20</sup>.

La gente de la olla común y los más cercanos a las organizaciones de derechos humanos eran autoridades en la población, respetados y escuchados por su ética y solidaridad; a ellos recurrían para dirimir problemas comunitarios o para mover las influencias entre “los amigos de lo ajeno” para que regresaran las pertenencias robadas a las visitas despistadas. Esta era la base organizacional, parte del andamio que sostenía las jornadas, los hilos profundos que afirmaban esa red de compromiso.

No extraña que en muchos lugares las puertas estuvieran abiertas para los que protestaban. “Si nos perseguían los pacos, nos metíamos en cualquier casa”, confirma Claudio. Esa puerta abierta era como darle otra vuelta al laberinto y desaparecer; en medio de la vulnerabilidad a la que se exponían al enfrentar a los uniformados, significaba pisar tierra segura. Pero ¿cualquier casa?

Es que la gente te recibía en las casas porque eran casas de conocidos. Era, por ejemplo, la casa de la vieja que tomaba once con mi abuela, era gente con la que celebrábamos la Pascua o vendíamos cosas para el 18 u otras fiestas; o era el vecino con el que jugabas a la pelota, o la casa de la mamá de un amigo, la vieja que vendía jugo. Las típicas viejas de la pobla<sup>21</sup>.



Don Luis Fuentealba también se sentía protegido entre los suyos, como nos cuenta:

Yo era presidente de mi población y la misma gente te protegía. Vivía en el paradero 14 de Santa Rosa. Si fueran a preguntar por mí, rápidamente estarían avisándome que anda alguien buscándome. Además, hasta para sacarme les costaría, no solamente a mí, a muchos que eran iguales a nosotros. La mejor seguridad la tenías entre los tuyos, podías pasarte de una casa a otra, tenías todas las posibilidades<sup>22</sup>.

## Criminalización de la pobreza, allanamiento y relegación

“Llega mayo y la primera protesta, y la participación popular llega a extremos antes no imaginados”, señala un informe de la Vicaría que evalúa la represión durante 1983. En esta oportunidad la cantidad de detenciones aumentaron entre cuatro a siete veces más que en 1982, en tanto las atenciones del servicio médico se incrementaron cinco veces con respecto al mismo año<sup>23</sup>. Pero los cambios no solo fueron cuantitativos, también las modalidades se transformaron. En contraste con la represión estrictamente individual –que siguió subsistiendo–, se abrió la represión masiva, se agregaron la amenaza a gran escala, el toque de queda, la salida de las FF. AA. a la calle. Las medidas afectaron mayoritariamente a jóvenes de entre 18 y 22 años de sectores más populares<sup>24</sup>.

Debido a la vulnerabilidad del trabajo y a las altas tasas de cesantía, la confrontación se desplegó dentro y desde el barrio. También la represión se concentró territorialmente. De hecho, ocurrió una suerte de especialización. La Central Nacional de Informaciones (CNI) se concentró en los casos individuales, y Carabineros se encargó de la represión masiva. Sin descartar la actuación en conjunto. Después de la Primera Jornada Nacional de Protesta, y desde entonces como medida preventiva o punitiva, se montaron verdaderas operaciones de guerra contra los pobladores y sus casas. Una legión de helicópteros, autobuses, patrullas y gran cantidad de uniformados, con pasamontañas y sin ellos, siempre con bombas lacrimógenas y balas aleatorias, cercaron, allanaron y destrozaron lo que pudieron. La idea principal: el escarmiento y la paralización infundiéndole el terror.

Pero la opresión y exclusión de los pobladores durante la dictadura fue un proceso con distintas capas. Además de la dimensión estructural (pobreza, cesantía, hacinamiento), geográfica (segmentación clasista del territorio) y física (castigo a los cuerpos), hubo permanentemente una opresión simbólica, es decir, ellos eran objeto de una mirada violenta que los injuriaba y perseguía constantemente, una representación que los mostraba ante la opinión pública como sujetos peligrosos, delincuentes, cómplices del “extremismo comunista internacional”. Todo ello era equiparable. La sociedad debía temerles y aislarlos. Fue una campaña abierta y persistente, apoyada por una compleja red de

mediaciones dirigidas a criminalizar la pobreza y su protesta, encabezadas principalmente por medios de comunicación oficialistas. Una campaña que llamaremos “opresión en la mirada”. Se trató de un repertorio de calificativos, juicios y prejuicios con que la dictadura los representaba, justificaba cotidianamente la violencia hacia la periferia y despreciaba sus vidas; fueron valores y marcos interpretativos que ordenaron y definieron un determinado modo de vida social.

En esa redefinición de las formas de estar juntos se instauraron temores y desconfianzas recíprocas que aún perduran como estigmas sociales. “Nuestros miedos tienen historia”, dijo Norbert Lechner, preocupado por comprender el origen de las patologías sociales que afectaron a la sociedad posdictatorial<sup>25</sup>. Años antes, en plena dictadura, una periodista también percibía en la voz de sus entrevistados ese sentimiento: “Chile está dividido en dos países claramente definidos que no se miran, no se tocan y no se conocen; pero se intuyen y se temen”<sup>26</sup>.

La desmedida crueldad y venganza contra los más pobres se expresó de distintas maneras, pero la violencia –sutil o manifiesta, material o simbólica, objetiva o subjetiva– fue una constante, más aún después de mayo de 1983. A través del monopolio de los recursos de expresión, la violencia se instauró como un sistema permanente de humillación, control y disciplinamiento. Además de los allanamientos, golpes y detenciones, otra forma de castigo que afectaba a la disidencia política en general y a los pobladores en particular era la relegación. Aunque el “exilio interno” hacia lugares apartados del país aumentó desde el inicio de las Jornadas Nacionales de Protesta, durante octubre y noviembre de 1984 –fecha de instauración del estado de sitio– alcanzó cifras sobresalientes.

## **Relegados**

Años	Vicaría de la Solidaridad	Comisión Chilena DD. HH.	Estimación
1976	78		78
1977	49		49
1978			
1979	1	1	1
1980	106	106	106
1981	77	60	77
1982	66	81	81
1983	127	127	127
1984	727	733	733
1985	168	169	169
1986			
1987	3	3	3
1988			
1989			
TOTAL	1.402	1.280	1.424

Fuente: Comisión Chilena de Derechos Humanos<sup>27</sup>.

Detallemos el contexto en que los números se multiplican. Después de decenas de atentados contra la red eléctrica santiaguina realizados por las Juventudes Comunistas y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y de que un coche bomba estallara frente al edificio Diego Portales, símbolo del poder administrativo de los militares, previo a la jornada de protesta y paro de octubre de 1984, las autoridades dispusieron agresivos operativos en las poblaciones de Santiago. Carabineros y civiles con gorros pasamontañas ingresaron a las humildes casas para conducir a decenas de detenidos hacia las comisarías cercanas<sup>28</sup>.

Simultáneamente, hasta la Vicaría había llegado la información que señalaba que en la aislada localidad de Pisagua Viejo, en el norte de Chile, se levantaban carpas del Ejército con capacidad para albergar a seiscientas personas y que la zona estaba declarada bajo control militar. La relegación de los detenidos durante los allanamientos confirmó las sospechas. Se trató del contingente de relegados más numeroso registrado hasta entonces. Sin explicaciones, sin proceso, citando sencillamente el artículo transitorio N° 24 de la Constitución de 1980, solo entre el 21 de octubre y el 30 de noviembre de 1984 fueron enviados en permanencia involuntaria 550 personas, que las fuentes oficiales calificaron como “escaperos, cogoteros y otros delincuentes comunes”. Una vez más, los medios de comunicación masivos y oficialistas colaboraron en la tarea de, por un lado, entregar las justificaciones morales, explícitas y reiterativas que necesitaba el régimen para continuar reprimiendo y reproduciéndose, y, por otro, en borrar las diferencias, no sociales, no estructurales, sino ideológicas y culturales bajo un sistema de creencias y normas que regularon la vida social. Según la prensa y el gobierno se trataba de limpiar a la periferia (antes y después de la jornada de protesta y paro de octubre) del “brazo delictual del extremismo”. Así lo refería el editorial del diario La Tercera:

De esta manera, el lumpen que fue utilizado en el pasado para crear el caos a través del pillaje y la destrucción sistematizada de bienes de toda naturaleza, no podrá sacar la cara por los violentistas... obligará a los extremistas a dejar sus cómodos escondites para llevar a cabo la labor de saqueo que los antisociales

desarrollaban a cabalidad ante la promesa de un suculento botín<sup>29</sup>.

Las autoridades aseguraron que “los delincuentes” serían objeto de un “tratamiento de rehabilitación social”. Ello justificaba el encierro por tres meses en un campamento militar cercado por alambres y custodiado por personal uniformado, en absoluta incomunicación física y epistolar. El diario La Segunda fue uno de los pocos medios que tuvieron acceso al campamento. En calidad de enviados especiales, un fotógrafo y un reportero se encargaron de dar seguimiento e informar sobre el destino de los pobladores, desconocido hasta entonces para sus propios familiares y vecinos. Veamos algunos ejemplos de su entrega informativa:

<b>1984</b>	<b>Titular</b>
29 de octubre	Para “limpiar” de delincuentes los sectores populares: 135 re
07 de noviembre	Exclusivo: La Segunda en el campo de relegados de Pisagua
07 de noviembre	Hablan los relegados de Pisagua
08 de noviembre	Las fotos exclusivas de nuestro enviado especial a Pisagua
27 de noviembre	Ministro Cuadra habló sobre la acción de los terroristas

En los antecedentes de los relegados que fueron analizados por el equipo jurídico de la Vicaría y la Comisión Chilena de Derechos Humanos efectivamente se comprobó que muchos de ellos habían tenido en algún momento de su vida ficha policial por delito común; no obstante, habían cumplido las penas respectivas, habían sido declarados en libertad por falta de méritos o se encontraban firmando en libertad bajo fianza; además –y esto era lo más grave de la situación–, ninguno se encontraba al momento de su detención cometiendo delito alguno. Por otro lado, según señalaba uno de los recursos de amparo presentados en favor de los relegados:

Preocupa profundamente la seria presunción de que un número importante de afectados no se encuentra en ninguna de las calidades que genéricamente la autoridad administrativa caracteriza como “delincuentes comunes”. En efecto, existen antecedentes serios que permiten presumir que, en algunos casos, la medida afecta a dirigentes vecinales, poblacionales, gremiales o políticos<sup>30</sup>.

Más grave resultaba la situación si tenemos en cuenta que en momentos en que estos reportajes llenaban las páginas de la prensa oficialista, se instituyeron distintos decretos que censuraron a los medios disidentes. Desde el 8 de septiembre de 1984 les estaba prohibido publicar imágenes y fotografías. A partir del estado de sitio, sus números fueron requisados y a seis medios de prensa escrita se les cortó abruptamente su publicación durante un período de seis meses. Las radioemisoras, por su parte, única forma de divulgar masiva y rápidamente las informaciones, fueron silenciadas en reiteradas ocasiones, preventivamente antes de las jornadas, o después como represalia.

Los allanamientos, las relegaciones y la campaña mediática se redoblaron después del estado de sitio. El periodista corresponsal de La Segunda insiste en recrear un ambiente casi idílico de rehabilitación que respaldaba las declaraciones del ministro de Defensa: “Los relegados están viviendo en condiciones bastante humanas, como vivirían los mochileros que salen a recorrer Chile, y que viven en las playas. Están viviendo en carpas, junto al mar, hay una buena playa, hay un hospital”<sup>31</sup>.

Pero lo que en realidad sucedía en este campo de prisioneros era lo propio de un estado de guerra, por lo que el Colegio de Abogados A. G. manifestó su preocupación por las irregularidades del proceso:

Las operaciones denominadas “registro de poblaciones”, con el fin de aprehender delincuentes comunes o subversivos, afectan de manera discriminatoria a los sectores marginales más pobres y desposeídos de nuestra población... debemos agregar que las relegaciones masivas se han llevado a efecto impidiendo a los afectados no solo el derecho a defensa, sino que incluso la posibilidad de asistencia y visita por parte de sus familiares<sup>32</sup>.





■ *Allanamiento al Campamento Raúl Silva Henríquez. Estado de sitio. Noviembre de 1984 (ADVS).*

Un medio de la Iglesia que podía esquivar la censura nos permite conocer parte de los sentimientos que la afrenta producía entre los más pobres. Escuchemos el testimonio de la pobladora Marta Camilo Véjar, del Campamento Raúl Silva Henríquez:

Sentí una impotencia enorme al ver que se llevaban a mi marido y no poder hacer nada. Ellos no tenían por qué meterse en mi casa... Ahora me siento mal en ella, también en el campamento; por mí me fuera de aquí mañana mismo, porque no me siento protegida, siempre con el temor de que vuelvan, o vayan a la casa de algún vecino. Y yo no estaba mal antes, a pesar de que somos hartos pobres; tenemos una pieza de madera, allí está todo, la cocina, nuestras camas, todo. Y ellos se metieron en nuestras cosas, se metieron en todo lo que es de nosotros. Estoy asustada y como humillada también<sup>33</sup>.

El marcado carácter clasista de la represión lo confirman desde el inicio de las protestas los archivos de la Vicaría de la Solidaridad: “Entre más modesta o desprotegida parezcan los detenidos, más se descarga la violencia o los malos tratos contra ellos”<sup>34</sup>. Temor y humillación, dos palabras que definieron la sensación que perduraba en la periferia.

Después de estas experiencias –entre cientos imposibles de detallar aquí–, lo que extraña no es que las modalidades de la protesta cambiaran desde 1985, ni que bajaran de intensidad o que tuviesen altos y bajos hasta 1987. Considerando el cuadro represivo y la geografía de las balas, lo que realmente invita a la reflexión es que las protestas no hubiesen terminado antes.

■

<sup>1</sup> [Tironi, Eugenio. “Pobladores e integración social”. Propositiones N° 14, Santiago, 1987, pp. 67 y 64.](#)

<sup>2</sup> Entre 1960 y 1984 la juventud urbana pasó de un 69% a un 85%.

<sup>3</sup> Rodríguez, Alfredo. “Veinte años de la poblaciones de Santiago” (Resumen de investigación). En: Propositiones N° 14, Santiago, 1987, p. 37.

<sup>4</sup> Ver: Rodríguez Alfredo y Lucy Winchester. “Santiago de Chile: una ciudad fragmentada”. SUR. En línea: [http://www.redligare.org/IMG/pdf/santiago\\_chile\\_ciudad\\_fragmentada.pdf](http://www.redligare.org/IMG/pdf/santiago_chile_ciudad_fragmentada.pdf); Rodríguez, Alfredo y Paula Rodríguez. “Santiago, una ciudad neoliberal”, Sur, ONG Cordillera, Red iniciativa ciudadana de La Florida. En línea: [http://rediniciativaciudadanalaflovida.cl/wp-content/uploads/downloads/2011/07/Santiago\\_neoliberal\\_junio\\_2009\\_Fabio\\_Vel](http://rediniciativaciudadanalaflovida.cl/wp-content/uploads/downloads/2011/07/Santiago_neoliberal_junio_2009_Fabio_Vel).

<sup>5</sup> De Ramón, Armando. Santiago de Chile. Historia de una sociedad urbana. Catalonia, Santiago, 2007, p. 252.

<sup>6</sup> Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo, Memoria de la izquierda chilena. Javier Vergara (editor), Santiago, 2003. Vol. II, p. 25. Ver: Garcés, Mario. Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. LOM, Santiago, 2002.

<sup>7</sup> Rodríguez, Alfredo. Veinte años de las poblaciones de Santiago. Op. cit., pp. 32-34. Según el historiador Armando De Ramón, el “allegamiento” afectaba a unos 250 mil hogares y a unas 770 mil personas, es decir, al 18% de la población de Santiago. En 1983 vivían en la ciudad 152.046 familias allegadas, en las cuales la edad del “jefe de hogar” fluctuaba entre 18 y 34 años. De Ramón, Op. cit., p. 253.

<sup>8</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.

<sup>9</sup> Tironi, Eugenio. “Pobladores e integración social”. Propositiones N° 14, Santiago, 1987, pp. 68-69.

<sup>10</sup> Ibid., pp. 30-31.

<sup>11</sup> Politzer, Patricia, Miedo en Chile. Op. cit., pp. 235-237.

<sup>12</sup> Sobre la reconstrucción de la sociedad civil durante el régimen militar ver: Bastías Saavedra, Manuel. Sociedad civil en dictadura. Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2013.

<sup>13</sup> Razeto, Luis y otros. Las Organizaciones Económicas Populares. 1973-1990. Ediciones PET, Santiago, 1983, p. 35.

<sup>14</sup> Ibid., p. 296. También en: Razeto, Luis. Las Organizaciones Económicas Populares. 1973-1990. Ediciones PET, Santiago, 1983, p. 35. En el catastro habría que incluir otras organizaciones provenientes de los Comités de base de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y del Comité de defensa de los derechos del pueblo.

<sup>15</sup> Ramírez, Apolonia. Comprando juntos frente al hambre. PET, Santiago, 1986, p. 93.

<sup>16</sup> Salazar, Gabriel; Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile. Tomo IV. Hombría y feminidad. LOM, Santiago, 2002, p. 265.

<sup>17</sup> Vodanovic, Milena y Claudia Donoso. “Población La Victoria: un territorio diariamente conquistado”. Revista Apsi, 23 de septiembre al 6 de octubre, 1985, p. 12. Citado en: La Victoria. Rescatando su historia. Santiago, Arcis, 2009, pp. 123-124.

<sup>18</sup> Ramírez, Apolonia. Op. cit., p. 85.

<sup>19</sup> Ibid., p. 90.

<sup>20</sup> Vodanovic, Milena y Claudia Donoso. Op. cit. Estas organizaciones también recibían aportes de la iglesia y del extranjero para su funcionamiento, especialmente leche, aceite y harina.

<sup>21</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.

<sup>22</sup> Entrevista con Luis Fuentealba, 14 de octubre de 2010.

<sup>23</sup> Aumentó de un total de 241 atenciones en 1982 a 1.124 en 1983. “Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas”. Documento Vicaría de la Solidaridad. Diciembre de 1983.

<sup>24</sup> Cabe destacar que, según el informe, entre los sectores más reprimidos se encuentran los comerciantes ambulantes, “categoría social típica de la época”; ex trabajadores asalariados o exestudiantes que no pudieron continuar sus estudios

ni ingresar al mundo del trabajo por otra vía. Ibid.

<sup>25</sup> Lechner, Norbert. Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política. LOM, Santiago, 2002, p. 74.

<sup>26</sup> Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Op. cit., p. 11.

<sup>27</sup> “La privación de libertad”. Comisión Chilena de Derechos Humanos, s/info. 1989. Centro Documental Vicaría de la Solidaridad, p. 172.

<sup>28</sup> Según informes extraoficiales, en las redadas preventivas se habrían producido más de mil detenciones, entre ellas, solo en la población “La Legua” hubo más de 400 detenidos. Informe Mensual, N° 34. Octubre de 1984. Comisión Chilena de Derechos Humanos. Además ver: Solidaridad, N° 188. 3-16 de noviembre 1984; Informe Mensual. Octubre de 1984. Vicaría de la Solidaridad.

<sup>29</sup> Editorial “Relegación de delincuentes”. La Tercera, 30 de octubre de 1984.

<sup>30</sup> Recurso de amparo presentado por el abogado patrocinador José Luis Ramaciotti Fracchia, 15 de noviembre de 1984. Archivo documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>31</sup> La Segunda, 13 de noviembre de 1984.

<sup>32</sup> Informe Mensual. Noviembre de 1984. Vicaría de la Solidaridad.

<sup>33</sup> “Inviolabilidad del hogar: Un derecho sagrado”. Solidaridad N° 191, del 15 al 28 de diciembre de 1984, p. 10.

<sup>34</sup> “Represión en 1983: Realidad Ineludible”. Santiago, enero de 1984. Op. cit.

## CAPÍTULO IV

### CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA III: LOS ESTUDIANTES

Es la generación que leyó a Mampato, que inventó a Silvio Rodríguez, que creció en las fiestas de toque a toque robando la noche a los recatos de los diurnos funcionarios. La generación que “bronca porque es mejor tener el pelo largo que la libertad con fijador”. La generación de la bala y la flor en el ojal. Del primero de mayo y el pañuelo en el cuello. Del mitin céntrico y el rock por la Marilyn ausente. De la barricada y la marihuana...

La generación de la disciplina metida en cada poro y contestada en cada guiño,  
maldición.

John Lennin



■ *Avenida General Velásquez. 11 de octubre 1983 (ADVS).*

Los estudiantes universitarios y secundarios, muchachos y muchachas de entre 12 y 30 años, fueron uno de los principales contingentes en la lucha contra la dictadura. En ella crecieron y estudiaron, se unieron y rebelaron. Fueron parte de una generación que quería crecer para ser peligrosos, querían hacer algo para ajustar cuentas y, en ese afán, muchos dejaron de vivir antes de envejecer en esos años de la lucha callejera. Fueron alma y cuerpo de la desobediencia que tantas veces sublimaron; energía y fuerza en la protesta que protagonizaron. Fueron masa. Partícipes y creadores de formas de participación directa en la que se construyeron a sí mismos como sujetos políticos alzados contra la sumisión de unos y la dominación de los otros. Los secundarios hicieron suyas las calles del centro capitalino; los universitarios, sus facultades y sus bordes; a ambos los unía la rebeldía y los cuadernos con que muchas veces encendieron barricadas; los unía un sistema educativo que reproducía en las aulas la imposición de una estructura social, un sistema económico y una atmósfera de autoritarismo político.

En la organización y resolución de conflictos, en la disputa, en el combate desigual, reconfiguraron el espacio de fuerzas sociales y se constituyeron a sí mismos como movimiento; confrontaron su mundo cultural y político contra un sistema que reducía el campo de lo múltiple y se materializaba en una nueva organización social que requería legitimarse a fuerza de despolitizar, es decir, que necesitaba hacer desaparecer del campo de posibilidades las prácticas transformadoras y clausurar –¡como si fuese posible!– el taller histórico en el que se forja la experiencia y el espíritu de los cuerpos que conforman lo social. Entonces, se escucharon las jóvenes voces que no aceptaron el pacto silencioso de la muerte (lo acabado) y continuaron. La lucha de los estudiantes contra la dictadura se trató, en lo profundo, de la conquista por la libertad de ser, de querer ser, querer liberarse del sometimiento, de la humillación, la negación, y crear, modificar, labrar la forma que habría de tener su propia existencia en la calle, el aula y la vida.

Al calor de las Jornadas Nacionales de Protesta, los estudiantes encontraron el fermento para aglutinar la organización que hasta entonces era molecular e idearon sus propias formas para canalizar las prácticas libertarias. Si la noche era



de los pobladores, de los estudiantes era el día. A los secundarios se les vio congregarse en las puertas de la Biblioteca Nacional; en Plaza Baquedano o en la esquina de Cumming con la Alameda, muy cerca del combativo Liceo de Aplicación. Su desfile se prolongaba en cortos trayectos porque no pasaba mucho para que los carabineros llegaran a reprimirlos con palos, lacrimógenas y carros lanzagua; entonces se les divisaba correr con sus uniformes empapados, dispersarse y reunirse obstinadamente en puntos reconocidos de antemano. Niñas y niños valientes y ágiles continuaban desde sus esquinas pifiando al sistema y burlándose de sus autoridades. Diestros en los recovecos de la ciudad, sabían moverse y escabullirse, portaban mochilas cargadas de lápices, piedras, hondas, carteles, panfletos y molotov e intervenían el tiempo de los burócratas con barricadas levantadas en el cuadrante político-administrativo de la ciudad.

A los universitarios se les divisaba alborotando y expandiendo el día desde la médula hacia los contornos de sus establecimientos. El tiempo era estratégico. Los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile sabían que la mañana era el momento para armar el mayor alboroto posible en el puente Pío Nono, un lugar decisivo para ser vistos, levantar manos y pancartas y detener el tráfico capitalino en su hora pico. Los del Campus Oriente llevaban el pulso de los ánimos en la Universidad Católica, atraían a los curiosos y desafiaban a la cuna del gremialismo con representaciones artísticas, quenas y teatro, asambleas y otros encuentros multitudinarios que se alojaban en sus patios; alguna que otra vez también salían a la calle a cortar una ruta transitada preferentemente por sectores medios y altos.

Después del mediodía era el tiempo de las demostraciones más combativas que activaban la fuerza vital juvenil y encendían los ánimos en el sector de Macul con avenida Grecia, sede del ex Pedagógico y de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Chile; también en las avenidas cercanas a la Facultad de Medicina Norte e Ingeniería. Entre las multitudes que se congregaban en los actos político-culturales, después de escuchar las guitarras combativas y las palabras de dirigentes políticos, poblacionales y sindicales que con regularidad eran invitados (y después que algunos se retiraban a sus casas), venía el momento en que grupos de muchachos subían hacia el rostro los pañuelos que bordeaban sus cuellos y salían a tomarse la calle. Para ello se encargaban de acarrear cuanto encontraran a su disposición para cortar los accesos de sus universidades y convertirlas durante ese tiempo en un territorio liberado que defendían entre balines y lluvias de lacrimógenas que tornaban el aire irrespirable.

Después de la protesta estudiantil, muchos de ellos se plegarían a las jornadas territoriales nocturnas y seguirían tirando piedras en sus poblaciones; al día siguiente, los jóvenes agitadores evaluarían y planificarían las acciones siguientes. No había momentos para descansar porque así era este tiempo. Así nos explica Aspasia, en ese entonces estudiante de la Universidad de Santiago (Usach):

Nosotros teníamos un sentido de urgencia, y cuando tienes un sentido de urgencia, en general lo enfocas para lo que tienes que hacer, no hay más allá, es lo que te hace levantar todos los días, no tienes tiempo de estar pensando para allá, yo no pensé jamás, por ejemplo, que en tal fecha vamos a pensar en un plebiscito, en un sí o un no, jamás. Ese no era el punto, el punto era generar organización<sup>1</sup>.

La organización y la acción del movimiento estudiantil durante los años 80 estuvieron sostenidas, caracterizadas y prefiguradas por la militancia al interior de partidos políticos. En general, se trató de un contingente bastante disciplinado y comprometido de jóvenes y adolescentes que ingresaron o retomaron vínculos congelados tras la llegada de los militares. Quien puede darnos cuenta de ese proceso es Edgardo Díaz, en aquella época conocido como el Chico Alejandro, encargado del área estudiantil de las Juventudes Comunistas. Lo de él era dar conducción política, conversar y formar cuadros; viajaba por todo Chile de lunes a domingo para apoyar en la planificación de acciones, dar orientaciones, aunque estaba consciente de que más allá de los esfuerzos políticos del partido, había un terreno que pertenecía a la esfera del propio movimiento e iniciativa autónoma de los muchachos. La militancia de los estudiantes dentro de partidos políticos fue la pieza fundamental que permitió la construcción de un movimiento en el que le tocó participar desde sus inicios como estudiante de la Universidad de Chile:

Si no hay organizaciones políticas, no hay movimiento. No habría sido posible. Toda la gente, o la mayoría de la gente que jugó algún rol en la organización estudiantil tenían una militancia política, era evidente. Eran muy pocos los que

eran independientes. Lo que también ocurría, era que mucha gente entraba a militar sucesivamente, es decir, entraban y después dejaban de militar, pero nosotros como “Jota”, llegamos a tener alrededor de 30 mil militantes en el país. Además eran militantes militantes, muy comprometidos<sup>2</sup>.

Muchos de estos jóvenes traían consigo símbolos, significados y banderas heredadas de una familia o un territorio con tradición política. Su conciencia juvenil se había formado dentro de un clima de sensibilidad que impulsaba hacia formas de hacer, entender y vivir la experiencia política. Otra vez, como en distintos cruces a lo largo de esta investigación, el golpe militar es un lugar grabado en la memoria; una lesión que dio significación emocional y material al ánimo rebelde de nuestros protagonistas y que al actualizarla en cada cruce de la reproducción dictatorial y represiva legitimó el ánimo de desquite. Fue el caso de Juan Alfaro, presidente del democratizado Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación en 1985 y de la reconstruida Federación de Estudiantes Secundarios (Feses) en el año 1986. Juan tenía doce años cuando comenzó a militar a nivel territorial en las Juventudes Comunistas, donde se formó y desarrolló el potencial político que más tarde llevó hasta su liceo:

Vivía en Pudahuel. Eran sectores populares de mucha efervescencia combativa. Mi población no era la más combativa, pero sí tenía mucho movimiento y eso a mí me abrió los ojos muy temprano; por lo tanto, prematuramente yo me incorporé a la militancia en la juventud comunista poblacional... Por derecho propio yo era comunista, ¡si venía de una familia comunista!... Rápidamente pasé a formar parte de una orgánica, tuve una misión, tenía una responsabilidad, tenía un objetivo, tenía un equipo. Entonces tuve un carrete poblacional bien enriquecedor, no sé si hice grandes aportes, yo creo que lo que más hice fue aprender, fue mi escuela<sup>3</sup>.

Quienes vivieron ambos procesos, es decir, militaron en sus territorios y en sus escuelas, aseguran que eran dinámicas muy distintas, provenientes de diferentes tradiciones de lucha. Sin duda, la brutalidad y la violencia represiva que se vivía al interior de las poblaciones no tenían parangón con las de los colegios o

universidades. En ese sentido, estas “eran más fáciles”, aunque debían enfrentar otros desafíos y desarrollar otras capacidades. Así fue la experiencia de Claudio Pérez cuando en 1986 entró a la educación media. Hasta entonces, el proceso de socialización política en torno a las protestas había transcurrido dentro de la población José María Caro. Su entrada al Liceo de Aplicación y cercanía con militantes y dirigentes como Juan Alfaro le abrieron nuevos referentes:

Muchos de ellos daban discursos como de bienvenida, súper significativos. Había reuniones, fui a mi primera marcha en el centro; nunca había ido a una. Me cambió todo el panorama, porque eran miles, y además era más fácil darles a los pacos porque estaban más expuestos. En el liceo había cosas concretas por las que pelear, y había que desplegar otro tipo de argumentos. Te encuentras con gente de la DC a la que no le gustaban las manifestaciones; te encontrabas con “fachos” y discutías con ellos, cosa que nunca vi en las poblaciones. Para mí fueron dos realidades distintas, aunque sumamente conectadas<sup>4</sup>.

Como señala Claudio Pérez, la construcción del movimiento estudiantil requería dialogar y sumar aliados, necesitaba congregarse en las mesas políticas a distintos referentes. Las protestas en este ámbito eran parte de la trayectoria del movimiento de protesta moderno y urbano desarrollado durante el siglo XX: un pliego petitorio, la capacidad discursiva de sus líderes, la impresión de volantes y pasquines, la discusión con otros referentes, reuniones y asambleas, ritos, símbolos y formas de movilización. Así, los jóvenes estudiantes levantaron plataformas de lucha con reivindicaciones que definieron a su movimiento y cohesionaron sus horizontes de acción. En la atmósfera de complicidad de “los cabros más movidos” se discutía, se ponderaba, se esgrimían argumentos y se proponían acciones.

Ahora bien, si decimos que los estudiantes fueron protagónicos durante las Jornadas Nacionales de Protesta, no decimos nada nuevo. El paso siguiente es desentrañar cómo y por qué se construyen sujetos en rebelión a través de un proceso de lucha y organización, definiendo los lazos históricos y los hechos políticos dentro de las jornadas y en sus propias organizaciones. Comencemos desplegando sus banderas reivindicativas:

---

Secundarios y universitarios

---

Democratización de las organizaciones estudiantiles

---

Término de la represión y de los servicios de seguridad en los establecimientos

---

Incorporación de los estudiantes expulsados y académicos exonerados

---

Investigación sobre los muertos y reprimidos en las Jornadas Nacionales de Protestas  
Universitarias

---

Derogación de la Ley General de Universidades de 1981

---

Secundarios

---

Inscripción gratuita a la Prueba de Aptitud Académica

---

Desde 1986, contra la segunda fase de traspaso de sus establecimientos a las municipalidades

---

Como podemos observar, tanto en la génesis de estas demandas como en su significado último está el reclamo por la democratización de la educación y los establecimientos expresado en todo el potencial subversivo que condensa la invocación a nivel gremial del principio de soberanía popular y libertad política. Pero la lucha por la democratización de la educación estaba íntimamente ligada a la democratización del país, demanda global de la que el movimiento estudiantil no podía ni quería sustraerse. El proyecto educativo de los militares, la derecha y el capital eran el espejo de un ordenamiento de la sociedad que los condenaba a muerte –en cuanto alternativa social y sujetos políticos–, y contra la imagen que ese espejo proyectaba, encarnada en la figura de Augusto Pinochet, los estudiantes se rebelaron. Cuando Juan Alfaro nos detalla la lista precedente, nos confiesa: “Finalmente, el resto de las “hueás” uno ni las hablaba; estábamos todos contra la dictadura y contra Pinochet, ¡si eso era lo que nos movía, eso nos movió! y eso originó en el liceo el motor humano que se generó y que fue tan enriquecedor”<sup>5</sup>.

## La ACU y el arte de rebelarse

Desde septiembre de 1973 fue disuelto el gobierno universitario, federaciones y centros de alumnos. La universidad fue intervenida y su autonomía rota con la acción militar e imposición de rectores delegados, integrantes de las Fuerzas Armadas que poco o nada entendían de universidad, pero con amplias atribuciones para “crear, modificar, refundir o suprimir” cargos, escuelas, carreras, programas, estatutos y normas de convivencia académica. Las cifras estimativas calculan en 20 mil los alumnos expulsados (15 a 18%), el 25% del personal docente y 15% de personal no académico. El gasto fiscal en educación por habitante hacia 1978 descendió en un 25% y con él disminuyeron los cupos anuales para estudiantes, el personal académico, los programas de investigación, de extensión. Fue el desalojo de la mirada crítica, de la creación de conocimientos y la reflexión de ideas.

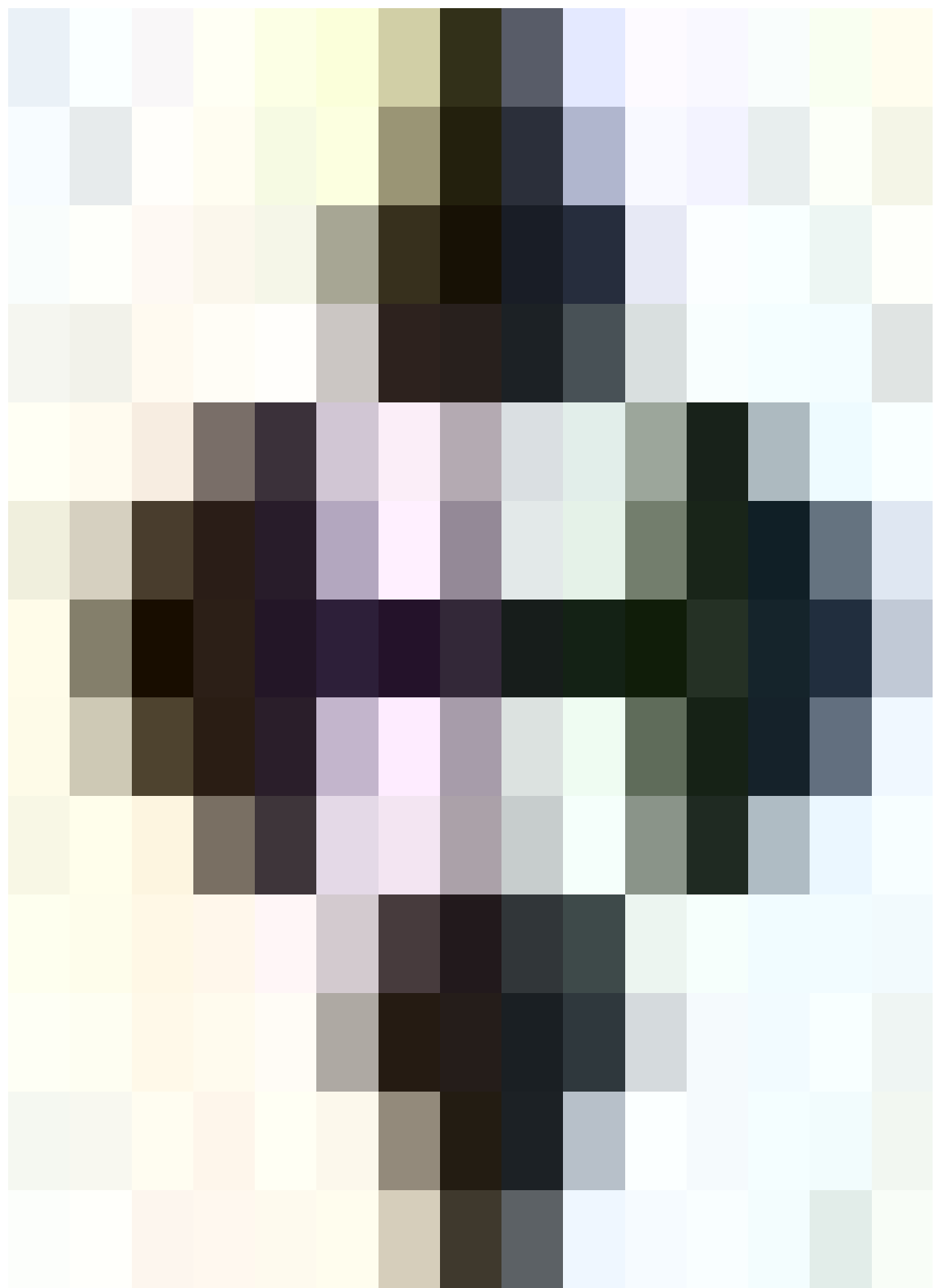
Por eso insistimos. El gran proyecto de la dictadura y del neoliberalismo fue la despolitización y atomización de la sociedad chilena. Fue la muerte y el exilio de la palabra. A fines de 1979, los principios de libre mercado se institucionalizaron con medidas jurídico-legales de carácter estratégico coronadas como las “siete modernizaciones sociales” que hemos explicado anteriormente. Economía y política, cultura y naturaleza, las transformaciones sacudieron cada molécula. Esencial para la reproducción del sistema de dominación y perpetuar la estructura de clases fue la reformulación del sistema educativo, lugar estratégico para formar una fuerza de trabajo funcional, un ser humano obediente y servil. Un reproductor de lo mismo.

Desde diciembre de 1980 hasta 1982 el 87% de las escuelas básicas y medias fueron traspasadas desde la responsabilidad estatal a las municipalidades. A estas les correspondería desde entonces contratar personal docente, ejercer un control político más directo y eficaz sobre el profesorado y velar por la sumisión de los alumnos a las reglas del orden impuesto. Por otro lado, y considerando que el Estado asignaría subvenciones a las municipalidades de acuerdo al número de alumnos, deberían esforzarse por captarlos. Entre sus consecuencias estructurales, la educación municipalizada profundizó los mecanismos de exclusión y segregación espacial, toda vez que los recursos inyectados al sistema

dependerán de las finanzas de los municipios. Por lo tanto, los alumnos de municipios ricos tendrán una educación completa y de alta calidad. Por contraste, será mucho más difícil para los alumnos de sectores periféricos, con educación deficiente, tener los conocimientos requeridos para aprobar la prueba de ingreso a las universidades o acceder a niveles superiores de estudio, vida o trabajo.

Debido a la agudización de la crisis económica, entre 1983 y 1986 el proceso de municipalización se congeló. Es interesante observar que durante este período – que coincide con las Jornadas Nacionales de Protesta– Chile tuvo un sistema educativo dual, es decir, unos establecimientos dependían del Ministerio de Educación y otros de sus municipalidades, cuestión que terminó por resolverse en noviembre de 1986, cuando se concretó el último 13% de los traspasos –679 escuelas básicas y 89 centros de educación media–, entre ellos los liceos más emblemáticos de Santiago. Desde entonces, la lucha contra la municipalización fue uno de los más importantes resortes de propulsión para el movimiento estudiantil secundario, que a esas alturas ya había alcanzado mayores niveles de maduración, organicidad, y protagonizó las protestas que se extendieron hasta el fin del régimen.





Si las guitarras revivieron y convocaron lo político en torno a las parroquias, algo similar sucedió dentro de la universidad. Los estudiantes se sobrepusieron al impacto y comenzaron a buscar formas de reunión, participación e idearon –o integraron– otros modos para articular la complicidad. A fines de 1977, a partir de la presentación de actividades artísticas creadas durante el año, nació la “Asociación Folclórica Universitaria”, que retomó tradiciones y prácticas culturales del quehacer universitario, y que a raíz de una mayor coordinación pasó rápidamente a llamarse “Agrupación Cultural Universitaria” (ACU), principal referente organizativo de la época<sup>6</sup>. Antes de eso, señala el dirigente del MAPU Ricardo Brodsky, “estábamos desparramados en nuestros núcleos clandestinos en los que cada uno iba encontrando y buscando un partido que lo vinculase a su manera a la historia de Chile, de la que habíamos sido arrancados”<sup>7</sup>. La ACU llegó a coordinar más de sesenta talleres en distintas facultades y desde su inicio repletó el Teatro Cariola con el cierre del Festival de Teatro o el Caupolicán –con más de cinco mil asistentes– en la final del Cantar Universitario. Por la naturaleza de su tarea, era una organización que tenía amplia capacidad para congregar y establecer lazos de comunicación entre todas las escuelas de la Universidad de Chile.

A fines de 1979 se abrió una etapa que inauguraría el declive de la ACU, que coincide con la imposición de la oficialista Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fecech) a cargo de las jóvenes promesas del régimen. Los estatutos que le dieron vida fueron intrincados, operaciones normativas pensadas para regular al movimiento estudiantil, despejar el camino al (re)nacimiento de la política en los claustros y dotar a la casa de estudios de un principio organizativo de carácter netamente gremial. Como declaración de principios fue descartada la alusión a elecciones “excesivamente masivas” y no pudieron ser más explícitos en su advertencia: “Las Federaciones de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile que se crean con el presente decreto no son continuadoras de la FECh”<sup>8</sup>. En octubre de 1978, con nombres que fueron designados y con voto dirimente para las futuras elecciones indirectas, asumieron las primeras directivas de los Centros de Alumnos y de la Federación. Con ese precedente –como reconoció más tarde Erich Spencer, primer presidente de la Fecech– el sistema quedaba “autoprotegido y apuntaba a que hubiera continuidad en el grupo que estaba a cargo del centro de alumnos”<sup>9</sup>. En abril de 1979, con la votación de 35 mil estudiantes en Santiago, se concretó el primer proceso electivo de 490 delegados de curso que el año entrante debería elegir a

los nuevos centros de alumnos. Sobre ese proceso nos explica Edgardo Díaz:

Lo que nosotros teníamos que hacer era elegir delegados por nivel y los delegados de nivel elegían al Centro de Alumnos... En ese minuto nosotros tomamos la decisión de integrarnos al Centro de Alumnos y así se iban ganando delegados, e incluso, en algunos lugares, especialmente en los pedagógicos, los Centros de Alumnos. Pero esa transición lo que significó fue que los políticos más activos, los que tenían mayor liderazgo, pasaron desde la actividad cultural a la actividad política, porque igual éramos los que éramos no más<sup>10</sup>.

Los sectores de oposición se alzaron en protesta contra la imposición de la nueva institucionalidad estudiantil. Comparando con lo vivido hasta entonces, 1980 fue un año de fuerte reactivación del movimiento estudiantil. En pasquines, pasillos y patios comenzaron a escucharse con más decisión los manifiestos de protesta contra la intervención militar en los planteles; contra los representantes designados; contra las sanciones que recayeron sobre alumnos movilizados y las masivas exoneraciones de profesores.

La disposición en tal campo de batalla también fue alentada por el anuncio del plebiscito para aprobar la Constitución Política de la dictadura. Para colmo, en las vacaciones de verano se supo de las exoneraciones que afectaron a connotados profesores y de la disminución de jornada para otros tantos, que las autoridades universitarias justificaron por necesidades de “racionalización académica y de carácter presupuestario”<sup>11</sup>. En parte era cierto, ya que el presupuesto para la educación superior fue disminuido y la Universidad de Chile fue afectada con el recorte de 120 millones de pesos y el traslado de tres departamentos del Campus Macul –el Pedagógico– a otras sedes. Pero había una decisión político-estratégica de fondo y pocos podían imaginar que el terreno se preparaba para liquidar a una universidad con presencia nacional y aislar a su sede más conflictiva, el Pedagógico, conocido como “el rincón más politizado de la U”<sup>12</sup>. Expliquémonos.

Desde marzo de 1980 hubo diversas movilizaciones en el Pedagógico, no tan masivas como las que se presenciaron en los años posteriores, pero con una buena cuota de amonestaciones que avivaron aún más la indignación y que en

una nueva curva del tiempo ayudarían a encender las fogatas y barricadas que fueron parte del paisaje durante las jornadas de protesta. A partir del segundo semestre, los estudiantes se alzaron contra los funcionarios de la llamada Coordinadora Académica, a la que se acusaba de ser un organismo de seguridad y espionaje dentro de la universidad. La acusación no era exagerada si consideramos que sus hombres se encargaban de pedir credenciales a la entrada y salida del campus; seguir el movimiento de los alumnos con un amplio dispositivo tecnológico a su disposición, o realizar rondas por los parques e incluso sacar fotografías.

Pero el miedo de los primeros tiempos disminuía y el discurso oculto quería gritarse al aire libre en las llamadas Jornadas de Noviembre del Pedagógico. Un buen día, un grupo de estudiantes se decidió a funar<sup>13</sup> a la Coordinadora: lanzaron huevos contra los funcionarios y las paredes de la oficina; pegaron pancartas, pifiaron, en fin, vociferaron sus sospechas. Las autoridades respondieron de inmediato con la apertura de un sumario interno y la suspensión preventiva de cuarenta estudiantes, muchos de ellos reconocidos dirigentes que ni siquiera habían estado presentes en los hechos. Durante el mes de noviembre, el conflicto del Campus Macul sobrepasó los muros y generó un amplio apoyo solidario contra las prácticas autoritarias que eran terreno parejo y escabroso para todos los planteles.

Su lugar privilegiado para la agitación y solidaridad, el debate entre referentes políticos, los encuentros artísticos y militantes del Pedagógico fue inhabilitado pocos meses más tarde. El primer día de diciembre todos los rectores delegados pusieron sus cargos a disposición del general Pinochet. El dictador les recriminó su falta de autoridad y anunció mano dura: “Cuando hay energía y la autoridad cumple como corresponde, no hay efervescencia en ninguna parte. Se acabó la efervescencia en las universidades”<sup>14</sup>. Aprovechando el período de vacaciones, el régimen decidió actuar y poner en marcha la reforma general del sistema de educación superior que venía debatiéndose dentro de los círculos gubernamentales. El 3 de enero de 1981 fue promulgada la Ley General de Universidades.

## “El que paga no tiene tiempo para meterse en política”

Por medio de un decreto promulgado durante el primer semestre de 1981, la Universidad de Chile perdió su carácter de universidad nacional con el despojo de sus sedes regionales, las que adquirieron vida propia como universidades independientes –con su propio rector y financiamiento–. También fue despojada del Instituto Pedagógico del Campus Macul, transformado en Academia de Ciencias Pedagógicas.

Con una clara intencionalidad política para fragmentar al movimiento estudiantil, las nefastas consecuencias de este desmembramiento impactaron en la formación de los futuros profesores con la considerable disminución de recursos, el aislamiento universitario y el cambio en la orientación social de su proyecto formativo. A lo largo de los años, tal decisión repercutió en la calidad de la totalidad del sistema educativo, cuyos efectos se extienden hasta el presente.

Referente crítico y bullicioso, “el Peda” era parte integrante de la vida académica y cultural de la Universidad de Chile. A sus profesores, maestros formadores de profesores, simplemente un día les dijeron que empacaran sus cosas. Así de simple. El desalojo quedó registrado en una carta anónima que circuló por canales alternos:

Teníamos la orden de retirar nuestras cosas personales y separar muebles y libros que irían a la Facultad y los que se quedarían en la Academia. Después de hacer lo que correspondía, decidí pasear por el Campus. Todos los académicos trabajaban en aquello que se les había pedido. Vi por avenida Grecia a destacados académicos acarreado cajas para empaquetar sus libros. Uno, dos y tres viajes bajo el sol sofocante. Entre ellos iba mi maestro, aquel que me enseñó a enseñar. Nadie hablaba, solo trataban de no ser atropellados. Seguí caminando. Más académicos con carretillas de mano cargadas de libros, mapas, trabajos de estudiantes dirigiéndose a sus vehículos<sup>15</sup>.

Entre otras consideraciones, la nueva ley estimuló la creación de universidades privadas “sin fines de lucro”, también de institutos profesionales y centros de formación técnica, que debían financiar sus actividades entendiéndose directamente con el mercado. Entre 1981 y 1988, la cantidad de establecimientos educacionales se triplicó, aunque la matrícula en las universidades, con respecto a 1973, se redujo considerablemente. El derecho de las universidades tradicionales para expedir títulos profesionales y grados académicos fue reservado para doce carreras consideradas de mayor “interés social y científico”, las que aumentaron su prestigio y vacantes<sup>16</sup>.

Fue un golpe tras otro. El Decreto con Fuerza de Ley N° 4, publicado el 20 de enero, sobre financiamiento universitario estableció el cobro de aranceles para los estudiantes a cambio del servicio recibido. Algo insólito. Hasta entonces se contemplaban pequeños desembolsos para la llamada “cuota de solidaridad” que, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Chile entregaban para el proceso de matrículas y servicios escolares, como el médico y dental, según la capacidad de pago de las familias. La cuota, que había ido aumentando notoriamente entre 1976 y 1978, pasó a denominarse matrícula diferenciada por tramos. Más allá de la situación económica de las familias, la docencia tendría un costo que habría que pagar. A los alumnos de las universidades tradicionales que no les alcanzaba para solventar sus carreras, el Estado les prestaría el dinero a través del Crédito Fiscal Universitario, reembolsable dos años después de egresados con un tasa de interés real del 2%.

Otra de las novedades fue el sistema de entrega de recursos a los planteles, en el que se introdujo “el más original e importante aporte del nuevo modelo universitario” que, según sus artífices, vendría a remediar la deficiencia académica: la competencia. Asumir el desafío competitivo contribuiría a mejorar la calidad y favorecería una mejor asignación de recursos. Los aportes directos o presupuesto basal que se entregaría cada año a los planteles debería ir bajando con el tiempo en aras de resaltar los indirectos, que son otorgados en proporción a la cantidad de alumnos matriculados que hayan obtenido los más altos rendimientos en la prueba de selección académica. Con el nuevo sistema y en la medida en que disminuyera su presupuesto directo, las universidades estarían obligadas a competir para captar los mejores estudiantes, expandir sus matrículas en las carreras más codiciadas y subir sus aranceles.

Otro mecanismo de financiamiento daba la posibilidad de concursar con proyectos en el “Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología” para financiar investigación y vender servicios a sectores privados. Desde entonces y hasta ahora se espera que un rector tenga dotes empresariales para captar y administrar eficientemente los recursos humanos y presupuestales. El papel del Estado en este modelo educativo lo explicitaron los rectores designados en 1983: “El objetivo fundamental radica en permitir un financiamiento con significativa participación regional y privada, bajo el rol tutelar del Estado, pero dentro de la más amplia libertad educacional y en un régimen de libre competencia”<sup>17</sup>.

El esquema de país se reproducía en el nuevo marco universitario. El fin de la gratuidad se presentó como un gran paso en favor de las clases desposeídas, paso que terminaría con la injusticia de financiar a los ricos. Curioso argumento que escondía uno de mayor calibre y que los partidarios del régimen debatían con preocupación: “La gratuidad fomenta el activismo político”. El diario El Mercurio, voz oficial de los sectores conservadores, entregaba su postura a mediados de 1980: “Si la educación es pagada, los jóvenes se dedicarán más a los estudios. La gratuidad de la educación superior fomenta el activismo”<sup>18</sup>. Álvaro Bardón, chico de Chicago, profesor de economía y ex presidente del Banco Central, advertía ante la reaparición de las protestas estudiantiles:

La negativa de las burocracias intelectuales a considerar convenientemente los aspectos económicos de las motivaciones humanas, la lógica del mercado y la importancia de la libertad como valores decisivos en la formación de una nueva institucionalidad, explica que no se avance convenientemente. Ser agitador universitario es agradable y de buen tono. Todos los admiran, y muy en particular los compañeros y compañeras. Además es gratis<sup>19</sup>.

En la misma línea argumentaba Claudio Illanes, vicerrector de asuntos estudiantiles de la Universidad de Chile, quien proponía “considerar en los aspectos estudiantiles lo relacionado con los cobros por los estudios, las exigencias académicas, el mejoramiento de la situación profesional de ciertas labores mal pagadas y la racionalización económica como presupuestos básicos para terminar con el activismo estudiantil”<sup>20</sup>. En definitiva, el proyecto histórico que promovió e impuso estas reformas apuntó al desmantelamiento del sentido

universitario y el compromiso político, con la urgencia de desentenderlo de los contextos en que se reflexiona y se discute.

Ante tamañas reformas, el incipiente movimiento estudiantil no tuvo capacidad de respuesta, la parálisis fue reforzada por la expulsión –o egreso– de sus principales dirigentes. Mil novecientos ochenta y uno fue un año de reflujo. También la ACU como aglutinador cultural experimentó su declive. Aunque su existencia se prologó formalmente hasta 1983, realizó sus últimos grandes festivales en 1981, debiendo sortear el acoso a figuras importantes de su agrupación<sup>21</sup>. A las medidas disciplinarias internas, se sumaron otras contrariedades que serían la tónica de los años siguientes: los insuficientes recursos destinados por el gobierno para el crédito fiscal y la atribución de las autoridades para subir los montos de los aranceles. No obstante, era evidente la dificultad de los estudiantes para establecer estrategias comunes. Entre los sectores movilizados, la principal divergencia se centraba sobre la elección de delegados. Mientras unos promovían el copamiento y transformación desde adentro de las orgánicas estudiantiles oficialistas, otros, como sucedía principalmente en la Escuela de Derecho y en Ingeniería, optaban por deslegitimar las elecciones llamando a la abstención<sup>22</sup>.

Fue a partir de los conflictos locales de las distintas escuelas que, en 1982, se fue reactivando el movimiento<sup>23</sup>. Durante el segundo semestre y con la cercanía del mes de septiembre –que llegaba con fuerza histórica y simbólica– comenzó a respirarse un clima de sensibilidad propio de la activación del entusiasmo político; eso sí, aún las motivaciones eran bastante diversas y no lograban traducirse en una plataforma común. Según la Comisión Pro Derechos Juveniles, durante 1982 más de 150 estudiantes se encontraban sumariados, y de las detenciones con carácter político, el 30% correspondían a universitarios. Pero aún faltaba aunar los ánimos y concordar estrategias democratizadoras, definir objetivos comunes y horizontes de acción. Eso sucedería durante 1983.



## “Las protestas nos fueron marcando el paso”

Desde el 11 de mayo de 1983, el movimiento estudiantil dio un salto cualitativo, se extendió por todas las regiones y pasó a una posición ofensiva. En la medida en que los universitarios trascendieron la defensa de sus derechos particulares y asumieron como propios los problemas nacionales, se convirtieron en actores de un fuerte movimiento social. Las jornadas permitieron la articulación de las demandas sectoriales con las de otros sectores sociales, especialmente las clases populares<sup>24</sup>. Aprovechando las movilizaciones, los universitarios reconquistaron y democratizaron todas las federaciones estudiantiles, incluso aquella que era el bastión de la joven clase política “pinochetista”: la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC. En palabras de un joven analista que hablaba desde dentro del movimiento estudiantil:

Luego de la derrota del 80, la emergencia de un nuevo ME (Movimiento Estudiantil) se vio favorecida, casi inducida, por la lucha nacional por la democracia. La universidad fue politizada por el país; el ME se constituyó para servir a ese proceso. Se nutrió de una fuerza que no había generado, pero supo canalizar y organizar energías políticas en un movimiento masivo y sobre todo muy activo de contestación. Mientras dicho proceso de protesta y movilización nacional seguía curso ascendente, el ME podía paralelamente avanzar internamente, fortalecerse, siguiendo los ritmos y exigencias de la lucha nacional<sup>25</sup>.

Si en la primera jornada se estimó que participaron cuatro mil universitarios de todo el país, en la segunda la cifra se más que duplicó<sup>26</sup>. En la ocasión, solo en la Universidad de Chile se concentraron más de dos mil estudiantes. Desde entonces, la participación fue aumentando en la medida que la identidad universitaria y su cultura política rebelde también se fue expandiendo. Pero atención, hasta ahora hemos recorrido testimonios de dirigentes con formación política, motores humanos que aportaron a activar los ánimos y generar

organización, pero debemos considerar que buena parte de los muchachos –quizá la mayoría– llegaban a la universidad sin tener mucha idea a qué se refería ese territorio proscrito. En ella lo fueron descubriendo. Fue el caso de “Miguel”, estudiante de la Universidad del Norte que ingresó a un mundo que poco a poco se le fue revelando desde que en 1983 “apareció la política”: “Nos juntábamos los mirones y escuchábamos, fuimos conociendo los planteamientos de la oposición y cuestionando a la federación. Ese verano me dediqué a informarme un poco más”. Al fragor de esos años, “Miguel” ingresó al Partido Socialista y llegó a ser miembro de la Federación de Estudiantes democratizada:

Hasta ese momento no sabía absolutamente nada de lo que había pasado después del 11 de septiembre del 73. No tenía idea de que habían matado gente, de que todavía quedaban presos y había miles de exiliados, no sabía nada. Recién el 83 vine a saber que hasta en la zona del fundo habían matado gente. Lo que no salía en El Mercurio o en Televisión Nacional, yo no lo sabía... La política también apareció entre los compañeros con los que compartía un departamento. Antes se hablaba de cualquier tema, pero ese año empezaron las discusiones porque el Flaco ya era claramente de oposición y el otro era muy de derecha<sup>27</sup>.

Lo que significó ese año para la organización estudiantil fue evaluado por Gonzalo Rovira, militante de las Juventudes Comunistas, entonces presidente del Centro de Alumnos de Filosofía de la Universidad de Chile, en una entrevista hecha por la revista La Bicicleta:

Se creó conciencia de que éramos capaces no solo de pelear, sino también de ganar. Lo más importante del año 83 fue que, después de diez años, el movimiento estudiantil salió a ganarse la calle. Las protestas nos fueron marcando el paso y definiendo los momentos. Esto nos permitió ordenarnos un poco en función de objetivos claros. ¿Qué objetivos? La creación de una federación única de estudiantes y la reivindicación de los problemas estudiantiles, que se vinculaban a la problemática política nacional a través de la movilización estudiantil. Por eso consideramos vacía la distinción entre los que plantean salir a la calle y los que plantean analizar más profundamente los

problemas<sup>28</sup>.

La última parte de la respuesta de Rovira es interesante en la medida que nos muestra el problema permanente que vivió y debió resolver el movimiento estudiantil, y que no era otro que la clásica discusión entre quienes defendían la acción directa de carácter confrontacional, y quienes argüían que ello restaba masividad a la lucha, privilegiando los métodos pacíficos. La disputa nunca logró resolverse del todo, y las actividades organizadas en los días de protesta comenzaron a tener dos partes, una para cada sector: al acto central de carácter masivo proseguiría un cierre callejero al que se quedaban los que querían combatir (la disputa llegó al punto que en algunas ocasiones se realizaron actos paralelos con formas y contenidos diferentes).

Pero más allá de su postura sobre la pertinencia de la violencia, los dirigentes se enfrentaron con una realidad que dentro de la universidad era ineludible y desconocerla / negarla / evitarla les hubiese significado quedar fuera del movimiento, como señala Ricardo Brodsky: “Las protestas nos cambiaron la cancha y nos plantearon nuevos desafíos, como dar una conducción adecuada a una movilización muy masiva y que tenía en su seno a grupos híper radicalizados”<sup>29</sup>.

Ante la renovada presencia del movimiento estudiantil, el 20 octubre de 1983 el editorial de El Mercurio argumentaba en favor de un reciente discurso de Augusto Pinochet en contra de la gratuidad en la educación “promovida por el comunismo”, demanda que revivía con el movimiento de protesta. En sus párrafos se lee:

El Jefe de Estado planteó la atracción de la consigna de la total gratuidad de los estudios desde el nivel básico hasta el universitario constantemente voceada por los impulsores de dicho movimiento, quienes, por lo demás, lo hicieron durante las dos últimas décadas, en especial en el período de la reforma, origen de males aún no superados en los claustros... Una de las medidas acertadas de la actual administración fue concluir con la gratuidad de los estudios, configurando, a la vez, mecanismos de crédito fiscal para aquellos alumnos de recursos limitados que no estuvieran en condiciones de costear de contado su permanencia en

alguna carrera. El activismo político de diverso cuño se ha visto reducido sustancialmente, porque a los educandos del nivel superior, a diferencia de lo que ocurría en otra época, debe importarles su rendimiento académico, pues la repitencia tiene un costo<sup>30</sup>.

De volverse a instaurar la gratuidad, sostenía El Mercurio, el activismo se intensificaría. He ahí la gran advertencia que se repetía insistentemente. El germen de los agitadores resurgía con fuerza en la vida social y el espacio público. Como pesadilla. Ni las reformas, ni la intervención militar ganaban en el mundo del pensamiento. A esas fuerzas recobradas y potenciadas a partir de los sucesos nacionales de protesta se refería, en una entrevista hecha durante esos meses, el demócratacristiano Yerko Ljubetic, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho:

Esa toma de conciencia se ha acentuado este año porque es indudable la influencia que en la universidad ha tenido la enorme efervescencia que se ha dado a nivel nacional y de la cual los jóvenes no han permanecido ajenos pese a los denodados esfuerzos realizados por la autoridad y por los organismos obsecuentes del régimen... lo nuestro es simplemente la democracia que gana y gana terreno aún en medio de esta universidad cautiva... Hoy, aunque al régimen parezca sorprenderle o irritarle, los jóvenes, a través de una profunda reflexión sobre un ayer, un hoy y un mañana, son –y serán– capaces de construir su propia historia y ser sujetos de una nueva sociedad auténticamente democrática<sup>31</sup>.

Efectivamente, 1983, año de la toma de conciencia, del despertar y medir fuerzas en la calle, también amenazaba al régimen con su correlato en el proceso democratizador que iba ganando espacios dentro de las facultades; de hecho, tomando la delantera, las universidades regionales encabezaban el proceso con la conquista de cuatro federaciones. Ejemplo inspirador para las santiaguinas, que hacia ese objetivo proyectaron 1984, “año de democratización de las universidades”<sup>32</sup>.

Si los trabajadores, conjugando la exigencia “Democracia ahora”, iniciaron el año con el propósito de impulsar y conducir un paro nacional contra el

congelamiento de los reajustes y exiguos salarios –entre una larga lista de demandas–; y los pobladores se alzaban contra la cesantía, el hacinamiento y la represión, para los estudiantes el año académico comenzó con la consigna “No al alza de aranceles”. En efecto, las autoridades de las 24 universidades e institutos profesionales que recibían aporte fiscal habían anunciado entre un 17 y un 28% de aumento en los aranceles de sus carreras. Ante las críticas, el ministro de Educación Horacio Aránguiz, en plena crisis económica, era enfático al señalar que el gobierno respetaría la autonomía de las corporaciones en la fijación de sus valores de matrícula y que estos nos serían rebajados ni congelados, ya que eso implicaría “regresión social”<sup>33</sup>.

La disposición para protestar fue canalizada en la primera jornada de 1984. Mientras la prensa seguía paso a paso el conflicto o los “disturbios estudiantiles” como preferían llamarle, el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, solo expresaba el deseo de que “estos focos de problemas sean resueltos próximamente”. Lo mismo anhelaba Augusto Pinochet en un tono más amenazante:

La ciudadanía, atónita, ha visto cómo nuevamente estamos ante un claro intento de politización de los claustros, que tanto daño causó a nuestras universidades antes de 1973... El gobierno no permitirá que las universidades se transformen en bases para la acción subversiva, al margen de la Constitución y las leyes, y velará porque las actividades académicas se realicen en forma normal<sup>34</sup>.

Si a nivel nacional, después de la palidez de la Novena Jornada Nacional de Protesta del 11 de mayo de 1984 –desarrollada durante la segunda etapa de las protestas, que llamamos “La discusión”– y hasta las jornadas de septiembre, se percibió un bajón o desgaste que acusaba cierta pérdida de iniciativa de la oposición; el debate intelectual sobre el sentido de la movilización popular, y discusiones internas de las organizaciones de trabajadores, enfrascadas en buscar el momento propicio para convocar al paro nacional como meta principal del año, en el caso de los estudiantes el curso de la corriente fue distinto; se les apreció en alza. En el transcurso de 1984, los estudiantes, con su dinamismo ruidoso y organizado, devolvieron de alguna manera la inyección de impulsos y motivaciones que habían absorbido del movimiento social durante 1983.

El Paro Nacional Estudiantil del 12 de abril de 1984 concentró sus demandas contra la represión y el esclarecimiento de los asesinatos de estudiantes durante las protestas y el fin de la intervención militar y de la ley de autofinanciamiento en las universidades. Pero tras el pliego había algo más, como reconoció Manuel Tobar, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. Su objetivo político quería “incidir en la unidad del movimiento estudiantil a nivel nacional; avanzar en término de constituirse en un peso específico contra la represión que aplica la dictadura y demostrar que el movimiento estudiantil está adquiriendo una fuerza espiritual y una gran combatividad que lo hace capaz de permeabilizar a otros sectores juveniles en su lucha”. Hacerse escuchar, sentir y respetar, una aspiración que propiciaría el fin de la dictadura: “Estamos expresando a una generación que, de acuerdo a lo que dice el general Pinochet, dirigirá al país cuando él se vaya. Y resulta que esa misma generación quiere su renuncia ahora, porque esa generación quiere participar y quiere dignidad ahora”<sup>35</sup>.

## “Con el paro, con la FECh, a botar a Pinochet”

Después de mayo de 1983, los sectores opositores de la Universidad de Chile constituyeron la Coordinadora de Centros de Alumnos Democráticos. En frontal oposición a los estatutos de la Fecech, convocó a consultivos y discusiones acerca de la representatividad estudiantil, y encabezó las últimas batallas por democratizar la federación. A comienzos de 1984 la disidencia ya controlaba catorce de los diecisiete centros de alumnos, pero fueron las votaciones en la Facultad de Ingeniería –que agrupaba por lejos a la mayor cantidad de alumnos– las que marcaron el fin de la federación oficialista<sup>36</sup>.

Hasta entonces se había ensayado en Ingeniería una suerte de paralelismo orgánico entre una directiva afín a la Fecech y una de oposición, cuestión que se dirimió a favor de la izquierda cuando en las elecciones del 17 de mayo el 56,5% de los votantes aprobaron la propuesta de democratizar el Centro de Estudiantes, y tres semanas más tarde la mayoría absoluta eligió como representante al socialista Ricardo Herrera. Fue una importante victoria. Al día siguiente, la Fecech anunció su disolución acusando que:

Un número importante de directivas de centros de alumnos de la Universidad de Chile se ha marginado de la Fecech durante este año, alentando la iniciativa de revivir los esquemas politizadores y politizados de la antigua FECh (...) amenazan volver a sumir a esta casa de estudios en el asambleísmo, la demagogia y la violencia profundamente ajenas a los verdaderos sentimientos e intereses del estudiantado<sup>37</sup>.

Previendo el escenario que se aproximaba con este último tiro de gracia, el rector Roberto Soto Mackenney decretó la autonomía estudiantil en la Universidad de Chile. La autoridad, dijo el rector, “no reconoce a ninguna entidad estudiantil en particular, en atención a la más plena y amplia libertad de asociación del alumnado”. Al igual que la “libertad de asociación sindical”, creada para

atomizar y debilitar a las organizaciones de trabajadores, la rectoría permitiría la existencia de distintas asociaciones estudiantiles que tendrían el mismo reconocimiento y representatividad ante la autoridad, aun cuando fuesen respaldados por el 1 o el 60% del estudiantado. La Coordinadora de Centros de Alumnos Democráticos actuó con premura para definir un itinerario que impidiera el paralelismo orgánico y que culminaría en la elección de la nueva Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECh.

Desde 1972 que no se vivía algo así en la Universidad de Chile. Además, contrariamente a lo que pasaba a nivel de cúpulas políticas de carácter nacional, como las lejanías, los efímeros acercamientos y mutuas críticas entre los altos mandos de los principales partidos de oposición, que en esos momentos sostenían un tenso intercambio epistolar sobre la legitimidad de utilizar “todas las formas de lucha” contra la dictadura y el lugar en que se ponderaba la violencia política, en las elecciones de la FECh los dirigentes estudiantiles de los tres grandes bloques de oposición –Alianza Democrática, Movimiento Democrático Popular y Bloque Socialista– decidieron ir juntos en la lista denominada “Unidad Democrática”. La lista tendría carácter abierto, es decir, los cargos se dispondrían según la cantidad de votaciones.

Dentro de la DC hubo debate, por no decir rencillas, celos y confrontaciones verbales. Los militantes universitarios debieron enfrascarse en fuertes discusiones con personeros de la mesa nacional de su partido –principalmente del sector de Patricio Aylwin– que se negaban a cualquier tipo de alianza política con el Partido Comunista y que no les caía nada en gracia la posición autónoma de los muchachos. Pero los dirigentes consideraban que, más allá de los puntos que los distanciaban a nivel ideológico, la acción unitaria le daría mayor solidez y fuerza a la renacida FECh. Por otro lado, los liderazgos se habían consolidado en el propio proceso democratizador y era de dominio público que los candidatos que disputarían la presidencia serían el presidente del Centro de Alumnos de Derecho, Yerko Ljubetik, de la JDC; el presidente del Centro de Alumnos de Filosofía Gonzalo Rovira, de la Juventud Comunista, y, en tercer lugar, Ricardo Brodsky, del MAPU.

Las elecciones que refundaron la FECh se realizaron en medio de la agitación popular del llamado a la Undécima Jornada Nacional de Protesta y Paro Nacional del 29 y 30 de octubre. El triunfo aplastante de la izquierda unida en una federación con raíces tan significativas en la vida política nacional, sin duda, fue otro aliciente para promulgar el estado de sitio. Además, sucedía dentro de



un cuadro de convulsión generalizada que corría en forma desigual, pero con lazos solidarios dentro de las universidades del país.

Con la participación de quince federaciones, más la representación de cinco universidades a través de las coordinaciones de sus centros de alumnos o consejos de presidentes, a fines del mes de julio se realizó en la ciudad de Valdivia el primer Ampliado Nacional Estudiantil. La disposición para fortalecer el movimiento estudiantil universitario a nivel nacional, aunando objetivos y acciones, se plasmó en el diseño de un nutrido plan de movilización para el segundo semestre. Entre los principales consensos se acordó convocar a las “Jornadas de Movilización Universitaria por el derecho a la educación” para el 27 y 28 de agosto; plegarse a la Jornada Nacional de Protesta del 4 y 5 de septiembre, y volver a reunirse a fines de octubre en Valparaíso en el primer Congreso Nacional Universitario para consolidar una orgánica con carácter nacional, que sería la Confederación de Federaciones de Chile (Confech).

En agosto los ánimos tampoco decayeron, la propia dinámica represiva no permitía bajar la guardia. El día 16 de agosto veintitrés jóvenes terminaron con las cabezas rotas y las costillas quebradas por la brutal acción de guardias de seguridad armados de lumas y cadenas al interior del ex Pedagógico. La indignación alcanzó a todas las sedes universitarias. Los dirigentes de la Coordinadora de Centros de Alumnos, de los Comités Democráticos (Codes) y de la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED) llamaron a una paralización de actividades académicas, a una asamblea y manifestación de protesta. Una semana más tarde, ciento cincuenta estudiantes se tomaban la Escuela de Derecho y exigían el término de los rectores delegados y el fin de la intervención militar<sup>38</sup>.

Durante 1984 los estudiantes secundarios también consolidaron sus organizaciones y masificaban su presencia en el espacio público. En sus colegios comenzaron siendo una minoría, un puñado de adolescentes que querían detener la maquinaria represiva de la dictadura. Los directores de escuelas, mucho más pequeñas que una facultad universitaria y, por lo tanto, con mayor factibilidad de control e imposición de medidas de disciplinamiento, los seguían de cerca y era sumamente fácil expulsarlos o no renovarles la matrícula para el año siguiente. Eran muy pocos en 1983, pero si en tiempos de fulgor épico la valentía puede cautivar, la presencia de colegiales dotados con la fuerza política del liderazgo, la organización y una dirección emancipadora hecha a mano confluía en que esos pocos, con la preparación que muchos traían desde sus poblaciones,

devinieran en líderes de carácter estratégico con capacidad de arrastre que tomaron las calles con creciente protagonismo y masividad a partir de 1984, y que adquiriría mayor fuerza en los dos años siguientes. Ello explica las palabras de Juan Alfaro: “Yo creo que éramos pocos; mirado en el contexto global éramos re pocos, pero éramos re potentes”. Según nos dicen, para ellos lo importante era crear un hecho político en la calle; era ahí donde los jóvenes dirigentes se ganaban un lugar de respeto en sus asambleas:

Lo nuestro era copar el centro, hacer noticia, mostrar la lucha de alguna manera, que vieran que los estudiantes estaban en la calle, que la gente estaba descontenta, sembrar eso. Marchaban los secundarios y no quedaba banco bueno. Salíamos con todo; ventanal que veías te lo echabas, de una institución financiera o de gobierno. Era violento el asunto. Los pacos llegaban tirando balas, balines, granadas lacrimógenas, te sacaban la mugre, el apaleo te lo llevabas de seguro, pero así era, y cuando tú les tenías que dar, dabas, porque no había posibilidad de solo recibir. El estudiante secundario tenía esa experiencia, construida en la lucha callejera. Conocía el espacio, era su espacio natural, del liceo<sup>39</sup>.

En Santiago los secundarios de izquierda constituyeron la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media (COEM), que agrupó a las Juventudes Comunistas, MIR, PS Almeyda e Izquierda Cristiana. Para su organización interna se dividió en zonales: los liceos de la zona norte se organizaron en el Movimiento de Estudiantes Democráticos (MED); los del centro en el Frente Unitario Democrático de Enseñanza Media (Fudem); en el oriente nació la Unión de Estudiantes Secundarios (UES); y por la zona sur, la Organización de Estudiantes secundarios (ODES). Por su parte, la Democracia Cristiana optó por una orgánica paralela llamada Asociación Secundaria de Estudiantes Cristianos (ASEC); en cantidad mucho menor a los dos principales referentes, la socialdemocracia estuvo representada por la Agrupación de Estudiantes (ADE). En mayo de 1985, el trabajo unitario de la COEM y la ASEC dio vida al Comité pro-Feses que un año más tarde permitirá el (re)nacimiento de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (Feses).

Dentro de los liceos, uno de los movimientos más audaces y masivos –con clara

hegemonía de las Juventudes Comunistas— se generó al interior del Liceo de Aplicación, por lo que la COEM llegó a ser una de las organizaciones estudiantiles secundarias más grandes de Santiago. Paralelamente, se conformó el Movimiento Aplicacionista Democrático (MAD), amplio referente opositor que incluía a la DC<sup>40</sup>. Las dinámicas que ahí se generaron para democratizar el centro de alumnos impuesto, así como también la coordinación logística para organizar la movilización callejera en las jornadas de carácter nacional, bien pueden servirnos de catalejo para acercarnos a la organización secundaria:

Se conjugó que en esos años pasamos por ahí gente que estaba súper comprometida [...] era muy grande el movimiento antidictatorial que teníamos. La COEM que teníamos en el liceo era tan grande que no podían ir todos a las asambleas. En las reuniones de los días lunes estaba solamente un delegado político y uno de autodefensa por curso, porque si no el sindicato no daba abasto. Después de salir de clases hacíamos reuniones de coordinación con los encargados de curso, y estos después se reunían con su curso y planificaban lo que tenían que hacer. Teníamos delegados de la bencina, de las botellas, de los neumáticos, los miguelitos, las capuchas<sup>41</sup>.

Toda la organización logística que ocurría tras bambalinas de cada jornada se complejizaba en la medida que iba creciendo el movimiento. Casi no había respiro si consideramos que las jornadas que convocaban los secundarios o a las que se sumaban estaban precedidas por pre jornadas de propaganda y agitación. Por ejemplo, para convocar al paro estudiantil del 4, 5 y 6 de julio de 1984, realizado en demanda de la rebaja del pasaje de locomoción, inscripción gratuita para la PAA y la derogación del Decreto 741 de 1974, que facultaba a los directores para elegir a los representantes de centros de alumnos, la COEM llamó una semana antes a una manifestación de secundarios que bajo la consigna “Hoy estudiantes, mañana cesantes” se pronunciaron durante la mañana en sus liceos. A la salida de clases intentaron reunirse fuera de la Biblioteca Nacional, pero como de costumbre la legión de carabineros que llegaba a reprimirlos lo impidió, y capeando los chorros de agua y las lacrimógenas se dispersaron y formaron piquetes relámpago; algunos de ellos fueron detenidos y otros lograron serpentear la represión hasta lograr el objetivo de manifestarse frente al Ministerio de Educación.

La lucha contra las alzas de septiembre de 1984 fue otro aliciente para potenciar las movilizaciones que estremecieron a la capital durante el mes de octubre, y en ellas los estudiantes universitarios y secundarios tuvieron presencia activa. El día 4 de octubre la jornada de movilización estudiantil fue efervescente; además, hubo asambleas y luminosas barricadas en calles adyacentes a los recintos universitarios. Muy temprano y sorpresivamente unos cuatrocientos estudiantes de enseñanza media llegaron decididos a tomarse el Liceo Valentín Letelier, ubicado en el sector de Recoleta. Cerraron los accesos y se adueñaron del establecimiento durante tres horas. Se consolidaba así una forma de lucha que fue característica del movimiento secundario: la toma de los liceos.

De ellas se valían para actuar en conjunto, mostrar presencia, fuerza y llamar la atención de las autoridades y de la sociedad, que seguía sus movimientos con una amplia cobertura periodística, además de conseguir algún tipo de pronunciamiento por parte del director, del alcalde o del propio Ministerio de Educación. Aunque si bien intentaron realizarse desde 1983, cobraron mayor protagonismo y masividad durante 1986 y 1987 en la lucha contra la segunda etapa del proceso de municipalización de los liceos. Sobre el proceso operativo que conllevaba cada toma, en la que participaban generalmente jóvenes de distintos colegios, nos relata “José Luis”, entonces dirigente secundario:

Era fuerte; tomarte un liceo implica una acción violenta. Irrumpes y tienes que tratar de tomar a la plana de profesores, directores, inspectores como rehenes, entre comillas, porque no es así, pero los metías en una sala y encerrabas a los viejos. Y después tomabas control completo del colegio y cerrabas todos los accesos. Y te ponías en los techos a esperar que llegaran los pacos, ponías tus lienzos aludiendo al motivo de la toma y las demandas estudiantiles que nosotros teníamos<sup>42</sup>.

El 23 de octubre de 1984 los secundarios repitieron la acción y se tomaron durante dos horas el Liceo Darío Salas, según expresaron, en apoyo al paro de la Educación Media convocado por la COEM para el día siguiente e ir preparando los ánimos para el paro nacional del día 30 de octubre<sup>43</sup>. Cuatro buses de carabineros bordearon el recinto, en tanto desde los techados, según informaba la prensa, “los muchachos se dedicaron a lanzar piedras a la calle, tiraron botellas y

quebraron numerosos vidrios. Dejaron el liceo en un completo desorden”. Después del arribo e intermediación de un representante del Ministerio de Educación, se acordó el desalojo pacífico de los estudiantes. Las hileras de adolescentes salieron con los puños en alto, gritando consignas contra el gobierno. Más tarde, según la misma crónica, “un pequeño grupo que portaba mochilas repletas de miguelitos y pequeñas bombas caseras obligó a detener el tránsito en la Alameda. Provocaron fogatas con sus bombas caseras y asustaron a los automovilistas con cientos de miguelitos”<sup>44</sup>.

Fue una semana inolvidable, llena de entusiasmo estudiantil<sup>45</sup>. Como corolario, miles y miles de estudiantes de la Universidad de Chile se acercaron a las mesas de votaciones los días 25 y 26 de octubre para elegir la directiva de la nueva FECh. Se trató de una elección directa, secreta, universal, de repercusión nacional, que distintos sectores no dudaban en calificar como “el acontecimiento político más importante de los últimos once años”. El proceso electivo fue entusiasta, casi eufórico, con paredes tapizadas de propaganda y sendos reportajes, entrevistas y fotografías en los medios de comunicación oficialistas y alternativos. Así reseñaba el ambiente la revista Análisis:

La jornada tiene un halo de otra época, como si, extrañamente, nada hubiera cambiado. Los afiches y los letreros cubren casi completamente los muros. Una efervescencia estudiantil llena los auditorios donde los dirigentes explican sus posiciones. Se discute, se canta, se grita. Los centros de alumnos se han convertido en lugares de operaciones de la campaña de los candidatos a la directiva y a las vocalías. Es la FECh que nace otra vez. Pero ahora nace en una época muy distinta<sup>46</sup>.

Esta vez la FECh nacía en confrontación a una dictadura militar, y lo hacía desde un tronco histórico que rebrotaba con viento fresco, lazos o lianas de complicidad, discontinuas pero persistentes, entre diversas generaciones y sus luchas. Así lo sentía Yerko, presidente electo por amplia mayoría:

Nos sentimos herederos de los grandes hitos y personas que marcaron la historia del movimiento estudiantil; la FECh de los años 20 o, particularmente, la de los

años 30, que fue actor protagónico en la derrota de la dictadura de Ibáñez. Un ejemplo que nos interesa rescatar. También aquella de los años 60, que fue motor del proceso de reforma universitaria. Es indispensable rescatar los elementos que han definido las luchas de este movimiento estudiantil y traducirlos a nuestro presente y nuestro futuro<sup>47</sup>.

Aunque no fue sorpresa que la lista “Unidad Democrática” ganara con más del 65,3% de los votos, ni que los oficialistas figuraran muy atrás con un 16,5%, el conteo y anuncio de los ganadores fue seguido con atención y celebrado emotivamente por casi medio millar de estudiantes. El diario El Mercurio nos hace el favor de reproducir el momento:

A las 23:15 horas los candidatos triunfadores subieron al estrado del hall central de la Escuela de Ingeniería, mientras centenares de estudiantes gritaban lemas como “Venceremos”, “La FECh unida jamás será vencida”, “Avanzar hacia el Paro Nacional”, “Con el paro, con la FECh, a botar a Pinochet” (...) también se escucharon consignas alusivas al ex presidente Salvador Allende<sup>48</sup>.

En medio del entusiasmo, el vicepresidente electo, Gonzalo Rovira, no olvidaba el cuadro represivo en que se desarrollaron las votaciones como muestra de lo que sucedía en las poblaciones periféricas y organizaciones de oposición dentro del llamado “plan preventivo” a la jornada de protesta: “Ha sido una elección que se ha hecho en medio de una gran tensión. Detuvieron el sábado al compañero Nelson Muñoz, se mantuvo un paro en Ingeniería el lunes y el martes, y en este momento en Medicina Norte hay un paro indefinido mientras no se libere a un compañero de segundo año”<sup>49</sup>. Rovira se refería a los hechos ocurridos la noche del 20 octubre, cuando un grupo de civiles identificados por un brazalete blanco con estrella verde ingresaron violentamente a la casa del presidente del Centro de Alumnos de Geología, Nelson Muñoz Altamira; durante los dos días que estuvo desaparecido, los estudiantes de la Universidad de Chile encabezaron amplias manifestaciones solidarias para exigir su liberación. Además, a raíz de las manifestaciones del 24 de octubre, fue detenido el estudiante Mauricio Ruiz Cárdenas.

Los lectores podrán imaginar que los ataques de la derecha al “contubernio demócrata-marxista” del pacto universitario fueron feroces, y la prensa se encargó de darles bastante tribuna. Una alianza que se negaba por arriba, se consolidaba en las bases, y el ministro del Interior, Onofre Jarpa, como de costumbre, ya había instalado la insidia: “Viene desde antes y, a mi modo de ver, muy bien proyectada en las protestas que han venido realizando juntos, en actos y reuniones”<sup>50</sup>. El fantasma de la Unidad Popular fue citado una y mil veces, llovían las referencias al renacimiento de la “demagogia y el asambleísmo”. El jefe de gabinete de rectoría de la Universidad de Chile llegó al punto de amenazar con desconocer a la FECh por tratarse de una “coalición político-partidista” que desvirtuaba la esencia universitaria, “toda vez que esa coalición ha insistido a sus militantes a que realicen reiterados paros, tomas y todo aquello que signifique alterar sistemáticamente la normalidad académica”<sup>51</sup>.

Pero la legitimidad era indiscutible, y una nueva generación se sentía portadora de buenas nuevas no solo para la universidad, sino de una verdadera alternativa política y “hacer país desde la FECh”. Así quedó grabado en el discurso de constitución de la federación:

El jueves 25 no nació solo una federación de estudiantes, nació algo más grande e importante para Chile: nació una generación... una generación que dice con mucha fuerza, con mucha convicción, que la unidad es posible porque son más las cosas que nos unen que aquellas que nos dividen... la unidad es posible, esa es nuestra primera buena noticia. Pero esta buena nueva que trae nuestra generación quiere ir más allá de la elección de nuestra FECh... ¡Esta generación quiere ser protagonista de esa mayoría por los cambios, que es lo único que asegurará que el Chile de mañana deje atrás las injusticias, la desigualdad, el capitalismo!<sup>52</sup>.

Después de las celebraciones, una de las preguntas que proseguían iba dirigida hacia el presidente de la FECh en cuanto militante DC, y se refería a la postura de la federación ante el paro nacional que estaba ad portas. La pregunta era pertinente, ya que por más que insistió el Comando Nacional de Trabajadores y otros organismos sociales, la Alianza Democrática decidió no plegarse a la convocatoria y se limitó a expresar su “irrestringido apoyo solidario”. Entonces,

Yerko Ljubetic fue claro: “Nuestra plataforma expuesta en las elecciones ante los estudiantes llevaba un apoyo implícito al paro nacional convocado para el martes 30 por el Comando Nacional de Trabajadores, de manera que adherimos a él, y lo impulsaremos a fin de que sea acatado por la mayoría de los estudiantes”<sup>53</sup>.

Universitarios y secundarios estuvieron en las calles y actos políticoculturales que se organizaron en los dos días que se extendió la protesta-paro nacional; pero 1984, el “año de la democratización de las universidades”, terminaba mal. El mismo día de la toma oficial de posesión de la refundada Federación de Estudiantes de Chile fue instaurado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Era el 6 noviembre y se extendió durante más de siete meses, como recordaría más tarde Ricardo Brodsky, secretario general de la federación: “Durante el primer año de la FECh, Pinochet nos hizo la vida imposible”. Pero no solo a ellos, ya que la persecución a los líderes universitarios de todas las universidades, especialmente de las federaciones democratizadas, se extendió por el país. De hecho, golpeó con mayor rudeza a las federaciones de provincia. Expulsiones, detenciones, relegados y decenas de heridos por fuerzas policiales que ya no necesitaban orden del decano o rector para ingresar a los planteles. Pero a pesar de la represión triplicada, los estudiantes no bajaron la guardia y anunciaron una guerra de la civilidad contra el nuevo estado de excepción. Desde el primer día, la detención de Flavio Cárcamo, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile<sup>54</sup>, motivó un acto solidario en el frontis de su facultad y 63 estudiantes fueron detenidos. Más tarde, las fuerzas de Carabineros respondían con balines a otra movilización de estudiantes realizada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

A solo un mes de la promulgación del estado de sitio, la Comisión de Derechos Humanos de la FECh denunciaba las consecuencias experimentadas por seguir oponiendo resistencia: 55 amedrentamientos a estudiantes; 27 ataques de fuerzas especiales a sedes universitarias; 25 universitarios heridos por proyectiles (balines o balas); 13 violaciones de recintos universitarios por parte de las fuerzas policiales; 9 suspensiones parciales de actividades y 4 cierres de semestre; 54 estudiantes procesados por fiscalías militares y 3 por juzgados de policía local; 74 expulsiones de estudiantes de sus respectivas carreras; 48 relegaciones de estudiantes; 532 estudiantes detenidos masivamente y 31 detenidos en forma selectiva. Entre los expulsados y relegados figuraban 40 dirigentes estudiantiles<sup>55</sup>.

El régimen conjugó la represión masiva con golpes selectos de los cuales sería



difícil recuperarse. Fue durante el estado de sitio cuando mataron a los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo. Tenían 20 años y 18 años, respectivamente. Era un 29 de marzo y participaban en la Primera Jornada Nacional de Protesta del año 1985 en la Villa Francia. Su vida y muerte se transformó para las nuevas generaciones en ejemplo de lucha y compromiso. Por ello, y en su nombre, cada año se conmemora el Día del Joven Combatiente. También mataron a Paulina Aguirre, estudiante vespertina del Liceo Valentín Letelier, y a Patricio Manzano, luego de haber sido detenido junto con otros 240 estudiantes que realizaban trabajos voluntarios de verano en San Felipe, y a Carlos Godoy Echegoyen, y a Óscar Fuentes, y a José Randolph Segovia.

Fueron muchos los jóvenes que cayeron en esos días de protesta callejera. Días y noches de protesta tan reiterativa y obstinada que para los que estaban afuera o miraban desde arriba llegaron a ser “solo una protesta más” que rayaba en lo rutinario. En cambio, para los que exponían el cuerpo, la energía y la vida, significaba eso, toda la vida. Así de literal. Inspiración y parte de una generación que dio la pelea por otro proyecto de sociedad, que se rebelaron contra la despolitización y el arréglese quién pueda que promovían las nuevas reglas y sus modernizaciones, entendiendo que “lo que es de todos, hay que defenderlo entre todos”.

■

[<sup>1</sup> Entrevista con Aspasia, 23 de septiembre de 2010.](#)

[<sup>2</sup> Entrevista con Edgardo Díaz, 28 de octubre de 2010.](#)

[<sup>3</sup> Entrevista con Juan Alfaro, 8 de octubre de 2010.](#)

[<sup>4</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.](#)

[<sup>5</sup> Entrevista con Juan Alfaro, 8 de octubre de 2010.](#)

[<sup>6</sup> Muñoz Tamayo, Víctor. ACU rescatando el asombro: historia de la Agrupación Cultural Universitaria. La Calabaza del Diablo, Santiago, 2006.](#)

[<sup>7</sup> Brodsky, Ricardo; Ramiro Pizarro. “La constitución del movimiento estudiantil como proceso de aprendizaje político”. En: Agurto, Irene; Manuel Canales y Gonzalo de la Maza \(editores\). Juventud chilena. Razones y Subversiones. ECO/Folico/Sepade. Santiago, 1985, p. 141.](#)

<sup>8</sup> Decreto Universitario N° 12.948, del 29 de septiembre de 1978. Citado por: García, Diego, José Isla y Pablo Toro, Los muchachos de antes. Historias de la FECH 1973-1988. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006, p. 72.

<sup>9</sup> Al año siguiente, Spencer traspasó el mando a Eduardo Silva y este, en noviembre de 1980, heredó el cargo a Pablo Longueira; pero antes de ello, en la solemne ceremonia de entrega de mando dedicó el 70% de su discurso a descalificar el trabajo de la ACU por su tendencia “política y demagógica”. Ibid., p. 73.

<sup>10</sup> Entrevista a Edgardo Díaz, 28 de octubre de 2010.

<sup>11</sup> Entre ellos fueron exonerados: 41 profesores en la UTE, 21 del Liceo Manuel de Salas –dependiente de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile– y 17 en la Universidad Católica.

<sup>12</sup> ¿Las declaraciones de Eduardo Silva al asumir como presidente de la Fecech en noviembre de 1979 podrían haber dado alguna pista? Decía Silva: “El Campus Macul es un reducto extremista... y todo se reduce a un problema de ubicación geográfica”. Ver: “Racionalización universitaria. Expulsiones Académicas”. Solidaridad N° 87, febrero de 1980.

<sup>13</sup> Manifestaciones de denuncia y repudio público, que buscan sensibilizar a la sociedad sobre un hecho oculto o silenciado, generalmente contra violaciones a los derechos humanos.

<sup>14</sup> “Universidades, la lección del pedagógico”. Solidaridad, N° 106, primera quincena de diciembre de 1980, p. 20.

<sup>15</sup> “Universidades, ofertas con facilidades de pago”. Solidaridad, N° 112, primera quincena de abril de 1981, p. 18.

<sup>16</sup> Las doce carreras eran: derecho, ingeniería civil, medicina, bioquímica, ingeniería comercial, ingeniería forestal, ingeniería agrónoma, psicología, cirujano dentista, médico veterinario, arquitectura y química farmacéutica. Como los lectores podrán suponer, entre ellas no se encontraban las pedagogías, tampoco sociología, ciencias políticas, filosofía, periodismo, tampoco otras claves para el desarrollo humanista, cultural y científico del país –que podrían ser impartidas por los nuevos referentes de educación superior no universitaria–, sino las que asegurasen la formación de “recursos humanos” requerido para las

necesidades del nuevo modelo según las demandas del mercado.

<sup>17</sup> Documento Secretaría General del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas, 1983. Citado por Brunner. Op. cit., p. 113.

<sup>18</sup> “Temas Económicos”. El Mercurio, 28 de junio de 1980.

<sup>19</sup> “Otra vez el activismo estudiantil”. El Mercurio, 10 de julio de 1980.

<sup>20</sup> Cartas al director. El Mercurio, 10 de julio de 1980.

<sup>21</sup> Durante la conmemoración del 1 de mayo de 1981, el presidente de la ACU, Patricio Lanfranco, fue detenido y torturado durante varios días por la CNI.

<sup>22</sup> El anuncio hecho por el PC en septiembre de 1980 sobre la legitimidad de usar “todas las formas de lucha, incluso la violencia aguda” contra la dictadura y privilegiar alianzas con grupos políticos cercanos a dicha tesis, ayudó a alejar posiciones entre la JJCC y la JDC al interior de la universidad.

<sup>23</sup> En junio, las elecciones de delegados volvieron a manifestar la oposición a la Fecech con una alta abstención (56,19% según opositores y 35,6% según la Fecech) que en facultades como Derecho e Ingeniería llegó a superar el 70%.

<sup>24</sup> Ruiz-Tagle, Jaime. “La protesta y el movimiento estudiantil”. Revista Mensaje, N° 321, agosto, Santiago, 1983.

<sup>25</sup> Lennin, John. “Movimiento Estudiantil ¡A tomarse el futuro!”. Revista Crítica. Segunda época, N° 17, marzo-abril-mayo, Santiago, 1985.

<sup>26</sup> Boletín realidad Universitaria, Academia de Humanismo Cristiano, N° 27 y 28, mayo y junio de 1983. Citado por Ruiz-Tagle, Jaime. “La protesta y el movimiento estudiantil”. Op. cit.

<sup>27</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Planeta, Santiago, 1988, pp. 152-154.

<sup>28</sup> Entrevista a Gonzalo Rovira en el contexto de la realización de la Asamblea Constituyente de la Universidad de Chile. Revista La Bicicleta, septiembre de 1984. En: Agurto, Irene; Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (editores). Op. cit., pp. 156-157.

<sup>29</sup> “En la FECh debemos mostrar lo que queremos para el país”. Entrevista a Ricardo Brodsky. Revista Crítica. Op. cit., pp. 19-20.

<sup>30</sup> “Advertencia Oportuna”. El Mercurio, 20 de octubre de 1983.

<sup>31</sup> Yerko Ljubetic. “Queremos ser actores de nuestra propia historia”. Análisis, N° 69, 22 de noviembre al 6 de diciembre de 1983, pp. 25 y 26.

<sup>32</sup> Las Federaciones pioneras en democratizarse fueron la FEC de la Universidad de Concepción; FEUC-V en la Universidad Católica de Valparaíso; Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta; el Instituto Profesional de Iquique (formado de la fusión de las ex sedes de la UTE y la U. en Iquique), de la Universidad Austral y de la Universidad de la Frontera. En tanto, los centros de alumnos democratizados a fines de 1983 eran: Derecho; Ciencias Básicas y Farmacéuticas; Filosofía; Humanidades y Educación; Medicina Sur; Medicina Norte; Medicina Oriente; Medicina Occidente; Arte, Arquitectura; Agronomía, Ingeniería Forestal, Veterinaria, Odontología.

<sup>33</sup> “Movimiento Estudiantil, con paso seguro”. Solidaridad, N° 174, segunda quincena de marzo, 1984.

<sup>34</sup> “Diálogo debe basarse en respeto a la Constitución”. El Mercurio, 18 de abril de 1984.

<sup>35</sup> “FEUC-V por la vía del consenso”. Solidaridad, N° 176, del 5 al 18 de mayo, 1984.

<sup>36</sup> Muñoz Tamayo, Víctor. Generaciones. Juventud universitaria e izquierdas políticas en Chile y México (Universidad de Chile-UNAM 1984-2006). LOM, Santiago, 2012.

<sup>37</sup> “U: La Fecech anunció disolución”. La Segunda, 8 de junio, 1984.

<sup>38</sup> Álvarez, Rolando. “Las Juventudes Comunistas de Chile y el movimiento estudiantil secundario: un caso de radicalización política de masas (1983-1988)”. En: Álvarez, Rolando y Manuel Loyola (eds.). Un trébol de cuatro hojas. Las Juventudes Comunistas de Chile en el Siglo XX. América en Movimiento, Santiago, 2014.

<sup>39</sup> Entrevista con Juan Alfaro, 8 de octubre de 2010.

<sup>40</sup> Reunía también a las JJCC, JS, MAPU Garretón; MIR, Socialistas Almeyda y Comanche.

<sup>41</sup> Entrevista con Juan Alfaro, 8 de octubre de 2010.

<sup>42</sup> Entrevista con “José Luis”, 22 de octubre de 2005.

<sup>43</sup> Además, hicieron llegar a las autoridades del liceo un petitorio en que a las demandas conocidas se sumaba la designación de un ministro en visita para que investigara la detención del profesor Arturo Barría Araneda, desaparecido en agosto de 1974 al concurrir a una citación hecha por el director delegado del Liceo Darío Salas, entonces un capitán de Ejército.

<sup>44</sup> “‘Toma’ de tres horas del Liceo ‘Darío Salas’”. El Mercurio, 24 de octubre y La Segunda, 23 de octubre, 1984.

<sup>45</sup> A fines de octubre las listas de izquierda también triunfaban en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y en la Universidad del Norte en Antofagasta. Los presidentes de ambas federaciones pertenecían al MDP.

<sup>46</sup> “Universitarios: La FECh otra vez”. Análisis, N° 93, 23 de octubre al 6 de noviembre, 1984.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> “Lista DC-MDP ganó en la FECH”. El Mercurio, 26 de octubre, 1984.

<sup>49</sup> “Destacan la unidad de la DC y marxismo”. El Mercurio, 26 de octubre, 1984.

<sup>50</sup> La Tercera, 7 de octubre, 1984.

<sup>51</sup> El Mercurio, 30 de octubre, 1984.

<sup>52</sup> Fragmento del discurso de Yerko Ljubetic en el acto constitutivo de la FECh. En: Agurto, Irene; Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (editores). Op. cit., p. 160.

<sup>53</sup> La Tercera, 27 de octubre, 1984.

<sup>54</sup> Flavio Cárcamo fue detenido junto con otros nueve jóvenes en el allanamiento

a la sede del Movimiento Juvenil Democrático Popular.

<sup>55</sup> Ver: Ruiz-Tagle, Jaime. “Los derechos humanos en estado de sitio”. Revista Mensaje, N° 336, enero-febrero, Santiago, 1985; García, Diego, José Isla y Pablo Toro. Op. cit., p. 192.

## CAPÍTULO V

### CUERPO Y ALMA DE LA PROTESTA IV: LOS MILITANTES

“Esta barricada no está hecha ni de adoquines, ni de vigas, ni de hierro viejo;  
está hecha de dos montones, uno de ideas, otro de dolores”.

Víctor Hugo. Los Miserables





## ■ *Jóvenes militantes del MIR s/f (ADVS).*

Aunque la oposición popular fue mucho más amplia que las vanguardias organizadas que constituyeron su expresión militante, estas, sin duda, fueron un eslabón clave en el proceso de politización, la lucha de clases y producción del texto urbano que se escribió con las jornadas de protesta. En la fricción contra un enemigo declarado, absoluto, los militantes estuvieron en estado de protesta permanente, asumiendo un presente que se aceptaba con sus riesgos y en que se forjaba una fuerte identidad de luchador social. Ciertamente, no fueron un grupo homogéneo, sino una compleja articulación de mundos y miradas, con distintos niveles de compromiso, solidaridades, tensiones y disputas internas, ideales e ideologías, aspiraciones y proyecciones. Tampoco es posible evitar sus encuentros con otras dinámicas sociales o pensarlos aisladamente. Los militantes se caracterizaron por su multipertenencia a distintas instancias organizativas, es decir, participaban paralelamente en centros de alumnos, federaciones y sindicatos; ollas comunes, organizaciones eclesíásticas, de derechos humanos, de pobladores y de mujeres. Eran el puente de contacto que transmitía consignas, tareas, propuestas desde y hacia las bases.

Aunque importantes dentro de este universo, no nos concentraremos aquí en las figuras públicas, en los dirigentes nacionales o en los héroes que murieron en acciones operativas de alto calibre. Nos interesa el militante común. Un grupo de hombres y mujeres que adscritos a partidos políticos de izquierda se sumaron a un proyecto de transformación social y opusieron resistencia bajo determinadas normas, valores y fuerzas socializadoras que actuaron como espíritu cohesionante. Ello les dio una mística, una dinámica, una estética; códigos y signos que dibujaron sus pensamientos y su campo de acción; sentidos y direcciones significantes que marcaron el andar y protestar en la ciudad. Lo ha señalado Michel Vovelle al intentar referir el paso del ciudadano al militante: “En su actividad política, en su vida cotidiana, en su ética, en su comportamiento e incluso en su vestimenta, quedan de manifiesto una ‘visión del mundo’ y una actitud ante la vida”<sup>1</sup>.

En este sentido, habrá que pensarlos por sus acciones, pero también por sus ideas y afectos (cómo veían al mundo y cómo se veían a sí mismos en el mundo). Y si para entenderlos y desentrañar esta trama también recurrimos a sus recuerdos, si

la palabra fue la llave que nos permitió entrar a las experiencias de esta generación militante, deberemos considerar que su memoria también es militante. Son palabras llenas de imágenes e imaginarios: siempre en rebelión, rompedores de sombras, justicieros; una reconstrucción nutrida por la mirada – muchas veces idílica y romantizada– bajo la cual forjaron su destino en las circunstancias que les tocó vivir. Como ha señalado Tomás Moulian: “Toda generación cree que ella hace la historia y se sitúa inconscientemente en la parte superior de la ‘ola’ desde la cual domina todo el entorno y asume una actitud de originalidad y trascendencia erga omnes”<sup>2</sup>.

Esa trascendencia estaba sostenida en experiencias emblemáticas que les otorgaron un principio legitimatorio y una referencia de luchadores que ordenó y constituyó las formas y sentidos de su presente. Entre ellas podemos señalar la presencia activa en el proceso de construcción de la Unidad Popular; el golpe de Estado y la interrupción de un proyecto de vida individual y colectivo; la experiencia de la muerte, desapariciones, apresamientos y exilios de los familiares, amigos y compañeros; los intentos por sobrevivir físicamente y las dificultades para rearticular sus organizaciones. Y por último, y lo que más nos interesa dentro de la perspectiva de esta investigación, la experiencia rebelde, el sentirse y reconocerse en activa resistencia contra la dictadura y la mística emanada en la fraternidad de la lucha.

Aunque no exclusivamente, muchas veces fueron los militantes con experiencia previa quienes sirvieron de correa transmisora a la hora de protestar. Eran el vínculo con una parte de la historia de Chile proscrita, y desde esa memoria y esa defensa, actualizaron los códigos de la confrontación. “Con el golpe sentí que se me cortó todo, que me cortaron los sueños”, confiesa –al igual que la mayoría de los testimoniantes– “Hernán”, militante del Partido Comunista, primero, y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después, dos organizaciones que en estas páginas serán –aunque no exclusivamente– el principal referente para escudriñar el universo de la militancia en los tiempos que exploramos. De importante protagonismo en el impulso y desarrollo de las protestas y en la confluencia de la organización de organizaciones callejeras, el Partido Comunista de Chile fue durante la década de 1980 –junto con la Democracia Cristiana– la principal fuerza hegemónica dentro del cuadro opositor. El PC apoyó cada convocatoria a protestar, fuera, en contra y a pesar de la institucionalidad, e impulsó las acciones más audaces, violentas y armadas contra la dictadura, ejecutadas por su militancia y compañeros de ruta.

Quisiera enfatizar que el objetivo de las páginas que siguen no es relatar la historia de la reconstrucción orgánica ni su debate teórico durante aquellos álgidos años, por lo demás ya ampliamente registrados en diversas investigaciones históricas y sociológicas<sup>3</sup>. Si bien nos detendremos en algunos de ellos, será con el fin de comprender el lenguaje y sentido del puerto que aquí nos convoca: la relación entre las subjetividades militantes y las jornadas nacionales. ¿Cómo era militar en tiempos de protesta nacional? ¿Cuál fue el papel que en ellas desempeñaron estos hombres y mujeres? Son nuestras principales interrogantes.

Al indagar en el universo militante, hay una pregunta que no queremos esquivar y que versa sobre qué tan espontáneas fueron las protestas, es decir, si fueron un proyecto popular puro, sin la concurrencia de organizaciones políticas, o, en contraposición, estaban dirigidas y subordinadas a los lineamientos de los sectores de izquierda más organizados. De entrada, nuestra hipótesis plantea que es imposible separar ambos universos. La fusión entre un proyecto político estratégico y otro netamente popular se concretó en más de una esquina, aunque en forma desigual en tanto a objetivos y en los criterios estratégicos que posteriormente miden su eficacia; hubo una fusión –o complicidad– en los impulsos que la motivaban y en el hacer la protesta. La experiencia desde donde emanan los resortes de acción y la constitución de identidades era compartida. Tal como ha demostrado una importante tradición historiográfica, la alianza se sostenía en un encuentro de larga data, una tradición de lucha presente en la propia historia de Chile, en la que los sectores populares construyeron una profunda experiencia orgánica y reivindicativa bajo las banderas políticas de izquierda; y esta, a su vez, maduró su plataforma política en ese estrecho vínculo con las luchas sociales y la cultura política de las clases populares.

En el caso de las jornadas, ante la urgencia por derrocar a un enemigo común y teniendo los espacios físicos y simbólicos de interlocución clausurados, la preparación previa y lo espontáneo convergieron y se retroalimentaron en la lucha callejera. En ella, la izquierda se asignó a sí misma la tarea de defender y representar los intereses colectivos y las conquistas populares despojadas, aportando su experiencia en la formación de sus militantes, la labor educativa y el trabajo metódico y agitador en poblaciones y establecimientos educacionales, que pusieron el sello distintivo a la escuela de socialización política que se materializó con las protestas, además de brindar una importante entrega de recursos materiales que le permitieron ejecutar un proyecto al que efectivamente muchos de los protestantes se sumaron. Y estos lo hicieron porque era una

propuesta de rebelión que surgía de una indignación compartida, cómplice del ánimo y predisposición popular a actuar dentro de un amplio margen de acción que permitió el libre desarrollo de formas de lucha que rebasaron muchas veces cualquier coordinación previa.

## Militar en dictadura o el orgullo de ser un luchador social

La militancia comunista durante la dictadura se caracterizó por tener un fuerte sentido de la acción. Se requería una gran dosis de iniciativa personal, hermetismo, compromiso, cualidades que se habían desarrollado ampliamente desde el golpe de Estado. Por ello es que cuando el 4 de septiembre de 1980 el secretario general del PC, Luis Corvalán, anunció la incorporación de “todas las formas de lucha” a la praxis comunista, incluida la “violencia aguda”, dio cuenta de un ánimo preexistente. La primera etapa del diseño apuntaba a generar las condiciones subjetivas a través de acciones audaces que ayudaran a crear una nueva dinámica política y “elevar la moral del pueblo”. El llamado convocaba a la auto organización y a desbordar la institucionalidad con pequeñas iniciativas, cuestión que algunos militantes ya habían activado tempranamente, cada cual por su cuenta. Así fue, por ejemplo, para Óscar Riveros, más conocido como Negro Óscar, vocalista de Transporte Urbano, emblemático grupo musical que animó la protesta durante los años 80. Él vivió la Unidad Popular siendo militante de las Juventudes Comunistas y desde el golpe asumió que comenzaba una etapa de resistencia:

Íbamos al correo y conseguíamos todo lo que sobraba de las estampillas que tienen pegamento, y escribíamos a mano consignas como “abajo la dictadura”, “fuera la junta”, etc. Subíamos a las micros, las mojábamos y las pegábamos en los fierros. Después ya nos pusimos más creativos y hacíamos panfletos, los cortábamos a tijera, en una hoja de carta hacíamos cuatro, y nos íbamos a edificios del centro con una tablita y una botella de plástico con agua, le hacíamos un hoyito chico, poníamos la tablita en el borde de la ventana, en el extremo hacia la calle se ponía el paquetito de panfletos y como contrapeso la botella que estaba perdiendo agua, entonces llegaba un momento en que se acababa el agua y quedaban locos... y acá en la zona sur salíamos a rayar con lo que encontráramos, hasta con alquitrán o aceite quemado, lo que hubiera, y en los primeros meses, o sea, uno lo piensa ahora y tuvimos suerte... palpitaba el corazón, claro<sup>4</sup>.

A partir del anuncio de la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM), se dispusieron recursos, infraestructuras, fue promovida la formación de cientos de cuadros que tomaron cursos de preparación en guerrilla urbana y formación militar en el extranjero; se imprimieron instructivos de autodefensa para difundir en poblaciones y universidades; se conformaron unidades de combate y grupos operativos, y se repartieron manuales y explosivos de uso masivo. Las redes de reclutamiento también comenzaron a expandirse en distintos frentes de masas. Las primeras acciones audaces fueron un adiestramiento que adquirió mayor complejidad con el paso del tiempo y el desarrollo de las protestas. El proceso fue rápido. Entre 1981 y 1982 hubo actividades sectoriales, pequeñas y medianas marchas en las calles, manifestaciones relámpago, ollas comunes, rayados, pequeños actos de sabotaje, algunos bombazos y repartición de panfletos. En términos de la participación popular, las Marchas del hambre del 19 de agosto y 2 diciembre de 1982 y marzo de 1983, convocadas por el PC y otras organizaciones sociales, lograron convocar a gran cantidad de gente y hacer escuchar el descontento “ganando las calles”. Fue el preludio de lo que vendría.

Aprendiendo y experimentando, los militantes fueron poco a poco extrayendo lecciones de los errores e ingenuidades del comienzo. En 1982, Edgardo Díaz, dirigente de la “Jota” a nivel estudiantil, planificó una acción con su base:

En una de las marchas de la Facultad de Economía salimos a hacer un corte de tránsito y como íbamos a apedrear un banco, llevábamos piedras, llevábamos unas molotov, unos neumáticos, ahí en la Alameda, y ya estábamos haciendo la hueá y de repente “¿los fósforos, y los fósforos?”, ¡y nadie llevaba fósforos! Y como yo iba a cargo del grupo, me enojé tanto, porque cómo era posible que nadie llevara fósforos, y fui al quiosco de la esquina a comprar fósforos. ¡Ese era el nivel de organización!, pero prendimos la hueá y logramos cortar el tránsito. Nos cagamos de la risa después. Era la ingenuidad, claro. Uno le puede poner el sentido de lo combativo que era, pero a la chilena digamos, ni más ni menos (risas). Lo que pasó a continuación es otra historia desde el punto de vista de la preparación militar<sup>5</sup>.

Aunque si bien esta serie de pequeñas acciones poco podían afectar al gobierno a nivel central, se trataba de ir generando las condiciones de posibilidad y motivar a la gente a perder el miedo y demostrar que la dictadura no era invulnerable en sus resquicios: “No sé lo que le pasaría al gobierno, al Estado, a las autoridades, pero en el fondo era ir asumiendo que podías hacer cosas de mayor nivel, digamos, que ya no eran solo los panfletos”. Era un adiestramiento que fue adquiriendo mayor complejidad con el paso del tiempo y el desarrollo de las protestas. Continúa Edgardo: “Esto fue muy cortito, entre que empiezan a aparecer las primeras manifestaciones y se sacan las protestas pasa muy poco rato. Fue como una contribución, era como incorporar componentes de la rebelión o la desobediencia o como se quisiera ver”<sup>6</sup>.

Como hemos señalado, con las protestas y el paso de la cultura política de la resistencia clandestina a la de la confrontación abierta se reconfiguró el espacio de fuerzas sociales y creció el reclutamiento de militantes. Era el momento de la política agitadora, de visibilización partidaria, consolidación de sus pautas de socialización y debate. Aprovechando los espacios políticos y callejeros que la movilización social había conquistado, después de la Tercera Jornada Nacional de Protesta se conformaron los grandes conglomerados que constituyeron el bloque opositor: la Alianza Democrática primero, y posteriormente el Movimiento Democrático Popular y el Bloque Socialista. También en las universidades y liceos comenzó a reactivarse y masificarse la organización opositora mediante la democratización de los centros de alumnos y federaciones estudiantiles.

De esta manera, estimulados y contagiados con las protestas y la nueva dinámica social, se incorporó un nuevo contingente de militantes. Se trataba de niños que crecieron en dictadura y que comenzaron su experiencia política en el frente estudiantil secundario, universitario o poblacional, una generación inspirada por el antiautoritarismo, dispuesta a reaccionar con mayor vehemencia y radicalidad. En esta etapa, además, nació el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y junto con él, las llamadas “formas de autodefensa” se masificaron. Lo de ellos fue el sabotaje, el hostigamiento, boicot y la emergencia de métodos de lucha no convencionales dentro de las filas comunistas.

Con las protestas, además, creció la extensión de los murales y rayados que cubrieron las paredes y panderetas de avenidas céntricas y calles poblacionales, y los panfletos se hicieron cotidianos en el paisaje. En los atajos y rodeos de la ciudad circularon mano a mano y puerta a puerta más ediciones de boletines y

comunicados clandestinos. Por ello, los militantes debían consagrar largos turnos a las tareas de propaganda y difusión, asumiendo los riesgos de albergar una imprenta, un mimeógrafo o una brocha en el bolsillo. En las universidades flamearon pancartas y aparecieron más diarios murales que no solo se colocaban en lugares estratégicos para crear conciencia, sino que se defendían de las manos que quisieran arrancarlos. Se trataba de ganar y defender espacios. Los lugares de socialización se desarrollaron y expandieron junto con sus ocupantes: asambleas, marchas, esquinas poblacionales, actos culturales y peñas. También hubo más apagones con la sofisticación de los dinamitazos y el uso de explosivos, junto con la masificación del armamento casero. En fin, el sentido político del estar juntos fue protestar, conspirar y movilizar a las fuerzas de oposición.

Para el éxito de la Primera Jornada Nacional de Protesta los militantes de base fueron un eslabón fundamental. Militantes con experiencia, como “Darío”, se encargaron de las tareas propagandísticas y se las ingeniaron para coordinar el movimiento entre sus redes cercanas:

Primero iba a ser paro; me acuerdo siempre del 11 de mayo. Yo tenía rayada toda Vicuña Mackenna con “El 11”. No decía ni una hueá más. Luego se cambió a protesta, como siempre los problemas de la izquierda. Fue jodidísimo, me “quemé” con familiares y cuanta hueá. Yo hice el llamado en el sindicato, yo era patudo. Esa vez movilizamos muy poquito dentro de la población. Salió gente, los cabros chicos (niños), los “volados” (marihuaneros), ¡pero ya moviste algo! Y hay que “quemarse”<sup>7</sup>.

Quemarse en los códigos de la época quería decir exponerse públicamente a pesar de un posible despido o seguimiento. Ellos, “los que se quemaban” y asumían la tarea de ser líderes locales serían reconocidos en la población y centros de trabajo o estudio como organizadores desde adentro. Porque si algo tenía credibilidad a la hora de conducir la protesta, era el contacto directo, de piel, legitimado en días cotidianos, pero también, al desarrollarse cada jornada, en la iniciativa, valentía y seguridad demostrada a la hora del combate callejero. Había que estar ahí. Rostros, actitudes y presencias más que cualquier palabra o discurso eran valorados en esa política directa que se “ganaba la calle”. Así lo



experimentaba, Raúl Canales, entonces militante del MAPU:

Tenías militancia previa, pero no estaba concertado con el partido qué se iba a hacer; era una cuestión que nacía ahí en el momento. Para la gente también, porque la gente seguía a líderes locales, o sea, la gente no salía a la calle porque llamaba, no sé, Ricardo Lagos, no; no salía a la calle porque Seguel había aparecido en la radio llamando, ¡no! La gente salía porque decía ¡ah, ahí anda mi vecino! y ya te ubicaban, ya sabían que andabas metido en cosas; además, había cierto respeto por los que andaban metidos en política, eran más creíbles, la gente como que te veía más serio, o sea, tenía sus ventajas que te identificaran políticamente<sup>8</sup>.

Si ser político o estar comprometido con alguna de estas organizaciones era sinónimo de “delincuente” para los efectivos de la dictadura, en las cárceles públicas, donde se aglomeraban los presos políticos, y en las poblaciones era señal de prestigio; el prestigio de ser luchador social. Los políticos en esos territorios, como señala Raúl Canales, eran respetados:

Por ejemplo, el pato malo no se metía con los políticos, porque uno arriesgaba el pellejo porque no todos lo hacían, entonces, al ver la gente que tú te arriesgabas a ese tipo de cosas y que no te pasaba nada, empezaste a ser creíble pa'l resto no más. Yo me paré en el escenario aquí en plena dictadura y hablé ahí, nunca me pasó nada, o sea, estuve preso no sé cuántas veces, pero una hora, dos horas y me soltaban, pero era reconocido por ser opositor al régimen, sabían que me tomaba las calles sin autorización de nadie<sup>9</sup>.

Este testimonio es confirmado por “Darío” cuando señala que para la Segunda Jornada Nacional de Protesta, realizada el 14 de junio de 1983, la gente que quería movilizarse ya tenía más o menos identificados a los líderes locales que consultar o seguir. Estos, por su parte, también buscaban estar más organizados, reclutar más gente y consolidar la protesta como hecho político:

Después la gente nos buscaba a nosotros ¿y qué vamos a hacer? Cuando se llamó a la segunda protesta, la gente te preguntaba a ti. Nosotros habíamos juntado un alto de neumáticos, venían los cabros (muchachos) y nosotros ¡no!, ahora vamos a ir a la avenida. Entonces, todos con una goma pa' fuera de la población y compramos combustible. Ya se incorporó más gente, y a la siguiente teníamos un montón de gente ahí en el paradero 21 de Vicuña Mackenna<sup>10</sup>.

La protesta marcó la hora del desquite y los sectores organizados apoyaron con su experiencia y disposición, pero ¿podían esos líderes locales definir cuáles serían los límites de la protesta? ¿Podían determinar hasta dónde debía llegar el alcance de las piedras o los pertrechos de las barricadas? Sabemos que ante una convocatoria centralizada y la credibilidad que inspiraban los líderes locales – junto a su trabajo de agitación previa–, eran miles los que salían a protestar, mas en el momento de la confrontación abierta, ¿quién comandaba, controlaba o establecía las formas de la protesta? Al parecer ese terreno estaba desierto y así lo confirma Pedro:

Nadie controló las primeras protestas; las convocaba el Comando de Trabajadores y listo... Los que teníamos conciencia nos sumamos a lo que había y tratamos de organizar un poco... Llegaba gente de todos lados y hacíamos lo que se nos ocurría para preparar el ambiente. Una vez invitamos a toda la población a hacer un rayado. Se juntó un montón de gente y cada uno ponía lo que quería... Participaban muchos jóvenes, viejas buena onda y, sobre todo, los volados. Así se iba armando la protesta. Salían cosas de todos lados, de los grupos juveniles, de las ollas comunes, de los “comprando juntos”, de las mujeres, de todas las organizaciones que se daban en la población. Pero los comités propiamente tal éramos casi puros jóvenes –hombres y mujeres– y algunos viejos del PC. Como que se armaba con los que se habían movido en la protesta anterior<sup>11</sup>.

La diferencia entre organizar “un poco” y controlar las protestas era evidente. De hecho, ese fue un punto de discusión y controversia que animó el debate entre

los convocadores e inspiró la impugnación recurrente de sectores más moderados. La crítica radicaba en que la protesta “se les iba de las manos” y adquiriría ribetes violentos a pesar del carácter pacífico en que insistía la convocatoria pública. Así, en más de una ocasión fue el argumento que sostuvieron dichos sectores –en especial cercanos a la Alianza Democrática– para vetar un llamado y criminalizar la protesta. Luis Fuentealba, militante del Partido Socialista y vicepresidente de la Coordinadora Nacional Sindical, era uno de esos convocantes y de los conflictuados con las consecuencias no previstas:

Había una fuerte capacidad de convocar y no necesariamente de conducir. Tú puedes llamar a la calle y va a haber un manifiesto al que un millón o dos millones de personas se pliegan, pero todas traen sus propias expresiones; en cada población están pasando cosas. En la Alameda... conducir eso, para que eso no se desnaturalice, es muy difícil, para que no se creen situaciones extremas de conflicto en las que pueden matar a los jóvenes que en realidad no tenían armas. Los jóvenes ponían las barricadas y estaban toda la noche tirando piedras y se armaba una batalla... pero una batalla de piedras contra armas, peleas en las cuales participaban niños. Estoy hablando de niños de ocho, nueve años que lo tomaban como si fuera una aventura. ¿Por qué lo entendían así?; porque ellos vivieron y crecieron escuchando metrallas, balaceras, entonces no era una cuestión que los asustara<sup>12</sup>.

Algunas veces, como nos advierte Raúl Canales por lo que se experimentó en la población La Pintana, entre la catarsis y el fuego la situación se descontrolaba y afectaba a los propios vecinos:

No sé, por lo menos aquí, hoy la gran mayoría de las casas tienen reja de fierro. En esa época eran de madera. Entonces, para alimentar la fogata, sacaban las rejas, cortaban las rejas y la gente se enojaba. Tener ese control era muy difícil, era difícil. Me acuerdo que una vez asaltaron a un tipo que reparaba televisores, y ¡los televisores a la fogata! Claro, ya era mucho ya, entonces se escapaba de las manos, o sea, no había un control. Es que la bronca acumulada

llevaba de todo<sup>13</sup>.

Entre ese descontrol convergían formas de protesta más cercanas a los llamados motines populares, como saqueos a tiendas y supermercados, destrozo del mobiliario público, de vitrinas bancarias, incendio de locales municipales, etc. Estas acciones sobrepasaban el cálculo político o los lineamientos de pautas de conductas esperables, pero estaban insertas dentro del clima de sensibilidad que concitaba un ánimo de desobediencia y cuestionamiento al orden impuesto, también de la necesidad y de estrategias colectivas de sobrevivencia. En plena protesta del 4 de septiembre de 1985, a Miguel y sus compañeros les fue difícil manejar el deseo colectivo de saquear una tienda cercana: “Esa noche fue bien difícil controlar a todos los que se habían juntado y, sobre todo, convencerlos de que no fuéramos a saquear el supermercado porque no estaban dadas las condiciones. Hay gente medio burguesa que está en contra de los saqueos y hay que prepararlos más”<sup>14</sup>.

Por lo común, los saqueos se organizaban en el momento; la gente avanzaba protegida en la multitud decidida a arrasar con lo que encontraran, eran los excesos que al día siguiente repudiaban amplios sectores, más cuando se trataba de pequeños comerciantes atacados por las turbas. Aunque esto no era lo común. Otras veces estaban planificados por militantes que fungían como vanguardia y grupo de choque, pero su blanco eran principalmente bienes que pertenecían a grandes propietarios. También ocurría que las mismas tiendas eran saqueadas en cada jornada en forma prácticamente ritual, es decir, ya era parte de los códigos locales de la protesta en esas poblaciones, como grandes cadenas de zapaterías o supermercados.

Por otra parte, ya encendidas las barricadas y cortada la red de alumbrado público, era bastante difícil distinguir a los cabecillas, no solo por la oscuridad, sino porque había líderes del momento, es decir, el que dirigía cierta acción no necesariamente era el mismo que planificaba (o intentaba planificar) la jornada. Había quienes se envalentonaban en la marcha de los sucesos. Se trataba de personajes que pronunciaban la palabra clave, sacaban fuerza quién sabe de dónde y tenían la capacidad de encauzar los descontentos hacia cierto objetivo. La complicación era evidente para las fuerzas represivas que al día siguiente querían localizar a “cabecillas” que nacían en el anonimato.

En resumen, podemos encontrar tres tipos de liderazgo: los líderes del momento, que hemos explicado; un nivel intermedio, que son los líderes locales. Estos gozaban de gran prestigio en el barrio; ellos tenían un trabajo permanente en sus sectores, planificaban las acciones, movían y organizaban logísticamente la protesta. En su gran mayoría no fueron los héroes que murieron en acciones audaces de alto nivel operativo, ni los que más tarde ocuparon cargos en el Parlamento; ellos, desde los primeros tiempos, fueron los organizadores de la lucha cotidiana, anónimos fuera de su radio de acción. Además, servían de puente con el tercer tipo de liderazgo, que prácticamente no vemos en el terreno de la protesta poblacional o estudiantil: los líderes nacionales; si bien algunos de ellos se encontraban en el exilio o en la clandestinidad, la mayoría se manifestaba preferentemente durante el día, en manifestaciones desarrolladas en el centro de Santiago, cantando el himno nacional o leyendo declaraciones públicas ante la prensa nacional e internacional.

## Agitadores locales: los profesionales de las protestas

A partir de las necesidades constatadas en el terreno de la experiencia directa, tanto en la fase de planificación como en la operativa, se fue profesionalizando la labor de los líderes locales en cuanto a entregar apoyo logístico a los manifestantes e incluso facilitar el trabajo de acopio para alimentar las fogatas. Su tarea era conversar y agitar los ánimos. A esto se le llamaba “hacer movimiento”. Nos cuenta Raúl:

Los dirigentes poblacionales nos movíamos hartos, porque el partido no era capaz de llegar a todos lados. Tenías que recorrer dateado dónde había gente afín a lo que estaba pasando y que le gustaría meterse en el cuento, entonces había que estar siempre conversando. El día que llamaban a la protesta había que recorrer la población: “Oye, tal día... a tal hora partimos”, y qué sé yo. De repente hubo gente que financió fletes. Hacíamos que nos juntaran neumáticos y entonces el día de la protesta partía un camioncito, iba a buscar los neumáticos, los cargaba y pasaba recorriendo. Yo iba atrás botando neumáticos no más, a la pasada, por donde se suponía que había gente que iba a organizar la cosa. Entonces cuando era la hora, los tipos salían, se encontraban con los neumáticos, los prendían, y ya se armaba la fiesta altiro<sup>15</sup>.

La mayoría coincide en que vivían sin tiempo o contra el tiempo preparando los “volanteos” y rayados de convocatoria, generando coordinaciones con sectores aliados para que la jornada fuese lo más combativa y masiva posible. Tal era la misión y así lo experimentaba Juan Alfaro, dirigente de las Juventudes Comunistas en el Liceo de Aplicación:

No tenías tiempo; nosotros estábamos llenos de pega. Desde temprano tenías que ir al paradero de la micro a tirar miguelitos para que no hubiese micros ese día

de paro nacional o protesta. ¡Uno inventaba protestas día por medio! La iniciativa funcionaba en el sentido de “oye, hagamos un rayado, hagamos un mural, pongamos un lienzo”, en función de una protesta; ahí estaba la iniciativa... Eran los tiempos de mucho sabotaje, era fundamentalmente eso, en todo sentido, copamiento de puntos estratégicos para generar tacos y poner barricadas, tirar miguelitos y generar caos<sup>16</sup>.

También Pedro. Él creció en dictadura y siempre estaba inquieto, buscando, preguntando, leyendo todo lo que caía en sus manos, especialmente almanaques y libros usados que conseguía en el mercado; con sus amigos Mauro y Esteban, entre prácticas de karate y ejercicios físicos para preparar el cuerpo, decidieron formar un comité de propaganda: “Hacíamos unos panfletos con tinta de glicerina que sabía hacer Esteban y los tirábamos para las fechas clave, como el cuatro o el once de septiembre. Cuando oíamos los comentarios de las vecinas, sacábamos pecho y nos sentíamos los comandos de la población”. Los espacios para las tareas conspirativas no eran muy amplios debido al hacinamiento de las modestas viviendas, pero se las ingeniaban: “Los hacíamos en la casa de Esteban porque era el único que tenía una pieza con puerta”<sup>17</sup>. Entre las tareas de propaganda, Pedro rayaba baños, pizarras y microbuses, pero todo eso le parecía insuficiente, quería algo más:

Andaba medio botado cuando, por intermedio del tío Pepe, conocí a un compadre que era de la R, de la resistencia. Era un tipo mayor, como de 23 años; conversábamos hartos y un día me invitó a panfletear. Nunca supe cómo se llamaba, le decían Charlie. Tenía pinta de obrero, andaba con su bolso y con una ollita... quedé alucinado con el panfleteo... El Charlie tenía todo organizado, teníamos que panfletear un día preciso y en un sector determinado... no nos veíamos mucho, hacíamos una acción y después el Charlie desaparecía”<sup>18</sup>.

Con las protestas empezó una etapa intensa, con más responsabilidades: “Sacábamos nuevos panfletos, juntábamos forros, hacíamos análisis de coyuntura para ver cómo íbamos a enfrentar la siguiente protesta, juntábamos un poco de plata para bencina, preparábamos las molotov y le hablábamos a la

gente”. Por eso formaron un comité de protesta, una incitativa que también se reprodujo en otras zonas:

Si la protesta empezaba a las ocho de la noche, nosotros a las siete comenzábamos a recorrer la población tocando una olla o un tarro... De repente la cosa prendía, sonaba un tambor por algún lado, unas ollas por otro y se juntaba la gente a gritar y saltar. Todos se iban sumando, se armaban las marchas y se recorría la población. Siempre había mirones que no se integraban y los de la marcha les gritaban de todo... los cuatro o cinco compadres más movidos nos recorríamos toda la población dando instrucciones para que los pacos no entraran, viendo si alguna barricada fallaba o si alguien necesitaba más ayuda. Se juntaban las piedras y los más ingeniosos hacíamos hoyos camuflados para que se cayeran los furgones<sup>19</sup>.

Lo intensidad de un día de protesta es detallado en el cronograma que nos recrea Manuel Loyola, entonces militante comunista:

Nuestro plan del día comenzaba temprano; partíamos a las cinco o seis de la mañana. Decíamos, a las 5 rayamos pancartas, a las 6 vamos a hacer un corte en tal lado, después a las 10 vamos a ir al consultorio, a las 12 nos vamos a sumar a la convocatoria de la plaza de Armas, a las 3 p.m. vamos a ir al colegio tanto a parar las clases, y después a las 6 a la población tanto. Nos vamos para allá y nos atrincheramos, y allá empezamos a cortar las calles de acceso a la población y adentro vamos a hacer esto y lo otro. Desde la dirección local o regional de la “Jota” teníamos los espacios delimitados, entonces teníamos que informar que va a haber, no sé, 50 barricadas, tantos cortes... Después tenía que venir el parte de guerra, hacíamos la estadística de todo lo hecho y lo informábamos a las direcciones superiores<sup>20</sup>.

Distinto es el caso de “Darío”, militante del PC y futuro integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aunque lo tacharan de indisciplinado, le gustaba planificar y actuar por su cuenta:



Yo trabajé muy independiente. Una pura vez me mandaron un instructor para la cuestión de los explosivos. El flaco sí sabía bastante; se notaba que había estado afuera. Los días de protesta para sacar a las fuerzas represivas del centro poníamos cargas alrededor. Para mí no había dirección, no había ni una hueá. Teníamos equipos de rayados, hacíamos rayados de 100 m; hay quienes son natos para eso, como que usaran regla. Los planificábamos bien, como debe ser (...). En la noche había que trabajar en el taller que teníamos para hacer los miguelitos, hacer el cacho del diablo, repartir propaganda. ¡Era una cantidad de trabajo!<sup>21</sup>.

Así, en la calle, se iba generando organización y estableciendo redes de intercambio y apoyo, lo que permitió que durante los años 80 se gestara un movimiento politizado, bastante combativo, entre distintos sectores. Edgardo Díaz, en su calidad de dirigente estudiantil, trabajó con muchos de ellos:

Yo tenía una función de masas, y por lo tanto me enfocaba en la orientación hacia los dirigentes que trabajaban en la construcción del movimiento. Pero lo más importante lo hacían los propios cabros en sus organizaciones. Lo nuestro era solo el diseño del cuento. Era bien interesante. Obviamente, tenían menos uso de literatura y todo, pero se organizaban con sus cuadros, había reuniones semanales... Mi jornada de trabajo como dirigente era de lunes a domingo, andando en reuniones, juntando gente, conversando, viajando a provincia. Había más actividad gremial, de relaciones políticas ¡mucho efervescencia!<sup>22</sup>.

La tarea de los militantes para fortalecer las redes de reclutamiento y facilitar los procesos de implicación individual era fundamental: ocurriera en la esquina de la barricada, en una parroquia, en la escuela o la universidad. Quienes no provenían de una familia militante con contactos activos, debían intentar acercarse a “los más movidos”, participar en las actividades y demostrar las cualidades más apreciadas de un luchador social: valentía, responsabilidad, hermetismo y – cuestión fundamental en la época– austeridad. Antes de ser contactados, los aspirantes serían observados desde cerca, averiguados sus antecedentes y

posturas políticas, luego se les iría probando con pequeñas tareas. Más fácil era para quienes tenían el don del liderazgo, los que “sin partido” organizaban a sus núcleos cercanos, quienes destacaban en la oratoria agitadora y se lucían en las calles; ellos eran el blanco predilecto para ser ingresados al mundo del compromiso militante.

Miguel comenzó a trabajar a los ocho años vendiendo dulces en los microbuses y a los trece encontró en la parroquia de su población a un cura que por fin decía lo que él sentía. En esas conversaciones se fue politizando, “sacó su personalidad” y aprendió a expresarse en público. A poco andar, su aspiración fue militar en la misma organización del héroe de su población. Pero Miguel sabía que su entrada al mundo militante solo la conseguiría legitimándose en el combate callejero:

Lo único que quería era militar en la “Jota”, igual que el Julio. En las protestas trataba de ser lo más puntudo posible y, donde podía, comentaba cuántas molotov había tirado o cómo le había dado pedrazos a un paco, hasta que me llegó la invitación. Cuando ya era militante, el Julio apareció con una especie de maletín James Bond que se convertía en mimeógrafo y me dijo que había que hacer panfletos. Trabajamos toda una noche, yo observé bien el proceso y me construí un mimeógrafo propio con palitos de helado, el forro de un vestón de mi papá y papel mantequilla con vela. Hacía resmas enteras y me salían tan bien que me dejaron encargado de los panfletos<sup>23</sup>.

Pero Miguel no duró mucho dentro de las Juventudes Comunistas. Solo transcurrieron un par de meses y comenzó a incomodarse con el “tareísmo” en que, según él, se basaba el trabajo, es decir, las múltiples indicaciones que llegaban “desde arriba” y que había que cumplir, sin opinar ni analizar las situaciones. “Llega la orden y hay que ponerse a rayar, a panfletear o lo que sea”, se quejaba Miguel, “nadie explica nada y todos acatan”. Sin embargo, aunque se desvinculó de la orgánica, continuó colaborando: “Nunca más he militado, pero sigo apoyando todas las acciones que se hacen en la población. En una protesta de septiembre hasta me llegó un balazo en la pierna... pero me sentí contento porque esa vez nosotros también habíamos estado disparando”<sup>24</sup>.

También era usual captar la complicidad de colaboradores (ayudistas) cuya participación era eventual y dependía principalmente de un solo contacto, es decir, eran parte de la red que un cuadro creaba para ejecutar determinadas acciones o servir de ayuda en caso de necesitar seguridad. Así fue como “Darío” conformó su propia red de apoyo: “Por ejemplo, la cabra que trabajaba conmigo, la conocí en las protestas y uno averiguaba, y la familia era comunista... Les hablé: pasa esto, necesitamos que nos apoyen, después me gané a un hermano de ella, y ya tenía una casa más de apoyo”<sup>25</sup>. A su vez, también fue invitado a dar un nuevo paso dentro de las fuerzas especiales del FPMR:

Tú no te das cuenta cuando pasaste de una etapa a la otra, porque va entremezclada, estás en esto, pero estás picando acá, allá. Ni sabes cuándo dejaste esto y vas a la otra, o las llevas a la par... Con el Frente empecé a trabajar en el 85, ya tenía contacto con ellos en el 84, iban a mi casa, no sé cómo llegaron. Es que yo movía mucho en la población, movía la propaganda primero y después los explosivos. Decían: compañero, se necesita esto y allá partía yo<sup>26</sup>.

Los primeros pasos en el proceso de politización muchas veces se desarrollaban al lado de alguien cercano, un compañero de curso, un vecino, un pariente que transmitía informaciones clandestinas, y encarnaba actitudes, sentimientos e ideas propias de un luchador social. Así fue para Claudio Pérez, quien desde niño convivió en la población con gente común, pero con conexiones políticas y una posición de izquierda que los distinguía, a pesar de no tener mayor rango, figuración nacional o responsabilidad política orgánica:

El acercamiento político tuvo que ver con participar en las protestas; era como el espacio inicial de socialización con más gente, algo más visible. Participé muy tempranamente en la esquina de mi casa, en la José María Caro, zona sur de Santiago, discutiendo sobre la dictadura con la gente común y corriente. Esta era la gente más movida, la gente que participaba más allá del pasaje mismo y que tenían otras conexiones. Pero al menos eran la familia visible de la Caro, que movían, que ordenaban. Era gente normal, con ellos jugaba a la pelota, íbamos de paseo por el club, ellos hacían actividades cotidianas, su actividad política

eran más que nada sus opiniones, los debates nocturnos con un “copete”, o sea, no era una cosa formal<sup>27</sup>.

En esa red de complicidades sobresalía un tipo de seres humanos que fueron fundamentales en el proceso de configuración identitaria de los militantes de esta época. Se trataba de personajes cercanos, carismáticos, entregados a la causa, figuras que desaparecían y aparecían bajo un manto de enigma militante. Héroe cercanos:

Hubo otro personaje clave que era uno ya más grande que estudiaba en la UTE y era del sector “E” de la Caro, muy amigo de mi papá. Él estudiaba una carrera técnico-profesional y estuvo vinculado a la “Jota” y siempre nos contaba de esa vinculación y nos traía material. A veces pasaban los milicos disparando y él se quedaba al lado de un kiosco peleando solo con los pacos. Nosotros arrancábamos juntos, pero yo a él lo veía solo. Era como mi referente de héroe<sup>28</sup>.

En el ejército de voluntarios militantes la disciplina, la actitud conspirativa (discreta y audaz) y la disposición a ejecutar las tareas encomendadas –por sobre cualquier deseo, duda o necesidad personal– eran la plataforma para aspirar a ser reconocidos como un combatiente ejemplar. Así, el modelo de liderazgo se acercaba a la sobriedad de un guerrillero heroico. La cultura política de la rebelión sirvió para definir ese “nosotros” que debía asumir los riesgos, vencer el miedo, sobresalir en la audacia, respetar la compartimentación y no preguntar “de más”, incluso perdiendo, ponderando o desechando la mirada crítica.

Ahora, ¿cómo funcionaban las alianzas políticas a nivel local? Los testimonios nos confirman que, en general, las diferencias de la oposición eran más bien las diferencias de los presidentes, jefes, intelectuales y líderes partidarios a nivel nacional. A nivel local, la línea divisoria se marcaba entre quienes apoyaban y quienes se restaban de la lucha callejera. Era evidente, además, que a la hora de la convocatoria los beneficiaba el actuar en conjunto, y los líderes locales se esforzaban para que así fuese. Así se dio, por ejemplo, en las alianzas territoriales, estudiantiles o gremiales entre militantes demócratacristianos –más radicalizados que su dirección central– con comunistas o socialistas.

Raúl Canales nos señala que en el caso de La Pintana solían establecerse acuerdos específicos entre los militantes del MDP, del Bloque Socialista y de la AD para que funcionara masivamente la protesta. En caso contrario, todas las partes sabían que bajaría la intensidad:

Cuando se llamaba a protesta, dependía de dónde eran más fuertes los líderes, en qué lado estaban, en el MDP o en la Alianza Democrática. De repente hicimos alianza entre nosotros, Partido Comunista entremedio, la Democracia Cristiana, los dos sectores del Partido Socialista, en una mesa para discutir la cosa y planificar el cuento. Ahí funcionaba bien, digamos, pero cuando no había esos acuerdos, entonces había sectores que sí prendían mucho y en otros que no pasaba nada, porque los líderes locales de ahí estaban alineados en el otro lado. Esos acuerdos funcionaban a nivel local, aunque no fueran a nivel nacional; por ejemplo, nos poníamos de acuerdo pa' parar los cortes de luz, porque eso restaba gente, la gente reclamaba, y entonces pa' que no ocurriera eso ¿a quién había que llamar? Al Partido Comunista para que estuviera en la mesa, para que se viera la posibilidad de no hacer los cortes de luz<sup>29</sup>.

A nivel gremial y sindical, también se sumaron esfuerzos políticos, como en la Coordinadora Nacional Sindical y el equipo conformado por el demócratacristiano Manuel Bustos, junto con comunistas y socialistas. Sobre esas relaciones nos permite profundizar, a través de su experiencia, don Luis Fuentealba:

Manuel Bustos estuvo conmigo enfrentando palos, golpes, de todo. Estuvo conmigo poniendo barricadas, encendiendo neumáticos, cuando todo el partido DC estaba contra la unidad con los comunistas, en plena dictadura. Entonces, cuando tú miras a las personas con historia, cambia la cosa. Yo tengo muy claro quién era quién. Se estableció entre nosotros un respeto muy grande, al margen de la discusión pasional. Manuel terminó peleándose con sus propios compañeros de partido, lo pasaron montón de veces al Tribunal Supremo de la DC porque él tomó la opción de la unidad amplia, la unidad sin exclusiones, y la unidad, obviamente, sobre la base programática, pero también, la unidad de

acción, que el enemigo era la dictadura y que el puro hecho de dividirnos ya era grave<sup>30</sup>.

Ello no obviaba que hubiese roces y diferencias; por el contrario, evidentemente que los había, y eso condimentaba el debate y la conformación de sus identidades. Si hasta el golpe de Estado eran cotidianas las controversias programáticas, especialmente a nivel gremial y local, donde confluían dirigentes y militantes de distintas organizaciones, ante una tarea urgente como derribar a la dictadura –aglutinada bajo el “antipinochetismo” compartido– las diferencias se guardaban en muchos casos para más tarde, apelando a la consecuencia y a la necesidad de unidad para enfrentar a un enemigo poderoso.

## De la protesta permanente a la frustración prolongada

A fines de 1983, la actitud de las masas manifestada en las Jornadas Nacionales de Protesta y el desarrollo de la fuerza militar propia –el FPMR y los Grupos Operativos de las JJCC– eran evaluados favorablemente. Por ello, en la Conferencia Nacional de 1984, los más decididos propulsores de la PRPM dentro del PC consideraban que era el momento de dar otro paso hacia esa segunda etapa que entrañaba la llamada “perspectiva insurreccional” y que encontramos en los primeros esbozos de la PRPM<sup>31</sup>. El análisis del movimiento de protesta es vehemente:

Han hecho uso también de otras formas de lucha más combativas, han levantado barricadas y han enfrentado valientemente a las fuerzas represivas. En los días de las grandes jornadas de protesta del año pasado, en muchas poblaciones de Santiago, donde vive gran parte de la clase obrera, esa lucha alcanzó niveles de sublevación y contó con el apoyo resuelto de los estudiantes y de la mayoría de la juventud<sup>32</sup>.

En las resoluciones de la Conferencia, el PC saludaba a los combatientes clandestinos que realizaban acciones desestabilizadoras y a quienes ejercían la autodefensa, pero lo principal era el llamado a preparar el “paso decisivo” para terminar con el régimen:

La dictadura puede y debe ser abatida en el corto plazo, a condición de que todos le pongamos el hombro a la tarea. No nos hagamos falsas ilusiones. El fin del fascismo no será fruto de una sola batalla ni de la acción de un solo sector de las fuerzas opositoras, sino el resultado de una sucesión de luchas grandes y pequeñas de todo el pueblo chileno, hasta generar un estado de rebelión nacional que haga inmanejable la situación al tirano y posibilite dar el paso decisivo para

terminar con la dictadura y retornar a la democracia<sup>33</sup>.

Las tareas de sabotaje que realizaron los militantes del Frente y la “Jota” hicieron que los apagones de carácter local y nacional fuesen la tónica de 1984. Llegó un punto en que perdieron la novedad junto con los explosivos colocados en las puertas de entidades bancarias, financieras o en las líneas férreas.

Punto importante a nivel nacional fue la protesta y paro nacional de octubre de 1984. Las bases comunistas nuevamente cumplieron un papel protagónico en su preparación. Entre las propuestas para crear el ambiente de movilización que publicó el periódico El Siglo, en continuidad con lo realizado en jornadas anteriores, se encontraba la formación de equipos de trabajo con el fin de reunir diversos comités especializados por área y zona, como los comités de paro, de mujeres, familiares de trabajadores; equipos de relevo, protección de dirigentes, vigilancia de locales, etc. Además, como parte de las tareas de agitación y propaganda se invitaba a confeccionar volantes, afiches, rayados, diarios murales, pegatinas, lienzos, llamadas divulgadoras y cualquier forma de difusión del paro nacional en la cruzada que llamaron “Cada chileno con su plumón”. Entre otros puntos que requerían planificación se aconsejaba a los militantes ocuparse de la “recolección de aportes extraordinarios” de los organismos de masas con el objetivo de financiar las actividades de agitación, seguramente para asuntos logísticos como recolección de neumáticos, compra de combustible, materiales para la confección de miguelitos, entre otros pertrechos de los que los militantes debían preocuparse de asegurar y distribuir con amplia disposición de tiempo: “Cada día, cada hora debemos aprovecharlos en la preparación del paro nacional”<sup>34</sup>.

Dentro de la percepción emanada de ese “estado de protesta permanente”, todos coinciden en que el tiempo pasó veloz. Tan abocados estaban en la urgencia de sus tareas, respirando dentro de círculos compactos y delineando trayectorias desde espacios clandestinos creados para resistir, que muchos militantes perdieron el pulso de lo que estaba pasando. Se imponía un nuevo orden en Chile que los dejaba fuera. A pesar del estado de sitio y del repliegue de la movilización social en enero de 1985, el PC y el FPMR lanzaron su política de “Sublevación Nacional” como nuevo paso de insurgencia y decretaron que 1986 sería el “año decisivo” para acabar con la dictadura.



Las tareas se multiplicaron, como señala Darío, para ellos: “Era tiempo completo, 24 horas. De corrido. Nos reventamos nosotros el 86; es que era mucho, y, claro, a los huevones los teníamos locos también”. El paro del 2 y 3 de julio de 1986 fue un éxito, en términos de convocatoria y confrontación. Además, la represión simbolizada en los dos jóvenes quemados vivos reforzaba la indignación y había concitado el respaldo de la opinión pública internacional<sup>35</sup>. Hasta entonces, en el horizonte de la izquierda se barajaban y disputaban más opciones para terminar con la dictadura; las opciones entrañaban la fuerza potencial de una alternativa que quería ser popular.

Pero a pesar de la duplicación de tareas y responsabilidades para la militancia, las dos grandes acciones realizadas en 1986, que desde el diseño estratégico definirían la balanza hacia una salida “a la plebeya” —el atentado contra Pinochet y la internación de ochenta toneladas de armas por el puerto de Carrizal Bajo— fracasaron. En el campo de batalla hegemónico sobró energía para naturalizar y conducir el camino de la transición en Chile dentro de los marcos de la Constitución de 1980 y el sistema económico imperante. Toda violencia fue criminalizada, “venga de donde venga”.

Sumándose al anhelo de una generación, Viviana Díaz, ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y militante del PC, nos habla de las esperanzas que albergaban para que la transición chilena se definiese de otra forma:

Se crearon tantas expectativas en que el año 86 era el “decisivo” que uno creía que efectivamente íbamos a lograr, como quien dice, cambiar la historia y no que al final terminara llevando a otros sectores a buscar aplastar la transición. Porque el final de la transición se pacta con los militares, se acepta toda la Constitución Política, se acepta todo lo que existe... y se les garantiza que los militares no van a ser juzgados, procesados, ni condenados... eso es lo más doloroso, lo más tremendo, porque al final como que las cosas hubiesen caído del cielo, y no fue así; en el fondo fue producto de la vida de miles de compañeros, del esfuerzo, del sacrificio, la pérdida de trabajo, se había incorporado la relegación, estaban los torturados, asesinados, los detenidos desaparecidos, que era lo más extremo, una práctica nunca antes conocida en Chile, que se inventó para crear el miedo, porque el miedo era cosa viva y costaba vencerlo<sup>36</sup>.

Lo interesante de los testimonios, más que la cronología de los hechos, es la significación que los recuerdos tienen para el presente y sus ejercicios de memoria. En contraste con lo dinámico del relato y la frescura con que los militantes rememoran los primeros tiempos de la experiencia de resistir y luchar por “la vida que merecía ser vivida”, en la medida que se acercan los años 90 y posteriores se evidencia en esta generación una sensación profunda de desencanto. Si bien la postergación de los proyectos personales por una causa es reivindicada con orgullo, la llegada de la democracia es (re)significada con un manto de frustración. Cuando la acción de oponer resistencia, la agitación, el sabotaje, la propaganda, la organización rebelde; su forma de crecer, su definición del “nosotros”, la ocupación de todo su tiempo y el despliegue de sus energías en la ciudad perdieron sentido, convergen en ese sentimiento de derrotados experiencias históricas importantes: el despojo de la Unidad Popular y una transición a la democracia que liquidó el sueño de construir un Chile muy distinto.

Para quienes gobernarían el país había que blanquear la historia reciente, esquivar personas y temas molestos, buscar el consenso. Era el momento de algunos, y quienes ayudaron a generar las condiciones de posibilidad para que se negociara la transición entendieron que no estaban contemplados. Por eso es que Raúl Canales insiste:

Yo creo que la generación que logró derrocar a Pinochet fuimos muy ingenuos, o sea, los que estuvimos en la calle, los que pusimos la cara... Porque en términos personales, no todos nos proyectamos para después, sino que yo creo que todo el mundo pensó que se va a ir Pinochet, vuelve la democracia y se puede organizar de manera distinta; vamos a tener elecciones, pero sin decir yo quiero ser alcalde, yo quiero ser intendente, yo quiero estar aquí, acomodarte tú, porque los que aparecieron enseguida después fue gente que no has visto nunca en la calle. Hay una generación ahí que nos echamos buena parte de nuestra juventud peleando pa' que se vinieran otros hueones a sentar por haber sido ingenuos no más, inocentes de cómo se manejaba la cosa. O sea, lo dábamos todo por cambiar la situación que estábamos viviendo, pero sin ambiciones personales p'delante, uno se daba por el otro, por el colectivo y tu opción personal pasaba a otra parte<sup>37</sup>.

Sobre los personeros que llegaron especialmente desde el exilio a administrar la transición a la democracia y gobiernos de la Concertación, la mirada de Juan Alfaro también es bastante crítica: “Hubo gente en Chile que puso la cara, y otra gente que llegó después a tomarse el Parlamento, o sea, todos estos exiliados que llegaron después de los noventa, que llegaron a meterse en la hueá, que no los conoce nadie... Bueno, se conocen entre ellos, uno no los conoce”<sup>38</sup>.

Quizás la opinión de Pancho Villa, artista-militante que recorrió escenarios populares y universitarios en los años 80, pueda resumir la frustración que perdura en esta generación:

Todo pasaba por lo colectivo, nuestras aspiraciones y nuestros sueños personales, o sea, yo iba a tener la posibilidad de entrar a la universidad, iba a estudiar, iba a tener una familia, íbamos a tener una buena vida en la medida en que la sociedad toda tuviera eso, y para eso teníamos que luchar porque todos tuvieran una buena familia, porque todos fuéramos a la universidad. Efectivamente, hubo una lucha inmensa, fue una lucha heroica que hay que reivindicarla desde la ética, pero al margen de eso, en la práctica, fracasamos, fracasamos porque hoy día estamos viviendo en un país absolutamente distinto al que pretendíamos construir y eso hay que asumirlo<sup>39</sup>.

Luego del prestigio de ser un luchador social, de los tiempos de adrenalina y postergación de proyectos individuales, los militantes entraron o, más bien, agudizaron profundas contradicciones políticas y discusiones ideológicas. Llegó el tiempo del desencanto y la crisis de credibilidad. Es necesario considerar que la primera elección presidencial transcurre un mes después del derrumbe del muro de Berlín<sup>40</sup>; la caída de los ladrillos alemanes removió el suelo chileno, golpeó referentes y noqueó más aún a un PC con fuertes desgarramientos internos. El fracaso de 1986, aunado a su vaivén operativo y electoral, que de una negación categórica a participar en el itinerario de transición fijado por la dictadura decidió optar por el pragmatismo e incorporarse en los registros electorales, repercutió en gran parte de sus bases. Por otra parte, la concepción, discurso y la forma de hacer política de los dirigentes nacionales

democratacristianos y socialdemócratas en La Moneda apuntaron al blanqueo de la memoria y al silenciamiento de las profundas contradicciones sociales persistentes.

Pero más allá del sentimiento de derrota y frustración que perdura en sus memorias, el trabajo de los militantes en las jornadas de protesta ayudó a unificar los propósitos y dirigir las energías de la multitud hacia demandas concretas, pero también hacia objetivos que apuntaban a fortalecer la autodefensa y oponerse activamente al régimen. Los militantes dieron cohesión a las voluntades dispersas y dirección a energías tantas veces desbocadas. Lo urgente para ellos fue recuperar la política como puente entre la experiencia cotidiana y sentidos más globales, colectivos; cambiar la correlación de fuerzas de la oposición y abrir los espacios de debate y presencia pública. Así, con consignas, pertrechos, publicaciones, brochas, planificaciones, con su empeño por ganar la calle, los militantes actualizaron y encarnaron en cuerpo y alma una tradición de lucha que recorre la experiencia histórica de la izquierda y la cultura política de la protesta chilena.

■

<sup>1</sup> [Vovelle, Michel. La mentalidad revolucionaria. Crítica, Barcelona, 1989. p. 128.](#)

<sup>2</sup> [Moulian, Tomás. “Democracia y tipos de Estado: disquisiciones en dos movimientos”. En: Vega, Juan Enrique \(coordinador\). Teoría y política en América Latina. CIDE, México, 1983, p. 339.](#)

<sup>3</sup> [Ver por ejemplo: Álvarez, Rolando. Op. cit.; Bravo Vargas, Viviana. Op. cit.; Pérez Silva, Claudio. “La Tarea Militar del Partido Comunista de Chile. ¿Continuidad o ruptura de la Política Militar del comunismo chileno?” Revista Izquierdas, N° 29, 2016, Santiago; Herreros, Francisco. Del gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular. Editorial Siglo XXI, Santiago, 2003; Huerta, Verónica. Los veteranos de los años 80. Desde fuera, en contra y a pesar de la institucionalidad. Tesis para optar al grado de licenciatura en sociología, Universidad ARCIS, Chile, 1993; Moulian, Tomás; Torres Dujisin, Isabel: “¿Continuidad o cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile?”. En Varas, Augusto \(compilador\): El Partido Comunista en Chile. Un estudio multidisciplinario. Cesoc-Flacso, 1988; Samaniego, Augusto. “Lo militar en la política: lecturas sobre el cambio estratégico en el PC. Chile. 1973-1983”.](#)

[En:http://www.palimpsestousach.cl/numero1](http://www.palimpsestousach.cl/numero1).

[4 Entrevista con Óscar Riveros, 10 de noviembre de 2010.](#)

[5 Entrevista con Edgardo Díaz, septiembre de 2010.](#)

[6 Ibid.](#)

[7 Entrevista con “Darío”. En: Bravo, Viviana, ¡Con la razón y la fuerza! Op. cit., p. 204.](#)

[8 Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.](#)

[9 Ibid.](#)

[10 Entrevista con “Darío”. En: Bravo, Viviana, ¡Con la razón y la fuerza! Op. cit., p. 204.](#)

[11 Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 83.](#)

[12 Entrevista con Luis Fuentealba, 14 de octubre de 2010.](#)

[13 Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.](#)

[14 Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 104.](#)

[15 Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.](#)

[16 Entrevista con Juan Alfaro, 8 de octubre de 2010.](#)

[17 Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 27.](#)

[18 Ibid.](#)

[19 Ibid., pp. 83-84.](#)

[20 Entrevista con Manuel Loyola, 20 septiembre de 2010.](#)

[21 Entrevista con “Darío”. En: Bravo, Viviana, ¡Con la razón y la fuerza! Op. cit., p. 205.](#)

[22 Entrevista con Edgardo Díaz, 15 de septiembre de 2010.](#)

[23 Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 100.](#)

[24 Ibid., pp. 100-101.](#)

[25 Entrevista con “Darío”. En: Bravo, Viviana. ¡Con la razón y la fuerza! Op. cit., p. 206.](#)

[26 Entrevista con “Darío”, 22 de junio de 2005.](#)

[27 Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.](#)

[28 Ibid.](#)

[29 Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.](#)

[30 Entrevista Don Luis Fuentealba, 14 de octubre de 2010.](#)

[31 “Pauta orientadora de la Política de Rebelión Popular de Masas”. Marzo 1981. En: Marín, Gladys, entrevista realizada por Claudia Korol. Ediciones América Libre, 1999, p. 92.](#)

[32 Convocatoria a la discusión. Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile, 1984. En: Hacia el XV Congreso del Partido Comunista de Chile. Op. cit., p. 93.](#)

[33 Comunicado de Partido Comunista de Chile. ¡Conferencia Nacional! Santiago, junio de 1984. En: Boletín del exterior. N° 66, julio-agosto, 1984, p. 15.](#)

[34 “Por esto vamos al paro-protesta”. El Siglo, N° 7594, octubre de 1984, pp. 10-11.](#)

[35 Se trataba de Carmen Gloria Quintana, quien logró sobrevivir con graves quemaduras en su cuerpo, y del joven fotógrafo Rodrigo Rojas, quien falleció más tarde.](#)

[36 Entrevista con Viviana Díaz, 2 de julio de 2010.](#)

[37 Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.](#)

[38 Entrevista con Juan Alfaro, 8 de octubre de 2010.](#)

[39 Entrevista con Pancho Villa, 21 de octubre de 2010.](#)

[40 Las primeras elecciones presidenciales después del triunfo del No en el plebiscito se realizaron el 14 de diciembre de 1989 y triunfó el demócratacristiano Patricio Aylwin.](#)

## CAPÍTULO VI

### CALLEJERA Y HECHA A MANO:

### TERRITORIO, IDENTIDAD Y CULTURA DE LA PROTESTA

“Como los cuadros de Boccioni, en los que la calle está dentro de la casa, el paisaje dentro de la cara, lo externo invade lo interno, el yo es poroso”.

Carlo Ginzburg





■ *Población La Victoria. 5 de septiembre de 1986 (ADVS).*

La señora Alicia Cáceres conoce perfectamente el movimiento de su población, “el trajín” cotidiano. Ella llegó en 1957 a la población La Victoria con la toma de terrenos, se unió a la comunidad eclesiástica, impulsó la conformación del jardín infantil popular, sufrió la prepotencia del golpe de Estado y la represión que se ensañaba constantemente contra la infraestructura de las organizaciones populares que se levantaban una y otra vez. Ella presenció el surgimiento lento pero masivo que en su población acompañó a la protesta:

Al principio no éramos tantos, pero después era una masa inmensa. La gente cuando ocurría algo salía toda a la calle, aquí todos salían a hacerles frente a los milicos, a los pacos, se ponían barricadas, entonces no podían llegar tanto a la capilla, una que no podían pasar y otra que de todos lados les empezaban a tirar piedras, a gritarles ¡asesinos! y qué se yo, ¡y barricadas por todos lados! Con esto del fuego no podían pasar, no podían apagarlas todas, en eso los cabros “se iban al chanco...” sacaban las... (risas) todavía hay veredas menos, ¡y acarreaban todo lo que encontraban viejo en su casa para hacer unas tremendas barricadas!<sup>1</sup>.

El relato de doña Alicia puede ser una fotografía. En esa fotografía se cruzan distintos personajes. Son ellos quienes se encuentran en ese momento-espacio-sentido que constituyó una protesta. En esa fotografía están los pobladores armando y alimentando barricadas, la mayoría se conocen desde niños, también hay otros jóvenes que vienen a sumarse desde otros puntos de Santiago, muchos son estudiantes. Entre ellos se ven algunos en actitud de organizar el combate callejero, pueden ser líderes locales o líderes del momento, quizás pertenecen a alguna organización política, quizás no, pero en ese instante de política callejera caben todos. Están en la calle, el pasaje, la avenida con piedras en las manos.

En medio de las fogatas y en las puertas de sus casas se divisan familias, chicas adolescentes, también niños, algunas señoras y sus esposos. En la parroquia de la población, convertida en clínica clandestina, el personal de la Vicaría, los curas,

las monjas y otros voluntarios preparan todo para la llegada de los heridos. Aún no llegan “los pacos” (Carabineros de Chile), pero todos saben que pronto lo harán. Captando todo eso está el fotógrafo-reportero, de los pocos medios de oposición, que registra tras el lente, pero que inevitablemente está dentro de la imagen y así se siente. Ellos, esas voces, esas imágenes son los hilos que nos ayudarán a entender, desde otra dimensión, la de las emociones, las subjetividades, las vivencias que se sedimentan en su despliegue urbano, al tejido que dio forma y fondo a las jornadas de protesta. Sin ellos solo pasaremos por afuera, rozando el sentido y el recuerdo, pero sin desentrañarlo.

Para explorar esa cartografía antropológica y geográfica vamos a acercarnos desde los contornos, seguiremos las señales, visibles y audibles de una ciudad que –como diría Henri Lefebvre– emite y recibe mensajes en el mismo acto de habitar. Nos informaremos de las prácticas y comportamientos que modelaron un ser social a través de sus símbolos más visibles. Seguiremos las señales de esa actividad creadora y transformadora de la realidad en la calle que amplifica los detalles, en el ruido que anuncia y congrega, en el fuego que espanta y protege, en las piedras que atacan y defienden. El viaje será hacia la complicidad de las calles, sus rituales, sus símbolos y su gente.

## La calle

La ciudad es un texto posible de reconocer por sus signos. Sus formas hablan, guardan historias y discursos, despliegan prácticas y sentidos, dejan registro espacial de las contradicciones de una estructura social. “Todas las obras desembocan en la significación” observaba Octavio Paz en una carta lírica dedicada a desentrañar las diversas formas que adquiere la relación entre lo humano y la materia con la que se relaciona: “Lo que el hombre roza, se tiñe de intencionalidad: es un ir hacia... El mundo del hombre es el mundo del sentido. Tolerancia la ambigüedad, la contradicción, la locura o el embrollo, no la carencia de sentido. El silencio mismo está poblado de signos. Así, la disposición de los edificios y sus proporciones obedecen a una cierta intención”<sup>2</sup>. Llevemos estas reflexiones hacia el entorno que aquí nos ocupa. Ciertamente no es lo mismo el Santiago de la Unidad Popular que el del golpe de Estado, a pesar de que su sistema urbanístico es aparentemente el mismo. Lo que lo hace distinto son las significaciones que animan la organización de su vida. Sus órdenes y ordenamientos, sus prohibiciones y admisiones, pero también las formas de resistirlo, darle la vuelta, sorprenderlo en sus resquicios y espacios vacíos.



■ *Una esquina de Santiago, Agosto de 1985 (ADVS).*

Demos otro paso en la ciudad bajo la propuesta analítica emprendida por Michel De Certeau. Observemos sus hechuras, esos pasos que pasan en su retórica del protestar. Se trata de detenernos en la facultad que hombres y mujeres tienen para decir otra cosa con la misma materia y multiplicar, con sus despliegues en la geografía, las posibilidades de asignación de sentido y significado. En relación con su posición en el territorio constituyen un cerca y un lejos, un aquí y un allá, un nosotros y un ellos. Rompen con el sentido literal del orden y sus nombres (su toponimia). Los pasos traen el aroma, el sonido, los colores de una época. El andar y protestar conforman trayectorias y repliegues que alteran lo unívoco de los destinos, seleccionan atajos, crean rodeos<sup>3</sup>.

La ciudad tiene símbolos opresores y liberadores. Está colmada de mensajes y propaganda subliminal, tiene estatuas, bustos, emblemas, mediaciones que son historia. Todo sucede ahí por algo, sus áreas verdes, los edificios, los nombres, los recorridos del transporte, las amplias avenidas que conducen o abrazan al palacio presidencial, los pasajes polvorientos que dibujan la periferia, un centro administrativo que da órdenes en voz alta y la lejana cumbre residencial autosegregada.

Recordemos la fiesta por el triunfo de Allende, recordemos a la gente llegando desde la periferia y los campos cercanos. Venían apiñados en camiones, venían en carretas y a pie a celebrar y a escuchar al compañero presidente hablar bajo los balcones de la FECh, un lugar con fuerte carga simbólica en las luchas históricas del país: “¡Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes!”, dijo Allende en la madrugada del 5 de septiembre de 1970 ante miles de personas. “¡Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia... le debo este triunfo al pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Moneda!”. Los testimonios se detienen en la magia de ese instante, esa noche madrugadora en que la historia se dio vuelta y los pobres, los que siempre perdían, festejaron su triunfo y su entrada en La Moneda entre sobrios edificios.

En otro septiembre, en medio de la ocupación militar de la ciudad, auguró el

presidente al despedirse: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Allende simbolizaba la persistencia histórica por la democratización de la sociedad en la apertura de la avenida principal que cruza y une el centro administrativo chileno con el Santiago periférico. Las grandes alamedas vieron correr y dispersarse a miles de manifestantes durante las jornadas de protesta.

Por ello es que tenemos que hablar aquí de las calles, de las gentes, porque de las calles y las gentes está hecha esta historia. Tenemos que hablar de los espacios íntimos, de las almas y las vidas. Porque “antes de echarse a la calle, la protesta se siente, vibra ya en los nervios”, luego vibra en los símbolos, habla con el ruido, el fuego, las piedras. Las jornadas de protesta fueron un hecho sociopolítico significativo que logró cambiar la fisonomía de la ciudad. Con ellas los movimientos y la ocupación de los espacios fueron otros. Un nuevo sentido emergió del conjunto de sus prácticas transformadoras. Se trató de actores y preocupaciones particulares, articulados en significados, trayectorias y repertorios compartidos. Dichas prácticas nacieron en confrontación con el poder y el orden manifiesto en la ciudad. Ante una señal previamente convenida, rompieron el monólogo estatal, el sentido del tránsito y el funcionamiento de sus recorridos.

Marchas y concentraciones que sirven a los subalternos como medios masivos de comunicación se realizaron en determinados espacios que fueron estratégicos<sup>4</sup>. Los panfletos fueron lanzados en avenidas y esquinas claves para ser recogidos y leídos. Los muros fueron rayados para ser vistos. El momento, la hora, el espacio; el ritmo y energía, todo eso confluía. Se escogen ciertas calles, se rechazan otras. Unas tienen nombres propios, otras fechas, algunas no tienen firma, pero todas se jerarquizan y conforman trayectorias según su capacidad para significar. Así sucedió con “el punto” de reunión, la calle que conduce a “la casa de seguridad”, el atajo limpio y el “rompimiento” que escabulle la persecución en el lenguaje clandestino. Así sucedió con la calle que aloja el mercado, la gasolinera, la vulcanización y la esquina de la barricada. Recorridos peligrosos que conviene evitar y pasadizos iluminados que dan seguridad, eso sí, dependiendo del momento, porque en las protestas la oscuridad era buena aliada de la rapidez y el anonimato: por ello hay quienes optan por apagar focos, derribar tendidos eléctricos y algunas torres estratégicas. En las calles quedaron las marcas donde cayeron los muertos, las dolorosas rutas fúnebres y sus romerías al cementerio.





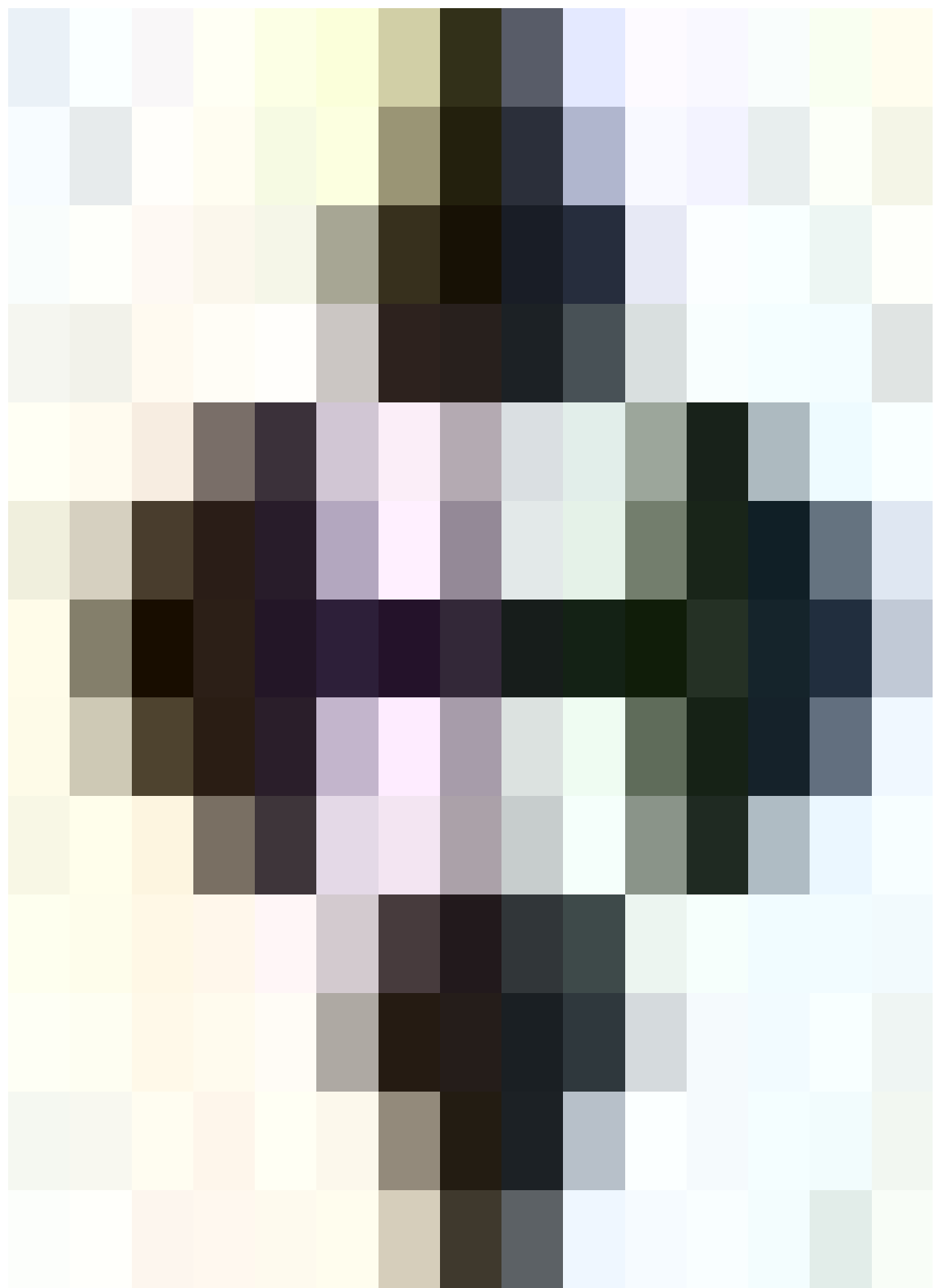


■ *Concentración de jóvenes en avenida Bulnes. 5 de octubre de 1983. Primera concentración pública autorizada por la dictadura (ADVS).*

En la ciudad “el orden lejano se proyecta en el orden próximo”, y en Santiago de los años 80, la diseminación del control y disciplinamiento se proyectaba en las comisarías de los barrios y en la presencia de diversos organismos de seguridad policial local; incluso los cuarteles de bomberos, los talleres de las mujeres de Cema-Chile patrocinados por la Primera Dama y las casetas del PEM y del POJH, además de las iglesias mormonas, todas instituciones cuya ideología religiosa, política y policial era percibida como pinochetista, fueron atacadas en días precisos variando –según las posibilidades y motivaciones de los protestantes– entre el incendio, destrucción, saqueo o lapidación de sus edificios.

Es pertinente insistir en que las protestas no fueron solamente acción instrumental, sino también expresión simbólica, un territorio de lucha que habló con lenguaje espeso. Si la ciudad hablara nos diría que antes, antes de ellas y su aliento movilizador, no se había levantado esa inmensa reja verde que desde 1984 resguarda y separa del tránsito público al Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica; que en 1983, la Plaza de la Constitución, ubicada frente al palacio de La Moneda, fue remodelada. Antes de eso “había una placita en altura que daba donde estaba la estatua de Arturo Alessandri Palma y había banquitos donde la gente al mediodía iba, leía el diario. Había unas escalinatas que te llevaban a esa pequeña plaza”. Ahí, en esos escalones, se ubicaban los familiares de la organización de Detenidos Desaparecidos, principalmente mujeres, “con pequeños carteles que no eran más que una hojita, estamos hablando después del golpe, que decían: ‘¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo?’. Con el tiempo, de tanto usar ese lugar, lo transformaron para que no hubiese un espacio para que nosotros nos fuéramos a sentar. Ahora está la Plaza de la Ciudadanía; ¡es otra!”, recuerda Viviana Díaz<sup>5</sup>. Lo mismo sucedió en el bandejón central de Plaza Bulnes, pleno corazón político administrativo: “El bandejón nosotras lo utilizábamos para darnos la vuelta (girar en círculos enseñando las pancartas), porque tenía como una vereda. En su época tenía como un bandejón, entonces nosotras atravesábamos y por ese lado, que era de tierra, nos manifestábamos. Ahora hay puro pasto, para que nadie pueda hacer ninguna movilización ahí”<sup>6</sup>.

A la hora de disputar los límites, esquinas y edificios emblemáticos en la historia republicana capitalina, revitalizaron y actualizaron su herencia simbólica con el sentido de su ocupación. En las páginas siguientes nos encontraremos presenciando reuniones en la plaza de Armas y la Catedral; a veces en la plaza San Francisco y su iglesia; peregrinaciones y encuentros fugaces por distintos puntos de la Alameda serán recurrentes; escucharemos las batidas de palmas y gritos que resonaron en la complicidad acústica de los edificios del Paseo Ahumada; los repliegues y carreras veloces por el contorno del río Mapocho. Veremos a jóvenes secundarios intentando reunirse en la Biblioteca Nacional y a universitarios marcando la protesta en los frontis de sus universidades.



“Ganar la calle” fue recuperar un espacio físico y simbólico proscrito. Todo lo colectivo era peligroso por eso de la complicidad, y para poner orden, junto con prohibir “lo político” y disciplinar los sueños, impidieron la utilización de esos espacios cargados de sentido. No solo prohibieron el uso de las grandes tribunas públicas y los lugares céntricos, sino que quisieron cortar en los lugares de trabajo y de la vida el mismo hontanar desde donde eso emanaba, como si así se pudiera atajar una experiencia comunitaria y sus saberes heredados. Como si todo les perteneciera, todo lo revolvieron e intervinieron. Casas y cuerpos. Fue humillante. Todo fue vigilado, registrado, marcado. Sin embargo, lo político no desapareció, sino que cambió de lugar en la esfera íntima, en la red privada de complicidades, la de los susurros y puertas adentro.

Hasta el 11 de septiembre era normal estar afuera, porque de alguna manera era estar dentro de una forma de mirar el mundo y ser más que uno. En las calles se discutía, se defendía, se enfrentaban bandos rivales, se vivía la política. Era ahí donde se constataba que los problemas individuales eran el problema de muchos. Así se había hecho Chile a sí mismo durante el siglo XX y poco habían servido las matanzas obreras, la persecución de Gabriel González Videla a los comunistas en 1948 o la represión que pobladores y obreros vivieron durante el gobierno de Frei, porque de represiones y miedos al desborde popular está colmada la historia de Chile. Con esa capacidad para sobreponerse ante las adversidades se habían ganado sus espacios, peleando y negociando la moderación de la explotación asalariada y la regulación de las condiciones de trabajo.

Ahora, en aquel ahora, junto al nuevo patrón de acumulación se amontonaban tantos problemas, desempleo, alzas de los alimentos básicos y del transporte, la extenuante jornada laboral intensa y mal pagada, el maltrato, la represión. La lista era larga, pero se trataba de problemas colectivos y en la calle había que dirimirlos; se trataba de salir –o no– al campo de batalla y muchos coincidieron en que este era el momento. Por eso la alegría que da “el vamos” a la protesta, por eso, junto a las piedras y el fuego había música, murales multicolores, papeles que volaban. Esa interrupción del tiempo en que convergían todos los tiempos emocionaba a Pedro:

Las protestas eran verdaderos carnavales; la gente tocaba guitarra, hacía fogatas, aparecían los casetes de Quilapayún, de la Violeta Parra, toda la cultura revolucionaria. Eran músicas que uno tenía guardadita en su memoria de cabro chico. Por la avenida era súper lindo, uno miraba hacia arriba y había sus 20 o 30 fogatas<sup>7</sup>.

Era como respirar en una atmósfera distinta, un gran re-encuentro que después de diez años había que celebrar. La Primera Jornada Nacional de Protesta dejó impresionados a todos, más a quienes solo recordaban en forma borrosa las concentraciones de “antaño”, como Gabriel, que era muy joven como para haber vivido un encuentro de tal envergadura:

Superó todas las expectativas: todo el mundo estaba en las calles. La cosa nos quedó grande, no hicimos nada, ni barricadas ni nada. Los pacos tampoco se lo esperaban, porque ni se asomaron. Toda la gente salió a la calle a tocar las ollas. Todo el mundo estaba contento, parecía carnaval, saltaban, hueviaban, tocaban guitarra, cualquier locura, parecía como que Chile hubiera ganado el mundial de fútbol. ¡Es una de las cuestiones más encachadas que me ha tocado vivir!<sup>8</sup>.

En las poblaciones periféricas la relación era fuerte entre el territorio y la protesta. Más que en el margen de la segmentación, el protestar de los pobladores se ubicaba en los intersticios. Desde ahí interpelaba a los poderosos para dismantelar sus designios y romper las continuidades de su tiempo, con sus voces y nombres propios. Significaba tomarse los lugares y los relojes, los pasajes y esos inmensos terrenos baldíos y polvorientos tan comunes de aquella época.

Nosotros jugábamos a la pelota y creíamos que la calle era nuestra... La protesta estaba asociada a esa cosa de diversión, de pelea, de combate, de rechazo hacia la dictadura, pero también de querer ocupar los espacios que no podías usar en un día normal; significaba una mínima apropiación de espacio y de poder. La gente salía a manifestarse porque no había pacos ni complot ni ninguna hueá.

Ahí estaba la calle para jugar a la pelota, para tirar piedras, cagarte de la risa. Esos eran los espacios de sociabilidad<sup>9</sup>.

Después del primer reconocimiento colectivo en esos espacios que eran sus espacios vino la delimitación, la defensa y la presencia en la escena y discusión pública. Aparecieron ellos protestando desde su lugar, desde sus calles, en la puerta de sus casas. Eso era nuevo. Hasta entonces los márgenes de la ciudad se desplazaban hacia el centro, eran las “huestes de la periferia” que irrumpían en la plaza pública para hacer sus reclamos y exigir justicia. En el centro político-administrativo se delineaba el campo de batalla. Los enfrentamientos fuera de ese radio ocurrían en las tomas de terreno, pero no se había visto que la protesta se hiciera desde sus calles.

Ello ocurrió por tres situaciones combinadas: primero, porque era mucho más seguro, ya que los beneficios de moverse en terreno conocido son evidentes, aún más en la medida en que se fueron afinando las redes de protección y formas de autodefensa; segundo, porque había un territorio que marcar. Demasiadas veces los militares irrumpieron en la intimidad de su vida, sintiéndose dueños y carcelarios de su mundo. Por eso, luego de los allanamientos que prosiguen a las jornadas de protesta, los vemos ahí, obstinadamente, una y otra vez. Lo dijimos desde un comienzo: lo que sorprende es que las protestas hubiesen tenido réplicas; después de todo, es en este territorio donde más alto se cobraba el oponer resistencia. Y tercero, porque, como hemos visto anteriormente, ante la vulnerabilidad del trabajo, fue en el barrio donde comenzaron a rearticularse las formas de resistencia física y orgánica junto a cientos de organizaciones e iniciativas de supervivencia para resistir la pobreza.

## El ruido

Dicen que todo comenzó con un ruido inolvidable, una onda de sonido expandida por una multitud de manos que tocaban las cacerolas. La sonajera fue el anuncio auditivo y anónimo, masivo y nítido, que hermanó los descontentos. Fue la primera señal de una protesta generalizada y la constatación de que algo había cambiado en Chile. Ese algo era una disposición, un ánimo, un paso al frente.

En ese mayo de 1983, Alejandro Correa representaba a las Juventudes Comunistas en el Codeju (Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles); antes había sido dirigente pastoral. “Entré a la ‘Jota’ y a la semana me eligieron secretario general del centro de alumnos, a los dos meses era encargado de Ingeniería en la Técnica, dos meses después estaba expulsado de la universidad y tres meses después ya estaba clandestino. ¡Meteórica la carrera!”. En 1981, Alejandro fue detenido, pero al salir de la cárcel continuó participando en agrupaciones de estudiantes sancionados, en huelgas de hambre, en tomas y diversas manifestaciones, persistentes pero fugaces:

Conocía a mucha gente del ambiente y nos reíamos porque nosotros decíamos, ¿sabes qué? somos siempre los mismos, o sea, vas al primero de mayo y están los mismos, vas a la marcha de allá y acullá y están los mismos. Cuando íbamos a las marchas, la dinámica era la misma, se juntaba un lote de gente en una esquina y empezábamos a aplaudir y de repente uno empezaba, ¡Y va a caer!, y cuando aparecían los pacos, salíamos todos arrancando. Todo eso duraba dos o tres minutos y éramos los mismos 50 o 60 “gallos” de siempre<sup>10</sup>.

Entre esa gente estaba Gabriel, joven poblador que más tarde será miliciano del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero eso será en 1984. Antes de eso, al principio, buscaba cómo participar, quería hacer algo porque le daba rabia la pobreza y la represión de su población que experimentó desde muy niño:



Conozco a una señora que está sola porque le mataron a toda su gente, una señora que vivía muy cerca de mi casa. El 12 de septiembre del 73 fueron a allanar y se llevaron a un cabro muy amigo mío, él era grande y yo chico, pero igual jugábamos. Vi cómo le iban pegando y me dieron ganas de ser más grande... Cercaban la población y revisaban a los que querían salir... me daban vuelta el bolsón, me tiraban todo al suelo y me revisaban hasta los lápices... a mí siempre me daba miedo, sentía un vacío y dolor en la guata. Hallaba que esa gente no tenía sentimientos, y cuando me dejaban pasar, me volvían esas ganas de ser más grande<sup>11</sup>.

Ese sentimiento de injusticia lo llevó a buscar una trinchera. Por eso Gabriel se sumaba a las iniciativas a pesar de lo difícil que era protestar en los primeros años de la dictadura. “Uno iba a puro que le pegaran”, dice:

Siempre me parecía que la cosa estaba muy lenta, que había que levantarle el ánimo a la gente... y que la mejor forma de aportar era sumarse a los que salían al centro y se enfrentaban con los pacos. Frente a los pacos siempre sentía miedo. Era un miedo permanente, con ese dolorcito en la guata de cuando era chico. Pero igual iba... me dedicaba a gritar y, si había oportunidad, tiraba una piedra. Porque, antiguamente, en el centro no se tiraban piedras, uno iba a que lo apalearan no más<sup>12</sup>.

Pero desde las Marchas del hambre de 1982 y marzo de 1983 comenzó a percibirse un cambio notorio en el ánimo y disposición de la gente que pudieron experimentar quienes se encontraban ahí. Continúa Alejandro Correa:

¡Nos atacan los carabineros y en vez de arrancar, la gente se detiene y les tira piedras! Entonces se produce un desconcierto en ellos y la “gallá” adquiere confianza. Ahora, claro, le hizo frente porque también había gente que iba preparada para hacerlo, o sea, llevaban piedras en los bolsillos, pero el resto de

la población sigue esa actitud, había condiciones para pasar a un estado superior de lucha contra la “repre”<sup>13</sup>.

A Pedro ya lo conocemos. Era parte de esos jóvenes que andaban en la ciudad intentando oponer resistencia. Tenía veinte años, pero así lo había decidido siendo niño, cuando encaramado en un ciruelo observó el allanamiento de su población. “A los mayores de 15 los llevaban a culatazos y patadas hacia unas canchas”. Días más tarde salió junto a sus amigos en bicicleta a buscar a su tío Pepe entre una “pila de muertos”. Por eso estaba en las Marchas del hambre de 1982 y era de esos que estaban preparados y ayudando a gestar ese cambio de ánimo:

Pusimos una mansa bomba de ruido sobre una caseta telefónica cerca de La Moneda. Fue una cajita de zapatos con pólvora negra. No teníamos otra cosa, pero sonó bien bonito. Era nuestra manera de mostrar un camino, de mostrar que estábamos presentes, que tenemos fuerza y que no vamos a aguantar que nos sigan cagando... Me acuerdo que gritamos frente al Banco de Chile por el presidente mártir Salvador Allende. Éramos como 40 huevones y el resto de la gente toda callada, mirando. Pero fue una buena manifestación porque le dimos un toque que no era puro ir a gritar. Era una explosión de rebeldía. Hasta ese momento, yo siempre había actuado en la clandestinidad, sin poder demostrar nada, y aquí, de repente, uno podía gritar y expresar todo lo que sentía contra los milicos y el Pinocho. Se podía gritar Allende, por los compañeros desaparecidos, por los torturados, por todos esos vecinos que un día dejé de ver. Creo que eso pasa en las protestas<sup>14</sup>.

La pérdida del miedo, del miedo que paraliza e impide la acción, fue constatable con el ruido de las cacerolas que unificó la protesta de mayo de 1983 y las que siguieron. Como las campanas de una iglesia que antaño marcaron el tiempo de un pueblo y la vida de sus habitantes, la sonajera de las cacerolas concitó resonancias y complicidades inesperadas ante el cambio que se percibía. Sonidos que rompieron con el monólogo en voz alta del poder. Desde entonces lo que reinaba en la acústica de la ciudad ya no fue solo la voz interminable de los

decretos militares, ni la utilización de “cadenas nacionales” en todos los transmisores, tampoco la demostración de fuerza a través de las balas o de las sirenas que anunciaban el disciplinamiento que imponían las patrullas. Ese régimen sonoro que ordenaba, infundía temor y disciplina al son de música marcial y que requería el silencio atemorizado de la contraparte se rompió ese 11 de mayo de 1983.

Fue como un puente, como un redoble de tambores que dio paso a la segunda etapa de una intensa jornada de protesta. El ruido apareció después de las manifestaciones matutinas, al caer la tarde, cuando el gobierno y los manifestantes de la mañana se replegaban a evaluar, analizar y meditar lo vivido. En un local de estudios sociales de la Democracia Cristiana, Alejandro Correa, junto con otros jóvenes del Codeju, tenían mucho trabajo: tomaban nota sobre las situaciones represivas acontecidas en las universidades y los hechos ocurridos en el centro de Santiago durante la mañana, procesaban noticias y elaboraban informes cuando los interrumpió un sonido que los dejó sorprendidos:

Estábamos escribiendo, sacando cuentas, y qué se yo, con el Felipe Ossandón y de repente el Yerko Ljubetic, que estaba ahí y que también era dirigente estudiantil, dice, oye, escucha... Entonces abre las ventanas ¡y se sienten los cacerolazos! Fue muy emocionante; tuvimos y tuve personalmente la sensación de que ya no éramos los mismos, que por fin se había masificado la cosa. Es que durante mucho tiempo nosotros tuvimos la sensación que nosotros estábamos ahí, y que bregábamos, bregábamos y bregábamos y que no nos íbamos a rendir, pero también tenía un poco la sensación de estar solo, pero ahí cambió la situación<sup>15</sup>.

A pesar de todo el trabajo preparativo que realizó Pedro para animar la protesta, también fue sorprendido y conmovido, en plena calle, por la voz de las cacerolas:

Habíamos panfleteado tanto que confiaba en que la gente se iba a mover. Y así fue, ¡parecía un sueño! Cuando oí tanto ruido y vi toda esa explosión de gente,

me dieron como escalofríos, me sentí pequeño. Estaban todos locos, era increíble ver a la gente tan contenta<sup>16</sup>.

Comenzaba una nueva etapa en la movilización contra la dictadura y desde entonces el toque de las cacerolas fue una de las formas más extendidas de protestar. Se ha insistido en que esta forma de lucha proviene de un repertorio burgués, ya que fue utilizada por las señoras de clase alta en sus marchas y apariciones públicas en contra de Allende y la Unidad Popular. No obstante, existen referencias de un origen popular de más larga data. Así, por ejemplo, la historiadora Jody Pavilack refiere la presencia de cacerolazos en manos de las “Mujeres Unidas por Lota” que protestaban durante la fuerte represión desatada en la zona a raíz del paro minero del carbón en septiembre-octubre de 1947<sup>17</sup>.

Durante la dictadura fue retomada y pasó a ser parte fundamental del acervo expresivo de la oposición al régimen, una forma de hacerse oír que podía realizarse sin la necesidad de exponer el cuerpo, sino desde las esferas más íntimas y protegidas de la casa, el pasaje o la calle, dependiendo de los lazos y complicidad de los vecinos. Con ello coincide el historiador Manuel Loyola:



■ *Caceroleo en la Alameda. 2 de agosto de 1985 (ADVS).*

A lo que más la gente adhirió fue al ánimo de rechazo, a sentir que esta cosa había que cambiarla, que no daba para más, que había que buscar alternativas, era el caceroleo, o sea, la sonajera en la noche era espectacular, todo Santiago caceroleado. Otros golpeaban postes metálicos, golpeaban rejas, tocaban bocinas, yo creo que el ruido fue el gran elemento aglutinador, el lenguaje del ruido identificó, fue como una especie de código lingüístico<sup>18</sup>.

Aspasia estudiaba en el pedagógico y vivía con su madre en un antiguo barrio de clase media en Santiago. Ambas mujeres, en los días de protesta, procuraban llegar temprano a su hogar, tener velas por si se cortaba la luz, una radio a pilas a mano y puntualmente, a las ocho de la noche, salían a hacerse oír y ser parte de un ruido que unificaba el descontento:

El caceroleo entregaba esa sensación emocional de sentirte parte, a pesar de que en mi cuadra, por ejemplo, un barrio antiguo, yo creo que éramos las únicas, yo y mi mami, pero nos sentíamos acompañadas porque en la cuadra siguiente había alguien que estaba golpeando y se escuchaba, tú hacías un sonido y te respondían, entonces la emocionalidad de eso era súper fuerte, muy muy fuerte<sup>19</sup>.

Con el ruido se abrió un telón. Acto seguido, casi al unísono, surgieron iniciativas que muchas veces estuvieron dirigidas por los líderes locales que ocuparon su imaginación e instinto organizativo para canalizar esa obertura. Así fue para Raúl Canales:

Cuando partió el tema del caceroleo, aquí la bulla era impresionante; todo el mundo tocaba cacerolas. Yo tuve el gusto de encabezar la primera protesta aquí en La Pintana. El 11 de mayo del 83 salimos a la calle, yo con mi señora, los dos

solos. Mi mamá tenía una tapa de tambor, de estas de 200 litros de aceite, agarré la tapa y salimos a la mitad de la calle golpeando y me paseé golpeando como dos cuadras, después me devolvía y en la vuelta ya traía como 20 tipos atrás, y recorrimos para el otro lado, y cuando volvíamos ya era una cuestión de unas 300 o 400 personas que nos debemos haber juntado. Fue la primera vez que se salió a la calle<sup>20</sup>.

Un momento especial en la disputa sonora fue el caceroleo que provino desde las poblaciones periféricas de Santiago y que espontáneamente acalló la cadena nacional con que el general Augusto Pinochet se dirigió al país para despedir el agitado año 1983. En la periferia no lo habían programado, simplemente fue la forma de expresar el rechazo a un dictador y sus palabras. Si algo inquieta el orden es el ruido, antípoda de su régimen sonoro. Un régimen que requería hablar fuerte y silenciar la diferencia. Esa grieta acústica fue la principal característica del paso al frente que siguió en el comportamiento rebelde. Se abrió paso una vigorosa polifonía que agitó las pasiones de la ciudad y su clima de sensibilidad en tiempos de protesta.

Simultáneamente a las sirenas, los helicópteros, los motores y sonidos del guanaco (carro lanzagua), las maniobras del zorrillo (carro lanza gas lacrimógeno), el disparo de los lanza lacrimógenas manuales y los balazos, entraron a disputar la soberanía del sonido las manos que aplaudían y las voces que coreaban con toda su fuerza simbólica y expresiva el “¡Y-va-a-caer!” (verdadero mantra de la oposición) y el “Se siente, se siente, Allende está presente”. Junto con consignas e insultos dirigidos hacia el dictador y los uniformados imposibles de transcribir aquí, irrumpieron en el aire y se multiplicaron los discursos improvisados a viva voz.

Los casetes regrabados que circularon mano a mano también fueron subiendo sus decibeles a la hora de reproducir el repertorio musical de la protesta. A Silvio Rodríguez, Víctor Jara y todo el importante contingente del llamado Canto Nuevo que escuchó la resistencia clandestina en aquel tiempo, se sumaron, principalmente después de 1984, sonidos más rockeros, cumbiancheros, fusionados o alternativos. Imprescindibles en esta atmósfera de sensibilidad fueron Los Prisioneros con su legendaria “La voz de los 80”, Transporte Urbano con “La cumbia del paro” o “El muchacho”, Illapu con “El negro José”, Sol y Lluvia con “Adiós, general”, además de grupos como Congreso, De Kiruza,

entre tantos otros que resonaban tanto puertas adentro, a nivel local a través de las guitarras que se escuchaban en plazas, capillas y parques, como en los actos artísticos masivos que también florecieron. Salvo algunas piezas de corte instrumental, la constante entre la diversidad de sonidos fue que se trataba de música en castellano, con letra, tal como se decía en la época.

Desde ese mayo de 1983 tampoco pudieron silenciarse las alegres celebraciones cuando una piedra alcanzaba su blanco, el sonido de los vidrios rotos, los bocinazos, las consignas partidarias, las risas que sacaba un comentario ingenioso o los gritos de desgarradora indignación en procesiones y funerales. En fin, todo eso que antes se escuchaba en murmullos y se guardaba hacia adentro, al calor de las jornadas nacionales se expresó con sonidos que hicieron presencia en voz muy alta.



## La noche y el fuego

Fue, casi al mismo tiempo, símbolo y advertencia; el fuego apareció con ese paso al frente que significó la protesta. Fue el elemento visual más presente, marcaba territorio, calentaba el frío y los temores, congregaba, alejaba a las bestias. El fuego característico del cinturón periférico santiaguino, de sus colegios y universidades en días y noches de lucha callejera, era una trinchera, pero también un foco y un límite. El fuego, al igual que el ruido, comenzó al caer la tarde de la Primera Jornada Nacional de Protesta, cuando Santiago fue sorprendido por un cinturón de barricadas periféricas. Bajo su destello, la noche de la protesta se convirtió en día.

Es sumamente difícil reconstruir en profundidad los sentimientos que emergieron con el incendio de La Moneda. Solo nos queda apelar a los testimonios y todos coinciden en que fue algo que nunca imaginaron como posibilidad. El incendio del palacio de un gobierno que se llamaba del pueblo era el ataque simbólico a un mundo por construir. También fue el anuncio que marcaba el tiempo de la represión. Eso se supo cuando entre el humo y las metralletas sacaron el cadáver de Salvador Allende, y sus colaboradores salían con las manos en alto. Poco más tarde –quizás minutos, quizás semanas– vieron decenas de cadáveres flotando sobre el río Mapocho y vivieron en carne propia los allanamientos que destrozaron sus hogares. Banderas, carteles, historias, novelas y libros de la Editorial Quimantú que socializaban y democratizaban el conocimiento, todo eso fue material considerado subversivo, todo eso fue apilado e incendiado en grandes hogueras. Esas llamas enemigas y déspotas fueron conjuradas con el fuego periférico que en distintos puntos de la ciudad destelló en esa Primera Jornada Nacional de Protesta.



■ *Segunda Jornada Nacional de Protesta. Barricada en avenida Macul. 14 de junio de 1983 (ADVS).*

Para la Segunda Jornada Nacional de Protesta, organizaciones de pobladores y militantes de partidos políticos se prepararon para que la disposición a protestar no los encontrara desprevenidos y favorecer la multiplicación de las fogatas. En esas semanas, Alejandro Correa, como dirigente del Codeju, se acercó hasta la Coordinadora Sur para saber cuál podría ser la forma de apoyo y coordinación conjunta:

En esa reunión con las organizaciones sociales, los tipos ya estaban organizándose más, estaban haciendo acopio de neumáticos, gasolina, piedras, peñascos, cuanta cuestión. ¡A ese nivel! El tema era impedir que las fuerzas represivas pudieran ingresar a las poblaciones para evitar muertes. Entonces, los tipos estaban diseñando cuáles eran las zonas en que iban a contener la represión, etc. La gente de la población La Victoria empezaba a las 10 de la mañana a hacer trincheras, trincheras hondas, que ya no podían entrar los pacos, o sea, la gente empezó a desarrollar tempranamente el tema de la autodefensa a nivel de las poblaciones<sup>21</sup>.

Las barricadas durante la dictadura iban acompañadas por el fuego; no eran una “muralla fortificada entre los rifles revolucionarios y el cañón del gobierno”<sup>22</sup>, propia del imaginario revolucionario europeo. Más que protección ante un inexistente fuego cruzado (las balas generalmente provenían desde un solo bando), tenían la función de obstaculizar el paso y marcar territorio. Por lo general, las barricadas estaban hechas a base de forros de neumáticos que muchas veces se conseguían los días previos en vulcanizadoras cercanas, con troncos talados en el momento, piedras y los cachureos (cachivaches) que donaban los vecinos o lo que se encontrara a mano, rociado con algún combustible. Sus alcances también podían ser señal de prestigio para sus hacedores, un símbolo viril: “Las barricadas en la esquina de la casa eran gigantescas, y la competencia consistía en quién tenía la barricada más grande; entonces, también era inconscientemente una cuestión muy de hombres, muy

fálica: quién la tenía más grande”<sup>23</sup>. Dependía de cada sector, de su organización interna e iniciativa individual y comunitaria la cantidad de barricadas que se encendían. A veces se hacían por decenas con solo metros de distancia entre una y otra, pero lo más común era verlas arder en las intersecciones de las calles más concurridas, en las entradas y salidas de la población y en las avenidas por donde transitaba la locomoción colectiva; en esas vías, después de cierta hora, estaba prohibido el paso a microbuses, automóviles civiles y obviamente a vehículos policiales.



■ *Paro Nacional. 30 de octubre 1984 (ADVS).*

Jornada tras jornada fue común observar a la mañana siguiente los restos de la quemazón. En algunas ocasiones pasaban camiones de limpieza municipales con obreros del POJH limpiando los escombros, otras, permanecían ahí por algunos días demarcando un campo de batalla. Para los vecinos, los trabajadores y los niños que, como Claudio, las esquivaban desde muy temprano, el olor a barricada era algo común, parte de la vida: “Pasaba entre barricada y barricada para llegar a la escuela en la mañana. Por eso me resulta imposible separar una historia de vida con las imágenes del fuego y del humo: llevaba el cuello, la cabeza, todo ahumado, con olor y humo de neumático, la nariz negra y todos llegábamos así. Los restos de barricadas podían quedar días ahí. Quedaba todo el hollín y las micros pasaban sobre él”<sup>24</sup>.

El olor de la barricada se mezclaba con todo lo que componía el aroma de la protesta, el combustible que se derramaba junto a las molotov o con el que se encendían las hogueras y las mangas, esos rollos de aserrín y tela que cruzaban una calle o avenida de un extremo a otro y eran incendiados para impedir el paso de vehículos. Pero el olor a la protesta también traía el de las lacrimógenas. Era un olor represivo que incluso provocaba desmayos, vómitos y ataques de angustia. Para mermarlo se acostumbraba portar pañuelos con amoníaco o pedazos de limón y sal, que aliviaban los síntomas y que los participantes precavidos guardaban en sus bolsillos y morrales.

El fuego iba de la mano con la noche y la noche con el anonimato. Si la protesta del día transcurría en el centro administrativo de la ciudad, donde los líderes nacionales se reunían a mediodía frente a la Catedral para leer proclamas y cantar el himno nacional frente a las cámaras de la prensa nacional y extranjera, la noche era el tiempo de las poblaciones. Lo sabían los estudiantes secundarios que corrían, se reunían y dispersaban en las avenidas del barrio cívico y los universitarios que protestaban hasta el atardecer en las calles que rodeaban sus establecimientos. Sabían que al caer la noche comenzaría la parte más confrontacional de la protesta. Después de la jornada diurna, muchos de los jóvenes estudiantes continuarían protestando cuando llegaran a sus barrios; lo mismo harían los trabajadores que debido a la vulnerabilidad del empleo y de sus organizaciones habían guardado silencio y continuado la faena. Sabían que

habría acción en sus esquinas y que podrían protestar entre la protección de su gente, en terreno conocido, sin miedo a ser despedidos ni denunciados porque en la penumbra serían sombras. Algunos de ellos eran líderes locales, otros serían líderes del momento, pero ambos sabían que cuando la noche cayera con todo su peso, habría mucho ajeteo.

También saldría la furia destructora que no dejaba inmobiliario público de pie. Muchas veces esa furia tampoco agradaba a la mayoría de los vecinos; mal que mal, ellos también ocupaban las casetas telefónicas, las garitas para esperar locomoción cuando llovía o necesitaban que los semáforos funcionaran cuando sus niños cruzaban las avenidas. Nos relata su percepción Alejandro Correa:

La noche, la oscuridad, el tirar los cadenasos para reventar los transformadores y el fuego provocó una situación de confianza en la gente y una catarsis, porque la dictadura no es una situación solamente que a ti no te dejen hacer determinada cosa, sino que tú sientes que te están castrando, o sea, te sientes indigno, te sientes “enmierdado”, por decirlo así, y esa cuestión como que estallaba en las protestas. Ahora, eso también hacía que se dieran cuestiones muy irracionales. Los saqueos, por ejemplo, de repente eran irracionales, o sea, está bien que tú entres y te robes dos kilos de azúcar, es razonable, pero había gente que de repente entraba a una para romper todo, así como con rabia, indignación<sup>25</sup>.

Si durante el día los funcionarios de gobierno decían tener todo bajo control y descartaban recurrir a medidas extraordinarias, al avanzar el día de protesta debían retractarse para decretar el toque de queda que prohibía la libre circulación nocturna por el tiempo que considerasen pertinente. Al día siguiente reconocerían que “en horas de la tarde la situación cambió”. Tanto el toque como las formas de romperlo fueron recurrentes en las jornadas, porque, en realidad, la protesta era perseguida y reprimida de todas formas.

Con el correr de las jornadas y los combates callejeros, los pobladores comenzaron a aprender y familiarizarse con esa forma de buscar el anonimato. Con su largo recorrido sindical, Luis Fuentealba, militante socialista que estuvo en las barricadas y participó codo a codo con la juventud y adultez de esa época, quiere dar cuenta de ese espíritu de rebeldía que en esas noches se congregaba:

En Santiago, en la semana, dos o tres veces se cortaba la luz, o te la cortaban, o tú mismo la cortabas para poder protegerte. Era mejor estar en penumbras que dejarle el paso abierto a los agentes de la dictadura cuando había movilizaciones. En las protestas si tú mirabas desde un avión, y hubo muchas fotografías desde helicópteros, ¡Santiago estaba lleno de fogatas!, la gente en las poblaciones creaba realmente focos de confrontación<sup>26</sup>.

Los cadenazos fueron una práctica bastante normal gracias a algunos que como Pedro les enseñaron a los vecinos: “Yo aportaba todo eso que hacía antes y que ahora es normal en todas partes”<sup>27</sup>, y a otros que, como Claudio y sus compañeros de andanzas, aprendieron mirando y se hicieron diestros en oscurecer aún más la noche con el destello de un cortocircuito:

Las protestas generaban luz, porque eran el fuego de la noche con la luz eléctrica cortada, y además los chispazos al tirar los cables que formaban explosiones. Yo aprendí a bajar el tendido público a cadenazos siendo muy chico. Primero se iluminaba y después se cortaba al romperse el cable, lo que generaba una carga de energía y hacía que se viniera abajo<sup>28</sup>.

El fuego también estaba presente en otras formas de manifestación con alto grado simbólico, como era la condena a la hoguera para Pinochet. Así, en una solemne y festiva representación, el dictador era juzgado moralmente y castigado por un tribunal popular. Claudio participó en diversas réplicas de ese ajuste de cuentas que él llama “La rutina del mono”:

Siempre había alguien con los típicos carteles: “Que se vaya Pinochet” y con un mono que luego se quemaba, que era Pinocho. Siempre partía desde una de las calles principales de la José María Caro, luego marchaba hasta Albano, donde se quemaba y toda la gente aplaudía. Esa era la rutina del mono. En las concentraciones contra la dictadura siempre había monos quemados. Recuerdo



que en el Estadio Nacional, cuando jugaba la “U” u otros equipos, también circulaban los monos. Alguien les escribía por ahí que era Pinocho, y circulaban de un lado a otro. Después lo quemaban y lo tiraban. De hecho, algunas veces lo ahorcaban y el mono quedaba colgado.

Sin duda, en ese ritual se retomaba la tradición cristiana de quemar el muñeco de Judas Iscariote en Semana Santa, que reproduce la animadversión del pueblo por el personaje que será invariablemente ajusticiado por las llamas, y restaura simbólicamente un sentido de justicia y valores ausentes. En la espesura simbólica de esta puesta en escena se exhibe un poder popular, prácticas políticas expresadas en la teatralidad repetitiva del escenario público y masivo de las calles y mercados<sup>29</sup>. El mono no era castigado sin crimen, sin saber el porqué de la sentencia. A diferencia de las represalias que afectaban al mundo de la gente pobre, en el rito poblacional se leía previamente un manifiesto en el que se detallaban una a una las acusaciones; el juicio popular era claro: fuego para exorcizar el mal; linchamiento y lapidación para un apóstol traidor.

## Las piedras

A riesgo de expresarnos con un claro chilenismo, podríamos aseverar que las protestas se libraron a “camotazo limpio”. Fueron piedras y no fusiles las armas más populares entre los pobres y los jóvenes. Fue tirando piedras que una generación se politizó y aprendió a defenderse. Fue con piedras preferentemente que se liberaron poblaciones y se defendieron universidades. No era fácil, porque para tirar piedras había que exponer el cuerpo, y para exponer el cuerpo había que saber correr y escabullirse. Era necesario conocer las calles, las curvaturas del espacio, la ubicación de los muros y las rejas que permitían ser saltadas. Se requería entrenar el brazo, buena puntería y la voluntad de desobedecer. Con las piedras se protegían y atacaban los protestantes, también se desahogaban. Eran piedras y no fusiles, o más bien eran piedras contra fusiles. Imposible saber quién tiró la primera, porque no fue una, las piedras eran lanzadas por una multitud de manos, pero su mensaje era claro: nosotros, hasta aquí aguantamos.

Las piedras lanzadas contra los vehículos de la policía y contra sus tripulantes eran temidas por los carabineros, que incluso sofisticaron su atuendo para protegerse de esa lluvia que los buscaba como blanco predilecto. Claro que con piedras era difícil ganarle la batalla al dispositivo represivo, pero al menos lograban contenerlos por un tiempo y, lo fundamental, conseguían ser un medio para manifestar el repudio y disparar los agravios contenidos. Raúl Canales presencié varias de esas trifulcas en La Pintana:

Aquí pasaba un furgón de pacos por Lo Martínez, que es por donde se transitaba, y ya llegaba abollado a Santa Rosa. ¡Lo apedreaban desde que salía hasta allá afuera, y después para entrar, lo mismo!... En la noche en que estaba como todo calladito, de repente se sentía el motor de un vehículo y la ¡sonajera de latas! No podían pasar los pacos; los cabros se apostaban ahí en las esquinas pa’ darle. Apedreaban lo que pasara; en realidad, no solamente a los pacos. La rabia, la impotencia de no sé, de escuchar, que te contaran, que la radio dijo lo que estaba pasando en otros lados, cuántos murieron, a cuántos balearon, cuántos presos

hay, todas esas cosas hacían que acumularas mucha rabia, y una forma de enfrentarte a eso y desahogar tu cuento era esto, estar ahí, tirar piedras, no tenerle miedo a la cosa, y yo creo que eso es lo que pasó acá<sup>30</sup>.



## ■ *Manifestación 2 de agosto de 1985 (ADVS).*

La pérdida del miedo era colectiva más que individual. Era una suma de voluntades y presencias, como lo constató Claudio, formado como joven y militante en plena lucha callejera, tirando piedras:

Igual me dio miedo el primer camote que les tiré, pero luego viene la entretención y te vas perfeccionando en la puntería y todo. Y corriendo... es como una escuela. Yo me fui preso muy chico por comerciante ambulante, por vender maní en una cajita, pero yo ahí ya no les tenía miedo a los pacos. Esa pérdida del miedo fue por las protestas. Nosotros competíamos. De esa manera comencé a practicar: jugando a correr, a provocarlos y a correr. Siempre llegaban por la otra calle; nosotros los esperábamos, les dábamos piedrazos y salíamos arrancando a cualquier casa<sup>31</sup>.

En los días de protesta, las piedras también eran dirigidas contra los vehículos de locomoción colectiva o particulares que no acataban el llamado a paro, ya que aunque no fuese un “paro oficial”, se entendía que había que estar en el barrio protestando y no circulando por la ciudad. Por eso, y preferentemente, el transporte de locomoción colectiva que no se plegaba al movimiento se arriesgaba a ser lapidado o incluso incendiado. Al día siguiente, la prensa se ensañaba publicando las imágenes de los malogrados vehículos cuya destrucción parecía incomprensible, pero Pedro quiere explicar la lógica que los movía: “Hablan del famoso vandalismo y lo que pasa es que la gente no quiere entender: si se llama a paro hay que acatarlo y no querer pasar en un auto como un día normal. Por eso los agarran a peñascazos”<sup>32</sup>. Miguel también lo consideraba así, y en la intensidad de las protestas extendidas en el emblemático mes de septiembre de 1985, abandonó los pasajes de su barrio junto con sus compañeros para ir a la avenida principal a parar el tráfico. Si había protesta, no podían pasar como en un día normal:

En la rotonda Pajaritos, que es la vitrina bonita para los que vienen del extranjero, los autos seguían pasando como si nada. Nos juntamos como 15 o 20 cabros, agarramos sus buenas piedras y un par de molotov, y partimos a parar la cosa. De repente nos dimos cuenta de que nos habían seguido, que se había armado una mansa marcha y llevábamos como 400 o 500 personas... Empezamos a levantar la barricada para parar el tránsito. La gente se va dando ánimo, uno recoge una piedra, el otro agarra dos y así se va moviendo la cosa hasta que el tráfico tiene que parar<sup>33</sup>.

La imaginación que acompañó el ánimo de rebelión creó un verdadero arsenal popular. Se trataba de sintonizar la creatividad con la necesidad de protección y ataque utilizando los materiales que se tenían a mano. Además de las piedras, para impedir que circulara cualquier tipo de vehículos, pero especialmente los policiales, se confeccionaban en los talleres populares los famosos miguelitos, clavos de tres puntas que se regaban en las calles, preferentemente en los paraderos de micros, pero al no ser tan efectivos para las llantas más gruesas que demoraban más tiempo en quedar inútiles, se idearon distintas versiones de los llamados “cacho’e cabra”, que se enterraban en el pavimento de cara al tráfico con un perpendicular filo amenazante. Nos explica Raúl Canales:

Nos amanecíamos poniendo unos fierros en las calles y los enterrábamos en el alquitrán, donde se juntan los bloques de pavimento. Se nos ocurrió un día, mirando la calle, pensando cómo parar esta hueá, pero no hubo instrucción, ni preparación, era pura fe no más, creer que se podía hacer algo. Había un amigo que su papá tenía un taller de soldaduras, entonces estaban los fierros ahí, había que cortar no más y sacarles filo. En la mañana, cuando venían las micros, no era posible pasar, quedaba todo paralizado, las micros botadas por Santa Rosa; era imposible que llegaran los pacos, porque ya estaba todo bloqueado. Hacíamos lo mismo por la entrada a San Francisco, que es donde empieza la comuna. Dejábamos aislado; ese día no había locomoción y la gente que quería ir a trabajar tenía que salir caminando por Santa Rosa hasta que podía encontrar micro<sup>34</sup>.

Además de cavar trincheras, entre las piedras y el fuego estaban las bombas molotov, clásica botella rellena con combustible y una mecha. Si bien en un comienzo no eran tan populares, su manufactura fue masificada con el desarrollo de las protestas en la medida en que preferentemente militantes de la “Jota”, del MIR, de las Milicias Rodriguistas y algunos socialistas enseñaban a sus compañeros a confeccionarlas. En algunos casos también operaban pequeñas brigadas de milicianos que enseñaban a los jóvenes pobladores métodos básicos de autodefensa. Claudio aprendió por ensayo y error, hasta que un grupo de encapuchados le ayudó a afinar la técnica:

En la Caro vi cómo se hacían las “molo”. Primero en los manuales que repartían y luego nos enseñaron, aunque las primeras las hicimos solos: pero las hueás no prendían, les echábamos parafina y no pasaba nada. Luego llegaba otro cabro y nos decía que esa no era la técnica, y nos explicaba mejor. Después llegó un hueón con un armamento casero con cuatro o cinco encapuchados, nunca supimos quiénes eran. Llegaban entre barricada y barricada, con propaganda armada: “Compañeros, esta es una bomba molotov...”. Y dejaban esos instructivos, pero sin firma<sup>35</sup>.

Pero la principal arma del movimiento popular era el cuerpo, ya sea gritando en una marcha, tirando molotov o piedras; era el cuerpo lo que estaba de por medio entre el ánimo de rebeldía y las fuerzas represivas. Por eso hubo tantos cuerpos rotos, heridos, torturados, baleados, muertos. Son cuerpos y no números, materia predilecta de la represión, principal herramienta de trabajo y acumulación para el capital, pero también principal arma de la rebelión y la protesta. Lo poco que tienen, todo eso exponen, utilizan al alzarse. ¿Por qué lo hacen? La rabia ante tanta injusticia y humillación rebota una y otra vez, casi de manera redundante en estos testimonios. Se dirá que no todos fueron así, que otros protestantes ocuparon otros medios para expresar su descontento y tendrán razón. Había otros que protestaban desde otro lugar, con discursos o instalaciones artísticas, pero estos que continúan en los suburbios de la historia contienen claves y códigos que pueden ayudar a explicar el devenir de esa sociedad a través de la relación que establece su protesta con la realidad social, política y económica chilena. No solo de los años 80. Su manifestación es heredera de una tradición de lucha aún más larga. La protesta y su protesta son un eje para el entendimiento, una

bisagra, sí, una esquina para entender las diversas formas en que los sectores populares han resistido al sistema de dominación.

En esa esquina podemos verlos con los bolsillos abultados por las piedras, algunos tienen hondas en las manos, pero a todos los cruza una mirada atenta. Aún no llega el enemigo, pero llegará; sin ellos tampoco hay ceremonia, no hay acción; por eso, aseguradas las vías de paso internas, los más osados salen fuera del radio más íntimo de protección, van a buscarlos a las avenidas y rotondas para provocarlos y jalarlos hacia su laberinto. Entre ellos encontramos a Pedro, cargado “con hondas, algunas molotov huachas y harta piedra”. Por eso se enorgullece. “Siempre tuvimos buenos encuentros con los pacos. Primero los agarrábamos a piedrazos, después corríamos de a tres y les tirábamos una molotov”<sup>36</sup>. La distancia para “agarrarlos a camotazo limpio” no puede ser mucha; es necesario acercarse, exponerse. Unos se adelantan, otros retroceden, los más chicos buscan provisiones de piedras en tanto van observando y aprendiendo. En medio de ese caos hay un orden que sus protagonistas conocen. Es la organización de la calle, espontánea, no por irracional, sino por directa, sin mediaciones.

En el despliegue callejero hay una forma, un repertorio de movimiento, un código establecido de antemano: es el conocimiento compartido de los modos rebeldes. Ambas partes lo saben. Los carabineros –más allá de una que otra sorpresa y nuevo ingenio con el que se topen– también conocen de lo que se trata, saben que habrá fuego, que habrá piedras y cuerpos ágiles que aparecen y desaparecen entre las esquinas. Saben que la jornada en la periferia suele extenderse por largas horas, incluso de amanecida. Saben que en otros lugares la protesta terminó, en algunos quizás nunca empezó, que incluso en la periferia muchos intentan dormir. Pero los protestantes están ahí y siguen tirando piedras.





■ *Sexta Jornada Nacional de Protesta. Biblioteca Universidad de Chile. 13 de octubre de 1983 (ADVS).*

Gabriel es consciente de que con las armas que tienen a mano es difícil vencer al sofisticado armamento militar y de los carabineros. Por lo tanto, no se trata de que su “irracionalidad juvenil” no les permita ver los desiguales términos de la disputa. Eso lo sabe y lo asume, pero no lo intimida ni le quita las ganas de pelear. Dejemos que nos explique:

Son peleas bastante desequilibradas, apenas se logra retenerlos un poco en base a piedras, unas molotov o lo que se tenga a mano. Una vez estábamos en un lugar público y llegó una cuca... el cura les pidió que no se exaltaran y dieron la oportunidad de que se acabara el acto al tiro sin que ellos hicieran nada. Nosotros aceptamos, echamos a toda la gente a sus casas, a todos los viejitos, y nos quedamos unos 40 cabros que queríamos pelear. Nos agarramos como tres horas. Andábamos todos con hondas... En esos actos de masas siempre hay algunos que alegan para que cuando lleguen los pacos se disuelva todo tranquilamente. Es gente que pretende que uno se mueva en el marco de los milicos... La idea es que dejen de pisotearnos, es injusto que nos vengán a parar el acto cuando les da la gana, y por eso esa vez les dimos firme<sup>37</sup>.

“Cabros que queríamos pelear” dice Gabriel, porque la opresión y los horizontes limitados asfixian y la asfixia quería ser liberada. Pedro tiene una posición semejante y cuando le preguntaron ¿cómo es hacer política hoy? respondió sin vacilaciones: “Para el poblador de 20 años hacer política ¡es agarrar a piedrazos a los pacos!”<sup>38</sup>. Quizás no era tan literal porque lo político iba mucho más allá de eso, pero, sin duda, el tirar piedras era una poderosa y masiva forma de expresión política callejera. En las piedras hay una posición que no es la del discurso o las letras, pero, curiosamente, después de ellas –y en medio de ellas–, las conversaciones políticas y el reposicionamiento de los líderes que a la palabra se dedican puede comenzar. Sí, las piedras sacaron palabras, pero por sí mismas también dijeron muchas cosas. Hablaban, por ejemplo, de la irrupción de los militares en sus calles, de sus allanamientos y golpes. Hablaban también de

recuerdos y sentimientos proscritos. Sensible a ello era la mirada de un viejo sindicalista:

Hubo una gran explosión social de gente que estaba dispuesta casi a todo. Hoy día la palabra es muy grande y elocuente, pero en ese momento no lo era así, porque era un momento de puro enfrentamiento, o sea, tú mirabas a los milicos y a la derecha con un sentimiento de rabia y casi de odio de clase muy grande, era muy fuerte, había mucha situación de miseria, de una falta de libertades y en la memoria colectiva de la gente estaba aún muy fuerte la figura de Allende y del gobierno de Allende, que había sido de mucha participación y respeto<sup>39</sup>.

Muchos lo vieron, a otros les contaron, pero todos vivieron en dictadura, escuchando sobre ese “antes” que era el tiempo de la Unidad Popular. El golpe cambió muchas cosas, entre esas, los rostros, los ánimos y la vida. Pedro lo recuerda bien y lo contrasta con el tiempo en que le tocó crecer:

Los fines de semana organizaban trabajos voluntarios para hacer veredas, para hacerles el pozo negro a las señoras que vivían solas, para levantarles la casa a las mamás solteras. Mi papá pescaba su martillo y partía, nadie pagaba nada, así era la vida de antes. Después del 11 nunca más se habló de encargados ni dirigentes. Llegaron los milicos. Se acabó eso de que todos éramos compañeros y empezaron los garabatos y peleas familiares... el delegado de nuestra manzana también quedó cesante, anduvo jardineando un tiempo y después se puso a tomar y se separó de su señora, igual que el tío Pepe. Ahora trabaja en el POJH y anda con los ojitos chiquititos, como caído. Da pena verlo, lo mismo que a los cabros que antes eran nuestros héroes<sup>40</sup>.

Otro de estos jóvenes pobladores es Juan. Él no niega que es delincuente, pero no es cualquier ladrón, porque, según dice, él tiene conciencia y no le roba a su propia gente, por el contrario, es a él a quien recurren las víctimas de un atraco para que los “inconscientes” devuelvan sus cosas a un pobre igual que ellos; “a veces parezco retén”, dice. Juan y su banda “los cuchillones” roban en el centro

y en el barrio alto. Tenía 11 años cuando aprendió el oficio. “éramos siete hermanos y teníamos que comer”. Claro que le gustaría hacer otra cosa y claro que no le gusta la miseria en la que vive, tampoco la injusticia, por eso protesta:

La gente se desespera y quiere gritar su rabia, por eso se arman las protestas. Son para removerle la conciencia al Pinocho. Porque la mayoría estamos pasando hambre, tenemos hijos y queremos ser algo más, pero no se puede... Ahora los esperamos. Conseguimos chuzos, sacamos las tapas de las alcantarillas, las ponemos al medio de la calle y prendemos neumáticos para que no puedan entrar a la población. Porque cuando se meten, rompen las cosas y les pegan a todos... Con todo lo que hacían, la gente se puso dos veces más unida para organizarse... Aquí ya nadie está dispuesto a que vengan a pegarle. En eso estamos todos juntos, los políticos y los cuchillones<sup>41</sup>.

Pero este movimiento de desobediencia no es necesariamente un episodio lúgubre o tenebroso como lo captan las cámaras externas. Esas sombras que se reconocen en la calle se mueven con entusiasmo rebelde. Hay algo asombrosamente festivo en el tirar piedras, porque se escuchan risas y bromas. Algunos no sonrían, es cierto, porque se toman en serio la importancia de la solemnidad militante. Pero para la mayoría de los del combate a cuerpo, con piedras y “unas molos huachas”, la protesta tiene mucho de juego y diversión. También para la gente que sale de sus casas a ocupar las calles, saltar, tocar las cacerolas, cantar, cambiar el sentido del reloj sacando la humillación y la miseria a ventilarse. Se escucha música, se ven sonrisas, se convive, se coquetea, se enamora. Resuenan las quenenas, las guitarras y los murales tienen cientos de colores. Se trata de ese entre todos que pone contenta a la gente, como si los alcanzara en plena calle el advenimiento de un generoso e incluyente cambio de página.

■

<sup>1</sup> [Entrevista con Alicia Cáceres, 6 de julio de 2010.](#)

<sup>2</sup> [Paz, Octavio. “Poesía y Poema”. En: Las palabras y los días. Una antología introductoria. CNCA/FCE, México, 2008, p. 112.](#)

<sup>3</sup> De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. Vol. 1. Artes de hacer. Univ. Iberoamericana. México. 1996, pp. 109-110.

<sup>4</sup> Monsiváis, Carlos. El 68, la tradición de la resistencia. Era, México, 2008.

<sup>5</sup> En 1975 se levantó el Altar a la Patria que resguardó los restos de O'Higgins, y más tarde, la Llama de la Libertad.

<sup>6</sup> Entrevista con Viviana Díaz, 2 de julio de 2010.

<sup>7</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 85.

<sup>8</sup> Ibid., p. 47.

<sup>9</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.

<sup>10</sup> Entrevista con Alejandro Correa, 23 de septiembre de 2010.

<sup>11</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 38.

<sup>12</sup> Ibid., p. 42.

<sup>13</sup> Entrevista con Alejandro Correa, 23 de septiembre de 2010.

<sup>14</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 65.

<sup>15</sup> Entrevista con Alejandro Correa, 23 de septiembre de 2010.

<sup>16</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 82.

<sup>17</sup> El Siglo, 9 de octubre de 1947, p. 1. Citado por Pavilack, Jody. Mining for the Nation. Op. cit.

<sup>18</sup> Entrevista con Manuel Loyola, 24 de septiembre de 2010.

<sup>19</sup> Entrevista con Aspasia, 23 de septiembre de 2010.

<sup>20</sup> Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.

<sup>21</sup> Entrevista con Alejandro Correa, 23 de septiembre de 2010.

<sup>22</sup> Reisner, Larisa. Hamburgo en las Barricadas y otros escritos de la Alemania de Weimar. ERA, México, 1981.

<sup>23</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Entrevista con Alejandro Correa, 23 de septiembre de 2010.

<sup>26</sup> Entrevista con Luis Fuentealba, 14 de octubre de 2010.

<sup>27</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 82.

<sup>28</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.

<sup>29</sup> Ver: E. P. Thompson. “Folclor, Antropología e Historia Social”. En: Historia Social y Antropología. Instituto Mora, México, 1997.

<sup>30</sup> Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.

<sup>31</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.

<sup>32</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 83.

<sup>33</sup> Ibid., p. 104.

<sup>34</sup> Entrevista con Raúl Canales, 7 de julio de 2010.

<sup>35</sup> Entrevista con Claudio Pérez Silva, 28 de septiembre de 2010.

<sup>36</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 84.

<sup>37</sup> Ibid., pp. 44-45.

<sup>38</sup> Ibid., p. 84.

<sup>39</sup> Entrevista con Luis Fuentealba, 14 de octubre de 2010.

<sup>40</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 109.

<sup>41</sup> Ibid., pp. 67-69.

SEGUNDA PARTE

■

PROTESTAS NACIONALES: CRÓNICA DE UN CICLO DE  
MOVILIZACIÓN URBANO-POPULAR (1983-1986)





■ *Parque O'Higgins, 18 de noviembre 1983 (ADVS).*

## CAPÍTULO VII

### MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

Para la dictadura, el paso al frente de mayo de 1983 fue el más serio desafío de los últimos diez años. Desde entonces cambiaron el tiempo y la agenda, y el país intervenido no volvió a ser el mismo. La política ensanchó los espacios públicos y habló más fuerte en asambleas, boletines, reuniones y actos artísticos. En la calle y sus intersticios convergieron todas las tradiciones y culturas políticas que caracterizan a la organización popular chilena.

En las Jornadas Nacionales de Protesta reconocemos una polifonía de experiencias, sentidos, valores y sentimientos que se expresaron con huelgas, marchas, quemas del mono, ollas comunes, apagones y barricadas. Las encontraremos tan a menudo y en forma tan persistente que bien podrían acusarnos de repetición, como a las jornadas en su tiempo. Pero así fueron: obstinadas. También se visibilizaron nuevas formas junto al despliegue de los llamados “nuevos movimientos sociales” (como las luchas de organizaciones feministas, comunidades étnicas y diversidad sexual) que se consolidarán en América Latina al morir el siglo. Distintas edades, distintos sectores, distintos impulsos que se cohesionaron para sacar puertas afuera “el antipinochetismo”, un consenso moral y ético que unificó a las multitudes.

Conoceremos a continuación cómo, dónde y por qué nació la Primera Jornada Nacional de Protesta y cómo, dónde y por qué hubo una segunda. Fueron siete convocatorias las que ocurrieron en 1983, tiempo que hemos llamado El fervor rebelde, etapa entusiasta que consagró con su extensión a nivel nacional una forma de manifestación social caracterizada por un marco de acción que consistía en un llamado centralizado que invitaba a abstenerse de reproducir la cotidianidad con diversas actividades concertadas.

Fue en este tiempo cuando se conformaron los tres grandes bloques políticos de

oposición; también cuando Pinochet indignado golpeó la mesa y aseguró: “¡Esto se acaba, señores!”. Pero estaba muy lejos de poder lograrlo. Lejos de disminuir, luego de los altos índices de represión y escarmiento a cargo de 18 mil soldados que cercaron el agosto santiaguino, la jornada de septiembre llegó con toda la fuerza de su simbolismo combativo; junto a ese septiembre que conmemoraba diez años del bombardeo de La Moneda, la figura de Salvador Allende se extendió en los días y en las consignas. Septiembre sería una conmemoración irrenunciable –masiva y combativa– durante los años siguientes.

Para contener a las multitudes y detener la protesta, el régimen anunció una “apertura política” e incluyó a un civil en su gabinete, un civil encargado de iniciar conversaciones con la Alianza Democrática y muy especialmente con la Democracia Cristiana para negociar el fin de las movilizaciones. Fue la génesis, entonces muy incipiente, del pacto que caracterizaría la transición a la democracia chilena. Pero tal desenlace ni siquiera podía olfatearse en este tiempo en que lo políticamente correcto era protestar, encender fuego y marcar territorio. Tiempo que traía en sus entrañas la potencialidad transformadora de un pueblo actuando y redoblando juntos la confianza en sí mismos. Fue un año de desquite, un año conformado por historias silenciadas que vamos a recordar.

## “Nuestro problema no es de una ley más o una ley menos”

Fue una sorpresa. Según reiteran las crónicas de la época, nadie esperaba tal magnitud de la protesta. El 11 de mayo de 1983, obedeciendo a una iniciativa de la Confederación de los Trabajadores del Cobre (CTC), en la capital mayoritariamente y en menor intensidad en distintos puntos de Chile, por primera vez se protestó coordinada y masivamente contra la dictadura.

Nuestro problema no es de una ley más o una ley menos –fue la consigna de esa primera convocatoria–, sino que es mucho más profundo y medular: se trata de un sistema económico, social, cultural y político que nos tiene envueltos y oprimidos, que se contradice con nuestra idiosincrasia de chilenos y de trabajadores, que nos ha tratado de asfixiar con armas como el temor y la represión para cada vez envolvernos más, porque no lo sentimos, porque no se acomoda con nuestra manera de vivir, porque nos fue impuesto a la fuerza y con engaño<sup>1</sup>.

Esta primera declaración tocaba la fibra íntima de lo que significó la imposición del neoliberalismo en la vida y el trabajo. No se trataba solo de un cambio en la estructura productiva, tampoco de “una ley más o una ley menos”, sino de algo mucho más amplio, de un sistema “que nos tiene envueltos y oprimidos”, experimentado como algo foráneo e impuesto: “No lo sentimos, porque no se acomoda con nuestra manera de vivir”, decían los trabajadores.

Las protestas se habían ido labrando poco a poco con distintas iniciativas que habían ido tanteando terreno en diez años de dictadura. Entre 1981 y 1982 hubo actividades sectoriales, pequeñas y medianas marchas en las calles, manifestaciones relámpago, ollas comunes, rayados, florecieron las llamadas acciones audaces, pequeños actos de sabotaje, algunos bombazos y panfleteos que culminaron en las Marchas del hambre del 19 de agosto y 2 diciembre de 1982 y marzo de 1983.

Un importante precedente fue el movimiento de solidaridad sindical que se gestó en torno a la emblemática huelga que sostuvieron durante 81 días los trabajadores de la empresa francesa a cargo de la construcción de la represa Colbún-Machicura. No se trataba solo de una lucha por el reajuste de las remuneraciones, beneficios o bonos, los trabajadores también paralizaron las faenas como denuncia en contra del maltrato, de los abusos y del clima interno de vigilancia y represión que incluía agresiones y golpes contra los trabajadores por parte de guardias de la empresa en la que –según los huelguistas– laboraban ex miembros de la policía y capataces franceses.

El 7 de enero de 1983, fueron 1.463 trabajadores de la construcción de la hidroeléctrica quienes encabezaron la primera huelga ilegal desde la puesta en marcha del Plan Laboral. Solo dos días más tarde la empresa dio por terminada cualquier interlocución, despidió a los huelguistas y los mandó a desalojar de los predios de la empresa. La administración y gobierno puntualizaron que era “una obra transitoria” y por ende, según el nuevo Plan Laboral, no tenían derecho a negociación colectiva. Amparados en la legislación, el consorcio transnacional publicó avisos en los diarios convocando a la contratación de nuevo personal para retomar las faenas. La mano de obra desocupada era numerosa. Según la prensa, “centenares de cesantes viajaron desde todo el país hasta Colbún con la esperanza de obtener un trabajo”<sup>2</sup>.

Tras los muros, resguardados por alambres de púas y guardias de seguridad, los trabajadores y sus familias iniciaron un plantón. Escribía un observador: “Reminiscencias de lucha obrera de principios de siglo ofrece el espectáculo de los trabajadores hacinados con sus familias en un terreno que carece de agua potable y de servicios higiénicos”<sup>3</sup>. Gracias a la solidaridad que sostuvo las ollas comunes, hombres, mujeres y niños resistieron en adversas condiciones por 81 días. Las razones y la fuerza del movimiento las entregó en ese momento uno de sus principales dirigentes, José Villegas:

Fuera de los sueldos de hambre, sentimos que había que ponerle atajo de una vez por todas al trato inhumano del que éramos víctimas. Nos acusan de “ilegales” porque hemos sobrepasado toda una legislación laboral hecha a espaldas del trabajador... Llevo mucho tiempo de sacarme la cresta de tanto trabajar y de poner cara de palo frente a los patrones de adentro y de afuera y que en estos años no solo han saqueado el país, sino que también nos quieren quitar el último

pedazo de dignidad que nos va quedando<sup>4</sup>.

Era la dignidad de los trabajadores el punto más sensible que tocó la huelga de Colbún-Machicura. Por esos días sucedió un hecho que podría haber pasado sin tener mayor significación. Rodolfo Seguel, joven democristiano sin gran experiencia en el movimiento sindical, que tan solo el 11 de diciembre de 1982 había asumido como dirigente del sindicato profesional de Caletones de la división El Teniente, fue elegido Presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Cobre (CTC), la principal organización de bases del país, con fuerte presencia democristiana y comunista.

La llegada de Emilio Torres a la presidencia de la CTC, en enero 1982 –que desplazó al colaborador del régimen militar Bernardino Castillo–, ya había modificado el estado de opinión y el impulso para la acción de los cupríferos; en tan solo un año, la CTC se pronunciaba por la unión de los trabajadores y por una actitud más confrontacional con el gobierno; incluso hubo amenazas de paro a mediados de ese año como presión para modificar sustancialmente la recién aprobada “ley de piso” (ley N° 18.134, que dejaba a los trabajadores sin reajustes periódicos, retro trayéndolos a los sueldos y salarios de junio de 1979). Pero las artimañas de sus contrincantes, principalmente de Guillermo Medina, dirigente pinochetista y Consejero de Estado, amparados por la legislación laboral, lograron que el sindicato de Torres no pudiese reafiliarse a la CTC y Emilio Torres perdiera la presidencia. Sumado a la expulsión de Manuel Bustos y Héctor Cuevas, este venía a ser un nuevo golpe para el sindicalismo de oposición.

Consultado sobre la amenaza de paro, Torres anunció el mismo día en que dejaba la CTC la necesidad de convocar a un Congreso Extraordinario para decidirlo en consenso<sup>5</sup>. En esa coyuntura hubo nuevas elecciones en el cobre y fue elegido Seguel, un “aparecido” como dijeron algunos, pero que para sorpresa de sus contemporáneos estaba dispuesto a seguir la línea de Torres. El 23 de febrero de 1983 asumió sus nuevas tareas y en las semanas siguientes ya se pronunciaba sobre la huelga Colbún-Machicura:

Violenta la dignidad del trabajador chileno... No nos gusta amenazar, pero a la

Confederación que agrupa a más de 24 mil trabajadores, esta cuestión le está dejando un sabor muy amargo en la garganta; una amargura que esperamos nos permita alzar la voz para exigir de las autoridades un pronunciamiento definitivo. De todos lados se habla de una salida. En Colbún se plantean algunas a las cuales aún no podemos responder, pero el camino parece que se agota y... ¡puchas que está agotando la sed!<sup>6</sup>.

En plena huelga de Colbún se desató la de Madeco, el 31 de enero 1983, y vino a reafirmar que “la negociación colectiva es totalmente ineficaz y la huelga no es un arma de previsión de los trabajadores”. La más importante manufacturera de cobre de Sudamérica, Madeco, era propiedad del importante grupo económico encabezado por Andrónico Luksic. Después de diversas oleadas de despidos –a raíz de la crisis económica– trabajaban en ella alrededor de 500 personas. Invocando las pérdidas de la empresa en 1982, durante las negociaciones colectivas de fin de año la gerencia no ofreció ningún aumento de salario. Los patrones estaban amparados en la enmienda que daba carta blanca para congelar por dos años sueldos y salarios. A ello se sumaba el hecho que desde mediados de 1982 la administración les pidió renunciar a sus gratificaciones con el argumento de que la empresa no las podía pagar. El rechazo del sindicato a esta petición produjo un conflicto que terminó con el despido de 29 trabajadores y la suspensión de las gratificaciones para el año 1982<sup>7</sup>. El 31 de enero, la mayoría de los trabajadores votaron por ir a huelga.

¿Qué hizo la empresa? Decretó feriado para profesionales y técnicos, postergando cualquier conversación para fines de febrero (pasando las vacaciones). Paralelamente, publicó un aviso que llamaba a la contratación de trabajadores cesantes. Según fuentes periodísticas, se presentaron alrededor de siete mil personas y fueron seleccionados 120. Los trabajadores de Madeco se congregaron en las afueras de los lugares de contratación para impedirlo. “Cuando volvíamos a nuestra sede sindical, Carabineros detuvo a 83 compañeros, los que fueron fotografiados y filmados en la comisaría, a 10 de los cuales se los interrogó con la vista vendada”. Después de 30 días en huelga, decidieron hacer presencia y apostarse en las puertas de la industria, pero nuevamente fueron dispersados y detenidos por carabineros. Los alicaídos dirigentes y sus bases votaron por seguir la huelga hasta los 59 días, aun sabiendo que no se obtendría nada económicamente. Ante la evidencia de que el movimiento solo había logrado costos y persecuciones, uno de los trabajadores

contestaba: “En todo caso, al seguir hasta los 59 días se gana en unidad; a pesar de las deserciones, se demuestra que a la organización sindical no se la pasa a llevar tan fácilmente. Volver a los 59 días significa que no nos derrota la empresa; si volvemos es porque nos derrotó la ley”<sup>8</sup>.

Ante las repercusiones de estos movimientos huelguísticos y el proceso de negociación colectiva frustrado que enfrentaban cientos de trabajadores, el 9 de marzo se conformó el Comando Nacional de Solidaridad y Defensa del Trabajo, con la integración de 28 sindicatos, federaciones, asociaciones y confederaciones. Entre sus objetivos, según señalaba una pequeña nota que apareció en el boletín interno de la CNS, estaba “la solidaridad activa con todos los trabajadores en conflicto, sea cual sea el motivo que lo origine, como son el caso de Colbún-Machicura, Madeco y los del sector financiero, entre otros”. Como principal punto estaba la derogación de las leyes “que van en detrimento de los trabajadores”. El comunicado indicaba que “funcionará en la sede de la CTC”<sup>9</sup>. Dato que se suma a los antecedentes que nos permiten entender la corriente política y anímica que venía preparando la decisión de convocar a lo que más tarde fue el 11 de mayo de 1983.

Por otro lado, la Iglesia también vivía momentos complicados. Sin mediar explicación, el 7 de marzo fueron revocadas las visas de permanencia definitiva en el país a tres sacerdotes extranjeros que desarrollaban su trabajo pastoral en Pudahuel, una zona con altas tasas de pobreza y cesantía. La movilización en defensa de los expulsados fue en ascenso y traspasó la esfera privada de discusión gobierno-jerarquía eclesiástica<sup>10</sup>. A lo inexplicable de la medida se sumaba que desde 1981 regía un acuerdo que estipulaba que las medidas que adoptase el gobierno contra religiosos extranjeros serían previamente consultadas con el superior religioso respectivo. En este caso, hubiese correspondido al vicario de la zona oeste, Monseñor Olivier D’Argouges, recibir la notificación. Indignado, el padre D’Argouges encabezó de inmediato la defensa y representación de sus sacerdotes, acompañado por el vicario general y obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Jorge Hourton, quien sostuvo un diálogo telefónico bastante áspero con el comandante Sergio Rillón, encargado de las relaciones Iglesia-gobierno. Según señaló el obispo, la explicación del militar refirió la “acción política” de los sacerdotes, que quedaba demostrada –a su juicio– por la participación en ollas comunes y peñas folclóricas realizadas en locales parroquiales. Se refirió también al hecho de que uno de ellos había sido detenido en dos oportunidades<sup>11</sup>.



De inmediato comenzó la movilización en apoyo a los expulsados con el ayuno de 110 religiosos y laicos en la Basílica de Lourdes. Los abogados de la Vicaría de la Solidaridad apelaron ante la justicia e incluso ante el Ministerio del Interior, y abundaron los comunicados de apoyo e indignación de las comunidades poblacionales y de las parroquias. La Iglesia llegó a denunciar “una campaña sistemática en su contra”, que incluía la profanación de sus templos e incluso la de la tumba de los padres del cardenal Silva Henríquez. En todas las misas del domingo 13 de marzo en Santiago, por instrucción del cardenal, se dio lectura a una carta que daba cuenta de la decisión del gobierno y la posición del Arzobispado.

Pero el gobierno no estaba dispuesto a retroceder. En un aparatoso operativo, 15 vehículos judiciales y 50 funcionarios llegaron hasta la Parroquia San José de Pudahuel para conducir a los sacerdotes hasta Policía Internacional. Los agentes aceptaron que fuesen acompañados por el vicario Olivier D’Argouges y el abogado Héctor Contreras. No obstante, a pocas cuadras ambos “fueron bajados a golpes y empujones”<sup>12</sup>. Al mediar la tarde, los sacerdotes extranjeros fueron embarcados en un vuelo hasta Buenos Aires.

En la homilía realizada en la Catedral el 20 de marzo, Silva Henríquez se extendió en denunciar la afrenta y hostigamiento. Y concluía: “Estamos buscando y defendiendo los derechos del pobre. Y por eso estamos siendo perseguidos. No por otra cosa”<sup>13</sup>. También Juan de Castro, Vicario de la Solidaridad, denunció el hostigamiento hacia la Iglesia: “Nos ha sucedido en carne propia lo que hemos venido reclamando por la gente que no puede defenderse. Igual como les ha sucedido a miles de chilenos, tampoco hemos logrado comunicación con las autoridades”<sup>14</sup>.

Por aquellos días o noches, en los muros de Valparaíso, Santiago y Concepción comenzaron a aparecer rayados y una gran cantidad de volantes que invitaban a participar y caracterizar el 24 de marzo como “el día de la Protesta Nacional”, más conocida como Marcha del hambre. No sabemos si fue coincidencia, pero para ese día estaba convocada una misa en memoria del tercer aniversario de la muerte del Arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Romero, en la Iglesia San Francisco, ubicada en pleno centro de Santiago. Para la ocasión, el Arzobispado de Santiago había impreso carteles que proclamaban una de las frases más célebres del sacerdote salvadoreño con alto simbolismo para el contexto nacional: “Les ordeno, en nombre de Dios: ¡Cesen la represión!”.

Según el testimonio de Monseñor Vial, que se encontraba en el lugar, al terminar la misa, aproximadamente a las 21:30 horas, “se escuchaba que en las cercanías había una manifestación de protesta callejera y acción de la policía uniformada”. Relata que conjuntamente con el retiro de los fieles, algunos sacerdotes vestidos de blanco litúrgico salieron del templo portando sus carteles:

...para intentar evitar que se produjeran situaciones de represión injusta o incidentes instalándose en el atrio y plazuela de la Iglesia... Varias de estas personas eran interceptadas por Fuerzas Especiales de Carabineros y al encontrárseles el ejemplar del cartel repartido en la Iglesia, solo por eso, eran detenidas... Me enteré por hermanos sacerdotes que en el mismo momento se realizaban estas detenciones en varios puntos a corta distancia de la iglesia San Francisco<sup>15</sup>.

En medio de la trifulca fueron detenidos los sacerdotes Pablo Fontaine y Jeremias Francis Healy. Al día siguiente, el Arzobispado emitió en declaración pública: “Este Arzobispado, una vez más, se siente en el deber de protestar públicamente por la detención arbitraria de dos sacerdotes al término de una misa”.

Convocada por el Partido Comunista, sectores sindicales y poblacionales, la Marcha del hambre, que la prensa llegó a caracterizar como asonada y que según el ministro del Interior “traspasó los límites de una protesta para ir simplemente a acciones de tipo subversivo y violento”<sup>16</sup>, había comenzado durante la madrugada del 24 de marzo cuando las autoridades fueron alertadas con una serie de estallidos de artefactos explosivos, entre ellos dos bombas en la Costanera que dejaron sin agua potable a un sector del barrio alto. Desde muy temprano ya se encontraba apostado un fuerte control policial en el radio céntrico santiaguino, pero debieron esperar hasta el atardecer para intentar controlar decenas de mítines relámpago compuestos por grupos de personas que gritaban consignas y lanzaban volantes, en su mayoría a lo largo del Paseo Ahumada, desde la Alameda hasta la plaza de Armas.

Alrededor de las ocho de la noche, “grupos de manifestantes quebraron un vidrio de dos metros de alto del edificio en que funciona una Administradora de

Fondos de Pensiones, en calle Mac Iver 149”. Lo mismo sucedió con los enormes vidrios de la firma Olivetti, y quemaron “las pizarras de listas de precios de un restaurante del sector, con las que levantaron hogueras”. Según la prensa, desde los edificios eran arrojados piedras, botellas y objetos contundentes<sup>17</sup>.

A las 9 de la noche, y luego de dos horas de reagruparse y disolverse en forma veloz, los manifestantes convergieron en plena Alameda, canal central del tráfico capitalino, y levantaron barricadas. A esa hora terminaba la misa en la Iglesia San Francisco. Ambos contingentes deben haberse encontrado. Sin duda, ambos, concertados o no, traían una indignación compartida. Según la Vicaría, en la jornada hubo 227 personas arrestadas; la mayoría de ellas fueron dejadas en libertad al día siguiente. Entre los detenidos la noche anterior y el día 24 hubo 12 personas, especialmente dirigentes sindicales y de derechos humanos, que fueron relegadas a la localidad de Pisagua, en tanto que otras dos, que fueron apresadas en plena Alameda, permanecieron cinco días detenidas. Una de ellas era Miguel, que llegaba desde la población Villa Francia al oficio religioso:

Andaba en el centro porque en la iglesia San Francisco había una misa para recordarlo (a monseñor Óscar Romero), pero cuando llegamos ya había una mansa cagá en la calle porque la fecha coincidió con la primera gran Marcha del hambre... Estaba lleno de gente que gritaba y corría por todos lados, llegó el guanaco y los pacos iban de una esquina a otra sin saber qué hacer. Como que la gente se sublevó y yo también me volví medio loco. Los que andábamos con cuadernos empezamos a hacer una fogata en el medio de la Alameda. Otros sacaban ramas de los árboles para avivar el fuego y mantener la barricada. Pero como todo se consumía demasiado rápido, empezamos a sacar la reja del metro que hay al medio. Desenterramos como 50 metros, la doblamos y comenzamos a cruzarla en la calle. Los autos frenaban, chocaban entre ellos tratando de retroceder, yo tenía agarrada la punta principal de la reja y, cuando iba llegando al otro lado, me agarraron los pacos. Estuve tres días incomunicado<sup>18</sup>.

En los días siguientes y pocos días antes de la conmemoración del Primero de Mayo, la autoridad fue alertada con diversas explosiones que en dos oportunidades volaron tramos de la vía férrea y provocaron cortes del suministro

de energía eléctrica en el sur de Chile. El clima que se venía preparando no podía pasar inadvertido para la prensa, e incluso el general Óscar Torres, Jefe de Zona del Área Metropolitana de Carabineros, lanzó amenazas de mano dura para contrarrestar cualquier intento de violencia en “los días difíciles” que se aproximaban, en referencia implícita al Día Internacional de los Trabajadores.

En tanto el general Torres hacía estas declaraciones, en la localidad de Punta de Tralca los trabajadores del cobre se reunían desde el 19 al 21 de abril al calor del Congreso Nacional Extraordinario, cuyas resoluciones cambiarían el curso político del país. En él, los 97 dirigentes sindicales, representantes de las zonales Chuquicamata, El Salvador, El Teniente, Andina y Santiago, votaron a mano alzada y a favor (62 a favor, 8 en contra, 27 abstenciones) la propuesta de la Zonal El Salvador, encabezada por el dirigente Sergio Barriga, para convocar a un paro nacional y protestar contra la legislación laboral, la política económica y las condiciones sociales imperantes. La fecha escogida fue el 11 de mayo.

Del congreso extraordinario los trabajadores salieron decididos. A las 9 de la noche arribaron a Santiago y junto con dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) iniciaron una pacífica marcha por el centro de Santiago que culminó en una conferencia de prensa en que dieron el sorpresivo anuncio. Entre los acuerdos para ir preparando el terreno al paro estaba la realización de asambleas simultáneas en todas las divisiones desde el 26 de abril para plantear los acuerdos del congreso e impulsar viandazos consecutivos hasta el día 11; una asamblea solemne el 1 de mayo y un ayuno de 24 horas el día 6 por parte de los dirigentes. Además se estipuló una cláusula de resguardo que no quedaría en letra muerta: en el momento en que se atentara con alguna medida represiva en contra de algún trabajador o representante, el paro se efectuaría de inmediato<sup>19</sup>.

Si el llamado fue acogido de inmediato por la CNS, sus organizaciones afines y por otro sector clave de la economía, como la Federación de Sindicatos del Petróleo, encabezada por José Ruiz di Giorgio, a los dirigentes de la Unión Democrática de Trabajadores (UDT), con Eduardo Ríos a la cabeza, de la CEPCH, con Federico Mujica, y de la ANEF, representados por Hernol Flores, no les cayó en gracia. En absoluto. Para ellos, llamar a paro nacional “era fruto de la ‘improvisación’ o de la ‘prepotencia’ de los dirigentes del cobre”<sup>20</sup>. Los tres se manifestaron en un documento en el que puntualizaron que el anuncio era “sorpresivo e inconsulto”. Efectivamente, la propuesta pasaba por alto que el movimiento sindical no era homogéneo, que existían divisiones y problemas entre las cúpulas sindicales que dificultaban el actuar en conjunto. Incluso dentro

del cobre algunos sectores, como los de los minerales de Chuquicamata y Andina, junto con otras expresiones sindicales controladas por la Democracia Cristiana, no concordaban con un llamado tan audaz, en contraposición a la postura de las zonales de El Teniente, El Salvador y Potrerillos<sup>21</sup>.

¿Qué hacer? Una cosa estaba clara. La CTC contaba con peso histórico, credibilidad y prestigio como organización de base y los dirigentes del cobre no podían dar pie atrás. El anuncio ya había despertado solidaridades, expectativas y dinámicas en otros sectores de la población, que ya estaban en marcha. Se barajó incluso la posibilidad de aplazar el paro, pero el llamado perdería fuerza y credibilidad. A fines de abril, aunque solo se discutía a nivel cupular –y no se hacía parte a las bases, cuestión que les sería reprochada– la propuesta de cambiar el paro por protesta comenzaba a ganar terreno.

Durante la conmemoración del Primero de Mayo, la CNS y la UDT realizaron actos separados. La CNS, como de costumbre, convocó a un acto en plaza Artesanos –cuya autorización nuevamente fue denegada– al que asistieron alrededor de 500 personas que fueron fuertemente custodiadas y pronto dispersadas por el dispositivo policial y la violencia de los llamados gurkas, vestidos de civil y armados con objetos de goma y fierro<sup>22</sup>. En contraste, el acto que reunió a los principales dirigentes de la UDT, FUT y CEPCH en la sede de la ANEF se realizó sin incidentes, convocó a representantes de la Democracia Cristiana y al agregado laboral de Estados Unidos, John Stephens. En la ocasión, Hernol Flores, Federico Mujica y Eduardo Ríos llamaron a apoyar la decisión de los trabajadores del cobre, haciendo referencia a la protesta social nacional<sup>23</sup>. Durante la primera semana de mayo la gran mayoría de las organizaciones sindicales se había sumado al llamado del cobre, en forma de protesta, pero no fue hasta el día 7 que ratificaron formalmente el cambio de planes en conferencia de prensa. Las portadas de los diarios oficialistas esparcieron rumores de fracaso, quiebres y renunciadas.

Mientras estas discusiones interinas tenían curso, los principales minerales del cobre comenzaron a ser rodeados por militares. Los dirigentes de la CTC denunciaron la situación en una declaración pública que fue censurada por el gobierno:

En Chuquicamata, cañones, morteros y otros armamentos han sido movilizadas a

la entrada y a la salida de los turnos, y personal de seguridad de la empresa ha repartido panfletos contra el gobierno, con la clara intención de que nos fueran atribuidos. En El Salvador, destacamentos militares han sido ubicados detrás de las minas, a la altura de Llanta, y en la localidad llamada la Quinta de Diego Almagro. Al interior del Cajón de Río Blanco, donde se encuentran otros minerales, circulan vehículos transportando personal militar que ha iniciado desusadas prácticas de tiro y patrullajes en helicópteros. En El Teniente, se han desplazado tanques y jeeps con ametralladoras por las calles de Rancagua<sup>24</sup>.

Se temió una masacre. Ello venía a reforzar la decisión de cambiar el paro por una Jornada Nacional de Protesta. Las diferencias internas, que eran el principal factor para el cambio de plan, se guardaron en casa y se adujo la intimidación – efectiva – que la presencia militar hacía sentir en los yacimientos. Extraemos un párrafo de la declaración:

En respuesta a las legítimas demandas de los trabajadores, el gobierno reaccionó intimidando, amedrentando y presionando a las organizaciones y dirigentes sindicales mediante el emplazamiento de cañones y tanques frente a las sedes sindicales, maniobras militares en las proximidades de los lugares de trabajo, amenazando con despidos masivos y sanciones ejemplificadoras. Frente a este clima de violencia y terror organizado, silenciado por la prensa oficialista, la CTC resolvió postergar su paralización de faenas<sup>25</sup>.

Si bien la decisión de cambiar el paro por protesta fue criticada por las bases de trabajadores y por algunas agrupaciones de izquierda, resultó ser que sin proponérselo los dirigentes del cobre dieron con una fórmula de manifestación que logró acaparar el apoyo y las voluntades de amplios sectores. La protesta, que condensó a un movimiento multisectorial e interclasista, dio más opciones que el paro o la huelga, herramientas de lucha clásica del movimiento obrero. Tal como fue convocada, ampliaba los espacios para que cada quien, sin compromisos necesariamente orgánicos, se manifestara según sus posibilidades. El instructivo propuesto para la jornada era sencillo y viable:

1. No enviar a nuestros hijos al colegio;

2. No comprar absolutamente nada;
3. A las 8 de la noche golpear las cacerolas en las casas;
4. Los vehículos circulando en las ciudades deben hacerlo en forma lenta. A no más de 30 km por hora;
5. No hacer trámites en las oficinas públicas o privadas;
6. Apagar las luces y todos los artefactos eléctricos en las casas y edificios a las 9:30 de la noche en punto durante cinco minutos <sup>26</sup>.

En los días consecutivos fueron emitidos otros instructivos para el “Día de la Gran Protesta Nacional”, que agregaron otras propuestas dirigidas hacia cada sector, por ejemplo, a los trabajadores se les invitaba a:

Paralizar faenas por algunas horas.

Realizar trabajo lento.

No asistir al comedor a las horas de almuerzo.

Realizar asambleas para discutir el llamado de la CTC y la realidad de su propio sindicato y empresa.

Declarar públicamente su adhesión a la protesta <sup>27</sup>.

La acogida que tuvo en la población sobrepasó las expectativas de los organizadores. La propia oposición se sorprendió con el gran potencial que tenía el actuar en conjunto y ese romper el miedo que algunos llamaron “el despertar de las mayorías silenciosas”. El llamado había corrido por canales informales, por panfletos y voz a voz, sorteando amedrentamientos del gobierno e incluso el intento por cortar la comunicación entre los centros mineros del país que lideraban el movimiento<sup>28</sup>. Ese día, en algunos lugares de trabajo hubo paros parciales, asambleas, los comedores se vieron desocupados y el trabajo fue más lento. Según los organizadores y la prensa, el ausentismo escolar superó el 70% como promedio, bajaron las ventas del comercio y disminuyó la locomoción colectiva.

También hubo asambleas, actos culturales y manifestaciones combativas en campus universitarios, donde comenzaron las primeras manifestaciones y arrestos, como en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde más de un centenar de estudiantes se manifestó frente a su facultad. También, dos veces en la jornada, hubo incidentes verbales y pugilatos en el Palacio de Tribunales, encabezados por alrededor de doscientos abogados y estudiantes de leyes que luego rodearon el edificio cantando el himno nacional y el Himno de la Alegría.

En horas de la tarde se cumplían satisfactoriamente los objetivos de los convocantes y dentro de lo esperable todo sucedía “en forma activa y pacífica”. Dentro de ese cuadro, a las 19 horas, el ministro del Interior, Enrique Montero, entregaba un informe a la presidencia en el que daba por terminada la protesta bajo una “absoluta normalidad”<sup>29</sup>. Sin embargo, ni el ministro ni tantos otros sospechaban que a partir de esa hora recién comenzaba su segunda fase: junto al ensordecedor ruido de cacerolas proveniente tanto de barrios residenciales como populares, y que comenzó puntualmente a las 8 de la tarde, en el centro de Santiago “decenas de manifestantes en grupos organizados actuaron simultáneamente gritando consignas políticas y dando origen a enfrentamientos con la policía uniformada”. Más tarde se encendieron barricadas y fogatas en las poblaciones periféricas de Santiago, defendidas con piedras, burlas y consignas. Así informaba la prensa oficialista:

En el sector de avenida Grecia hubo anoche diversos focos de disturbio, al tiempo que desde los edificios de la Villa Frei se escucharon ruidos provocados



por los vecinos al golpear sus ollas. En la población Santa Julia, grupos de manifestantes dejaron obstáculos en la vía pública. Encendieron neumáticos y recipientes con bencina. Esta situación también se registró en Lo Encalada con Guillermo Mann. En La Rotonda Quilín, decenas de jóvenes lanzaron piedras contra las fuerzas del orden<sup>30</sup>.

Al día siguiente, el ministro del Interior debió rectificar su información y reconocer que en la tarde “las cosas cambiaron”: “Ello ocurrió en poblaciones difíciles, donde junto a los honestos trabajadores se reúne mucho lumpen. Allí se congregan la delincuencia común con la delincuencia política. Hubo en estos sectores una actuación bastante sensata de Carabineros”<sup>31</sup>. La actuación de las fuerzas del orden durante la jornada cobró la muerte de dos jóvenes de 15 y 21 años<sup>32</sup>, junto con masivos allanamientos en poblaciones de la zona sur de Santiago, realizados dos días más tarde.

El operativo, ordenado y dirigido por la Jefatura de la Zona de Emergencia, convocó a fuerzas militares, Carabineros, Policía de Investigaciones y civiles en vastos sectores de poblaciones ubicadas en las comunas de San Miguel, La Cisterna y La Granja pasada la medianoche del día 13 de mayo. Ese día, que había sido bastante agitado, se reunieron miles de personas para acompañar el cortejo fúnebre del taxista muerto en la puerta de su casa en la población La Victoria. La indignación reinante se manifestó a la salida del Cementerio Metropolitano. Fueron lanzados panfletos y piedras que recibieron los carabineros que se apostaban en sus cercanías, quienes respondieron amenazantes con un amplio operativo en que participaron sus fuerzas especiales. Según registra la prensa, la contienda se expandió por varias horas hacia poblaciones cercanas, especialmente la Santa Adriana. “La actuación de la policía continuó hasta pasadas las 22 horas. Bomberos debió intervenir para sofocar el fuego de barricadas levantadas por los jóvenes en Maipú con Lo Ovalle”<sup>33</sup>.

Horas más tarde, en un operativo que a algunos les recordó los primeros tiempos del golpe militar, pobladores de distintas comunas de Santiago fueron obligados a salir de sus casas con las manos en alto para ser conducidos a canchas de fútbol o parques cercanos a su población, y permanecer hasta catorce horas de pie, en espera de que se verificaran sus antecedentes. Los testimonios recogidos por la Vicaría de la Solidaridad en la población Joao Goulart, Yungay y La Victoria dan

detalles de dicha operación:

Desde las 3:30 de la madrugada empezó el operativo, llamando por megáfono que los hombres salieran de sus casas... A todos los hombres mayores de 14 años (alrededor de 5.000) los llevaron al Parque Brasil, que es un terreno rodeado con rejas de fierro... fueron separados por edades de 50 años, de 40 y después los menores de 18 años. También fueron separados los choferes con carnet clase A. Un hombre reclamó por la intervención, fue golpeado brutalmente y mostrado a los demás como escarmiento. Una vez chequeados los documentos, los hombres iban siendo puestos en libertad. Hasta las 20 horas del sábado 14 todavía no regresaban todos a sus hogares y hubo alrededor de 150 detenidos<sup>34</sup>.

Según el Departamento Jurídico de la Vicaría, el total de detenidos a raíz de la jornada de protesta fue de 408 personas. Las represalias también afectaron a uno de los pocos medios de comunicación de carácter público que informaba a la oposición. Las emisiones de Radio Cooperativa de Santiago, Valparaíso y Temuco fueron acusadas de divulgar información “de clara intencionalidad política, cuyo conjunto creó la sensación de un clima artificial de agitación y de efervescencia pública”<sup>35</sup>. A partir de entonces, podrían transmitir solamente espacios musicales, deportivos y publicidad comercial, debiendo abstenerse de transmitir espacios noticiosos o informativos, comentarios y entrevistas, salvo los comunicados oficiales del gobierno<sup>36</sup>.

Un medio que sí podía hablar sin temor era el diario El Mercurio, voz de los sectores conservadores. En su editorial prendía la luz de alerta ante el “más serio desafío de los últimos diez años”. Lo medular del problema era “el creciente desaliento de los partidarios del régimen” y expresaba su desazón, ya que “el gobierno parece tener un conocimiento incompleto del cambio que se ha producido en su base de sustentación, y que actúa como si el marco existente hace ocho o nueve años fuera todavía válido”<sup>37</sup>.

Estos sectores tendrían que esperar algunos meses y la repetición de las manifestaciones para que Pinochet decidiera incorporar a uno de los suyos dentro del gabinete en señal de “apertura” e intentar resolver esta incomodidad

dentro de sus filas. En tanto, lo que hizo el gobierno fue aprobar algunas medidas económicas dirigidas hacia la clase media y el intento de “abrir las puertas del diálogo” a ciertos sectores sindicales –y de paso romper con las iniciativas unitarias–. Para ello invitaron a dialogar con el ministro del Interior a Hernol Flores, Eduardo Ríos y Federico Mujica. Al término del encuentro, los dirigentes señalaron que había sido un diálogo cordial. Eduardo Ríos indicó que “después de siete años se ha roto el hielo” y Mujica por su parte que “era el primer brote de primavera hacia el futuro”. Pero esa misma tarde el gobierno se querelló contra Seguel y los nueve dirigentes de la CTC por incitar a la subversión. Ante el nuevo panorama, los tres dirigentes cambiaron su valoración del hecho y declararon cerrar filas en apoyo a los dirigentes requeridos.

Como de costumbre, el gobierno había concretado una prueba de fuerza con dos tipos de medidas: la represión física hacia los pobladores y la represión administrativa contra los dirigentes del cobre. El 18 de mayo, el Ministerio del Interior presentó un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de los diez más altos dirigentes de la CTC, acusándolos de delitos contra la Ley de Seguridad del Estado. Los acusados fueron interrogados y cuatro de ellos encargados reos. Aunque se dispuso su prisión preventiva, el ministro Hernán Cereceda les concedió la libertad provisional. Los trabajadores se declararon en estado de alerta, y advirtieron que si alguno de sus dirigentes era encarcelado, cumplirían la cláusula de “Los Acuerdos de Punta de Tralca” y el paro de labores se haría efectivo de inmediato. Ante el entusiasmo suscitado por la jornada y desde su liderazgo, la presidencia de la CTC anunció nuevas jornadas de protesta: “Seguirán efectuándose mensualmente hasta ser escuchados por las autoridades de gobierno”<sup>38</sup>.

Al calor de estos hechos, las organizaciones de trabajadores que se plegaron a la protesta del 11 de mayo decidieron conformar un referente más amplio. Así, el 21 de mayo nació el Comando Nacional de Trabajadores de Chile (CNT)<sup>39</sup>, que reunió a la Confederación de Trabajadores del Cobre con las otras cuatro entidades sindicales de cúpulas existentes en Chile: la Coordinadora Nacional Sindical, la Unión Democrática de Trabajadores, la Confederación de Empleados Particulares y el Frente Unitario de Trabajadores. La primera tarea que se propuso el CNT fue fijar para el 14 de junio la convocatoria a la Segunda Jornada Nacional de Protesta. Bajo las mismas premisas de acción de la jornada anterior, el objetivo principal fue “el restablecimiento de la democracia en nuestro país y el libre ejercicio de los derechos sindicales y ciudadanos”<sup>40</sup>.

En un mensaje de advertencia, Augusto Pinochet señaló que si fuese necesario volvería a dar la batalla contra el marxismo: “El 11 de septiembre derrotamos al marxismo, sin embargo, ese marxismo tiene siete vidas porque lucha sin tiempo y espera el momento de reaccionar y reaparecer. Para ello estamos nosotros”<sup>41</sup>. Y así lo demostró el 30 de mayo, cuando una vez más, y como ya era costumbre desde el golpe de Estado, fue decretado el estado de emergencia, previsto para “cuando exista peligro interno para la Seguridad Nacional”<sup>42</sup>.

## ¡Todos juntos y al mismo tiempo!

Si la Primera Jornada Nacional de Protesta fue la expresión pública y general del descontento principalmente capitalino, la segunda fue la consolidación de su significación política y extensión geográfica, pero también del marco de formas de lucha que, con más con menos, se reproducirá en las siguientes. En esta jornada existió un importante esfuerzo para comprender, dimensionar, registrar y comunicar sus alcances desde sectores políticos, intelectuales, sindicales, periodísticos y, por supuesto, desde las parroquias y la Vicaría. Gracias al detalle de este seguimiento, podemos observar una matriz polifacética del despliegue en el espacio y en el tiempo, así como los repertorios de confrontación que servirán de guía a las que vendrán.

Según el balance entregado por el CNT, en esta Segunda Jornada Nacional de Protesta el ausentismo escolar en Santiago llegó a un 80%, la no asistencia a los comedores en las industrias a un 90% y el comercio vio disminuidas sus ventas en un 85%, y aunque los organizadores volvieron a insistir en su carácter pacífico, hubo mayores grados de enfrentamiento. Marchas y barricadas se extendieron hacia las avenidas principales de las zonas periféricas de Santiago; también hubo saqueos a locales comerciales, fue atacado un cuartel de bomberos, fueron denunciados algunos incendios de microbuses y apagones aislados.

“¡Proteste como pueda, pero proteste!”, fue el lema que enfatizaba el instructivo emitido por el CNT:

Contra un régimen político, social y económico fracasado e incapaz de dar solución a los problemas reales que vivimos los trabajadores y el pueblo; el exilio; las detenciones y relegaciones por vía administrativa; 1 de cada 3 chilenos no tiene trabajo; alrededor de medio millón de personas “trabajan” en el PEM y el POJH por un sueldo de hambre; nuestros salarios han perdido su poder adquisitivo en un 30%; nuestros derechos y libertades cívicas y sindicales han sido conculcados<sup>43</sup>.

La jornada comenzó con la manifestación de estudiantes de derecho de la Universidad de Chile que salieron a la calle, desplegaron carteles, quemaron un ejemplar de la Constitución Política de 1980 y un mono (muñeco) que representaba al general Pinochet. Luego iniciaron un desfile hacia otras sedes. La marcha se desplazó por la Alameda para empalmar con los estudiantes de periodismo, arquitectura y economía que protestaban frente al campus Andrés Bello: “¡Por el regreso a la democracia y una universidad libre!” era la consigna, pero el encuentro fue impedido a la altura de Plaza Baquedano por carabineros que dispersaron a los estudiantes con carros lanzagua. A la misma hora, en el Campus Oriente de la Universidad Católica estudiantes opositores y oficialistas se enfrentaban a golpes luego de una representación teatral que criticaba la situación por la que atravesaba el país.

En Medicina Norte, cuatrocientos estudiantes marcharon y bloquearon el tránsito con neumáticos encendidos en Santos Dumont con Independencia, mientras en la asamblea realizada en la Escuela de Ingeniería, los dirigentes sindicales Víctor Gac y Luis Fuentealba hablaban ante más de mil jóvenes. Pero fue bajo las puertas de la biblioteca Profesor Eugenio Pereira Salas, ubicada en avenida Grecia con Macul, donde se desarrollaron los más fuertes incidentes cuando la sede fue tomada por cientos de estudiantes. Al atardecer, los refuerzos que llegaron desde otros campus se enfrentaron a piedrazos con carabineros y fueron dispersados con bombas lacrimógenas, en tanto quienes quedaban dentro de la biblioteca abandonaron el edificio en una compacta columna que marchó por avenida Macul para posteriormente disolverse. Según fuentes sindicales, en este sector universitario llegaron a reunirse alrededor de tres mil jóvenes<sup>44</sup>.

En las escalinatas de los Tribunales de Justicia, casi un centenar de profesionales y estudiantes de leyes volvieron a manifestarse; lo mismo hicieron horas más tarde –junto a la Asociación de Abogados pro Derechos Humanos– en los pasillos de la Corte de Apelaciones. Otra expresión de la protesta, preferentemente en sectores de clases media y alta, fue la formación de “tacos”, caravanas de automóviles y bocinazos en avenidas y calles importantes, principalmente en la comuna de Providencia. Desde estos sectores, a la hora acordada por el instructivo provino un fuerte ruido de cacerolas que confirmó el apoyo de la clase media a la protesta nacional.

La noche nuevamente fue el momento en que la periferia de la ciudad encendió

su protesta. Las barricadas se multiplicaron y alcanzaron enormes dimensiones. Al parecer eran muchos quienes participaban en la recolección de material, en juntar piedras e impedir el paso de las fuerzas policiales a las poblaciones. Esa noche se encendió una furia antigua, no obstante la prensa oficialista solo pudo ver “pillaje y vandalismo”.

Particularmente en la Población La Victoria y los sectores Callejón Lo Ovalle y Ochagavía, se registraron actos vandálicos y atentados contra decenas de vehículos que circulaban por esos lugares (...). En la calle Bascuñán, entre Isabel Riquelme y Fray Luis de la Peña, fuerzas de Carabineros debieron despejar decenas de neumáticos en llamas que cerraban totalmente el tránsito por dicha vía. Al igual que esta arteria, avenida La Feria fue prácticamente plagada de neumáticos encendidos (...). Carabineros tuvo dificultades para despejar la avenida Ochagavía, pues mientras las fuerzas policiales actuaban en un sector, grupos de personas encendían nuevas barricadas, en torno a las cuales lanzaban consignas contra el gobierno<sup>45</sup>.

Ciertamente se habían encendido decenas de barricadas y junto a ellas congregado los opositores al gobierno, pero además de la confrontación se desplegaban sentimientos, valores y una ética colectiva que podemos percibir al ingresar a la intimidad del barrio gracias a un informe sobre los hechos levantado en la zona norte por la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría hace referencia a la esfera festiva que también marcó esta etapa de las protestas, pero que solo podían vivenciar quienes se encontraban dentro, en zona de confianza, sin sentirse intimidados. Comparemos:

Las acciones masivas se hicieron en la noche y los pobladores procedieron a efectuar cortes de luz. La protesta tuvo un carácter alegre, pacífico y familiar. Solo en algunos sectores se detecta la participación de lumpen (...). En la protesta pasada esta zona se caracterizó por su baja participación, ya que por ejemplo en Renca solo hubo una barricada, en el sector población Infante. Esta vez en el mismo sector se calcula una participación de 4.700 personas y las barricadas no se pueden contabilizar, dado que se hacían a una distancia corta

entre cada pasaje y cada calle (calculamos en una comuna de Renca 25 barricadas)<sup>46</sup>.

Durante la Segunda Jornada Nacional de Protesta, el saldo de la represión fue de cuatro muertos, 70 heridos –veinte de ellos a bala– y 1.351 detenidos (634 en Santiago). ¿Quiénes eran? Los datos de la Vicaría señalan que los arrestados en la capital eran en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años. ¿Preferentemente lumpen? Al parecer no, ya que el mayor porcentaje corresponde a estudiantes universitarios –que seguramente habían sido apresados durante el día en el centro de Santiago y en las áreas cercanas a sus facultades–, seguidos por obreros, trabajadores del PEM y del POHJ y cesantes. En cuanto a los lugares de represión, el mayor número corresponde a la comuna de Santiago, seguida por las populosas comunas de San Miguel, La Granja, Conchalí y Pudahuel<sup>47</sup>. En tanto, los centros cupríferos como El Teniente, Andina y El Salvador fueron declarados “zonas bajo control militar”, las reuniones prohibidas, los sindicatos cerrados y miles de trabajadores fueron despedidos sin derecho a indemnización y bajo humillantes condiciones, entre ellas, campañas comunicacionales que llamaban a ocupar sus plazas.

“¡Que entiendan!”, dijo el ministro Montero: “Simplemente lo político en nuestro país, en este momento, está fuera de las actividades nacionales”<sup>48</sup>. Por su parte, Augusto Pinochet, como de costumbre, respondía amenazante: “El Gobierno no ha querido emplear la fuerza. El Gobierno llama siempre a la cordura. Pero cuando estas cabezas duras no quieren entender, entonces hay que aplicarles la mano dura. Que la sientan, que la aprecien y que vean que el gobierno está dispuesto a cualquier cosa”<sup>49</sup>. En dicho discurso, Pinochet aprovechó para anunciar algunas medidas catalogadas de “aperturas”; aunque se adjudicaron a la buena disposición del gobierno, fueron parte de las importantes conquistas logradas por las jornadas, encaminadas a democratizar los herméticos espacios cautelados por los militares. Entre ellas, prescindir de los requisitos de autorización previa para la edición y circulación de libros y la ampliación de las listas para el retorno de exiliados en las que se encontraban algunos connotados políticos<sup>50</sup>.

Si bien ante los despidos masivos la mayoría de los sindicatos se pronunciaron por un paro de corte indefinido hasta obtener la libertad de Rodolfo Seguel, la reintegración de todos los trabajadores, el término de las querellas contra



representantes laborales del cobre y un mayor diálogo con las autoridades para plantear sus posiciones respecto del Plan Laboral y la situación económica, poco a poco comenzaron los descuelgues. Había que pensarlo más de dos veces en un contexto de suma inestabilidad laboral. Finalmente, entre El Salvador, El Teniente y Andina fueron despedidos 633 trabajadores –114 sin indemnización– incluyendo a 31 dirigentes<sup>51</sup>; entre ellos se encontraba Víctor López:

Los que nos mantuvimos hasta el final nos quedamos muy solos. Los despedidos andan diseminados por todo el país. Están cesantes, de “allegados”, y los que continuaron en labores lo hicieron bajo un ambiente de trabajo enrarecido... Los antiguos tienen miedo de los nuevos que entraron a trabajar porque son parientes de los jefes y son mirados como sapos. No puede haber grupos conversando porque de inmediato alguien le avisa al jefe, no puede haber seis o siete trabajadores almorzando porque se considera una reunión<sup>52</sup>.

La CTC estaba descabezada, 11 de sus 15 dirigentes enfrentaban un proceso judicial, y la criminalización de las solidaridades colectivas se cernía en los yacimientos. ¿Qué pasaba con el resto del sindicalismo? Cuando el paro del cobre iba perdiendo fuerza por la represión y los despidos masivos, hubo una sorpresa. El gremio de los transportistas, a través de su Consejo Nacional, decidió llamar a un “paro nacional e indefinido” a partir de las 00:00 horas del día 23 de junio. Situaron la perspectiva del paro en contra de la represión con que el gobierno respondió a las protestas; contra el requerimiento y detención de dirigentes y despido de trabajadores tendientes a destruir el movimiento sindical; también estaba dirigido contra “la paralización de las actividades económicas, la cesantía, la destrucción del aparato productivo nacional, el enorme endeudamiento externo e interno en beneficio de grupos económicos adictos al gobierno” y la incapacidad del gobierno para responder a las urgencias del país<sup>53</sup>.

El propio Adolfo Quinteros, en calidad de presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, dio el anuncio (Quinteros era cercano colaborador gremial de la dictadura militar; pocos días antes no había estado dispuesto a parar en favor de los trabajadores del cobre). El CNT apoyó la medida a pesar de las dudas que planteó la CNS sobre lo inoportuno del momento. Era cuestión de observar alrededor: el movimiento del cobre iba

declinando en medio de una fuerte ola represiva contra los dirigentes sindicales, el cerco informativo a los medios se había intensificado después de la segunda protesta y, por si fuese poco, el llamado era solo con dos días de anticipación y con carácter de “indefinido”.

Al final, el paro no fue ni nacional ni indefinido y los transportistas terminaron negociando con el gobierno en vísperas de la fecha acordada. La tarde del día 22, cuando salía de las oficinas de la CTC, fue detenido por un par de horas Adolfo Quinteros y el apresamiento sirvió de puente para iniciar conversaciones entre el gremio y las autoridades. Se formó una comisión entre el general de Ejército Raúl Benavides, el ministro del Interior y Jaime Calvo, de la directiva de dueños de camiones, en tanto el transporte de pasajeros arregló por cuenta propia sus problemas de libertad tarifaria. El 23 de junio solo paralizó el 60% de los camiones –según sus fuentes– y, en cambio, pudo verse a la mayoría de locomoción colectiva transitando como un día común. Los camioneros se reunieron en diversas ocasiones con el ministro del Interior y luego fueron derivados al presidente de la Corfo para negociar asuntos específicos, como licencias de transporte, costos mínimos, niveles tarifarios y pasajes. ¿En esas reuniones se debatió el pliego de peticiones que apoyaban los camioneros y que motivaron el paro? Según Quinteros, si bien los puntos se tocaron con las autoridades, se hizo “sin plantear ninguna exigencia, sin presionar”<sup>54</sup>. No obstante, el 23 de junio paralizaron sectores parciales de la construcción, metalúrgicos, gráficos, textiles, cuero y calzado, plástico, entre otros, pero nuevamente el sector más numeroso que acató el llamado fue el de los universitarios, en especial los alumnos de la Universidad de Chile.

Luego de la Segunda Jornada Nacional de Protesta el sindicalismo salía bastante diezmado, cuestión ratificada por el número considerable de denuncias por torturas y arrestos en cárceles secretas, cuarteles de Carabineros y relegaciones al sur del país que presentó la Vicaría de la Solidaridad<sup>55</sup>. Entonces llegó el momento de la aparición más pública de los partidos políticos y puesta en escena de diversas organizaciones sociales con trayectoria territorial. Ellas lanzaron el llamado para la Tercera Jornada Nacional de Protesta y, a diferencia de las anteriores, fue el CNT el que se plegó a la iniciativa<sup>56</sup>. Ante tal desafío, un indignado Augusto Pinochet pronunció esa emblemática frase que tanta burla e imitaciones provocó en la oposición: “¡Esto se acabó, señores!” y aseguró confiado que no habría otra protesta. Pero la hubo. La Tercera Jornada se desarrolló el martes 12 de julio bajo un “toque de queda” impuesto por la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia desde las 8 a las 12 p. m.,

fundamentando que “existen antecedentes de que se estaba preparando un plan de agitación con atentados y acciones violentistas, detrás del cual se encuentra el Partido Comunista”<sup>57</sup>.

El mismo día de la protesta, mientras se encontraba en la Cárcel Pública, Rodolfo Seguel fue notificado de su despido como trabajador de Codelco. En ese momento, el recinto carcelario también albergaba en calidad de incomunicados desde el sábado 9 de julio al secretario general de la Democracia Cristiana, José De Gregorio, y a los jóvenes Gonzalo Duarte, Daniel Sierra y al encuadernador Eugenio Lizana, acusados de confeccionar 700 mil panfletos para la jornada.

Con el objeto de dejar a la protesta sin timón, el gobierno atacó a los referentes más visibles. Tenía tras las rejas al dirigente democratacristiano Jorge Lavandero, principal impulsor y líder del Proyecto de Desarrollo Nacional (Proden)<sup>58</sup>, y al presidente de la DC Gabriel Valdés. Por otro frente, solo dos días antes –el 7 de julio– fue allanado el local de la Coordinadora Nacional Sindical y las personas que se encontraban en su interior fueron detenidas e interrogadas en un recinto secreto. Entre ellas se encontraba María Rozas, presidenta del departamento femenino de la CNS, Luis Fuentealba, vicepresidente de la CNS, José Navarrete, encargado juvenil, Muriel Cornejo y Patricia Miranda. Los agentes desvalijaron el local, se llevaron archivos, documentos, instructivos para la jornada y cien mil panfletos de apoyo a la protesta.

El día de la protesta, el centro de Santiago, al igual que las anteriores jornadas, amaneció con presencia de carabineros antimotines, perros amaestrados y menor locomoción de la acostumbrada. Al mediodía, la manifestación de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos fue reprimida violentamente con la actuación de aproximadamente trescientos carabineros. Mientras, una treintena de mujeres pobladoras de Huamachuco 1 y 2 y Juan Antonio Ríos marchaban por las ferias del sector cargando bolsas vacías. En los tribunales había bastante ajeteo. Se reunieron unas 1.500 personas entre abogados, estudiantes y familiares que esperaban la vista del recurso de amparo en favor de los dirigentes democratacristianos detenidos, en tanto en otra sala del palacio declaraban los dirigentes de la CNS. Fue el propio presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, quien salió de sus oficinas para solicitarles amablemente que se retiraran, cosa que los satisfechos manifestantes aceptaron en forma pacífica. Durante el día hubo enfrentamientos de menor intensidad en universidades, especialmente en las escuelas de Leyes y Medicina Norte de la Universidad de Chile.

A las seis de la tarde ya no circulaban ni autos ni transporte público, los negocios estaban puntualmente cerrados y ni un alma se divisaba en las calles. Estaba prohibido circular. Esa noche, ni la prensa nacional ni la extranjera obtuvieron salvoconductos para reportear en el toque de queda. En ese silencio resonó la protesta casera. Llegó con el intenso y nítido ruido de cacerolas, tarros y rejas proveniente de los barrios medios y altos, también desde las poblaciones populares, donde el ruido fue acompañado por marchas locales, como la encabezada por unas trescientas personas que con ollas vacías desfilaron por el sector de Las Rejas con 5 de abril, en una noche que también fue más oscura. La Compañía Chilena de Electricidad “dio cuenta de 200 atentados contra la red eléctrica de la capital con lanzamiento de cadenas metálicas a las líneas de alta y baja tensión, lo que provocó apagones en diversos sectores”<sup>59</sup>. Además del atentado a una de sus oficinas de cobranzas, también se denunciaron algunos incendios de locales de organizaciones gubernamentales (CEMA-Chile) y el asalto y robo de herramientas a bodegas del POJH.

La actuación de las fuerzas policiales fue diferenciada. En barrios medios y altos, según los informes de la Vicaría, “la presencia uniformada (de carabineros y militares) fue discreta, disimulada. En los barrios populares la actitud de la fuerza policial fue distinta. Se recibieron diversos testimonios en este sentido, e incluso dos pobladores trajeron vainillas de bombas lacrimógenas que fueron lanzadas –sin provocación previa– hacia el interior de sus viviendas”<sup>60</sup>. En estos sectores, además, hubo allanamientos, destrozo de enseres y golpes a sus moradores. La actuación de los carabineros quedó plasmada en la denuncia presentada por un grupo de pobladores de la Villa Sur, comuna de San Miguel, ante el fiscal militar:

Alrededor de 20 efectivos, los que equipados con cascos y escudos, y tapándose el rostro con gorros pasamontañas, procedieron a someternos a un virtual bombardeo de bombas lacrimógenas, las que caían ya sea al interior de nuestras casas o en los patios. Junto con ello, se dedicaban a apedrear los inmuebles destrozando sus vidrios. Producto del bombardeo, el aire se tornó irrespirable en las casas, ocurriendo síntomas de ahogo, sobre todo en menores. El pánico que tan vandálica acción causó en todos nosotros fue indescriptible<sup>61</sup>.

Según otras denuncias, fue bastante común el amedrentar a los vecinos pateando las puertas de las casas, con ráfagas de ametralladoras o amenazas emitidas por los altoparlantes de las patrullas. En esta jornada hubo dos chicas de 19 años muertas (en Valparaíso y Santiago) y 1.064 detenidos (760 en Santiago), en su mayoría obreros, cesantes y estudiantes. Con posterioridad a esta jornada, fue evidente que por más que descabezaran a las organizaciones sindicales o políticas, la protesta persistía. Entonces la CNI emprendió la tarea de localizar, detener e interrogar bajo tortura a los sospechosos de ser líderes locales. Numerosas personas fueron arrestadas en sus domicilios durante la noche, amedrentadas e incluso relegadas a zonas apartadas del país. Por su parte, los dirigentes nacionales detenidos fueron dejados en libertad, incluido Rodolfo Seguel.

Es interesante observar la bifurcación que se produce luego de esta jornada, tanto en la estrategia gubernamental como en la discusión y dinámica de las coaliciones políticas de oposición. Dos semanas después se formalizó el pacto de oposición llamado Alianza Democrática (AD), encabezado por la Democracia Cristiana, la socialdemocracia, los radicales y la derecha democrática republicana. La AD solicitó públicamente la abdicación de Pinochet, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y una rápida transición hacia la democracia. Desde su inicio declaró que no se entendería con corrientes marxistas y específicamente con el Partido Comunista, su histórico contrincante en el cuadro de partidos políticos chilenos.

Por su parte, el PC, junto con lo que se llamó Mesa de Izquierda (MIR, MAPU-OC, PS Almeyda), conformó un referente de oposición que a partir del 20 de septiembre del mismo año se denominó Movimiento Democrático Popular (MDP)<sup>62</sup>. Más adelante nos detendremos en la conformación de este movimiento por su significación dentro del mundo popular. Por el momento, solo nos interesa consignar que a partir de esta Tercera Jornada Nacional de Protesta, la historia de las protestas estuvo cruzada por los debates entre ambos conglomerados por hegemonizar la conducción del movimiento popular, en especial en torno a dialogar (o no) con el régimen, legitimar (o no) la Constitución de 1980 y el uso de la violencia política.

## La apertura.

### Primer movimiento: 18 mil soldados rodean la ciudad

En la convocatoria para la Cuarta Jornada Nacional de Protesta las diferencias en la oposición fueron evidentes. Hubo dos convocatorias. Por una parte, la AD, junto con el CNT, llamó a protestar solo el día 11 de agosto, en cambio la Mesa de Izquierda, unificada con organizaciones locales, también convocó pero para los días 11 y 12. “Chile protesta por Chile” señalaba la convocatoria y sumaba a los puntos ya conocidos “el reintegro y libertad inmediata para todos los dirigentes sindicales y trabajadores despedidos, procesados, relegados y exiliados. Como también el reintegro a sus fuentes laborales de todo trabajador despedido. En forma especial a los trabajadores del cobre”<sup>63</sup>.

El alcance de los sucesos había llegado hasta el Vaticano. Las palabras que Juan Pablo II dedicó en su homilía del 24 de julio expresaban la preocupación pontificia por la situación chilena, que hacía eco de una preocupación política de alcance internacional. Pinochet respondió con la llamada “consolidación del proceso institucional y el avance a la plena democracia” dentro de los plazos establecidos por la Constitución. El 4 de agosto, el general anunció que el Consejo de Estado, con participación de representantes de la oposición, iniciaría durante el mes de octubre el estudio de leyes orgánicas constitucionales referidas a temas explícitamente “políticos”, como la constitución de partidos, el sistema electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y el funcionamiento de un Congreso Nacional, en aras de desarrollar la institucionalidad que culminaría en el modelo de una “democracia protegida” en el año 1989.

La publicitada buena voluntad y disposición de apertura fue reforzada con un anunciado cambio de gabinete. Un día antes de la cuarta protesta asumió como ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, antiguo líder del Partido Nacional y primer civil en ocupar tal cargo ministerial en el decenio militar. El cuadro político, de reconocida trayectoria, se sentaría a conversar, promover el cese de las movilizaciones y establecer el proceso de negociación con parte de la oposición que supuestamente era reconocida como interlocutora. Los representantes de la AD y el nuevo ministro se conocían bien, habían sido

compañeros de banca en el Parlamento y juntos habían formado la CODE (Confederación de la Democracia), alianza opositora a Salvador Allende. Ello facilitaría el primer paso. Por su parte, en el Ministerio del Trabajo fue presentado Hugo Gálvez (ministro durante la presidencia de Jorge Alessandri); en Economía, Andrés Passicot; en Vivienda, Modesto Collados, y como Secretario General de Gobierno, Alfonso Márquez de la Plata; en tanto en Hacienda, puesto clave para la consolidación del proyecto país, continuó Carlos Cáceres; es decir, el enfoque monetarista seguía en marcha.

Paralelamente, la Cuarta Jornada se grabó en la memoria de muchos por lo feroz de su represión. Se trataba de una doble estrategia gubernamental: tranquilizar a unos con la posibilidad de diálogo y neutralizar a los otros con un violento dispositivo militar. Fue una tragedia. Entre los días 8 y 10 de agosto, 18 mil soldados fueron trasladados desde provincias y se instalaron en las afueras de la capital en espera de instrucciones. Consciente de la intimidación que podía provocar la presencia armada en un país que aún tenía fresca la memoria del golpe, Pinochet advirtió: “¡Y que se anden con cuidado porque yo no voy a ceder un paso! Tengan la seguridad de que Santiago está cubierto con 18 mil hombres y con órdenes estrictas de actuar duramente”<sup>64</sup>.

Desde la mañana hasta el mediodía decenas de camiones castrenses llegaron hasta las canchas deportivas poblacionales. Los militares practicaron ejercicios de guerra, luego tomaron sus armas y se ubicaron en puntos estratégicos. Los pobladores simplemente observaban en silencio el desfile militar desde sus esquinas. “No hay incidentes”, informaban hasta entonces los observadores de la Vicaría.

A pesar de la amenaza explícita, la protesta se adelantó en los campus universitarios. En las cercanías de la Academia de Ciencias Pedagógicas –cuyas autoridades decretaron suspensión de clases– y de la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, los estudiantes levantaron barricadas y arrojaron sobre el fuego lo que encontraron a mano. Por su parte, carabineros movilizados en tanquetas respondieron con una lluvia de bombas lacrimógenas y balines de goma. Momentos más tarde, un grupo de mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se manifestaba en la Plaza Libertad frente a La Moneda. “¿Dónde están?”, preguntaban insistentemente con las fotografías de sus familiares en mano. La respuesta de los carabineros fue prepotente. Irrumpieron violentamente con golpes, rompieron las pancartas y arrestaron a algunas participantes.

También eran mujeres –del Movimiento Feminista– quienes se reunían en las puertas de la Biblioteca Nacional exigiendo en sus carteles y cantos: “¡Democracia ahora!”. Poco después, en el populoso sector de Lo Hermida, cuatro personas fueron heridas a bala por una patrulla militar que, según la prensa oficial, “habían sido previamente atacados con piedras”. Ya en la noche, la cantidad de barricadas instaladas a la altura del paradero 22 de Santa Rosa hacían imposible el tránsito hacia el sur de la ciudad, y el alumbrado público estaba apagado en las cercanías de la rotonda Grecia.

El silencio fue envuelto por una atmósfera de rebelión. El día 11 el gobierno transmitió en todos los noticieros el Bando N° 147 de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia:

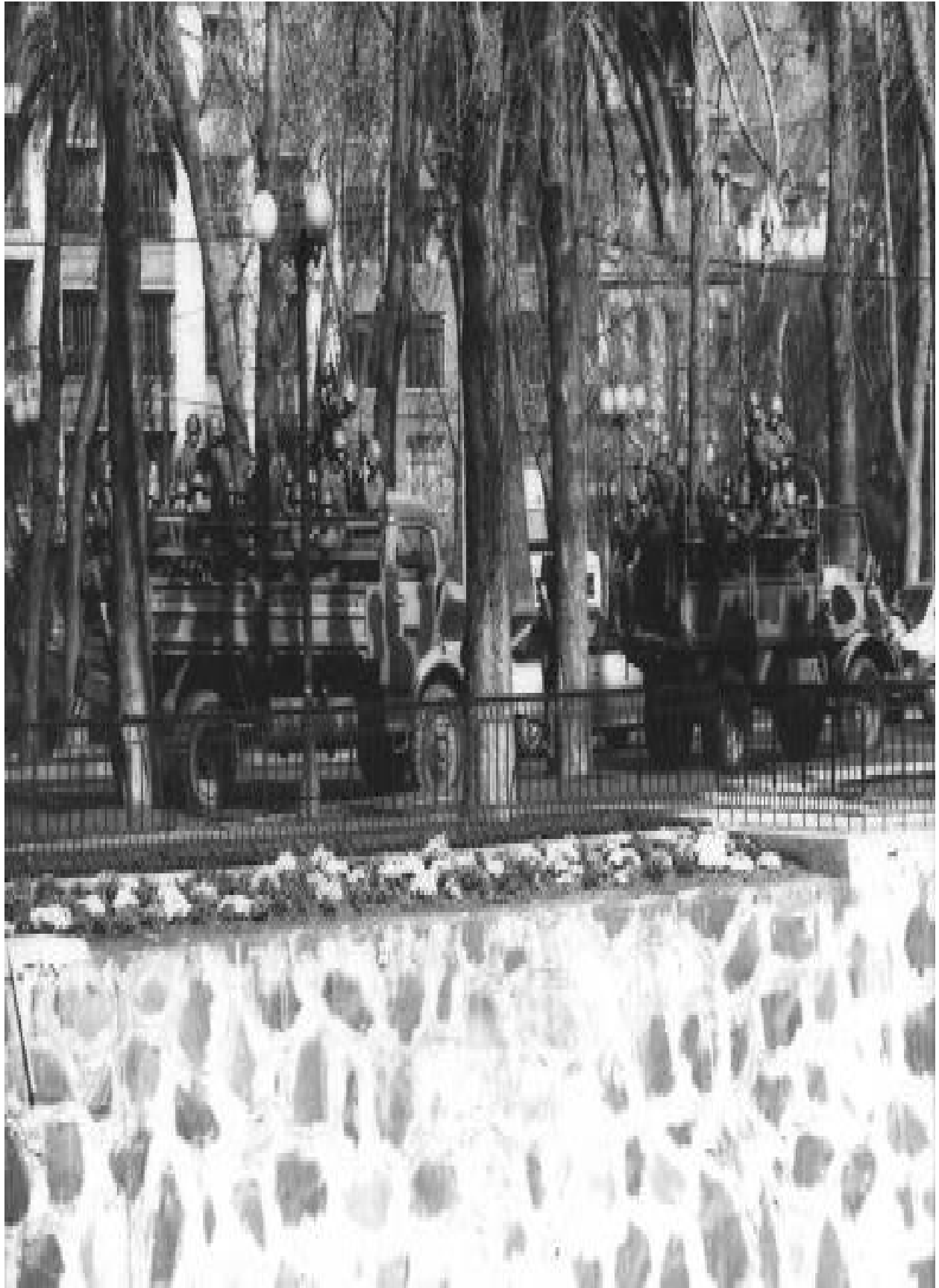
Quienes intenten provocar al personal armado, deben entender que las lamentables consecuencias que de ello puedan derivarse serán de su absoluta y exclusiva responsabilidad. Se reitera a nuestros compatriotas que las FF. AA., de Orden y Seguridad tienen la MISIÓN DE RESGUARDAR EL ORDEN PÚBLICO, y asegurar la tranquilidad ciudadana, para lo cual han sido debidamente adoctrinados e instruidos<sup>65</sup>.

Los santiaguinos desde muy temprano pudieron observar camiones y tanques abordados por soldados con metralleta en mano, ropas de combate y caras pintadas para la guerra. También se hicieron presentes cerca de sectores residenciales que en jornadas anteriores se caracterizaron por sus caceroleos y en los principales campus universitarios. En la ciudad, bajo exhaustivo control militar, las primeras manifestaciones de protesta ocurrieron –como ya era costumbre– en el patio externo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En el enfrentamiento entre policías y estudiantes fueron lanzados balines de goma y más de 40 bombas lacrimógenas, cantidad más que suficiente para volver el aire irrespirable en un recinto de no muy amplias dimensiones. Tan comprometida fue la situación que debió intervenir el decano Hugo Rosende, asegurándole a Carabineros que quedaría en sus manos el orden del establecimiento. En la facultad de Medicina Norte hubo numerosos golpeados y detenciones; mientras se manifestaban en el interior de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, los estudiantes fueron encerrados con candados por



alumnos oficialistas que además impidieron el paso de periodistas, mientras la policía arrojaba hacia su interior bombas lacrimógenas. También en el Campus San Joaquín y Oriente de la Universidad Católica se informó de manifestaciones y enfrentamientos.

Al mediodía detenían a estudiantes secundarios y universitarios que intentaron congregarse en el frontis de la Biblioteca Nacional para realizar una marcha hacia el paseo Ahumada. Al ser interceptada e impedida por la vigilancia policial, el resto de los estudiantes se dispersaron en manifestaciones relámpago en distintos puntos del centro, “algunos jóvenes lanzaron objetos, monedas, y hasta bolsas pestilentes en contra de los carabineros”<sup>66</sup>. Los uniformados respondieron con perros amaestrados que mordían y no soltaban a sus presas. Hubo decenas de detenidos y lesionados; “en algunos casos eran entregados a militares que formaban con ellos montones de cuerpos, o los arrinconaban contra las murallas. Esto se vio principalmente en calle Mac Iver, donde al mismo tiempo las fuerzas uniformadas apuntaban sus ametralladoras hacia el edificio donde tiene su sede la Confederación de Trabajadores del Cobre”<sup>67</sup>.



■ *Cuarta Jornada Nacional de Protesta. Parque Forestal, 11 de agosto de 1983 (ADVS).*

Más tarde el gobierno anunció la aplicación del toque de queda, que se extendió hasta las cinco de la madrugada. Desde las cuatro de la tarde Santiago estaba paralizado, el comercio cerrado y la locomoción escaseaba. A pesar del ausentismo escolar de un 84% (según la Asociación Gremial de Educadores de Chile, Agech), en horas de la tarde el ministro de Educación anunció la suspensión de clases para los alumnos de Educación Básica y Media. Las universidades tomaron la misma iniciativa.

Dentro de las poblaciones la prohibición de salir de sus casas poco importaba. En la población San Gregorio “la gente se vuelca a las calles realizando marchas callejeras alegremente avivadas por un tambor”. Las fuentes de la Vicaría señalan que lo mismo sucede en otros lugares: marchas, gritos y encuentros alrededor de los braseros populares que aplacan el frío invierno santiaguino. Unos recolectan piedras, otros encienden barricadas. Hay mucha gente que solo mira entre temerosa y expectante. Los jóvenes son los más osados y salen a las avenidas principales a arrojar neumáticos encendidos y lanzar piedras. Los mayores prefieren tocar las cacerolas en los pasajes internos o frente a sus casas.

Las acciones de los manifestantes no variaron mucho más. Barricadas y piedras, cacerolas, fogatas y más piedras. Lo que llamó la atención de esta jornada, lo que quedó realmente grabado fue la acción represiva perpetrada por los dieciocho mil militares, carabineros y civiles, y las interminables ráfagas de metralletas que resonaron en todo Santiago. Revisemos el informe redactado por el sacerdote Guido Peters desde la población La Legua:

A las 17 horas se observaban tanquetas y buses con carabineros fuertemente armados. La gente expectante llena las veredas y aviva las fogatas. De los buses bajaban carabineros con cascos, escudos, ametralladoras, lanza bombas, palos, fierros, hondas (...). En varias calles de la población rompieron vidrios, echaron abajo puertas ingresando violentamente, en algunas casas golpeando a sus moradores (...) en los días posteriores a la protesta hemos registrado la destrucción de aproximadamente 850 casas y de 35 vehículos<sup>68</sup>.

Las balas pasaban muy cerca, traspasaban paredes de madera, vidrios y cuerpos. Ello no era nuevo, pero sí más generalizado que en ocasiones anteriores. Una niña de ocho años y otra de dos murieron en el comedor de su hogar. Una hacía las tareas, la otra jugaba con su mamá. Muchos temían morir de esa forma, y así lo denunciaron posteriormente: “Debíamos movernos o circular gateando de una pieza a otra, incluso hubo momentos en que nosotros y nuestros familiares tuvimos que meternos debajo de las camas, pues disparaban balines y piedras. Rompieron todos los vidrios de nuestras casas con piedras y balines”<sup>69</sup>.

De las agresiones registradas en diversas poblaciones, el 62% ocurrió en el hogar de las personas. Se cuentan por cientos los allanamientos que seguían el mismo modus operandi: grupos de veinte o treinta uniformados derribaban las puertas a patadas, rompían los vidrios, todo lo revolvían, todo lo destrozaban. A los que les iba bien solo recibían insultos, el resto eran golpeados con lumas y botas militares, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, daba igual. Los jóvenes eran el blanco predilecto y decenas de ellos terminaron en la asistencia pública o en las capillas de su sector para recibir primeros auxilios por la gravedad de las lesiones.

Los hombres armados se retiraban con amenazas, a veces disparando al aire, otras, lanzando bombas lacrimógenas al interior de las casas. Humillación, temor, desamparo son palabras que se repiten en los documentos. También calvario, tragedia e injusticia. Revisemos una denuncia levantada al día siguiente desde la Población Pedro Aguirre Cerda, comuna de San Miguel:

Llegó un grupo de militares, aproximadamente unos diez, quienes forzaron la puerta de acceso del inmueble penetrando a tropel en su interior... Al intentar preguntarles el porqué de este inusitado atropello, recibí como respuesta una lluvia de golpes e insultos, llevándoseme también a la calle junto con mi hermano. Fuimos conducidos a una fogata que había a una cuadra de distancia de nuestro domicilio y allí, con los pies descalzos, se nos obligó a apagar las llamas, produciéndonos profundas quemaduras en la planta de los pies.

Ahí no terminó el castigo, ya que estos pobladores fueron apaleados por largo

rato. Relatos como este se multiplican. Quienes fueron sorprendidos armando una barricada –como en la población Villa Nueva Lo Espejo– jamás podrían olvidar el castigo:

Fue desnudado totalmente, se le quemó la ropa, y además de pegarle duramente, lo empujaron desnudo al fuego. Lo sacan del fuego, con quemaduras en su piel, le amarran los brazos a la espalda con un cinturón, y lo empujan al canal, de donde fue sacado por los vecinos. A este mismo poblador le cortaron su cabello a golpe de machetazos<sup>70</sup>.

La violencia contra los pobladores fue una práctica sostenida y ejecutada en decenas y decenas de casos documentados. En la tarde del 12 de agosto, el vicario general de Santiago, monseñor Juan de Castro, impresionado por el actuar de los carabineros y tras constatar que la represión no se detenía, citó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa: “Vengo a hablar a nombre de esa gente humilde que no tiene cómo expresarse”, dijo el consternado sacerdote antes de dar cuenta de las denuncias que habían llegado hasta la Vicaría, que a esa altura se había transformado en un verdadero recinto de asistencia médica: “Se ha actuado sin medida, sin mesura, sin respeto por la gente... los sectores poblacionales se han sentido muy humillados. Sinceramente, creo que estamos en una situación peligrosa, muy preocupante. Uno ha visto el dolor y la rabia de mucha gente en este día”, advertía<sup>71</sup>. También los profesionales de la salud que trabajaban en organizaciones de derechos humanos denunciaban la magnitud de la represión: “Nos hemos visto, en relación con las protestas del día 11 recién pasado, en una verdadera emergencia médica (...) tiene directa relación con la brutalidad y el sadismo que ha caracterizado la actuación de las FF. AA. y de Orden durante la última protesta y los días posteriores”<sup>72</sup>.

Pero a pesar de la represión y de que el titular de El Mercurio anunciara con gruesas letras: 10 muertos y 100 heridos –quedándose corto con las cifras–, la protesta se extendió al día siguiente. Independientemente a la convocatoria que la AD hiciera para protestar un solo día, desde las 13 horas más de cinco mil universitarios se congregaron en el frontis de la Facultad de Medicina Norte, en cuyos mástiles flameaban banderas que llamaban a reconstruir la Federación de

Estudiantes de Chile (FECh). Por la tarde, en homenaje a los muertos del día anterior, trescientas personas de la comuna de Pudahuel marcharon por calle Salvador Gutiérrez hasta calle Huelén portando pancartas con los 17 nombres de las personas asesinadas. Fueron interceptados por decenas de uniformados y los pobladores corrieron a refugiarse donde pudieron. Los heridos fueron de gravedad<sup>73</sup>. Pedro rememora esa noche:

En agosto del 83 la protesta fue terrible. Pusieron milicos en todas partes. Nosotros tuvimos uno en la esquina que nos estuvo dando balazos desde como las cinco de la tarde, porque a esa hora empezó el toque de queda. Pero igual estuvimos hueviando hasta como las doce de la noche. Los milicos no se atrevieron a entrar a la población, cuidaban la avenida y nosotros adentro hacíamos zamba y canuta... Apareció de todo para levantar las barricadas: árboles, rejas, forros, asientos, hasta sacamos unos puentes que había en la población<sup>74</sup>.

En tanto, las crónicas oficialistas ofrecían un panorama alarmante:

La Tercera: Una poblada enardecida asaltó cuatro locales comerciales en calle El Raulí, población San Ricardo de La Granja, altura del paradero 35 de Santa Rosa, robando comestibles por valor cercano al millón de pesos y causando subidos destrozos<sup>75</sup>.

El Mercurio: Algunas calles de los sectores periféricos de San Miguel, Pudahuel, La Cisterna, La Granja y Ñuñoa nuevamente fueron bloqueadas por barricadas con neumáticos encendidos. En San Miguel fue saqueado un hospital en construcción. Desde el interior del edificio una poblada sustrajo tablas, baldosas y parte de la techumbre (...) en esta comuna fueron destrozados semáforos, señalizaciones de calles y refugios peatonales (...). Igualmente, un grupo de exaltados intentó incendiar algunos postes de madera que sustentan el tendido telefónico<sup>76</sup>.

En la población La Legua continuaron realizándose manifestaciones durante todo el día 12. Alrededor de quinientos pobladores marcharon hasta que llegaron los carabineros y comenzó una batalla campal, con bombas lacrimógenas y disparos por un lado, y piedras por el otro. Lo mismo ocurría en Santa Adriana, en Juanita Aguirre, Villa O'Higgins y San Gregorio. Ante los agravios, la comisión poblacional redactó un comunicado: “Debemos señalar que ellos comienzan la provocación, pues como pobladores no tenemos otro medio de defensa que nuestras manos y piedras, que nada pueden contra sus armas y escudos”<sup>77</sup>.

Cuánta sería la indignación, que los numerosos sepelios del día 13 fueron calificados como otro día de protesta. Hacia el Cementerio General y Cementerio Metropolitano llegaron columnas de pobladores que acompañaron a sus vecinas y vecinos en romería desde sus hogares. Sumaban veintiséis los muertos que la multitud despedía y que más tarde sumarían veintinueve. Algunos habían sido alcanzados por balas dentro de sus hogares, otros habían caído junto al fuego de las barricadas, otros en la puerta de sus casas. Se trataba de cuatro niños, catorce hombres y ocho mujeres, muchas de ellas dueñas de casa de distintos puntos de la capital, pero siempre de la periferia.

Las columnas llegaron al cementerio gritando consignas y alzando pancartas. Seguramente, muchos llevaban sus mochilas cargadas de piedras que lanzaron contra los carabineros y militares que los rodeaban. Pero el enfrentamiento era desigual y poco podían hacer los pobladores hostigados ante una lluvia de bombas lacrimógenas, lumazos y balines. A los pocos minutos debieron arrancar y para su suerte encontraron puertas abiertas en las casas vecinas. Esos gestos, como el que experimentaron los jóvenes salvajemente golpeados que solo pudieron librarse gracias a los maceteros y el agua caliente que desde los edificios lanzaron vecinos anónimos para ayudarlos, o como los heridos que fueron atendidos por sus compañeros de barrio y llevados con urgencia hacia un hospital, dejan entrever la solidaridad que se activó en momentos adversos.

Esa noche, decenas de santiaguinos confirmaron que encender una barricada o estar en sus circuitos cercanos podía costar la vida. A ello se refiere Manuel Loyola:

La cantidad de balazos esa noche fue impresionante. Yo conocía a personas que fueron muertas esa noche. Fueron muertas por balas de carabineros; entonces, sentir que un conocido tuyo llegó a morir de un balazo en el corazón... El amigo mío que murió protestando estaba ahí, en la esquina de su casa, haciendo un corte con neumáticos, una barricada, y cuando ve a los pacos sale arrancando, entra a su casa, creyéndose que estaba a salvo se pone detrás de la puerta a esperar que pasen. Los pacos se detienen en la barricada y empiezan a tirar balazos a varias casas, con la mala suerte que un balazo atravesó la puerta, y le llegó justo al corazón, por la espalda<sup>78</sup>.

A partir de esta jornada, los funcionarios represores utilizaron un perverso método para dispersar la masividad e indignación que acompañaba las romerías: secuestrar el carro fúnebre con féretro incluido, lanzar lacrimógenas para dispersar a los acompañantes y abandonar el carro en las puertas del cementerio. La gente llegaba igual, pero con indignación redoblada.

Más tarde se supo que entre los días 10, 11, 12 y 13 de agosto hubo más de mil detenidos, una centena de heridos, aunque según advertía la Vicaría este último número podía ampliarse, ya que muchas personas tenían temor de presentarse a los centros de asistencia por miedo a ser inculpadas. Más de la mitad de las detenciones se registraron en la comuna de Santiago, además de Ñuñoa, Pudahuel y San Miguel<sup>79</sup>. La mayoría tenía entre 19 y 23 años; en primer lugar, se trataba de obreros (incluyendo cesantes y obreros del PEM y del POJH), seguidos por estudiantes (básicos y medios, pero mayormente universitarios).



## La “apertura”.

### Segundo movimiento: ¿es hora de hablar?

La estrategia mediática del gobierno fue responsabilizar a la protesta de los muertos y heridos. Según Augusto Pinochet: “Si el gobierno no hubiera adoptado medidas preventivas ante la violencia que se avecinaba, Santiago habría arduo por los cuatro costados”<sup>80</sup>. Otros condenaron la violencia, venga de donde venga, como el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Hughes, quien exhortó a todos los sectores a conservar la calma, evitar la polarización y fomentar el diálogo. El hombre estaba preocupado: “Los niveles de violencia callejera y represión por las fuerzas de seguridad fueron más grandes que en protestas antigubernamentales anteriores”<sup>81</sup>. A esta corriente de opinión se sumaron la clase empresarial, la derecha política y la AD, que parecieron estar de acuerdo en que “era hora de hablar”.

Esta intención fue respaldada y promovida por la institucionalidad de la Iglesia, siempre abierta al diálogo, aunque muchos de sus miembros la observaran con sospecha y cierto recelo. Ahora sí entraba en escena el “hombre político” del régimen dispuesto a conversar. Era su momento. Onofre Jarpa, después de la jornada, acudió a reunirse con el recién nombrado arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, según dijo, “para pedirle orientaciones que posibiliten la pacificación nacional”. En el encuentro estuvo presente el vicario general Juan de Castro, encargado de informar al ministro sobre los hechos represivos. Jarpa aseguró que se investigarían las denuncias relativas al uso de violencia innecesaria por parte de uniformados.

¿En qué quedaron las investigaciones prometidas? La indagación, a cargo de Pedro Espinoza, prefecto en jefe de la Región Metropolitana de la Policía de Investigaciones, aseguró que buena parte de los decesos “ocurrieron en enfrentamientos” y que era muy difícil empadronar e identificar a los agresores, “ya que en la mayoría de las fogatas y barricadas actuaban de 300 a 500 personas, que no pertenecían a los sectores, con claras intenciones vandálicas”. Curiosamente en esos días con sus noches, ni los detectives ni los uniformados recibieron bala alguna en los supuestos enfrentamientos. Absolutamente

ninguna. Por otro lado, al ser consultado sobre cómo se explicaba entonces que muchos murieran en sus domicilios, Pedro Espinoza salió del paso asegurando que “en varios casos los heridos fueron arrastrados por vecinos o amigos desde la calle hasta las casas”<sup>82</sup>.

Como podremos observar, cada uno de los pasos que dará el ministro Jarpa, sus declaraciones y promesas no tendrán piso real. Todo parecía indicar que el movimiento iba en ascenso y que Pinochet, que sorteaba la crítica internacional y la presión estadounidense, no podía sacar nuevamente a dieciocho mil militares a la calle, al menos no en tan corto lapso. La misión era evitar una Quinta Jornada Nacional de Protesta, que, de continuar con su réplica mensual, caería en septiembre, al conmemorarse diez años del golpe de Estado. El valor simbólico para el país era indiscutible.

Para calmar el descontento, fue anunciado un paquete de medidas para paliar la crisis económica<sup>83</sup>, en tanto, en el flanco político, la estrategia fue reforzar la división de la oposición reconociendo la existencia de una y criminalizando la otra. Si hasta un día antes “todos caían en el mismo saco”, el gobierno comenzó a diferenciar claramente entre quienes “expresan su molestia pacíficamente” en aras de avanzar en la institucionalización y los otros, “los vándalos”. El ministro del Interior declaraba comprensivo:

Hay mucha gente que tiene razón para protestar. Quienes están cesantes tienen que hacerlo en alguna forma y expresar su deseo de ser escuchados y que se resuelvan sus problemas. Eso, el Gobierno lo entiende perfectamente; por eso, las vías de solución no son otras que ponernos de acuerdo, dialogar y reunirnos toda la gente de buena voluntad para sacar adelante al país<sup>84</sup>.

En periódicos y discursos se repetían las palabras apertura y diálogo, pero lo más significativo fue que personeros de gobierno reconocieran públicamente la existencia de una oposición política. El primer encuentro gobierno-Alianza Democrática se programó para la tarde del 25 de agosto en casa del arzobispo de Santiago. Todo parecía avanzar con celeridad. Un día antes, el ministro del Interior se reunió con el embajador James Theberge, quien recalcó la simpatía con que Estados Unidos veía la apertura política y las conversaciones con la AD,

mientras la prensa comunicaba que por primera vez en diez años era concedido un permiso para realizar un acto público a una entidad de oposición. La carta de aceptación firmada por Jarpa explicitaba que el gobierno “reconoce y respeta el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones y pareceres”<sup>85</sup>.

Los comisionados para conversar con Sergio Onofre Jarpa serían Gabriel Valdés, Hugo Zepeda, Luis Bossay, Enrique Silva Cimma y Ramón Silva Ulloa. Los que no pudieron asistir fueron los socialistas de la AD, ya que no obtuvieron la venia de su partido –que se encontraba en proceso interno para lograr la escurridiza unión socialista–, que se negaba a dialogar con los representantes de un gobierno que había perseguido y diezmado a tantos de sus dirigentes y militantes. En la casa del arzobispo también estuvieron presentes sus vicarios Sergio Valech y Juan de Castro, que se limitaron a observar en silencio. El ministro Jarpa dio tibias señales de querer iniciar un proceso de diálogo formal. Señaló que había sido nombrado para llegar a una fórmula de acuerdo y que concurría con los mejores propósitos. Agregó de paso “que el clima mejoraría si se pudieran suspender las protestas”<sup>86</sup>.

Pero había un punto incómodo, ya que pocas horas antes de reunirse con Jarpa, la AD –apoyada por el CNT<sup>87</sup>– había llamado a protestar el 8 de septiembre, no obstante condenaba de antemano “toda provocación o manifestación de violencia que desnaturalice el carácter pacífico de esta protesta”<sup>88</sup>. Para los sectores oficialistas, ello entrañaba una profunda contradicción. ¿Llamar a una protesta el mismo día del encuentro con un representante del gobierno?

El panorama que enfrentaba la AD y sobre el cual debía decidir era, por un lado, restarse de una convocatoria segura a realizarse en un mes conflictivo, y por lo tanto quedarse sin la carta de presión con que contaba a la hora del diálogo, o convocar en forma adelantada para un 8 de septiembre que no tocara las fibras íntimas del día 11 y de paso mandar una señal a los sectores aliados que veían el encuentro con sospecha. Los dirigentes sabían que con ellos o sin ellos la jornada se realizaría de todas formas, tal como apuntó un analista al calor de los hechos: “La AD mal podía desistirse de una protesta que nació antes que ella”. Era mejor no bajarse del barco e intentar conducirlo dentro de sus propios márgenes.

En el encuentro con Jarpa, Gabriel Valdés quiso hacer entrega del documento llamado “Bases del diálogo para un gran acuerdo nacional”, en el cual exigían una transición de 18 meses, un gobierno provisional y la renuncia del presidente.

Jarpa se negó a recibirlo, arguyendo que había sido nombrado por el comandante en jefe y que sería absurdo aceptar un documento que contenía dicha solicitud. Si insistían, se retiraría de la reunión. Entonces pasaron a los siguientes puntos, como la participación de la oposición en el debate público, la visión de la crisis económica y la necesidad de reformas constitucionales. No sacaron nada en limpio; lo único concreto fue el acuerdo para volver a reunirse el lunes 5 de septiembre<sup>89</sup>.

La distancia ideológica y las distintas estrategias de la oposición fueron más evidentes después de ese encuentro. Para la Mesa de Izquierda el diálogo con los militares entrañaba no solo un problema ético, sino que oxigenaba a un gobierno que enfrentaba una seria crisis política, económica y social. Desde su punto de vista, era este el momento de la lucha y la movilización para derribar al gobierno e instaurar una democracia avanzada. El Partido Comunista, el Socialista-Almeyda, el MIR, junto con organizaciones sociales y territoriales, llamaron a protestar consecutivamente desde el 8 al 11 de septiembre.

Hasta fines de agosto, los funcionarios de Pinochet insistieron en solicitar que los convocantes “recapacitasen” sobre el llamado y “la grave responsabilidad que están asumiendo... tienen que darse cuenta de que no tienen el control sobre los violentistas”<sup>90</sup>. En medio de esta lucha de fuerzas discursivas, una noticia impactó al país: un comando armado del MIR asesinó al intendente de la Región Metropolitana, mayor general Carol Urzúa, a su chofer y a uno de sus escoltas. Se supo que Pinochet iba a declarar el estado de sitio, pero fue convencido por sus asesores de lo inoportuno del momento<sup>91</sup>. Las múltiples condenas al atentado resaltaron con más fuerza las posiciones en contra de la violencia, exagerando la responsabilidad de la protesta y el clima de fervor popular que propiciaba. Desentendiéndose del trabajo dialogante de Jarpa y ridiculizando los intentos de la AD, el indignado general Pinochet les negó públicamente el carácter de interlocutores “porque está constituida por representantes de partidos políticos y no reconozco a los partidos políticos porque no están en la Constitución”. Así de simple y para rematar, amenazó con ese estilo tan suyo: “Yo tengo la fuerza y si la violencia se generaliza y me empujan, pierdan cuidado que vamos a llegar al estado de sitio. Y más duro que antes”<sup>92</sup>. Era la primera advertencia antes de aplicar una medida de fuerza que concretará poco más de un año más tarde.

Pero septiembre era demasiado simbólico y no se sabía con exactitud cuándo empezaría la protesta ni cuándo terminaría. Un día 4 de septiembre el presidente Salvador Allende había ganado su lugar en las mesas de votación; esa era la

fecha en que Chile tradicionalmente elegía a sus gobernantes. A diez años, en un contexto abismalmente distinto, desde la madrugada del día 3 hubo una marcha de pobladores y barricadas en La Legua, La Granja y Pudahuel. El Mercurio denunciaba que fueron “programadas clandestinamente a través de escritos en las murallas y panfletos”<sup>93</sup>. Desde el mediodía, pobladores salieron en caravana desde el interior de San Gregorio hacia Santa Rosa, a la altura del paradero 25. Dos microbuses y dos furgones con carabineros armados con metralletas arremetieron contra los manifestantes. Junto con los carabineros operaba una treintena de civiles que atacaron impunemente la feria libre ubicada en Fernández Albano con Alvear. El acto cultural organizado en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Maipú también terminó con detenciones, lo mismo el realizado en el sector de Departamental con Las Industrias y en la población La Bandera.

En ese contexto y pese a las declaraciones de Augusto Pinochet, el 5 septiembre se concretó el segundo encuentro AD-Jarpa en casa del arzobispo Juan Francisco Fresno. Esta vez, lo único concreto fue un acuerdo sobre la posibilidad de formar comisiones para el estudio de leyes políticas. Nada más. Después de la reunión, la AD emprendió la tarea de diseñar acciones encaminadas a darle una connotación pacífica a la Quinta Jornada Nacional de Protesta. Gabriel Valdés nombró a Genaro Arriagada como conductor del Comando Nacional de Protesta. Tal como señalan Cavallo, Salazar y Sepúlveda en su crónica de la dictadura, “este modificó de inmediato el estilo: reconoció públicamente su carácter de coordinador de la protesta y explicó ante la prensa en qué consistía ese papel. En el esquema de acciones, la idea motriz de la protesta serían las manifestaciones pacíficas. Para subrayarlo, se acordó que el acto central fuera un sit in de los principales dirigentes en la zona de Plaza Italia”<sup>94</sup>. Pronto veremos que tal ejemplo de protesta pacífica fue un fiasco. Los personeros de la AD no alcanzaron a sentarse cuando fueron barridos por carros lanzagua, detenidos y humillados por los carabineros.

Transcurría el 7 de septiembre y en las puertas de lo que sería la Quinta Jornada, el presidente de la DC se quejaba de no haber obtenido hasta el momento “ni calendario, ni agenda, ni plazos” tangibles del gobierno, nada excepto palabras. Gabriel Valdés sentenció que el “diálogo no puede seguir sin respuestas concretas”. Pero la AD también temía un “desborde popular” y lo dijo claramente: “Sabemos que en Chile hay violentistas de izquierda y de derecha, pero la mayoría se ha pronunciado por la no violencia, y la Alianza Democrática se ha definido por la vía pacífica y por el diálogo”<sup>95</sup>. Sin afán de contradecirlo,

esa tarde hubo manifestaciones universitarias en Medicina Norte, en el Campus Oriente de la UC y frente al Liceo Valentín Letelier. También eran estudiantes los que se enfrentaron con los carabineros durante varias horas en distintos puntos del centro. La Coordinadora Nacional de Estudiantes de Educación Media había convocado a protestar por la política educacional del gobierno y a denunciar las medidas represivas en contra de estudiantes de distintos liceos de la capital. En otros puntos de la ciudad, al anochecer, entre los paraderos 20 y 24 de Santa Rosa, se realizaron distintas manifestaciones de adhesión. La protesta de septiembre se extendería masiva y territorialmente.

## A diez años del golpe militar:

### ¡Se siente, se siente... Allende está presente!

Onofre Jarpa había intentado infructuosamente detener la Quinta Jornada Nacional de Protesta con señales de “apertura” y dos acercamientos con los miembros de la AD. Su intuición y conocimiento de la contraparte le hacía suponer que tendría éxito al encabezar un proceso de tregua social. En sus palabras: “Pensé realmente que al iniciarse el diálogo y al recibir de parte del Gobierno un trato deferente, no iban a seguir con estas protestas. Pero ellos eligieron ese camino con sus consecuencias... Creo que habría facilitado las cosas y nos hubiéramos economizado mucha violencia, muertos y heridos y todos los desmanes que hemos visto”<sup>96</sup>.

El plan Jarpa no pudo cumplirse porque sencillamente no estaba en manos de sus interlocutores detener la protesta; por el contrario, quedó demostrado con las extensas jornadas de septiembre que el movimiento iba mucho más allá de la conducción aliancista y que si bien eran parte de ese entre todos, ni el timón ni su destino le pertenecían. Ante este escenario, el gobierno utilizó tres formas de contención: en primer lugar, Jarpa hizo un llamado a la población para que se organizara y defendiera de las acciones extremistas, es decir, promovió y legitimó un potencial enfrentamiento entre civiles; como segunda medida, para dividir a los pobladores, extendieron el rumor sobre inminentes ataques de poblaciones vecinas. En ello colaboraron Carabineros y la prensa oficialista. Como tercer punto, el gobierno decidió congregarse a su gente en la calle organizando concentraciones masivas de apoyo a los diez años de su gestión. El acarreo de trabajadores del PEM y del POJH se transparentó debido a un trágico suceso que conoceremos en estas páginas.

En la Quinta Jornada la figura de Salvador Allende fue reivindicada con fuerza. Su nombre se leyó en rayados, se gritó en consignas, flameó en romerías, enfrentamientos callejeros y campus universitarios. Sucedió que en septiembre, hasta entonces, invariablemente se reactivaba el dolor, pero era un dolor íntimo, compartido en procesiones y abrazos comunitarios. En cambio, desde septiembre de 1983 fue una voz estruendosa la que se escuchó hablando desde lo profundo.

A esto nos referimos cuando decimos que el allendismo era un hilo de continuidad histórica que explica parte de la furia y de la participación popular en las protestas. Allende fue rescatado de la clandestinidad como ejemplo y símbolo de unidad, como representante de una ética colectiva y de un pasado que cohesionaba los diversos proyectos del presente. Desde entonces, cada septiembre, baje o suba la participación en las jornadas durante el resto del año, será un mes de protesta muy conflictivo para las fuerzas del orden. Así quedó demostrado en septiembre de 1985, 1986, 1987, 1988... hasta muy entrado el nuevo siglo.

En septiembre de 1983 también destacó la reivindicación de la Unidad Popular. A pesar de los pesares y de los errores cometidos –se comentaba–, nada de ello era equiparable a los crímenes y la pobreza que se experimentaba. Antecedentes que es necesario considerar en una protesta que se extendió desde el 8 al 12 de septiembre. Esta vez no operaron formas de protesta que en las jornadas anteriores tuvieron protagonismo, como no mandar a los niños al colegio, ya que el Ministerio de Educación prefirió adelantar en dos días las vacaciones de Fiestas Patrias y evitarse complicaciones. Si bien el caceroleo bajó de intensidad, se multiplicaron y nutrieron las marchas poblacionales y actos internos, al igual que las barricadas y fogatas que se extendieron en alcance y territorio.

Hemos visto que la AD había convocado exclusivamente para el día 8 y que como acto principal, junto con tocar las cacerolas al anochecer, fue planificado para el mediodía un sit in pacífico en la Plaza Italia. De él serían partícipes los propios representantes de la Alianza Democrática y demostrarían al gobierno y a los sectores más radicalizados que se podía protestar masivamente sin provocar desmanes. No obstante, los líderes nacionales de la AD, ni siquiera alcanzaron a ubicarse en medio de la calle cuando ya eran desalojados violentamente por un contingente de policías que con bastones de madera en mano, acompañados por carros lanzagua y gases tóxicos, se abalanzaron sobre ellos. Lo inaudito fue que esto sucedía en plena “apertura” y ante cientos de cámaras extranjeras y nacionales interesadas en seguir el proceso. Los reporteros también fueron seriamente reprimidos, al igual que el resto de manifestantes que en ese momento llegaban hasta las proximidades del parque Bustamante, especialmente jóvenes estudiantes y profesionales.

Entre los primeros apaleados y arrastrados por el suelo estaba Genaro Arriagada, coordinador DC del Comando Nacional por la Protesta, que debió ser trasladado a la sede del Colegio Médico para recibir atención. El grupo de avanzada intentó



en varias oportunidades concretar el sitio; más aún cuando a la una de la tarde llegó la plana mayor de la Democracia Cristiana; no obstante, todos fueron empapados por los guanacos, perseguidos o golpeados por carabineros de fuerzas especiales<sup>97</sup>. Hubo jóvenes atropellados por buses de carabineros, mordidos por perros policiales y más de cien detenidos, entre ellos el propio Patricio Aylwin junto con dos de sus hijos.

A pesar de la violenta represión, hasta el parque siguieron llegando oleadas de estudiantes con “lienzo y pancartas, algunos de los cuales mostraban el rostro de Salvador Allende”. Nuevamente la manifestación se dirimió entre piedras y hondas, por un lado, y apaleos, carros lanzaguas, lacrimógenas y gases irritantes, por el otro. La forma de atenuar y evadir la acción de carabineros, como ya era costumbre, fue diseminarse: “Siempre había un grupo que gritaba consignas, aplaudía rítmicamente y golpeaba con piedras los postes y otros objetos metálicos”<sup>98</sup>.

Gabriel Valdés, indignado, responsabilizó directamente a Jarpa por la afrenta vivida y denunciaba ante decenas de cámaras:

Fuimos reprimidos por un gran operativo policial, con brutal violencia... empleada contra ciudadanos que pretendíamos ejercer el más legítimo y pacífico de nuestros derechos... es inconcebible pretender mantener un diálogo si simultáneamente se golpea, se maltrata y se detiene a los interlocutores. Por esta razón convocaré de inmediato a la Alianza Democrática para que analice estos hechos y adopte las resoluciones correspondientes<sup>99</sup>.

Al día siguiente, Valdés cumplía su amenaza y daba por suspendido el diálogo. El dirigente DC exigía fechas, agendas, un itinerario de transición transparente y oportuno, que no se extendiera hasta 1989 ni siquiera 1988. En tanto eso no sucediese –advertía–, no habría nada más que hablar.

A la humillación pública se sumaban las provocadoras declaraciones del ministro del Interior sobre la detención de Patricio Aylwin: “Lamento mucho las molestias que tuvo por participar en una manifestación juvenil, pero no fue detenido. Él se ofreció a ir a la comisaría, donde se quedó bastante tiempo tomando café y conversando”<sup>100</sup>. A los dos días, Onofre Jarpa repetía su

sarcasmo al ser consultado sobre la suspensión del diálogo: “Pienso que es una reacción un tanto ofuscada después del incidente en que, lamentablemente, el señor Valdés fue un poco mojado, porque nadie sabía que estaba ahí”<sup>101</sup>, y aprovechó de reafirmar su confianza de continuar en el camino “de mayor normalidad, donde se puede realizar un diálogo realmente democrático”. En tanto, ya con la cabezas más frías y las ropas secas, la AD aclaró su postura y precisó que no se trataba de “una ruptura definitiva”, porque no era su interés romper definitivamente con el diálogo, sino que lo daban por suspendido asumiendo la voluntad de retomarlo en una tercera reunión que involucrase –eso sí– el acortamiento de los plazos.

Transcurría el día 8, y en el centro de Santiago, al borde de las cinco de la tarde, la mayoría de los locales comerciales ya habían bajado sus cortinas y los trabajadores apuraban el paso para encontrar un lugar entre la disminuida locomoción. Desde los incidentes del mediodía en Plaza Italia el cuadrante céntrico no había descansado. Los Tribunales de Justicia también fueron perturbados con la voz de unos trescientos estudiantes universitarios que llegaron a protestar contra la legislación vigente y la injusticia institucionalizada. Una decena de ellos fueron detenidos por carabineros que escoltaron su salida.

En el cinturón periférico, como señalamos anteriormente, destacaron las marchas masivas dentro de las poblaciones y avenidas principales junto con la quema de neumáticos y enormes hogueras. Fueron centenares de personas las que en avenida Ecuador con Las Rejas anunciaban estar dispuestas a protestar hasta el 11 de septiembre. Se supo que en Callejón Lo Ovalle con avenida José Joaquín Prieto un camión con carabineros, tras sufrir un desperfecto, se vio en serios problemas al ser atacado por un nutrido contingente de pobladores, tanto que sus asustados tripulantes debieron solicitar fuerzas de rescate. Muy cerca de ahí, en Departamental y Ochagavía (Ruta 5 Sur), la luz estaba cortada y el paso hacia los canales interiores completamente obstruido por barricadas. Si se intentaba circular por una de esas arterias hasta Santa Rosa y sobre ella hasta el paradero 25, destellaba el fuego en cada esquina y la presencia de numerosos pobladores.

En el norponiente de la ciudad se vivía una situación similar. Después de las nueve de la noche, al son del caceroleo y entre las innumerables fogatas, se había formado una columna de manifestantes compuesta por centenares de jóvenes que recorrían avenida Independencia. En la población Manuel Rodríguez de Pudahuel, ya sin luz eléctrica y el pavimento cubierto de barricadas, “la policía dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas y debió utilizar tanquetas

para enfrentar el ataque de pobladores”. Hacia el suroriente las crónicas hablaron de cientos de jóvenes y menores atrincherados en las vías que reunían la rotonda Grecia y que “abre las puertas hacia los campamentos ‘Los Molineros’ y ‘Palena’. Allí interrumpieron el tránsito de ambas vías camineras con barricadas de fuego y piedras... retrocedían y avanzaban para repetir las provocaciones cada cierto tiempo”<sup>102</sup>.

A las 22 horas, Genaro Arriagada llamó solemnemente a dar por concluida la Quinta Jornada Nacional de Protesta: “Esta protesta ha terminado. Llamamos en nombre de la Alianza Democrática al pueblo a permanecer en sus casas”<sup>103</sup>. Pero la protesta se extendió durante otros tres días y en algunas zonas hasta cuatro. No se trató de algo concertado, sencillamente Arriagada no fue tomado en cuenta porque el representante de la AD estaba hablando desde otro lugar, lejano a los oídos y a los espíritus de la gente que en las jornadas de septiembre quería protestar y hacerse oír. Mientras él hablaba, la gente estaba en la calle.

Durante ese primer día fue denunciada una mayor presencia de civiles que dispararon contra manifestantes desde vehículos en marcha y furgones sin placas (¿no había llamado Jarpa a la población para que se organizara y defendiera?). En un principio, el gobierno aseguró que una de esas balas anónimas hirió de muerte a Ángel Zavala Gallegos, de 23 años, poblador de La Victoria. Sin embargo, sus familiares, organizaciones vecinales y testigos directos sabían quién le había disparado: “Fueron los carabineros”, aclaró su hermana. “Una persona vio cómo uno de ellos se arrodilló y disparó”. La declaración quedó registrada en la Vicaría: a las seis de la tarde, mientras los pobladores jugaban una pichanga de fútbol en un territorio demarcado por barricadas, un bus de carabineros había logrado entrar, y sin mediar provocación dispararon contra los jóvenes.

Al día siguiente, una centena de pobladores custodiaban en actitud desafiante la casa del joven asesinado<sup>104</sup>. El ambiente estaba bastante tenso, aún más cuando desde un furgón policial lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los pobladores que se encontraban ubicados en 30 de Octubre con avenida La Feria; si bien la lluvia de piedras que recibieron desde distintas esquinas los obligó a retirarse, solo fue para buscar refuerzos. Por la tarde regresaron acompañados por cinco microbuses colmados de efectivos, apoyados en la retaguardia por cinco tanquetas: “Entraron violentamente a la población arrojando bombas lacrimógenas, disparando balas, balines y perdigones; allanando viviendas, golpeando a sus moradores, destrozando puertas, ventanas, enseres y muebles.

También detuvieron, desde sus hogares, a numerosos pobladores”<sup>105</sup>.

Pero la zona sur estaba en pie de guerra y desde la tarde era casi imposible acercarse al lugar: “Hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, entonaban ora cantos ora consignas, lanzando piedras contra la policía cuando se presentaba para disolverlos. Un alto jefe policial dijo que habían trabajado horas sin descansar para controlar los disturbios, sin conseguirlo. La locomoción colectiva no fue dejada circular en cuarenta manzanas... un parque importante de carros policiales fue inutilizado”<sup>106</sup>.

Por el poniente y norte de la ciudad también resonaban las piedras sobre las latas de vehículos policiales y civiles que no respetaban las barreras de fuego, especialmente en el sector de Pudahuel, la población José Joaquín Aguirre, en la Panamericana Norte, La Pincoya y Juanita Aguirre.

Mientras estos hechos ocurrían, cerca de La Moneda, en el Altar de la Patria, una multitud se reunía para vitorear al comandante en jefe y conmemorar festivamente otro aniversario del “pronunciamiento militar”. En aquella primera manifestación masiva de apoyo al régimen, Pinochet instó a los suyos a defender y seguir la senda trazada por la Constitución “para caminar hacia una democracia protegida, pero con autoridad”. Según la prensa oficialista, “la manifestación cobró carácter de fiesta popular en los instantes en que desfilaron miles de modestos pobladores de diversas comunas del Área Metropolitana”<sup>107</sup>. No obstante ya hemos referido la forma en que muchos de aquellos modestos pobladores, principalmente trabajadores del PEM y el POJH, llegaron hasta los actos oficialistas.

En tanto, en vísperas del día 11, alrededor de treinta mil pobladores salieron en marcha desde la parroquia de la población La Victoria hasta el Cementerio Metropolitano para despedir a su vecino Miguel Ángel Zavala. Eran las tres de la tarde y todo transcurría pacíficamente. Así lo había solicitado –e insistido reiteradamente– el padre Pierre Dubois: “No se tirarán piedras en este funeral”; era el acuerdo comunitario. Venían entonando la canción “Gracias a la vida” de Violeta Parra, cuando al llegar al camposanto percibieron que en los alrededores les esperaban varios microbuses y tanquetas con carabineros. Bastaba su presencia para activar la furia redoblada por la muerte, y podemos imaginar lo que vendría. A la gran masa de pobladores que ingresó al cementerio se les escindieron cientos de jóvenes que se dirigieron hacia los carabineros para lanzarles piedras. Era la señal que necesitaban y prontamente el cementerio fue

rodeado por fuerzas especiales y el aire saturado de bombas lacrimógenas. Las denuncias posteriores relatan que dentro de los buses de carabineros los detenidos recibieron salvajes golpizas. Cuando se cansaron fueron arrojándolos desde el bus en marcha<sup>108</sup>.

La periferia y el cuadrante céntrico de la ciudad no habían descansado cuando llegó el 11 de septiembre. Muchos se amanecieron en las barricadas que continuaban humeando. Era domingo, y no sabemos cuántos de los obreros del POJH que protestaban en Pudahuel habían escapado de Santa Corina, ni cuántos de los que de ahí salieron y se libraron de la balacera estuvieron alimentando barricadas durante la tarde y noche de esa larga jornada. Solo sabemos que la protesta del día 11 fue muy masiva, violenta hacia afuera y coordinada hacia adentro. También sabemos que el acto de gobierno al que serían conducidos en el edificio Diego Portales se realizó con un gran dispositivo de seguridad, pero sin ningún contratiempo. Todo estaba preparado con rigurosidad para que el comandante en jefe y presidente de la República se pronunciase durante dos horas ininterrumpidas.

Para quienes esperaban en su discurso el anuncio de medidas concretas para el proceso de “apertura” o abreviaciones del plazo estipulado para el advenimiento democrático debe haber sido frustrante. De eso no hubo nada, a menos que alguien considerase como apertura la promesa de insertar gradualmente a civiles en cargos administrativos –incluidas las universidades– que ocupaban hasta entonces los uniformados. Otro de los anuncios fue el reajuste en un 15% para el sector público que no negociaba colectivamente, lo que venía a mermar un poco el congelamiento de salarios que les había afectado en los últimos años. También planteó la posibilidad de llamar a futuro a un plebiscito para consultar sobre reformas legislativas, pero antes de que alguien sacase conclusiones alegres, recalcó que el camino fijado por la Constitución de 1980 debía ser respetado<sup>109</sup>.

Fue esa noche cuando el rumor se reveló como una poderosa arma de contrainsurgencia. Grupos de carabineros, uniformados y de civil, se encargaron de alarmar a los habitantes de la periferia con que serían atacados por los habitantes de poblaciones vecinas. Los testimonios de pobladoras entregados en la Parroquia de Santa Adriana expresaban el terror propagado aquella noche: “Carabineros nos dio un trapo blanco, dijo que nos pusiéramos brazaletes; en las ventanas los pusimos nosotros, porque nos iban a incendiar las casas. Ellos le echaban la culpa a los de La Victoria, así dijeron, que los pobladores nos venían a quemar a nosotros. La gente estaba aterrorizada... yo lo creí, la mayoría, la

gente al lado de nosotros le creyó”. En otro sector de Santa Adriana fueron despertados con gritos y aparatosos movimientos:

Como a las cinco nosotros salimos para afuera y sentíamos trotes para allá y para acá, que allá vienen, total que uno no sabía a qué atenerse... Mi esposo se levantó también, nos levantamos todos, el carabinero nos dijo: hagan fogatas, tomen palos, tengan agua junta porque vienen los de La Victoria a incendiarles las casas... y ellos hacían rondas con tanquetas, porque llegaron hartas tanquetas, corrían para allá, corrían para acá, que ahí vienen... ese día nos amanecimos... cuando se apagaba un poco el fuego ellos avisaban, gritaban: sigan echando no más, aviven para que sepan que ustedes están despiertos<sup>110</sup>.

Muchos no durmieron en Santa Adriana. Tampoco conciliaron el sueño en la Villa O’Higgins, San Gregorio y otros sectores modestos, como en la población Santa Olga, donde fueron lanzados panfletos en que se les amenazaba con el ataque de pobladores de la José María Caro<sup>111</sup>. El obispo Camilo Vial, el padre Hernán Correa de La Granja y Pierre Dubois de La Victoria denunciaron el clima de terror y angustia –destinados a crear división y desconfianza entre los pobladores– como algo diabólico. Posteriormente, tuvieron que emprender una larga campaña para desmentir y así tranquilizar a sus parroquianos.

Por la tarde, noche y madrugada se repitieron las escenas que hemos descrito: “Los accesos a Santiago quedaron interrumpidos tanto en el norte como en el sur por obstáculos en llamas instalados por jóvenes embozados y portadores de banderas de movimientos extremistas que gritaban consignas a favor de Salvador Allende”<sup>112</sup>. Por un artefacto explosivo, cincuenta metros de la línea férrea cercana a Quilicura volaron por los aires y los trenes que desde Lo Espejo se dirigían a Santiago fueron apedreados; se supo que antes del atardecer, centenares se congregaban en el sector de San Pablo, Neptuno, Grecia y su rotonda, también en la de Quilín y Santa Julia; que unas quinientas personas levantaban verdaderos muros de contención en Lo Hermida y que turbas apedreaban vehículos que se acercaban a las barricadas de Departamental con Ochagavía. Definitivamente, la noche no se apagaba por más que se multiplicaron los cortes de luz en las distintas zonas que ya hemos recorrido<sup>113</sup>.

En todo el país hubo cuatro asesinados el 8 de septiembre, tres el día 9 y cuatro el día 11 –entre ellos un carabinero– y más de trescientos heridos de diversa gravedad<sup>14</sup>. Pero la protesta no terminó ni siquiera el 12 de septiembre. Con distintas intensidades y formas continuó expandiéndose incluso en las semanas siguientes.

Por otro lado, es evidente el doble rostro en que se movía la estrategia de gobierno: si por un lado en las declaraciones de Jarpa podían esperarse vientos de cambio dentro del sistema, Pinochet se encargaba de cerrar horizontes y expectativas a los dialogantes. Esa fue la tónica durante ese tiempo: esperanza y represión. En plenas Fiestas Patrias fue restablecido el derecho de reunión que autorizaba manifestaciones públicas. Para concretarlo, sus organizadores deberían comunicarlo a la autoridad con 48 horas de anticipación junto con otros pormenores requeridos. Pese a todas las trabas administrativas, sin duda era un avance, por lo que la oposición se dispuso a hacerlo efectivo de inmediato. Una semana más tarde, organizaciones juveniles informaron a las autoridades sobre la realización de un acto a desarrollarse en la tarde del 5 de octubre en el parque Bustamante. Si bien el acto fue autorizado en plaza Pedro Aguirre Cerda, ubicada al final de la avenida Bulnes, hasta allí llegaron alrededor de 15 mil personas. Fue la primera concentración masiva que la oposición efectuaba unitariamente y al aire libre.



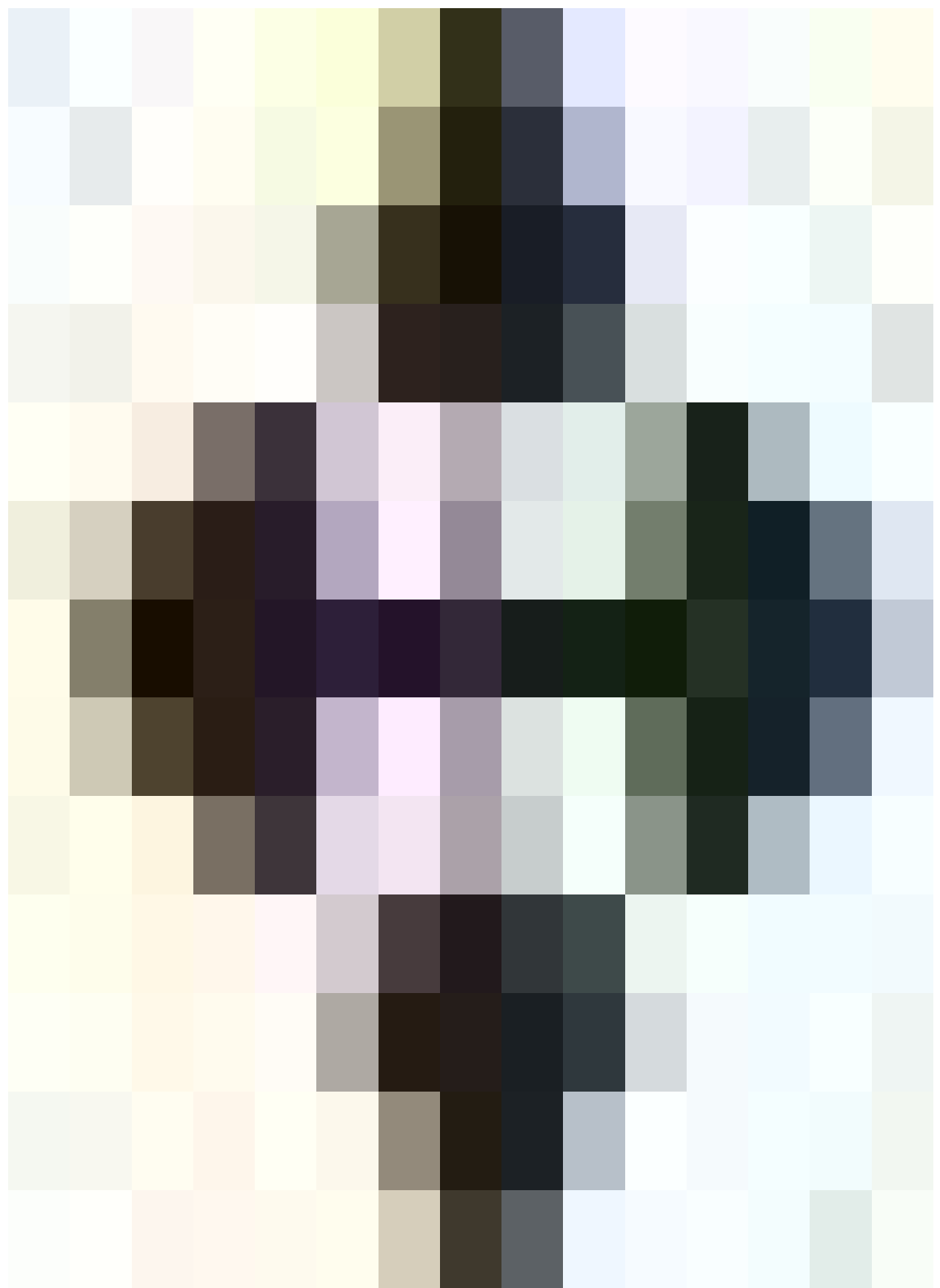


■ *Manifestación de Jóvenes por la Democracia, avenida Bulnes, 5 de octubre de 1983 (ADVS).*

Entre los oradores estuvo Eduardo Valencia, presidente de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, organización que venía tomando fuerza y consolidándose en la lucha por la vivienda digna. El momento era trascendente. Valencia se pronunciaría sobre la represión al movimiento de pobladores, exacerbada con la gran toma de terrenos protagonizada por alrededor de ocho mil familias que el 22 de septiembre de este movilizadísimo año 1983 ocuparon los terrenos baldíos de la comuna de La Granja, con lo que dieron origen a los campamentos Monseñor Francisco Fresno y Cardenal Raúl Silva Henríquez. Fue la primera toma realizada en dictadura que no pudo ser desalojada debido al contexto en que se realizaba, a su masividad, a su organización interna y al apoyo solidario que concitó. Durante los meses siguientes, estos campamentos constituirían un importante soporte territorial de las protestas. De hecho, al día siguiente de esta gran toma de terrenos, en la sede de la Coordinadora de Pobladores, bajo un cartel que decía “Operación Sitio. La vivienda es un derecho”, fue anunciada la convocatoria para la Sexta Jornada Nacional de Protesta.

Como respuesta oficial, entre el 28 y 30 de septiembre, cuarenta personas, la mayoría de ellas dirigentes poblacionales de la Región Metropolitana, fueron relegadas hacia áreas extremas del país. Era la cifra más alta de relegados en los últimos dos años. La prensa de oposición también fue amordazada. El 27 de septiembre, desde los Tribunales de Justicia salieron engrillados de pies y manos el director de la revista *Análisis*, Juan Pablo Cárdenas, y el dirigente de la Izquierda Cristiana, ministro de Minería y de Vivienda durante la UP, Pedro Felipe Ramírez<sup>115</sup>. El gobierno no toleró el editorial dedicado a evaluar los diez años del régimen; tampoco la entrevista hecha a Ramírez, en que criticaba el diálogo con funcionarios de la dictadura y llamaba abiertamente a la desobediencia civil: “Es indispensable –opinaba– introducir una práctica de no reconocimiento del régimen, lo que supone que las masas empiecen a no obedecer, a no hacer lo que el dictador manda y a hacer lo que el dictador prohíbe... Es una forma de lucha que hace ingobernable al país, y después de eso Pinochet tiene que irse”<sup>116</sup>. Los cargos imputados: injurias a su excelencia, promoción de la paralización del país y conspiración para derribar al régimen.





Septiembre fue un punto de encuentro, bisagra de todas las fuerzas y distintos tiempos que habían despertado y se habían puesto en movimiento con más fuerza durante el intenso año 1983. Así lo demostró la extensa y combativa jornada a la que hemos hecho referencia; el allendismo y su repertorio histórico de valores y prácticas ganando la calle, las pancartas y los muros; la toma de terrenos de La Granja, y la aparición pública de los conglomerados que protagonizaron la discusión política y que delinearon más nítidamente el círculo de oposición con las distintas propuestas de acción para enfrentar a la dictadura. Fue en septiembre cuando terminó de definirse la configuración del cuadro político opositor. El día 12, en conferencia de prensa se comunicó la constitución del Bloque Socialista (BS) conformado por el MAPU, la Izquierda Cristiana, las vertientes del socialismo histórico y el Movimiento Obrero Campesino (MOC). Con la aspiración de situarse como fuerza alternativa, el BS pintó su raya respecto a la política militar del PC, pero también desconfiaba de las posibilidades de diálogo con la dictadura encaminadas desde la AD; por ello impulsaba acciones populares de protesta dentro de una perspectiva de desobediencia civil<sup>117</sup>.

Una semana más tarde –aunque en la práctica ya venían trabajando desde tiempo atrás– fue anunciada oficialmente la conformación del MDP. Los dirigentes Pascual Barraza, Óscar Barrau; María Maluenda, Humberto Martones y Manuel Almeyda entregaron una declaración que lo presentaba “como una respuesta necesaria e imperiosa ante el anhelo popular... cuyo objetivo es conformar un ‘punto de referencia’ distinto, pero no contradictorio a la AD, que represente ‘una profundización de la lucha y la unidad del pueblo desde una perspectiva de izquierda’”<sup>118</sup>.

Aunque sin lograr un bloque unitario, tal como lo promovía el ministro Jarpa, la derecha también recomponía sus fuerzas. El 24 de septiembre, inspirado y presidido por el gremialista Jaime Guzmán –artífice de la Constitución de 1980– nació el movimiento Unión Demócrata Independiente (UDI), de férreo apoyo al golpe militar y directos colaboradores de Augusto Pinochet.

También fue en septiembre cuando se concretó sigilosamente la tercera reunión de la AD con Jarpa. Sus planificadores dispusieron que el encuentro no se oficiara en la casa del arzobispo Fresno, sino en la casa de la Congregación de los Hermanos Maristas en la comuna de Providencia. El lector se preguntará

¿cómo se coordinó tal reunión después del sit in fallido del día 8 de septiembre?  
¿Quién habrá dado el siguiente paso, en circunstancias de que la propia AD había informado que suspendía el diálogo hasta que hubiese una agenda clara de transición y un acortamiento de sus plazos?

Gracias a un trabajo de investigación periodística, sabemos que fue Gabriel Valdés quien por sus contactos logró concretar una reunión privada con Jarpa. En ella le expuso su preocupación por “el carácter inorgánico que estaba tomando la ‘apertura’”. Jarpa insistió en que era necesario formar comisiones para avanzar en los cambios propuestos y que los acuerdos que consiguieran serían enviados a la Junta de Gobierno para que considerase la posibilidad de someterlos a plebiscito. Valdés se habría movido con rapidez para consultar ante la AD la propuesta, redactar una proposición y solicitar al arzobispo Fresno la convocatoria a la reunión. Le pedía, eso sí, suma discreción, dadas las críticas y desconfianzas que suscitaban dentro de la oposición<sup>119</sup>.

Tal como fue acordado, el día 29 de septiembre los personeros llegaron a la reunión. Traían consigo una cartilla con los puntos “intransables” que le leerían al ministro como punto de partida de cualquier negociación. Jarpa nuevamente dijo tener toda la disposición para llegar a algún acuerdo. Sin embargo, solo horas antes había ordenado la relegación de los primeros quince pobladores detenidos como parte de las sanciones tras las jornadas de septiembre. El punto, al parecer, no fue tocado para no obstaculizar el concilio y poder avanzar en los acuerdos. Los representantes de la AD también optaron por no hacer alusión a la renuncia del general Pinochet y se explayaron en los pasos para lograr algo de lo que hasta entonces formaba parte del consenso dentro del arco opositor: la derogación de la Constitución de 1980 y el cambio del modelo económico aplicado en Chile<sup>120</sup>.

Onofre Jarpa descartó absolutamente el primer punto y para el siguiente pidió paciencia y tiempo. Para lo de las comisiones, que era un asunto de consenso, acordaron que volverían a reunirse para analizar más a fondo las proposiciones. A pesar de la cautelosa reserva del encuentro, al salir del edificio los personeros fueron sorpresivamente abordados por cámaras y micrófonos de la prensa. Otra vez quedaban expuestos. Solo tres días más tarde, Augusto Pinochet pronunció un feroz discurso, en el que enfatizó que el camino de la democracia ya estaba trazado y que las Fuerzas Armadas y de Orden lo iban a garantizar “cueste lo que cueste”. El general apuntaba que “han aparecido como fantasmas del pasado personajes que le harían un gran favor a la patria si se quedaran en sus casas. No

titubean en juntarse con los marxistas, conforman grupos en los que figura hasta un ex funcionario público marxista. Sin embargo, tienen la impudicia de llamarse democráticos”. Los políticos podían “seguir conversando no más”<sup>121</sup>.

Nuevamente Pinochet ridiculizaba los intentos del conglomerado. Los indignados integrantes de la AD exigieron del gobierno una respuesta clara e inmediata a la minuta entregada. No hubo respuesta, es decir, no la que esperaban. En un comunicado transmitido vía prensa, Jarpa emplazó a la AD para que se definiera en torno al comunismo y otros grupos de extrema izquierda. Según apuntaba el ministro, ese era el gran obstáculo para avanzar en las conversaciones. Jarpa daba vuelta el argumento y los culpaba de los magros avances en la apertura política: “No han contribuido en absoluto algunos sectores que se autodenominan democráticos. Todo lo contrario, han tratado reiteradamente de hacerlas fracasar, promoviendo, en estrecha alianza con el extremismo marxista, todo tipo de disturbios y protestas”<sup>122</sup>.

Y es que Jarpa también se vio ridiculizado dentro de sus propias filas cuando al día siguiente de reunirse con la AD, el país fue convocado a participar en la primera manifestación que la oposición realizaría en forma conjunta. Era una novedad que representantes del Proden, la AD, el MDP y el recién conformado Comando Unitario Democrático (CUD)<sup>123</sup> llamasen a celebrar un acto unitario que iba en contra de los pronósticos, propósitos y tareas asumidas por Jarpa como ministro del Interior.

La convocatoria invitaba a conformar cuatro columnas, llamadas Pan, Trabajo, Justicia y Libertad, que marcharían desde distintos puntos de la ciudad de Santiago para converger en el Centro de la Democracia (ubicado en la Alameda con avenida Brasil), donde se ubicaría el escenario principal. Los objetivos fueron: “El establecimiento de un Gobierno democrático de amplio consenso nacional; la elección de una Asamblea Constituyente; el cambio del modelo económico, y el término de los estados de excepción”<sup>124</sup>. Para insistir en la unidad de intenciones, solo se llevarían banderas chilenas y se solicitaba crear una atmósfera sin consignas políticas.

Antes de terminar la conferencia, tanto el CUD como el MDP aprovecharon de llamar oficialmente a la Sexta Jornada Nacional de Protesta, para los días 11, 12 y 13 de octubre, bajo la consigna “Fuera Pinochet, Democracia Ahora”<sup>125</sup>. La AD y la UDT se abstuvieron del llamado. Era la primera vez que se restaban y era evidente que la decisión algo tenía que ver con las conversaciones que

llevaban a cabo con Jarpa. Pero para el acto ya estaban comprometidos. Si algo era más temido que las protestas, era una oposición actuando en bloque hacia objetivos similares. Jarpa insistió en su táctica fragmentadora y conminó a la Democracia Cristiana para que se definieran públicamente en torno al comunismo<sup>126</sup>. La AD, hábil en diplomacia, se tomó su tiempo en responder.

En tanto, corría el viernes 7 de octubre y el democratacristiano Belisario Velasco salía furioso de las oficinas de la intendencia de Santiago. Se le había notificado que el permiso para el encuentro opositor no había sido autorizado en el lugar público solicitado. A cambio se les ofrecía el Parque O'Higgins<sup>127</sup>. El afrentado Comité Ejecutivo de la AD decidió suspender el acto y considerando los magros avances en sus conversaciones con Onofre Jarpa, las humillaciones a las que se exponían con las declaraciones Pinochet y las presiones de las juventudes de sus partidos –especialmente de la JDC– sobre concentrar las fuerzas políticas en la movilización social, los personeros aliancistas comunicaron que finalmente daban por rotos los contactos con el gobierno. Según argumentaron, no estaban dispuestos a responder un emplazamiento sobre el PC que ya estaba estipulado en su declaración de principios.

El acto unitario cayó en un espacio confuso. Por un lado, la AD lo había suspendido unilateralmente y, por otro, la postura del gobierno confirmaba las tesis de un MDP convencido de que solo “dialoga para ganar tiempo, dividir a la oposición y perpetuarse en el poder”. El MDP tampoco se pronunció sobre el acto y llamó a concentrar fuerzas en la Sexta Jornada. ¿Y el acto? ¿Iba o no iba? Ante tal vacío, el CUD decidió tomar las riendas del asunto y convocar al acto sí o sí. En menos de 24 horas, Jorge Lavandero solicitó un nuevo permiso y negoció con la intendencia realizarlo en Alameda con General Velásquez hacia el Sur. Resultó ser la más grande concentración realizada desde el inicio de la dictadura.





■ *General Velásquez con la Alameda. 11 de octubre de 1983 (ADVS).*

A las seis de la tarde del día 11 de octubre, entre banderas y pancartas con las más diversas consignas, colores y símbolos, se reunieron ochenta mil personas. Los conductores fueron la actriz Shlomit Baytelman y Gregory Cohen, quienes presentaron a músicos, poetas y a los oradores Fabiola Letelier, del Comité de Derechos del Pueblo (Codepu), y Jorge Lavandero, que aprovechó la instancia para llamar a fortalecer la unidad de las fuerzas políticas y sociales de oposición. El cierre fue menos alegre: ante la decisión de un grupo que quiso marchar hacia la Estación Central, carabineros cercaron a cientos de personas que se retiraban, bombardearon con lacrimógenas, golpearon a diestra y siniestra, y detuvieron a unos cuantos. Los pocos que consiguieron llegar hasta su objetivo armaron barricadas y se enfrentaron durante un buen rato con los carabineros.

Comparadas con las protestas de agosto y septiembre, la Sexta y la Séptima Jornada Nacional de Protesta –ambas realizadas durante el mes de octubre– bajaron de intensidad, fueron menos masivas y en los sectores medios prácticamente nulas. En el caso de la sexta, puede que haya incidido el que la AD no convocara a sus bases para promoverla; o que –tal como acusó el MDP– hayan influido las promesas y expectativas abiertas con el proceso de diálogo. Ello explicaría, quizás, la poca participación de la clase media, pero es necesario considerar lo que nadie pareció suponer en aquellos tiempos de protesta permanente: que en los barrios populares ya debía existir algún grado de agotamiento, tanto por lo extenso de las jornadas anteriores (que habían tenido réplica mensual y se habían extendido en días, coronando con la protesta de septiembre), como por un temor real ante las represiones registradas anteriormente.

Pero hubo una sexta. Por la noche, los cortes de calle con barricadas, cruce de árboles y enfrentamientos de pobladores con carabineros fueron fuertes en el sector de Américo Vespucio, entre las rotondas Grecia y Quilín, hasta Tobalaba. En otros lugares hubo principalmente marchas pacíficas al interior de las poblaciones, como en la José María Caro. En la población Santa Corina de Pudahuel, donde había caído muerto el joven obrero del POJH en septiembre pasado por funcionarios municipales, se repitió el trágico final. Mientras cientos participaban en la complicidad del barrio, se acercó un auto con civiles a bordo

que dispararon contra los pobladores. Una niña de 14 años, llamada Jessica Hinojosa, fue herida en un brazo; a Silvia Orellana el disparo le llegó en la cabeza mientras protestaba junto a su esposo; murió tres días después. Tenía 23 años de edad y dos hijos.

¿Cuál era el propósito de esas balas disparadas al azar por civiles desde automóviles sin placas y que recorrían distintos puntos de la periferia durante las protestas? Definitivamente, su objetivo no era matar a todo el que estuviese en la calle, no se trataba de una masacre, sino de sembrar el temor a través de lo aleatorio de la muerte. Torturaban a un sujeto comunitario. Se trataba de intimidar, de imponer un miedo que cambiase las condiciones subjetivas de confrontación. Esa bala podía tocarle a cualquiera y ese cualquiera significaba todos y todas. Así lo comprobaban las vecinas jornada tras jornada, así se corría la voz, “ya se sabía” que podía ser en una marcha pacífica, desde la puerta de una casa o al levantar una piedra.

El día 12 de octubre se encendió el fuego en esquinas ya emblemáticas de confrontación, especialmente en las zonas sur y norte de la capital. Quienes se congregaron en esas fogatas fueron violentamente dispersados y detenidos. La mayoría eran obreros del POJH, de entre 20 y 23 años. Hubo tres muertos en Santiago. Dos de ellos cayeron en la esquina de la calle John Kennedy con Vicuña Mackenna, en la Población La Alborada de La Florida, donde se había juntado un buen número de jóvenes a protestar. Esta vez se trató de un furgón de Carabineros que en sus pisaderas transportaba a tres funcionarios con metralleta en mano. Las ráfagas alcanzaron a Pedro Germán Zamora de 17 años y a René Enrique Pavez de 18. Entre los que pudieron huir hubo tres heridos a bala que interpusieron una denuncia; otros indeterminados, según Salvador Sierra –testigo y herido– no declararon por temor a las represalias. Esa noche también mataron a Raúl Fernando Gálvez cuando marchaba con sus amigos hacia el centro de Puente Alto. Tenía 22 años y vivía en la población Pedro Aguirre Cerda. El testimonio es de su hermano:

Aquí se estaba realizando una protesta; se habían levantado barricadas y encendido neumáticos. Fue entonces cuando llegaron seis furgones de Carabineros y un microbús del cual descendieron los policías disparando con metralletas. Previo a eso lanzaron bengalas, y con esa luz ubicaron a los grupos y les dispararon para luego retirarse. Con ellos incluso había personas de civil, con

escopetas y hondas<sup>128</sup>.

En el centro de Santiago, desconocidos le dispararon a un joven cabo de carabineros que hacía guardia frente a un edificio; murió días después. Era el segundo uniformado muerto en una protesta. La Sexta Jornada Nacional de Protesta terminaba con siete muertos, cinco de ellos en Santiago y dos en la Octava Región, más una treintena de heridos.

La táctica del gobierno fue seguir apostando a dividir la oposición. Jarpa argumentó que las banderas vistas en el acto del 11 de octubre eran prueba de la alianza DC con comunistas y les reiteró el llamado a “definirse”. Aunque la AD, molesta, también reiteró que no tenía nada que ocultar, porque sencillamente los comunistas no estaban en sus filas, ni lo estarían, intentó blindarse y resolver esa incomodidad. Por aquellos días circuló un documento, suscrito por la Directiva Nacional de la DC, que prohibía a sus militantes la participación en otros organismos políticos distintos a la AD; en definitiva, se les pedía que dejaran sus cargos en entidades como el Codeju, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la CNS, el CUD y Proden para fortalecer a la Alianza. Que la DC quisiera abandonar su lugar en otras instancias orgánicas, donde podía influir y convocar, parecía un ofuscado acto de reprimenda dirigida en contra del protagonismo que Jorge Lavandero había adquirido. El dirigente tenía no solo protagonismo en la prensa y en las bases, sino que había apoyado desde el Proden la pasada convocatoria –a la que la AD se había restado– y defendía abiertamente los encuentros con sectores marxistas en aras de la unidad opositora<sup>129</sup>.

Otro dirigente democratacristiano que desde el sindicalismo desafiaba los designios de la mesa directiva de su partido, con perfil claramente de izquierda y reconocido por apoyar e impulsar, desde los primeros años de la dictadura, alianzas con otros sectores era Manuel Bustos, quien por aquellos días regresaba a Chile luego de diez meses de exilio. A Bustos, como dirigente sindical, se le quería y respetaba. Por eso el sábado 1 de octubre más de tres mil trabajadores le brindaron una alegre bienvenida frente a la sede de la CNS, cuestión impensable a fines de 1982, cuando fue castigado con el destierro. El sindicalista estaba sorprendido. Tanto su regreso como el masivo festejo que le recibía demostraban el terreno ganado en esos meses de protesta callejera.

Para Manuel Bustos el exilio había sido demasiado duro; ni siquiera en las siete veces que lo llevaron preso por protestar en dictadura se había sentido tan humillado. Lo de él era la asamblea y sus acalorados debates, la fábrica y la organización, lo de él era la calle. Y a pocas horas de bajar del avión, en plena calle, Bustos se dirigió a los trabajadores congregados: “Si se dialoga tiene que ser para saber cuándo se va de La Moneda el general Pinochet, pero no tiene sentido un diálogo si va a terminar en 1989”, y enfatizó: “En la medida que no veamos las cosas claras, lo único que nos queda es seguir luchando en la calle, es seguir protestando, es seguir exigiendo libertad y trabajo para los chilenos”<sup>130</sup>. Sin duda, el reconocido dirigente vino a nutrir políticamente las filas del sindicalismo, las que no habían logrado levantar cabeza y adquirir protagonismo tras el impacto de la Segunda Jornada y el paro del cobre. Con ese objetivo en mente, durante la Sexta Jornada Nacional de Protesta Manuel Bustos participó en diversas asambleas, se reunió con bases y dirigentes locales. No solo de trabajadores, porque desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile convocó, a nombre del CNT, a una concentración de trabajadores y estudiantes para el día 27 de octubre. Era el primer anuncio público de un llamado que desembocaría en la Séptima Jornada Nacional de Protesta.

Si los trabajadores suponían que no habría ningún inconveniente en ser autorizados para realizar tal manifestación, se equivocaban. El viernes 21 de octubre, el general Guillard les denegó el permiso “por los graves atentados a la propiedad privada que se produjeron en las dos concentraciones anteriores”. Al ser consultado por los periodistas sobre otras posibilidades para realizarlo, el funcionario se ahorró la diplomacia: “Por la forma en que se comportan... más bien correspondería un potrero con alambres de púas”<sup>131</sup>.

El CNT, sin decaer y retomando la operatividad que había demostrado Jorge Lavandero en la experiencia previa, insistió y propuso como alternativas realizarlo en avenida Grecia, avenida España o en Blanco Encalada. Tampoco. Denegada. El intendente les prohibía la calle y les proponía nuevamente el Parque O’Higgins. Esta vez era Rodolfo Seguel quien salía indignado de las oficinas de la intendencia: “Vamos a proponer al Comando Nacional de Trabajadores transformar la concentración en una gran protesta nacional, y le vamos a pedir a todo el pueblo que adhiera”. Los sindicalistas no estaban dispuestos a aceptar el Parque, menos aún después de las declaraciones del intendente: “Creemos que nos querían llevar para allá porque está encerrado y faltarían solamente los alambres de púas”<sup>132</sup>. Así se gestó la convocatoria a la Séptima Jornada Nacional de Protesta, la segunda realizada en el mes de octubre

y la última de un agitado año.

El intendente amenazó con aplicar las garantías represivas del estado de sitio si era necesario. Simultáneamente, Augusto Pinochet informó el envío a la Junta Militar de un proyecto para modificar la Ley de Seguridad del Estado (N° 12.927). Dicho cuerpo legal, conocido como Ley antiprotesta (Ley N° 18.256) sancionaba con cárcel, relegación y extrañamiento a quienes “sin autorización fomenten o convoquen a actos públicos colectivos en calles, plazas y demás lugares de uso público y a los que promuevan o inciten a manifestaciones de cualquier otra especie que permitan o faciliten la alteración de la tranquilidad pública”<sup>133</sup>. El espectro podía ser tan amplio que en la penalización de la sociabilidad cabía desde un acto artístico hasta un partido de fútbol, y se convirtió en la principal arma para legalizar la represión al movimiento de protesta.

No obstante, la Séptima Jornada se haría de igual forma. El CNT, la CNS, la UDT y el FUT hicieron formalmente el llamado “contra el modelo económico, el sistema político y la legislación laboral... y como repudio a la encerrona del Parque O’Higgins”, y encontraron adhesión inmediata en la AD, el MDP y otras organizaciones sociales<sup>134</sup>. Ya conocemos los instructivos anteriores para la protesta y este era muy similar. Lo nuevo que los trabajadores incorporaron fueron dos minutos de silencio y puntual detención de faenas o cualquier actividad que se estuviese realizando justo al mediodía. Además, el petitorio que no pudieron leer en el acto sería entregado en La Moneda.

El día 27, antes del mediodía, desfilaron desde la sede de la CTC decenas de dirigentes sindicales. En su paso por calle Huérfanos, Ahumada y Moneda, entre aplausos y bocinazos de transeúntes y comerciantes, se les unieron grupos de jóvenes que venían coreando consignas y haciendo la “V” de la victoria. A las 12 se detuvieron en silencio y luego continuaron su trayecto. Entregada la carta en La Moneda, los dirigentes retomaron el camino, sabiendo que solo había sido un acto simbólico del que poco o nada se podía esperar. Uno de los dirigentes dijo no tener razón para ser optimista: “Creo que este debe ser el documento número cinco mil que se entrega al gobierno y nunca hemos tenido la gentileza de una respuesta”. Al retorno, cerca de la esquina de Mac Iver con Huérfanos, un piquete de carabineros salió violentamente al encuentro de la comitiva. Del apaleo, puños y patadas no se salvó ni Rodolfo Seguel, quien terminó con contusiones, al igual que los dirigentes de la CNS Manuel Bustos y Arturo Valdés.

La protesta de la tarde, como ya comenzaba a ser costumbre, se trasladó hacia avenida Grecia con Macul, en la Academia de Ciencias Pedagógicas. Convocados por el Comando Juvenil por la Democracia, se reunieron en sus jardines alrededor de dos mil quinientos alumnos de distintas universidades. Al parecer, el flujo de jóvenes alteró a la policía de fuerzas especiales que vigilaban el lugar y el acto programado no alcanzó a concretarse. Según explicó más tarde Juan Claudio Reyes, secretario ejecutivo del comando, ni siquiera alcanzó a pronunciar el discurso que tenía pensado cuando fueron atacados por una lluvia de lacrimógenas. Un bloque de quinientos estudiantes dispuestos a combatir con piedras, hondas y molotov salieron a la calle. Con la agilidad que otorga la realización de una acción recurrente, los estudiantes colocaron barricadas y cortaron el tránsito; en cuestión de minutos, el comercio cercano –que ya sabía lo que vendría– bajó sus cortinas. En las casi cinco horas de confrontación, los carabineros dispararon balas y balines que dejaron decenas de estudiantes heridos.

La disminución del caceroleo y de los bocinazos nocturnos algunos la adjudicaron a la confusión suscitada por el cambio de hora, ya que se decidió hacerlos a las 9 p. m. en vez de a las 8, como ya era costumbre. En contraste, hubo más presencia de sectores militantes, manifiesta en calles sembradas de miguelitos y abundantes cortes de luz debidos a los cadenazos. También barricadas y cordones de fuego en algunos puntos más conflictivos. Entre las represalias se reportaron denuncias contra piquetes de carabineros, que en el modus de todos contra uno se ensañaban especialmente con jóvenes que capturaban al azar entre los manifestantes y que terminaron con pérdida de conocimiento, desnudados o heridos por perdigones.

En la jornada hubo 30 heridos –16 de ellos a bala– y 119 detenidos. En cuanto a posibles cargos justificados por la nueva ley antiprotesta, se aclaró que no era retroactiva y que “por esta vez” no habría sanciones en virtud de ella. Todos coincidieron en que la jornada fue menos violenta. Por primera vez no hubo muertos que lamentar; y aunque se hicieron cientos de barricadas, disminuyeron notoriamente los saqueos y el destrozo del inmobiliario. El gobierno utilizó la asociación de menos violencia con menos fuerza de la protesta, por lo que arguyó que el movimiento había sido un rotundo fracaso.

Al día siguiente, la AD anunció la novedosa decisión de aceptar el desafío a manifestarse en el Parque O’Higgins. El acto sería el 18 de noviembre. El MDP adhirió de inmediato, al igual que el resto de colectivos y organizaciones

sociales. Sería un nuevo acto conjunto, esta vez liderado por una AD que debía volver a disputar su espacio hegemónico dentro del movimiento social. La convocatoria fue exitosa. Más de 500 mil personas llegaron al parque a pesar que hacia el mediodía el intendente Guillard advirtió sobre el supuesto hallazgo de un artefacto explosivo en el escenario y que en las municipalidades postergasen el pago del PEM hasta última hora para que los trabajadores no pudiesen asistir. A la salida, las Fuerzas Especiales de Carabineros estaban preparadas para reprimir. Hubo cincuenta detenidos, veinte heridos y un joven de 18 años cayó muerto en Avenida Matta. Era Ricardo Mancilla, estudiante de cuarto medio del Liceo N° 7 de Ñuñoa. Su nombre sería bandera de lucha para el movimiento secundario que comenzaba a reorganizarse.

La tónica del acto fue mancomunarse. El presidente de la AD, Enrique Silva Cimma, se concentró en reivindicar los puntos que exigía el grueso opositor; además, se hizo parte de las voces que a pocos días de la inmolación y muerte de Sebastián Acevedo –padre que exigió que liberasen de la cárcel y tortura a sus hijos– se alzaban contra la tortura y la CNI. También la AD se plegó a la resistencia contra el nuevo Código Minero, a punto de entrar en vigencia; se manifestó por resolver el problema del exilio y, sobre todo, se hizo eco del llamado a la unidad de la oposición como camino para recuperar la democracia. La concentración cerraba con aires triunfantes el año opositor. ¿Cuáles serían los límites de la propuesta unitaria? ¿Era solo un enunciado para relegitimarse tras el fallido proceso de diálogo y conducir la movilización social? Son preguntas que solo podremos intentar responder en el trascurso de 1984.

Menos de un mes más tarde nació –al menos públicamente– un referente que polarizó aún más los proyectos opositores. La noche del 14 de diciembre, mientras había manifestaciones en Pudahuel, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista, irrumpió oficialmente en el escenario político. Su capacidad operativa y la profesionalización militar de sus cuadros fue comprobada con el corte de energía eléctrica que desde las 22:30 horas dejó en penumbras a la mayor parte de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y parcialmente a algunas zonas ubicadas entre Copiapó y Temuco. Los frentistas anunciaron que nacían para “apoyar las luchas del pueblo” y desde entonces sus acciones de sabotaje estuvieron presentes en las jornadas.

El año terminaba con siete jornadas nacionales de protesta. Solo en ellas se contabilizaban sesenta y cinco muertos, trescientos heridos por proyectiles, más de diez mil setecientos detenidos y cuatro carabineros muertos<sup>135</sup>. Además,

ciento veinticinco personas fueron relegadas, acusadas de instigar a la violencia, hacer activismo político y participar en tomas de terrenos. El mayor porcentaje de los agraviados correspondía a obreros con trabajo o sin él. La siguiente jornada de protesta se realizó el 27 de marzo de 1984. Asistiremos a continuación al clímax de un ciclo de rebelión que concluirá con la imposición del estado de sitio y una “nueva pacificación” de Chile.

■

<sup>1</sup> Declaración Pública. Confederación de Trabajadores del Cobre. Abril o mayo 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>2</sup> Análisis, N° 54, febrero de 1983.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> “La dignidad no se transa”. Análisis, N° 55, marzo de 1983, p. 43.

<sup>5</sup> “Emilio Torres: De lo malo sale lo bueno”. Solidaridad, segunda quincena de diciembre de 1982, p. 8.

<sup>6</sup> “Colbún, tarea de todos”. Análisis, N° 55, marzo de 1983, p. 45.

<sup>7</sup> Stillerman, Joel. “Continuidades, rupturas y coyunturas en la transformación de los obreros de Madeco S. A., 1973-2003”. En línea: <http://www.proyectoaraucaria.cl/documentos/2010091510464707-stillerman.pdf>.

<sup>8</sup> Páginas Sindicales, año 6, N° 54, informaciones hasta el 23 de marzo de 1983, p. 7.

<sup>9</sup> Ibid., p. 8.

<sup>10</sup> Se trataba de Brendan Forde Gleason, franciscano de nacionalidad irlandesa, que residía en Chile desde 1972, Desmond Mc Guillicudy, también irlandés, de la Congregación de la Sociedad San José de Mil Nill, residente desde 1975, y Brian John Mc Mahon Kelly, australiano de la Congregación de los padres San Columbano, residente desde 1978.

<sup>11</sup> Análisis, N° 56, abril 1983.



<sup>12</sup> Ibid., p. 18.

<sup>13</sup> Ibid., p. 21.

<sup>14</sup> Ibid., p. 26.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> En: Análisis, N° 56, abril 1983, p. 7; “Acción fue de tipo subversivo”. El Mercurio, 26 de marzo de 1983.

<sup>17</sup> “Incidentes anoche en calles del centro”. El Mercurio, 25 de marzo de 1983.

<sup>18</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., p. 96.

<sup>19</sup> Páginas Sindicales, año 6, N° 55, informaciones hasta 15 de mayo de 1983, p. 5.

<sup>20</sup> Análisis, N° 58, junio de 1983.

<sup>21</sup> Ver: De la Maza, Gonzalo y Mario Garcés. La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984. ECO, Santiago, 1985; “La historia oculta de una Protesta”. El Mercurio, 15 de mayo de 1983.

<sup>22</sup> “Sesenta detenidos en desórdenes céntricos”. El Mercurio, 2 de mayo de 1983.

<sup>23</sup> Páginas Sindicales, año 6, N° 55, informaciones hasta el 15 de mayo, 1983, p. 2.

<sup>24</sup> Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, mayo 1983, p. 14. A raíz de esta censura, hubo una manifestación de periodistas “amordazados” en el Paseo Ahumada de Santiago.

<sup>25</sup> Declaración Pública CTC. Mayo 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>26</sup> Declaración Pública. CTC. Abril o mayo 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>27</sup> Instructivo N° 2. CTC. 5 de mayo. 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>28</sup> Efectivamente, el presidente de la CTC, Rodolfo Seguel, denunció el corte de sus líneas telefónicas desde el 10 de mayo a las cinco de la tarde, cuestión que se solucionó sencillamente trasladando la dirigencia a un hotel.

<sup>29</sup> El Mercurio, 12 de mayo de 1983. Anteriormente el gobierno había sostenido una reunión con las más altas autoridades de la CNI, Carabineros, Investigaciones y la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia, para analizar medidas ante posibles escenarios. Declaraciones del ministro del Interior, Enrique Montero Marx. La Segunda, 6 de mayo. En: Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, mayo de 1983, p. 13.

<sup>30</sup> El Mercurio, 12 de mayo de 1983.

<sup>31</sup> “Montero: A la Justicia instigadores de protesta”. El Mercurio, 13 de mayo de 1983.

<sup>32</sup> Víctor Rodríguez Celis, estudiante de 15 años, fue baleado en las cercanías de su domicilio en la rotonda Lo Plaza, de Ñuñoa, y Andrés Fuentes Sepúlveda, taxista de 21 años, fue herido y muerto en la población La Victoria de San Miguel.

<sup>33</sup> El Mercurio, 14 de mayo de 1983.

<sup>34</sup> Acontecimientos en población Joao Goulart el sábado 14 de mayo de 1983. Vicaría zona sur. Santiago, 16 de mayo de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>35</sup> Ibid., p. 17.

<sup>36</sup> Decreto Supremo N° 617 del Ministerio del Interior, con fecha 24 de mayo de 1983.

<sup>37</sup> “Llamado de Atención”, El Mercurio, 13 de mayo de 1983. Al día siguiente, el editorial de La Tercera se expresaba en los mismos términos: “Es hora del diálogo y el entendimiento. El endurecimiento solo servirá al extremismo y hará imposible la unidad nacional, única opción para sortear los difíciles momentos que se viven”. La Tercera, 14 de mayo de 1983.

<sup>38</sup> El Mercurio, 14 de mayo de 1983.

<sup>39</sup> Aunque operó desde esta fecha, el Comando Nacional de Trabajadores formalizó su constitución el 1 de junio de 1983. Entre los trece puntos de la “plataforma básica”, el CNT planteó “el término de los estados de excepción en el país; la democratización de las universidades; la derogación del artículo 24 de la Constitución Política de 1980; transparencia en la tramitación de leyes; derogación de todo tipo de censura a los medios de comunicación; elaboración de un plan de emergencia; restauración de la legislación laboral y seguridad social; y devolución de personerías jurídicas y los bienes de organizaciones sindicales disueltas por decreto”. El Mercurio, 2 y 4 junio de 1983. Ver: Araya Gómez, Rodrigo. “Cambios y continuidades en el movimiento sindical chileno en los años 80: El caso del Comando Nacional de Trabajadores”. Historia N° 47, vol. I, 2014, Santiago, pp. 11-37 y Organizaciones sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los consensos: 1983-1994. Ediciones Universidad Finis Terrae, 2015.

<sup>40</sup> Anexo a la memoria. “1981-1983, dos años más de frustración sindical”. 2° Congreso Nacional Ordinario de CEPCH. Camping de Reñaca, 8 al 11 de diciembre de 1983”, diciembre 1983. Archivo personal don Luis Fuentealba.

<sup>41</sup> El Mercurio, 26 de mayo de 1983.

<sup>42</sup> El Mercurio, 28 de mayo de 1983.

<sup>43</sup> Instructivo para la Segunda Jornada Nacional de Protesta, martes 14 de junio. Santiago, 6 de junio de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>44</sup> Páginas Sindicales, N° 56. N° Especial, junio 1983; El Mercurio, 15 de junio de 1983.

<sup>45</sup> El Mercurio, 15 de junio de 1983.

<sup>46</sup> Información acerca de la protesta día 14 de junio zona norte. 15 de junio de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>47</sup> Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, junio de 1983, pp. 16-21.

<sup>48</sup> “Inflexible aplicación del receso político”. El Mercurio, 19 de junio de 1983.

<sup>49</sup> El Mercurio, 17 de junio de 1983.

<sup>50</sup> Entre los exiliados, autorizado regreso del exsenador y exministro de Hacienda del gobierno de Frei, Andrés Zaldívar, ex senador Rafael Agustín Gumucio, ex decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile Eugenio Velasco, ex ministro del Interior de Salvador Allende, Carlos Briones, Claudio Huepe, y la viuda de Orlando Letelier, Isabel Margarita Morel.

<sup>51</sup> En El Salvador fueron despedidos 400 trabajadores y 17 dirigentes sindicales; en El Teniente, 170 trabajadores y 10 dirigentes; en Andina, 127 trabajadores y 8 dirigentes.

<sup>52</sup> Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Op. cit., pp. 83-185.

<sup>53</sup> Solidaridad, N° 158, segunda quincena de junio de 1983, p. 15.

<sup>54</sup> Solidaridad, N° 159, primera quincena de julio de 1983, p. 16.

<sup>55</sup> Entre ellos estaban Sergio Troncoso, presidente de la Confederación de la Construcción, Carlos Opazo, presidente de la Confederación Campesina “El Surco” y José Oróstica, dirigente de “El Surco”, quienes habían sido previamente detenidos y desaparecidos durante cinco días. También fueron relegados Manuel Caro, Segundo Cancino, Héctor Solís, Sergio Villalobos y Lucía Morales, todos dirigentes afiliados a la CNS.

<sup>56</sup> Declaración Pública. Comando Nacional de Trabajadores, 7 de julio de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>57</sup> Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, julio de 1983, p. 9.

<sup>58</sup> El Proden fue una coalición de personalidades políticas que decidieron actuar pública y jurídicamente como “sociedad anónima cerrada”. Su objetivo fue servir de sustento para el desarrollo del movimiento social contra la dictadura.

<sup>59</sup> Los “caceroleos” alcanzaron especial relevancia en las comunas de Ñuñoa, La Reina, Providencia, San Miguel, La Florida, Pudahuel y Las Condes, en tanto la instalación de barricadas con neumáticos encendidos, piedras y árboles fue observada en diversas calles de Ñuñoa, San Miguel, La Granja, Conchalí, La Cisterna y Pudahuel, entre otras comunas. “Calles desiertas desde las 20 horas”. El Mercurio, 14 de julio de 1983.

<sup>60</sup> Informe Interno sobre la tercera protesta nacional. Archivo Documental

Vicaría de la Solidaridad.

<sup>61</sup> Entre los sectores más afectados: Los Nogales, la Villa Cervantes (San Miguel), La Victoria, Villa Sur, José María Caro. Denuncia judicial. Julio 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>62</sup> Pérez Silva, Claudio. “La Política de Rebelión Popular de Masas y el Movimiento Democrático Popular (MDP): Una mirada a la política de alianzas del Partido Comunista de Chile bajo Pinochet, 1980-1988”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, N° 17, octubre-diciembre, 2013.

<sup>63</sup> El Mercurio, 9 de agosto de 1983.

<sup>64</sup> Las Últimas Noticias, 11 de agosto de 1983.

<sup>65</sup> La Nación, 12 de agosto 1983. Con mayúsculas en el original.

<sup>66</sup> El Mercurio. 12 de agosto de 1983.

<sup>67</sup> Primer Informe sobre la Cuarta Jornada Nacional de Protesta. Realizado por el equipo de Solidaridad. Documento interno. Agosto 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>68</sup> Relato de los sucesos de los días de protesta nacional. Sector La Legua. Informe padre Guido Peters. Agosto 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>69</sup> Denuncia de la población Chacabuco. Tratos inhumanos, crueles y degradantes. Cuarta Jornada Nacional de Protesta. 11 de agosto de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>70</sup> “Cuarta Protesta Nacional”. Decanato José María Caro. Agosto 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>71</sup> Análisis, N° 63, 30 agosto / 13 de septiembre de 1983, pp. 19-2; Solidaridad, N° 161, primera quincena de agosto de 1983, p. 20.

<sup>72</sup> Repercusiones médico-psicológicas de la represión policial. Documento preparado por los profesionales de la salud que trabajan en instituciones de derechos humanos. Santiago, 15 de agosto de 1983. Archivo Documental Vicaría

de la Solidaridad.

<sup>73</sup> Reacción ante ciertos hechos sucedidos en algunos sectores del decanato Santa Rosa durante los días 11 y 12 de agosto 83 –Protesta Nacional–. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>74</sup> Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Op. cit., pp. 82-83.

<sup>75</sup> La Tercera, 13 de agosto.

<sup>76</sup> El Mercurio, 13 de agosto de 1983.

<sup>77</sup> Declaración Pública. Comisión Poblacional San Gregorio. La Granja, 14 de agosto de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>78</sup> Entrevista con Manuel Loyola, 24 de septiembre de 2010.

<sup>79</sup> Estas dos últimas comunas registran la mayor parte de casos denunciados por represión, acompañadas por Conchalí y La Cisterna. Informe 4ª Protesta Nacional. Agosto de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>80</sup> El Mercurio, 20 de agosto de 1983.

<sup>81</sup> “Debe cesar la violencia, venga de donde venga”. El Mercurio, 13 de agosto de 1983.

<sup>82</sup> “Indagan causas de 21 muertes”. El Mercurio, 18 de agosto de 1983.

<sup>83</sup> Se prometió un plan contra la cesantía y la creación de 80 mil fuentes de trabajo; la construcción de seis mil casas para sectores de escasos recursos, nuevos proyectos de obras públicas y un amplio plan de inversiones en los rubros mineros y agrícolas.

<sup>84</sup> “Prioridad es combatir la extrema necesidad”. El Mercurio 15 de agosto de 1983.

<sup>85</sup> El permiso fue otorgado al Proden (Proyecto Democrático Nacional) para realizar un acto público en el Parque O’Higgins el 4 de septiembre. Sin embargo, por disputas entre la Democracia Cristiana y los miembros del Proden pertenecientes al mismo partido, no se realizó. El gobierno se manifestó bastante

conforme con tal decisión.

<sup>86</sup> Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; Sepúlveda, Óscar. La historia oculta del régimen militar. Ediciones La Época, Santiago, 1988, p. 352.

<sup>87</sup> De la convocatoria como CNT se restó la UDT, interesada en abrir un proceso de diálogo con Onofre Jarpa.

<sup>88</sup> “Alianza Democrática llamó a ‘Protesta’”. El Mercurio, 26 agosto de 1983.

<sup>89</sup> Al día siguiente, el gobierno hizo otro “gesto” anunciando que no renovaría el estado de emergencia. La no renovación de la medida significaba en teoría la abolición de las restricciones a la libertad de información y el término de las limitaciones al desplazamiento nocturno en vehículos motorizados. No obstante, se mantenía vigente el “Estado de Peligro de Perturbación de la Paz Interior”, que posibilitaba aplicar los estados de excepción contemplados en el Art. 24 transitorio.

<sup>90</sup> Las palabras son de Alfonso Márquez de la Plata. “Terminó restricción nocturna en el país”. El Mercurio, 29 de agosto de 1983.

<sup>91</sup> Ver: Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; Sepúlveda, Óscar. Op. cit. La venganza fue encomendada y ejecutada por la CNI el 7 de septiembre: cinco miristas murieron en supuestos “enfrentamientos” en las calles Fuenteovejuna y Janequeo. Se trataba de Arturo Villabela, Sergio Peña, Lucía Vergara, Hugo Ratier y Alejandro Salgado.

<sup>92</sup> “El país no debe estar sometido a medidas extremas”. El Mercurio, 3 de septiembre de 1983.

<sup>93</sup> “Incidentes en La Legua”. El Mercurio, 3 de septiembre de 1983, y “35 detenidos por disturbios en el Area Sur”. El Mercurio 5 de septiembre de 1983.

<sup>94</sup> Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; Sepúlveda, Óscar. Op. cit., p. 355.

<sup>95</sup> “Diálogo no puede seguir sin respuestas concretas”. El Mercurio, 8 de septiembre de 1983.

<sup>96</sup> “Vamos a seguir adelante”. El Mercurio, 18 de septiembre de 1983.

<sup>97</sup> Entre ellos venían Gabriel Valdés, Patricio Aylwin, Luis Pareto, Jorge Lavandero, Jaime Hales, Ignacio Balbontín, también Rodolfo Seguel y el encargado de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, entre otros dirigentes y militantes.

<sup>98</sup> “Balance de la quinta protesta: dos muertos y decenas de heridos”. El Mercurio 9 de septiembre de 1983.

<sup>99</sup> “Somos fuertes y organizados”. El Mercurio, 9 de septiembre de 1983.

<sup>100</sup> “Balance de la quinta protesta:”. Op. cit.

<sup>101</sup> “Gobierno no teme a bandas de malhechores”. El Mercurio. 11 de septiembre de 1983.

<sup>102</sup> También se encendieron fogatas en la población Santa Julia, en las esquinas de Ramón Cruz, Rodrigo de Araya y 3 Antonios, en Grecia con Macul, etc. La tónica fue observar hogueras en la mayor parte de las esquinas poblacionales, “lo cual demuestra la coordinación de estos hechos”, concluía la prensa oficialista. Ibid.

<sup>103</sup> “Somos fuertes y organizados”. Op. cit.

<sup>104</sup> “Familiares cuentan cómo murieron víctimas de Protesta”. El Mercurio 10 de septiembre de 1983.

<sup>105</sup> A la opinión pública. Declaración del comité de derechos humanos de la Población La Victoria. Santiago, Septiembre de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>106</sup> La Tercera, 10 de septiembre de 1983.

<sup>107</sup> “Masivo respaldo al presidente”. El Mercurio, 10 de septiembre de 1983.

<sup>108</sup> Informe Mensual, Vicaría de la Solidaridad. Septiembre de 1983 y “A la opinión pública. Declaración del Comité de Derechos Humanos de la Población La Victoria”, septiembre de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>109</sup> “Mensaje del Presidente”. El Mercurio, 12 de septiembre de 1983.



<sup>110</sup> Pobladores Santa Adriana, Testimonio. Parroquia de Santa Adriana, 13 de septiembre de 1983. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>111</sup> Ver: Análisis, N° 65, 27 sept / 11 oct. de 1983, pp. 21-22.

<sup>112</sup> “Nueva Jornada de vandalismo en poblaciones”. El Mercurio, 12 de septiembre de 1983.

<sup>113</sup> También insistían con barricadas en Callejón Lo Ovalle, Las Industrias, Recoleta hasta Américo Vespucio, 5 de abril, Gran Avenida, General Velásquez, en las esquinas de Las Rejas con General Bonilla y la Alameda. En fin, también a la altura del 6.000 de Recoleta y del 5.600 de José Miguel Infante. En la Villa Portales y la Villa Olímpica alimentaron el fuego hasta la madrugada del día siguiente.

<sup>114</sup> En un comienzo se supo de diez muertos, sin embargo, en Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, correspondiente al mes de octubre, se reporta también el asesinato de Sergio Alegría Arriagada, de 24 años de edad. Su cadáver fue encontrado el 15 de septiembre.

<sup>115</sup> “30 jóvenes de la IC fuera de tribunales”. El Mercurio, 28 septiembre de 1983.

<sup>116</sup> Análisis, N° 64, 13 al 27 de septiembre de 1983.

<sup>117</sup> En palabras de Guillermo del Valle, dirigente del MAPU: “Chile será ingobernable mientras no haya democracia. La desobediencia masiva y la lucha contra las injusticias y la miseria continuarán hasta alcanzar la plena e incondicional libertad política y social”. “Personeros del MAPU: Posición de la Alianza es hoy más realista”. El Mercurio, 11 de septiembre de 1983.

<sup>118</sup> “Convocan a movimiento de izquierda”. El Mercurio, 21 de septiembre de 1983.

<sup>119</sup> Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; Sepúlveda, Óscar. Op. cit., pp. 356-357.

<sup>120</sup> Los puntos presentados por la AD fueron: 1. Convocar a un plebiscito durante el año 1984 para aprobar la creación de una Asamblea Constituyente. 2. Creación de una comisión paritaria para estudiar y promulgar leyes políticas en 120 días. (Entre ellas: elaboración de las leyes de partidos políticos, general de

elecciones, registro electoral y tribunal calificador). Y que el Gobierno se comprometiera a promulgar las leyes aprobadas por dicha comisión en un plazo de 30 días. 3. Cambios profundos en asuntos jurídicos, políticos, institucionales, económicos y sociales para el restablecimiento de una democracia plena. 4. Plan económico de emergencia. 5. Acceso igualitario a los medios de comunicación; terminar con “campaña injuriosa” a la oposición; creación de una comisión que investigue la violencia de las últimas protestas y derogación de art. 24 transitorio.

<sup>121</sup> Solidaridad, N° 165, primera quincena de octubre, 1983, p. 4.

<sup>122</sup> “Jarpa exige definición de Alianza ante comunismo”. El Mercurio, 7 de octubre de 1983.

<sup>123</sup> Presidido, al igual que el Proden, por Jorge Lavandero; reunía a 25 organizaciones de base, gremiales y sindicales, como el Codepu, Mudechi, Coapo, UNED - Detenidos Desaparecidos.

<sup>124</sup> Los cuatro puntos de partida serían: plaza Artesanos, plaza Italia, Blanco con Beauchef y General Velásquez con la Alameda. “Llaman a Concentración”. El Mercurio, 1 de octubre de 1983.

<sup>125</sup> La fracción socialista de la AD declaró a través de Hernán Vodanovic que su postura para participar de la protesta fue de disenso dentro del conglomerado, y que harían valer su autonomía individual y partidaria para apoyar la protesta. Ver: “Alianza considera rotos contactos con el gobierno”. El Mercurio, 11 de octubre de 1983.

<sup>126</sup> Tiempo antes, la campaña mediática había sido comandada por diversos editoriales. Por ejemplo, El Mercurio, en la columna del 19 de septiembre de 1983, llamada “Política y Violencia”, señalaba que como garantía del diálogo, la AD se definiese –y distinguiese– sobre el marxismo.

<sup>127</sup> Para colmo, el mismo día fue denegada la solicitud presentada por el Proden y otros dirigentes políticos y gremiales, para designar un ministro en visita por los muertos en las protestas; el pleno de la Corte Suprema resolvió que bastaba con las investigaciones que se seguían en 18 juzgados y en la Fiscalía Militar.

<sup>128</sup> La Tercera 15 de octubre. Ver además: Info. Mensual, Vicaría de la Solidaridad, octubre de 1983 y “Compartir”, N° 50, Boletín zona oriente,

Arzobispado de Santiago, 21 de octubre de 1983. El fuego de las barricadas cortó avenida Grecia desde Macul hasta Lo Encalada. Lo mismo ocurría en distintas esquinas de la Villa Olímpica, la Población Chile, San Gregorio y Quilín. Piedras y lacrimógenas se lanzaron en Nataniel con Franklin, entre Cinco de Abril y General Velásquez, en José Joaquín Pérez a la altura del 6.800 hasta Teniente Cruz. En Departamental, entre Gran Avenida y avenida Norte Sur; en La Victoria, La Legua y en Conchalí por el sector 5.000 de Independencia. Varios postes de alumbrado público fueron derribados con explosivos y uno explotó en la sede de un banco, en el paradero 5 de avenida Vicuña Mackenna. En algunos sectores de Santiago, los cortes de calle se propagaron hasta el día 14. Así fue en un amplio sector de Mapocho y de San Pablo en la comuna de Pudahuel.

<sup>129</sup> Así se encargó de denunciarlo el propio Lavandero, que apoyado por las bases no estaba dispuesto a moverse de su presidencia en el CUD y el Proden. Ver: “Lavandero critica a la directiva DC”. El Mercurio, 15 de octubre de 1983.

<sup>130</sup> “Los trabajadores salen a la calle”. Análisis, N° 66, del 11 al 25 de octubre de 1983.

<sup>131</sup> “Denegado permiso para concentración”. El Mercurio, 21 de octubre de 1983.

<sup>132</sup> “Intendencia rechazó petición del CNT”. El Mercurio, 25 de octubre de 1983.

<sup>133</sup> En el artículo séptimo se agrega el siguiente inciso final: “Los delitos contemplados en la letra i) serán castigados con las penas de presidio, relegación o extrañamiento menores en cualquiera de sus grados. Sin perjuicio de lo anterior, sus autores serán solidariamente responsables de los daños que se causen con motivo u ocasión de los hechos mencionados en la letra i), con independencia de la responsabilidad que pudiera afectar a los autores materiales de dichos daños. Publicada en el Diario oficial el 27 de octubre de 1983. Ver: “Establecen responsabilidad por violencia en Protestas”. El Mercurio, 27 de octubre de 1983 y “Rigen sanciones a instigadores de manifestaciones”. El Mercurio, 28 de octubre de 1983.

<sup>134</sup> Como el CEPCH, Proden, AGECH, Codepu, Coordinadora Metropolitana de Pobladores, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile; Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Confederación Bancaria de Chile y el Colegio Médico, entre

otros.

<sup>135</sup> “Imágenes de Solidaridad 1983”. Solidaridad, N° 170, segunda quincena diciembre 1983, p. 9.

## CAPÍTULO VIII

### MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Mil novecientos ochenta y cuatro abrió y cerró con las jornadas nacionales de protesta más masivas, organizadas y confrontacionales realizadas hasta entonces. Si en algún momento se pudo confiar en una salida “a la plebeya” fue en este tiempo, especialmente después de la protesta-paro del mes de octubre. Pero durante el año transcurrieron procesos que es conveniente registrar para comprender las texturas que complejizaron la postura opositora. En esta etapa que llamamos “La discusión”, tanto el carácter, los límites y posibilidades de la movilización social estuvieron en el centro de su debate político e intelectual. Unos argumentarán repetición y desgaste de la protesta y pedirán definir objetivos más claros e instrumentales. Otros comenzarán el año con la idea de avanzar hacia instancias superiores de movilización social, protestando sin dar tregua hasta concretar el paro nacional. En tal sentido, desde 1984 las operaciones de guerrilla urbana (especialmente los apagones sincronizados y las voladuras en largos tramos de la línea férrea) comandadas por el recién nacido Frente Patriótico Manuel Rodríguez pasaron a ser parte del ambiente de protesta. También se masificaron otras formas de autodefensa y sabotaje popular a través de la multiplicación de las llamadas acciones audaces.

Si bien eran de dominio público las dificultades que experimentaba el arco opositor para diseñar estrategias en conjunto, hasta entonces la plataforma base era intransable. Los cuestionamientos se podrían centrar en las formas (pacíficas o violentas) o en los horizontes superiores (socialismo, socialdemocracia, democracia liberal, etc.), pero, tal como hemos señalado, los conglomerados políticos habían nacido bajo tres principios operativos y apremiantes que eran coincidentes: la impugnación a la Constitución de 1980, el rechazo al modelo económico y la salida de Augusto Pinochet. No obstante, a mediados de agosto de 1984 ya encontramos tendencias intelectuales y políticas que invitan a flexibilizar, si no a claudicar, en puntos que terminarán, al calor de los años y los

sucesos, por fragmentar completamente el piso cohesionador que sustentaba a la oposición.

Al interior de las bases sociales el curso del año era muy distinto y continuaban consolidándose los procesos de organización. Fue este el tiempo en que el movimiento estudiantil universitario cobró fuerza, redoblada con la exitosa democratización y conquista de todos sus centros de alumnos y federaciones. El momento cúlmine fue el renacimiento de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh) con una lista conformada por las principales juventudes políticas de izquierda. La efervescencia en facultades y la presencia masiva de los estudiantes en las jornadas de protesta fue un sello distintivo. Junto a la música andina, el rock chileno de protesta nutrió el repertorio musical de las nuevas generaciones que bloquearon las avenidas de sus escuelas y levantaron barricadas. “La voz de los 80” fue la canción que marcó a una generación y fue coreada por miles de estudiantes secundarios que avanzaron en mesas nacionales de organización e hicieron presencia pública con la ocupación de sus liceos y en las correrías callejeras que constantemente alborotaron el centro santiaguino.

Por otra parte, si bien es cierto que los sindicatos después de la persecución, el desmantelamiento y los desgarros internos producidos durante el año anterior habían perdido fuerza y que el protagonismo de la protesta recaía en pobladores y estudiantes, no podemos dejar de considerar que las organizaciones de trabajadores fueron las que impulsaron y consagraron la protesta como forma de socialización política y manifestación social. Durante la dictadura, las organizaciones de trabajadores eran respetadas por el significado histórico dentro del proceso de luchas obreras y populares del país. Los dirigentes sindicales convivían y dialogaban en asambleas estudiantiles y profesionales, su palabra era escuchada en los bloques políticos en hermandad de propósitos. A pesar de la palidez de las jornadas convocadas por los trabajadores en 1983 –de la que no lograban recuperarse debido al cuadro represivo que prosiguió al paro en los yacimientos del cobre–, la exitosa jornada de marzo de 1984 y, más aún, el paro de octubre de 1984, convocados por el Comando Nacional de Trabajadores y la Coordinadora Nacional Sindical, respaldados por organizaciones sociales y el amplio trabajo de base desarrollado por el MDP y sus militantes de base, marcaron el momento más alto de correlación de fuerzas favorables para la oposición. Sin la fuerza numérica de antaño, el sindicalismo, por su historia, seguía pesando en Chile. Entonces vino el estado de sitio y una nueva pacificación de Chile. Entonces, aseguran los testimonios, “fue como empezar de nuevo”.

## El “puntarenazo”

El ruido que caracterizó la protesta de 1983 marcó el comienzo del año siguiente. Un ruido coordinado y altivo que venía desde la periferia de Santiago. No había un llamado previo, tampoco era día de protesta. El caceroleo, en cuanto forma expresiva del descontento, les nació del alma a quienes agarraron ollas, tapas y fierros para acallar el discurso que en vísperas del Año Nuevo el general Pinochet dirigió al país a través de una cadena obligada de radio y televisión. Ambos discursos –el del general y el de las ollas periféricas– se encontraron y disputaron el espacio santiaguino. Uno aseguraba tiempos más propicios para la convivencia nacional; el otro confrontaba y marcaba sus límites.

La actitud confrontacional durante el verano se trasladó al extremo sur de Chile en el episodio que fue conocido como el “puntarenazo”. Hasta entonces, el dictador no imaginaba que cientos se atreverían a protestar en sus narices; menos que la protesta se extendería con tal descaro hacia los confines australes. Era el 24 de febrero cuando decenas de manifestantes que habían sido convocados por la Multigremial de Magallanes –en homenaje al sindicalista asesinado Tucapel Jiménez– gritaron consignas en contra de la visita de Pinochet a la ciudad. Un sujeto –que fue reconocido como funcionario de la CNI– aceleró hacia la multitud y alcanzó a atropellar a José Chiguay, obrero de 21 años. Al día siguiente, en la población del joven se celebró un cabildo popular, organizado por la AD y otras organizaciones sociales. Los pobladores acordaron volver a reunirse el día 26 para repudiar a Pinochet durante la ceremonia que se realizaría en la plaza de Armas de la ciudad.

Tal como se acordó, a pocos metros del acto oficial la solemnidad militar fue alterada con los inusuales abucheos y cientos de voces que gritaban “¡Pan, trabajo, justicia y libertad!”. Quienes alcanzaron a arrancar de la arremetida de carabineros y de la furia de los simpatizantes del gobierno se refugiaron en la Catedral, desde donde siguieron gritando, levantando pancartas y lanzando panfletos durante media hora. Bastó que los curas cerrasen las rejas para proteger a los manifestantes y evitar la represión para que las voces oficialistas la emprendieran contra ellos. Más aún, la presencia de otros sacerdotes que llegaron hasta la plaza para calmar los ánimos de ambos bandos y despejar las

puertas de la Catedral provocó indignación en el oficialismo. Hubo dieciséis manifestantes detenidos, entre ellos, José Ruiz Di Giorgio, presidente de los trabajadores del petróleo.

Días más tarde, el intendente de la XII Región condenaba a los “extremistas amparados por la Iglesia” y se refería a los sacerdotes acusados de encabezar el “puntarenazo” como conocidos “participantes en las jornadas de protesta”<sup>1</sup>. Estos sucesos venían a agravar el clima de tensión Iglesia-gobierno que imperaba principalmente por las fallidas negociaciones en el llamado “caso nunciatura”, ocurrido el 16 de enero, cuando cuatro militantes del MIR – acusados de participar en el asesinato del mayor general Carol Urzúa– se refugiaron en la sede diplomática del Vaticano. El gobierno hasta entonces se negaba a otorgar los salvoconductos que solicitaba el papa Juan Pablo II para sacarlos del país<sup>2</sup>. También añadían fuego a la hoguera las declaraciones del padre Rafael Maroto, quien públicamente asumía la vocería de dicho movimiento.

Para las organizaciones políticas y sindicales, el verano fue el momento de definir los horizontes de acción para los meses siguientes. A esa altura existía una percepción común en las diversas corrientes de oposición que evaluaban las conversaciones con el gobierno como un factor desmovilizador. A mediados de enero, las organizaciones de trabajadores representadas por Manuel Bustos anunciaron el Plan Mayo, es decir, una serie de actividades de movilización que culminarían en un paro nacional. Gran misión y obsesión de 1984. El paro resonó en asambleas, documentos, actos públicos, rayados y panfletos; estrella lejana, aspiración, camino que conduciría a la democracia; demostraría, de una vez por todas, la fuerza y unión de los trabajadores y del pueblo. Si las protestas no habían dado el resultado esperado, el paro sería el inicio del fin. En tanto ello ocurría, el MDP y el CNT trabajarían en construir los pasos previos y preparar los ánimos.

El primer Ampliado Nacional del Comando Nacional de Trabajadores se celebró el 3 de febrero en Puente Alto. Cerca de 320 dirigentes acordaron promover la “movilización popular como principal instrumento de cambio y oposición al régimen”, y fomentar “la idea del paro” en la masa de trabajadores: ¡UNIDAD SINDICAL PARA EL PARO NACIONAL! fue la consigna. Como nuevo referente orgánico destacó la creación del Consejo de Confederaciones, Federaciones y Sindicatos Nacionales (Confesin). Además, se aprobó la propuesta presentada por los trabajadores petroleros para realizar el llamado a



una Octava Jornada Nacional de Protesta para el 27 de marzo. También se acordó realizar una asamblea nacional de dirigentes con el fin de evaluar las actividades realizadas y ponerle fecha al paro.

Los dirigentes del CNT se reunieron días más tarde con la AD y luego con el MDP: “Pedimos a los conglomerados políticos que depongan actitudes –insistían los trabajadores– y que sean capaces de sentarse en la misma mesa, a la luz pública, a conversar sobre la movilización para el año 84”<sup>3</sup>. Se habló incluso de conformar comités conjuntos de movilización social, lo que pareció concretarse durante el mes de marzo con la decisión de todos los referentes políticos y sociales para difundir un instructivo único firmado por el denominado Comando por la Protesta.

Los referentes políticos también aprovecharon el fin del verano para concentrar fuerzas y definir proyecciones. Del 3 al 5 de marzo se realizó la primera asamblea nacional del MDP, con participación de delegados regionales y representantes de 153 organizaciones sociales. Si bien el llamado a paralizar el país sobre el cual insistió Manuel Almeyda en su discurso no era novedad, ya que, como hemos visto, la idea del paro nacional se repetía a través de distintas figuras e instancias, el gobierno quiso dar un castigo ejemplar con una encargatoria de reo que mantuvo en prisión al doctor Almeyda durante dos meses.

“Inquietud ante posible desborde de la protesta”, titulaba El Mercurio días antes. Desde el sábado 24 de marzo fue nuevamente impuesto el estado de emergencia para todo el país y aumentaron las declaraciones condenatorias por parte de los representantes del gobierno<sup>4</sup>. Sobre las protestas decía Onofre Jarpa: “Pretenden alterar la vida del país, paralizar el tránsito, crear dificultades, promover enfrentamientos, saqueos, incendios y muertes... esto no tiene nada de pacífico y por lo tanto no puede aceptarse”<sup>5</sup>. En otras jerarquías institucionales se reprodujo la condena. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago, las autoridades universitarias amenazaron con aplicar el Reglamento de Ética Estudiantil “con el máximo rigor a los alumnos que provoquen desmanes en esta casa de estudios”.

Posteriormente, se dijo que la represión durante la Octava Jornada, comparada con otras, fue “ponderada”. No estamos de acuerdo; no si consideramos las medidas intimidatorias previas y posteriores al 27 de marzo. Decenas de dirigentes sindicales, estudiantiles y poblacionales sufrieron seguimientos, vigilancia, detención y relegación. Solo entre el 23 y 26 de marzo veinticinco

personas fueron detenidas en sus casas e incomunicados durante cinco días, quince de ellas fueron relegadas sin especificar su causa (medio centenar se salvó al no ser encontrados en sus domicilios). Muchos de ellos habían sido relegados durante 1983, participaban en organizaciones de base y eran conocidos como líderes locales. Además, dirigentes sindicales denunciaron seguimientos, la vigilancia de sus sedes y el allanamiento de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores y de la Confederación Campesina El Surco.

La noche del viernes 16 de marzo fueron detenidos decenas de jóvenes por carabineros en las calles de la población La Victoria; no satisfechos, al día siguiente la población fue rodeada para impedir la salida de sus habitantes. Se trataba de intimidar a los pobres de la ciudad. El domingo siguiente, la población José Cardijn –sector de Cinco de Abril con Las Rejas– presenció un aparatoso operativo de intimidación selectiva. Diez autobuses con carabineros se apostaron en el sector para allanar una sola vivienda: la de Luisa Toledo y Manuel Vergara. Ni el matrimonio, reconocido por su trabajo en la parroquia poblacional, ni sus cuatro hijos –tres de ellos militantes del MIR y dirigentes estudiantiles– se encontraban presentes y no regresarían por seguridad en los días siguientes. Fue una de las tantas formas de acoso que esta familia sufrió antes de la muerte en supuestos enfrentamientos de dos de sus hijos.

Pero después de cinco meses desde la última protesta, ya se habían recuperado las fuerzas y se sentía en el ambiente que la protesta sería masiva, no solo en la capital, sino que resultó ser la más importante y numerosa de las realizadas en provincia hasta el momento: “Llamamos a protestar a todos los chilenos democráticos y a no dejarse engañar por las falsas promesas, la pseudo apertura política o los plebiscitos de Pinochet que solo buscan ocultar su fracaso y afirmarse en el poder”<sup>6</sup>, señalaba el llamado a la protesta. Días antes, ya se habían acreditado más de doscientos periodistas extranjeros para seguir de cerca la jornada, cifra que aumentaría con otros tantos ya instalados en los copados hoteles de Santiago. Si las autoridades no podían impedir que las noticias cruzaran las fronteras, dentro del territorio impusieron nuevas restricciones a la información. El 26 de marzo, el Bando N° 2 de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia decretó la censura previa a las revistas de oposición y fueron requisados los quince mil ejemplares del semanario Fortín Mapocho, que venía con sendos titulares relativos a la protesta. El toque de queda fue dispuesto hasta el día 28 de marzo.

## El puntapié inicial: una fogata en cada esquina

“Convocamos a una protesta y el resultado fue un paro” fue la alegre evaluación de los dirigentes sindicales. Aunque la Novena Jornada Nacional de Protesta no fue un paro con todas sus letras, efectivamente se paralizó gran parte del movimiento urbano. La ciudad fue otra. Según cifras del CNT, gracias al apoyo de los transportistas, el 80% del transporte terrestre –urbano e interurbano– paralizó durante todo el día; y tal como había anunciado la Confederación del Comercio Detallista, desde las 14 horas estaba cerrado el 100% del comercio y otros simplemente no abrieron sus puertas en todo el día. A las escuelas llegó solo el 20% de los alumnos y las universidades suspendieron las clases. En los lugares de trabajo hubo paralizaciones parciales; atrasos; cierre de acuerdo con los patrones; inasistencia a casinos; pero lo más significativo fueron las asambleas realizadas en las fábricas –para discutir y difundir el futuro paro de labores– durante la hora de colación, especialmente en el sector metalúrgico y textil.

En el centro, exactamente al mediodía, grupos de estudiantes secundarios –en la modalidad de encuentro y dispersión relámpago– interrumpieron el escaso tránsito hasta las cuatro de la tarde. Lo mismo intentaban los intelectuales y artistas que realizaban una acción en avenida 10 de Julio con Vicuña Mackenna. En los campus universitarios de San Joaquín, Oriente, Ingeniería y Medicina Norte hubo asambleas y actos desde la mañana hasta el mediodía, incluido un acto de la Asociación de Académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que también adhirió a la protesta. Después de la una de la tarde comenzaron los incidentes con la instalación de barricadas. A pesar de que sus puertas fueron cerradas desde el lunes en la tarde, los enfrentamientos más violentos se registraron invariablemente en las cercanías del ex Pedagógico, en los que varios estudiantes resultaron heridos.

En las poblaciones, desde la mañana se observaba a grupos de jóvenes acarreando y encendiendo neumáticos recolectados mucho antes. Habían pasado cinco meses desde la última jornada y los ánimos estaban expectantes. En los días previos se habían realizado marchas de apoyo, y las paredes de las avenidas principales lucían nuevos murales artísticos. Al caer el sol se alzó el anuncio:

decenas de miles estaban dispuestos a ganar la calle. Un periodista, sorprendido ante la sincronía de la protesta, redactó con pluma temblorosa: “En horas de la tarde, en La Legua, se apareció un ánimo belicoso entre los pobladores”<sup>7</sup>. Mientras tanto en La Victoria, invariablemente acosada en los días previos, el ánimo belicoso de los uniformados llevaba detenido a su párroco, Pierre Dubois, quien como en cada jornada intentaba proteger a los suyos y apaciguar los ánimos, incluso exponiendo su cuerpo. Lo sucedido es relatado por un testigo de los hechos:

Aquí estaba toda la muchachada tranquila. Otros estaban pichangueando. No hizo más que llegar Carabineros y quedó la escoba. Los chiquillos respondieron. El padre llegó de allá adentro (de la población) y les pidió a los cabros que no tiraran piedras, y los pacos, como veían que les gritábamos cosas, hicieron andar la micro y se la tiraron encima al padre. Él abrió los brazos. La micro retrocedió y tomó vuelo. Entonces el cura se les atravesó en el suelo. Se tiró de costado ahí. Ahí volvieron a frenar. Y como no pudieron pasar por arriba del padre, vinieron y lo pescaron como carne de cañón y lo llevaron adelante gritándole toda clase de groserías<sup>8</sup>.

Al límite del toque de queda, Pierre Dubois fue liberado y trasladado a la casa del arzobispo de Santiago. No obstante, la indignación en La Victoria se redobló junto a los cortes de luz y el lanzamiento de piedras. En la comuna de Pudahuel fue un poco más tarde, pero fue uno de los lugares más reprimidos. Según el testimonio de religiosas y sacerdotes, desde las diez de la mañana carabineros lanzaron bombas lacrimógenas a los pobladores que ya se movilizaban en los alrededores de la capilla. Más tarde llegó hasta la población Lo Amor un contingente de buses de carabineros escoltados desde los aires por dos helicópteros. Mientras uno de ellos intentaba aterrizar y levantaba una nebulosa polvareda sobre la cancha de tierra ubicada al lado de la capilla, el otro sobrevolaba a baja altura disparando balas, bombas lacrimógenas y destellos tipo bengala a los blancos móviles que corrían a refugiarse.

Muy cerca había un niño mirando el cielo. Francisco tenía 12 años cuando seguía atento el vuelo del helicóptero. Los hombres dispararon contra el sospechoso. El niño fue llevado en brazos por uno de sus familiares –seguido por

casi cien vecinos al borde de la histeria— hasta la comunidad franciscana que prestaba atención a los heridos, pero ya estaba muerto<sup>9</sup>. En otro sector de Pudahuel también fue alcanzado por una bala lanzada desde las alturas el zapatero Víctor Manuel Quezada. En la comuna de Maipú, un grupo terrestre disparó y mató a la adolescente Erika Sandoval mientras se encontraba en la entrada de su edificio.

Otro helicóptero sobrevoló Santiago desde las 20 a las 21 horas. Era un Puma que traía a bordo la comitiva presidencial. Era la primera protesta que Pinochet observaba desde las alturas, aunque, según sus declaraciones, no vio gran cosa: “relativa tranquilidad”, fue su diagnóstico. Sin embargo, mientras el Puma recorría la periferia desde el aire, ya había comenzado a propagarse el sonido de las cacerolas. Esta vez también participaron sectores medios y altos, y el ruido se sentía fuerte, unívoco, aguerrido. Un periodista apostado en La Legua informaba: “A las 20:30, como si todos se hubiesen puesto de acuerdo, comenzó el caceroleo que se prolongó durante media hora”. Uno de sus colegas, ubicado en otro sector de Santiago, coincidía: “El ruido de las cacerolas golpeadas con objetos contundentes dominó sobre cualquier otro sonido en el sector de Avenida Grecia, desde Macul al Oriente”<sup>10</sup>.

Junto con el caceroleo comenzaron los cadenazos. Poco a poco, distintos sectores fueron quedando a oscuras —alrededor de 600 transformadores de corriente fueron dañados— mientras eran alimentadas las barricadas que obstaculizaban las principales arterias y sorprendían por sus amplias dimensiones. Continuaban los reportes: “La población José María Caro, La Victoria y toda el área suroccidente se convirtió anoche en una enorme antorcha”. En avenida Central, las tapas de alcantarillas fueron sacadas y utilizadas en barricadas que “desde 200 m se advertían”. También las avenidas Salvador Gutiérrez y Mapocho estaban tapizadas de hogueras y miguelitos en una extensión de aproximadamente veinte cuadras. “A las 21:30 la calle José Joaquín Pérez era una interminable hilera de inmensas fogatas, algunas tan grandes que alcanzaban los cables del tendido eléctrico. A las 21:45 se vio un gran relámpago en el cielo pudahuelino y todo el sector quedó oscuro”<sup>11</sup>. Tan abastecidas estuvieron las barricadas en la población La Bandera que a la mañana siguiente una pala mecánica debió levantar los cuantiosos escombros acarreados desde obras cercanas, en tanto en la plaza central de La Legua aún flameaba una bandera del MIR.

En medio de la oscuridad hubo saqueos masivos. Alrededor de trescientas

personas asaltaron un supermercado ubicado a la altura del 7.700 de Mapocho y, según acusó la prensa, muy cerca del lugar, otra multitud, incluidos niños, saquearon cien hectáreas de la Viña Santa Elvira. Aprovechando que la voladura de un transformador dejó a oscuras la población, la tienda de zapatos Bata, ubicada en la población José María Caro, fue completamente desvalijada (no era la primera vez). Sobre este saqueo se quejaba el reportero que no pudo sacarles palabra a los vecinos: “Evidentemente, nadie vio nada”<sup>12</sup>. Cabe agregar que la lluvia de piedras arrojada desde esta población durante la protesta fue colosal, tanto que lograron cercar a dos furgones de investigaciones que posteriormente fueron atacados por una turba y rescatados por refuerzos de carabineros.

En esta jornada fue notoria la organización callejera –que seguramente respondió a una planificación previa– para atacar conjuntos habitacionales de uniformados. Tenemos varios casos registrados, por ejemplo: en el sector de rotonda Quilín fue apedreado el condominio de carabineros llamado “El Parque”, lo mismo en el recinto ubicado en Diego Silva y Nicanor Molinare, en Conchalí. Tres bombazos estallaron en las cercanías del retén de Carabineros de la Población Juanita Aguirre; una poblada atacó a pedradas el domicilio de un jefe de radiopatrullas en Aquelarre Norte, mientras otros aprovechan la oscuridad para repetir la operación en una población militar ubicada en Tobalaba con Real Audiencia. Mediante piedras y todo tipo de proyectiles, la tenencia de La Victoria también fue atacada por una poblada; en otro sector, medio centenar de personas ingresaban a la Municipalidad de La Cisterna para saquear y quemar una de sus bodegas y abollar con palos y patadas los vehículos.

Al día siguiente, el vicario de la Solidaridad, padre Ignacio Gutiérrez, ofreció una conferencia de prensa para comunicar los datos recopilados por su gente. Solo hasta la Vicaría llegaron treinta heridos por balas, balines, perdigones y contusos. En Pudahuel murió una bebé de 15 días y una señora de 85 años, ambas asfixiadas por el bombardeo de lacrimógenas a las que fueron sometidas sus poblaciones. Fueron denunciadas violaciones a mujeres, incluido el manoseo y desnudo de una religiosa luterana. Hubo casos en que los pobladores fueron lanzados a las fogatas, a canales e incluso al río Mapocho. Entre estos, el más impactante fue el de los tres obreros del POJH golpeados a bordo de un bus policial y lanzados semiinconscientes al canal Espejino, en el sector de la población Tejas de Chena. Uno de ellos, Nelson Carrasco, de 27 años, nunca logró salir. Su cuerpo fue encontrado días más tarde.

En la población Santa Adriana un niño de 15 años murió por los golpes

recibidos, caso que conocemos gracias el testimonio del párroco de la población, Jesús Herrero:

Había un grupo de personas gritando en una fogata levantada en la Panamericana Sur. Llegó un bus de carabineros lanzando bombas lacrimógenas y el grupo se dispersó. Los carabineros pasaron al lado oriental de Ochagavía, donde hay un lugar eriazo cubierto de árboles, resto de un campamento erradicado (Los Troncos). Allí se escondieron esperando que los pobladores volvieran a la fogata. Cuando esto ocurrió, salieron de su escondite, la gente se dispersó y atraparon al niño Juan Aravena, y cayendo sobre él lo golpearon hasta quebrar una luma y dejarlo inconsciente. Lo recogieron los vecinos<sup>13</sup>.

En los días siguientes continuaron las represalias. Fuerzas Especiales de Carabineros recorrieron la población Lo Hermida rompiendo vidrios y derribando puertas. Los pobladores señalaban que los uniformados corrían como desquiciados, que daban alaridos, gritaban, asustaban a la gente y golpeaban a los jóvenes que se les cruzaban en el camino. Peor les iba si se encontraban reunidos en las esquinas. Al día siguiente, un pequeño grupo de jóvenes armados atacó la subcomisaría Teniente Merino en Pudahuel. La operación de desquite fue un fracaso. Mauricio Armando Maigret Becerra cayó herido y fue rematado por carabineros que llegaron a reforzar la defensa; recién había cumplido 18 años, estudiaba en el Liceo de Aplicación y era militante del MIR. Un año más tarde, el 29 de marzo de 1985, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo serían asesinados cuando protestaban y conmemoraban la muerte de su compañero.

A raíz del frustrado atentado, un operativo conjunto de civiles, militares y carabineros buscó y arrestó en sus domicilios a veintiséis pobladores del Campamento Porvenir. Otros jóvenes y obreros del POJH fueron detenidos en distintos sectores y poblaciones de Pudahuel e interrogados sobre sus actividades políticas. Después de permanecer cinco días incomunicados, fueron relegados quince de ellos. Posteriormente, la Vicaría y organizaciones de derechos humanos contabilizaban en todo el país nueve muertos (dos de ellos en regiones), 638 detenidos y 63 heridos<sup>14</sup>.

Si leemos entre líneas la evaluación de la jornada realizada por el ministro Onofre Jarpa, veremos que la protesta conseguía sus objetivos. Señalaba Jarpa: “Con esta protesta no se ha demostrado absolutamente nada, porque se pierde el ritmo de la vida normal y se va demostrando a la opinión pública un estado de crisis absolutamente artificial... yo diría que se retrocede mucho y se arriesga demasiado, porque se crea un ambiente de enfrentamiento, de violencia, que no le sirve a nadie”<sup>15</sup>. Sabemos que la ciudad es ante todo un hecho social y justamente de eso se trataba, de cambiarla; se trataba de romper con el ritmo de vida cotidiana, intervenir el reloj y la fisonomía del espacio a partir de una práctica reivindicatoria común nada artificial. En ese sentido, la jornada había logrado su objetivo. Un informe interno de la Vicaría se detenía en el ánimo de entusiasmo festivo que nutría esa articulación:

En general, se advierte un gran entusiasmo por expresarse y participar en la protesta en todas las zonas. En ocasiones, estas expresiones adquieren el carácter de fiesta popular, donde intervienen prácticamente todos los miembros de la familia y la gran mayoría de las familias de las poblaciones. No se producen actos violentos contra personas, salvo contra carabineros, pero como reacción a la represión de estos<sup>16</sup>.

Por otra parte, la “normalidad” que el general Pinochet presenció desde las alturas terminó por convencerlo de la necesidad de modificar el rumbo seguido hasta entonces por el monetarismo ortodoxo de los Chicago Boys para dar espacio a otros sectores empresariales que exigían un mayor pragmatismo para enfrentar la crisis económica y mermar sus consecuencias políticas. Dos días después de la Octava Jornada, el general solicitó la renuncia del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres –con el que había asegurado “llegar hasta el final”– y de Andrés Passicot, ministro de Economía. Ambos fueron reemplazados por Modesto Collados y Luis Escobar, respectivamente<sup>17</sup>.

Pero existían sectores oficialistas que no confiaban en que el cambio ministerial ni las modificaciones en política económica pudiesen contener al movimiento social. Temían por la continuidad del proyecto militar y desde comienzos de año pedían recrudecer las medidas represivas. Entre ellos figuraba la Primera Dama de la nación, cuyas declaraciones solían ser aún más agresivas que las de su



esposo. Cuando los compañeros y amigos del joven militante del MIR Mauricio Maigret Becerra asistieron al sepelio con sus rostros cubiertos, doña Lucía replicó enfática: “Los terroristas no son seres humanos, sino perros rabiosos... yo los habría tomado a todos presos, porque si alguien actúa con la cara tapada, es porque está escondiendo algo”. Con respecto a los apagones y explosiones que resonaron durante todo el verano, dijo ser partidaria de implantar el estado de sitio. Así de simple, porque así “se controlarían mucho mejor las calles para detener a las personas que están causando violencia y tantos destrozos”<sup>18</sup>. Solo habría que esperar algunos meses para que esta iniciativa se impusiese.

## A un año de protestas, una pequeña réplica

A comienzos de abril nuevamente fue arrestado –o arrastrado– desde las dependencias de la revista Análisis su director, Juan Pablo Cárdenas. Se le acusaba de “incitar a la subversión del orden público y derrocamiento del Gobierno constituido” debido a las opiniones vertidas en el editorial del último número (que de paso fue requisado). Las autoridades, como ya era costumbre, aprovecharon la ocasión para extender la censura previa a otras revistas de oposición, como Hoy, La Bicicleta y APSI. En tanto, para el Área Metropolitana y provincia de San Antonio se ordenó que “toda reunión pública de carácter político a partir de hoy deberá ser autorizada por la Jefatura de Zona en Emergencia con no menos de diez días de anticipación”.

Los trabajadores acusaron que esta última medida se habría tomado para impedir la realización de la Asamblea Nacional del CNT, cuyo objetivo era ponerle fecha al paro. De todas formas, hicieron las gestiones y esperaron el plazo estipulado para que nada interfiriera en el encuentro de mil doscientos dirigentes sindicales en el Teatro Cariola. Pese a las expectativas, en dicha reunión los trabajadores tampoco lograron consensuar una fecha; se definió tan solo un vago plazo: “no mayor a 90 días”. En tanto ese tiempo transcurría, se abocarían a aprovechar todas las instancias para promover y fortalecer la disposición en las bases. Huelga señalar que el plazo se volvió tiempo fatal, fue una soga al cuello que transparentó las controversias internas y debilidades orgánicas. Algunos dirían más tarde que “fue mucho tiempo de espera” y que el paro debía haber sido convocado inmediatamente después de la jornada de marzo, momento en que se contaba con el apoyo de sectores clave, como el de los transportistas y comerciantes; en cambio, otros sostenían que más allá de los plazos, las condiciones nunca estuvieron dadas.

Entre las resoluciones emanadas de la Asamblea Nacional, que iban en la línea de fortalecer la presencia e influencia de los trabajadores en el movimiento nacional con una fecha concisa y sin fallas, ganó la propuesta de conmemorar el primer aniversario de las Jornadas Nacionales de Protesta convocando a una nueva jornada. No obstante, la protesta de mayo de 1984 no logró ser mucho más que una pequeña réplica de sus antecesoras. Entre las discusiones por

ponerle fecha al paro y las pocas pasiones que despertó la convocatoria de mayo se inició un declive en la movilización popular y callejera que solo logró repuntar a partir de septiembre, el mes más simbólico de las protestas.

Ambas propuestas (el paro en “no más de 90 días” y la protesta de mayo) fueron anunciadas en el Parque O’Higgins durante la conmemoración del Primero de Mayo. Según los trabajadores, desde 1971 que no se veía un Primero de Mayo tan concurrido; las cuentas eran alegres: los avances logrados por la movilización social eran indiscutibles. En 1982 habían alcanzado a reunirse solo pocos minutos antes de que llegaran carabineros y gurkas a golpearlos y disolverlos. Para entonces, la idea de “mover las fábricas” y preparar los ánimos entre esa multitud festiva de más de doscientos cincuenta mil personas no parecía ni antojadiza ni imposible. Si por fuera el parque estaba efectivamente cercado por hileras de carabineros de fuerzas especiales dispuestos a actuar, dentro el recinto redundaba en rayados multicolores, consignas y advertencias al régimen. La siguiente crónica –verdadera “prosa de la contrainsurgencia”– nos sirve para recrear el ambiente:

El interior del Parque O’Higgins ofrecía cerca de las 15:30 horas un aspecto lamentable. Fogatas humeaban por doquier y miles de panfletos, cartones con consignas y folletos quedaban esparcidos. La tribuna de honor fue rayada completamente con estampados de Salvador Allende y llamados al paro... Gigantescos puños y toda suerte de llamados fueron pintados en las paredes del estrado, las murallas del frontis del recinto, los puentes de avenida Norte y Sur y algunas casas<sup>19</sup>.

Al llamado del CNT para la Novena Jornada Nacional de Protesta adhirieron los tres bloques opositores, organizaciones de profesores y estudiantes, entre otros organismos sociales de base. Revisemos el comunicado:

El día 11 de mayo se cumple un año desde que el pueblo chileno inició el camino de las PROTESTAS PACÍFICAS como el único medio de expresar su repudio a la dictadura. Estas históricas jornadas han permitido al pueblo y a los trabajadores revertir en parte la situación, pero ninguno de los grandes

problemas del país ha sido resuelto; por el contrario, la crisis política, económica, social y moral se profundiza día a día, arrastrando a grandes sectores del país a la desesperación y a la violencia. Por ello, los trabajadores del país llamamos al pueblo de Chile a una nueva JORNADA DE PROTESTA PACÍFICA para el día 11 de mayo próximo<sup>20</sup>.

Los que no se pronunciaron con su apoyo fueron los pequeños empresarios, los transportistas y el comercio. Por lo que ni el transporte disminuyó su actividad ni el comercio bajó sus cortinas. En los colegios la ausencia fue, a lo más, de un 35% de niños. En realidad, el día casi pareció ser cualquier otro día. “Fue un fracaso”, dijo el gobierno. “Fue menor”, dijo la AD. “Fue sin estridencias, pero mucho más madura”, dijeron sus organizadores. Puede que la baja se explicase por la abstención de sectores clave, o que las medidas adoptadas por el gobierno para mermar la crisis y la salida de los Chicago Boys del gabinete hayan ayudado a calmar los descontentos y aminorar la fuerza de la jornada, al menos en ciertos sectores cuya suma o resta marcaba la diferencia. Si bien, para la magnitud de los problemas que enfrentaba la sociedad, dichas iniciativas eran insuficientes, anunciadas como un paquete de reformas daban la impresión de que se estaban tomando iniciativas que comprometían y retomaban el papel del Estado en la reparación de los estragos provocados por la ortodoxia neoliberal. Fuese así o no, la tibieza de la jornada tuvo claras consecuencias: desmotivó a los convocantes y redobló el ímpetu de quienes hablaban de rutinización de la protesta y abogaban por objetivos ulteriores.

La represión fue diversificada. En algunas zonas hubo nula intromisión de la policía, en otras fue muy violenta. También lo fue la protesta. En algunas zonas se encendieron fogatas y barricadas, en otras, brillaron por su ausencia, como en Pudahuel, donde las manifestaciones fueron notoriamente más bajas. Los caceroleos casi no se percibieron en los sectores de clase media y bajaron de intensidad en la periferia, pero, al igual que en mayo de 1983, en esta jornada hubo dos muertos. En Santiago cayó asesinado, por un balazo en la cabeza disparado por civiles, Miguel Ángel González Bravo, de 18 años; en Valparaíso, Jorge Alvarado Muñoz fue muerto en una escena parecida. En esas 24 horas hubo ciento cincuenta detenidos y veinte heridos a bala.

Había transcurrido un año desde el despertar de las mayorías silenciosas, un año de fuertes sacrificios, más aún para los más pobres de la ciudad, doblemente

agraviados bajo una política represiva sumamente clasista. La Iglesia coincidía. En el marco de la actividad “Chile defiende la vida”, coordinada por el cardenal Raúl Silva Henríquez durante el mes de agosto, el Vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez, redactó un escrito titulado “Por una cultura de la vida, basta de muerte”. El texto detallaba las circunstancias de las muertes ocurridas por causa de la represión desde la Primera Jornada Nacional de Protesta en mayo de 1983, hasta el 11 de mayo de 1984. Durante ese tiempo –explicaba el vicario– murieron cien personas, sesenta y cinco de ellas durante las protestas y principalmente por acción de carabineros; la mayoría eran obreros (25) seguidos por estudiantes (14). Treinta y dos de ellos tenían entre 19 y 25 años de edad; veinticuatro tenían 18 o menos<sup>21</sup>.

## El “toque de sensatez”: hacia la salida pactada

Y el paro no llegaba. Se habló entonces de un apagón sindical transparentado en la pérdida de fuerza e iniciativa. En círculos intelectuales y políticos se discutió el sentido de la manifestación callejera e incluso algunos sectores, mirando de reojo hacia la mesa de la izquierda, concluyeron que “no sacamos nada con las protestas” si es que antes de convocarlas no se definía un objetivo concreto que debía trascender a la caída de la dictadura. La respuesta a tal interrogante en cuanto proyección política dividía a los pensadores, tocaba fibras históricas, implicaba considerar alianzas estratégicas para conformar un futuro gobierno, marcaba límites operativos, resucitaba temores y celos. El aquí y ahora se difuminaba en un horizonte que tampoco estaba –ni podía estar– definido; el resultado fue que entre el mes de mayo y agosto del año 84 se percibió un preocupante empantanamiento y desencuentro en el cuadro opositor, al menos para dirigentes de base, sectores de la Iglesia y la prensa de oposición que urgían con sus llamados a la concreción de una concertación social. El diálogo hacia dentro lo había propuesto el CNT a nombre de los trabajadores con la mesa de concertación de fuerzas sociales; y también los estudiantes con la búsqueda por construir federaciones con listas unitarias.

El proceso de intelectualización al que nos referimos fue favorecido por el florecimiento de conferencias y seminarios académicos, columnas, artículos y polémicas declaraciones en la prensa. Se trató de una corriente ideológica –o de una pequeña grieta que se irá ensanchando– que recorrió estos meses y cuyas consecuencias solo pudieron revelarse conforme se fueron desarrollando las cosas. Pero fueron de tan largo alcance que, inversamente al paulatino empoderamiento dentro del campo de fuerzas hegemónico, se fueron estrechando los horizontes y las posibilidades del sueño democrático hasta acuñar la forma en que la clase política chilena asumió la transición. Si bien por ahora y hasta mediados de 1986 no será la postura hegemónica, irá poco a poco ganando espacio, erosionando los campos políticos de lo posible y lo aceptable, dentro de un pacto de gobernabilidad fraguado entre los sectores más conservadores de la AD –en especial la Democracia Cristiana– y la derecha, que finalmente definieron los marcos de la llamada transición chilena a la

democracia. Veamos.

Si el llamado diálogo entre la AD y el régimen estaba desacreditado por los magros beneficios obtenidos, por las consecuencias políticas y por el rechazo público que había recibido por el grueso de la oposición, la derecha política, agrupada principalmente en el Partido Nacional y el Movimiento de Acción Nacional, lo veía con buenos ojos. Reconstituida junto a la presencia de Onofre Jarpa en el gabinete, buscaba tomar ciertas distancias del proyecto de los militares y encabezar un proceso de transición negociada. Partícipe de la historia republicana chilena, sus dirigentes aseguraban estar dispuestos a dialogar con la AD el posible acortamiento de los plazos para la transición chilena. No obstante, para la derecha, cualquier conversación debía tener como punto de arranque la aceptación de la Constitución.

A mediados de abril de 1984, el líder de la DC Gabriel Valdés, en su mensaje al país –emitido por cadena voluntaria en radios Cooperativa, Chilena y Santiago–, propuso acortar el tiempo de retorno a la democracia para 1985, y aunque reiteró la ilegitimidad de la Constitución de 1980, mandó una señal de flexibilidad al proponer crear un Estatuto Constitucional “con participación de todos los sectores democráticos que lo deseen, que resuelva el conflicto actual de legitimidad por el cual algunos reconocen la validez de la Constitución de 1980 y otros la impugnamos”<sup>22</sup>. Pero la propuesta no convenció a la derecha más dura, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), fundada en septiembre de 1983, que consideró la propuesta como una insensatez e impedimento para acercar posiciones. Fueron concisos: nada de conversaciones sin reconocer el ordenamiento jurídico vigente<sup>23</sup>.

Días más tarde, Enrique Silva Cimma insistía en aquello de la flexibilidad para llegar a un acuerdo. El dirigente de la AD daba aún más muestras de pragmatismo: “A la Constitución la hemos descalificado desde el punto de vista de su legitimidad, pero existe”<sup>24</sup>, y a continuación proponía que una vez adelantado el proceso, es decir, “más tarde”, se llamase a un plebiscito para que el pueblo decidiera el escabroso punto. Fue entre abril y mayo cuando también otros, como el republicano Hugo Zepeda, presidente rotativo de la AD, no solo señaló su voluntad de diálogo con el gobierno, sino reiteró que “la AD estaría dispuesta a aceptar de hecho la Constitución, no obstante que no reconoce su legitimidad”<sup>25</sup>. En resumidas cuentas, la propuesta era avanzar aislando conscientemente esa discusión.

Tiene su explicación. Y es que los dirigentes nacionales de la AD estaban preocupados por el clima de confrontación y polarización que observaban; y sin ver atisbos de flexibilización en la postura del régimen, requerían conducir el proceso hacia el terreno que ellos mejor dominaban: las mesas de negociación y el debate político intramuros. También –según decían– querían hacerse eco del llamado del arzobispo Fresno, que después de permanecer más de diez días en el Vaticano y ver que el clima de diálogo se extinguía, es más, se desacreditaba, pedía un gesto de buena voluntad para una reconciliación nacional. Si bien, como confirmó la Conferencia Episcopal, debía venir principalmente del gobierno, Pinochet fue enfático: “El diálogo seguirá siendo posible en la medida que se respete la Constitución Política del Estado, la que fue aprobada plebiscitariamente por una gran mayoría ciudadana, y todas sus disposiciones serán cumplidas porque constituyen, como he reiterado, un mandato”<sup>26</sup>.

Entre considerar la Constitución como un hecho y validarla como derecho había una débil frontera que significó, a mediano plazo, renunciar a uno de los principales puntos que unían a la oposición: la demanda de una Asamblea Constituyente. No era algo secundario, sino los mecanismos –o barrotes– que enmarcarían la transición chilena y que modelaron a la sociedad posdictadura. Lo que primero fue un hecho, más tarde sería un hecho irremediable. Por ello, el periodista Rafael Otano rotuló este momento como “hora cero de la transición”. Aquí habría empezado a dibujarse la forma que moldeó la salida chilena, con reivindicaciones cercenadas por la estrecha medida de lo posible, o postergadas en aras del consenso de la clase política. Así, poco a poco, la mesa de negociaciones legitimó y ratificó una Constitución que –a pesar de sucesivas modificaciones– hasta la fecha en que escribimos estas líneas rige la vida de chilenos y chilenas.

Esta tendencia quedó transparentada el sábado 28 de julio de 1984 en el marco del seminario “Un Sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile”, convocado por el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), que contó con la participación de eminentes personalidades del mundo político oficialista y de oposición. Entre los presentes, Patricio Aylwin, vicepresidente de la Democracia Cristiana, sugirió eludir deliberadamente el tema de la legitimidad de la Constitución para poder avanzar y evitar el precipicio que avizoraba: “A menos que cambien las circunstancias –dijo–, si se quiere avanzar hacia la democracia, se deben explorar otros caminos a partir de la Constitución vigente”. Para Aylwin se trataba de abandonar las intransigencias: “Así el país se va polarizando. Alguien tiene que estar dispuesto a ceder y yo creo que la razón



aconseja buscar acuerdos y no empeñarse en esas posiciones, por lado y lado”<sup>27</sup>. Días más tarde lo ejemplificó elegantemente: “Señor, prescindamos de este tema. Yo le respeto su juicio y usted me respeta el mío. Pero tratemos de avanzar”<sup>28</sup>.

La propuesta de Aylwin era sumamente polémica. A pesar de que ya había indicios como las declaraciones reseñadas, el momento político no daba cuenta ni de la postura hegemónica dentro de la propia AD ni menos de lo que ocurría en las calles y universidades. Hasta entonces, incluso dentro de los socialistas miembros de la AD, si bien se consideraba que una salida para Chile debía ser pacífica, ella no podría evadir el “fervor épico de las calles”<sup>29</sup>. Era riesgoso quedarse fuera. Pero la idea ya había sido lanzada y los periódicos se encargaron de destacarla.

El lunes siguiente, Ricardo Lagos salió muy temprano a aclarar el punto y calmar a los inquietos. Reiteró que la postura oficial de la AD era mantenerse firme en los principios de su nacimiento: “La AD sostiene que solo a través de una Asamblea Constituyente se puede avanzar hacia la democracia”. Dadas las circunstancias –y para ser más convincente–, ventiló algunas intimididades. Lagos señaló que tiempo antes, Aylwin ya había hecho una propuesta similar en medio de la discusión que el conglomerado sostuvo en torno a la ley de partidos políticos presentada por Pinochet: “En esa oportunidad me opuse tajantemente, en nombre de mi partido, a dicha proposición, señalando que ella iba en contra de uno de los acuerdos básicos que dieron origen a la Alianza Democrática... Por ello, y para evitar confusiones, me veo obligado a señalar públicamente que dicha propuesta formulada en el Icheh no compromete a la AD ni a ninguno de sus partidos”<sup>30</sup>.

Ricardo Lagos se refería al rechazo que la AD dio al proyecto de partidos políticos, presentado recientemente por el gobierno, argumentando que de aceptarlo los obligaría a acatar el régimen jurídico vigente, y que solo se trataba de “una farsa destinada a crear una apariencia de apertura, a la vez que un subterfugio para legitimar el sistema constitucional por una vía ajena al veredicto popular”<sup>31</sup>. Para reafirmar su postura, los representantes de la AD convocaron a una nueva Jornada Nacional de Protesta para los días 4 y 5 de septiembre. La novedad era que por primera vez llamaban a extender las movilizaciones por más de 24 horas y después de un año (su último llamado fue en septiembre de 1983) retomaban la iniciativa en la convocatoria. Pero, como hemos insistido, llamar a protestar en septiembre, en buen chileno, “era irse a la

segura”.

Pero más allá de este llamado, hasta entonces, al menos para el ala más conservadora de la DC, la movilización social era más bien una carta, un instrumento para sentarse en mejor posición a la mesa de negociación con la dictadura. Ello quedaba claro en las declaraciones de Aylwin. ¿Dispuesto a la negociación y llamando a protestar? le preguntó una connotada periodista en agosto de 1984: “¡Ah, no renuncio a la presión social! La única manera de que atiendan y estén dispuestos a conversar una salida razonable es que se sientan presionados por el sentimiento mayoritario del pueblo. Por eso mantenemos la protesta”<sup>32</sup>. Consultado sobre los dichos de Ricardo Lagos, Aylwin puntualizó que aún no estaba todo dicho: “Lagos creyó que la AD ya había rechazado tal proposición, en circunstancias que allí el tema solo está postergado para más adelante”.

La prensa oficialista también colaboró con su difusión. Así, un grupo de periodistas concurren a fines de agosto, con grabadoras y cámaras, al encuentro organizado por Edgardo Boeninger en el Centro de Estudios del Desarrollo (CED). En un ejercicio intelectual, que fue celebrado por sus reminiscencias democráticas, fueron invitados representantes de la centroderecha y de la AD para intercambiar puntos de vista. El periódico *La Segunda* dedicó una amplia cobertura para detallar la reunión: “La tónica general es de mucho respeto por el contrincante, bastante moderación y humildad de parte de los expositores al momento de analizar el porqué de nuestra crisis institucional (“todos somos culpables”, es la frase que más se oye), y un real esfuerzo por buscar coincidencias con otras posturas”. La periodista advierte la sinceridad y la camaradería, porque, según escribe, “no le están hablando a la masa ni a los votantes”. Además –según advierte–, reina en el ambiente algo que los une “una marcada desconfianza hacia la estrategia del Partido Comunista, rechazo a los dogmatismos doctrinales de los partidos y la aspiración en cuanto a tener en el futuro gobiernos de grandes coaliciones y oposición constructiva”. Entre las principales y prometedoras coincidencias se anunciaba “un acuerdo civil con las Fuerzas Armadas, previo pacto entre las fuerzas políticas, sociales y empresariales”. Salida negociada es el lema. El punto conflictivo, eso sí, eran algunos de sus métodos: “Los socialdemócratas y los demócratacristianos no excluyeron el empleo de medios de presión social (movilización y protestas) para conducir dicho proceso de negociación”<sup>33</sup>. Se moverían en ambos territorios, más aun cuando la protesta de septiembre estaba ad portas.

## “Sin protesta no hay cambios”

Recordemos que el PC, principal fuerza del MDP, se encontraba durante 1984 impulsando la etapa de desestabilización y hostigamiento contemplada en la Política de Rebelión Popular de Masas, que a través de todas las formas de lucha aspiraba a fortalecer el movimiento popular y a conquistar la correlación de fuerzas necesaria para derrocar a la dictadura. Aunque el resto de los partidos que componían el MDP no participaban necesariamente de las acciones propuestas por el PC, sí compartían la opción de la desobediencia civil sin pactar con el régimen. La impugnación a la globalidad del sistema impuesto y el fortalecimiento de la organización popular era la bisagra fundamental de esta opción. En este sentido, el 31 de mayo el doctor Manuel Almeyda, presidente del MDP, dio a conocer la propuesta política del conglomerado: el término inmediato del régimen; la instauración de un gobierno democrático provisional de amplia representatividad social y política; la derogación de la Constitución de 1980, la impugnación a las leyes políticas, y su negación a dialogar dentro de los marcos antidemocráticos de su legalidad.

Por otra parte, paralelamente al proceso revisado en las páginas anteriores, el MDP, junto con la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, apostando a la movilización y organización callejera, convocó a una Marcha del hambre en reclamo por la situación económica y las alzas en precios de productos básicos registrados durante mayo-junio. En medio de diversas manifestaciones locales imposibles de detallar aquí, iban ganando fuerza dentro de los liderazgos en organizaciones de base<sup>34</sup>. Los ataques frontales y laterales al MDP desde el gobierno vinieron en serie. Se trataba de perseguir a sus figuras más representativas a nivel nacional y aislarlo del resto de la oposición. El 7 abril fueron detenidos y expulsados del país los dirigentes comunistas Jaime Insunza, secretario general del MDP, y Leopoldo Ortega, miembro de la Comisión de Derechos Humanos.

Dos semanas más tarde, el nuevo secretario general del MDP, José Sanfuentes, y el sacerdote Rafael Maroto fueron relegados. Recientemente, el sacerdote y vocero del MIR había abogado por la unión de cristianos y marxistas, pidió la pena de excomunión para torturadores y criticó el lucro como alma y sostén del

sistema. La cacería continuó. Entre el día 2 y la madrugada del 3 de julio fueron ejecutados cuatro militantes del FPMR<sup>35</sup> y doce personas fueron arrestadas en sus casas acusadas de colaboración. Antes de que acabara el mes, fueron expulsados del país el sucesor de Maroto en la vocería del MIR, Juan Parra Sepúlveda; el hombre de radio René Largos Farías, que había retornado del exilio hacía cinco meses; el secretario general subrogante del MDP, Osiel Núñez Quevedo, y Luis Godoy Gómez, miembro del PC. A todos se les acusaba de ser “agentes soviéticos”.

Pero el cerco aún no terminaba. En la extensa batida antiterrorista anunciada para el mes de agosto, diez personas fueron asesinadas en supuestos enfrentamientos ocurridos en Santiago, Concepción, Valdivia, Los Ángeles y Antofagasta en medio de numerosas detenciones individuales y colectivas. Después de estas operaciones, el intendente Guillard se sentía más confiado: “Lo que pasó anoche es una señal de que los días de la protesta van a ser más tranquilos porque quiero decirles ahora que los elementos de seguridad y las fuerzas de orden van a actuar en forma muy enérgica”<sup>36</sup>. En medio de la ola represiva, el propio Pinochet apuntalaba por otro costado: “Si es necesario, haremos otro 11 de septiembre”<sup>37</sup>. Si el estado de sitio estaba contemplado en el horizonte cercano, el dictador no quería precipitarse; primero constataría si el escarmiento arrojaba los resultados esperados.

En las primeras horas del lunes 3 de septiembre fueron requisados los ejemplares de las revistas Análisis, APSI y Cauce. Al día siguiente, el jefe de Zona en Estado de Emergencia ordenó la restricción de los servicios informativos de Radio Chilena y Cooperativa<sup>38</sup>. Ambas radioemisoras, ampliamente sintonizadas durante los días y noches de protesta, deberían limitarse a transmitir música, comerciales e informaciones oficiales del Gobierno. El silenciamiento quiso extenderse al espacio urbano con una fuerte presencia policial en distintos puntos de Santiago. En algunos lugares, como Pudahuel, La Victoria, Lo Hermida, desde la noche previa se realizaron operativos policiales y detenciones de dirigentes y jóvenes pobladores.

A pesar del fuerte dispositivo policial, en las semanas precedentes a las jornadas del 4 y 5 de septiembre la movilización popular continuó en funerales, marchas y asambleas. Consideramos que fue el clímax de una etapa. Con las jornadas de protestas de septiembre y octubre de 1984 se cerró un ciclo. El éxito y masividad de la participación popular fueron contrarrestados con una fuerza adversa y proporcional al poderío del movimiento social que ganaba las calles. Fueron

protestas que demostraron el poder de una oposición actuando conjuntamente para interpelar a la dictadura. La materialización de esto fue la constitución del llamado Comando Nacional por la Protesta, referente orgánico capaz de agregar, articular y concentrar variadas formas de poder y organizaciones parciales. A diferencia de los comandos reunidos en protestas anteriores, tuvo carácter público y mediático a través del rostro de líderes nacionales de las principales fuerzas sociales y políticas, incluidos los tres grandes conglomerados y el CNT.

La consigna de la Décima Jornada Nacional de Protesta fue “Sin protesta no hay cambios”. Y acentuaba su objetivo: “Luchamos por la vida, por el trabajo, por la justicia social y la libertad. Protestamos contra el régimen que niega esos grandes valores universales... recuperemos la dignidad del pueblo chileno, lo que se logrará cuando la soberanía popular se exprese con la elección de una Asamblea Constituyente”<sup>39</sup>. El diseño oficial de la convocatoria propuso que ambos días fuesen contrastantes. El primero se caracterizaría por una jornada de “gran movilización nacional”, en la que el acto principal sería el “Encuentro de la civilidad”, con la presencia de dirigentes que cantarían el himno nacional en el centro de las ciudades, acompañado por actividades sectoriales, como asambleas de estudiantes, de trabajadores y encuentros en las poblaciones. Por último, si la gente no podía movilizarse, se les pidió que entre las 10 y 11 de la mañana llamasen por teléfono para transmitir la consigna: “Que se vaya Pinochet: Viva Chile libre”. Para el segundo día se invitaba a abstenerse de realizar cualquier actividad (no salga, no compre, permanezca en su casa).

No obstante, lejos de haber paralización, los informes coinciden en que fue el miércoles 5 de septiembre el día de mayor participación popular en las calles, incluyendo procesiones religiosas y velatones motivadas por la muerte de un sacerdote, lo que impactó en el mundo de los pobladores y la vida nacional. Por otra parte, el diseño de la convocatoria estaba dirigido a los sectores medios e incluso acomodados (o proveniente de sectores afines a ellos), ya que difícilmente en aquellos años podrían encontrarse líneas telefónicas en los hogares de los pobladores o recursos como para hacer propaganda por ese medio. De todas maneras, a estas alturas, más allá de la propuesta oficial, las diversas formas de lucha que se expresaban en el espacio público contaban con la legitimidad suficiente como herramientas de confrontación elegidas por el sector que las enarbolaba.

Al interior de las poblaciones la actuación de las fuerzas policiales fue diversificada. En algunos lugares fue solo presencial, es decir, se limitaron a

observar a cierta distancia; en otros tuvo carácter incidental y en sectores como Pudahuel o La Victoria el hostigamiento fue global y permanente. Ya hemos recorrido escenas semejantes a lo largo de esta historia, en las que los pobladores son obligados a correr desnudos bajo amenaza de fusilamiento o a apagar las fogatas con las manos o los pies descalzos. Quizás tampoco sea necesario detenernos en el destrozo de las modestas viviendas, pero sí es oportuno insistir en el sistemático lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de las casas y el miedo de niños pequeños en serio riesgo de asfixia, hechos que se reportan por decenas. Nuevamente muchos jóvenes fueron detenidos en autos civiles o de carabineros, y luego encontrados brutalmente golpeados en lugares lejanos a sus domicilios. Pero al horror de estos métodos se agregó la utilización del yatagán como instrumental represivo, un sable usado por los militares chilenos durante la Guerra del Pacífico y que en septiembre de 1984 fue empleado para cortar el cuero cabelludo de los jóvenes pobladores.

Lo que se vivió en las calles en cuanto a la participación, extensión de barricadas y la imagen de paralización de actividades normales quizás superó a la jornada del 27 de marzo. Así se informó desde la población Yungay y J. Goulart, donde “toda la gente salía, cantaba alrededor de las fogatas” y demostraba tanta organización que “los carabineros no pudieron entrar al sector”. El análisis general de la Vicaría, redactado como síntesis de todos los informes zonales recibidos, coincidía con esa apreciación:

Desde temprano se observan barricadas y otras expresiones que más parecen de jolgorio que de protesta en algunas de las poblaciones más populosas. Hacia la tarde, y no solo en la noche, como ocurrió en situaciones anteriores, las barricadas tienden a multiplicarse y extenderse por todas las zonas populares de Santiago, declinando en las cercanías del toque de queda<sup>40</sup>.

También en lugares como la Villa Francia y Los Nogales se desarrolló una fuerte actividad, tanta, que los reportes la consideraron como “la mejor protesta del sector”. Según estas fuentes, ello se percibió en “la firmeza para resistir y mayor responsabilidad frente a actividades programadas, alguna participación popular organizada sin conducción política y con buenos resultados. Acompañamiento activo de la Iglesia local”. Entre las fogatas de Villa Ecuador, unos jugaban a la

pelota, otros vecinos cantaban o conversaban animadamente hasta la llegada de carabineros. Solo quedaron los más jóvenes tirando piedras, pero esta vez tenían un plan: provocar a un furgón de carabineros obligándolo a seguirlos hasta un pasaje sin salida. Con agilidad saltaron las panderetas que seguramente conocían bien y rodearon a los uniformados con una interminable lluvia de piedras. No hubo forma de escapar hasta que llegaron unidades cercanas para cubrirlos<sup>41</sup>.

Esa noche, una caravana blanquinegra de tanquetas, buses y uniformados con armas en mano recorrieron la zona sur. La gente durmió en el suelo o en los baños de sus casas. Se sabía que las balas podían alcanzar a cualquiera, como al sacerdote que murió en una población cercana. A pesar de la censura, corrió la noticia de que habían matado al padre André Jarlan de La Victoria.

En La Victoria y sus alrededores la protesta había comenzado desde la noche del lunes 3 de septiembre. Las detenciones y las balaceras en las áreas cercanas a las hogueras esparcidas en avenida La Feria también fueron prematuras y permanentes. En una de esas esquinas cayó herido Hernán Barrales, pero ni sus compañeros que lo llevaron en andas hasta la casa parroquial, ni las voluntarias que estaban de turno pudieron hacer algo para salvarle la vida. Tampoco el padre Pierre Dubois, que lo condujo como último recurso al hospital. Barrales tenía 25 años de edad y era comerciante ambulante. No obstante, la prensa insistió en que era un “lanza”. Más allá de si lo era o no, para los dueños de la violencia legítima era un sujeto carente de derechos. Por eso el ministro Márquez de la Plata se limitó a aclararle a la prensa que tal muerte no tenía importancia, pues se trataba de un “delincuente común con amplio prontuario policial”. Sus palabras fueron rotundas: “Hernán Barrales tiene ficha de escapero y monrero, y varias detenciones por hurto”, por lo tanto había que pasar a la siguiente pregunta<sup>42</sup>.

Muchos de los vecinos y cercanos temían que el padre Pierre Dubois sufriese la misma suerte de Barrales; mal que mal, el sacerdote arriesgaba demasiado. Jornada a jornada pedía calmar los ánimos de uno u otro bando, atravesaba la línea de fuego a gritos e insultos si era necesario y exponía el cuerpo como ya lo hemos presenciado más de una vez en la intensa trayectoria de las jornadas de protesta. Cuando el sacerdote regresó del hospital, traía el alma y el cuerpo cansado; sin embargo, lo primero que preguntó fue dónde estaba su compañero de casa, el padre André Jarlan. Era necesario comunicarle la noticia y continuar planificando una jornada que sería larga. Subió las escaleras. Entró al cuarto de Jarlan y lo encontró recostado sobre su escritorio. Estaba muerto. Esto fue lo que Pierre Dubois relató poco después:

Al final de la tarde, cerca de las seis, André subió a su pieza para leer la Biblia y descansar un poco de toda la tensión que habíamos vivido durante el día. Había sido una jornada tremendamente dura que empezó en la mañana con la muerte de un joven de 25 años y continuó luego con muchos golpeados y heridos. Un muchacho, muy amigo de André, había sido tremendamente maltratado. Él estaba muy triste, muy impactado... es la situación permanente en que viven los pobladores de La Victoria. Aquí por cualquier razón corren las balas... él compartió plenamente, en su vida y en su muerte, la suerte de los pobres de este sector<sup>43</sup>.

La bala que atravesó la pared de madera de la casa parroquial y asesinó a André Jarlán había sido disparada contra un grupo de manifestantes y periodistas que al percibir la llegada de carabineros arrancaban desde una barricada cercana en dirección a la casa parroquial. Fue lo que más impactó al padre Dubois: “La bala no apuntaba ni a André, ni a mí, ni a la casa. Pero era una bala que apuntaba a la población (...). Encuentro mucho más grave que hayan disparado al azar (...). Disparar balas en una población como la nuestra es un crimen (...). El peor crimen es despreciar la vida de los pobres”<sup>44</sup>.

Cuando se supo la noticia, la comunidad enardeció, esa fue la palabra que utilizaron todos los testigos; pero la represión, temerosa de la furia de los “victorianos”, tampoco les dio tiempo para atenuar el dolor. Todo eso lo vivió el periodista de Fortín Mapocho Gilberto Palacios:

Había gente que quería asaltar el retén. Todos lloraban y en las calles gritaban “Los pacos en su locura mataron a nuestro cura”. Se juntaron alrededor de 500 personas en la iglesia y ahí llegaron nuevamente los carabineros. Los encandilaban con las luces de los furgones. La gente estaba histérica y yo trataba de calmarlos, cuando me cayó una bomba lacrimógena por el costado. Casi me asfixié. Vino la arremetida y la gente se escondió en la iglesia. Se tiraron al suelo y rezaban... Poco después nos llamaron para ir a ver a un joven al que le habían tajeado el cuero cabelludo con un yatagán. Estaba tirado en la calle, desnudo<sup>45</sup>.



Las campanas de la iglesia resonaron durante varios minutos. Entonces se observó una procesión de hombres, mujeres y jóvenes que venían desde poblaciones cercanas con velas encendidas. Fueron colocándolas en las puertas y las rejas de la parroquia, luego en las calles. Las casas lucían crespones negros y algunos pusieron banderas a media asta. Los vecinos se amanecieron junto a las barricadas y se turnaron para vigilar el acceso a la población con un férreo control de entrada y salida.

Ese día, el centro de Santiago fue uno de los sectores geográficos más reprimidos, luego que en la plaza de Armas se reuniesen miles de personas a cantar el himno nacional, o a intentarlo, porque cada vez que pretendieron juntarse, la violencia con que respondió carabineros fue severa. Hubo numerosos heridos y contusos que debieron ser derivados a centros asistenciales. Mientras tanto, muy cerca de ahí, los altos mandos de gobierno se reunían para evaluar una jornada que proclamaron como de absoluta normalidad. Es más, el general Vidal llegó al punto de informar que la ciudadanía estaba ausente de la protesta y que todo se trataba de una confabulación del Partido Comunista<sup>46</sup>. Pero contradictoriamente a dicha percepción, para que nadie saliera de sus casas o, más bien, para que quienes protestaban salieran de las calles y regresaran a sus casas, el Jefe de Zona de Emergencia ordenó el toque de queda desde las cero horas hasta las cinco de la madrugada del miércoles 5 de septiembre.

En los sectores residenciales volvieron a escucharse los caceroleos nocturnos e incluso en los lugares catalogados como más conflictivos del barrio alto –las Torres de Fleming con Tomás Moro y Seminario con Bilbao–, los vecinos salieron a los parques cercanos para reunirse y tocar cacerolas. En la zona sur hubo un gran apagón. Santa Rosa estaba cortada desde Departamental hacia el sur y Américo Vespucio era intransitable entre Vicuña Mackenna y Gran Avenida. Se experimentaba una intensa actividad de protesta en las avenidas Lo Hermida, las Parcelas, Los Orientales y José Arrieta.

En las barricadas que relampagueaban entre La Cisterna y San Bernardo se encontraban Manuel Nibaldo Rodríguez Herrera de 14 años y Jorge Sánchez Donoso de 16; el primero cayó muerto y el segundo herido de gravedad por civiles que pasaron disparando. En Pudahuel, junto a las barricadas instaladas en calle Nicaragua, murió Manuel Morales Sanhueza, obrero de 30 años. Muy cerca de ahí fue detenido, junto con otros cinco pobladores, Juan Aguirre Ballesteros, obrero panificador de 23 años, que moriría en los días siguientes durante la tortura y estaría desaparecido alrededor de un mes. Su caso concitaría amplia

solidaridad entre organizaciones nacionales e internacionales<sup>47</sup>.

El número de detenidos en Santiago se elevó a 340 personas<sup>48</sup>. El gremio de autobuseros denunció que durante el día, cinco microbuses habían sido quemados, otros cincuenta resultaron con vidrios rotos, mientras que unos doscientos sufrieron los estragos de la cuantiosa siembra de miguelitos lanzados “con profusión” en las principales arterias. Tampoco se vieron muchos escolares. De hecho, su ausencia en las escuelas básicas y medias, especialmente durante la tarde, superó el 70% y en algunos establecimientos fue absoluta.

El día 5 de septiembre despuntó con cielos cubiertos. La gran cantidad de hogueras aún humeantes se mezclaba con la neblina que prosiguió a una noche especialmente fría y lloviznosa. Quienes querían llegar a sus trabajos debieron caminar, montarse en sus bicicletas o esperar pacientemente la escasa locomoción colectiva que solo se reanudó tímidamente hacia el mediodía, mientras decenas de trabajadores del POJH eran enviados a despejar las calles y levantar los escombros de la noche anterior. Fueron muy pocos los niños que se prepararon para ir a la escuela, y los comerciantes cerraron sus cortinas después de las 15 horas. Desde la tarde las informaciones llegaban hasta la Vicaría cableadas, dispersas y veloces para romper el cerco informativo. Eran tantas que lograban reconstruir el puzle:

Las manifestaciones, tales como barricadas, marchas y otras, rebrotan hacia la tarde y noche con mayor extensión y energía que en el día precedente. La represión se hace más intensa. La zona sur, y dentro de ella la población La Victoria, es escenario nuevamente de incidentes de magnitud, con decenas de heridos y contusos. En distintos grados, lo propio ocurre en numerosas poblaciones populares de Santiago... Como ocurre normalmente en estas circunstancias, la represión termina por afectar a manifestantes o no participantes, tornándose indiscriminada... La censura a las radios impide que la población tenga una información veraz de lo que está ocurriendo<sup>49</sup>.

Quienes en la zona sur vieron pasar una caravana de catorce microbuses y seis tanquetas de Carabineros no sabían si la comitiva se dirigía hacia la población San Gregorio o hacia La Bandera, pero desde distintas fuentes populares se supo

que hacia allá iba. La revista Solidaridad informó que grupos de militares circulaban y disparaban en Villa Los Presidentes de Ñuñoa y en San Joaquín; que las balaceras se extendían en toda la población Santa Adriana; que nuevamente en Américo Vespucio, entre Santa Rosa y Vicuña Mackenna, la situación era bastante conflictiva y que en Callejón Lo Ovalle los pobladores continuaban manifestándose en la calle, a pesar de que la policía disparaba balines y lacrimógenas persistentemente y que los accesos de distintas poblaciones estaban absolutamente clausurados, como en Los Copihues y San Luis de Macul. A los cinco saqueos que se denunciaron el día anterior se sumó otro asalto a un local del POJH en La Pintana, además de cuatro casetas incendiadas en avenida General Bonilla, Pudahuel y el robo e incendio a las bodegas municipales de La Granja, encabezados “por una verdadera turba humana”. Otra multitud asaltó una tienda de abarrotes en el paradero 37 de Santa Rosa y otras tantas participaron en el saqueo de un supermercado en la población La Castrina. Las crónicas comandadas por El Mercurio a través de datos extraídos de altas fuentes de las fuerzas del orden justificaban así la represión:

La situación vivida en las poblaciones periféricas, especialmente en el área sur, fue “delicada y grave”, lo que obligó a responder “en forma drástica” a los efectivos policiales, quienes lograron controlar la situación cerca de la medianoche. Llamó la atención de los policías el verdadero “aprovisionamiento” de combustibles y materiales que sirvieron para formar barricadas y lanzar proyectiles... Pobladores enardecidos enfrentaron a Carabineros en distintos puntos de la capital. En áreas poblacionales de las comunas de Conchalí, Pudahuel, San Miguel y La Florida fue imposible transitar debido a los constantes apedreamientos de que eran objeto los vehículos<sup>50</sup>.

Pero como señalábamos anteriormente, gran parte del impulso y la fuerza redoblada del segundo día de protesta estuvo sostenida en el impacto y dolor que provocó la muerte del padre André Jarlan. Lo que no decía la prensa ni los altos mandos del orden, lo detallaba la revista Solidaridad:

En varias capillas de la comuna de Pudahuel, con un trasfondo de balaceras, las

comunidades cristianas celebraban liturgias en homenaje al padre André Jarlan y los pobladores muertos. En varias capillas se izó el pabellón nacional a media asta, acompañado de un lema: “La Iglesia y el pueblo están de duelo por el asesinato del padre André y los pobladores. En nombre de Dios, cesen la represión”<sup>51</sup>.

Especialmente para los victorianos fue una jornada que perdura en la memoria. Hubo que levantar muros humanos para marcar límites y defender incluso el derecho al duelo. No es difícil entender que dichas prácticas desarrolladas en espacios cotidianos, y fortalecidas en instantes de peligro, fuesen vistas con extrañeza y desconfianza por quienes venían desde afuera. Volvamos a leer El Mercurio:

Muy pocos lograron traspasar las barreras formadas por enardecidos pobladores, por un lado, y carabineros... Desde las diez de la mañana se concentraron en calle Ranquil y en avenida La Feria centenares de manifestantes, que prácticamente “se apoderaron” del sector. Solo se permitió el paso a la parroquia La Victoria a dirigentes sindicales, autoridades eclesiásticas, algunos periodistas y comunidades cristianas de las poblaciones vecinas de Santa Adriana, Clara Estrella, Lo Valledor Sur, José María Caro y otras<sup>52</sup>.

Pero a pesar del cerco que conformaron los pobladores, el acoso policial no cesaba y los jóvenes seguían tirando piedras. Al caer la noche, el ambiente pudo calmarse un poco, pero solo un poco, porque piquetes de carabineros, sin lograr la intimidación perseguida, continuaban en sus contornos esperando cualquier provocación para actuar. Adentro, el ambiente era contrastante según los cables informativos de los vecinos: “Ambiente tranquilo, fogatas. No hay carabineros. La gente conversando con guitarras y velas encendidas”. Pero la tranquilidad defendida no duró mucho: “...al salir del velorio de Barrales, nuevo ataque con perdigones, 78 personas heridas, incluido el padre Pierre”<sup>53</sup>.

En el transcurso del día y el siguiente se supo de otras muertes: Julio Fernando Becerra, de 16 años, cayó muerto por balas de metralletas en la Villa Jaime Eyzaguirre; Alex Castro Seguel, de 16 años, murió electrocutado al tomar un

cable de alta tensión derribado cerca de la rotonda Rodrigo de Araya, y Miguel Ángel Urzúa Zúñiga, de 20, fue baleado mientras participaba en una barricada en la Villa O'Higgins. También murió el niño de cinco años Rodrigo Céspedes Céspedes, atropellado por un furgón de Carabineros que corría a gran velocidad en los bordes de la población California de Pudahuel. Un informe de la Comisión Chilena de Derechos Humanos señalaba que en los dos días hubo diez muertos y 1.574 detenciones en el país, ocho de ellos en Santiago, donde además se registraron 394 detenidos<sup>54</sup>.

Después vino el tiempo de enterrar a los muertos. La multitudinaria asistencia al funeral de Hernán Barrales, primera víctima de la protesta, incluso conmovió a la prensa oficialista:

El funeral no tuvo la tranquilidad deseada para estos actos, sino más bien sus participantes estaban angustiados, iracundos, con sus rostros ceñudos por el dolor y la impotencia ante una muerte, gritando organizadamente consignas políticas pidiendo el término de una situación social adversa<sup>55</sup>.

En emblemáticas fotografías, relatos y recuerdos quedó inscrita la procesión del viernes 7 de septiembre, cuando una columna de quince mil pobladores entró al centro de Santiago para despedir al padre André Jarlán. Les habían ofrecido buses y camiones para trasladarlos desde la parroquia de La Victoria hasta la Catedral Metropolitana. No quisieron. Que el Ministerio del Interior prefiriese autorizar el desfile y garantizar que Carabineros se mantendría al margen, limitando su presencia a desviar el tránsito, puede darnos buena idea de la decisión y fuerza que alcanzaban los pobladores. Eso sí, a la más mínima provocación, las fuerzas del orden reaccionarían.

La gente caminó junto al féretro más de 15 km y varias horas del reloj. Recorrieron caminos conocidos y cruzaron nuevos límites urbanos. Eran las cinco de la tarde cuando llegaron a la plaza de Armas:

En medio de una lluvia de papel picado que caía desde los céntricos edificios, la gruesa columna se abría paso dificultosamente para llegar hasta las puertas de la

Catedral. Todos querían entrar y decir adiós por última vez al “hermano André” (...). Con la cruz en alto cargada desde la parroquia de La Victoria por un muchacho, “de esos que al padre André quiso tanto”, los pobladores llegaron hasta el templo... Atrás quedaban días tensos y dolorosos<sup>56</sup>.

Esa columna compacta, disciplinada, avanzando en la ciudad fue un temblor que actualizó y confirmó temores. Por eso es que Andrés Allamand, entonces joven dirigente de la Unión Nacional, muy cercano al ministro Jarpa, advirtió a sus camaradas que la situación “está tomando un cariz que a nadie puede dejar tranquilo”. Ello era celebrado por el MDP, que aprovechaba el impulso para insistir en el llamado a un paro nacional:

Ha quedado demostrado que la causa democrática logra importantes triunfos cuando la oposición social y política toma decididamente el camino de la movilización unitaria para recuperar la soberanía popular... la jornada ha comprobado que el paro nacional convocado por el CNT y otras organizaciones no solo es necesario para acortar la tragedia nacional que el régimen ha descargado sobre la patria. También ha demostrado que ello es posible<sup>57</sup>.

El Comité Nacional por la Protesta, en cuanto referente unitario, también estaba dispuesto a convocar a nuevas movilizaciones: “Avanzaremos en la perspectiva de la protesta permanente y no nos permitiremos el descanso hasta terminar con la dictadura y alcanzar la democracia”<sup>58</sup>. El gobierno respondió mediante una acción judicial contra los diez dirigentes políticos y sindicales más reconocidos del comando: “Protestar no es delito –dijo el ministro del Interior–, pero sí lo es llamar a la protesta, incitar a la subversión y paralizar al país con los resultados de todos conocidos”. La querrela se amplió más tarde a “todos los que aparezcan responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores de los hechos que se han denunciado”<sup>59</sup>.

No obstante, como gesto de buena voluntad –según se recalcó–, Augusto Pinochet firmó una orden que les otorgaba la libertad a los dirigentes detenidos. Para capitalizar el “gesto”, Jaime Guzmán expresó claramente que la oposición que reconocía como interlocutora debía devolver la mano: “Que los dirigentes de

la AD actúen con reciprocidad frente a esta resolución gubernativa, absteniéndose de continuar promoviendo iniciativas como las protestas o la desobediencia civil, que solo favorecen al extremismo político, que busca polarizar las posiciones, incluso amparando el vandalismo del lumpen”<sup>60</sup>.

Pero el gobierno no alcanzaba a respirar cuando en distintos territorios ya se estaba preparando la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre. Aunque fue autorizada la reemisión del servicio informativo de Radio Cooperativa, se impuso una desesperada forma de censura que prohibió la publicación de imágenes en las revistas de oposición, incluido el periódico Fortín Mapocho. Tampoco los titulares podían ser alusivos a las manifestaciones populares: “Solo podrán informar acerca de las denominadas ‘protestas’ en las páginas interiores”<sup>61</sup>. Como protesta ante lo absurdo del decreto, los medios afectados comenzaron a dejar en blanco el espacio que ocuparían las fotografías, con detallados pies de página que describían la imagen proscrita o con creativos dibujos que ironizaban la censura. Por su parte, los reporteros agrupados en la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) continuaron haciendo su trabajo. Intentando mostrar lo que pasaba en Chile, colgaron sobre sus cuerpos las imágenes ampliadas y desfilaron por calles, plazas, universidades y puntos clave del centro y la periferia.

## El paro de octubre

El gobierno aprovechó la celebración de Fiestas Patrias para anunciar la devaluación del peso en 24%, justificada –según se explicó– por condiciones externas desfavorables, como la baja en el precio del cobre, el alza de la tasa de interés internacional y un deterioro en los términos de intercambio. El recrudecimiento para las ya adversas condiciones de la población se experimentó solo horas más tarde con el alza de la bencina y la parafina en casi 25%. Siguió el aumento de los alimentos y artículos básicos. De un día para otro, el pan, alimento básico de la familia chilena, subió un 36,89%. Todo indicaba que en un escenario político tan desfavorable, la medida sería resguardada por una decisión previa, es decir, que las autoridades barajaban una carta blanca en materia represiva que ya estaba acordada. La amenaza emitida por Pinochet sobre la posibilidad de encabezar “un nuevo 11 de septiembre” continuaba resonando.

Como era previsible, las alzas de septiembre aceleraron la decisión de llamar a un paro nacional. Para las organizaciones que impulsaban una instancia superior en el proceso de movilización social era el momento clave para canalizar la correlación de fuerzas demostrada en la última protesta. La primera iniciativa provino el 29 de septiembre desde el sindicato Madeco y las resoluciones aprobadas por las sesenta y cuatro organizaciones sindicales, sociales y políticas reunidas en la Mesa de Concertación Social del Área Metropolitana<sup>62</sup>. El principal acuerdo fue proponer al Comando Nacional de Trabajadores y a la Coordinadora Nacional Sindical la fecha del paro nacional para el 24 y 25 de octubre y advirtieron que si estos organismos no convocasen, se encargarían de llamar a un paro regional<sup>63</sup>. Además, se les solicitó a los dirigentes que concurrieran a la asamblea citada por el Consejo de Federaciones, Asociaciones y Sindicatos (Confasin) del CNT para comunicar la resolución: el paro, de carácter nacional o metropolitano, iba. Entre otros promotores, la Coordinadora Nacional Sindical –a través de su presidente Manuel Bustos– anunció que en dicha asamblea también impulsarían la paralización de actividades.

En los primeros días de octubre, dentro de las instalaciones de la Confederación del Cuero y del Calzado, el llamado metropolitano fue ratificado por más de doscientos sesenta dirigentes nacionales que al fin lograron ponerle fecha al paro



nacional: el 30 de octubre. A la convocatoria se plegaron el MDP y el Bloque Socialista; también adhirieron el Codepu y otras organizaciones sociales y políticas. Además, las organizaciones reunidas en el Comité Nacional por la Protesta convocaron a la Undécima Jornada Nacional de Protesta para el día 29. Sería el preludio. Desde el frente sindical, poco a poco comenzaron a plegarse otras organizaciones de trabajadores. Muchas declararon que si bien no estaban en condiciones de parar con todas sus letras, apoyarían con distintas formas de protesta. Tal fue el caso, por ejemplo, de la Confederación de Trabajadores Bancarios, que decidieron guardar cinco minutos de silencio al mediodía; golpear con sus cucharas las mesas de los casinos durante la hora de colación y trabajar sin corbata entre las 11 y las 12 horas<sup>64</sup>.

La postura de la AD comenzó siendo ambigua. Corrían los días y no se sabía si sus dirigentes nacionales “se pondrían” con el paro. Más de una vez, Gabriel Valdés fue interrogado por la prensa sobre su decisión, pero declinó pronunciarse porque su partido “aún no lo había considerado”. Fue Juan Claudio Reyes, presidente del Comando de Movilización Social de la Alianza, quien señaló que su coalición no adheriría a una convocatoria que no les convencía “desde el punto de vista de las relaciones necesarias que tienen que mantenerse”, no obstante apoyarían simbólicamente con su solidaridad<sup>65</sup>. Para el CNT fue un golpe bajo. Por más que se esforzaron para convencerlos de la necesidad de mantener una posición unitaria, fue inútil. El 23 de octubre lo intentaron por última vez, pero lo infructuoso de la reunión se leía en los rostros de Rodolfo Seguel, Manuel Bustos, Federico Mujica y José Ruiz Di Giorgio antes de ser consultados por la prensa. Lo único que consiguieron fue una declaración en la que la AD agregaba la palabra “irrestrita” a su anunciada solidaridad.

La AD tenía otras prioridades. En aquel momento estaba concentrada en impulsar el llamado Pacto Constitucional y en sostener conversaciones con la centroderecha para lograr un consenso con “otras fuerzas democráticas”. Se trataba de una modificación al proyecto original elaborado por el Grupo de los 24, que ya daba cuenta de una correlación favorable a la propuesta de Patricio Aylwin en cuanto dejar deliberadamente fuera de la discusión la ilegitimidad de la Constitución. El planteamiento de dicho documento lo resumía la postura de la Socialdemocracia como integrante de la Alianza: “Nuestro partido está dispuesto, por su vocación pacifista civilista y al servicio de los intereses superiores de la nación y para llegar a un consenso, a participar en negociaciones destinadas a modificar sustancialmente la Constitución del 80, tanto en su parte transitoria como en la permanente, para convertirla en un instrumento que

efectivamente garantice la vida democrática de los chilenos”<sup>66</sup>.

El resto de las coaliciones de oposición y organizaciones populares rechazaron el documento porque insistían en que no se trataba de “modificar” sino “erradicar” lo inaceptable. Germán Correa, entonces consejero nacional del MDP, fue uno de los tantos que señalaron las insuficiencias del Pacto Constitucional y su negativa a firmar tal propuesta, ya que, según dijo, “carece de un pronunciamiento explícito y tajante sobre la ilegitimidad del régimen y sobre la necesidad de que el acuerdo democrático se funde en la exigencia de su inmediato término, lo que implica fundamentalmente la salida de Pinochet del poder y el desconocimiento tajante y claro de la Constitución de 1980”<sup>67</sup>.

El ambiente fue tenso en los días previos a la protesta. En las antípodas de esa discusión, el FPMR daba inicio a lo que llamó una “nueva y superior etapa ofensiva contra el Gobierno” que contemplaba la creación y reclutamiento de Milicias Rodriguistas<sup>68</sup>. Desde mediados de octubre redoblaron las tareas de sabotaje. Entre ellas destacó la voladura de varias torres de alta tensión, acompañadas de cadenas y desplomes de postes que dejaron sin luz a siete regiones y a todas las comunas de la capital, incluyendo –a diferencia de otras ocasiones– a todo el centro de Santiago. En la ciudad, sin semáforos ni trenes (un explosivo destruyó 50 m de línea férrea en el kilómetro 399 en la red ferroviaria al sur), resonaron alrededor de veinte explosiones menores, especialmente en las oficinas de entidades bancarias<sup>69</sup>.

Aunque hasta entonces quizás ninguna acción había sido tan osada como el coche bomba que explotó en la madrugada del 26 de octubre frente al edificio Diego Portales, centro de operaciones de la Junta Militar desde el golpe de Estado. De inmediato Augusto Pinochet concentró en las oficinas de La Moneda a su núcleo más cercano de ministros y representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para pedir explicaciones. Entre la inminencia del paro nacional y la vulnerabilidad demostrada, el consejo de emergencia dispuso movilizar de inmediato personal desde regiones para reforzar las inmediaciones de los edificios de gobierno, lo mismo para las principales torres de alta tensión. Paralelamente, la relegación de pobladores capturados en los intensificados operativos “rastrillo” se agilizó antes, durante y después del día 30 y fueron acompañadas por una fuerte campaña mediática que insistió en presentar a los más pobres de la ciudad como delincuentes comunes a quienes la autoridad sometería a un proceso de “rehabilitación social”.

Pero a pesar de la alta cantidad de detenidos y relegados después de los allanamientos –que superaron las doscientas personas–, la protesta del día 29 de octubre mantuvo los altos niveles de participación de la jornada anterior y logró su objetivo central: agitar los ánimos para el paro nacional. Aunque más masiva, se desarrolló prácticamente en los mismos términos que otros días de protesta. Durante la mañana, en torno al ex Pedagógico hubo enfrentamientos entre centenares de estudiantes universitarios y secundarios contra carabineros que cercaban el lugar. En distintas facultades volaban panfletos, se escuchaban gritos y se escribían rayados que simplemente decían ¡El paro, va! Pasado el mediodía, en las puertas del edificio de la Vicaría de la Solidaridad –a un costado de la Catedral–, dirigentes del Comando Nacional por la Protesta se congregaron junto a cientos de manifestantes para intentar dar lectura a una proclama. No lo lograron. Muchos de los jóvenes, en su mayoría estudiantes, se enfrentaron durante horas con las fuerzas policiales.

Como era costumbre en este contexto, el gobierno anunciaba en horas de la tarde que no habría toque de queda, ya que “la situación del país está bajo control”. Luego, como de costumbre, cambió de opinión. Por la tarde, hubo decenas de atentados explosivos contra cabinas telefónicas, postes de luz, edificio de Impuestos Internos, grifos, etc. Según el diario La Segunda, se trató del “epílogo de una agitada noche vivida en ese populoso sector. –Y agregaba–: Todo el sector estaba rodeado de barricadas aún humeantes, miguelitos, piedras y tapas de alcantarillado que bloqueaban las principales vías de acceso”<sup>70</sup>.

A pesar de que los propios dirigentes sindicales decían –o advertían– no hacerse desmedidas ilusiones sobre el paro en su forma clásica, es decir, lograr la paralización general de actividades productivas y que la mera alteración de ellas ya podían considerarla como un éxito, fue cualitativamente más significativo que otras jornadas. Las razones para no hacerse demasiadas expectativas eran varias; entre ellas, no podían esquivarse los altos niveles de cesantía que infundían temor a perder las escasas fuentes de empleo; aún estaba presente el despido masivo como escarmiento al paro del cobre en junio de 1983, y pesaba la ausencia de referentes políticos y sindicales de importancia, como la AD y la UDT, que no se sumaron a la convocatoria. Pero con todo, el 30 de octubre superó las expectativas. Fue la última de las grandes Jornadas Nacionales de Protesta, cuya masividad e impacto quizás solo tendría réplica casi dos años después durante el paro del 2 y 3 de julio de 1986 y las conmemoraciones de otros 11 de septiembre (especialmente 1985 y 1986).

Los universitarios intensificaron la protesta no asistiendo a clases, pero concentrándose en diversas actividades al interior de los campus considerados conflictivos, a pesar de que las autoridades universitarias ordenaron el cierre de todas las universidades metropolitanas. Según fuentes de Carabineros que prácticamente coincidían con las del CNT, hasta el mediodía la actividad del país se concentraba de la siguiente manera:

Asistencia a clases de alumnos universitarios, 17,2%

Asistencia de alumnos de enseñanza media, 23,2%.

Asistencia de alumnos de educación básica, 29,0%.

Transporte colectivo, circulaba un 21,3%.

Transporte colectivo rural, un 47,3% y un 27% del transporte de carga.

“¡Santiago quedó desierto!”, titulaba la contraportada de La Tercera e informaba que en ese día martes los restaurantes se veían vacíos y que las calles normalmente plagadas de gente lucían como un día festivo. Del mismo modo, fue muy baja la actividad en los sectores financiero y bursátil. Hasta ese momento habían asistido el 54% de los trabajadores del sector industrial a cumplir con sus faenas, mientras el comercio mantenía abierto un 36% de los locales, cifra que fue bajando hasta ser prácticamente nula después del mediodía. Al caer la tarde y noche, eran pocas las almas que transitaban por las calles de Santiago.

Las calles vacías, para algunos, fueron consecuencia de las tácticas de

contención al libre tránsito de la locomoción o el temor de la gente que prefirió no salir de sus casas; para otros, en cambio, respondió sencillamente a la adhesión que concitó el paro. Lo cierto fue que la ciudad durante el 30 de octubre quedó desierta y que a pesar de la mediana paralización de faenas productivas, los objetivos se cumplían. La preocupación creció en La Moneda. Durante la tarde se anunció que se aplicaría el toque de queda desde las 10 de la noche y se redoblaron las fuerzas militares en las avenidas principales. Para controlar a los manifestantes del sector oriente, un fuerte contingente de soldados con caras pintadas y atuendos de camuflaje pasaron la noche resguardando las rotondas Vicuña Mackenna, Departamental, Quilín y Grecia.

Pero la protesta ya había comenzado. Las calles poblacionales amanecieron el día 30 de octubre con el ya típico olor a combustible, con el humo y los miguelitos diseminados que impedían el tránsito y demarcaban el territorio. Al mediodía, las estadísticas entregadas por el gobierno contabilizaban la detonación de 47 explosivos en todo el país, 27 de ellos en Santiago. Además de 15 atentados que afectaron a Ferrocarriles, sin dar cifras específicas en lo concerniente a la locomoción colectiva y otros servicios. En la capital daban cuenta de 14 sectores cubiertos de miguelitos y alrededor de diez “con serios problemas y fogatas”. En tanto, se registraban 13 concentraciones, la mayoría de ellas en Santiago, algunos incendios y dos atentados a poblaciones o entidades militares o policiales<sup>71</sup>.

Por su parte, los informes de la Vicaría señalaban que en general se observaba una excelente organización. Dentro y alrededor de las poblaciones el comercio abrió solo en la mañana, y durante la tarde hubo diversas marchas y mítines con una cantidad considerable de pobladores movilizados en las calles. Por ejemplo, se supo que en la población Huamachuco y en la Cardijn en la zona norte, el comando del paro que conformaron los pobladores logró que la feria del sector paralizara poco después del mediodía; y en el sector de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, su respectivo comando consiguió dialogar y convencer a los choferes de locomoción colectiva para que los buses no salieran a sus recorridos. Desde la población La Legua, los reportes también daban cuenta de una importante organización comunitaria, como la encabezada por un grupo de vecinos que se instalaron muy temprano en las puertas de la Industria Sumar para impedir la entrada de los trabajadores y lograron –según reportaban orgullosamente– que solo entrase un microbús con 15 hombres. También se supo que en la Legua “cuando los panaderos llegaban a la población para distribuir el pan a las panaderías, los pobladores se apoderaron de 6 canastas de 200 kg cada

una y las repartieron en la población en forma gratuita”. También se informó que al mediodía, en algunos lugares de La Legua, se haría un almuerzo colectivo<sup>72</sup>.

Los testigos se preocuparon de transmitir el ambiente de fiesta que se propagó en esos territorios. Así fue, por ejemplo, en el sector de Cerro Navia, zona oeste de Santiago, “donde incluso se integraron pobladores que antes no participaban”. En la población Jaraquemada y Lo Franco también se expandió la fiesta y las actividades comunitarias: “Había ambiente de jolgorio cerca de las fogatas y barricadas; se jugaba tenis, fútbol y a la escondida. La población estuvo en la calle desde las 7 de la mañana hasta las 20:00 horas. Y después, caceroleo hasta las 23:00 horas. Participación amplia de todos los sectores de oposición”<sup>73</sup>. También en Los Nogales, desde donde se informaba: “Toda la gente en la calle, como en fiesta. Mayor participación de adultos. Gran cantidad de barricadas. No aparecieron carabineros”. En la zona oriente, los informes referían que “al atardecer, en Santa Julia los ancianos llegan a sacar bancos a la calle como día festivo”. Más confrontacional fue en sectores como Rodrigo de Araya y Los Copihues, donde tempranamente las manifestaciones “alcanzan gran intensidad y actitud combativa”.

La prensa, a la que por mandato gubernamental se le había prohibido exhibir información de la protesta en sus portadas, debiendo limitar toda referencia a las páginas interiores, procuró ofrecer una amplia cobertura a cargo de corresponsales que siguieron la jornada desde el contorno de las poblaciones más emblemáticas, insistiendo en una mirada inquietante:

Poblaciones como La Legua, La Victoria, José María Caro y otras de los alrededores estaban convertidas en verdaderos “bastiones” por el gran número de barricadas que impedían un normal acceso al interior de ellas (...). Nuestro móvil intentó continuar viajando al norte de Santa Rosa, pero al llegar a la población San Gregorio, en el paradero 23 de esta arteria, fue imposible seguir. A las barricadas de piedra, fogatas y alambre se agregaron ahora miguelitos de unos diez centímetros de largo, que estaban esparcidos por toda la calzada. Al mismo tiempo, grupos de personas exaltadas comenzaron a lanzar piedras al vehículo<sup>74</sup>.

A bordo de un helicóptero, los periodistas de La Tercera recorrieron distintos puntos de la ciudad, incluso reportaron una importante congestión en el barrio alto provocada por automovilistas que ocasionaban embotellamientos frente a la plaza comercial Apumanque. En tanto, en el paso bajo nivel de Ramón Cruz en la Villa Frei se conformaron barricadas rodeadas por manifestantes que eran dispersados cada cierto tiempo, “pero por tratarse de grupos de decenas de jóvenes, lograban escabullirse con rapidez, evitando su detención y volviendo a reagruparse poco más tarde”<sup>75</sup>. Según se informó, nuevamente fueron saqueados tres locales cerca de la José María Caro, en tanto, durante una marcha de cientos de personas por el sector de avenida Departamental con Las Industrias, un francotirador –que dijo sentirse amenazado por un posible saqueo– disparó desde el segundo piso de una panadería contra el desfile de pobladores, y entre una decena de heridos asesinó al joven de 17 años Cristián Lara Valdés.

Durante la jornada hubo nueve personas muertas, siete de ellas en Santiago. En la barricada de calle Ochagavía, Fernando Montecinos Verdejo, de 23 años, fue herido de muerte por carabineros. En la rotonda Grecia, civiles a bordo de un Opala amarillo dispararon contra un grupo de pobladores: cayó el obrero del POJH Bernardo Jara López, de 34 años, y también fue herido Luis Rubio Garrido, de 21 años, que falleció horas más tarde. Cerca de ahí, en Exequiel Fernández con Grecia murió Juan Aguirre, de 27 años. Además, en esta fecha un trágico accidente enlutó a la comuna de Pudahuel: mientras iba en su bicicleta, el niño Hugo Rodríguez tropezó con un cable de alta tensión derribado en las calles Salvador Gutiérrez con Huelén. Al oír los gritos del niño, el reconocido dirigente poblacional Juan Pino Elizondo intentó rescatarlo. Ambos murieron electrocutados. Además, entre los días 29 y 30 de octubre hubo 447 detenidos en Santiago y 59 personas heridas a bala y balines<sup>76</sup>.

Como respuesta, Augusto Pinochet pronunció un discurso feroz. Desde el Casino de Viña del Mar daba por clausurado cualquier acuerdo de diálogo (lo que no era nada nuevo) y repetía con fuerza intimidante: “Si es necesario, promulgaré estado de sitio... pero Chile no volverá a la situación existente hasta el 10 de septiembre de 1973”<sup>77</sup>. En este importante discurso, que fue llamado “Pensamiento político del Supremo Gobierno”, el general le daba un lugar protagónico a las Jornadas Nacionales de Protesta como fuerza desestabilizadora:

Desde abril de 1983, sectores opositores han desarrollado acciones que denominan de “movilización social”, que son expresión de la “desobediencia civil” ante la “ilegitimidad del orden constitucional” que proclaman. Las protestas, arma política de esta desobediencia que tantos daños humanos y materiales han ocasionado a la nación, están calculadamente realizadas para provocar un ambiente de desorden progresivamente ingobernable, que altere decisivamente la vida nacional (...). En tal situación, señores, no se puede continuar aceptando la actitud desquiciadora de una oposición revanchista y sus proyectos mesiánicos y dogmáticos<sup>78</sup>.

Días más tarde, la “gota que rebasó el vaso” fue el atentado explosivo contra un bus de carabineros que circulaba por la ruta 68 de Valparaíso, en el que murieron cuatro uniformados y doce resultaron lesionados, y el ataque con granadas y metralletas al cuartel de la Décima Comisaría de Carabineros, en el que hubo dos policías muertos, tres heridos e importantes daños en el edificio<sup>79</sup>. Sin embargo, no solo se trataba de este temor tan evidente. Se sabía que la capacidad de fuego del gobierno no tenía el más mínimo parangón con estos piquetes rebeldes, por más osados que fuesen. También resultaban desafiantes los procesos de democratización que se materializaban en la base. Recordemos que por esos días los universitarios traían “buenas nuevas” y que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile había revivido en un proceso en que la lista unitaria de la oposición –imposible hasta entonces de materializar por arriba– había arrasado, al igual que en otras universidades del país. La unión de una juventud politizada era un peligro político; también lo era la disposición a la confrontación que hasta entonces y en forma creciente se percibía en los pobladores. Hacia allá apuntarían las medidas del estado de sitio.

■

[1 Entre los acusados como instigadores se encontraba el padre Marcos Buvinic, quien, no obstante, al desarrollarse los hechos se encontraba celebrando la Eucaristía en la Comunidad del Buen Pastor.](#)

[2 El 7 de abril fueron otorgados los salvoconductos. Después de tanta espera, los cuatro militantes del MIR, Jaime Yovánic, José Aguilera, Pamela Cordero y Elba Duarte volaron rumbo a Ecuador.](#)



<sup>3</sup> “Comando Nacional de Trabajadores: preparando protesta del 27”. Solidaridad, N° 173, primera quincena de marzo de 1984, p. 17.

<sup>4</sup> Recordemos que el decreto había sido derogado el 26 de agosto de 1983, como parte de los “gestos” de buena voluntad del gobierno.

<sup>5</sup> “El país puede estar tranquilo”. El Mercurio, 25 de marzo de 1984.

<sup>6</sup> “Instructivo único”. Análisis, N° 78, 27 de marzo al 10 de abril de 1984, p. 24.

<sup>7</sup> Las Últimas Noticias, 28 de junio de 1984.

<sup>8</sup> “Más paro que protesta”. Solidaridad, N° 174, segunda quincena de marzo de 1984, p. 19.

<sup>9</sup> Ficha sobre situaciones N° 6 zona oeste, comuna de Pudahuel, población Lo Amor. Protesta 27 de marzo de 1984. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>10</sup> Las Últimas Noticias, 28 de junio de 1984.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> “Saquearon tienda Bata en la JM Caro”. La Segunda 28 de marzo de 1984; Informe Mensual, Vicaría de la Solidaridad, marzo de 1984, p. 108.

<sup>13</sup> Carta del P. Jesús Herrero s. m. al Sr. Arzobispo de Santiago, Mons. Juan Francisco Fresno. Marzo 1984. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>14</sup> Desde el 24 al 30 de marzo hubo 54 estudiantes detenidos, 21 cesantes, 16 técnicos y empleados, 12 obreros, 6 obreros del POJH, 6 comerciantes, 5 artesanos y un profesional. Según sus edades, los menores de 18 son 11; entre 18 y 25 son 65; entre 26 y 35 son 15, entre 36 y 45 son 4, mayores de 46 son 11, no informado 32. En: Atención y represión: desde el sábado 24 al viernes 30 de marzo de 1984. Documento interno. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>15</sup> “Responsabilidad es de organizadores”. El Mercurio, 28 de marzo de 1984.

<sup>16</sup> La protesta del 27 de marzo de 1984. Informe de circulación interna. Archivo

## Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>17</sup> Prueba de ello fueron las reuniones que sostuvo con el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Ernesto Ayala. También salieron el director de Impuestos Internos, Felipe Lamarca, y Martín Costabal, director de Presupuesto. Un mes más tarde, se formalizaría la salida del presidente del Banco Central, Hernán Felipe Errázuriz.

<sup>18</sup> “Primera dama partidaria del Estado de Sitio”. El Mercurio, 3 de abril de 1984. “Si yo fuera presidente, tendría a Chile en Estado de Sitio”. La Tercera, 3 de abril de 1984.

<sup>19</sup> Hubo casi cien detenidos, más de treinta heridos y cientos de golpeados. Ese día, en el cinturón periférico de la ciudad mataron al “Pelluco” mientras caminaba por canchas de Américo Vespucio en la población Simón Bolívar, donde se desarrollaban manifestaciones y fogatas. Se llamaba Pedro Mariqueo, tenía 15 años y era conocido como “bueno para la pelota”. Sus compañeros y vecinos lo lloraron, le escribieron poemas y miles de pobladores acompañaron su sepelio. Ver: “Compartir”, N° 55, mayo 1984, Vicaría zona oriente; y “33 heridos y 92 detenidos tras concentración del CNT”. El Mercurio 2 de mayo de 1984.

<sup>20</sup> “Protesta Nacional 11 de mayo de 1984”. “Por la democracia, contra el hambre, la violencia y la corrupción”. Comando Nacional por la Protesta. Mayo de 1984. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

### <sup>21</sup> Según los indicadores:

- Edades: 31 personas tenían entre 26 y 49 años, 24 tenían 18 años o menos, 8 de ellos eran niños menores de 14 años.

- Oficio: 8 comerciantes, 3 artesanos, 3 dueñas de casa, 2 empleados, 3 transportistas, 2 profesionales, 1 ex cabo del ejército, 9 eran trabajadores varios, comerciantes por cuenta propia, técnicos menores, etc. En 27 casos se ignora la actividad y en tres casos no la tenían por ser menores de 4 años. 8 estaban cesantes.

- Zonas: 84 en Santiago y 16 en provincias. Dentro de la capital se contabilizaban 26 muertos en la zona oeste, 19 en la zona sur, 16 en la zona oriente y 9 en la zona norte, 4 en la zona Providencia-Las Condes, 6 en la zona centro, 3 en la zona rural costa, y 1 en Santiago, sin especificar. Asimismo, se

incluían los 10 policías y agentes de seguridad muertos durante este tiempo. En: Gutiérrez, Ignacio. “Por una cultura de vida, basta de muerte”. Informe del Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales de la iglesia de Santiago, julio de 1984.

En línea:

[http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4c728a6b67404\\_23082010\\_1049am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4c728a6b67404_23082010_1049am.pdf)

<sup>22</sup> [“AD propuso retorno a la democracia en 1985”. El Mercurio, 14 abril 1984.](#)

<sup>23</sup> [“Encontradas reacciones por discurso de Gabriel Valdés”. El Mercurio, 15 de mayo 1984.](#)

<sup>24</sup> [“Reconocemos como situación de hecho a la Constitución del 80”. El Mercurio, 22 de abril 1984.](#)

<sup>25</sup> [“AD dispuesta a aceptar ‘de hecho’ la Constitución”. El Mercurio, 5 de mayo de 1984.](#)

<sup>26</sup> [“Reconciliación: Esperanza de esta hora”. Solidaridad, N° 176, 5 al 18 de mayo de 1984.](#)

<sup>27</sup> [“Patricio Aylwin aclara el sentido de su proposición en seminario del ICHEH”. La Segunda, 2 de agosto de 1984.](#)

<sup>28</sup> [“Un toque de sensatez”. El Mercurio, 19 de agosto de 1984.](#)

<sup>29</sup> [Otano, Rafael. Nueva Crónica de la Transición. LOM, Santiago, 2006.](#)

<sup>30</sup> [“Reiteran necesidad de Asamblea Constituyente”. El Mercurio, 31 de julio de 1984.](#)

<sup>31</sup> [“La AD rechaza ley de partidos políticos”. La Tercera, 24 de julio de 1984.](#)

<sup>32</sup> [“Un toque de sensatez”. Op. cit.](#)

<sup>33</sup> [Los socialistas discrepaban en ese punto, según la nota, señalando que había que vencer políticamente al régimen por medio de un pacto constitucional civil, una oposición única y la desobediencia activa de las masas a través de la movilización social. “En tres rounds se definieron cuatro corrientes políticas”.](#)

La Segunda, 27 de agosto de 1984.

<sup>34</sup> Entre ellas, el 17 de junio se supo que el PC ganó la elección de directiva en el Campamento Silva Henríquez con la presidencia de Feliciano Barra, de 28 años de edad.

<sup>35</sup> Otras muertes habían ocurrido en las semanas anteriores, como la de María Loreto Castillo. La prensa insistió en que había muerto por la detonación anticipada de una carga de dinamita que colocaba en una torre de alta tensión junto con Jorge Muñoz. En contraste, el relato que acusaba a la CNI de detenerlos en su propio domicilio fue entregado por su pareja, Héctor Muñoz, que logró huir.

<sup>36</sup> “Se actuará con máxima energía”. El Mercurio, 25 agosto de 1984.

<sup>37</sup> “Si es necesario, haremos otro 11 de septiembre”. El Mercurio, 20 de agosto de 1984.

<sup>38</sup> A la Revista Cauce se le prohibió circular por cinco ediciones. Horas después, la medida se aplicó a regiones: fueron censurados La Voz de la Costa de Osorno, El Sembrador de Chillán y Presidente Ibáñez de Punta Arenas. El jueves 6 de septiembre se levantó la restricción a Radio Chilena y a La Voz de Osorno, también a revista Cauce, y el sábado 8, a Radio Cooperativa. Paralelamente, a las revistas se les prohibió la publicación de todo material gráfico.

<sup>39</sup> Solidaridad, N° 184, 1 al 14 de septiembre de 1984, p. 4.

<sup>40</sup> La Protesta del 4 y 5 de septiembre... Op. cit.

<sup>41</sup> Descripción situación por decanatos, parroquias y sectores. Zona oeste días 4 y 5 de septiembre de 1984, p. 13. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>42</sup> “Protesta fue un rotundo fracaso”. La Tercera, 5 de septiembre de 1984.

<sup>43</sup> “Compartió la suerte de los pobladores”. Solidaridad, N° 185, del 14 al 28 de septiembre de 1984.

<sup>44</sup> “Pierre Dubois. Cura de mi población”. Extracto de entrevista realizada en septiembre de 1984 por la periodista Raquel Correa para revista Cosas. En: “Compartir”, N° 61, Vicaría zona oriente. Noviembre de 1984, p. 9.

<sup>45</sup> “Chile se moviliza”. Análisis, N° 90, del 11 al 25 de septiembre de 1984.

<sup>46</sup> “Grupos reducidos intentaron crear clima de violencia”. El Mercurio, 5 de septiembre de 1984.

<sup>47</sup> Casi dos meses después de figurar como detenido desaparecido, el cadáver mutilado de Ballesteros fue encontrado en un estero de Codigua por unos conscriptos. El caso de Ballesteros fue emblemático para denunciar la tortura sistemática aplicada contra los pobladores.

<sup>48</sup> La emergencia sanitaria llegó a tal punto que el Servicio Único de Ambulancias (SUA) declaraba que había sido requerido en centenares de oportunidades, no obstante no pudo acudir a todos los llamados, ya que al menos treinta de sus unidades fueron inutilizadas por apedreos y pinchazos de neumáticos.

<sup>49</sup> El segundo día de la Protesta. En: La Protesta del 4 y 5 de septiembre. Op. cit.

<sup>50</sup> “Cinco heridos a bala, bombas y barricadas en violencia nocturna”. El Mercurio, 6 de septiembre de 1984.

<sup>51</sup> “Una represión lamentable”. Solidaridad, N° 185, del 14 al 28 de septiembre de 1984.

<sup>52</sup> “Tensas horas en La Victoria”. El Mercurio, 6 de septiembre de 1984.

<sup>53</sup> “El segundo día de la Protesta”, p. 2. En: La Protesta del 4 y 5 de septiembre. Op. cit.

<sup>54</sup> Según los atendidos por la Vicaría: Edades: Los detenidos del día 4 de septiembre eran 29 menores de 18 años; 57 personas de entre 19 y 25 años; 23 mayores de 26; y 17 s/i. Zonas: 54 en la zona centro; 22 en la zona oeste, 9 en la zona sur, 4 en la zona oriente, 3 en la zona norte; 5 s/i. (total: 96). Entre los detenidos del día 5: Edades: 6 menores de 18 años; 7 de entre 19 y 25 años; 3 mayores de 26; y 1 s/i. Zonas: 1 en la zona centro; 1 en la zona oeste, 8 en la zona sur, 4 en la zona en la oriente, 1 en Malloco, 1 en Atacama (total: 17). Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, septiembre de 1984.

<sup>55</sup> “Sepultada primera víctima de la protesta”. La Tercera, 7 de septiembre de 1984.

<sup>56</sup> “André Jarlan: Eres parte de nuestra esperanza”. Solidaridad, N° 185, del 14 al 28 de septiembre de 1984.

<sup>57</sup> “Políticos hicieron balance de la protesta”. El Mercurio, 7 de septiembre de 1984.

<sup>58</sup> Declaración Pública. Comité Nacional por la Protesta. Santiago, septiembre 6 de 1984. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>59</sup> La medida afectó a Mario Sharpe, Enrique Silva Cimma, Gabriel Valdés, Juan Claudio Reyes, Manuel Almeyda, Fanny Pollarolo, Luis Barría, José Luis di Giorgio, Raúl Montecinos y Manuel Bustos. Abogado del Ministerio del Interior, Humberto Neumann. “Acción judicial contra Comando de la protesta”. El Mercurio, 11 de septiembre de 1984; “Ministro del Interior amplió requerimiento”. El Mercurio, 13 de septiembre de 1984.

<sup>60</sup> El Mercurio, 11 de octubre de 1984.

<sup>61</sup> Bando N° 19 de la jefatura de la Zona en Estado de Emergencia de la Región Metropolitana y Provincia de San Antonio. 8 de septiembre de 1984.

<sup>62</sup> En ella estaban reunidas, entre otras: el Comando Metropolitano de Trabajadores, Coordinadora Metropolitana de Pobladores, Movimiento Poblacional Dignidad, Coordinadora Cultural Metropolitana, Codepu, Proden, Mudechi, Coordinadora Multigremial de la Salud, etc.

<sup>63</sup> Resoluciones de la mesa de concertación social del área metropolitana. Santiago, octubre de 1984. “Ahora”, Comando Metropolitano de Trabajadores (CMT), N° 3. Octubre de 1984.

<sup>64</sup> La Tercera, 28 de octubre de 1984.

<sup>65</sup> La Tercera, 20 de octubre de 1984.

<sup>66</sup> Ibid., 26 de octubre de 1984.

<sup>67</sup> El Mercurio, 23 de octubre de 1984.

<sup>68</sup> Las Milicias Rodriguistas fueron creadas por el FPMR y el PC en virtud del llamado Trabajo Militar de Masas (TMM). Habrían debutado territorialmente

durante el paro de octubre de 1984, pero se impulsaron más públicamente a partir del Plan de Sublevación Nacional lanzado en enero de 1985, con el fin de expandir la rebelión y autodefensa a nivel territorial.

<sup>69</sup> En entrevista, Germán Guerrero, Jefe de Operaciones de Endesa, refería el conflictivo panorama que enfrentaba su institución: desde 1984 habían sido derribadas unas 50 torres de alta tensión a pesar de redoblar la seguridad en el área que rodeaba a los sectores estratégicos de interconexión. La Segunda, 17 de octubre de 1984.

<sup>70</sup> La Segunda, 30 de octubre de 1984.

<sup>71</sup> “Balance del paro: 2 heridos y 141 detenidos”. La Segunda, 30 de octubre de 1984, p. 27.

<sup>72</sup> Información de las vicarías zonales de la Arquidiócesis de Santiago sobre la protesta del 29 de octubre y paro nacional del 30 de octubre de 1984. Departamento de zonas. Vicaría de la Solidaridad, p. 5. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>73</sup> Ibid., p. 12.

<sup>74</sup> Un periodista señalaba que desde temprano, en las calles y avenidas poblacionales de la zona sur se observaba una paralización casi total, principalmente en Santa Rosa, Departamental, Ochagavía, Gran Avenida, Vicuña Mackenna y Américo Vespucio. Semejante panorama se vivía en Pudahuel, “transformada en una comuna impenetrable”. Las garitas de microbuses y taxis estaban cerradas y prácticamente ningún medio de transporte se atrevía a sortear la numerosas barricadas. El paisaje “tapizado de barricadas” lucía también en prácticamente todas las arterias de la zona oeste, especialmente Pudahuel, Quinta Normal y Maipú. La Segunda, 30 de octubre de 1984.

<sup>75</sup> La Tercera, 31 de octubre de 1984.

<sup>76</sup> Muertes ocurridas el día 30 en Santiago y provincias. Octubre de 1984. Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.

<sup>77</sup> El Mercurio, 30 de octubre de 1984.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> [“Comunicado oficial de Carabineros de Chile”. La Segunda, 2 de noviembre de 1984; La Tercera, 6 de noviembre de 1984.](#)



## CAPÍTULO IX

### ESTADO DE SITIO O LA NUEVA PACIFICACIÓN DE CHILE

“Ejerciendo las atribuciones que me confiere la Carta Fundamental, he decretado, a partir de esta fecha, el estado de sitio en todo el territorio nacional para poner fin a la criminal escalada terrorista y subversiva y para impedir alteraciones del orden público como las que han venido afectando a la tranquilidad ciudadana”<sup>1</sup>.

Era el 6 de noviembre de 1984 cuando el capitán general Augusto Pinochet, Presidente de la República, jefe de la Suprema Junta de Gobierno y comandante en jefe del Ejército, declaró a Chile bajo estado de sitio. Amparado en la Constitución de 1980, no dudó en utilizar la fuerza del dispositivo militar, policial y administrativo para disciplinar al movimiento popular y a la oposición de izquierda: “Chile no volverá a la situación existente hasta el 10 de septiembre de 1973”, había advertido pocos días antes.

Quien quiera investigar o adentrarse en los años 80 del siglo XX chileno percibirá, a partir de entonces, un cambio abrupto. Después del bullicio, la efervescencia, la discusión y la diversidad de manifestaciones de las que hemos dado cuenta, después de los desplegados, del material fotográfico y las declaraciones que desbordan la prensa oficialista y de oposición, se hace el silencio. El silencio se decretó en las calles, sus encuentros y sus crónicas. Las publicaciones de oposición, como Cauce, Análisis, APSI, Fortín Mapocho, La Bicicleta y Pluma y Pincel, que mal que mal sorteaban las medidas de amordazamiento, requerimientos judiciales y restricciones antes o después de cada jornada, fueron prohibidas de tajo durante los siete meses y diez días que se prorrogó la medida. Si las protestas habían sido durante un año y medio “la noticia” para el resto de diarios y medios de comunicación, a todos –incluidos

los oficialistas– se les prohibió difundir cualquier tipo de información e imágenes que pudiesen “alarmar a la población” o ser tipificadas como terroristas.

Las medidas represivas adoptadas bajo el estado de sitio fueron pensadas con el fin de controlar y disciplinar a la oposición y su capacidad de acción pública y masiva. Más que matar al contrincante –aunque también lo consideraba y lo concretó con muertes selectivas y aleccionadoras–, se trató de cercenar sus espacios de movimiento y expresión pública. Su terreno. Lo que debía desaparecer era la protesta, levadura de la efervescencia política y la desobediencia civil. Las políticas represivas, que Tomás Moulian ha llamado de shock, lograron su objetivo: de la ebullición se pasó al repliegue<sup>2</sup>.

La ciudad fue reordenada. Un día antes de la promulgación oficial, la prensa advertía el incremento de uniformados en el centro de Santiago: “En los alrededores de La Moneda, como también en otras calles céntricas, era visible que el número de carabineros cumpliendo punto fijo especialmente en las esquinas era superior al habitual (...) la guardia de palacio también se advertía reforzada, no habiendo explicación sobre el particular”<sup>3</sup>. Los santiaguinos pasaron a ser habitantes de una ciudad sitiada. Entre la medianoche y las cinco de la madrugada les quedó estrictamente prohibido salir de sus casas. Se prohibieron las elecciones de base y el derecho a reunión; las parrandas juveniles, encuentros artísticos, deportivos, hasta reuniones familiares eran sospechosas, más aún en el mundo popular<sup>4</sup>. Patrullas y camiones repletos de tropa uniformada recorrieron la ciudad de punta a punta y a punta de metralleta con toda la libertad para revisar vehículos, detener y manosear a caminantes.

Las sedes del Movimiento Democrático Popular (MDP) y del Bloque Socialista (BS) fueron dadas vueltas por funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en búsqueda de dirigentes o documentos comprometedores. También fueron allanadas las sedes de la Confederación Nacional Campesina El Surco y Nehuén, la Confederación Nacional Minera, de la Construcción y la industria Madeco, entre otras<sup>5</sup>. A fines de noviembre había más de doscientos dirigentes políticos, estudiantiles, sindicales y campesinos relegados en cuarenta y seis localidades del sur y norte del país por un tiempo “indefinido”, que en algunos casos se prolongó durante siete meses. Los allanamientos y ocupación de las poblaciones periféricas necesitarán un lugar especial en este capítulo, pero baste adelantar que la militarización de la vida cotidiana y de su geografía necesitó más personal para sumarse a las tareas, y el

gobierno llamó a los reservistas con el fin de “reforzar al ejército en las múltiples labores de vigilancia que realiza actualmente”<sup>6</sup>.

El estado de sitio marcó un parteaguas en la lucha contra la dictadura. Sin embargo, es un paréntesis poco indagado. ¿Qué entrañaba el estado de sitio? ¿Evidenciaba la debilidad o la fortaleza del régimen? Fueron preguntas que alimentaron la discusión política durante la época mientras las respuestas extraídas reforzaban estrategias de acción y legitimaban dentro del campo de fuerza opositor ciertos lineamientos programáticos y proyecciones futuras. Para el MDP, y en especial para el PC, la medida demostraba la debilidad de una dictadura cercada por el movimiento popular, por lo tanto, se anotaba casi como una victoria (un “vamos bien”) que requería continuar –y agudizar– el camino de la desestabilización. En cambio, para gran parte de la AD, especialmente para la DC, era señal de la polarización que había arrojado al país a un temido espiral de violencia, presentándose ante los hechos como una tercera vía prudente y razonable entre la rebelión popular de los comunistas y la violencia estatal. Era, por lo tanto, un momento político en que urgía el consenso y encauzar las conversaciones entre los sectores considerados democráticos y de centroderecha hacia un proyecto de transición ordenada.

Por otro lado, sociólogos como Manuel Antonio Garretón señalaban que la discusión sobre “debilidad o fortaleza” del régimen militar tenía poco o nada de sentido, ya que la llamada “apertura” y el estado de sitio eran dos caras de un mismo proceso y un mismo imperativo: la supervivencia del régimen<sup>7</sup>. Estamos de acuerdo. Pero cabe preguntarse, ¿acaso no todos los poderes instituidos desean su continuidad y, más aún, perpetuarse en el poder? Lo interesante es observar que las estrategias (prácticas y discursivas) a las que recurren los sectores dominantes varían según la posición del campo de fuerzas en que se desarrollan y nos hablan –más allá de su voluntad– sobre el poder del contrincante.

Desde agosto de 1983, la estrategia de “apertura” y las concesiones comandadas por Sergio Onofre Jarpa y su ejercicio de ministerio no habían dado los resultados esperados: no habían logrado neutralizar a la oposición –aislando al MDP y el PC– ni aglutinar a la derecha en un referente unívoco. Era una táctica para continuar con el itinerario de la Constitución hasta 1989, presentada por el gobierno como un acto de buena voluntad, como si cada pequeña concesión no hubiese sido peleada palmo a palmo por la oposición. Pero los agravios eran profundos, y la protesta, lejos de apaciguarse, prosiguió con grados de

organización y rebeldía que fueron en aumento. Augusto Pinochet confirmó que la maquillada apertura no aminoraba la expresión popular, entonces, como tantas veces, los acusó de “inmadurez política”, un eufemismo utilizado recurrentemente por las clases dominantes a la hora de justificar la supresión de los derechos políticos y las violaciones a los derechos humanos. Esas dos palabras se dirigían hacia un pueblo politizado que quería disponer de su destino y desafiar con sus prácticas transformadoras la lógica societal que se instauraba por la fuerza. Escuchémoslo: “La apertura nos sirvió para darnos cuenta de que el enemigo, el marxismo, estaba perfectamente vivo y trabajando como lo está haciendo ahora, y además infiltrándose en todas partes”<sup>8</sup>. Entonces se impuso el plan B.

Tanto la “apertura” como el estado de sitio –como en otro contexto lo fue el golpe de Estado– fueron la reacción a un movimiento popular ascendente en cuanto a niveles de organización y métodos de lucha. La revista Time, que podía sortear las prohibiciones a la libertad de información y expresión, explicaba así el contexto que vivía Chile:

La medida se tomó como respuesta a una ola de bombas, huelgas y protestas callejeras, que han pasado a ser una característica habitual de la vida chilena desde mayo de 1983 (...) el propósito declarado del gobierno fue enviar fuera de la capital a gente del hampa que había unido fuerzas con los activistas políticos en las poblaciones. Pero el objetivo real fue crear un clima de miedo entre los pobladores, quienes aportan la mayor cantidad de gente a las protestas contra el gobierno; cerca del 70% de los pobladores de La Victoria están cesantes<sup>9</sup>.

Quizás el régimen no estaba debilitado, ya que contaba con la cohesión de sus dispositivos represivos para protegerlo. Con todo eso, su legitimidad –y la de su institucionalización– había sido pública y recurrentemente cuestionada y, aún más, obviada dentro de los procesos de democratización que corrían por abajo y que lograban amplia simpatía nacional e internacional. En las calles, universidades, poblaciones, redes vecinales y amistosas se experimentaban sentidos y sentimientos que recreaban y defendían otra lógica de vida, de convivencia, de cultura política. Era más fuerte que el poder de fuego y de hostigamiento que tuviese el FPMR o los grupos operativos de las Juventudes

Comunistas, que muy poco podían hacer frente a la maquinaria militar. En este sentido, aclaraba por aquellos días el canciller Jaime del Valle: “(el estado de sitio) no está en vigencia solo para combatir el terrorismo, sino también para aplacar el debate político, preparando y tranquilizando al país para que este debate pueda producirse en buenas condiciones”<sup>10</sup>.

Por otra parte, es sabido que el gobierno norteamericano estaba preocupado por los alcances de la protesta chilena y que a través de sus diplomáticos había querido promover encuentros y acuerdos que a corto o mediano plazo consiguiesen una salida ordenada. Otros sectores también estaban inquietos, y el editorial de El Mercurio que mostramos a continuación puede darnos una idea de cómo era percibido el clima político de la época en los sectores conservadores:

Una polarización de fuerzas en que los sectores moderados sienten que de manera creciente pierden el control y la iniciativa a manos de las fuerzas extremistas, y por un grado de violencia que dificulta el entendimiento indispensable entre la civilidad para lograr el consenso necesario a fin de avanzar hacia la transición (...). Para el país resulta claro que las protestas, lejos de ser jornadas pacíficas, han dejado un saldo de muertes y daños materiales que no tienen precedentes en nuestra historia. Tras más de un año de lamentables experiencias en la materia, ha quedado de manifiesto que estas convocatorias han escapado de los márgenes contemplados por la oposición democrática y han dado pie para la acción sin contrapeso del Movimiento Democrático Popular, formado por comunistas y miristas, y para estimular el vandalismo de delincuentes y antisociales<sup>11</sup>.

Nótese que la oración: “los sectores moderados sienten que de manera creciente pierden el control y la iniciativa” era un guiño hacia la AD y especialmente a la DC. Hemos puntualizado en esta investigación que parte de la táctica gubernamental era exigirle al conglomerado que tomara postura clara contra el comunismo y evitara cualquier llamado mancomunado con el MDP. En este sentido, el gobierno los invitaba a la reflexión: “Que los sectores moderados recapaciten acerca de la inconveniencia de insistir en estrategias y prácticas que llevan a la violencia y al desorden”<sup>12</sup>.

Consideremos además que poco antes, el 2 de noviembre, Ricardo Lagos asumió la presidencia rotativa de la AD y había anunciado a viva voz, y con actitud muy resuelta, el impulso a nuevas jornadas de movilización (después que su bloque no había adherido al exitoso paro del 30 de octubre y seguramente la izquierda del conglomerado temía quedarse “abajo del carro”). Según advirtió Lagos por aquellos días, se constataba un distanciamiento entre la dirección política y el mundo social que le preocupaba: “Conversando o dialogando con el régimen, las veces que esto se ha intentado no se ha logrado nada”<sup>13</sup>. Ni siquiera bajo la instauración del estado de sitio –y sin poder aún calibrar la fuerza represiva que se aproximaba– Lagos dijo estar dispuesto a retirar su disposición: “La Alianza entiende que es necesario mantener la movilización social porque es el único camino para encauzar el descontento social del país. Definitivamente, la movilización se va a mantener”<sup>14</sup>.

## Siete meses y diez días

El estado de sitio posicionó frente a las cámaras a Francisco Javier Cuadra, recién investido como Secretario General de Gobierno. Era joven y desconocido, tan tieso él como su peinado, implacable en sus juicios y castigos. Desde entonces sería el rostro que venía a poner orden, y Sergio Onofre Jarpa debería salir de la jugada. El ministro Cuadra también acusaba inmadurez y un mal uso de la apertura: “Creó todo un ambiente y un clima de efervescencia que facilitó la actividad terrorista... expresiones como los llamados a la desobediencia y a desconocer la legitimidad del régimen constitucional y del gobierno fomentaron que grupos extremistas realizaran un accionar sin inconvenientes”<sup>15</sup>.

Los rumores que anunciaban ciertos cambios en el mando se confirmaron el 11 de febrero cuando Augusto Pinochet proclamó la reorganización de su gabinete. Al Ministerio de Hacienda llegó Hernán Büchi, que trajo de regreso la impronta de los Chicago Boys y que reemplazaba al ya renunciado Luis Escobar, “el del aumento en el gasto fiscal y las concesiones parciales en la economía”. En el Ministerio del Interior salió Jarpa, “el de las negociaciones políticas”, y fue reemplazado por Ricardo García Rodríguez, hombre que justificaría las políticas de violación a los derechos humanos de la nueva etapa que se abría. Se impusieron entonces los sectores que presionaban por no dar pie a señales de debilidad. No necesitaban actuar como condescendientes, tenían a su favor la fuerza de las armas, el mejor terreno en que se movía la dictadura. La tarea de los nuevos elementos, costase lo que costase, era cumplir con el proceso institucional fijado en la Constitución.

Las relegaciones se hicieron aún más recurrentes. Ya lo había advertido el ministro de Defensa al referirse a los responsables de las llamadas acciones subversivas: “De hoy en adelante, a sus autores se les va a detener, relegarles o enviar a lugares de detención alejados, donde no puedan molestar”<sup>16</sup>.

Fue “una batida a fondo” contra el mundo popular. Según cifras de la Comisión de Derechos Humanos, solo en el mes de noviembre hubo más de sesenta operativos en los lugares catalogados como conflictivos en la ciudad:

**Número de operativos y detenidos en detenciones colectivas por tipo de operativo. Noviembre de 1984**

<b>Tipo de operativo</b>	Número de operativos Detenid	
En unidades urbanas	62	27.411
En sedes sociales, políticas laborales o culturales	12	99 (84
Total	74	27.510



Fuente: Comisión Chilena de Derechos Humanos. Informe Mensual N° 35. Noviembre 1984<sup>17</sup>.

En la madrugada del 10 de noviembre fue allanado el Campamento Raúl Silva Henríquez. En una acción conjunta de Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y CNI, alrededor de cien buses policiales, diez tanquetas y un número indeterminado de furgones policiales y automóviles particulares rodearon la población que en ese entonces albergaba a unas 4.500 familias en extrema pobreza. Los uniformados destruyeron el local comunitario, la escuelita y el policlínico del campamento mientras helicópteros sobrevolaban a baja altura las calles de tierra y ligeras casas de madera para advertir a sus ocupantes “que no hicieran abandono de sus mediaguas y que nadie podía moverse. Una por una las ‘viviendas’ fueron allanadas; en algunas rompieron pisos, colchones y sustrajeron enseres diversos (...). Después sacaron de las casas a todos los hombres mayores de 14 años, quienes, junto a los jefes de hogar, fueron llevados a buses policiales”<sup>18</sup>. Los informes de la Vicaría dan cuenta de tres mil detenciones, que afectaron prácticamente a todos los varones.

El trato que recibieron los dirigentes más reconocidos del campamento fue especialmente brutal. Luego de golpes y vejaciones, fueron exhibidos ensangrentados o vendados ante la mirada atónita de sus vecinos. La misma suerte corrieron quienes fueron sorprendidos con literatura o algún material considerado “subversivo”. Los detenidos fueron llevados hasta el Regimiento Politécnico del Ejército, y aunque la mayoría fueron liberados paulatinamente, alrededor de 400 pobladores –entre los cuales había 60 dirigentes– permanecieron detenidos en recintos de Investigaciones. El testimonio de las personas que iban saliendo en libertad confirmó que muchos dirigentes estaban siendo torturados. De su paradero no se supo hasta días más tarde. De ello daba cuenta el periódico de la Vicaría:

Decenas de personas con rostros ansiosos y angustiados esperaban orientación y ayuda la mañana del martes 13 de noviembre en las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad. Muchas eran mujeres con niños pequeños. Todos eran pobladores del campamento “Raúl Silva Henríquez” que habían sido notificados hacía pocos

momentos que sus familiares –detenidos en ese operativo– viajaban hacia Pisagua en calidad de relegados<sup>19</sup>.

El arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, se presentó en el lugar y ante la brutalidad del allanamiento emitió una declaración pública expresando su disconformidad. No imaginaba que la carta sería censurada por el régimen. En temas considerados conflictivos, las nuevas disposiciones gubernamentales sostenían que los medios de comunicación tolerados debían atenerse a la información entregada por los comunicados de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos) o la Secretaría General de Gobierno.

Un fuerte golpe fue la prohibición para entrar al país al Vicario de la Solidaridad Ignacio Gutiérrez. El 6 de noviembre se encontraba en Europa participando junto a otros doce obispos en una reunión con exiliados chilenos celebrada en Roma. El encuentro indignó al gobierno. Según expresó, era intolerable la intromisión de ese sector de la Iglesia católica. El canciller Jaime del Valle justificó la medida argumentando que Gutiérrez “es un hombre que ha hecho reiteradamente política dentro del país, de tal manera que el gran público, yo creo, quiere ver a los sacerdotes en su ministerio y no opinando y haciendo acciones políticas”<sup>20</sup>. Comenzó el intercambio epistolar entre Fresno y el gobierno, pero la sentencia era irrevocable.

Para romper el amordazamiento, el arzobispo decidió utilizar la red comunitaria e informativa de la Iglesia católica, tal como en otras circunstancias lo había hecho el cardenal Raúl Silva Henríquez. La declaración censurada fue leída en todas las misas que se celebraron el domingo 18 de noviembre. El clérigo estaba indignado: “Hay estado de sitio en el país, los obispos de Chile hemos sido duramente criticados y puestos en duda por la autoridad de gobierno. Uno de mis vicarios está impedido de regresar al país. Las dificultades económicas se dejan sentir especialmente entre los más pobres. Hay un clima de agobio y de tensión”<sup>21</sup>. Otra medida paliativa fue incrementar el tiraje de la revista Solidaridad y redoblar el esfuerzo de sus profesionales por informar lo que pasaba en el Chile silenciado. En los meses siguientes, otros sacerdotes y periodistas de nacionalidad extranjera fueron expulsados, acusados de injerencia en la vida política<sup>22</sup>.

También los allanamientos continuaron. El 15 de noviembre le tocó su turno a la

población La Victoria. Bajo el procedimiento ya conocido, a las cinco de la madrugada los tripulantes de un helicóptero que sobrevolaba a baja altura enviaron instrucciones a los pobladores: “¡Nadie debe salir de sus casas, quien lo haga se atenderá a las consecuencias, siendo detenido como subversivo!”<sup>23</sup>. A cada cuadra se le asignó un trío de militares encargados de vigilar y responder ante cualquier movimiento sospechoso mientras las casas eran revisadas una por una y posteriormente marcadas con un triángulo blanco en su frontis como testigo de un censo siniestro. Los teléfonos fueron cortados, también el servicio de energía eléctrica, mientras el padre Pierre Dubois, correa transmisora con organizaciones solidarias, era impedido de salir en auxilio de los pobladores por encontrarse bajo arresto domiciliario.

Recreemos lo vivido entre los más pobres de la ciudad:

Luego de ser revisados sus datos personales, algunos eran llevados a los camarines del estadio donde se les vendaba la vista y eran interrogados; varios de ellos fueron llevados a los recintos de la CNI (...) El trato en el estadio era el propio de un campo militar; eran mantenidos formados y los movimientos permitidos eran media vuelta y vuelta entera. El estadio mismo se encontraba rodeado por militares armados de metralletas; las Fuerzas Especiales de Carabineros actuaban en contención frente a un número indeterminado de familias que intentaba obtener información de los detenidos. Cada cierto tiempo salía un grupo de personas liberadas, con insolación, cansados y sedientos; en patéticas escenas, los familiares se abalanzaban sobre ellos para inquirir información sobre los suyos<sup>24</sup>.

De los seis mil pobladores retenidos –que fueron dejados en libertad durante el día–, ciento sesenta fueron trasladados a recintos de Investigaciones, CNI y Carabineros, y más de treinta fueron relegados hacia distintos puntos del país. ¿Cuándo terminaría el estado de terror en la periferia? “Imposible determinarlo”, dijeron las autoridades: “Siempre es posible hacer revisiones en lugares en que se ha detectado mayor actividad subversiva y estas acciones, especialmente en algunas poblaciones, se seguirán haciendo cuando sea aconsejable”<sup>25</sup>, advirtió el ministro Javier Cuadra. Y así fue. En los días y semanas siguientes continuaron los operativos de control preventivo en otras cuarenta poblaciones del cinturón

periférico de Santiago.

## Las protestas sitiadas: “fue como empezar de nuevo”

Luego de la ocupación militar en una ciudad sitiada, ¿cómo podrían las protestas ser las mismas? Insistimos en que su corazón siempre fue joven y periférico y hacia él apuntaron las fuerzas del régimen. Los informes de organizaciones de derechos humanos constataban que ni siquiera el catastro que se esforzaban por realizar podía dar cuenta de la magnitud del cuadro represivo, ya que “la conmoción social produjo una transitoria parálisis en la denuncia”<sup>26</sup>. Además del miedo, advertían que la masividad de los hechos registrados disminuía la importancia de cada uno en particular, por ello se redujeron las denuncias de ese tipo.

Durante el Estado de sitio hubo dos jornadas de protesta. La primera de ellas fue convocada para los días 27 y 28 noviembre por el Comando Nacional por la Protesta, conformado por el CNT y todos los bloques de oposición, incluida la AD. En esa Duodécima Jornada se reclamó “donde y como se pudo, dadas las circunstancias”. La imagen que predominó desde las primeras horas fue la de una ciudad cercada por la presencia policial y militar, con gran cantidad de helicópteros que volaban a baja altura sosteniendo mediante cables a soldados tipo comando que apuntaban hacia las modestas casas. Un movimiento de tropas ni siquiera comparable con lo ocurrido en agosto de 1983, cuando se desplegaron dieciocho mil soldados en Santiago. Esta vez se llegó a hablar de veinte mil soldados en las calles.

Dadas las circunstancias, una de las formas de protesta más extendidas fue la colocación de velas encendidas en calles y veredas, práctica que se había masificado desde la muerte del sacerdote André Jarlan. En cuanto al levantamiento de barricadas que hasta entonces tendía a generalizarse, debió cambiar de modalidad; esta vez los manifestantes las instalaban y abandonaban el lugar. No había una actitud de defender la barricada, de congregarse alrededor del fuego, crear un ambiente de consignas o de fiesta como en ocasiones anteriores. No obstante, el 28 de noviembre, en horas de la tarde y hasta cerca de la medianoche, tuvieron lugar manifestaciones y algunos incidentes entre pobladores y efectivos policiales en poblaciones como Jaime Eyzaguirre, Santa Julia, La Victoria, Villa Francia, Los Copihues y José María Caro<sup>27</sup>.

Para esta jornada no contamos con cifras que den cuenta de algún grado de paralización de la ciudad o de ausentismo escolar; aunque era evidente que al menos el transporte público circuló con bastante normalidad. Solo se sabe que todo fue breve. En las universidades se intentó realizar encuentros al interior de los recintos, pero fue casi imposible. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago Carabineros ingresó prontamente para dispersar a cerca de setecientos estudiantes que pretendían marchar por sus jardines. Fueron detenidos trescientos estudiantes y algunos de ellos relegados. Otros tantos fueron arrestados en el encuentro realizado en el Campus Oriente de la Universidad Católica<sup>28</sup>.

Los organizadores quedaron desconcertados. Con buena cuota de voluntarismo, creían que se podían mantener los niveles de adhesión de las jornadas anteriores. Como preludeo, y para romper el miedo, hubo iniciativas parciales en los días previos, como el paro estudiantil convocado por la FECh y una manifestación de mujeres (Mudechi) en la Plaza Italia. Entonces quisieron imaginar disposición de lucha de diversos sectores. Pero ¿acaso no era evidente que entre poblaciones arrasadas, cientos de relegados, sin medios de información y militares armados, la protesta pasaba a segundo o tercer plano? El gobierno anunció victorioso: “Fracasó el último intento que hicieron de provocar un desorden generalizado”<sup>29</sup>.

Los análisis provenientes de sectores opositores decían que había que esperar el fin de año y el término de las vacaciones, ya que seguramente en marzo se retomaría el espíritu de combate. Por ello, a comienzos de 1985 los dirigentes sindicales reunidos en Confesin decidieron convocar a una nueva jornada de protesta para el día 27 de marzo, convocatoria que finalmente resultó ser bastante ambigua (en cuanto a su carácter y fecha), ya que al comenzar marzo, el CNT decidió reemplazarla por una jornada de “solidaridad y denuncia” para el día 29 de marzo, a la que adhirieron los tres bloques de oposición. Entonces hubo dos manifestaciones. La jornada de protesta del día 27 no se abortó y fue asumida por la Coordinación Metropolitana de Mesas de Concertación –que agrupaba a cerca de sesenta organizaciones– y el MDP. Pero la protesta, lejos de la masividad esperada, quedó a cargo de los sectores militantes y sus aliados. En la primera hubo algunas manifestaciones poblacionales y estudiantiles; en la segunda hubo mucho menos. En ninguno de los casos se hicieron evaluaciones<sup>30</sup>.

Marzo, más que un mes de enfrentamientos, fue un mes de fuertes temblores que recorrieron la tierra, la piel y las emociones. El domingo 3 de marzo un terremoto devastó la zona central de Chile, dejó casi doscientos muertos y un

millón de personas damnificadas. El viernes 29, la oposición despertó con un gélido escalofrío cuando se supo que escuadrones del terror mataron a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, hijos de Luisa y de Manuel, una familia de reconocido trabajo poblacional y eclesial; fue ese viernes cuando secuestraron al profesor Manuel Guerrero y a José Manuel Parada, sociólogo a cargo del centro de documentación de la Vicaría (organizador de informaciones clave que inculpaban al gobierno en cientos de casos) en la puerta del colegio donde estudiaban sus hijos. Un día antes habían detenido a Santiago Nattino. El 30 de marzo, los cuerpos de los tres profesionales comunistas fueron encontrados degollados y con marcas de tortura. Aunque la ejecución de opositores fue una constante durante el régimen militar, hasta entonces no era nada común la mutilación de sus cadáveres, al menos no abandonados en un camino para ser encontrados fácilmente. Degollar a tres comunistas fue una forma de provocar terror y silenciar. Era un perverso mensaje hacia la oposición: La protesta debía parar; debía regresar el silencio. Tal era la idea-fuerza del estado de sitio.

La masividad callejera se reactivó en procesiones, duelos y romerías. El sepelio de Rafael y Eduardo duró más de cuatro horas y fueron acompañados por cientos de personas que recorrieron desde su población una nueva ruta del dolor: General Velásquez, San Pablo, Bulnes, Avenida Santa María hasta llegar a Avenida La Paz. El cuerpo de José Manuel Parada fue velado en el edificio de la Vicaría de la Solidaridad, desde donde el cortejo avanzó por plaza de Armas, el paseo Ahumada, Puente y otra vez, avenida la Paz, antesala del cementerio. Así fue el mes de abril. También hubo paros magisteriales en condena a los secuestros y muertes, hubo huelgas de hambre y ayunos de familiares de víctimas de la represión. Además, el CNT llamó para el 11 de abril a una jornada de “movilización por la vida”, quizás una de las más concurridas desde el estado de sitio, pero que tampoco lograba cambiar el ritmo de la ciudad.

En tono amargo, las organizaciones sindicales daban cuenta de los cambios experimentados desde el bullicioso 1984 en la conmemoración del Día de los Trabajadores y la larga lista de iniciativas y actividades emprendidas en aquel entonces: “En vez de reunirnos masivamente en el Parque O’Higgins, nos vemos forzados a encontrarnos en locales sindicales de capacidad limitada”. Los sindicalistas constataban inmovilización y debilidad orgánica: “La movilización no ha logrado, hasta la fecha, recomponerse en masividad y combatividad”<sup>31</sup>.

Fue difícil reponerse. Cada muerte impactó en estratégicos radios de influencia.

Fueron cientos de relegados, muchos de ellos eran líderes locales que descontinuaron su trabajo de base. Fueron miles y miles los atemorizados con las represalias y tantos otros que resintieron el simbolismo de esas muertes. La ciudad se había guarecido nuevamente. Comenzaba otra etapa y la protesta debía rehacerse. “Fue como empezar de nuevo”, dice Viviana Díaz:

Era como retroceder en el tiempo, o sea, uno en esos momentos pensaba que ya estábamos terminando y de nuevo como que empezaba todo, era bien duro, difícil, pero de igual forma nosotros como agrupación sobrevivimos y sacábamos la voz; poco a poco se fue venciendo el miedo, pero después que las manifestaciones fueron in crescendo, que la gente empezó a salir y cuando en el parque O’ Higgins se juntaban miles de personas, ahí uno decía “no, ahora ya cae Pinochet, cae Pinochet”. ¡Y Pinochet no caía nunca!<sup>32</sup>.

¿Lograría la oposición reponer sus capacidades de expresión pública y de movilización social? Aunque muchas organizaciones sobrevivieron a la violencia represiva del estado de sitio, en los años siguientes las protestas “ya no fueron las mismas”, pero continuaron. Entre agosto de 1985 y octubre de 1987 hubo aproximadamente otras diez jornadas, además de concentraciones masivas, marchas, tomas de liceos y universidades, conciertos musicales e innumerables expresiones de rechazo al régimen. Entre ellas destacó el Paro Nacional del 2 y 3 de julio de 1986. Al año siguiente, en los actos multitudinarios organizados en razón de la primera y última visita del papa Juan Pablo II en abril de 1987, los sectores populares rompieron el guion del gobierno y aprovecharon la instancia para levantar sus pancartas de denuncia y protagonizaron manifestaciones que fueron seguidas por la asombrada mirada del pontífice, que no lograba apaciguar los ánimos.

Se ha señalado que después de noviembre de 1984 la protesta se hizo rutinaria; que solo manifestó la “anomia social” que existía especialmente entre jóvenes pobladores; que sufrió una “periferización”, sin capacidad de irradiar hacia otros sectores sociales; que desde entonces el movimiento perdió sentido, que se “vandalizó”. Se dijo que la fuerza social del descontento no logró transformarse en fuerza política, instrumental, en función de la consecución de metas y avances concretos y graduales, lo cual era señal de una táctica inmadura e inadecuada



para terminar con el régimen si es que se juzgaba por sus resultados. Eran tesis que comenzaron a fluir desde mediados de 1984, cuando se percibió un “reflujo en las movilizaciones”. Bajo estos argumentos, la Alianza Democrática cristalizó su estrategia de salida pactada.

## La transición pactada y el jaque a la protesta

Después del estado de sitio, los bloques opositores transitaron caminos divergentes que consolidaron las estrategias que ya venían esbozando y proponiendo. El Partido Comunista después del Pleno de 1985 –realizado a fines de 1984– lanzó su plan de Sublevación Nacional<sup>33</sup>. Según sus dirigentes, considerando la debilidad del régimen y la fortaleza del movimiento popular, estaban dadas las condiciones para dar otro paso de lucha y avanzar hacia un estado de rebelión general. Entre las condicionales subjetivas –señalaban– se encontraba la alta moral de combate:

Miles de combatientes se han educado en las acciones de autodefensa de las masas, sobre todo en poblaciones y centros estudiantiles. Son de uso masivo las barricadas, las bombas molotov, los cadenazos para provocar cortes de luz, las granadas de mano y otros elementos. El deseo de luchar contra Pinochet hace que las masas usen las piedras, hondas, miguelitos. Se echan abajo postes de alumbrado público con explosivos y en muchos casos con cinceles y combos. En la calle se atraviesan árboles, trozos de cemento, neumáticos ardiendo, basuras y hasta enseres domésticos; el régimen se ha visto obligado a calificar las hondas como elementos de guerra y a incorporarlas a la ley de control de armas<sup>34</sup>.

Entre las condiciones objetivas constataban un poder institucional que se agrietaba, a punto de hacer crisis. El PC concluía que el desenlace más probable sería el de un enfrentamiento decisivo entre el pueblo y la dictadura. El informe al Pleno de 1985 confirmaba cuantitativamente su apreciación citando una fuente oficialista: “Según las estadísticas del régimen publicadas en el diario La Tercera del 18 de noviembre, entre septiembre de 1983 y octubre de 1984 se registraron 1.889 acciones desestabilizadoras; de estas, 1.183 con explosivos, 229 sabotajes, 163 asaltos a mano armada, 36 atentados selectivos y 47 mayores”. Dichas acciones, más las 11 Jornadas Nacionales de Protesta, el paro de octubre de 1984 e, incluso, la pálida jornada del 27 y 28 de noviembre desarrollada en terreno

absolutamente desfavorable, evidenciaban que existían las condiciones para pasar a una nueva fase de combate: “Madura rápidamente una situación revolucionaria, pues están presentes y se desarrollan los elementos fundamentales que la caracterizan, aunque no se manifiestan todos con la misma evidencia”<sup>35</sup>.

Por su parte, la AD ensayaba su salida pactada con el llamado “Acuerdo nacional para la transición a la democracia plena”. Ahora sí se concretaba la tendencia que veníamos observando: se obviaban conscientemente del debate la ilegitimidad de la Constitución de 1980, la renuncia de Pinochet y la disolución de la CNI. La iniciativa nació del cardenal Juan Francisco Fresno, quien se hacía cargo del miedo que experimentaban distintos sectores cercanos a la jerarquía de la Iglesia católica, a “que la polarización de fuerzas se incremente en Chile, que el control de la irracionalidad se haga difícil; que la violencia de la desesperanza crezca y también crezca la violencia de la represión”<sup>36</sup>. A mediados de 1985, solicitó a tres hombres de su confianza que redactaran un plan amplio de transición a la democracia que concertase a distintas tendencias políticas. Los hombres del cardenal fueron Fernando Léniz, ex ministro de Economía del gobierno militar; José Zabala, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, y Sergio Molina, ex ministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Recordemos que Fresno, en su calidad de arzobispo de Santiago, había facilitado sus dependencias para propiciar un diálogo entre el gobierno, representado por el ministro Sergio Onofre Jarpa, y la AD, y que los intentos fueron infructuosos. Según el empresario José Zabala, coordinador de la comisión elaboradora, el fracaso en la negociación se debió en parte a una excesiva publicidad y demasiadas declaraciones, el tema “se mosqueó” (sic) agregó para clarificar su punto. Llegados a un punto muerto, se imponía la necesidad de un nuevo diálogo que acercase las posiciones. Esta vez no sería directamente con el gobierno, sino entre partidos políticos. El espectro iba desde la DC, con Patricio Aylwin y Gabriel Valdés a la cabeza, hasta la derecha, con Francisco Bulnes, Andrés Allamand y Pedro Correa representando al Movimiento de Unión Nacional y el Partido Nacional. Fue la primera ocasión en que un sector de la oposición firmaba un acuerdo con organizaciones cercanas al régimen.

El acuerdo era bastante general, un rayado de cancha según dijeron. Dentro de él, las coincidencias que esgrimieron fueron principalmente cinco: disponibilidad para dialogar con otros sectores; rechazo a la violencia y a aquellos que la utilizan como objeto o como práctica política; necesidad de

llegar a un entendimiento con el gobierno de las Fuerzas Armadas (cuestión que se destacaba “especialmente”); necesidad de un plan económico-social, además de uno sociopolítico, y por último (también en lugar destacado) el reconocimiento que la actitud de la Democracia Cristiana debía ser la espina dorsal de cualquier consenso<sup>37</sup>. El problema que reconocían estos sectores –que en gran mayoría habían apoyado el golpe militar– era la posición frente a “movimientos antidemocráticos, especialmente el PC”.

Si bien los sectores de extrema derecha aglutinados en la UDI no eran considerados antidemocráticos, ya que se les ofreció participar –incluso sostuvieron una reunión con Jaime Guzmán–, estos rechazaron firmar por cuanto no se explicitaba con todas sus letras la subordinación al plan institucional del gobierno. Entonces, ¿sumarían al PC? A pesar de que se conformó una comisión para evaluar el caso, el PC, junto con el MDP y las organizaciones de izquierda, les ahorró energía y posibles conflictos al rechazar el acuerdo por no contener la que hasta entonces era la plataforma básica reivindicatoria de la oposición y considerar que su texto representaba más fielmente los intereses y prioridades del centro y la derecha que aquellos de la izquierda y centroizquierda.

El análisis realizado a principios de 1985 por Manuel Antonio Garretón resultó ser bastante agudo al señalar que con la imposición del nuevo receso político se generaban las condiciones para la emergencia de un proyecto de “centroderecha” impulsado por algunos sectores del régimen y el gobierno norteamericano. Según escribió el sociólogo, se trataba de:

Reconocer la legitimidad del régimen y no cuestionar por ahora la mantención de Pinochet hasta el 89, pero formalizar una nueva apertura creando espacios e instituciones políticas relativamente representativas, reconocer un sector de la oposición, excluyendo y reprimiendo a los sectores llamados genéricamente “marxistas”, y atenuar la pauta represiva (...) ello debería ser impulsado por un bloque social unificado que incluyera no solo al conjunto de la derecha, sino a sectores significativos de centro, lo que significa parte de la Democracia Cristiana<sup>38</sup>.

El embajador norteamericano se mostró especialmente satisfecho con el

incipiente pacto de gobernabilidad. Como hemos señalado, la Casa Blanca también estaba preocupada por una situación que podía tomar un tinte más radical. Hasta entonces no habían servido sus consejos/advertencias, tampoco los acercamientos y conversaciones con la DC. El Partido Comunista continuaba siendo la segunda fuerza hegemónica. Pero insistían. Recordemos que la administración de Ronald Reagan, poco después de iniciar su período de gobierno en 1981, había restablecido los canales de ayuda económica a Chile suspendidos por Carter luego de las indagaciones en torno al asesinato del embajador chileno Orlando Letelier en Washington. Sin embargo, la protesta y descontento popular de 1983-1984 sembró las desconfianzas. Al gobierno norteamericano no le convenía otro punto de fervor popular en la región; además, en esos meses enfrentaba una enmienda presentada en la Cámara de Representantes por un grupo de diputados demócratas dirigida a detener nuevamente esta asistencia.

El 14 de octubre aterrizaron en Santiago David Delouhy, encargado del Chilean desk, y David Cox, nuevo subjefe encargado de los países del Cono Sur, con la misión de sostener conversaciones con sectores políticos, sindicales, empresariales y eclesiásticos, e informar sobre el conflicto chileno. Lo que pedía el Departamento de Estado eran signos elocuentes de sus propósitos de restablecer la democracia. La inquietud fue en aumento después del 29 y 30 de octubre. El vocero del Departamento de Estado Norteamericano expresaba su preocupación por la polarización de las fuerzas políticas en Chile, y advirtió que “su gobierno sigue creyendo en la necesidad de un diálogo con la oposición y el gobierno chileno para revertir la tendencia hacia la polarización y desarrollar un consenso interno, que es esencial para la transición hacia la democracia”<sup>39</sup>. Tampoco le agradaba un estado de sitio que pudiese agudizar el malestar del pueblo chileno. Entonces propició las conversaciones. Posteriormente, archivos desclasificados permitieron ahondar en la materia. Se supo que el entonces asistente del secretario de Estado para América Latina, Langhorne Motley, recomendó una “intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia en Chile”. Se delineaba el camino que finalmente consagraría la modalidad que caracterizó a la transición chilena.

De todas formas, si bien la AD se la jugaba por un pacto, el llamado “Acuerdo nacional para la transición a la democracia plena” no rindió los frutos esperados. Paralelamente, la necesidad de movilización continuaba presente en las bases. Así, en 1986 se conformó la Asamblea de la Civilidad, que fue pensada como una coordinadora de organizaciones políticas y sociales que tuviera la

legitimidad y capacidad de convocatoria para movilizar y aglutinar a amplios sectores, que como gran logro unitario reunió en su seno a la AD y al MDP. Entonces fue convocada la jornada de protesta y el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986, cuya potencia evocó a las masivas jornadas de 1983 y 1984.

## El paro del 2 y 3 de julio: clímax y final de una etapa

Si algo llama la atención de la jornada del 2 y 3 de julio fue su organización, coordinación y, aún más, la mancomunidad de organizaciones sociales comprometidas con su éxito. Difusión de propaganda, elaboración de cartillas orientadoras, diversas acciones encaminadas a preparar los ánimos. Entre las fuerzas opositoras la convocatoria se realizó sin negociaciones, vacilaciones, condicionamientos, característica recurrente en las jornadas anteriores. Llama aún más la atención que tuviese características de alcance nacional y un importante impacto urbano que no se observaba desde el paro de octubre de 1984. De muchas formas, fue una protesta que perdura en la memoria de quienes vivieron aquellos años. Una memoria que se mueve entre el recuerdo de su masividad (la última de las grandes) y de la represión. Sin duda, la imagen de los jóvenes Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, quemados vivos por militares, removió sensibilidades nacionales e internacionales<sup>40</sup>. El horror de la dictadura se materializaba en la represión a esos cuerpos: jóvenes, comprometidos, esperanzados con el cambio, como cientos de otros que participaron en las movilizaciones de esta etapa.

Para muchos, 1986 debería ser el año que cambiase al mundo. Dos caminos le dieron su sello: La Asamblea de la Civilidad (AC) y el plan de Sublevación Nacional del PC. Sobre la Política de Rebelión Popular de Masas y los esfuerzos –y tensiones– comunistas por concretar un plan operativo para derribar a la dictadura ha corrido bastante tinta, que a la hora de adentrarse en estos años es pertinente ser consultada<sup>41</sup>. Baste aquí con recordar que el PC había decidido que 1986 sería el año decisivo para derribar a la dictadura y que sus militantes y combatientes asumieron un nutrido calendario de acciones de hostigamiento y sabotaje, especialmente las bases de la juventud y el FPMR. Fue este el tiempo en que muchos de sus cuadros pasaron a la clandestinidad profunda y se convirtieron en funcionarios de tiempo completo, abandonando estudios y familia para sumarse a ese “ahora o nunca”. Se trataba de crear un clima de agitación que en una etapa más avanzada permitiese un paro nacional de actividades, el copamiento de las ciudades y, por último, la caída del dictador con un movimiento de masas protagónico.

Paralelamente, las organizaciones de base presionaban dentro del campo opositor para concretar un golpe de tablero que diera cuenta de una concertación de organizaciones sociales que a pesar de sus legítimas diferencias se moviese coordinadamente para lograr la demanda más urgente: democracia para Chile. “Concertación social” era la consigna que se escuchaba y leía en los debates y propuestas de aquellos años. “Concertación” que corría por abajo, que se sostenía en el trabajo cotidiano de las organizaciones sociales en las que concentraba el trabajo militante.

Finalmente, fueron los profesionales quienes sirvieron de bisagra. Al calor de una Asamblea de la Civilidad realizada en el Teatro Cariola el 26 de marzo de 1986, el presidente del Colegio Médico y de la Federación de Colegios Profesionales, Dr. Juan Luis González (DC), hizo el llamado a la concertación de los sectores sociales para que se elaborase un documento único que sintetizara las aspiraciones globales como sectoriales. El llamado estaba dirigido a sortear las diferencias entre sectores como la AD y MDP y a concertar el trabajo que ya se realizaba por abajo entre los cuerpos intermedios y organizaciones sociales, como bien lo referenciaban las federaciones estudiantiles y los sindicatos. La tensión, por tanto, no era entre socialismo y democracia, sino entre democracia y dictadura, y hacia allá había que dirigir los esfuerzos.

La llamada “Demanda de Chile” –según propuso González– daría un ultimátum al gobierno: “Si por desgracia la obcecación o la ambición sin límites de algunos cerraran todos los caminos de solución (...) no nos quedará otra alternativa que la desobediencia civil y el paro definitivo para devolver a Chile su libertad”<sup>42</sup>. Un mes después se constituyó oficialmente la AC y suscribió el documento a partir de las propuestas que hicieron 18 organizaciones que, a su vez, reunían a 250 entidades de base<sup>43</sup>. La “Demanda de Chile” denunciaba una amplitud de problemáticas económicas, políticas y morales que afectaban a la sociedad chilena. No obstante, contenía un emplazamiento al gobierno muy preciso: si en un mes no había una respuesta efectiva, las organizaciones definirían un camino para buscar su objetivo más urgente.

Como era de esperar, no hubo respuesta, al menos no positiva. Desde el 29 de abril y la primera semana de mayo de 1986, más de veinte poblaciones fueron allanadas, entre ellas El Pinar, La Legua, Germán Riesco, Sumar 1 y 2, Las Industrias, La Bandera y el Campamento Juan Francisco Fresno con el objetivo de “buscar y cercar delincuentes subversivos”. Militares con rostro pintado para la guerra, acompañados de hombres de la CNI con brazalete amarillo, arrasaron



con las poblaciones. El modus operandi era recurrente: voces intimidantes llamaban por altoparlante a todos los hombres de entre 14 y 60 años a presentarse con carné en mano para ser trasladados por camiones militares a una cancha cercana. En tanto, previo corte de luz y teléfono, efectivos policiales revisaban casa por casa, destrozando enseres, rompiendo colchones, insultando a sus habitantes. Los mantenían retenidos durante varias horas. Una vez revisados sus antecedentes, un timbre en la mano derecha era el pase para poder volver a sus hogares. Según versiones de la prensa, más de 9.349 personas fueron registradas y unas 1.192 fueron detenidas. De estas últimas, alrededor de 100 personas pasaron a tribunales. Desde distintos sectores, la oposición alzó la voz contra el nuevo atropello hacia los más humildes. Este tipo de abusos legitimaron por parte de la AC un conjunto de acciones de desobediencia civil para el mes de junio que culminarían con la paralización general de actividades los días 2 y 3 de julio.

Durante el mes de junio se constituyeron veintiocho asambleas provinciales y diversas movilizaciones sectoriales. Profesores y estudiantes secundarios realizaron numerosas acciones contra la municipalización de los establecimientos educacionales. Los universitarios, a través de la Confech, comenzaron con una Jornada Nacional de Protesta Estudiantil el 2 de junio y culminaron con un paro los días 16 y 17, en el que exigían el fin de la intervención militar en las universidades, el aumento de las becas, la renuncia del ministro Sergio Gaete y la salida de Pinochet. También se manifestó públicamente el departamento femenino del Comité Unitario de Pobladores (CUP), el Movimiento de Mujeres por la Vida, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Comité Por la Vida, entre otros. Hubo una marcha “por la democracia y por la paz” y una “operación de desagravio y solidaridad” en las poblaciones que fueron allanadas. Entre las actividades propuestas por los propios pobladores se realizaron juegos de recreación infantil, chocolatadas, atención médica, apoyo a las ollas comunes, actos culturales, prestación de servicios profesionales<sup>44</sup>, que fueron acompañadas por cientos de otras iniciativas de irrupción en el espacio público.

El instructivo del paro –que fue prácticamente igual al de otras jornadas– fue profusamente distribuido los días previos. Además, se imprimieron y circularon una serie de cartillas orientadoras para trabajar en grupo tanto los objetivos del paro como las medidas de seguridad, difusión y planificación de actividades de apoyo a la protesta<sup>45</sup>. ¿Cómo estamos para el paro? y ¡A las buenas protestas, a los buenos paros! eran algunos de sus títulos. Rayados y panfletos se

multiplicaron en las ciudades del país y lograron romper la “recomendación” que Dinacos dio a los medios de comunicación para no informar sobre las actividades de la oposición y la restricción de las transmisiones de radios Chilena, Cooperativa, Carrera y Santiago.



■ *Rayado en la población Los Copihues, junio 1986, ADVS.*

El ambiente estaba tenso. El 1 de julio fueron asesinados tres integrantes del FPMP<sup>46</sup> y continuaban detenidos tras una semana los 130 jóvenes que ocuparon la Casa Central de la Universidad de Chile. El día 2 prácticamente no transitaba locomoción en las calles de Santiago y el comercio mantenía sus puertas cerradas. Esta vez, los estudiantes universitarios no salieron a la calle y se mantuvieron concentrados en asambleas. En las poblaciones desde la noche anterior se realizaban barricadas, mítines, manifestaciones y podía escucharse a la distancia la detonación de numerosos artefactos explosivos.

A las 12 del día fue imposible que se reunieran en la plaza de Armas el comité ejecutivo de la AC junto a decenas de personas para entonar la canción nacional, tal como lo proponía el instructivo. Efectivos de Carabineros golpeó y detuvo a varios de los asistentes, entre ellos Jorge Pavez, Osvaldo Verdugo y Jorge Molina, y apaleó a otros tantos. Mientras, se levantaba una serie de barricadas en la zona céntrica con participación bastante masiva de jóvenes que lanzaban panfletos y entonaban cánticos contra el gobierno. Si bien desde temprano era notable la disminución de la afluencia de público en la capital, a las 17 horas prácticamente ni peatones, autos particulares o locomoción colectiva circulaban en el centro. En contraste, el despliegue militar se hacía más denso. Ellos vigilaban intimidantes las principales arterias. Al caer la tarde eran muy pocas las poblaciones que no habían encendido barricadas y se podía observar a jóvenes cavando zanjas para reforzar la contención en las principales arterias. En la tarea ayudaba la gran cantidad de miguelitos que se esparcieron por la ciudad y que denunciaban los periodistas de El Mercurio en su recorrido<sup>47</sup>.

El sonido sistemático de metralletas intimidatorias que resonaban en la poblaciones periféricas fue eclipsado a las 20:30 horas cuando comenzó el ruido más característico de la protesta social chilena durante estos años, el caceroleo sincronizado de rechazo al régimen, acompañado por bocinazos y gritos de “¡Y va a caer!”, que, según señalan fuentes de la Vicaría, “prácticamente no se había escuchado en las manifestaciones similares del último tiempo, pero en esta ocasión resaltó con singular homogeneidad”<sup>48</sup>. Tan solo media hora más tarde la detonación de explosivos en 12 torres de alta tensión, ocasionada por militantes del FPMP, provocaron un sincronizado corte de energía eléctrica que afectó al

suministro desde Copiapó por el norte hasta Concepción por el sur. Durante varias horas prácticamente la totalidad de Santiago quedó a oscuras, cuestión que durante la jornada habían conseguido solo parcialmente diversos cadenazos y derrumbes de postes del tendido eléctrico.

Como en otras ocasiones, los dispositivos represivos dispararon balas aleatorias desde autos civiles y vehículos militares contra los manifestantes. El 2 de julio hirieron de muerte a Iván Aqueveque Antileo, obrero de 21 años, en la Población Sara Gajardo; Boris Vera Tapia, contador, trabajador del POJH de 24 años, en La Victoria, y la niña de 13 años Nadia Fuentes Concha en Los Copihues. Además, en horas de la madrugada, civiles que portaban brazaletes amarillos allanaron numerosos domicilios en La Legua y tomaron detenidos a siete pobladores, en tanto otros agentes de la CNI arrestaban en sus domicilios a una quincena de dirigentes sociales de base. Según fuentes oficiales, durante la jornada hubo 232 detenidos en Santiago y 308 en provincias, de los cuales 61 fueron acusados de diversos delitos. También se supo de numerosos heridos. En La Victoria se registraron 35 heridos por militares, 18 con perdigones, 4 con balines y 4 jóvenes que fueron desnudados, quemadas sus ropas y obligados a apagar las fogatas con sus pies. Solo a la Villa O'Higgins llegaron diecisiete camiones militares que rodearon la zona durante cuatro horas, desde los cuales se disparaban armas automáticas permanentemente. Situación similar se vivió en Santa Julia, La Legua, Lo Hermida, Yungay, La Bandera y Ramón Cruz.

El día 3 el ambiente de movilización, si bien generalizado, fue menor que el anterior. Durante la mañana hubo más locomoción colectiva, pero la circulación volvió a decaer en horas de la tarde. Lo mismo ocurrió con el comercio. En las poblaciones se realizaron diversas actividades recreativas, campeonatos deportivos y juegos para los niños. Por la noche hubo marchas y volvió el fuego de las barricadas. También se intensificó la vigilancia de Carabineros en el centro de la ciudad y el patrullaje militar en las poblaciones se ensañó con los más jóvenes. Nuevamente fue imposible realizar la actividad programada en plaza de Armas, y resonaron disparos y explosivos hasta pasadas las 24 horas. Se supo de tres muertos, Igor Ríos Céspedes, de 19 años, alcanzado por una bala disparada desde un jeep militar en La Legua; Rubén Contreras Grandón, de 19 años, baleado en la rotonda Vicuña Mackenna, y Francisco López, de 18 años, baleado en la comuna de Conchalí. Según datos de la prensa, durante el 2 y 3 de julio hubo más de 600 detenidos en todo el país y cerca de medio centenar de heridos por balas, balines o perdigones<sup>49</sup>.

El doctor González calificó la jornada como exitosa y los líderes nacionales mostraron su satisfacción ante una jornada de “inesperada magnitud”<sup>50</sup>. Las expectativas en torno al proceso unitario eran elevadas. Pero no duró mucho. Las dos operaciones diseñadas por el PC como parte de la ofensiva final para terminar con la dictadura –la internación de 80 toneladas de armas por el puerto nortino de Carrizal Bajo y la emboscada a Augusto Pinochet en septiembre de 1986– fracasaron. La frágil plataforma de oposición unificada que representó la Asamblea de la Civilidad terminó por romperse definitivamente. Los comunistas fueron fuertemente condenados desde las cúpulas políticas acusados de “hacerle el juego” a la dictadura. A los líderes nacionales de la AD que decían rechazar todo tipo de violencia les sobró argumento para aislarlos y retomar el pacto que había quedado pendiente con la centroderecha. Como ha apuntado Tomás Moulian:

Un poco después del atentado empezó a circular entre los militantes y dirigentes políticos, especialmente de la izquierda nucleada en la AD y en el Bloque Socialista, un documento escrito por José J. Brunner. En él se plantea el fracaso de las movilizaciones, la necesidad de abandonarlas, la necesidad de tomar distancias del MDP y de la oposición armada, la necesidad de proponerle a las FF. AA. una “salida negociada” que no puede encontrarse al margen de las condiciones creadas por la Constitución del 80<sup>51</sup>.

Encaminados en dicho terreno desde fines de 1986, los integrantes de la AD a cargo del proceso de negociaciones y aquellos que el historiador Gabriel Salazar ha llamado “teóricos de la transición”, sus intelectuales, argumentaron que “las protestas habían cambiado completamente de naturaleza”, por lo tanto habían dejado de tener sentido. De ahí que la transición fuese “un escenario apto para los partidos, no para los movimientos sociales”. Entonces sería necesario “reconocer la transición como un momento político que requiere de una (momentánea) desarticulación entre lo político y lo social”<sup>52</sup>.

Su conclusión fue que las protestas fracasaron en la medida que no lograron el objetivo de derrocar a Pinochet y que, en contraste, había triunfado la opción política del diálogo que ellos encabezaban. Para graficar esta visión, prestemos atención al testimonio de Genaro Arriagada, militante demócratacristiano y

fundador de la llamada “Concertación de Partidos por la Democracia”:

Los sectores medios habían empezado a sustraerse del movimiento ya a comienzos de 1984, como lo indicaba la disminución de la acción contestataria en los barrios residenciales [...] las protestas se habían transformado, cada vez más, en un movimiento de “pobladores”. Ellas eran, ahora, demostraciones que no tenían apoyo efectivo ni en el sindicalismo ni en sectores medios y quedaban reducidas a la acción militante de estudiantes, jóvenes pobladores y desempleados urbanos [...]. Las protestas devinieron en desorden y en una forma de violencia ambiental irreflexiva. Situación que se agravaba por la acción represiva del gobierno<sup>53</sup>.

La transición pactada pidió silencio. Necesitó silencio. La riqueza social de la protesta, la diversidad de sonidos, colores, expectativas y furias quedaron suspendidas en el horizonte de posibilidades que también se estrechaba. La concertación social se redujo a una concertación entre élites. El miedo al descontrol de las fuerzas sociales requería encauzarlas para poder gobernar. Pero sin incorporar los procesos de democratización –que corrían a contracorriente– y los sujetos sociales que los encarnaban, la nueva democracia quedó vacía. En el palacio presidencial volvieron a escucharse las críticas al sistema neoliberal y, por el contrario, las bondades del modelo se trasladaron hacia el programa económico de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia. Nadie de la nueva clase gobernante exigió que las FF. AA. fuesen expurgadas ni quiso recordar que en ellas había cientos de torturadores, planificadores, ejecutores de hombres y mujeres de izquierda que continuaban cumpliendo funciones institucionales. Ni los planes de estudio de sus nuevos reclutas, ni sus prácticas, en fin, su horizonte de pensamiento y acción, fueron cuestionados. Sin lugar para las fuerzas que impulsaban la transformación, solo hubo espacio para perfeccionar el sistema entre funcionarios y acuerdos entre directivas. En tanto, la desarticulación “momentánea” entre sectores populares movilizados y parte de la clase política que decía representarlos –lejos de terminar– se prolongó durante los cuatro gobiernos consecutivos (1990-2010).

Pero es innegable que tanto la Alianza Democrática como la futura Concertación tuvieron apoyo ciudadano. En el proceso de construcción hegemónica fueron

legitimados porque la transición chilena era mucho más que el pacto de sus élites, había sido peleada en la lucha por sobrevivir y oponer resistencia que en estas páginas hemos graficado. Fue el movimiento social el que asumió los costos represivos y generó las condiciones de posibilidad para que la Concertación pudiese negociar y gobernar. Por ello el cambio de mando fue sentido como una batalla ganada.

No obstante, si escuchamos en este texto las voces que gritaron, se organizaron y lucharon, las voces que ganaron la calle en los años 80, comprenderemos que la transición no materializó “los mandatos del pueblo”; porque en definitiva la demanda “¡Democracia, ahora!” entrañaba un contenido más profundo que el traspaso de un gobierno militar a uno civil. Más que la construcción de una democracia formal con actores consagrados, la demanda democratizadora apelaba a la defensa de dos principios fundamentales: libertad política y soberanía popular. Principios que tiempo atrás había sabido interpretar Salvador Allende cuando hablaba de construir el gobierno del pueblo. ¿Cuáles serían los contenidos que definirían esos principios en la democracia posdictadura? Esa respuesta quedó pendiente y es la que continuará dirimiéndose en los procesos de politización que se construyen en las calles, fábricas, oficinas, hospitales, campos, universidades y liceos chilenos; porque la definición de esos contenidos, en tanto demandas, visiones o alternativas de sociedad, son la tarea inacabable de la contienda política y las discontinuidades de su historia.

■

<sup>1</sup> [El Mercurio, 7 de noviembre de 1984.](#)

<sup>2</sup> [Moulian, Tomás, Chile actual... Op. cit. p. 304.](#)

<sup>3</sup> [La Segunda, 5 de noviembre de 1984.](#)

<sup>4</sup> [Decía el bando: “La ciudadanía no podrá transitar en vehículos o a pie, en forma individual o en grupos, por la vía pública, debiendo permanecer en sus respectivos domicilios o lugares de trabajo en los turnos nocturnos”. Jefe de Zona en Estado de Emergencia mayor general René Vidal Bassauri. En: El Mercurio, 7 de noviembre de 1984.](#)

<sup>5</sup> [En la primera detuvieron a siete de sus dirigentes; en la segunda fueron detenidos otros trece. Entre los detenidos se encontraban: Carlos Opazo, Enrique](#)



[Avendaño, Segundo Cancino, Hernán Castañeda, Alamiro Guzmán, Moisés Labraña, Juan Antinao, Ariel Urrutia y Juan Valencia.](#)

[<sup>6</sup> La Segunda, 28 de noviembre de 1984.](#)

[<sup>7</sup> Garretón, Manuel Antonio, “La transición bloqueada”, revista Mensaje, N° 336, Santiago, enero-febrero de 1985, p. 31.](#)

[<sup>8</sup> “Apertura mostró al marxismo vivo y trabajando”. El Mercurio, 7 de diciembre de 1984.](#)

[<sup>9</sup> Estado de sitio. Revista Time. Estados Unidos, 26 de noviembre de 1984.](#)

[<sup>10</sup> “Estado de sitio es transitorio”. El Mercurio, 6 de noviembre de 1984.](#)

[<sup>11</sup> “Propósitos peligrosos”. El Mercurio, 7 de noviembre 1984.](#)

[<sup>12</sup> “Se estudia prorrogar el estado de sitio”. El Mercurio 29 de enero 1985; y “Gobierno fundamenta el estado de sitio”. El Mercurio, 5 de febrero de 1985.](#)

[<sup>13</sup> “Partidos de la AD nunca serán oposición dentro del sistema”. El Mercurio, 2 de noviembre de 1984.](#)

[<sup>14</sup> La Segunda, 7 de noviembre de 1984.](#)

[<sup>15</sup> “Apertura mostró al marxismo vivo y trabajando”. El Mercurio 7 de diciembre de 1984.](#)

[<sup>16</sup> La Tercera, 7 de noviembre de 1984.](#)

[<sup>17</sup> En los siete meses que duró el estado de sitio hubo 33 muertos \(10 en supuestos enfrentamientos, 5 por violencias innecesarias, 5 y 10 clasificados como “otras muertes violentas”\).](#)

[<sup>18</sup> Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, noviembre de 1984, p. 53.](#)

[<sup>19</sup> De las 431 personas detenidas, 125 fueron relegadas desde recintos de investigaciones y otras 21 lo fueron después de permanecer recluidas en recintos de la CNI. No obstante, solo se supo de su traslado cuando el ministro del Interior respondió a la Corte de Apelaciones que 50 de ellas habían sido](#)

relegadas a Pisagua. Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, noviembre 1984.

<sup>20</sup> La Tercera, 8 de noviembre de 1984.

<sup>21</sup> “Carta del Arzobispo a la iglesia de Santiago”. Ibid., p. 6.

<sup>22</sup> El 23 de diciembre detuvieron a dos sacerdotes y a dos religiosos que repartían tarjetas navideñas contra la tortura a la salida de las misas. El 27 diciembre, el sacerdote norteamericano Denis O’Mara fue expulsado por disposición del Ministerio del Interior. El 29 de noviembre, expulsaron al corresponsal de UPI Anthony Boodley. Además, el periodista holandés Jert Wurwal fue detenido junto a dos sacerdotes, dos seminaristas y un pre diácono en la comuna de Pudahuel el 28 de noviembre.

<sup>23</sup> Informe Mensual. Vicaría de la Solidaridad, noviembre de 1984, p. 62.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> El Mercurio, 28 de noviembre de 1984.

<sup>26</sup> Informe Mensual. Comisión Chilena de Derechos Humanos, N° 35, noviembre, p. 4.

<sup>27</sup> Por la tarde fueron detenidos en la comuna de Pudahuel los sacerdotes Mariano Puga, Mariano Mazur, el pre diácono Esteban Merino y un estudiante holandés que fue expulsado del país. En la Vicaría se registraron cerca de 40 casos de heridos por balines, perdigones y golpes. “27 y 28. Días de contradicción”. Solidaridad, N° 190, 1 al 14 de diciembre 1984.

<sup>28</sup> “Las manifestaciones de protesta. La protesta del 27 y 28 (Documento de trabajo)”. Santiago, 29 de noviembre de 1984. La Vicaría presentó recursos de amparo por 90 detenidos, entre ellos el sacerdote Mariano Puga, y 41 estudiantes de la Universidad de Chile, Católica y de Santiago.

<sup>29</sup> La Tercera, 30 de noviembre de 1984.

<sup>30</sup> Páginas Sindicales, N° 66, año 8, noviembre de 1984, p. 10. En tanto, oscuros funcionarios continuaron la labor de terror con otros secuestros, asalto a organizaciones y diversos métodos de hostigamiento. Días más tarde fue

asesinado por la espalda el joven Óscar Fuentes mientras repartía panfletos que convocaban a una jornada en “Defensa de la Vida”.

<sup>31</sup> Ibid., pp. 2-5.

<sup>32</sup> Entrevista con Viviana Díaz, 2 de julio de 2010.

<sup>33</sup> La S. N. consideraba un nutrido plan de acciones, además del aumento de las estructuras de trabajo militar, de las fuerzas operativas territoriales y las Milicias Rodriguistas.

<sup>34</sup> “Para voltear al Pinochet el único camino es el enfrentamiento continuo y ascendente”. Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile-1985. En: Hacia el XV Congreso del Partido Comunista de Chile. Op. cit., p. 119. Ibid., pp. 111 y 119.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> El texto fue trabajado en Calera de Tango desde el 22 de julio de 1985, y debatido en el seminario realizado el 26 y 27 de noviembre de 1985 en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Documento “Acuerdo Nacional y transición a la democracia”. Editado por Tamara Avetikian. Estudios Públicos, N° 21. Santiago, Verano de 1986, p. 2.

<sup>37</sup> Documento “Acuerdo Nacional y transición a la democracia”. Op. cit., p. 4.

<sup>38</sup> Garretón, Manuel Antonio. La transición bloqueada. Op. cit., p. 32.

<sup>39</sup> La Tercera, 1 de noviembre de 1984.

<sup>40</sup> Como resultado de las llamas, Rodrigo Rojas murió a las pocas horas de ser encontrado y Carmen Gloria logró sobrevivir con graves quemaduras en todo su cuerpo.

<sup>41</sup> Ver: Álvarez, Rolando. “Aún tenemos patria, ciudadanos. El Partido Comunista de Chile y la salida no pactada de la dictadura (1980-1988)”. En Valdivia, V.; Álvarez, R.; Pinto, J.; Donoso, K.; Leiva, S. Su revolución contra nuestra revolución. Vol. II. LOM Ediciones, 2008. Bravo Vargas, Viviana. ¡Con la razón y la fuerza!, Op. cit., “El tiempo de los audaces: La Política de Rebelión Popular de Masas y el debate que sacudió al Partido Comunista”. En: Álvarez,

R.; Samaniego A., y Venegas, H. (Editores), Fragmentos de una historia. El Partido Comunista de Chile en el siglo XX. Democratización, clandestinidad, rebelión. (1912-1994). Santiago de Chile, Ediciones ICAL, 2008. Rojas, Luis, De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Antecedentes de la Historia Política y Militar del Partido Comunista de Chile y del FPMR, 1973-1990. LOM Ediciones, Santiago, 2011; y Herreros, Francisco. Del Gobierno del pueblo a la Rebelión Popular. Historia del Partido Comunista 1970-1990. Editorial Siglo XXI, Santiago de Chile, 2003.

<sup>42</sup> “Paro del día 2 y 3 de julio de 1986”. ADVS, p. 1.

<sup>43</sup> Se encontraban: la Federación de Colegios Profesionales, la Confech, el Colegio de Profesores, Asociación Gremial de Educadores de Chile, Confederación Nacional del Comercio Detallista, Comando Nacional de Trabajadores, Central Democrática de Trabajadores, Grupo de los 24, Comisión de Derechos Humanos, Mujeres por la Vida, Coordinadora de Gremios de Arte, Confederación Nacional Campesina, Ad-Mapu, Confederación Nacional de Cooperativas, Unión Nacional de Pensionados, Comité Coordinador de Asociaciones de Académicos, Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

<sup>44</sup> “AVEC con damnificados y allanados”. Solidaridad N° 226, 27 de junio al 17 de julio de 1986, p. 2.

<sup>45</sup> Se trata de una serie de seis cartillas creadas por un llamado Taller de Apoyo al Paro. ADVS.

<sup>46</sup> Se trata de las hermanas Margarita y María Paz Martín Martínez e Isidro Salinas Martín, hijo de una de ellas, a cargo de una clínica clandestina del FPMR.

<sup>47</sup> “Más víctimas fatales en incidentes” El Mercurio, 4 de julio 1986, C8.

<sup>48</sup> “Paro del día 2 y 3 de julio de 1986”. ADVS, p. 1.

<sup>49</sup> “Más víctimas fatales en incidentes”, El Mercurio, 4 de julio de 1986.

<sup>50</sup> “Informe entregó Asamblea de la Civilidad”, El Mercurio, 3 de julio de 1986.

<sup>51</sup> Moulían, T., Chile actual... Op. cit., p. 334.

<sup>52</sup> Tironi, Eugenio (1987), “Marginalidad, movimientos sociales y democracia”. Propositiones N° 14, Santiago, 1987, p. 17. Un análisis crítico de los argumentos y función de los “teóricos de la transición”. En: Salazar, Gabriel. “La violencia política popular en ‘Las Grandes Alamedas’” (Prefacio a la segunda edición. Reposicionando las críticas). Op. cit.

<sup>53</sup> Arriagada, Genaro, Op. cit., p. 186.

## CONSIDERACIONES FINALES

Las imágenes que acompañaron las manifestaciones públicas por la campaña del “NO” en el plebiscito que el 5 de octubre de 1988 derrotó al general Augusto Pinochet recorrieron el mundo. Eran miles los que marchaban entre papel picado y cientos de pancartas. A los chilenos y chilenas de 1988 se les veía felices en los encuentros multitudinarios. Posteriormente, fue la imagen del demócrata cristiano Patricio Aylwin recibiendo la banda presidencial con un abrazo conciliador de Augusto Pinochet y el aplauso de los presentes en el renovado Congreso Nacional la que dio varias veces la vuelta al planeta. Chile salía de la dictadura a través de la llamada transición pactada. Una transición ejemplar, ordenada, muy compuesta, que fue simbolizada con el blanqueamiento del edificio de La Moneda, recubierto de un color claro, brillante.

Pero algo faltaba ahí, algo que a poco andar quedó demostrado en el silencio de sus intelectuales y en la reconstrucción de la historia del Chile reciente. El eslogan de la primera campaña presidencial de la coalición llamada Concertación de Partidos por la Democracia decía: “Gana la gente, Aylwin presidente”; por contraste, transcurrido el tiempo eso era lo que faltaba: la gente. Los gobernantes seguramente no lo sabían, no por falta de voluntad, sino que desde esas alturas simplemente no podían verla; ni en ese entonces, ni cuando el propio Patricio Aylwin aplaudió y justificó el golpe de Estado; como tampoco la pudieron ver en el desarrollo de la lucha contra la dictadura, por más que considerasen que una “movilización tutelada” era un buen instrumento de presión para negociar con las Fuerzas Armadas y la derecha política. Lo de ellos era resguardar las instituciones y asegurar la gobernabilidad del país, maniobrando entre el viejo terror de las élites a las pasiones de la “chusma” y la real aspiración paternalista de hablar en nombre de ellas.

A partir de ese silencio, la presente investigación se inspiró en dos hipótesis que creemos haber demostrado: una, que las Jornadas Nacionales de Protesta fueron protagonizadas por sujetos activos y conscientes que con diversas experiencias, tradiciones políticas y formas de lucha supieron organizarse y rebelarse contra un contexto de opresión, humillación y despojo, y la otra, que permitieron desarrollar un importante proceso de democratización social que generó las

condiciones de posibilidad para ampliar los espacios de sociabilidad y politización a la hora de enfrentar a la dictadura.

La transición chilena fue mucho más que una campaña electoral televisiva, mucho más que el “NO” enmarcado por un arcoíris que simbolizó a la oposición en el plebiscito. Esos cientos de miles que marcharon en 1988 y 1989 lo venían haciendo públicamente desde el 11 de mayo de 1983, momento en que se masificó la cultura de la confrontación y sus formas de socialización política. Era gente que sabía moverse y organizarse en las calles, desplegar pancartas y corear consignas, también sabían protegerse de las bombas lacrimógenas y acortar las distancias urbanas con su poderío numérico y conocimiento del territorio. Eran ellos quienes venían soportando los castigos disciplinarios que seguían a cada manifestación y resultaba difícil, a la hora de protestar, contarles cuentos.

Consideremos que la primera concentración masiva después del golpe, y que reunió a aproximadamente 15 mil personas, fue un 5 de octubre de 1983 en la Avenida Bulnes del centro de Santiago. Como hemos señalado, el encuentro fue convocado por asociaciones juveniles que quisieron aprovechar la promulgación del derecho a reunión que, en plenas Fiestas Patrias, anunció la dictadura como parte de las concesiones otorgadas dentro de la llamada apertura política. Solo una semana después se reunieron ochenta mil personas en Alameda con General Velásquez. El año de los encuentros cerró el 18 de noviembre, cuando por primera vez en diez años se concretó una multitudinaria concentración de forma autorizada en un recinto cerrado como el Parque O’Higgins. En el podio pudo hablar, entonces, ante medio millar de personas, un representante de la AD, conglomerado que, al igual que los otros, se creó y se fortaleció al calor de las protestas.

Fueron estas concentraciones parte de las importantes conquistas sociales conseguidas por las Jornadas Nacionales de Protesta, que demostraron la capacidad que tenía la gente para ganar la calle y ampliar los espacios de encuentro y discusión pública. Esa había sido parte de su historia en situaciones muy distintas a través del siglo. Y pese a que todo el tiempo estuvieron rodeados por las Fuerzas Especiales de Carabineros y que la represión se cobraba cara en sus cuerpos y territorios, ellos seguían reconquistando espacios y participando. Por lo tanto, no se trataba de que los líderes nacionales que gobernarían el país hubiesen movilizado a las masas o que el carisma de sus figuras les hubiese seducido a asistir a las actividades por la campaña plebiscitaria del “NO”. No.

Porque ¡el plebiscito no era un punto de partida! Mal que mal, más allá de las evaluaciones estratégicas de los militantes, que desconfiaban de la ceremonia electoral, para la gente común derrotar a Pinochet con su voto significó un triunfo al que ellos habían aportado generando las condiciones de posibilidad en la calle y en voz alta durante varios años e innumerables sacrificios. Se prometía la alegría (“Chile, la alegría ya viene...” era la consigna) y los esperanzados aguardaban que su voto los condujera a un futuro incluyente. En ello depositaron su confianza.

Por otro lado, es legítimo preguntarse ¿qué tan factible podía ser una salida “a la plebeya”? La cultura política chilena era vigorosa en su organización obrera; también sus pobladores se habían sabido organizar para asegurarse la vida en la ciudad, y los estudiantes para democratizar sus espacios y solidarizar con las luchas nacionales. Lo de ellos era la organización a través de sindicatos y partidos políticos, lo de ellos era la toma de terrenos, las marchas, los pliegos petitorios y la negociación a través de revueltas con las que se habían transformado en interlocutores válidos, ampliando los límites de la relación estatal. Pero en la historia de Chile, “el poder” nunca había sido tomado por asalto. Por más que los sectores radicalizados de izquierda, imbuidos por la atmósfera revolucionaria de los años 60, hubiesen querido saldar el asunto de otra forma, lo cierto es que era Salvador Allende –y lo que representaba su figura, su programa y sus acciones– lo que hasta entonces querían los sectores populares y sus compañeros de ruta. Decimos “hasta entonces”, porque la historia siempre está abierta a elegir sus caminos, y si entramos en el terreno de los “hubiese” (o historia contrafactual) es imposible saber qué hubiese pasado si la Unidad Popular hubiese sido defendida, si se hubiese armado al pueblo, si no se hubiese confiado ciegamente en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y todas aquellas reflexiones en las que se sumergió la izquierda luego del golpe de Estado.

Pero ocurrió que si bien el redimir culpas por no defender a la UP fue una inspiración con que el Partido Comunista y sus juventudes, como segunda fuerza hegemónica de la oposición, potenciaron las luchas y se legitimaron en las calles a la hora de enfrentar a la dictadura, la ventana de posibilidad para una salida tan radical, “plebeya”, era bastante estrecha después de 1986. Si en algún momento, principalmente con las grandes Jornadas Nacionales de Protesta de marzo, septiembre y octubre de 1984, se pudo divisar esa alternativa en el horizonte, después del estado de sitio la gente ya estaba muy cansada, más que nunca. Fue una prueba de fuerza con la que respondió el aparato militar, con toda su



capacidad operativa para sembrar terror y cuyo impacto represivo merece volver a ser dimensionado por los historiadores.

En esa dinámica era muy difícil seguirles el ritmo a quienes con buena cuota de voluntad y entrega personal querían protestar todo el tiempo. A pesar de eso, “la cosa siguió”, con distintos modos e intensidades, hasta finalizar el régimen. Paralelamente, la gente depositó su confianza en quienes hablaban en su nombre e identificaban como “de los suyos”; que eran aliados lo habían demostrado los líderes locales en los procesos de democratización que corrían por abajo (es el caso, por ejemplo, de dirigentes estudiantiles y sindicales de la Democracia Cristiana). El voto se identificaba con democracia, y no les causaba conflicto; por el contrario, fue celebrado. Otra cosa es que más tarde su participación quedara fuera de la reconstrucción histórica oficial, y su convocatoria y concurrencia, restringida a las necesidades y momentos que requiriesen captar público electoral.

Hemos observado que las motivaciones para protestar fueron bastante amplias, tanto como lo heterogéneo de la protesta. No obstante, hubo un enemigo común que ayudó a aunar la diversidad y fortalecer la mística y estética de la rebeldía: derribar al tirano. Pero hay más. En esta experiencia política el sentimiento de agravio fue un complejo hilo que debimos rastrear. Agravio que se activaba ante la constatación cotidiana de la injusticia: injusticia social de la opulencia (conflicto de clases muy presente), injusticia de la represión y del autoritarismo, injusticia ante derechos perdidos por un sistema instaurado por la fuerza. Podemos asegurar que no fue tan fácil legitimar el nuevo proyecto societal de reconfiguración capitalista que finalmente se impuso. Fue este un momento de transición en que la cultura política, sintetizada en el allendismo, no terminaba de morir, y la otra, la de las privatizaciones y racionalidades económicas, del individualismo y la socialización en torno al consumo que se declaraba triunfante –aunque con su cuota de adeptos– no terminaba de legitimarse y posicionarse en el campo de fuerzas hegemónico. Fue este el momento en que se dirimieron rencores y proyectos históricos. Hubo una discusión callejera en torno a los valores que regían a la sociedad, una disposición fundamentada en una ética colectiva de la política que la dictadura intentó romper desde el golpe de Estado, pero que se volvió a tejer comunitariamente.

Si sabemos escuchar al mayo de 1983, el mensaje principal que fue transmitido a la sociedad decía que los costos de la instauración del modelo lo pagaban los sectores más pobres, los mismos que eran oprimidos políticamente, sufrían

cesantía, hambre, humillaciones y crueldades físicas y psíquicas sin descripción. Por ello es que la protesta en su aparición pública de todos y al mismo tiempo resultó ser colosal. Después de diez años de resistencia clandestina e intramuros, del lenguaje cifrado y del pequeño formato clandestino, la oposición al pinochetismo habló en voz muy alta, en forma bulliciosa, desordenada, directa y con toda la fuerza de los símbolos forjados en una trayectoria compartida.

Pero esto tampoco fue automático. En la medida que acercamos el lente a las dinámicas desarrolladas durante aquellos años, el trabajo militante de partidos políticos de izquierda, instituciones eclesióásticas y sindicales en la movilización de ideas y propuestas transformadoras nos aparece con claridad. Estos dieron dirección a energías muchas veces dispersas, crearon un clima de opinión favorable a la rebeldía y diseminaron y resignificaron ideas derivadas, como la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos, entre otros. En este ámbito, la dignidad (del trabajador, poblador, estudiante, mujer, hombre, niño) y el derecho a la protesta fueron temas recurrentes.

Pero para complejizar aún más el cuadro, también quedó demostrado que más allá de que existiese un llamado central, las normas internas, el hasta dónde y el cómo de la protesta no fueron impuestas por un mando, no cayeron de una orden; si bien existió un marco de acción, las formas y contenidos prioritarios fueron definidos dentro de la misma protesta y su potencialidad territorial. Prueba de ello fueron los persistentes e infructuosos intentos de la Alianza Democrática y en específico de la Democracia Cristiana por definir y conducir las formas de lucha en las jornadas que contaban con su venia. Sus llamados siempre fueron rebasados, sin excepción. Si es que alguien tenía legitimidad a la hora de conducir la protesta, esos eran quienes se encontraban en la calle, reconocidos por su trabajo previo en terreno (líderes locales) o por tener el carisma necesario para comandar una acción al calor de los hechos (líderes del momento). Pero la protesta nunca pudo ser diseñada desde una tribuna o un programa de radio (desde afuera). Sus fuerzas internas no lo permitían.

Más allá de los llamados a protestar pacíficamente, hubo un intenso despliegue de formas violentas contra el ordenamiento social, moral y material de la dictadura. Pero hemos insistido en que ni a las protestas ni a la violencia política podríamos pensarlas aisladamente, sino dentro de un diálogo, una negociación y una tensión ante la violencia institucionalizada y entre las relaciones de oposición que se dirimen dentro del campo de batalla social. Como bien apuntó Bolívar Echeverría al reflexionar sobre la violencia: “Toda actividad política que

se atreva a no comportarse ‘constructivamente’ con respecto al ‘proyecto de nación’ tras el que se escuda el Estado capitalista es ya, en principio, violenta: implica un atentado, un boicot, una acción destructiva”<sup>1</sup>. En este sentido, las formas de lucha de la protesta fueron antagónicas a la cultura impuesta: al disciplinamiento se respondió con todo el simbolismo de la desobediencia, y a la violencia del aparato represor, con la violencia popular (dentro de sus desiguales posibilidades, por supuesto). Por lo demás, los blancos de la furia fueron principalmente bienes materiales, como vehículos de Carabineros, microbuses cuyos dueños rompían el llamado a no transitar, bancos, oficinas de servicio municipal, líneas férreas, postes de alumbrado público, casas de agentes o colaboradores de la dictadura, pero en muy contadas ocasiones cobró la vida de sus oponentes. Cuestión diametralmente distinta a lo que ocurría al otro lado de la trinchera y la masificación de las políticas represivas. Como señalábamos anteriormente, la lucha de clases también se manifestó en un fuerte rechazo a las clases acomodadas; el rencor hacia la opulencia y sus símbolos cobró una fuerte presencia, al punto que dentro de la oposición era mal visto vivir cómodamente; la ostentación material hería sensibilidades, restaba credibilidad al argumento y al compromiso, incluso a nivel juvenil. La austeridad y solidaridad con los sectores populares era un imperativo moral tan obvio que ni siquiera era tema de discusión.

En la densa textura de la vida cotidiana, entre el rechazo a los poderosos y la expresión de sus expectativas, surge la vida pública y su cultura política. Por ello fue importante recorrer el centro y los barrios santiaguinos. Lo hemos sostenido y demostrado. Parte nodal de la protesta fue la recuperación de la calle, espacio histórico de socialización, interacción, construcción y producción de la política popular. Ante la reproducción permanente del orden y el ordenamiento del capital se respondió con la voz en alto de las calles, con el sin permiso, con la cofradía de la experiencia colectiva. Es esta irrupción la que debemos considerar. Una disputa por los espacios de una ciudad pensada y vivida como un campo de batalla en que se confrontaron proyectos hegemónicos y contrahegemónicos. Esta insistencia, que muchos catalogaron de “rutinaria”, era la forma que tenían y eligieron para hacerse ver y escuchar, para reconocerse entre muchos y construirse como fuerza social. Y cada conquista, por pequeña que nos pueda parecer a la distancia (como la autorización para reimprimir libros o el retorno de algunos exiliados), fue dirimida en esa “retórica del protestar” y su despliegue callejero (público).

Por ello queríamos que quedara registro de las calles y de los nombres, de las

trayectorias de los hombres y mujeres en la ciudad, y si no podíamos incluirlos a todos, al menos que los muertos tuviesen un lugar aquí. Los que murieron en las protestas no sucumbieron realizando sofisticadas acciones de sabotaje, sino que la mayoría cayó cerca de una barricada, mientras participaban en una marcha poblacional o tirando piedras; en muchas ocasiones víctimas de una bala disparada por la espalda desde automóviles en marcha. La mayoría de los que morían en las protestas caían bajo la azarosa posibilidad de la muerte que afectaba a los pobladores o estudiantes cuando actuaban en masa. Y podía caer cualquiera. De hecho, no fueron pocos los que murieron, al igual que el padre André Jarlan, por un proyectil que atravesaba la madera de sus modestas viviendas o mientras estaban en las puertas de sus casas.

Si bien para reconstruir su historia, para entenderlos, fue necesario examinar con otra mirada los archivos oficiales –lo que Ranahit Guha propuso en su inspirador texto *La lírica de la contrainsurgencia*–, también fue imprescindible acercarnos a esos otros lugares donde se resguardan las voces y las memorias de la calle. Para ello contamos con el generoso aporte de la Fundación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, donde se albergan documentos e imágenes que muestran los rostros, las banderas, las calles y territorios populares tantas veces condenados a las sombras y a la criminalización de la mirada oficial. Gracias a su importante registro ya no son sombras, tienen nombres, familia, ocupación, lugares de residencia, y además, nos entregaron claros indicios sobre la composición de la protesta.

Por lo que llamamos geografía de la represión y las largas listas de detenciones, sabemos que durante 1983 los sectores reprimidos por participar en manifestaciones políticas fueron en su mayoría obreros, cesantes y adscritos a los programas de absorción de empleo (PEM y POJH), seguidos por estudiantes, principalmente universitarios. Protagonismo que en 1984 se invierte. Este desplazamiento en la composición se explica por la participación y desarrollo orgánico que alcanzaron los estudiantes durante este tiempo, y por las medidas de disciplinamiento que los obreros y trabajadores del PEM y del POJH sufrieron durante 1983. El caso de estos trabajadores –cuyas mujeres y familiares califican como derrumbados– ameritaría el desarrollo de líneas de investigación que examinen la constitución de ambos programas como matriz del trabajo y políticas públicas bajo los parámetros neoliberales, con la consabida precariedad y el atropello a la dignidad del trabajador. También fueron cuerpo y alma de la protesta los estudiantes secundarios, con importante protagonismo en 1985 en su lucha contra la municipalización de la educación;

los sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos, que emprendieron diversas tareas de colaboración y acciones de no violencia activa, y, tal como hemos constatado, el trabajo político de los militantes.

Si bien la clase media estuvo presente, actuaba de forma más individual o familiar a través de formas de lucha que no la exponían directamente a la represión, como el caceroleo, los bocinazos, tacos vehiculares o con los “no” (no comprar, no pagar cuentas, no enviar a los hijos al colegio). Por lo tanto, es complicado calibrar a partir de este tipo de datos su participación; pero podemos tener indicios a través de la prensa y algunos testimonios que confirman su presencia en jornadas y barrios específicos. Es importante aclarar que el caso de militantes que pertenecían a esos sectores era distinto, en tanto eran partícipes de compromisos y dinámicas colectivas que los exponían públicamente, resultando constantemente mojados, apaleados, detenidos e incluso muertos.

Por último, queremos reservar unas líneas para destacar el aporte de los archivos familiares y personales atesorados por hombres, mujeres y generaciones que resguardan celosamente la experiencia de resistir. Porque no solo las instituciones tienen conciencia de la importancia de atestiguar el paso del tiempo y resguardar su anclaje material. Álbumes, cartas, libros, postales, revistas, discos, casetes, carteles y panfletos cuidados y heredados con orgullo y confianza nos entregaron generosas huellas para desentrañar los sonidos, significados y complicidades que tejieron la historia de la protesta social chilena durante la época de estudio. El generoso archivo de don Luis Fuentealba, sin ir más lejos, con decenas de documentos inéditos sobre las luchas que dieron los trabajadores, es una pieza fundamental para escribir la historia del sindicalismo durante esta etapa, pero insólitamente desconocido por quienes han emprendido la tarea.

Desempolvar los viejos roperos y fascinarnos con fotografías familiares también nos permitió escuchar historias y registros que corren desde abajo y desde adentro. Así, las entrevistas con la gente que vivió y participó en aquellos años añadieron nuevos colores a la trama que estábamos elaborando. Dirigentes sindicales y estudiantiles, pobladores y obreros, militantes de base, teólogos, asistentes sociales, intelectuales, reporteros gráficos y músicos nos hablaron con voz nostálgica sobre el sentido épico que potenciaba el trabajo colectivo y la entrega individual. Con distintas intensidades, el espíritu festivo que rememoraba “lo que hicimos” se entremezclaba con una compleja frustración por lo que pudo ser y no fue. Una fuerte sensación de derrota azota a una

generación, especialmente de ex militantes que se sintieron traicionados por la clase gobernante. Pero más allá de las evaluaciones respecto al desenlace, de la experiencia de resistir, emana un recuerdo con aliento movilizador; un nutrido repertorio de anécdotas de la rebeldía que transmitida de una generación a otra sigue circulando orgullosamente en reuniones, encuentros familiares, bares o frente a imágenes y movimientos que activan los recuerdos.

Unos tocaron guitarra, otros sacaron fotografías, muchos tiraron piedras. Unos alimentaron barricadas, otros interrumpieron el suministro de luz eléctrica, muchos marcharon y gritaron consignas contra el régimen. Fue hacer y desobedecer. Pero, sobre todo, habrá que reconocer que las protestas contra la dictadura fueron persistentes, obstinadas, y en eso se fundaba su principal radicalidad. Nacieron abigarradas. No empezaron bien y terminaron mal, ni viceversa. Nunca tuvieron un origen blanco o puro que más tarde se mancilló. Esta es una valoración tan subjetiva como el interés de quien valora.

Dicen que en las calles de Santiago de Chile las protestas aún nos siguen hablando, que de tanto en tanto se escucha su mensaje en las cacerolas que golpean nuevas generaciones; que sus códigos se leen en los rayados que cruzan las alamedas y en las palabras de su gente; que a veces destellan con el fuego marchas, bailes y consignas coloridas. Dicen que se anuncian a través de viejas y nuevas formas de lucha, códigos, ritos y símbolos que hablan de esperanzas y principios. Principios y esperanzas callejeras que pocas veces –o casi nunca– son finales. Solamente en los libros.

<sup>1</sup> [Echeverría, Bolívar. \*Violencia y utopía\*. Siglo XXI, México, p. 79.](#)

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Archivos:

Archivo personal Luis Fuentealba

Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad

Biblioteca Nacional Santiago de Chile

Archivo Nacional de la Administración, ARNAD

Fondo Documental Eugenio Ruiz-Tagle, FLACSO

### **I. Fuentes primarias**

Diarios y periódicos:

El Mercurio

La Segunda

La Tercera

Las Últimas Noticias

La Nación

Fortín Mapocho

Revistas:

Solidaridad

Análisis

Cauce

Hoy

Mensaje

APSI

Time

Boletines, textos y folletos:

Informe mensual. Vicaría de la Solidaridad.

Informe mensual. Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Páginas sindicales.

El Coordinador. Boletín informativo de la Coordinadora Nacional Sindical.

Hechos Urbanos. SurEdiciones.

Carta a los periodistas. Colegio de Periodistas.

Boletín SIC (servicio de información confidencial).

Ahora, Comando Metropolitano de Trabajadores (C. M. T.).



Chile de Pie. CNT.

Órgano informativo de los Sindicatos Independientes.

Cuadernos de orientación socialista. Partido Socialista de Chile.

Revista Krítica. Segunda época. N° 17, marzo-abril-mayo 1985.

Compartir. Vicaría zona oriente (circulación interna de parroquias y comunidades cristianas).

Boletín zona sur (circulación interna de parroquias y comunidades cristianas).

Boletín zona oeste (circulación interna de parroquias y comunidades cristianas).

Entre Nosotros. Vicaría zona rural-costa (circulación interna de parroquias y comunidades cristianas).

Otros documentos:

“Para voltear a Pinochet, el único camino es el enfrentamiento continuo y ascendente”. Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile-1985. En: Hacia el XV Congreso del Partido Comunista de Chile.

Convocatoria a la discusión. Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile-1984. En: Hacia el XV Congreso del Partido Comunista de Chile.

Comunicado del Partido Comunista de Chile. ¡Conferencia Nacional! Santiago, junio de 1984. En: Boletín del exterior, N° 66 julio-agosto 1984.

Documento “Acuerdo Nacional y transición a la democracia”. Editado por Tamara Avetikian. Estudios Públicos N° 21. Santiago, verano de 1986.

Declaración de Principios del gobierno militar. 11 de marzo 1974. En: [http://www.archivochile.com/Dictadura\\_militar/html/dic\\_militar\\_doc\\_junta.html](http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/html/dic_militar_doc_junta.html).

“Propuesta Universitaria. Llamamiento a los universitarios. A diez años de la

intervención en las universidades”. Septiembre 1983. En línea:  
<http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/194.pdf>.

#### Documentos audiovisuales:

La batalla de Chile. Documental de Patricio Guzmán. Chile 1972-1973.

Actores secundarios. Documental realizado por Pachi Bustos y Jorge Leiva.  
Chile, 2004.

La ciudad de los fotógrafos. Documental de Sebastián Moreno. Chile. 2006.

Teleanálisis. Noticieros clandestinos (VHS) dirigidos por Fernando Paulsen y  
Augusto Góngora. Santiago 1984-1986.

Archivo Iconográfico Fortín Mapocho.

<http://www.archivofortinmapocho.cl/galeria/sociedad/manifestaciones/>.

Imágenes de una dictadura. Documental de Patricio Henríquez. Chile, 1999.

#### Entrevistas

Alfaro, Juan, 8 de octubre de 2010.

Alvarado, Juanita, 29 de junio de 2010.

Aspasia, 23 de septiembre de 2010.

Cáceres, Alicia, 6 de julio de 2010.

Canales, Raúl, 7 de julio de 2010.

Correa, Alejandro, 23 de septiembre de 2010.

“Darío”, 22 de junio de 2005.

Díaz, Edgardo, 28 de octubre de 2010.

Díaz, Viviana, 2 de julio de 2010.

Escobar, Jaime, 5 de noviembre de 2010.

Fuentealba, Luis, 14 de octubre de 2010.

Guerra, Juanita, 20 de octubre de 2010.

Gutiérrez, Iván, 26 de octubre de 2010.

“Hernán”, 19 de octubre de 2005.

“José Luis”, 22 de octubre de 2005.

Lorenzini, Kena, 29 de octubre de 2010.

Loyola, Manuel, 24 de septiembre de 2010.

Manríquez, Raúl, 22 de octubre de 2010.

Muñoz, Nelson, 1 de noviembre de 2010.

Palma, Álvaro, 15 de octubre de 2005.

Pérez Silva, Claudio, 28 de septiembre de 2010.

“Pancha”, 20 de septiembre de 2010.

Riveros, Óscar, 10 de noviembre de 2010.

“Rodolfo”, 18 de octubre de 2005.

Ruz, Gustavo, 30 de septiembre de 2010.

Torchio, Leandro, 19 de octubre de 2005.

Valenzuela, Argentina, 29 de junio de 2010.

Venegas, Jorge, 30 de octubre de 2010.

Villa, Francisco. 21 de octubre de 2010.

## **II. Fuentes secundarias**

Libros, artículos y tesis:

Agulhon, Maurice. El círculo burgués. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009.

Agurto, Irene; Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (editores). Juventud chilena. Razones y Subversiones. ECO/FOLICO/SEPADE. Santiago, 1985.

Álvarez, Rolando. Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980). LOM, Santiago, 2003.

Álvarez, Rolando. “El plan laboral y la negociación colectiva: ¿Origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, N° 35/36, segundo semestre 2011 / primer semestre 2012.

Álvarez, Rolando. “¿Represión o integración? La política sindical del Régimen Militar 1973-1980”. Revista Historia N° 43, vol. II, julio-diciembre 2002, Santiago.

Álvarez, Rolando. “Las Juventudes Comunistas de Chile y el movimiento estudiantil secundario: un caso de radicalización política de masas (1983-1988)”. En: Álvarez, Rolando y Manuel Loyola (eds.). Un trébol de cuatro hojas. Las Juventudes Comunistas de Chile en el Siglo XX. América en Movimiento, Santiago, 2014.

Amorós, Mario. “La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del

movimiento Cristianos por el socialismo”. En: Pinto, Julio (coordinador). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, LOM, 2005.

Araya Gómez, Rodrigo. Organizaciones sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los consensos: 1983-1994, Ediciones Universidad Finis Terrae, 2015.

Araya Gómez, Rodrigo. “Cambios y continuidades en el movimiento sindical chileno en los años 80: el caso del Comando Nacional de Trabajadores”. Historia N° 47, vol. I, Santiago, 2014.

Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo. Memoria de la izquierda chilena. Vol. II. Javier Vergara (editor), Santiago, 2003.

Arriagada, Genaro. Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Editorial Sudamericana, Santiago, 1998.

Bartra, Armando. El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital. UACM-Itaca-UAM, México, 2008.

Baño, Rodrigo. Lo social y lo político. Flacso, Santiago, 1985.

Bastías Saavedra, Manuel. Sociedad civil en dictadura. Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2013.

Benjamin, Walter. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México, Contrahistorias, 2005.

Bolton, Roberto. Testigo soy. 1919-2009. IGD, Santiago, 2010.

Borja, Jordi; Teresa Valdés; Hernán Pozo; Eduardo Morales. Descentralización de Estado, movimiento social y gestión local. ICI, Flacso, Clacso, Santiago, 1987.

Bravo Vargas, Viviana. ¡Con la razón y la fuerza, venceremos! La Rebelión Popular y la subjetividad comunista en los 80. Ariadna, Santiago, 2010.

Bravo Vargas, Viviana. “El movimiento estudiantil en Chile. Advertencias a un

neoliberalismo maduro y latinoamericano”. En: Revista Pacarina del Sur, N° 9, octubre-diciembre, 2011. En línea: <http://www.pacarinadelsur.com>.

Bravo Vargas, Viviana. “Neoliberalismo, protesta popular y transición en Chile, 1973-1989”. En: Revista Política y Cultura, N° 37, México, primavera 2012. En línea: <http://polcul.xoc.uam.mx>.

Bravo Vargas, Viviana. Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989). En: Historia Crítica, N° 62. Bogotá, octubre-diciembre 2016. En línea: <https://histcrit.uniandes.edu.co/index.php/es/revista-no-62>.

Brodsky, Ricardo; Ramiro Pizarro. “La constitución del movimiento estudiantil como proceso de aprendizaje político”. En: Agurto, Irene; Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (editores). Juventud chilena. Razones y Subversiones. ECO/FOLICO/SEPADE. Santiago, 1985.

Brunner, José Joaquín. Informe sobre el desarrollo y el estado actual del sistema universitario en Chile. Documento de trabajo, N° 227, Flacso, Santiago, 1984.

Calderón, Fernando. Movimientos sociales y política. La década de los ochenta en Latinoamérica. S. XXI/UNAM, México, 1995.

Camacho, Daniel, Menjívar, Rafael, (coord.). Los movimientos populares en América Latina. S. XXI, México, 1989.

Campero, Guillermo (1985). “Luchas y movilizaciones sociales en la crisis. ¿Se constituyen movimientos sociales en Chile?: una introducción al debate”. En: Varios autores. Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile. Seminario CLACSO-UNU, Santiago, 1985.

Campero, Guillermo y Eduardo Valenzuela. El movimiento sindical en el régimen militar chileno. 1973-1981. ILET, Santiago, 1984.

Campero, Guillermo. “Organizaciones de pobladores bajo el Régimen Militar”. Propositiones N° 14, Santiago, 1987.

Campero, Guillermo. Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago. ILET, Santiago, 1987.

Cancino, Hugo. “La Iglesia Católica y su contribución a la reconstrucción de la democracia en Chile. 1973-1989”. Revista del CESLA N° 2, 2001.

Carlos Camus. “La experiencia de la Iglesia chilena en la defensa de los derechos humanos”. En: Represión Política y defensa de los Derechos Humanos, editado por Hugo Frühling, Ediciones Chile-América: 1986.

Cañas Kirby, Enrique. El proceso político en Chile. 1973-1990. Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997.

Castells, Manuel. Crisis urbana y cambio social. S. XXI, México, 1981.

Castells, Manuel. Movimientos sociales urbanos. S. XXI, Madrid, 2008.

Castillo L., Fernando. Iglesia liberadora y política. ECO, Santiago, 1986.

Cavallo, Ascanio. Memorias del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Ed. Copygraph, Santiago, 1991.

Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; Sepúlveda, Óscar. La historia oculta del régimen militar. Ediciones La Época, Santiago, 1988.

Collin, Simon y William F. Sater. Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press, España, 1998.

De Castro, Regis. “Notas sobre la metodología de la historia política”. En: Vega, Juan Enrique (coordinador). Teoría y política en América Latina. CIDE, México, 1983.

De Certeau, Michel. “La invención de lo cotidiano”. Vol. 1. Artes de hacer. Univ. Iberoamericana. México. 1996.

De la Maza, Gonzalo y Mario Garcés. La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984. ECO, Santiago, 1985.

De Ramón, Armando. Santiago de Chile. Historia de una sociedad urbana. Catalonia, Santiago, 2007.

Drake, Paul; Jaksic, Iván (editores). El difícil camino a la democracia en Chile. Flacso, Santiago, 1992.

Drake, Paul; Jaksic, Iván (editores). El modelo chileno. LOM, Santiago. 1998.

Echeverría, Bolívar. Vuelta de Siglo. ERA, México, 2006.

Elizondo, Carlos y Luis Maira. Chile-México, dos transiciones frente a frente. CEIDE/Grijalbo/ProChile, México, 2000.

Escobar, Jaime. Persecución a la Iglesia en Chile: martirologio, 1973-1986. Terranova Editores, Santiago, 1986.

Espinoza, Vicente. “Los pobladores en la política”. En: Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile. Seminario CLACSO-UNU, 1985.

Espinoza, Vicente. Para una historia de los pobres de la ciudad. Ediciones Sur, Santiago, 1988.

Espinoza, Vicente. “Tiempos cortos y largos en el movimiento poblacional”. Propositiones N° 24. Santiago, 1994.

Estévez, Francisco. “Juventud poblacional: explicación y juicio sobre la violencia”. En: Agurto, Irene; Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (editores). Juventud chilena. Razones y Subversiones. ECO/FOLICO/SEPADE. Santiago, 1985.

Falabella, Gonzalo. “La diversidad sindical en el régimen militar”. Contribuciones N° 42, Flacso-Santiago Chile, 1986.

Fernández, David. La “Iglesia” que resistió a Pinochet. Historia desde la fuente oral del Chile que no puede olvidarse, Madrid, IEPALA, 1996.

Foxley, Alejandro. Experimentos neoliberales en América Latina. FCE, México, 1988.

Foxley, Alejandro. “La transición económica en Chile: el gobierno de Aylwin”. En: Elizondo, Carlos y Luis Maira. Chile-México, dos transiciones frente a frente. CEIDE/Grijalbo/ProChile, México, 2000.

Gárate, Manuel. La revolución capitalista de Chile (1973-2003). Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.



Garcés Sotomayor, Antonia. “Los rostros de la protesta. Actores sociales y políticos de las jornadas de protesta contra la dictadura militar (1983-1986)”. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 2011.

Garcés, Mario y Nancy Nicholls. “Para una historia de los DD. HH”. En: Chile. Historia institucional de la fundación de ayuda social de las iglesias cristianas FASIC 1975-1991. LOM, Santiago, 2005.

Garcés, Mario. Crisis social y motines populares en el 1900. Ediciones Documentas, Santiago, 1991.

Garcés, Mario. “Construyendo las poblaciones, el movimiento de pobladores durante la Unidad Popular”. En: Pinto, Julio (editor). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. LOM, Santiago, 2005.

Garcés, Mario. Tomando su sitio, el movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. LOM, Santiago, 2002.

García, Diego, José Isla y Pablo Toro. Los muchachos de antes. Historias de la FECH 1973-1988. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006.

García, Rigoberto (Comp.). Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. FCE, México, 1989.

Garretón, Manuel Antonio (2001). “Movilización Popular bajo el régimen militar en Chile: de la transición invisible a la democracia política”. En: Susan Eckstein (coord.). Poder y Protesta Popular. Movimientos sociales Latinoamericanos. S. XXI, México, 2001.

Garretón, Manuel Antonio. “La oposición política y el sistema partidario en el Régimen Militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición”. En: Drake, Paul e Iván Jaksic. El difícil camino a la democracia en Chile. Flacso, Santiago, 1992.

Garretón, Manuel Antonio. El proceso político chileno. Flacso, Santiago, 1983.

Garretón, Manuel Antonio. La transición bloqueada, revista Mensaje, N° 336, Santiago, enero-febrero de 1985.

Gilly, Adolfo. “El Águila y el Sol. Genealogía de la rebelión. Política de la revolución”. En: La Jornada, 20 de noviembre 2010, México.

Gilly, Adolfo. Arriba los de abajo. Editorial Océano, México, 1986.

González, Carlos. ¿Y qué hiciste con tu hermano? LOM, Santiago, 2007.

González, Mónica y Héctor Contreras. Los secretos del Comando Conjunto. Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1991.

Grez, Sergio. De la ‘regeneración del pueblo’ a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Dibam, Santiago, 1997.

Grez, Sergio. Los anarquistas y el movimiento obrero. LOM, Santiago, 2007.

Gutiérrez, Ignacio. La Vicaría de la Solidaridad. Alianza Editorial, Madrid, 1986.

Gutiérrez, Ignacio. “Por una cultura de vida, basta de muerte”. Informe del Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales de la iglesia de Santiago, julio, 1984. En línea:

[http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4c728a6b67404\\_23082010\\_1049am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4c728a6b67404_23082010_1049am.pdf)

Herreros, Francisco. Del gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular. Editorial Siglo XXI, Santiago, 2003.

Hourton, Jorge. Memorias de un obispo sobreviviente: episcopado y dictadura. LOM, Santiago, 2009.

Huerta, Verónica. “Los veteranos de los años 80. Desde fuera, en contra y a pesar de la institucionalidad”. Tesis para optar al grado de licenciatura en sociología, Universidad Arcis, Chile, 1993.

Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet. Sudamericana, Santiago, 2000.

Informe Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech). Primer informe entregado en 2004; Segundo informe, 2010. En línea:  
<http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/comision-nacional-prision-politica-y-tortura.html>.

Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Informe Rettig). Santiago de Chile, 1991. En línea: <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>.

Illanes, María Angélica. La Batalla de la Memoria: Ensayos Históricos de Nuestro Siglo: Chile, 1900-2000. Planeta-Ariel, Santiago, 2002.

Kornbluh, Peter y Marian Schlotterbeck. Reagan y Pinochet: El momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura. 23 de noviembre, 2010. En línea: <http://ciperchile.cl/2010/11/23/reagan-y-pinochet-el-momento-en-que-estados-unidos-rompio-con-la-dictadura>.

La Victoria. Rescatando su historia. Santiago, Arcis, 2009.

Lechner, Norbert. “Especificando la política”. En: Vega, Juan Enrique (coordinador). Teoría y política en América Latina. CIDE, México, 1983.

Lechner, Norbert. Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política. LOM, Santiago, 2002.

Lefebvre, Henri. El derecho a la ciudad. Península, Barcelona, 1975.

León, Patricio. “Dinámica sociopolítica en Chile: 1973-1983”. En: Camacho, Daniel, Menjívar, Rafael, (coord.). Los movimientos populares en América Latina. S. XXI, México, 1989.

Lesgart, Cecilia. Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del 80, Homo Sapiens Ediciones, 2003.

Lobato, María Zaira. La protesta social en Argentina. FCE, Buenos Aires, 2003.

Marín, Gladys. Entrevista realizada por Claudia Korol. Ediciones América Libre, 1999.

McSherry, Patrice. Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina. LOM, Santiago, 2009.

Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. Colmex, México, 2010.

Meller, Patricio. Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Editorial

Andrés Bello, Santiago, 1996.

Milos, Pedro. Historia y memoria. 2 de abril de 1957. LOM, Santiago, 2007.

Montero, Cecilia. La Revolución empresarial chilena, Cieplan/Dolmen ediciones, Santiago, 1997.

Monsiváis, Carlos. El 68. La tradición de la resistencia. Era, México, 2008.

Morales, Eduardo. “Políticas de empleo y contexto político: El PEM y el POJH”. Documento de Trabajo Programa Flacso-Santiago de Chile, N° 225, Nov. 1984

Moulian, Tomás y Pilar Vergara. “Estado, Ideología y Políticas Económicas en Chile. 1973-1978”. Colección de Estudios Cieplan, N° 3, Santiago, 1980.

Moulian, Tomás. “Democracia y tipos de Estado: disquisiciones en dos movimientos”. En: Vega, Juan Enrique (coordinador). Teoría y política en América Latina. CIDE, México, 1983.

Moulian, Tomás. “La Unidad Popular: fiesta, drama y derrota”. En: Moulian, T.: La forja de ilusiones. El sistema de partidos 1932-1973. Arcis-Flacso, Santiago, 1993.

Moulian, Tomás. Chile actual. Anatomía de un mito. LOM, Santiago, 1997.

Moulian, Tomás; Torres Dujisin, Isabel. “¿Continuidad o cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile?” En Varas, Augusto (compilador). El Partido Comunista en Chile. Un estudio multidisciplinario. Cesoc-Flacso, 1988.

Moyano, Cristina. El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile, 1973-1989, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2010.

Muñoz Tamayo, Víctor. ACU rescatando el asombro: historia de la Agrupación Cultural Universitaria. La Calabaza del Diablo, Santiago, 2006.

Muñoz Tamayo, Víctor. Generaciones. Juventud universitaria e izquierdas políticas en Chile y México (Universidad de Chile- UNAM 1984-2006). LOM, Santiago, 2012.

O'Donell, Guillermo. El Estado burocrático autoritario. Editorial Belgrano, Buenos Aires, 1982.

O'Donell, Guillermo. "Estado y Corporativismo". Mimeo, Instituto Di Tella, Buenos Aires 1974.

Oliver, Lucio; Eduardo Ruiz; Irene Sánchez y Raquel Sosa. "Neoliberalismo y política: la crisis mexicana". En: Estudios Latinoamericanos. Año II, N° 4, julio-diciembre 1995. FCPyS-CELA-UNAM, México.

Osorio, Jaime. "Pobreza: en la frontera entre la economía y la política". En: Solidaridad o Competencia. Revista Política y Cultura, UAM-X. N° 3, invierno 1993.

Otano, Rafael. Nueva Crónica de la Transición. LOM, Santiago, 2006.

Pavilack, Jody. Mining for the Nation: The Politics of Chile's Coal Communities from the Popular front to the Cold War, University Park, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2011.

Paz, Octavio. Las palabras y los días. Una antología introductoria. CNCA/FCE, México, 2008.

Pérez Silva, Claudio. "La Tarea Militar del Partido Comunista de Chile. ¿Continuidad o ruptura de la Política Militar del comunismo chileno?" Revista Izquierdas, N° 29, 2016, Santiago.

Pérez Silva, Claudio. La Política de Rebelión Popular de Masas y el Movimiento Democrático Popular (MDP): una mirada a la política de alianzas del Partido Comunista de Chile bajo Pinochet, 1980-1988", Pacarina del Sur [En línea], año 5, N° 17, octubre-diciembre, 2013.

Pinto, Julio (coordinador). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, LOM, 2005.

Pinto, Julio. Trabajos y rebeldía en la pampa salitrera. El ciclo del salitre y la reconfiguración de las identidades populares (1850-1900). Usach, Santiago, 1998.

Pinto, Julio. Desgarros y utopías en la pampa salitrera. LOM, Santiago, 2007.

Politzer, Patricia. La ira de Pedro y los otros. Planeta, Santiago, 1988.

Politzer, Patricia. Miedo en Chile. Cesoc-Ediciones Chile y América, Santiago, 1985.

Portales, Felipe. Chile, una democracia tutelada. Editorial Sudamericana, Santiago, 2000.

Precht, Cristian. En la huella del buen samaritano. Breve historia de la Vicaría de la Solidaridad. Tiberíades, Santiago, 1998.

Ramírez, Apolonia. Comprando juntos frente al hambre. PET, Santiago, 1986.

Razeto, Luis y otros. Las Organizaciones Económicas Populares. 1973-1990. Ediciones PET, Santiago, 1983.

Reisner, Larisa. Hamburgo en las Barricadas y otros escritos de la Alemania de Weimar, ERA, México, 1981.

Rodríguez Alfredo y Lucy Winchester. “Santiago de Chile: una ciudad fragmentada”. En línea:  
[http://www.redligare.org/IMG/pdf/santiago\\_chile\\_ciudad\\_fragmentada.pdf](http://www.redligare.org/IMG/pdf/santiago_chile_ciudad_fragmentada.pdf).

Rodríguez, Alfredo y Paula Rodríguez. “Santiago, una ciudad neoliberal”: Sur, ONG Cordillera, Red iniciativa ciudadana de La Florida. En línea:  
[http://rediniciativaciudadanalafloida.cl/wp-content/uploads/downloads/2011/07/Santiago\\_neoliberal\\_junio\\_2009\\_Fabio\\_Vel](http://rediniciativaciudadanalafloida.cl/wp-content/uploads/downloads/2011/07/Santiago_neoliberal_junio_2009_Fabio_Vel)

Rodríguez, Alfredo. “Veinte años de las poblaciones de Santiago”. (Resumen de investigación) En: Propositiones N° 14, Santiago, 1987.

Rodríguez, Jesús. Un misionero español en Chile. Tiberíades, Santiago, 2008.

Rojas, Sergio. “Políticas de erradicación y radicación de campamentos. 1982-1984. Discursos, logros y problemas”. Documento de Trabajo N° 215, Flacso.

Romero, Luis Alberto. “Los sectores populares urbanos como sujetos históricos”. En: Propositiones, N° 20. Sur Ediciones, Santiago, 1990.

Rudé, George. La multitud en la historia. Estudio de los disturbios populares en

- Francia e Inglaterra. 1730-1848. S. XXI. Buenos Aires, 1971.
- Rudé, George. Protesta popular y revolución en el siglo XVIII. Ariel, Barcelona, 1978.
- Rudé, George. Revuelta popular y conciencia de clase. Crítica, Barcelona, 1990.
- Ruiz Tagle, Jaime; Roberto Urmeneta. Los trabajadores del programa de empleo mínimo. PET-Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1984.
- Salazar, Gabriel y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile. Tomo I. Estado, legitimidad y ciudadanía. LOM, Santiago, 1999.
- Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. Historia Contemporánea de Chile. Tomo IV. Hombría y feminidad. LOM, Santiago, 2002.
- Salazar, Gabriel. La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico-popular). LOM. (2a Edición), Santiago, 2006.
- Schneider, Cathy. “La movilización de las bases. Poblaciones marginales y resistencia en Chile autoritario”. Propositiones N° 19, Santiago, 1990.
- Schneider, Cathy. Shantytown protest in Pinochet’s Chile. Temple University, Philadelphia, 1995.
- Scott, James. Los dominados y el arte de la resistencia. ERA, México, 2000.
- Serván Núñez, María José, La Municipalización educativa en Chile. 1980-1989.
- Silva, Eduardo. “La política económica del régimen chileno durante la transición: del neoliberalismo radical al neoliberalismo pragmático”. En: Paul Grake e Iván Jaksic, El difícil camino de la democracia en Chile. 1982-1990. Flacso, Santiago, 1993.
- Stillerman, Joel. “Continuidades, rupturas y coyunturas en la transformación de los obreros de Madeco S.A., 1973-2003”. En línea:  
<http://www.proyectoaraucaria.cl/documentos/2010091510464707-stillerman.pdf>.
- Thompson, E. P. Costumbres en común. Barcelona, Crítica, 1995.

Thompson, E. P. Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Crítica, 1979.

Thompson, E. P. Historia social y antropología. Instituto Mora, México 1997.

Thompson, E. P. La formación de la clase obrera en Inglaterra. Tomo 1. Editorial Crítica, Barcelona, 1989.

Thompson, E. P. Miseria de la Teoría. Editorial Crítica, Barcelona, 1981.

Tironi, Eugenio (1987). “Marginalidad, movimientos sociales y democracia”. Propositiones N° 14, Santiago, 1987.

Tironi, Eugenio. “Pobladores e integración social”. Propositiones N° 14, Santiago, 1987.

Valdivia, Verónica; Rolando Álvarez y Karen Donoso. La alcaldización de la política: Los municipios en la dictadura pinochetista, LOM, Santiago, 2012.

Valenzuela, Eduardo. La rebelión de los jóvenes (un estudio de anomia social). Ediciones SUR, Santiago, 1984.

Varios autores. Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile. Seminario CLACSO-UNU, Santiago, 1985.

Varios autores. Propositiones, N° 14, Sur ediciones, Santiago, 1987 (reimpresión, enero 1990).

Vega, Juan Enrique (coordinador). Teoría y política en América Latina.

CIDE, México, 1983.

Verdugo, Patricia. Los zarpazos del Puma. Cesoc, Santiago, 1988.

Vicaría de la Solidaridad. Historia de su trabajo social. Ediciones Paulinas, Santiago, 1991.

Vovelle, Michel. La mentalidad revolucionaria, Crítica, Barcelona, 1989.

Weinstein, José. Los jóvenes pobladores en las Protestas Nacionales (1983-1984). Una visión sociopolítica. CIDE, Santiago, 1989.



Williams, Raymond. *Marxismo y literatura*. Las Cuarenta, Buenos Aires, 2009.

Zapata, Francisco. *Clases sociales y acción obrera en Chile*. El Colegio de México, México, 1986.

Zemelman, Hugo. *La democracia latinoamericana, ¿un orden justo y libre?* *Revista Estudios Latinoamericanos*, Año II, N° 4, julio-diciembre. CELA-FCPyS, México, 1995.

Zibechi, Raúl. *Medio siglo construyendo otro mundo en La Victoria*. En línea:<http://www.memoriando.com>.